SENADO DE PUERTO RICO

DIARIO DE SESIONES

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA

CUARTA SESION ORDINARIA

AÑO 1998

VOL. XLIX **San Juan, Puerto Rico** **Jueves, 12 de noviembre de 1998** **Núm. 32**

A la una y treinta minutos de la tarde de este día, jueves, 12 de noviembre de 1998, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

ASISTENCIA

Senadores:

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez; Vicepresidente.

- - - -

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.

INVOCACION

El Padre Carlos Pérez, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con la Invocación.

PADRE PEREZ: "Tu Palabra, oh, Señor, es eterna, es estable como los cielos, es por generaciones y generación es tu fidelidad. Formaste la Tierra y perdura. Por tu ordenación aún subsisten hasta hoy, pues todas las cosas están a tu servicio." En esta Palabra de los Salmos vemos cómo la Palabra, esos valores que dignifican al hombre son eternos y cada generación tiene que custodiarlos con fidelidad y transmitirlos a las generaciones futuras para que se construya una sociedad digna del hombre. Sin duda, este Senado, que tiene conciencia histórica de ser custodio de los valores que dignifican al hombre en cada ley, en cada trabajo, en cada lucha, son aquéllos que conservan y transmiten con fidelidad esa Palabra, esos valores del Evangelio donde el hombre es custodiado.

Oremos. Señor, bendice a tus hijos e hijas del Senado, que con fidelidad quieren ser custodios de tu Palabra, quieren plasmarlo en leyes, en actitudes y en servicio. Bendice a sus familias, bendice a nuestro pueblo, bendice a Puerto Rico. Todo esto te lo pedimos en el Nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes:

De la Comisión de Educación y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1796, sin enmiendas.

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de lo Jurídico; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1236, con enmiendas.

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Agricultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1125, con enmiendas.

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Juventud Recreación y Deportes; y de lo Jurídico, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 570, con enmiendas.

De la Comisión e Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 866 y de la R. C. de la C. 1544, sin enmiendas.

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe, en torno a la R. del S. 1427.

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 1252 y 1823.

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1808 y 1869, con enmiendas.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas, de la lectura se prescinde, según enmendada, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 1190
Por el señor Granados Navedos:

"Para enmendar la Regla 6.2 y el tercer párrafo de la Regla 30.1 de las de Procedimiento Civil de 1979, con el propósito de que al contestar una demanda o interrogatorio se deberá incluir en subrayado la contención original de la demanda."
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO DE 1930)

P. de la C. 1414
Por los señores Jiménez Cruz, Bulerín Ramos, López Malavé, García San Inocencio y la señora Juarbe Beníquez:

"Para enmendar el apartado Primero del inciso E del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño", a los fines de concederle a los veteranos de sesenta años o más un aumento a mil (1,000) dólares en la deducción sobre el pago de contribuciones sobre ingresos a partir del año contributivo correspondiente a 1999."
(HACIENDA; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS)

P. de la C. 1858
Por la señora Rivera Ramírez:

"Para crear la "Ley para Garantizar un Cuidado Adecuado para las Madres y sus Recién Nacidos Durante el Período Post-Parto", a los fines de garantizar los derechos de las madres aseguradas con planes médicos y los de sus hijos; imponer obligaciones legales a las compañías aseguradoras y establecer penalidades."
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y ASUNTOS DE LA MUJER)

P. de la C. 2059
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 165-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual."
(JURIDICO)

P. de la C. 2060
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 165-B de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alteración de datos que identifican las obras artísticas, científicas o literarias."
(JURIDICO)

P. de la C. 2061
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 168 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de recibo y transportación de bienes apropiados ilegalmente."
(JURIDICO)

P. de la C. 2063
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 172 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de posesión de herramientas para escalar."
(JURIDICO)

P. de la C. 2064
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de usurpación."
(JURIDICO)

P. de la C. 2101
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para enmendar los incisos (b) y (e) del Artículo 4 de la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Personal para la Rama Judicial", a los fines de atemperar los mismos al estado de derecho vigente."
(JURIDICO)

P. de la C. 2107
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 220 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito incumplimiento en cuanto a dar recibo."
(JURIDICO)

P. de la C. 2133
Por el señor Marrero Hueca, Angel:

"Para adicionar un nuevo Artículo 12.020 y renumerar los actuales Artículos 12.020 al 12.028 como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en el municipio por un período considerable."
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. de la C. 2168
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Huecas, Angel; Marrero Hueca, Manuel: señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges:

"Para eximir del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los constructores y a los proyectos de viviendas desarrollados a través del Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35."
(HACIENDA, Y ASUNTOS MUNICIPALES)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R.C. de la C. 1888
Por el señor Quiles Rodríguez:

"Para enmendar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el Barrio Buenos Aires del municipio de Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella."
(EDUCACION Y CULTURA)

R.C. de la C. 2045
Por la señora Martínez Irizarry:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos para gastos médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social; deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2048
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (46,440) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2055
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2056
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares de lo fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 2084
Por el señor Nieves Román:

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2085
Por el señor Marrero Hueca, Angel:

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur en distancia de veintiocho punto setecientos

(28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós (68.922) metros, con carretera Municipal, bajo los términos y condiciones que se especifica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a los dispuesto en su Ley Orgánica."
(JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES)

R. C. de la C. 2091
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de novecientos treinta y ocho mi (938,000) dólares de los fondos consignados en el inciso B de la Sección 1 de la Resolución conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, a los fines de ser utilizados para construcción, reconstrucción y desarrollo de obra pública, para aportaciones económicas, compra de materiales de construcción y de reconstrucción, adquisición de equipo, enseres y mobiliario básico, o para ser transferidos a iguales fines a instituciones de bienestar social y/o personas que cumplan los criterios de necesidad económica meritoria de las agencias o instrumentalidades, especialmente a los damnificados por el huracán Georges; autorizar la aceptación de donaciones, la subcontratación de las obras o servicios y el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2112
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de los fondos consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, para compra de terrenos, edificio y facilidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) Susana Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2113
Por el señor Báez González:

"Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2114
Por el señor Valero Ortiz:

"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000)dólares originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado Vázquez mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señor Juan Rodríguez González número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC01 Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa municipalidad." (HACIENDA)

R. C. de la C. 2115
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de doce mil (12,000) dólares asignados al Departamento de Transpotación y Obras Públicas mediante la Resolución Conjunta Núm. 327 de 24 de julio de 1998 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)." (HACIENDA)

R. C. de la C. 2116
Por la señora Romero Donnelly:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2117
Por el señor Vega Borges:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para mejorar a la Escuela Ernestina Bracero Pérez de Candelaria, a la Biblioteca de la Escuela de la Comunidad María Libertad Gómez de Levittown y al Centro de Reuniones de la American Association of Retired Persons de Levittown en Toa Baja."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2118
Por el señor Vega Borges:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cinco mil dólares (5,000) provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del Barrio Ingenio de Toa Baja."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2119
Por el señor Vega Borges:

"Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; y para compra de materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2120
Por el señor Vega Borges:

"Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente consignados a la Compañía de Fomento Recreativo; y para ser utilizados para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación."
(HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la Primera Relación de Proyectos radicados en Secretaría. Tenemos una observación, en la página 6, Resolución Conjunta de la Cámara 2056, no aparece referida a ninguna Comisión. Solicitamos que se refiera a la Comisión de Hacienda, exclusivamente.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, haciendo esta aclaración, solicitamos que esta primera Relación de Medidas radicadas en Secretaría se dé por leída y aprobada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1125, Proyecto del Senado 570, Proyecto de la Cámara 866, Proyecto del Senado 1172, Proyecto del Senado 1236, Resolución Conjunta de la Cámara 2092, Proyecto de la Cámara 2142.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1125, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Agricultura , con enmiendas.

"LEY

Para enmendar la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera", para disponer que puede establecerse quórum con por lo menos tres (3) funcionarios públicos o sus representantes autorizados en el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura, eliminar la entidad TROPICO de dicho Consejo, adscribir el Programa Pesquero a la Secretaría de la Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, enmendar el artículo 10 para variar la composición del Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 23 de agosto de 1990 se aprobó la Ley 61 en la cual se crea el Consejo de la Industria Pesquera y Acuicultura que en virtud del artículo 4 de se compone de diez (10) miembros, seis (6) de los cuales son funcionarios públicos, a saber: el Secretario de Agricultura, el Secretario de Recursos Naturales, el Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, el Subadministrador de Fomento Económico a cargo de Industrias Puertorriqueñas y el Director Ejecutivo de TROPICO. En dicho artículo se dispone que el quórum del Consejo es de seis (6) miembros, de los cuales tres (3) deben ser funcionarios públicos.

El artículo 5 de dicha Ley facultó al Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura a "evaluar y elaborar un plan de desarrollo y financiamiento, un rediseño administrativo y programático con el propósito de que Puerto Rico desarrolle una industria de captura pesquera y de acuicultura moderna y de importancia." Dicho plan, según este artículo debió completarse en el término de un año a partir de la aprobación de la referida Ley 61.

La Comisión de Desarrollo de la Capital del Senado de Puerto Rico llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de los pescadores de San Juan, en virtud de la Resolución del Senado 591, aprobada el 25 de agosto de 1997. De la investigación surgió que el referido plan no se ha completado por la dificultad de

reunir a los funcionarios públicos que son miembros del consejo y que la Ley 61 no autoriza la delegación de esa función.

De la misma investigación surgió que la entidad TROPICO ha desaparecido hace aproximadamente un año, por lo que su inclusión en el Consejo es innecesaria. Se recomendó adscribir el Programa Pesquero a la Secretaría para el Desarrollo de la Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, toda vez que ésta tiene entre sus responsabilidades el ordenamiento de las empresas agrícolas y fomentar el desarrollo de nuevas empresas agrícolas. También se recomendó incluir en el Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, creado en virtud del artículo10 de la referida Ley, al Secretario Auxiliar de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, el Director del negociado de Caza, Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, dos pescadores comerciales, un acuicultor de agua dulce y otro de maricultura, y un representante del Departamento de Ciencias marinas del Colegio de Mayagüez, con especialidad en acuicultura.

Esta Asamblea Legislativa, tiene interés en que se desarrolle la industria pesquera para beneficio de los pescadores, los consumidores y la economía puertorriqueña, por lo cual aprueba esta Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el primer y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura", para que se lea de la siguiente forma:

"Artículo 4.- Creación del Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura

Se crea el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura que estará compuesto por diez (10) miembros, seis (6) de los cuales serán funcionarios públicos: el Secretario de Agricultura, el Secretario de Recursos Naturales *y Ambientales,* el Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, el Subadministrador de Fomento Económico a cargo de Industrias Puertorriqueñas **[y el Director Ejecutivo de TROPICO]**.

El Gobernador de Puerto Rico designará al Presidente del Consejo, o ...

El Consejo adoptará las reglas y reglamentos que sean necesarios para su funcionamiento interno, así como para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Las decisiones del Consejo se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes habiendo el quórum requerido de seis (6). Para dicho quórum deberán estar presentes tres (3) de los miembros que son funcionarios públicos **[.]** *o sus representantes autorizados.*"

Sección 2.- Se enmienda el artículo 6 de la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura", para que se lea como sigue:

"Artículo 6.- Creación del Programa

Se crea el Programa de Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera *de la Secretaría Auxiliar de Agricultura Comercial* del Departamento de Agricultura."

Sección 3.- Se enmienda el artículo 10 de la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura", para que se lea de la siguiente forma:

"Artículo 10.- Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras

Se crea el Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras. El Consejo estará compuesto por el Departamento de Recursos Naturales *y Ambientales*, el Secretario del Departamento de Agricultura, el Director del Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera, el Director del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras y **[un representante de los pescadores]** *dos pescadores comerciales, un*

acuicultor de agua dulce y otro de maricultura, un representante del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez con especialidad en acuicultura, el Secretario Auxiliar de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura y el Director del Negociado de Caza, Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales."

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Agricultura, luego del estudio y análisis, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 1125, con las siguientes enmiendas:

En El Título:

Página 1, línea 1,	después de "1990," insertar "según enmendada,"
Página 1, línea 3,	tachar "en" y sustituir por "por"
Página 1, línea 4,	después de "Acuicultura" tachar "," y sustituir por ";"
Página 1, línea 4,	después de "Consejo" tachar "," y sustituir por ";"
Página 1, línea 5,	tachar "a la Secretaría de la Agricultura Comercial" y sustituir por "al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración de la Industria Pesquera y Acuacultura"
Página 1, línea 6,	después de "Agricultura" tachar "," y sustituir por "; y"
Página 1, línea 6,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"

En La Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 1,	después de "Ley" insertar "Núm."
Página 1, párrafo 1, línea 2,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", después de "4" tachar "de"
Página 1, párrafo 1, línea 5,	tachar "Subadministrador" y sustituir por "Administrador"
Página 1, párrafo 1, línea 6,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"
Página 2, párrafo 1, línea 1,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"
Página 2, párrafo 1, línea 4,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"
Página 2, párrafo 1, línea 5,	después de "Ley" insertar "Núm."
Página 2, párrafo 2, línea 5,	después de "Ley" insertar "Núm."
Página 2, párrafo 3, línea 3,	después de "Pesquero" tachar el resto de la línea y sustituir por "al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración de la Industria Pesquera y Acuacultura"
Página 2, párrafo 3, línea 7,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"
Página 2, párrafo 3, línea 8,	tachar "negociado" y sustituir por "Negociado"
Página 2, párrafo 3, línea 9,	después de "comerciales, " insertar "un pescador deportivo o recreativo,"

Página 2, párrafo 3, línea 11,	tachar "marinas" y sustituir por "Marinas"
Página 2, párrafo 3, línea 11,	tachar "acuicultura" y sustituir por "pesquerías"

En El Texto:

Página 2, línea 1,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo"
Página 2, línea 2,	después de "1990," insertar "según enmendada,"
Página 3, línea 3,	tachar "seis (6)" y sustituir por "cinco (5)"
Página 3, línea 4,	después de ambos "Secretario" insertar "del Departamento"
Página 3, línea 6,	tachar "el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos," y sustituir por "el Director del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez y"
Página 3, línea 6,	tachar "Subadministrador" y sustituir por "Administrador"
Página 3, línea 16,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", después de "1990," insertar "según enmendada,"
Página 3, línea 20,	después de "Programa" tachar "de" y sustituir por "para el", tachar "Pesquera"
Página 3, línea 21,	tachar "Secretaría Auxiliar de Agricultura Comercial" y sustituir por "Industria Pesquera y Acuacultura"
Página 4, línea 1,	tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", después de "1990," insertar "según enmendada,"
Página 4, línea 6,	antes de "Departamento" insertar "Secretario del", después de "Ambientales" insertar "o su representante"
Página 4, línea 7,	después de "Agricultura" insertar "o su representante"
Página 4, línea 10,	después de "comerciales," insertar "un pescador deportivo o recreativo,"
Página 4, línea 11,	después de "Mayagüez" tachar "con" y sustituir por "que sea especialista en pesquerías"
Página 4, línea 12,	tachar "especialidad en acuicultura"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1125 tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera", para disponer que puede establecerse quórum con por lo menos tres (3) funcionarios públicos o sus representantes autorizados por el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura; eliminar la entidad TROPICO de dicho Consejo; adscribir el Programa Pesquero a la Secretaria de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura; y enmendar el Artículo 10 para variar la composición del Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, en 1990 se aprobó la Ley Núm.61 para crear el Consejo de la Industria Pesquera y Acuicultura. La misma se compone de diez (10) miembros de los cuales seis (6) son funcionarios públicos.

La referida Ley facultó al Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura a evaluar y elaborar un plan de desarrollo y funcionamiento, un rediseño administrativo y programático con el propósito de que Puerto Rico desarrolle una industria de captura pesquera y de acuicultures moderna y de importancia. Sin embargo, como resultado de una investigación senatorial, se concluyó que el referido plan no se ha completado por la dificultad que conlleva reunir a los funcionarios públicos que son miembros del consejo.

De la misma investigación surge que uno de sus miembros, la entidad TROPICO, ha desaparecido, por lo que es necesaria su exclusión. También aprovechamos para adscribir el Programa Pesquero al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración de la Industria Pesquera y Acuacultura toda vez que ésta tiene

entre sus resposabilidades el ordenamiento de las empresas agrícolas y fomentar el desarrollo de nuevas empresas agrícolas.

Por último, también se recomendó incluir en el Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras al Secretario Auxiliar de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, el Director del Negociado de Caza, Pesca y Vida Sivestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, dos pescadores comerciales, un pescador deportivo o recreativo, un acuicultor de agua dulce y otro de maricultura y un representante del Departamento de Ciencias Marinas del Colegio de Mayagüez, con especialidad en pesquerías.

Para el análisis de la presente medida recibimos varios señalamientos por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los mismos fueron estudiados y acogidos por esta Comisión.

En relación al P. del S. 1125, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales señaló "aplaudir la inciativa del Senador, Honorable Junior González Rodríguez". Según su ponencia, el Consejo de la Industria Pesquera y la Agricultura como está constituido no es funcional.

Entre las sugerencias ofrecidas por dicho Departamento podemos señalar las siguientes:

(1) Que el Consejo esté compuesto por cinco (5) miembros.

(2) Enmendar el Artículo 10 para incluir en el Consejo un representante de los pescadores deportivos o recreativos y un biólogo especialista en pesquerías del Recinto de Mayagüez.

Las mismas fueron evaluadas e incorporadas como enmiendas a la medida por parte de nuestras Comisiones.

También contamos con el análisis del Departamento de Agricultura quienes señalan lo siguiente:

"En este proyecto de Ley se pretende enmendar el Artículo 4 - **Creación del Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura** y atemperarlo con la realidad actual de participación de representantes del sector gubernamental y privado. Este comité tendrá la responsabilidad de evaluar y elaborar un plan de desarrollo y financiamiento y recomendar un rediseño administrativo y programático con el propósito de que Puerto Rico desarrolle una industria de captura pesquera y de acuicultura moderna de importancia. Después de haber hecho un análisis de la mencionada enmienda, coincidimos en el espíritu de la medida y recomendamos la creación de un comité donde estén representados los sectores de pesca comercial y de acuicultura.

El Artículo 6 de la Ley 61, crea el Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del Departamento de Agricultura. Recomendamos que se enmiende el nombre del programa por Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración de la Industria Pesquera y Acuacultura. De esta manera queda claro y establecido sin lugar a dudas que la acuicultura es parte del programa del Departamento de Agricultura."

El Departamento de Agricultura señaló coincide con el propósito de la medida y sobre sus señalamientos, esta Comisión; luego de una extensa evaluación, acogió los que a su entender beneficiarían aún más la medida.

El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos también señalaron su apoyo.

Por los fundamentos antes expuestos, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Agricultura, luego del estudio y análisis, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 1125, con las presentes enmiendas

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos Pagán González
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía

(Fdo.)
Víctor Marrero Padilla
Presidente
Comisión de Agricultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 570, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Juventud, Recreación y Deportes; y De lo Jurídico, con enmiendas.

"**LEY**

Para establecer la política pública que regirá los Festivales Playeros y actividades sociales análogas en Puerto Rico; facultar al Departamento de Recursos Naturales para que adopte los reglamentos, requisitos y mecanismos procesales para su celebración; asignar responsabilidades e imponer penalidades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestras áreas costeras, poseen una gran abundancia y variedad de panoramas escénicas y recursos naturales de gran belleza. Por tal razón es uno de los lugares que más frecuentamos los puertorriqueños así como aquellos que nos visitan de otras partes del mundo.

Las playas son un recurso natural muy valioso y de gran importancia. Sirven para el desarrollo de un gran número de actividades recreativas. Entre las cuales podemos señalar la celebración de los festivales playeros donde se presentan actividades artístico-musicales desarrollado por un promotor o entidad organizativa.

En los últimos años, como medio de diversión y distracción de nuestro pueblo, ha'proliferado en nuestra Isla la celebración de este tipo de festival. Los mismos se celebran al aire libre en nuestras costas o balnearios públicos. Lamentablemente en ocasiones, las personas que acuden a estas actividades están siendo afectadas por una serie de problemas los cuales representan una seria amenaza a la seguridad de éstos como al disfrute, integridad y belleza de nuestras playas.

Estas actividades por carecer de unos requisitos mínimos de funcionamiento y seguridad han desembocado en situaciones accidentales y otras delictivas que han afectado el propósito principal de estos eventos, como el área en la cual se celebran.

En los últimos años durante la celebración de estos festivales playeros hemos visto como personas particulares, así como oficiales del orden público han estado involucrados en situaciones donde, inclusive, les ha costado la vida.

Por otro lado, a pesar de que en la actualidad existe la Ley Núm. 182 de 3 de septiembre de 1996, que crea el registro de promotores de espectáculos públicos y que tiene como función principal velar y proteger los interese y derechos de los asistentes a ciertos espectáculos públicos, entendemos que es necesario que los estatutos vigentes se amplíen para que cubran adecuadamente la celebración de los festivales playeros. Esto ante los problemas de seguridad que se han suscitado recientemente en este tipo de actividad en las playas de nuestra Isla.

A tenor con lo antes expuesto se hace necesario la adopción de reglas más rigurosas que garanticen la seguridad y disfrute de eventos de esta naturaleza. Esto ante la falta de legislación y control efectivo en la organización y administración de estos eventos.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su rol protector de la ciudadanía en nuestro país entiende pertinente crear unos mecanismos que minimicen las posibilidades de sufrir situaciones lamentables en detrimento de nuestra calidad de vida. Al establecer estos procedimientos se ofrece mayor seguridad en un ambiente de sano esparcimiento para beneficio y el disfrute de todos. Asimismo brindamos mayor protección a nuestros recursos naturales.

El Departamento de Recursos Naturales es la agencia que tiene la custodia y administración de la mayor parte de las áreas públicas costaneras de Puerto Rico. La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, o ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales, le impone la responsabilidad de proteger y conservar los recursos naturales de Puerto Rico, además le confiere la facultad de promulgar los reglamentos necesarios para llevar a cabo las funciones impuestas por ley. El reglamento de Recursos Naturales "Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítima Terrestre" en su Artículo 9 señala que es el departamento quien tiene el poder para otorgar los permisos y endosos para el uso de los balnearios y playas públicas de Puerto Rico para realizar festivales playeros. Además la Ley Núm. 23 supra, le confiere la jurisdicción primaria al departamento para velar nuestros recursos marítimo terrestres por lo que entendemos que es este departamento quien debe tener la responsabilidad de la implantación de esta Ley.

Las playas de Puerto Rico presentan un extraordinario escenario para la recreación y el esparcimiento de toda nuestra ciudadanía. La conservación, mantenimiento y protección de nuestras playas, así como la seguridad de los que a ellas acudimos, depende de todos nosotros. Hay que cuidar y proteger este recurso como a los que de el disfrutamos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como "Ley para Reglamentar los Festivales Playeros y Actividades Sociales Análogas a Realizarse en las Playas o Zonas Marítimo - Terrestres de Puerto Rico".

Artículo 2.- Es política pública del Gobierno de Puerto Rico velar por que todas las actividades sociales que se realicen en las playas o zonas marítimo- terrestre de Puerto Rico, sean organizadas y ejecutadas con el máximo de orden, seguridad y dentro de un estricto marco de legalidad, a fin de preservar la paz y tranquilidad de la ciudadanía, proteger los bienes patrimoniales de uso público y garantizar a la juventud y a nuestra población en general el sano disfrute de la belleza de nuestro preciados recursos naturales.

Artículo 3.- Las siguientes frases y términos tendrán el significado que se indica a continuación, excepto cuando de su contexto claramente se desprenda que tienen otro significado:

A. Departamento: Departamento de Recursos Naturales.
B. Festival playero o actividades análogas: toda actividad al aire libre en áreas de playa o zona marítimo-terrestre donde se presentan actividades artístico-musicales desarrollado por un promotor, organizador o entidad autorizada a celebrar el mismo y que produzca o derive beneficio económico, promocional o publicitario o de cualquier otra índole a éstos.
C. Playa: ribera del Mar o del océano formada de arena no consolidada, ocasionalmente grava o pedregales, en superficies casi planas, con pendiente suave, con o sin vegetación característica.
D. Promotor: persona natural o jurídica, doméstica o extranjera, que promueva u organice la celebración de un espectáculo público que conlleva la búsqueda del lugar de celebración, los contratos y se encarga de su fase administrativa y publicitaria.

E. zona marítimo-terrestre: costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles, en incluye los terrenos ganados por el mar, las accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y los márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas. El termino sin condicionar, significa la zona marítimo-terrestre de Puerto Rico.

Artículo 4.- Procedimiento para la solicitud y realización de un festival playero:

A. La solicitud se hará utilizando los formularios que para esos propósitos provea el Departamento e incluirá, como mínimo, la siguiente información:

1. Nombre y dirección residencial y postal del solicitante.
2. . Playa o zona marítimo-terrestre seleccionada para celebrar el festival con un croquis del área a utilizarse, ilustrando la ubicación de equipo e instalación o construcciones removibles.
3. Fecha de celebración y duración del festival con un itinerario de las actividades y un estimado de la cantidad de participantes o asistentes a la misma.
4. Plan de mantenimiento, seguridad y emergencia, antes, durante y después de la celebración del festival. Estos planes deben garantizar entre otro lo siguiente:

a. mantenimiento - deberá evidenciar coordinación de los servicios de disposición de desperdicios tanto sólidos como sanitarios.

b. seguridad - deberá garantizar el apoyo por lo menos de un guardia privado por cada doscientos cincuenta (250) participantes en el festival.

c. emergencias médicas - proveerá un área de servicios de emergencia en por lo menos cada dos (2) cuerdas de terreno.

B. Esta solicitud deberá ser sometida sesenta (60) días antes de la celebración del evento.

C. El Departamento evaluará la solicitud y podrá requerir al promotor o solicitante toda aquella información necesaria adicional para la autorización del evento.

D. El Departamento podrá requerir la participación y aprobación de otras agencias gubernamentales y entidades municipales que pudieran verse involucradas en el desarrollo de la actividad.

Artículo 5.- Se Faculta al Departamento a implantar las reglas y reglamentos necesarios para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, dirigidos a proteger la salud, seguridad y propiedad de los asistentes y a preservar las playas y ambiente en general de dicho lugar.

Artículo 6.- Para la realización de cualquier festival playero o evento análogo, el promotor deberá cumplir con los requisitos aplicables establecidos en la Ley Núm. 182 del 3 de septiembre de 1996, conocida como "Ley del Promotor de Espectáculos Públicos".

Artículo 7.- El incumplimiento de estas disposiciones acareará una multa de diez mil (10,000) dólares. De incurrir en una segunda violación se le impondrá una multa de veinte mil (20,000) dólares y la cancelación inmediata del evento.

El dinero recaudado por concepto de multas será transferido al Departamento para la vigilancia y mantenimiento de nuestras playas y zonas marítimo-terrestres.

Artículo 8.- Esta Ley no será aplicable a agrupaciones o asociaciones cívicas sin fines de lucro, a las instituciones religiosas, partidos políticos u organizaciones escolares.

Artículo 9.- Si cualquier claúsula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a la claúsula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional.

Artículo 10.- Esta Ley comenzará a regir a los treinta (30) días después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, de Juventud Recreación y Deportes y de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 570 tienen a bien recomendar la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

En El Texto:

Página 3, líneas 14;	Sustituir la palabra "desarrollado" por "y deportivas desarrolladas".
Página 4, línea 9;	Eliminar "zona" y sustituir por "Zona".
Página 5, línea 4;	Eliminar el punto luego de "desperdicios sólidos como sanitarios" y añadir ", así como medidas para promover el reciclaje de aluminio, plásticos y vidrios durante la actividad."
Página 5, líneas 5 y 6;	Eliminar "deberá garantizar el apoyo por lo menos de un guardia privado por cada doscientos cincuenta (250) participantes en el festival" y sustituir por "se deberán de contratar los servicios de por lo menos diez guardias privados por cada cuatro mil (4,000) metros cuadrados del área en donde se llevará a cabo la actividad y de dos guardias por cada mil (1,000) metros cuadrados adicionales de área a utilizarse."
Página 5, línea 8;	Añadir luego del final de la oración "En adición deberá de proveer los servicios de por lo menos un (1) salvavidas por cada cuatrocientos (400) metros lineales de la zona marítimo terrestre en donde se lleve a cabo la actividad."
Página 6, líneas 4 y 5;	Eliminar todo el contenido del articulado.
Página 6, línea 6;	Eliminar "9" y sustituir por "8".
Página 6, línea 10;	Eliminar "10" y sustituir por "9".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 570 persigue establecer la política pública referente a la reglamentación en la otorgación de permisos para festivales playeros y actividades análogas a celebrarse en las zonas marítimo terrestres, crear los mecanismos procesales para su celebración y asignar responsabilidades e imponer penalidades.

Según la Exposición de Motivos las playas son un recurso natural muy valioso y de gran importancia las cuales sirven para la celebración de un sinnúmero de actividades públicas, culturales y recreativas.

De dicho documento se establece que en los últimos años han proliferado la celebración de festivales playeros y que desgraciadamente en ocasiones, las personas que acuden a estas actividades están siendo afectadas por una serie de problemas los cuales representan una seria amenaza a la seguridad de los ciudadanos y a la integridad de nuestra zona marítimo terrestre. El problema estriba en que no se han establecido unos criterios o estándares mínimos de funcionamiento y seguridad a seguir en la otorgación de los permisos.

Otro punto que señala es que aunque en la actualidad la Ley Núm. 182 del 3 de septiembre de 1996, que crea el Registro de Promotores de Espectáculos Públicos, regula efectivamente las distintas actividades de estos promotores resulta necesario que se especifique con mayor certeza y especifidad la celebración de los festivales playeros.

La medida pretende que se establezca una ley para que el Departamento de Recursos Naturales, agencia a la cual recae la facultad de supervisar nuestro patrimonio costero, regule de manera efectiva la otorgación de los permisos concernientes para dichas actividades.

POSICIONES DE LAS AGENCIAS Y/O ENTIDADES CONCERNIDAS EN EL TEMA

Las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Juventud, Recreación y Deportes y de lo Jurídico solicitaron las ponencias del Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

En la ponencia del Departamento de Recreación y Deportes esta agencia expresó su endoso a la medida aunque ellos no tienen ingerencia directa en el área de las playas. Su posición esta basada en el amplio potencial recreativo y deportivo de las playas y que este debe de ser protegido para preservar su integridad.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales expresan que reconocen la importancia de la protección de nuestros recursos costeros. Sin embargo ambas agencias traen a colación que por fíat administrativo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha establecido reglamentación al respecto. El Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre" establece el procedimiento para la expedición de los permisos para la celebración de festivales playeros y otras actividades análogas.

Aunque ciertamente reconocemos que la agencia concernida esta facultada en virtud de la Ley Orgánica que la crea y de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 del 12 de Agosto de 1988) a establecer un reglamento e imponer penas al respecto tenemos que recordar que dicha facultad emana de la potestad de la Asamblea Legislativa la cual le delega a las agencias ciertas encomiendas específicas basados en criterios de especialidad y capacidad de las agencias para lidiar con problemáticas particulares.

Dicha delegación de poderes no es absoluta y la Asamblea Legislativa, cuando se encuentre frente a una situación por la cual entienda que resulta necesario legislar para regular o afrontar dicho problema puede establecer dicho estatuto, estableciendo si así lo desea, unos parámetros a seguir por las agencias administrativas concernientes.

La situación con los festivales playeros y otras actividades análogas son una de las que conlleva que la Asamblea Legislativa ejecute sus facultades constitucionales en pos de proteger la seguridad de los participantes así como la de nuestra madre naturaleza. En estas actividades debido a la falta de unas medidas adecuadas, muchas personas han resultado lesionadas y hasta muertas en agrios incidentes allí suscitados. Este no es el único problema relacionado con la celebración de dichas actividades. La política pública de esta Administración de Gobierno es proteger y velar por la protección y conservación de nuestros recursos naturales y ambientales, para así garantizar una mejor calidad de vida para nuestras futuras generaciones. Para esto debemos crear un balance racional entre la necesidad de esparcimiento de los seres humanos y la protección de nuestros distintos ecosistemas. En estas actividades se genera una gran cantidad de desperdicios sólidos los cuales si no son dispuestos de la manera adecuada son una seria amenaza a la vida marina y terrestre de nuestra flora y fauna.

Por todo lo anteriormente expuesto vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Juventud, Recreación y Deportes y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del P. del S. 570 con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos Pagán
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía

(Fdo.)
Ramón Luis Rivera Hijo
Presidente
Comisión de Juventud, Recreación
y Deportes

(Fdo.)
Jorge Santini
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 866, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", a los fines de aclarar el concepto de pequeño comerciante detallista cubierto por la excepción de dicho artículo aumentando a tres los negocios que un miembro puede poseer siempre que cada negocio tenga un volumen de ventas de un millón de dólares ($1,000,000) y no mas de siete (7) empleados, para formar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al Administrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones anuales en reconocimiento del status de estos grupos y cobrar por las mismas y; para que el dinero cobrado sea depositado en un fondo especial a ser utilizado por el Administrador para que pueda cumplir con sus responsabilidades de ley; y facultarlo para promulgar los reglamentos que fueren necesarios para poner en efecto las disposiciones de esta Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", en su Exposición de Motivos expresa lo siguiente, "Esta Ley se aprueba, pues para proteger al pueblo, asegurando a éste en general y a los pequeños comerciantes en particular, los beneficios de la libre competencia." Cónsono con este propósito en su Artículo 18, se exceptuán de las disposiciones de la ley a los pequeños comerciantes dedicados al comercio al detal y que posean cada uno un solo establecimiento comercial cuando sean parte de programas comunes y así unidos se enfrenten de buena fe a la competencia de establecimientos con volumenes de ventas sustancialmente mayores.

Este artículo respondía en aquel momento al programa de organización de cadenas voluntarias creado y auspiciado por el Departamento de Comercio, ahora Administración de Fomento Comercial, para ayudar al pequeño comerciante a enfrentarse a la competencia de los grandes negocios.

Hoy, más que nunca, se hace necesario fortalecer la posición del pequeño comerciante detallista en su competencia con las mega tiendas.

Como una de las técnicas de mercadeo para enfrentarse a la competencia, grupos de comerciantes están utilizando anuncios de especiales en conjunto confiando estar cubiertos por referido artículo, considerándose a sí mismos pequeños comerciantes detallistas y sin darse cuenta de la limitación que allí se hace de poseer un solo establecimiento.

Por otro lado, la Ley no define lo que es un pequeño comerciante fuera de lo antes señalado, que pudo haberlos identificado adecuadamente para el año 1964 cuando se aprobó la Ley, pero no es la realidad actual. Tampoco se dispone la forma de identificar un programa común o una cadena voluntaria bona fide a los fines de poderle aplicar la excepción del Artículo 18.

Por todo lo expuesto, se hace necesario actualizar lo que se considerará un pequeño comerciante elegible para formar parte de una cadena voluntaria o un programa común y así aplicarle el Artículo 18 de la Ley Núm. 77, supra. Su cualificación no puede ser únicamente a base del número de establecimientos que posea, sino, también de su volumen de ventas, y el número de empleados de forma que se cubra a los pequeños y no sea utilizada por medianos y grandes comerciantes que tienen otros recursos disponibles para competir entre sí.

El Departamento de Comercio, ahora Administración de Fomento Comercial, tiene en su ley orgánica un mandato a favor de los pequeños comerciantes ó negocios para la organización de programas que los ayuden. Así, se originó dentro de esa agencia el desarrollo de su programa de promoción y organización de cadenas voluntarias y grupos de compras. Su experiencia en este campo y la existencia de este programa en la agencia la cualifican para que su administrador pueda identificar, reconocer y certificar los grupos auténticos que pueden acogerse a esta excepción.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 18.-Cadenas Voluntarias de Detallistas

No se considerará como violación a esta Ley el establecimiento de cadenas voluntarias o programas comunes incluyendo anuncios sobre precios, compuestos por pequeños comerciantes dedicados al comercio al detal con un volumen de ventas total anual cada uno no mayor de un millón de dólares, y empleen no mas de siete empleados, por cada negocio para unidos enfrentarse de buena fe a la competencia de establecimientos con volumenes de ventas mayores y cuya cadena voluntaria o programa común sea reconocido y certificado por la Administración de Fomento Comercial para los efectos de este artículo.

Sección 2.-Se faculta al Administrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones anuales en reconocimiento de su status como cadena voluntaria o programa común de comerciantes detallistas que cualifiquen a los fines del artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada. El Administrador de Fomento Comercial podrá cobrar por dichas certificaciones y la cantidad de dinero recaudada por dicho concepto será destinada para el fortalecimiento de su programa dirigido a la organización de estos grupos y la expedición de las certificaciones correspondiente.

Sección 3.-Se crea en los libros del Departamento de Hacienda un fondo especial al cual ingresará la totalidad del importe recaudado por concepto de la expedición de certificaciones. El Administrador de Fomento Comercial utilizará dichos fondos para la implantación y cumplimiento de esta Ley.

Sección 4.-El Administrador de Fomento Comercial promulgará los reglamentos que sean necesarios para la implantación de las disposiciones que le son aplicables de esta Ley. Dicho reglamento o reglamentos para regir el proceso de expedir las certificaciones, los derechos a cobrar y su cobro, deberán ser promulgadas en o antes de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley.

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 866 tiene el honor de rendir su informe recomendando la aprobación de la medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, "Para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", a los fines de aclarar el concepto de pequeño comerciante detallista cubierto por dicho artículo aumentando a tres los negocios que un miembro puede poseer siempre que tenga cada negocio un volumen de ventas no mayor de un millón de dólares ($1,000,000.00) y no más de siete (7) empleados por negocio para formar parte de una cadena voluntaria o programa común; para facultar al Adminstrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones anuales en reconocimiento del status de estos grupos y cobrar por la mismas y; para que el dinero cobrado sea depositado en un fondo especial a ser utilizado por el Administrador para que pueda cumplir con sus responsabilidades de ley; y para facultarlo para promulgar los reglamentos que fueren necesarios para poner en efecto las disposiciones de esta ley.

Se celebraron siete Audiencias Públicas en la Cámara de Representantes a las que asistieron la Administración de Fomento Comercial, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, la Asociación de Dueños de Farmacia de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Cámara de Comerciantes Mayoristas de Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas. En estas Audiencias se hicieron unas recomendaciones que en su mayoría fueron recogidas por las Comisiones de la Cámara.

Esta medida propone una enmienda a la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida comúnmente como "Ley de Monopolios de Puerto Rico", en particular a las disposiciones contenidas en su Artículo 18 donde se concede una exención a las cadenas voluntarias de detallistas, actualmente cualificadas como compuestas por pequeños comerciantes dedicados al comercio al detal que posean cada uno un sólo establecimiento.

Como una de las técnicas de mercadeo para enfrentarse a la competencia, grupos de comerciantes están utilizando anuncios de especiales en conjunto, confiando estar cubiertos por dicho Artículo al considerarse así mismo pequeños comerciantes detallistas y sin darse cuenta de la limitación que la ley impone de poseer un sólo establecimiento.

Por otro lado, la Ley no define lo que es un pequeño comerciante fuera de lo antes señalado. Esto pudo haberlos identificado adecuadamente para el año 1964, cuando originalmente la ley fue aprobada, pero no es la actual realidad. Tampoco se dispone en la Ley la forma en que se pueda identificar adecuadamente si realmente se trata de un programa común o de una cadena voluntaria a los fines de aplicarle la excepción del Artículo 18.

Se hace necesario actualizar los parámetros para identificar quién es un pequeño comerciante elegible para formar parte de una cadena voluntaria o un programa común y le cubra la excepción dispuesta por Ley. Esto no puede ser basado únicamente en el número de establecimientos que posea, de forma que se cubra a los comerciantes realmente pequeños y no sea utilizada por medianos y grandes comerciantes que tienen otros recursos disponibles para competir entre sí.

De las recomendaciones recibidas se aceptó recomendar aumentar a tres (3) el número de negocios que pueda tener un pequeño comerciante para pertenecer a una cadena voluntaria y mantener su elegibilidad a la

exención. No obstante, se mantiene el concepto original del proyecto radicado estableciendo un límite en su volumen de ventas de un millón de dólares ($1,000,000.00) por cada negocio y se añade el parámetro provisto por la "Ley de Cierre" de siete (7) empleados o menos por cada negocio. Es importante aclarar que un requisito depende del otro. De otra forma se estaría abriendo la puerta de la excepción a los comerciantes grandes y no resultaría en beneficio alguno para los pequeños.

El Departamento de Comercio, ahora Administración de Fomento Comercial, tiene en su ley orgánica un mandato a favor de los pequeños comerciantes o negocios para la organización de programas que los ayuden. Así se originó dentro de esa agencia el desarrollo de su programa de promoción y organización de cadenas voluntarias y grupos de compras. La experiencia de esta Agencia en este campo y la existencia de este programa en la misma, la cualifican para que su administrador pueda identificar, reconocer y certificar los grupos que puedan acogerse a esta excepción.

A los fines de hacer viable que la Administración de Fomento Comercial pueda dedicar mayores esfuerzos a este programa de cadenas voluntarias y grupos de compras se hace necesario facultar a esta Agencia a cobrar por las certificaciones anuales que expida y que los dineros recaudados les sean asignados a ésta. Esto sería viable mediante la creación de un fondo especial que asegure los mismos para estos propósitos. Esto está de acuerdo con una recomendación sometida por la Administración de Fomento Comercial.

Se entiende que la certificación debe ser anual, ya que al disponerse el requisito de volumen de ventas por negocios, éste puede variar de una año a otro.

Por otro lado, se hace necesario igualmente, facultar a la Administración de Fomento Comercial para que pueda promulgar reglamentos para poner en efecto las responsabilidades y facultades que le sean aplicables al aprobarse la presente medida.

Por las razones antes expuestas esta Comisión recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 866.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Enrique Rodríguez Negrón
Presidente
Comisión de Turismo, Comercio, Fomento
Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1172, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a fin de disponer expresamente la aplicación de esos artículos adicionados por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendados, así como los beneficios que establecen, a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los rangos de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Artículos 12 y siguientes de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado" fueron adicionados a la referida Ley en virtud de la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975.

A su vez, dicho articulado ha sido subsiguientemente enmendado, entre otras por la Ley Núm. 12 de 21 de julio de 1977 y la Núm. 113 de 10 de julio de 1986.

Particularmente, en el Artículo 12 de la citada Ley Núm. 104, según enmendado, se reconocen los beneficios de representación legal y pago de sentencia que podrá solicitar un funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal, cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones.

Asimismo, en el precepto de referencia se indica que estarán cubiertos por lo allí dispuesto, los directores ejecutivos, ex directores ejecutivos, los miembros y ex miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno, los alcaldes y ex alcaldes, así como los funcionarios y ex funcionarios de los municipios; excepto que lo concerniente al pago de sentencias se regirá por lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Núm. 104, citada.

En lo pertinente, el referido Artículo 19 reitera que todas las disposiciones de los Artículos 12 y siguientes de la Ley Núm. 104, citada, serán aplicables a los servidores públicos municipales, excepto que los gastos que recaigan sobre éstos en concepto de tales sentencias, costas, honorarios y gastos incurridos por el Estado Libre Asociado en su representación legal serán sufragados de los fondos disponibles del correspondiente municipio que representa o representó el demandado en cuestión. Disponiéndose, además, que en caso de que el municipio afectado no disponga de los fondos necesarios para sufragar dicha cuantía, el Estado Libre Asociado deberá satisfacer el pago de ésta. Por su parte, el municipio reembolsará dicha suma posteriormente, según lo determine el Secretario de Hacienda y mediante consulta con la Asamblea Municipal del municipio.

En referencia a los preceptos mencionados, debe destacarse la ingente misión conferida al Cuerpo de la Policía Municipal, en virtud de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada recientemente por las Leyes Núm. 45 de 22 de mayo y Núm. 146 de 19 de agosto, ambas de 1996. Cónsone con el ámbito de mayor responsabilidad y deberes que ahora compete a la Policía Municipal, la Asamblea Legislativa aprueba la presente Ley, por entender que corresponde clarificar de forma expresa la aplicación de las disposiciones de la comúnmente conocida "Ley 9", al efecto de que sus preceptos y beneficios cubran a todas los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal, ya tengan el rango de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar o Cadete.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para lea como sigue:

"Artículo 12.-

. . .

Los Directores Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los miembros y ex miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno, los alcaldes y ex alcaldes y los funcionarios y ex funcionarios de los municipios, *así como los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete,* estarán cubiertos por lo aquí dispuesto, excepto que en lo relativo al pago de sentencias, se regirán por lo provisto en el Artículo 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.

. . . "

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 19.-

. . .

Todas las disposiciones de los Artículos 12 y siguientes de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, serán aplicables a los Directores Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los miembros y ex miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno, **[y a]** los alcaldes y ex alcaldes y funcionarios y ex funcionarios de los municipios, *así como los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete;* excepto que los gastos que recaigan sobre éstos en concepto de tales sentencias, costas, honorarios y gastos incurridos por el Estado Libre Asociado en su representación legal serán sufragados de los fondos disponibles de las correspondientes corporaciones e instrumentalidades del Gobierno o municipio que representa o que representó el demandado en cuestión. . . ."

Sección 3.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de lo Jurídico del Senado, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1172, tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo con las siguiente enmiendas.

En El Texto Decretativo:

Página 3, línea 6	después de "miembros" insertar "y ex-miembros"
Página 3, línea 6	después de "rangos" insertar "," y eliminar "de Comandante"
Página 3, línea 7	eliminar todo su contenido
Página 3, línea 19	después de "miembros" insertar "y ex-miembros"
Página 3, línea 20	después de "rangos" eliminar "de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente"
Página 3, línea 21	eliminar "Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete;"

En El Título:

Página 1, línea 4	después de "miembros" insertar "y ex-miembros"
Página 1, línea 4	después de "los" añadir "diferentes"
Página 1, línea 5	después de "rangos" insertar "." y eliminar "de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal"
Página 1, línea 6	eliminar "Guardia Auxiliar y Cadete."

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1172, propone enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a fin de disponer expresamente la aplicación de esos artículos adicionados por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendada, así como los beneficios que establecen, a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los rangos de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete.

A los fines de evaluar la medida se celebró una vista pública el día 6 de noviembre del presente año.

Fueron citados a deponer la Federación de Municipios de Puerto Rico, la Asociación de Alcaldes, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Asociación de Miembros de la Policía.

Comparecieron a deponer por el Departamento de Justicia la Lcda. Jimara Gabriel, por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la Lcda. Ida Cardona y por la Asociación de Miembros de la Policía la Lcda. Zaida Colón. La OCAM fue excusada de ofrecer su ponencia oral, sometieron memorial. Las demás

agencias citadas no comparecieron ante la Comisión.

Los deponentes ofrecieron sus testimonios orales y sometieron sus ponencias por escrito.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en su bien elaborada ponencia endosa la aprobación de la medida y hace una serie de observaciones y sugerencias que fueron atendidas por la Comisión.

La Federación de Municipios de P. R., la Policía de Puerto Rico, la Asociación de Miembros de la Policía, endosan la aprobación de la medida. El Departamento de Justicia no presenta reparo de clase alguna respecto a la aprobación de la medida. OCAM por su parte expresa entero apoyo a la medida.

Es menester señalar que la Ley 104 de 29 de junio de 1955, así enmendada por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975 (conocida como "Ley 9") trata sobre las Demandas Contra Funcionarios y Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dicha Ley provee para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, le provea representación legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia a los funcionarios y empleados del E. L. A. y también a los alcaldes, ex-alcaldes, funcionarios y ex-funcionarios de los municipios. Específicamente no se incluyó a los miembros y ex-miembros del Cuerpo de la Policía Municipal. El Proyecto aclara esta situación.

Nótese que esto sólo aplica cuando la causa de acción se basa en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridas de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones.

Por último señalamos que existe un Reglamento para implantar la Ley Núm. 9 denominado "Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia Bajo la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado", Núm. 4071 del Departamento de Estado del 8 de septiembre de 1989, el cual dispone sobre el procedimiento a seguir para solicitar dichos beneficios.

El Informe de la medida se discutió en Reunión Ejecutiva.

CONCLUSION

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de lo Jurídico, tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas aquí vertidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1236, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de lo Jurídico; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para proteger y garantizar la privacidad e intimidad de los ciudadanos, creando regulación que limite y reglamente el uso de la información genética.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los avances científicos durante este siglo han revolucionado a la humanidad. Hoy vivimos en una era de transportes masivos, comunicaciones ultramarinas vía satélite, en fin, el mundo de hoy es totalmente diferente al de principios de siglo. Una de estas facetas que ha evolucionado a pasos agigantados es el conocimiento del ser humano. Hoy en día se han ampliado los conocimientos en como se desarrolla el ser humano y como esa información se transmite y activa a través de las células.

La genética es el área de la biología que se dedica al estudio de la herencia, el proceso por el cual ciertas características de un organismo se transmiten de los padres a sus hijos. La genética moderna inicia en 1865 con los estudios sobre las variantes y patrones de herencia de los garbanzos realizados por el monje austriaco Gregorio Mendel, este postulaba la existencia de unos determinantes de herencia, que hoy conocemos por genes. En la actualidad conocemos que los genes determinan las características fundamentales desde las bacterias hasta los elefantes. Los padres transmiten sus genes a sus hijos, y las características básicas de cada especie pasan de generación en generación. El instrumento para lograr todo este proceso es el Acido Desoxirribonucleico o mejor conocido por sus siglas en inglés DNA.

Los ácidos nucleícos son la sustancia fundamental de todo organismo viviente, los investigadores presumen su formación hace tres billones de años, en el origen de la vida misma. El ADN se encuentra en el núcleo de cada célula, siendo el componente principal de los genes (segmentos lineales de ADN) y de los cromosomas, la estructura que transmite de por si las características hereditarias. A través del estudio del ADN se puede determinar las características de la persona, sus padres e hijos y determinar la tendencia, capacidad, debilidades, posibles padecimientos que pueda tener en el futuro, en fin, casi toda la información del cuadro familiar.

La genética moderna es una parte esencial de los estudios científicos modernos, se esta utilizando en multiplicidad de áreas para desarrollar a través de organismos especialmente creados ropa, alimentos, estudio de enfermedades para lograr medicamentos más eficaces, etc..

La genética forense utiliza el ADN para identificar a los individuos envueltos en pleitos de filiación y en casos criminales como violaciones y asesinatos. Aún cuando se puede extraer ADN de otros tejidos o fluidos corporales como lo son la saliva, esperma, pelo, piel, etc. en este campo el medio más eficaz para su estudio es la sangre.

Como consecuencia de estos desarrollos tenemos que plantearnos forzosamente el cómo podemos proteger a los individuos de las repercusiones nefastas que podría tener el que se divulgue información genética sin su consentimiento. Por ejemplo, supongamos que una persona vaya a solicitar un empleo, su posible patrono, a través de una simple muestra de sangre podría establecer posibles tendencias a enfermedades físicas o mentales que tenga esta persona y sus ascendientes, lo que produciría que el patrono discriminara contra éste.

Nuestra Constitución, en su Carta de Derechos, nos establece dos premisas esenciales que nos sirven de faro en esta cuestión. Primeramente, la dignidad del ser humano es inviolable y segundo pero no menos importante, la protección de la privacidad e intimidad. La Asamblea Legislativa tiene la facultad inherente en su ejercicio de los poderes delegados por el pueblo, a actuar por salvaguardar los derechos más fundamentales de los seres humanos en sociedad.

Es por esta razón que ésta Asamblea Legislativa, previniendo las consecuencias nefastas que podría acarrear el uso indebido de la información genética y actuando responsablemente en el descargue de sus

funciones más esenciales para con el pueblo, desea establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para salvaguardar nuestra privacidad e intimidad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ARTÍCULO 1.- TÍTULO

Esta ley se conocerá como "Ley de Privacidad Genética".

ARTÍCULO 2.- DETERMINACIONES Y PROPOSITOS

A. DETERMINACIONES.- La Asamblea Legislativa determina lo siguiente:

1. La molécula de ADN contiene información acerca del posible futuro médico de la persona, y esta información está escrita en un código que al presente se está descifrando a pasos acelerados.

2. La información genética tiene un historial de haber sido utilizada por los diferentes gobiernos y sectores particulares del mundo en prejuicio de los individuos.

3. La información genética es información particularmente privada y personal que no debe de ser tomada ni divulgada sin la autorización del individuo.

4. El uso inapropiado y la divulgación de la información genética puede causar daño significativo a la persona, incluso puede resultar que se le estigmatice y se discrimine en su contra en áreas como el empleo, educación, cuidado de salud y seguros.

5. El análisis del ADN de un individuo provee información no tan solo acerca del individuo, sino también acerca de los padres, hermanos e hijos del individuo, lo cual implica directamente la privacidad familiar.

6. La información genética esta particularmente vinculada a decisiones reproductivas, las cuales se encuentran entre las decisiones más íntimas y privadas que un individuo pueda tomar.

7. Las salvaguardas legales actuales respecto a la información médica, muestras de tejidos y ADN no son adecuadas para proteger la privacidad genética del individuo.

8. La reglamentación uniforme para la toma, almacenaje y uso de las muestras identificables de ADN e información genética privada obtenidas de las mismas son necesarias para proteger la privacidad del individuo garantizada en la Constitución del Estado Libre Asociado y permitir la investigación genética legítima.

B. Propósitos.- Los propósitos de esta ley son los siguientes:

1. Definir las circunstancias bajo las cuales se pueden tomar, almacenar y analizar las muestras de ADN.

2. Definir las circunstancias bajo las cuales la información genética privada puede ser creada, alamacenada y divulgada.

3. Definir los derechos de los individuos cuyas muestras de ADN son tomadas, almacenadas y analizadas.

4. Definir los derechos de los individuos cuya información genética es almacenada y divulgada.

5. Definir las responsabilidades de las personas que toman, analizan y utilizan las muestras de ADN y la información genética derivada de las mismas.

6. Establecer mecanismos efectivos para que se hagan valer los derechos y se cumpla con las responsabilidades definidas en esta ley.

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES

1. DIVULGACION COMPULSORIA.- El término "divulgación compulsoria" significa cualquier divulgación de información genética privada ordenada o requerida por ley con relación a un procedimiento judicial, legislativo o administrativo, incluyendo pero sin limitarse a divulgación requerida por orden judicial, *subpoena duces tecum,* petición o notificación de producir, orden del tribunal o cualquier otro método de requerir a una persona que tenga información genética privada que produzca la información genética privada de conformidad con las leyes penales o civiles de descubrimiento de prueba.

2. DIVULGAR.- El término "divulgar", cuando se utiliza en relación con información genética privada, significa proveer acceso a la información o la verificación de la información, pero solamente si dicho acceso o verificación se provee a una persona que no sea la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra.

3. DIVULGACION.- El término "divulgación" significa la acción o instancia de divulgar.

4. ADN.- El término "ADN" (por sus siglas en inglés DNA) significa ácido desoxirribonucleico.

5. MUESTRA DE ADN.- El término "muestra de ADN" significa cualquier espécimen biológico humano del cual se pueda extraer ADN, o el ADN extraído de dicho espécimen.

6. DETERMINACION DE ADN o *"DNA Typing"*.- El término "determinación de ADN" significa un método científico confiable para caracterizar y comparar las secuencias de ADN, y la aplicación de un análisis estadístico de frecuencia poblacional para determinar en casos en los que las secuencias de ADN concuerdan, la probabilidad de que dicha concordancia sea casual.

7. INDIVIDUO IDENTIFICABLE.- El término "individuo identificable" significa cualquier individuo cuyo nombre, dirección, número de seguro social, número de identificación del seguro de salud u otra información similar acerca de su identificación es conocida, esta disponible o puede ser determinada con certeza razonable, ya sea directamente o por referencia a otra información disponible.

8. IDENTIFICADOR INDIVIDUAL.- El término "identificador individual" significa un nombre, dirección, número de seguro social, número de identificación del seguro de salud u otra información similar por la que se puede determinar la identidad de la fuente de la muestra con certeza razonable, ya sea directamente o por referencia a otra información disponible. Este término no incluye caracteres, números o códigos asignados a un individuo o a una muestra de ADN que no puede ser utilizada para determinar la identidad de la fuente de la muestra.

9. MUESTRA DE ADN INDIVIDUALMENTE IDENTIFICABLE.- El término "muestra de ADN individualmente identificable" significa cualquier muestra de ADN vinculada con un identificador individual.

10. RECORD INDIVIDUALMENTE IDENTIFICABLE.- El término "record individualmente identificable" significa cualquier récord que contenga información genética privada vinculada con un identificador individual.

11. PERSONA.- El término "persona" incluirá a un individuo, corporación, sociedad, asociación, empresa conjunta, gobierno, división gubernamental o agencias, asi como otras entidades legales o comerciales.

12. INFORMACION GENETICA PRIVADA.- El término "información genética privada" significa cualquier información sobre un individuo identificable que sea derivada de la presencia, ausencia, alteración o mutación de un gen o genes, o la presencia o ausencia de un marcador o marcadores específicos de ADN, que ha sido obtenida:

(a). De un análisis del ADN del individuo; o

(b). De un análisis del ADN de una persona con la cual el individuo esta emparentada.

13. FUENTE DE LA MUESTRA.- El término "fuente de la muestra" significa el individuo de cuyo cuerpo se origina la muestra de ADN.

14. REPRESENTANTE DE LA FUENTE DE LA MUESTRA.- El término "representante de la fuente de la muestra" significa cualquier persona que tenga la autoridad legal para tomar decisiones de cuidados de salud de un menor o de una persona incompetente, o el administrador o albacea de los bienes, si alguno, de la persona fallecida; de lo contrario, significará el familiar más cercano de la persona fallecida.

15. INSTITUTO.- Se refiere al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

PARTE I.- RECOLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE ADN

ARTÍCULO 4.- TOMA DE MUESTRAS DE ADN

(A) REQUISITO DE AUTORIZACION ESCRITA.- A menos que se disponga lo contrario en los artículos 14, 15 y 16 de esta ley, ninguna persona podrá tomar o hacer que se tome una muestra de ADN ldentificable lndividualmente para análisis genético sin la autorización por escrito de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra.

(B) INFORMACION REQUERIDA.- Antes de tomar la muestra de ADN de una fuente de muestra para análisis genético, la persona que tome la muestra o que haga que se tome la muestra informará oralmente lo siguiente a la fuente de la muestra o al representante de la fuente de la muestra:

1. Que el consentimiento para tomar la muestra de ADN es voluntario;
2. Que el consentimiento al análisis genético es voluntario;
3. La información que razonablemente se espera sea derivada del análisis genético;
4. El uso, si alguno, que la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra podrá darle a la información derivada del análisis genético;
5. El derecho a inspeccionar récords que contengan la información derivada del análisis genético;
6. El derecho a que se destruya la muestra de ADN;
7. El derecho a revocar el consentimiento al análisis genético en cualquier momento antes de que se termine el análisis;
8. Que el análisis genético puede resultar en información sobre los parientes genéticos de la fuente de la muestra que no sea conocida por dichos parientes pero que podría ser importante y, si fuese asi, la fuente de la muestra tendrá que decidir si desea compartir esa información con sus parientes o no;
9. Que en el futuro alguien podría preguntarle a la fuente de la muestra si se ha hecho pruebas o análisis genético y podría serle de beneficio la divulgación de información de dicha prueba o análisis;
10. Que la toma y análisis de la muestra de ADN y la información genética privada derivada del análisis estará protegida por esta ley, y
11. La disponibilidad de asesoramiento genético.

ARTÍCULO 5.- ANALISIS DE MUESTRAS DE ADN

(A) ANALISIS PROHIBIDO SIN AUTORIZACION.- A menos que se disponga lo contrario en los artículos 14, 15 y 16 de esta ley, el análisis genético de una muestra de ADN individualmente identificable está prohibido, a menos que sea específicamente autorizado por escrito por la fuente de la muestra o por el representante de la fuente de la muestra.

(B) VERIFICACION DE AUTORIZACION.- Ninguna persona podrá analizar una muestra de ADN individualmente identificable sin antes ver que se haya obtenido autorización escrita para el análisis.

ARTICULO 6. AUTORIZACION PARA TOMAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE ADN IDENTIFICABLES INDIVIDUALMENTE PARA ANALISIS GENETICO

(A) AUTORIZACION ESCRITA.- para ser válida la autorización requerida por las artículos 4 y 5 de esta ley, tiene que cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:

1. Por escrito.- la autorización debe de ser por escrito y firmada por la fuente de la muestra o por el representante de la fuente de la muestra, y con fecha del día de haber sido firmada.
2. Identificar a la persona que toma o colecta la muestra.- la autorización debe de identificar a la persona que toma la muestra de ADN o que hace que se toma dicha muestra.
3. Identificar la facilidad o instalación en donde se llevará a cabo la recolección de la muestra.
4. Identificar la instalación en donde se almacenará la muestra.
5. Descripción de toma de muestra.- La autorización debe indicar la manera en la cual la muestra será tomada.
6. Uso autorizado.- La autorización debe incluir una descripción de todos los usos autorizados de la muestra de ADN.
7. Declaración sobre el almacenaje después de completado el análisis.- La autorización debe indicar si la fuente de la muestra permite o no que la muestra sea conservada o almacenada de forma identificable después de terminado el análisis.
8. Declaración sobre el uso de muestras de ADN no identificables para fines de estudios o comerciales.- El formulario de autorización debe incluir una disposición que le permita a la fuente de la muestra o al representante de la fuente de la muestra prohibir el uso de la muestra de ADN para fines de estudio o comerciales aún cuando la muestra no esté en la forma identificable individualmente.

(B) RETENCION DE AUTORIZACION.- La autorización para la toma y análisis de una muestra de

ADN identificable individualmente deberá ser retenida por lo menos mientras la muestra de ADN sea conservada.

(C) COPIA.- Se le proveerá una copia de la autorización a la fuente de la muestra o al representante de la fuente de la muestra.

ARTICULO 7.- PROPIEDAD Y DESTRUCCION DE MUESTRAS DE ADN

(A) PROPIEDAD DE LA MUESTRA DE ADN.- La muestra de ADN identificable individualmente es propiedad de la fuente de la muestra.

(B) DERECHO A ORDENAR LA DESTRUCCION DE LA MUESTRA DE ADN.- Excepto cuando la muestra de ADN haya sido tomada al amparo de los artículos 15 o 16 de esta ley, la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra tendrá derecho a ordenar la destrucción de la muestra de ADN.

(C) DESTRUCCION RUTINARIA DE MUESTRAS 0 IDENTIFICADORES.- La muestra de ADN individualmente identificable deberá ser destruida al terminar el análisis genético, a menos que:

1. La fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra haya indicado lo contrario por escrito; o

2. Se destruirán todos los identificadores individuales que conecten la muestra con la fuente de la muestra.

ARTICULO 8. NOTIFICACION DE DERECHOS Y GARANTIAS

La persona que tome o almacene muestras de ADN para análisis genético deberá proveerle a la fuente de la muestra o al representante de la fuente de la muestra antes de la toma, almacenaje o análisis de una muestra de ADN, así como a cualquier otra persona mediante petición, una notificación de los derechos y garantias que incluyan la siguiente información y garantías:

1. Que la muestra de ADN será utilizada únicamente según lo autorizado en la autorización escrita;

2. La muestra de ADN identificable individualmente es propiedad de la fuente de la muestra;

3. A menos que sea específicamente prohibido por la fuente de la muestra o por el representante de la fuente de la muestra, los investigadores podrán tener acceso a las muestras de ADN que no puedan ser conectadas con los identificadores individuales;

4. La fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra tendrá el derecho a ordenar la destrucción de la muestra de ADN identificable individualmente en cualquier momento;

5. La muestra de ADN identificable individualmente será destruida al terminar el análisis a menos que la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra haya estipulado otra cosa por escrito;

6. La fuente de la muestra podrá designar a otra persona como la persona autorizada a tomar decisiones en relación con la muestra de ADN identificable individualmente después de la muerte de la fuente de la muestra; si se designa a tal persona, la fuente de la muestra deberá notificarlo a la instalación en donde se almacene la muestra de ADN;

7. La fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra tiene el derecho de examinar los récords que contengan información genética privada, a obtener copias de dichos récords y a solicitar la corrección o enmienda de los mismos;

8. La información genética privada podrá ser divulgada a los investigadores que cualifiquen para dicho acceso al amparo de esta ley;

9. La toma y análisis de la muestra de ADN y la información genética privada derivada del análisis estará protegida por esta ley, y cualquier persona a la cual se le hayan violado sus derechos al amparo de esta ley puede recurrir a remedios civiles, incluyendo daños, según se dispone en esta ley; y

10. Habrá asesoramiento genético disponible.

Parte II - DIVULGACION DE INFORMACION GENETICA PRIVADA

ARTICULO 9.- DIVULGACION DE INFORMACION GENETICA PRIVADA

(A) REQUISITO DESAUTORIZACION ESCRITA.- Excepto lo dispuesto en los artículos 14 y 18 inciso

(B), ninguna persona que en el curso regular de su negocio, práctica de una profesión, o servicio, cree, almacene reciba o suministre información genética privada, podrá divulgar información genética privada a través de medio de comunicación alguno, excepto cuando medie una autorización por escrito según se dispone en el Artículo 10.

(B) REDIVULGACION PROHIBIDA.- Se prohíbe la redivulgación de la información genética privada que ha sido divulgada a cualquier persona mediante una autorización válida por escrito.

ARTICULO 10.- AUTORIZACION PARA DIVULGACION DE INFORMACION GENETICA PRIVADA

(A) AUTORIZACIONES ESCRITAS.- Para que sea válida, una autorización para divulgación de información genética privada debe cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:

1. Por escrito.- La autorización debe ser por escrito, firmada por la fuente de la muestra o por el representante de la fuente de la muestra y fechada al día de dicha firma;

2. Fuente de la muestra o representante identificado.- La autorización deberá de identificar a la persona que otorga la autorización y la relación del individuo con la fuente de la muestra;

3. Persona que divulga identificada.- La autorización debe identificar a la persona a quien se le permite hacer la divulgación;

4. Información descrita.- La autorización debe describir la información genética específica a ser divulgada;

5. Recipiente identificado.- La autorización debe identificar la persona a quien se le divulgará la información;

6. Propósito descrito.- La autorización debe describirse el propósito para el cual se hace la divulgación;

7. Fecha de expiración.- La autorización debe indicar la fecha de expiración de la misma, que en ningún caso excederá de 30 días a partir de la fecha de autorización; y

8. Declaración de revocación.- La autorización debe incluir una declaración estableciendo que dicha autorización estará sujeta a revocación en cualquier momento antes de se haya hecho la divulgación.

(B) COPIA.- Se le proveerá una copia de la autorización a la persona que haga la autorización.

(C) REVOCACION O ENMIENDA DE LA AUTORIZACION.- La fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra podrá revocar o enmendar la autorización, en todo o en parte, en cualquier momento.

(D) AVISO DE REVOCACION.- La fuente de la muestra no podrá llevar una acción en contra de una persona por divulgación de información genética privada que se haga de buena fe, a base de una autorización válida si la persona no tenía conocimiento del aviso de revocación al momento en el cual se hizo la divulgación.

(E) IDENTIFICACION DE INFORMACION SEGUN PROTEGIDA POR LEY.- Toda divulgación hecha con la autorización escrita descrita en el inciso (a) deberá estar acompañada de la siguiente declaración escrita:

"Esta información le ha sido divulgada a usted de los récords confidenciales protegidos por la 'Ley de Privacidad Genética' y se prohíbe cualquier otra divulgación de información sin una autorización específica."

(F) EFECTO DE AUTORIZACION GENERAL PARA ENTREGA DE RECORDS MEDICOS.- La autorización general para la entrega de récords médicos o información médica no se interpretará como una autorización para la divulgación información genética privada.

ARTICULO 11.- INSPECCION Y COPIA DE RECORDS QUE CONTENGAN INFORMACION GENETICA PRIVADA.

(A) INSPECCION DE RECORDS.- A menos que se disponga lo contrario en el Artículo 17 de esta ley, una persona que conserve información genética privada deberá, al serle solicitado por escrito, permitirle a la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra inspeccionar los récords que contengan información genética privada y proveerá copia de cualesquiera de dichos récords a petición de la fuerte de la muestra o del representante de la fuente de la muestra.

(B) RESPUESTA A SOLICITUD PARA EXAMINAR Y COPIAR INFORMACION.- Al recibir una solicitud por escrito de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra para inspeccionar o copiar, en todo o en parte, los récords que contengan información genética privada, la persona, tan pronto como lo requieran las circunstancias pero no más tarde de 30 días laborables después de recibir dicha solicitud, pondrá la información a la disposición de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra para inspección durante las horas laborables regulares o proveerá una copia a la persona de serle solicitada.

(C) EXPLICACION DE TERMINOS Y CODIGOS.- La persona proveerá una explicación de los términos y de cualquier código o abreviatura utilizada en los récords que contengan información genética privada a petición de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra.

(D) CARGOS.- La persona podrá cobrar un cargo razonable que no excederá el costo real de duplicación para la persona, por las copias de los récords que se proveen.

ARTICULO 12.- ENMIENDA DE RECORDS

(A) EN GENERAL.- Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido una solicitud escrita de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra para corregir o enmendar todo o en parte de cualquier récord que contenga información genética privada, la persona que conserve los récords que contienen información genética privada deberá:

1.Hacer la corrección o enmienda solicitada;

2.Informar a la persona que se ha hecho la corrección o enmienda;

3.Hacer esfuerzos razonables para informar a toda persona a la cual se le había divulgado anteriormente la porción no corregida ni enmendada, que se han hecho dichas correcciones o enmienda; y

4. A petición de la persona, hacer esfuerzos razonables para informar a cualquier fuente conocida de la porción no corregida ni enmendada de la información sobre la corrección o enmienda hecha.

(B) RAZONES PARA PROCESOS DE DENEGACION Y REVISION.- Si se deniega la corrección o enmienda, la persona que conserve los récords deberá informar a la fuente de la muestra o el representante de la fuente:

1. Las razones para denegar la corrección o enmienda;

2. Cualquier procedimiento para la revisión de dicha denegación; y

3. El derecho del individuo de entregarle a la persona una declaración concisa en la que indique la corrección o enmienda solicitada y exponga las razones por las cuales no estuvieron de acuerdo a efectuar dicha corrección o enmienda.

(C) NORMAS PARA CORRECCION O ENMIENDAS.- La persona que conserve récords que contengan información genética privada deberá corregir o enmendar la información de acuerdo con la solicitud que se haga al amparo del inciso (A) de este artículo si la información no es correcta o completa para los fines para los cuales la información pueda ser utilizada o divulgada por la persona.

(D) DECLARACION DE DESACUERDO.- Luego de que la fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra haya radicado una declaración de desacuerdo al amparo del subinciso (3) del inciso (B) de este artículo, la persona, en cualquier divulgación subsiguiente de la parte en controversia de la información, incluirá una copia de la declaración del individuo y también podrá incluir una declaración de las razones por las cuales no se hizo la corrección o enmienda solicitada.

ARTICULO 13.- DIVULGACION AL AMPARO DEL PROCESO MANDATORIO

(A) PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES NO ESTA DISPONIBLE.- Ninguna persona que conserve información genética privada podrá ser obligada a divulgar dicha información al amparo de una solicitud de divulgación mandatoria en ningún procedimiento judicial, legislativo o administrativo, a menos que:

1. La persona que conserve la información genética privada haya recibido la autorización de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra para revelar la información en respuesta a dicha solicitud de divulgación mandatoria;

2. La fuente de la muestra o el representante de la fuente de la muestra sea parte en el procedimiento y la información genética privada esta en controversia; o

3. La información genética es para uso en un procedimiento legal o de investigación en la cual la persona que conserve la información es el sujeto de la misma o una de las partes.

(B) NOTIFICACION.- Si la información genética es solicitada al amparo del subpárrafo (2) del inciso (A), o en un procedimiento o investigación el amparo del subpárrafo (3) del inciso (A), la persona que solicita la divulgación mandatoria le entregará a la persona que conserve la información genética y a la fuente de la muestra, o al representante de la fuente de la muestra o al abogado de la fuente de la muestra, el original o copia de la solicitud de divulgación mandatoria por lo menos treinta (30) días antes de la fecha en que se solicita la divulgación mandatoria y una declaración del derecho de la fuente de la muestra o del representante de la fuente de la muestra y de la persona que conserve la información genética a objetar dicha divulgación mandatoria ante dicho tribunal o agencia del gobierno previo a emitir una orden para divulgación mandatoria, y del proceso a seguirse cuando existe tal objeción. Dicha entrega se hará por correo certificado, con acuse de recibo, o entregado a la mano, además de cualquier otra forma de entrega requerida por ley.

(C) CERTIFICACION.- La entrega de peticiones de proceso mandatorio o de descubrimiento a una persona que conserve información genética privada debe estar acompañada de una certificación por escrito, firmada por la persona que solicita la información genética privada o por su representante autorizado y deberá identificar por lo menos un subpárrafo del inciso (A) de este artículo bajo el cual se solicita el proceso mandatorio o de descubrimiento. La certificación también debe indicar, en el caso de información solicitada al amparo de los subpárrafos (2) ó (3), que se ha cumplido con los requisitos de notificación del inciso (B). La persona podrá firmar la certificación inicialmente si la persona realmente entiende que el subpárrafo del inciso (A) de este artículo identificado en la certificación provee una base apropiada para el uso del proceso de descubrimiento o mandatorio. La copia de la certificación por escrito se conservará como parte permanente de los récords de la información genética privada.

(D) NORMAS PARA EMITIR UNA ORDEN.- La orden al amparo de este artículo será emitida por el Tribunal de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona cuya información genética se solicita accesar después de celebrar una vista y determinen que existe justa causa. Para tomar esta determinación, el tribunal deberá determinar que:

1. Las otras maneras de obtener la información genética privada no están disponibles o no serán efectivas; y

2. Hay una necesidad apremiante para obtener la información genética privada que excede el daño potencial a los intereses de privacidad del objeto de la información.

(E) CONTENIDO DE LA ORDEN.- Una orden bajo esta artículos que autorice la divulgación de información genética privada deberá:

1. Limitar la divulgación a aquellas partes de los récords que contengan la información que sea esencial para cumplir con los objetivos de la orden;

2. Limitar la divulgación a aquellas personas cuya necesidad de dicha información es la base para la orden;

3. Requerir la eliminación de los identificadores individuales de todo documento puesto a la disposición del público; e

4. Incluir aquellas otras medidas que sean necesarias para limitar la divulgación para proteger al sujeto de la información, incluyendo pero sin limitarse a sellar del escrutinio público el récord o parte del récord de cualquier procedimiento para el cual se ha ordenado la divulgación de información.

PARTE III EXCEPCIONES EN CASO DE IDENTIFICACIÓN Y ORDENES JUDICIALES

ARTICULO 14.- IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES

A excepción de lo establecido por esta ley, una persona podrá proveer el acceso a muestras de ADN de un individuo identificable, o a data derivada de una determinación de ADN (*DNA typing*), para ser utilizadas

en la identificación de un cadáver, proveyendo que el análisis de cualquier muestra facilitada y el análisis de la muestra de ADN tomada al cadáver estarán limitadas a lo necesario para facilitar la identificación del cadáver.

ARTÍCULO 15.- IDENTIFICACIÓN PARA PROPÓSITOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEY

Ninguna disposición de esta ley deberá de ser interpretada como que prohiba a las agencias estatales o municipales de orden público a recopilar, almacenar, establecer determinaciones de ADN *(DNA typing)* y muestras de ADN cuando:

1. La recolección, almacenaje y determinaciones de ADN *(DNA typing)* estén autorizadas por ley.
2. La recolección, almacenaje y determinación *(DNA typing)* de las muestras de ADN se limite a circunstancias relacionadas con la investigación sobre la comisión de un delito.
3. El acceso a dichas muestras de ADN estará restringido a las agencias de orden público, el Ministerio Público, la representación legal de la defensa, los demandantes, los acusados, sospechosos y sus agentes autorizados.

ARTÍCULO 16.- RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ADN EN CASO DE ORDEN JUDICIAL

Ningún artículo de esta ley deberá de ser interpretado como que prohiba la recolección, análisis de ADN de un individuo identificable a tenor con la Regla 32 de las de Procedimiento Civil o reglamentación similar de agencias administrativas cuando se relacione a pleitos o procedimientos en que la persona de la muestra sea parte y que exista controversia sobre la muestra, en cumplimiento con lo previsto en el inciso (A) de este artículo.

(A) EMISIÓN DE LA ORDEN

Una orden bajo la Regla 32 de las de Procedimiento Civil será otorgada cuando:

1. Se demuestre justa causa para su expedición y se notifique al individuo de la muestra o su representante y a todas las partes; y
2. La orden deberá de especificar:

a. El asunto para la recolección de la muestra de ADN;

b. La persona o personas autorizadas a tomar y analizar la muestra;

c. El propósito del análisis genético;

d. Que el análisis genético estará limitado a lo necesario para cumplir con el propósito de la orden.

e. Que la persona que realice el análisis destruirá la muestra tan pronto se cumplan los propósitos consistentes con la orden.

PARTE IV ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 17.- INVESTIGACIONES QUE ENVUELVAN ANÁLISIS GENÉTICO

(A) CONDICIONES PARA REALIZARLO.- Excepto por lo previto en el Artículo 19 de esta ley ninguna muestra de ADN de un individuo identificable será analizada como parte de un proyecto de investigación a menos que el Instituto de Ciencias Forenses haya determinado que:

1. El uso de muestras de ADN de individuos identificables sea esencial para el proyecto de investigación.
2. Que el beneficio potencial del proyecto de investigación tenga un peso mayor que el peligro potencial a los sujetos del estudio incluyendo riesgo psicosocial y la intromisión a la privacidad de los sujetos como resultado del análisis de las muestras individualmente identificables;
3. Protocolo de la investigación

a. Contendrá salvaguardas adecuadas para evitar posibles divulgaciones de la información genética privada que fuese generada durante la investigación;

b. Requerirá que los individuos sometidos a la investigación les sea suplida la información aplicable según lo establecido en la Artículo 4 de esta ley;

c. Requerirá el consentimiento escrito de los individuos estudiados, incluyendo los requisitos aplicables

de la Artículo 6 de esta ley; y

d. Prohiba que se incluya los récords de la investigación dentro de los expedientes médicos de la fuente de la muestra a menos que este o su representante autorizado consienta a ello por escrito.

(B) SALVAGUARDAS PARA EVITAR LA DIVULGACION DE INFORMACION GENETICA PRIVADA

1. Para propósitos del subpárrafo 3 del inciso (A) de este Artículo, las medidas para salvaguardar la divulgación indebida de información genética privada incluye, pero sin limitarse a, lo siguiente:

a. Asegurarse de que los sujetos de la investigación no puedan ser identificados en ningún reporte o publicación de los resultados del estudio;

b. Tener procedimientos para la remoción o destrucción de toda información que pueda permitir la identificación de la fuente de la muestra tan pronto como sea posible, según los propósitos y objetivos de la investigación.

(C) LIMITACIONES EN LA INVESTIGACION DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS.

Se prohíbe la investigación con muestras de ADN de individuos identificables cuando dichos individuos sean menores de dieciocho años, a menos que:

1. Al padre con patria potestad o su tutor se le supla la información requerida en el Artículo 4 de esta ley;

2. El padre con patria potestad o su tutor ejecute una autorización que contenga los requisitos establecidos en el Artículo 6 de esta ley y específicamente establezca que el padre o tutor entiende y esta de acuerdo, que a menos que el análisis refleje que el menor, fuente de la muestra, padezca de una condición genética que ejercitando un juicio médico razonable determine que deba de ser tratado, no se le divulgará al padre o tutor los resultados del análisis.

3. Que se cumplan con los requisitos adicionales que el Instituto de Ciencias Forenses establezca.

(D) DESTRUCCION DE LAS MUESTRAS DE ADN O SUS IDENTIFICADORES

1. En ausencia de una autorización específica para recolectar, mantener, almacenar y analizar una muestra de ADN de un individuo identificable, toda muestra de ADN en relación con un proyecto de investigación deberá de ser destruida al momento de completarse el proyecto , o cuando la muestra no se incluya en el proyecto, lo que ocurra primero.

2. Cuando la autorización para la recolección, almacenaje o análisis de una muestra de ADN de un individuo identificable no contenga prohibición alguna sobre su uso posterior cuando esta no pueda ser identificada o relacionada con persona alguna, la persona en posesión de la muestra podrá destruir todo identificador individual que relacione la muestra con su fuente en vez de destruir la muestra como tal, según establecido en el inciso (1) anterior.

(E) ANALISIS GENEALOGICO Y ESTUDIOS DE VINCULOS FAMILIARES.- Cuando un proyecto de investigación incluya el análisis de ADN de los miembros de una familia para análisis de su genealogía o vínculo.

1. El Instituto de Ciencias Forense, en adición a realizar la determinación requerida en el inciso (A) de este artículo, deberá de requerir lo siguiente:

a. Que provea orientación a los sujetos del estudio de como es que se conduce el análisis de genealogía y el tipo de información que se obtiene como resultado de dicho análisis.

b. Que en la medida en que sea permisisble se preserven los expedientes de cada miembro del grupo familiar en forma separada.

2. Previo a la participación, y en adición a los requerimientos para la divulgación de la información requeridos en el Artículo 4 de esta ley, las personas sujetas al estudio deberán de:

a. Ser informadas que como parte de su participación en el estudio cabe la posibilidad de que otros miembros de la familia advengan a conocimiento de infromación genética privada sobre éstos.

b. Ser informados de que se va a hacer con la data y récords que se generen durante el estudio.

c. Ser informados de que existe la psoibilidad de que se descubra que uno o varios miembros de la familia no estén genéticamente vinculados entre sí.

(F) DERECHOS DE LOS SUJETOS A OBTEBER INFORMACION.- Cuando se este cumpliendo con lo previsto en el Artículo 11 de esta ley, no se le divulgará a ningún miembro del árbol genealógico información genética privada sobre otra persona sin la previa autorización de ésta.

(G) USO DE MUESTRAS DE ADN QUE NO SON IDENTIFICABLES.- Ningún Artículo de esta ley se entenderá como que impida o limite la investigación de muestras de ADN que no puedan ser identificadas o relacionadas con la fuente de la muestra.

ARTICULO 18.- DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENÉTICA PRIVADA PARA PROPÓSITOS DE INVESTIGACIÓN

(A) Se prohíbe a toda persona que en el curso regular de su negocio, práctica de una profesión o rindiendo un servicio, archive o guarde información genética privada, que permita a investigadores acceso a dicha información, a menos que:

1. El Instituto de Ciencias Forenses haya aprobado que se lleve a cabo dicho programa de investigación o estudio; y

2. La fuente de la muestra, o el representante de la fuente de la muestra específicamente ha consentido a dicho acceso o divulgación de la información mediante una autorización que cumpla con los requisitos del Artículo 12 de esta Ley.

(B) ACCESO LIMITADO PARA FINES ESTADISTICOS.- Independientemente de las disposiciones del inciso (A), la persona que archive o conserve información genética privada podrá permitir acceso a dicha información exclusivamente con el propósito de inspección o revisión de récords que contengan la información, disponiéndose que:

1. La inspección o revisión es con el fin de recopilar datos para estudios estadísticos o epidemiológicos y que la información genética privada no será copiada, removida de los récords o divulgada de forma alguna; y

2. La persona que está llevando a cabo la inspección o revisión certifique, por escrito:

a. Que se cumplirá con esas limitaciones;.

b. Que tiene conocimiento de su responsabilidad por violaciones a esta ley.

ARTICULO 19.- EXCEPCIONES PARA MUESTRAS DE ADN PREVIAMENTE TOMADAS DE PERSONAS FALLECIDAS

(A) ANALISIS PERMISIBLE.- Independientemente de las disposiciones del Artículo 17 de esta ley, una muestra de ADN individual identificada, la cual fue tomada de una fuente de muestra que falleció antes de la fecha de vigencia de esta ley, podrá ser analizada como parte de un proyecto de investigación, pero no se podrá divulgar ninguna información genética individualmente identificable sin la autorización del representante de la fuente de la muestra.

(B) DIVULGACION A FAMILIARES.- Si el análisis de la muestra de ADN permitido por el inciso (A) determina que un familiar de la fuente de muestra del fallecido está en riesgo de una enfermedad genética, la cual a juicio médico razonable puede ser efectivamente mejorada, evitada o tratada, nada de lo establecido en esta ley será interpretado como que prohíbe a los investigadores comunicarse con dichos familiares e informarles de dicho riesgo, siempre y cuando la información genética privada sobre la fuente de la muestra no sea divulgada.

PARTE V.- MENORES Y PERSONAS INCOMPETENTES

ARTICULO 20.- AUTORIZACION PARA TOMAR Y ANALIZAR EL ADN DE MENORES

(A) INDIVIDUOS MENORES DE 16.- Exceptuando las disposiciones de los Artículos 17 inciso (C) y 24 de esta ley, no se tomará ni se analizará muestra alguna de ADN individual identificada de una fuente de muestra menor de 16 años para determinar la existencia de un gen que a base de un juicio médico razonable no produzca señas o síntomas de enfermedad antes de los 16 años de edad, a menos que:

1. Haya una intervención efectiva la cual evitaría o demoraría la ocurrencia o aliviaría la gravedad de la enfermedad; y

2. Para que sea efectiva, la intervención deberá iniciarse antes de los dieciséis años de edad; y

3. El representante de la fuente de la muestra haya recibido las divulgaciones requeridas por el Artículo 4 de esta ley y haya formalizado una autorización por escrito que cumple con los requisitos del Artículo 6

de esta ley y que también limita los usos de dicho análisis a aquellos permitidos por este Artículo.

(B) INDIVIDUOS DE 16 ó 17 AÑOS.- Excepto según lo establecido en el Artículo 17 inciso (C) y el Artículo 22 de esta ley, la muestra de ADN individualmente identificable de una fuente de muestra de 16 ó 17 años de edad podrá ser tomada y analizada, siempre y cuando:

1. La fuente de la muestra obtenga la información requerida por el Artículo 4 de esta ley, estando acompañado de uno de sus padres u otro miembro adulto de su familia; y

2. La fuente de la muestra formalice una autorización escrita que cumpla con los requisitos del Artículo 6 de esta ley.

(C) DESTRUCCIÓN DE LAS MUESTRAS DE ADN DE INDIVIDUOS MENORES DE 16 AÑOS.- El representante de la fuente de la muestra podrá, a nombre de la fuente de la muestra que es menor de dieciséis años de edad, ordenar la destrucción de la muestra de ADN tomada al amparo del inciso (A) de esta sección.

ARTICULO 21.- AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION GENETICA PRIVADA DE INDIVIDUOS DE 16 A 17 AÑOS DE EDAD

(A) AUTORIZACION CON RESPECTO A INDIVIDUOS.- Excepto según se dispone en el Artículo 23 de esta ley, la información genética privada de un individuo que tenga la edad de 16 ó 17 años no será divulgada a menos que la fuente de la muestra haya ejecutado una autorización escrita que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de esta ley.

(B) AUTORIZACION CON RESPECTO A INDIVIDUOS MENORES DE 16 AÑOS.- Excepto según se dispone en el Artículo 25 de esta ley, la información genética privada sobre un menor de menos de 16 años de edad no será divulgada a menos que el padre u otro representante de la fuente de la muestra haya ejecutado una autorización escrita que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de esta ley.

ARTICULO 22.- AUTORIZACION PARA TOMAR Y ANALIZAR MUESTRAS DE ADN DE PERSONAS INCOMPETENTES

(A) LIMITACIONES PARA TOMAR Y ANALIZAR.- La muestra de ADN individual identificable de una fuente de muestra que carece de la habilidad para entender la información divulgada al amparo del Artículo 4 de esta ley y la información contenida en una autorización al amparo del Artículo 6, no será tomada ni analizada a menos que:

1. El análisis sea necesario:

a. Para diagnosticar la causa de la incompetencia; o

b. Para diagnosticar una condición genética, la cual a juicio médico razonable sólo pueda ser mejorada, evitada o tratada efectivamente, mientras la fuente de la muestra es incompetente; o

c. Para diagnosticar una enfermedad genética de los padres, hermanos, hijos o nietos de la fuente de muestra, siempre y cuando dicha enfermedad, a juicio médico razonable, pueda ser mejorada, evitada o tratada efectivamente;

2. El análisis esté limitado a lo que sea necesario para dicho diagnóstico; y

3. El representante de la fuente de la muestra haya ejecutado una autorización que cumpla con los requisitos del Artículo 6 de esta ley.

(B) DESTRUCCIÓN DE MUESTRAS TOMADAS ANTES DE LA INCOMPETENCIA.- Siempre que la fuente de la muestra, mientras estaba competente haya, mediante una autorización al amparo del Artículo 6 de esta ley, o en el ejercicio de los derechos de la fuente de la muestra al amparo del Artículo 7 inciso (B) de esta ley, ordenado la destrucción de la muestra de ADN, y la fuente de la muestra se haya vuelto incompetente antes de la fecha o que ocurra el evento el cual fue designado por la fuente de la muestra para causar la destrucción de dicha muestra, el representante de la fuente de la muestra podrá ordenar la destrucción prematura de dicha muestra pero no está autorizado para cancelar o sobreseer dicha destrucción a menos que la posposición de la destrucción sea para llevar a cabo un análisis de la muestra de ADN para uno de los fines establecidos en el inciso (A) de este artículo.

ARTICULO 23.- AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN GENÉTICA PRIVADA SOBRE PERSONAS INCOMPETENTES

La información genética privada sobre una persona incompetente no será divulgada a menos que:
1. La información --

a. Sea necesaria para diagnosticar una condición genética la cual a juicio médico razonable, únicamente puede ser mejorada, evitada o tratada efectivamente, mientras la fuente de la muestra sea incompetente; o

b. Sea necesaria para fines de consejería genética para un familiar de la persona;

2. La información divulgada sea limitada a aquella que sea necesaria para llevar a cabo dicho tratamiento o consejería; y

3. El representante de la fuente de la muestra ejecute una autorización que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de esta ley.

PARTE VI.- MUJERES EMBARAZADAS, FETOS Y EMBRIONES EXTRACORPORALES

ARTICULO 24.- AUTORIZACION PARA TOMA Y ANALISIS DE ADN DE MUJERES EMBARAZADAS Y FETOS

Independientemente de la edad, una mujer embarazada tendrá todos los derechos y autoridad de una fuente de muestra adulta en relación a su muestra de ADN y de la muestra de ADN de su feto a menos que sea, de otra manera, incompetente, según las disposiciones del Artículo 22.

ARTICULO 25.- AUTORIZACION PARA DIVULGACION DE INFORMACION GENETICA PRIVADA DE MUJERES EMBARAZADAS Y FETOS

Independientemente de la edad, una mujer embarazada tendrá todos los derechos de una fuente de muestra adulta en relación a los récords que contengan información genética privada, según se dispone en los Artículos 11, 12 y 13 de esta ley, y con relación a la divulgación de información genética que surja del análisis de su muestra de ADN o de la muestra de ADN de su feto a menos que carezca de la habilidad para entender la información contenida en la autorización al amparo del Artículo 10 de esta ley.

ARTICULO 26.- AUTORIZACION PARA LA TOMA Y ANALISIS DE ADN DE EMBRIONES EXTRACORPORALES

(A) RENUNCIA A LOS DERECHOS DE DONANTE.- Cualquier persona que done un gameto para fines reproductivos de una persona o personas que no sea el donante, el donante del gameto renuncia a todos sus derechos relacionados a la toma y análisis de la muestra de ADN de un embrión creado subsiguientemente utilizando el gameto donado.

(B) CONDICIONES PARA LA TOMA Y ANÁLISIS.- Previo a la toma y análisis de la muestra de ADN de un embrión extracorporal creado para propósitos reproductivos, la persona que tome o haga que se tome la muestra de ADN de dicho embrión deberá:

1. Hacer las divulgaciones requeridas por el Artículo 4 de esta ley a la persona o personas que tienen la intención de utilizar el embrión para reproducción; y

2. Obtener autorización por escrito de dicha persona o personas que cumplan con los requisitos del Artículo 6 de esta Ley.

(C) DIVULGACION DE RESULTADOS.- Los resultados de un análisis genético de una muestra de ADN de un embrión extracorporal deberán ser divulgados a la persona o personas que tienen la intención de utilizar el embrión para fines reproductivos.

PARTE VII.- DISPOSICIONES MISCELANEAS

ARTICULO 27.- OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD

Por lo menos una vez al año, toda persona que conserve una muestra de ADN individual identificable o récords individuales identificables que contengan información genética privada deberá notificarle a sus empleados sus responsabilidades al amparo de esta ley y las penalidades por violación a las mismas.

ARTICULO 28.- TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, DESCONTINUACION DE SERVICIOS

(A) ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN MUESTRAS DE ADN.- Cualquier persona que tenga en su posesión muestras de ADN identificables individualmente que tenga la intención de descontinuar un programa, negocio, empresa o servicio en el cual tales muestras de ADN fueron tomadas, almacenadas o analizadas o que tenga la intención de transferir el control de dicho programa, negocio, empresa o servicio a una persona que tenga la intención de utilizar dichas muestras de ADN para propósitos sustancialmente diferentes a aquellos que fueron autorizados al momento de la toma, almacenaje o análisis de dichas muestras de ADN deberá:

1. No menos de 45 días antes de la fecha de efectividad de la descontinuación o transferencia de control, enviar por correo a la última dirección conocida de cada fuente de muestra o al representante de la fuente de muestra informándoles a dichos individuos sobre el cambio planificado, y

a. En caso de que se intente descontinuar el servicio, dar al individuo la oportunidad de ordenar que la muestra de ADN sea devuelta al individuo antes de la fecha en la cual la descontinuación sea efectiva e informarle a los mismos la fecha en la cual dicha instrucción deberá ser recibida para que se cumpla con tal requisito; o

b. En caso de que haya la intención de hacer una transferencia de control, dar al individuo la opción de asentir al traslado, o requerir la destrucción o que se devuelva la muestra de ADN antes de la fecha de efectividad del traslado, e informarle al individuo la fecha en que dicho requisito deberá ser recibido para que el mismo sea ejecutado.

2. En caso de que no se reciba respuesta alguna de parte del individuo para la fecha especificada en el aviso, la persona que esté en posesión de la muestra de ADN:

a. En el caso de una descontinuación, deberá destruir dichas muestras de ADN; y

b. En el caso de una transferencia de control deberá:

1. Destruir dichas muestras de ADN, o

2. Remover todos los identificadores individuales de dichas muestras de ADN.

(B) RECORDS QUE CONTENGAN INFORMACION GENETICA PRIVADA.- Cualquier persona que tenga en su posesión récords identificados individualmente que contengan informacion genética privada, que tenga la intención de descontinuar un programa, negocio, empresa o servicio en el cual la información genética privada fue creada u obtenida, y cualquier persona que conserve récords que no sean récords médicos que contengan información genética privada, que tenga la intención de transferir el control de un programa, negocio, empresa o servicio en el cual la información genética privada fue creada u obtenida deberá:

1. No menos de 45 días antes de la fecha de vigencia de la descontinuación o transferencia de control, enviar un aviso por correo a la última dirección conocida de cada fuente de muestra o al representante de la fuente de la muestra en el cual informe a tales individuos acerca del cambio planificado, y

a. En caso de que la intención sea descontinuar los mismos, informar al individuo sobre:

1. Su derecho a pedir la devolución de los récords antes de la descontinuación e informarle la fecha en la cual tal directriz deberá ser recibida para ejecutar la misma, o

2. En caso de que se intente una transferencia de control, ofrecer el nombre de la persona que tendrá control de los récords después de la transferencia, e informar al individuo sobre su derecho a ordenar la devolución de los récords al mismo, o a la persona designada por dicho individuo, o a consentir a dicha transferencia.

2. Si no se recibe contestación del individuo para la fecha especificada en el aviso, la persona que esté en posesión de dichos récords:

a. En caso de descontinuación, deberá:

1. Destruir lo récords, o

2. Sellar y guardar en un lugar seguro los récords por no más de 3 años; o

3. En caso de que se piense hacer una transferencia, podrá proceder con el traslado del control de los récords.

PARTE VIII. CUMPLIMIENTO

ARTICULO 29. REMEDIOS CIVILES

(A) DERECHO PRIVADO DE ACCION.- Toda persona a la cual se le hayan violado sus derechos al amparo de esta ley, podrá incoar una acción civil por daños o un remedio equitativo según se dispone en esta artículo.

(B) JURISDICCIÓN.- Una acción para establecer responsabilidades al amparo de esta artículo podrá ser incoada en el Tribunal de Primera Instancia del lugar en donde reside el demandante.

(C) REMEDIOS.- En cualquier acción incoada al amparo de esta artículo, el tribunal podrá ordenar que la persona cumpla con las disposiciones de esta ley y podrá ordenar cualquier otro remedio justo que sea pertinente.

(D) RESPONSABILIDAD POR VIOLACIONES POR NEGLIGENCIA.- Toda persona que por negligencia tome una muestra de ADN en violación a esta ley, analice una muestra de ADN en violación a esta ley, o divulgue información genética privada en violación a esta ley, será responsable ante la fuente de la muestra por cada una de dichas violaciones en una cantidad igual a:

1. Cualquier daño real sufrido a causa de la toma, análisis, o divulgación, o $25,000, lo que fuera mayor; y

2. En todo caso en el cual dicha violación haya resultado en lucro o ganacias monetarias, se le impondrán daños punitivos montantes al triple del daño causado, a discreción del tribunal; y

3. En el caso de una acción exitosa para establecer responsabilidad al amparo de esta artículo, las costas de la acción conjuntamente con los honorarios razonables de abogado, según sean determinados por el tribunal.

(E) RESPONSABILIDAD POR VIOLACIONES INTENCIONALES.- Toda persona que:-

1. Mediante un pedido, uso de persuasión, amenaza, o bajo la promesa de una recompensa, intencionalmente induzca a una persona a tomar una muestra de ADN en violación a esta ley, a analizar una muestra de ADN en violación a esta ley, o a divulgar información genética privada en violación a esta ley, o

2. Intencionalmente tome una muestra de ADN en violación a esta ley, intencionalmente analice una muestra de ADN en violación a esta ley, o intencionalmente divulgue información genética privada en violación a esta ley, será responsable ante la fuente de la muestra por cada una de las violaciones en una cantidad igual a:

a. Cualquier daño real sufrido a causa de la toma, análisis, o divulgación o $50,000, lo que fuera mayor; y

b. Los daños punitivos hasta el triple del monto establecido por el daño original, a discreción del tribunal.que el tribunal permita; y

c. En el caso de una acción exitosa para establecer responsabilidad al amparo de esta artículo, las costas de la acción, conjuntamente con los honorarios de abogado razonables según sean determinados por el tribunal.

(F) LIMITES DE PRESCRIPCIÓN.- Con excepción del inciso (E), cualquier acción al amparo de este artículo deberá ser incoada dentro de los dos años de haber descubierto la violación alegada, o que debió de haber descubierto la misma.

ARTICULO 30.- PENALIDADES CIVILES Y REMEDIO DE INTERDICTO

Cuando el Departamento de Justicia o una parte interesada, tenga razón para creer que una persona está utilizando o está por utilizar cualquier método, acto o práctica en violación a las disposiciones de esta ley, y que dichos procedimientos serán en bien del interés público, podrán incoar una acción en contra de dicha persona para restringir, mediante una orden de interdicto provisional o interdicto preliminar o permanente, la utilización de dicho método, acto o práctica. La acción podrá ser incoada en el Tribunal de Primera Instancia en la cual la persona resida o tenga su lugar principal de negocio. El tribunal podrá emitir órdenes de interdicto provisionales o interdictos preliminares o permanentes, y emitir tales otras órdenes o decisiones que sean necesarias para evitar daños o remediar los daños sufridos por cualquier persona como resultado del uso o empleo de dicho método, acto o práctica en violación a esta ley. Si el tribunal determinare que la persona ha empleado un método, acción o práctica que sabía o debió saber que era en violación a esta ley, el tribunal podrá requerirle a dicha persona que pague una penalidad civil no mayor de $50,000 por cada una de dichas violaciones y también podrá requerirle a dicha persona que pague el costo razonable de la investigación y del litigio por dicha violación, incluyendo los honorarios razonables de abogado.

PARTE IX.- FECHA DE VIGENCIA Y APLICACIÓN.

ARTICULO 31.- APLICACION

(A) AUTORIZACIÓN PARA ANALIZAR MUESTRAS DE ADN TOMADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY.- Para cumplir con las disposiciones de esta ley, toda persona que antes de la fecha de vigencia de esta ley tenga en su poder una muestra de ADN identificable individualmente deberá, antes de llevar a cabo cualquier análisis genético en las muestra de ADN:

1. Efectuar las divulgaciones requeridas por el Artículo 4 inciso (c); y obtener una autorización escrita que cumpla con los requisitos del Artículo 10; o
2. Tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que la muestra de ADN ya no está ligada a ningún identificador individual.

ARTICULO 32.- CLAUSULA DE SALVEDAD

En caso de que el tribunal declarase alguna disposición de esta ley como inconstitucional, no afectará la vigencia de las restantes disposiciones.

ARTICULO 33.- VIGENCIA

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de lo Jurídico; y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1236, recomiendan su aprobación con las siguientes enmiendas:

En El Título:
Página 1, primera oración; eliminar "privacidad e".

En La Exposición de Motivos:
Página 1, línea 9; eliminar "de" y escribir "en".
Página 1, línea 10; luego de "garbanzos" escribir ",".

Página 1, línea 10;	luego de "Mendel" acentuar la palabra "este"
Página 1, línea 11;	luego de "herencia" eliminar ",".
Página 2, línea 2;	eliminar "nucleícos" y sustituir por "nucleicos".
Página 2, línea 9;	luego de "modernos" escribir ".".
Página 2, línea 9;	sustituir "se" por "Se" y "esta" por "está".
Página 2, línea 11;	luego de "creados" escribir ",".
Página 2, línea 24;	eliminar "privacidad e".
Página 2, línea 27;	sustituir "previniendo" por "anticipando".
Página 3, línea 9;	sustituir "prejuicio" por "perjuicio".
Página 3, línea 17;	sustituir "privacidad" por "intimidad".
Página 4, línea 1;	sustituir "privacidad" por "intimidad".
Página 4, línea 5;	sustituir "privacidad" por "intimidad".
Página 7, línea 18;	sustituir "Identificación Individual" por "identificable individualmente".
Página 8, línea 6;	intercalar "genético".
Página 9, línea 10;	sustituir "ver" por "verificar".
Página 11, línea 16;	acentuar la palabra "garantías".
Página 11, línea 18;	sustituir "autorizado" por "dispuesto".
Página 12, línea 12;	sustituir "instalación" por "entidad".
Página 12, línea 17;	sustituir "al amparo de" por "según lo dispuesto por.
Página 12, línea 20;	sustituir "puede" por "podría".
Página 13, línea 3;	sustituir "desautorización" por "de autorización".
Página 13, línea 8;	luego de "10" añadir "de esta ley".
Página 14, línea 7;	sustituir "describirse" por "describir".
Página 16, línea 20;	sustituir "habia" por "haya".
Página 18, entre línea 13 y 14;	añadir un inciso 4 al Artículo 3 para que lea : "4. La información genética se obtenga como lo dispone la ley 175 del 24 de julio de 1998, conocida como "Ley del Banco de Datos del ADN de Puerto Rico"".
Página 18, línea 15;	sustituir "el" por "al".
Página 20 línea 3;	sustituir "esta artículos" por "este artículo".
Página 21, líneas 3 y 4;	sustituir "a las agencias estatales o municipales de orden público" por " al Instituto de Ciencias Forenses".
Página 21, línea 8;	sustituir "La" por "Dicha".
Página 21, entre línea 12 y 13;	añadir un inciso 4 al Artículo II para que lea : "4. Se realice según lo dispone la Ley 175 del 24 de julio de 1998, conocida como "Ley de Banco de Datos de ADN de Puerto Rico".
Página 21, línea 16;	después de la palabra "recolección" eliminar "," y sustituir por "y".
Página 22, línea 1;	sustituir "Se demuestre" por "Se demuestre luego de una vista,".
Página 22, línea 15;	eliminar "previto" y sustituir por "previsto".
Página 22, línea 17;	sustituir "Instituto de Ciencias Forenses" por "Departamento de Salud".
Página 23, línea 2;	eliminar ";" y sustituir por ".".
Página 23, línea 3;	eliminar "Protocolo" y sustituir por "El protocolo" y luego de "investigación" insertar ":".
Página 24, entre líneas 17 y 18;	sustituir "Instituto de Ciencias Forenses" por "Departamento de Salud".
Página 25, línea 12;	sustituir "Instituto de Ciencias Forenses" por "Departamento de Salud".
Página 26, línea 2;	sustituir "infromación" por "información".
Página 26, línea 5;	sustituir "psoibilidad" por "posibilidad".
Página 26, línea 8;	sustituir "obteber" por "obtener".
Página 26, línea 20;	sustituir "Instituto de Ciencias Forenses" por "Departamento de Salud".
Página 34, líneas 17 a la 20;	intercalar líneas.

Página 35, línea 16;	eliminar espacio entre "transferencia" y "control".
Página 35, líneas 16 a la 18;	intercalar.
Página 36, línea 9;	intercalar.
Página 36, línea 13;	intercalar.
Página 39, línea 5;	sustituir "cualguier" por "cualquier".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1236 tiene el propósito de proteger y garantizar la privacidad e intimidad de los ciudadanos creando regulación que limite y reglamente el uso de la información genética.

La Exposición de Motivos de esta pieza legislativa establece que el ADN se encuentra en el núcleo de cada célula, siendo el componente principal de los genes (segmentos lineales de ADN) y de los cromosomas, la estructura que transmite de por si las características hereditarias. A través del estudio del ADN se puede determinar las características de la persona, sus padres e hijos y determinar la tendencia, capacidad, debilidades, posibles padecimientos que pueda tener en el futuro, en fin, casi toda la información del cuadro familiar.

La genética moderna es una parte esencial de los estudios científicos modernos. Se está utilizando en multiplicidad de áreas para desarrollar a través de organismos especialmente creados, ropa, alimentos, estudio de enfermedades para lograr medicamentos más eficaces, etc.. La genética forense utiliza el ADN para identificar a los individuos envueltos en pleitos de filiación y en casos criminales como violaciones y asesinatos. Aún cuando se puede extraer ADN de otros tejidos o fluidos corporales como lo son la saliva, esperma, pelo, piel, etc. en este campo el medio más eficaz para su estudio es la sangre.

Como consecuencia de estos desarrollos tenemos que plantearnos forzosamente cómo podemos proteger a los individuos de las repercusiones nefastas que podría tener el que se divulgue información genética sin su consentimiento. Por ejemplo, supongamos que una persona vaya a solicitar un empleo, su posible patrono, a través de una simple muestra de sangre podría establecer posibles tendencias a enfermedades físicas o mentales que tenga esta persona y sus ascendientes, lo que produciría que el patrono discriminara contra éste.

Nuestra Constitución, en su Carta de Derechos, nos establece dos premisas esenciales que nos sirven de faro en esta cuestión. Primeramente, la dignidad del ser humano es inviolable y segundo pero no menos importante, la protección de la privacidad e intimidad. La Asamblea Legislativa tiene la facultad inherente en su ejercicio de los poderes delegados por el pueblo, a actuar para salvaguardar los derechos más fundamentales de los seres humanos en sociedad.

Por tal razón esta Asamblea Legislativa, anticipando las consecuencias nefastas que podría acarrear el uso indebido de la información genética y actuando responsablemente en el descargue de sus funciones más esenciales para con el pueblo, desea establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para salvaguardar nuestra privacidad e intimidad.

Con el propósito de conocer la opinión de las agencias relacionadas con esta medida, la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado celebró una audiencia pública el 27 de octubre de 1998.

Se recibieron ponencias del Colegio de Tecnólogos Médicos, Departamento de Salud, Colegio de Abogados, Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.

La Policía de Puerto Rico expresó que la genética moderna es una parte esencial de los estudios científicos modernos, específicamente la genética forense que utiliza el Acido Desoxirribonucleico (ADN) para identificar a los individuos envueltos en pleitos de filiación y en casos criminales como violaciones y

asesinatos. En este campo el medio más eficaz para su estudio es la sangre. El objetivo de esta medida es desarrollar mecanismos mediante los cuales se pueda proteger a los individuos de las repercusiones nefastas que podría tener el que se divulgue información genética sin consentimiento, salvaguardando así su privacidad e intimidad. También la Policía de Puerto Rico entiende que los propósitos a los cuales va dirigida la medida legislativa obedecen al deber de protección y seguridad del estado hacia la comunidad y las víctimas de delitos sexuales, la Policía de Puerto Rico, como organismo civil de orden público, considera que desarrollar un Banco de Datos de convictos por delitos violentos y sexuales mediante la prueba de identificación DNA es una herramienta útil que contribuye a facilitar nuestra obligación de brindar seguridad a todos los ciudadanos y procurar la más absoluta protección de todos sus derechos, en específico prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito.

El Departamento de Salud endosa la medida al reconocer que aún cuando la Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses aprobó la creación del primer Laboratorio Forense de DNA en Puerto Rico, todavía le falta la creación de un sistema legal, organizado, análisis tecnológicos para la determinación de DNA y ulterior de la data obtenida con el propósito de clasificación y comparación de la misma para el interés que bien se expresa en la Exposición de Motivos del P. del S. 1236.

El Colegio de Tecnólogos Médicos considera como algo crítico el que se establezcan los mecanismos para salvaguardar la privacidad e intimidad del ser humano tal como lo garantiza la Constitución en su Carta de Derechos. Los resultados de laboratorios que se obtienen mediante la utilización de la pruebas de diagnóstico molecular han extendido el alcance de la información que está disponible. Hasta muy recientemente, el laboratorio ha llevado a cabo una función de naturaleza descriptiva, en la cual se miden los eventos que se están llevando a cabo mediante la evaluación de parámetros químicos, hematológicos, bacteriológicos o inmunológicos. Las pruebas que incorporan la metodología de la genética molecular permite que el laboratorio modifique su función y se convierta también en una naturaleza predictiva. Utilizando estas pruebas se puede proveer información sobre eventos que puedan ocurrir en el futuro. Esta nueva metodología provee resultados que dan una indicación de si el paciente puede estar en riesgo de enfermedad. Amplía además el campo de las consideraciones éticas y la necesidad de consejería genética como parte inseparable de los procedimientos del laboratorio. La información que provee la biología molecular nos obliga a reflexionar y se hace necesario establecer límites de manera tal que no se ponga en riesgo la privacidad e intimidad del ser humano mediante el uso indebido de la información genética evitando que se violenten los mismos. Podrían convertirse en una amenaza por el enorme potencial de discrimen que resultaría si estos resultados llegaran a manos indebidas tales como patronos, casas aseguradoras, planes médicos, etc.

Por su parte la Comisión de Derechos Civiles mencionó que en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 8 dispone que: "*toda persona tiene derechos a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar*". Esta sección junto con el principio de inviolabilidad del ser humano, contenido en la primera sección del referido artículo, es la fuente en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la intimidad, derecho fundamental que goza de la más alta jerarquía en nuestro sistema constitucional. Puerto Rico Telephone Co. v. Martínez Cardona, 114 D.P.R. 328 (1983); Figueroa Ferrer v. E.L.A. 107 D.P.R. 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975) En nuestra escala de valores el derecho a la intimidad ocupa un altísimo lugar.

La Comisión de Derechos Civiles endosa la medida por considerar que la misma toma en consideración las garantías constitucionales.

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de lo Jurídico; y la de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del P. del S. 1236 con las enmiendas contenidas en este informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2092, y se da cuenta de un informe de las Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, sin enmiendas.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para enmendar el Artículo 3 de la Res. Conj. Núm. 209 de 24 de junio de 1988, que autorizó y aprobó la venta de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, a fin de aumentar la cantidad del producto neto de dicha venta a ser aportada al Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997 autorizó al Comité Negociador de la Venta de los Bienes de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, en adelante "el Comité Negociador", a llevar a cabo todos los procesos de negociación necesarios o convenientes, conducentes a vender todos o parte de los bienes de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, en adelante, "la Autoridad", y sus subsidiarias, sujeto a la aprobación del Gobernador y de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

De acuerdo con las disposiciones de dicha Ley, el Comité Negociador en su informe del 27 de mayo de 1998 recomendó a la Junta de Gobierno de la Autoridad, en adelante, "la Junta", que aceptará la propuesta sometida por una subsidiaria de GTE International Telecommunications Incorporated, en adelante, "GTE Holdings", la cual a su vez es una subsidiaria indirecta de GTE Holdings, para adquirir una mayoría de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company, en adelante "la PRTC". El 24 de junio de 1998 la Asamblea Legislativa aprobó mediante la Res. Conj. Núm. 209 los términos y condiciones del Acuerdo de Compraventa de Acciones entre la Autoridad y GTE Holdings. El Artículo 3 de dicha Resolución dispuso que, del producto neto de la venta, la Autoridad aportaría la cantidad de $1,000 millones al Fondo de Desarrollo de Infraestructura.

La Res. Conj. Núm. 209, antes citada, aprobó la compraventa de las acciones de la PRTC de acuerdo con los términos y condiciones esbozados en el Acuerdo de Compraventa, y autorizó a su vez que dicho acuerdo pudiese ser enmendado con el consentimiento del Comité Negociador y la Junta, siempre y cuando dichas enmiendas, a juicio del Comité Negociador y de la Junta, no alteraran material y adversamente para la Autoridad los términos y condiciones de los Acuerdos de Compraventa.

El 25 de junio de 1998 Telefónica Internacional, S.A., en adelante, "TISA", presentó una oferta no solicitada para la compra de una mayoría de las acciones de la PRTC. El 3 de julio de 1998 el Comité Negociador decidió evaluar formalmente la oferta de TISA, e informó el 6 de julio de 1998, tanto a GTE Holdings como a TISA, los procedimientos que llevaría a cabo para hacer una determinación final en cuanto

a la privatización de la PRTC. Se le requirió a TISA y a GTE Holdings que sometieran sus ofertas finales el 8 y 15 de julio de 1998, respectivamente.

Luego de evaluar las ofertas finales presentadas por TISA y GTE Holdings de acuerdo con los criterios aplicables, incluyendo los factores contemplados en la Ley Núm. 54, antes citada, el Comité Negociador unánimemente recomendó la oferta revisada de GTE Holdings. La Junta aprobó la venta de las acciones de la PRTC a GTE Holdings de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta revisada. Bajo la oferta revisada el precio pagado por GTE Holdings por 51% más una de las acciones de PRTC subió de $375 a $443.7 millones y el total del producto que recibirá el Gobierno de la venta aumentó de $1,875 millones a $2,009 millones. El propósito de esta Resolución Conjunta es aumentar la cantidad del producto neto de la venta de las acciones de la PRTC a ser aportada al Fondo de Infraestructura de Puerto Rico, como resultado del aumento del precio de compra en la oferta revisada a GTE Holdings.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

"Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Resolución Conjunta Núm. 209 de 24 de junio de 1998, para que se lea como sigue:

Artículo 3.-Aplicación del Producto Neto.

(a) La Autoridad aplicará la porción del Producto Neto que reciba en la Fecha de Cierre de la siguiente manera:
   i. Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Aportará los primeros $1,000 millones al Fondo de Desarrollo de Infraestructura, el cual será utilizado exclusivamente para proveer facilidades de infraestructura relacionadas con los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas de albañal y otras mejoras necesarias;
   ii. Beneficios para los empleados. Depositará en una cuenta plica la cantidad que sea necesaria para satisfacer las obligaciones de la Autoridad de hacer contribuciones de capital a PRTC para cubrir deficiencias actuariales en los planes de retiro de PRTC y el costo de otros beneficios de empleados, según esbozados en los Acuerdos de Compraventa y;
   iii. El remanente, si alguno, se añadirá a la cantidad a ser contribuida al Fondo de Desarrollo de Infraestructura.
(b) La totalidad del Producto Neto recibido por la Autoridad y el Banco posterior a la Fecha de Cierre se aportará al Sistema de Retiro."

Artículo 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, previo el estudio y consideración de la R.C. de la C. 2092, recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El 30 de octubre de 1998 se radicó el R. C. del C. 2092 y fue referida a la Comisión Especial para Estudio y Trámite de Legislación Relacionada con la Autoridad de Teléfonos. Esta medida tiene el propósito de enmendar el Artículo 3 de la Resolución Conjunta Núm. 209 de 24 de junio de 1998; a los fines de aumentar la cantidad del producto neto de la venta para que sea aportada al Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA:

La Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997 autorizó al Comité Negociador de la Venta de los Bienes de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico a llevar a cabo los procesos de negociación necesarios o convenientes, conducentes a vender todos o parte de los bienes de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico y sus subsidiarias, sujeto a la aprobación del Gobernador y de la Asamblea Legislativa. Conforme a las dispocisiones de esta Ley, la Junta de Gobierno de la Autoridad aceptó la propuesta sometida por una subsidiaría de *GTE International Telecomunications Incorporated,* la cual es una subsidiaría de *GTE Holdings*, para adquirir una mayoría de las acciones de la *Puerto Rico Telephone Company.*

La Resolución Conjunta Núm. 209 aprobada el 24 de junio de 1998, dispone los términos y las condiciones del Acuerdo de Compraventa entre la *Autoridad y GTE Holding.* Asimismo, la Resolución Conjunta estableció que el acuerdo podía ser enmendado con el consentimiento del Comité Negociador y la Junta de Gobierno, siempre y cuando no alteraran material y adversamente las condiciones de la transacción. Una vez aprobada la Resolución Conjunta Núm. 209, se podujo una nueva oferta. La nueva oferta resultó en un cambio en los términos de la transacción, y su efecto fue de un aumento de $68.7 millones en el pago en efectivo y de $134 millones en el precio final que se pagará por la empresa. Sin embargo, las condiciones y términos de la transacción, en lo fundamental, no cambiaron.

Ante la posibilidad que esta cantidad adicional de dinero pueda ser suficiente para cubrir la cantidad necesaria para las necesidades de los planes de retiro de la empresa y dejar un remanente, esta medida pretende asegurar que toda cantidad por encima de los mil millones de dólares de producto neto que no sea necesaria para cubrir los planes de retiro, será también ingresada al fondo de desarrollo de infraestructura. De esta forma, se garantiza que este fondo no sólo tendrá al menos mil millones de dólares de capital sino que podrá tener un capital adicional.

Las opiniones del Departamento de Justicia, *Puerto Rico Telephone Conpany,* la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico sobre esta Resolución Conjunta concurren con la aprobación de la medida. Además, expresaron que los objetivos de esta medida son cónsonos con las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997, la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998 y la Resolución Conjunta Núm. 209 de 24 de junio de 1998. Por todo lo antes expuesto recomendamos la aprobación de la R.C. de la C 2092, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Charlie Rodríguez
Presidente
Comisión Especial para el Estudio los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2142, y se da cuenta de un informe de la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar las secciones 17 y 22 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, para corregir errores técnicos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998 enmendó varios artículos de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico"(la "Ley 25"). El propósito de dichas enmiendas fue, primordialmente, armonizar las funciones, poderes y facultades de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico ("ATPR") y el Banco Gubernamental de Fomento, respectivamente, luego de la venta de las acciones y transferencia de la operación de la Puerto Rico Telephone Company ("PRTC") a la empresa privada.

Mediante la Resolución Núm. 90-36, la Junta de Gobierno de la ATPR autorizó la transferencia de todos los activos de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico a la ATPR, para que ésta, simultáneamente, los transfiriera a su subsidiaria Corporación de Comunicaciones de Puerto Rico ("CCPR"). Estos actos fueron consumados en virtud de un acuerdo denominado "Transfer os Assets and Assumption of Obligations"de fecha 1 de mayo de 1990.

Posteriormente, con el propósito de continuar el proceso tendente a uniformar los servicios y procedimientos de las subsidiarias de la ATPR, su Junta de gobierno aprobó la Resolución Núm. 93-84, mediante la cual se ordenó la integración total entre la CCPR y la PRTC a partir del primero de enero de 1994.

Finalmente, a propósito de la integración antes señalada, el 28 de abril de 1994 la Junta de Gobierno de la ATPR ordenó mediante la Resolución 94-14 la transferencia de toda la propiedad (mueble e inmueble, tangible e intangible), activos, privilegios, derechos, permisos, licencias, etc. de la CCPR a la PRTC, convirtiéndose ésta en titular y sucesora en derecho de todos los activos de la extinta CCPR.

No obstante, al día de hoy aún existe un número considerable de propiedades inmuebles inscritas a favor de la CCPR o de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico en el Registro de la Propiedad, situación que no corresponde a la realidad extraregistral antes reseñada y, además, compromete la claridad y certidumbre de las operaciones de venta de las acciones de la PRTC.

Para atender esta situación, la Ley 94 creó en su Sección 17 un procedimiento destinado a facilitar la rápida inscripción de los bienes inmuebles antes mencionados a favor de la PRTC, su titular actual. Sin embargo, el lenguaje de dicha sección contiene ciertos errores técnicos que la presente medida intenta corregir. La presente Ley faculta a los Registradores de las distintas secciones del Registro de la Propiedad de Puerto rico a inscribir a favor de la PRTC cualquier inmueble inscrito o pendiente de inscripción a favor de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, o la CCPR. Dichos inmuebles obtendrán acceso al Registro mediante la certificación que crea esta Ley especial, sin que sea necesario el otorgamiento de ulteriores documentos o trámites adicionales. Con estas transferencias estamos actualizando la realidad registral para conformarla con la extraregistral. Esta Ley se interpretará de forma liberal para impartirle efectividad a esta intención legislativa.

Por último, la Sección 22 de la Ley 94 dispone que dicha Ley comenzará a regir inmediatamente después de la fecha de cierre de la compraventa de las acciones de la PRTC. No obstante, es preciso que las operaciones registrales antes señaladas queden perfeccionadas con antelación al cierre de la transacción de venta. Es por ello que la presente Ley aclara que el proceso de inscripción, vía la certificación que provee la Sección 17, tendrá vigencia inmediata después de la aprobación de la Ley 94.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 17 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, para que lea como sigue:

"Sección 17-Se renumeran los Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 23 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente, y se añade un segundo párrafo al Artículo 15 de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

Todos los bienes inmuebles y derechos inscribibles que a la fecha de vigencia de esta ley consten inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico o de la Corporación de Comunicaciones de Puerto Rico, serán transferidos en dicho Registro a favor de la PRTC, sucesora en derecho. La transferencia se efectuará mediante la presentación en el Registro de la Propiedad de una certificación. Esta certificación deberá contener la descripción registral del inmueble, su cita de inscripción, expresión del titular registral actual del inmueble, solicitud de transferencia del mismo a favor de la PRTC y el valor de la transacción. La certificación deberá estar suscrita por el Presidente o cualesquiera de los Vicepresidentes de la PRTC autorizados para expedirlas. Estas transferencias estarán exentas del pago de toda clase de derechos prescritos para la inscripción de documentos y demás operaciones en el Registro de la Propiedad."

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 22 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, para que lea como sigue:

"Sección 22-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de la fecha de cierre de la compraventa de acciones de la PRTC, con excepción de la enmienda consistente en la incorporación de un segundo párrafo al Artículo 15 de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, a que se refiere la Sección 17, cuya enmienda entrará en vigor inmediatamente después de la aprobación de esta Ley."

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, previo el estudio y consideración de la P. del C. 2142, recomienda la aprobación de la medida con la siguiente enmienda:

En el Texto Decretativo:
Página 3, línea 8 después de "suscrita" añadir "bajo juramento"

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El 16 de octubre de 1998 se radicó el P. de la C. 2142 y fue referido a la Comisión Especial para el Estudio y Trámite de Legislación Relacionada con la Autoridad de Teléfonos para su estudio y consideración. El P. de la C. 2142 tiene el fin de enmendar las secciones 17 y 22 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, con el propósito de corregir errores técnicos en relación al proceso de inscripción en Registro de la Propiedad de inmuebles de la antigua Autoridad de Comunicaciones y Corporación de Comunicaciones (CCPR), que mediante la ley han de pasar a ser propiedad de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC). La medida establece que la transferencia de registro se llevará a cabo mediante un mecanismo de certificación, sin necesidad de otorgamiento de documentos o trámites ulteriores. Del mismo modo se dispone que el proceso de inscripción de estas propiedades puede iniciarse de forma inmediata y no detenerse sujeto a la eventual finalización del proceso de compraventa de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC).

ANALISIS DE LA MEDIDA:

La integración total de la antigua Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico a la Autoridad de Teléfonos, y de sus subsidiarias operacionales la CCPR y la PRTC se completó en 1994. Parte de los

acuerdos de esta operación comprendían la transferencia de activos y la asunción de obligaciones. Sin embargo, aún existe un número considerable de propiedades inmuebles inscritas en el Registro de la Propiedad, a favor de la CCPR o la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. Esta situación no corresponde a la realidad extraregistral además de opacar la transparencia de los procesos de la venta de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC).

La sección 17 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, establece un procedimiento destinado a facilitar la rápida inscripción de los bienes inmuebles a favor de la PRTC. Sin embargo, el lenguaje contenido en la Ley tiene algunos errores técnicos que deben ser corregidos. La presente Ley faculta a los Registradores de la Propiedad de Puerto Rico a inscribir a favor de la PRTC cualquier bien inmueble inscrito o pendiente de inscripción a favor de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, o CCRP, mediante un proceso rápido por certificación. No es necesario el otorgamiento de documentos o trámites adicionales. La certificación deberá ser suscrita bajo juramento por el Presidente o los Vicepresidentes de la PRTC autorizados para expedirlas. Las transferencias estarán exentas del pago de derechos de inscripción. Asimismo, queda establecido que la transferencia de la titularidad puede proceder mientras se espera por el fin de la transacción del proceso de compraventa.

Las ponencias presentadas por el Secretario de Justicia y la Presidenta de la PRTC se expresan a favor de las enmiendas propuestas en este Proyecto de Ley. Como resultado del estudio y consideración de la medida se recomienda la aprobación con la enmienda sugerida.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Charlie Rodríguez
Presidente
Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la autorización al Cuerpo para que los medios de comunicación que así lo soliciten puedan entrar al Hemiciclo del Senado a tomar videos y fotos, no así para entrevistas directas con los Senadores.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales...

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Corregimos la moción. Solicitamos regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta del siguiente informe de Comisiones Permanentes:

De la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Continuo y Permanente del Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados un informe recomendando la aprobación del Proyecto del Senado 1428, con enmiendas.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida, Proyecto del Senado 1428 informada por la Secretaria, se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la medida.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1428, y se da cuenta de un informe de la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Continuo y Permanente del Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrá delegar parte de sus funciones y deberes a un operador privado; y establecer mecanismos para garantizar a Puerto Rico un servicio de acueductos y alcantarillados de calidad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante "la AAA", necesita una estructura más ágil, flexible y eficiente para el manejo del Sistema Estadual de Acueductos y Alcantarillados. Para convertir a la AAA en una corporación pública efectiva y fiscalmente saludable, es menester permitirle a su Junta de Directores utilizar los conocimientos y las experiencias de los recursos externos para mejorar la calidad y la confiabilidad de los servicios de suministro y procesamiento de agua.

Esta legislación tiene el objetivo de crear estructuras alternas que ayuden a renovar a la AAA a la vez que fomentan una mayor participación del sector privado en el abastecimiento y tratamiento del agua en Puerto Rico.

La aprobación de esta medida le permitirá a la Junta de Directores de la AAA delegar en un Operador Privado las facultades del Director Ejecutivo, de manera que la AAA se beneficie al máximo de la experiencia y agilidad de la administración privada, a la vez que se crean los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento cabal de los objetivos del contrato de administración.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 3.- Junta de Gobierno, Funcionarios.-

Los poderes de la Autoridad se ejercerán y su política general se determinará por una Junta de Gobierno en adelante llamada "La Junta".

El Gobernador de Puerto Rico nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, seis (6) de los nueve (9) miembros que compondrán la Junta; uno (1) de los cuales será el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ("el Banco") o un funcionario de la alta gerencia del Banco en quien éste delegue, quien representará el interés público del Gobierno Estatal; de estos, dos (2) recibirán nombramientos por el término de dos (2) años, dos (2) por tres (3) años y dos (2) por cuatro (4)

años. Según vayan expirando los términos de los cargos de los miembros de la Junta así nombrados, el Gobernador nombrará sus sucesores por un término de cuatro (4) años.

Toda vacante en los cargos de miembros de la Junta así nombrados se cubrirá por nombramientos del Gobernador, disponiéndose, sin embargo, que toda vacante que ocurra entre uno y otro de dichos nombramientos, se cubrirá por el Gobernador, dentro de un período de sesenta (60) días por el término que reste sin expirar.

De los tres *(3)* miembros de la Junta, uno será el Secretario de Transportación y Obras Públicas y los otros dos se elegirán mediante un referéndum que será supervisado por, y que se celebrará bajo el procedimiento que determine el Departamento de Asuntos del Consumidor en acuerdo con la Junta de Gobierno de la Autoridad, debiendo proveer la Autoridad las facilidades y recursos necesarios a tal fin. La Autoridad instrumentará el referéndum de acuerdo con el procedimiento que se determine. Estos dos *(2)* miembros representarán el interés del consumidor, y no serán empleados o funcionarios de la Autoridad ni miembros de un organismo, director central o local de un partido político, que incluirá todas las personas trabajando activamente para el partido, o persona alguna que esté directamente relacionada con las uniones de la Autoridad.

El término de los cargos de estos dos *(2)* miembros será uno *(1)* por dos *(2)* años y el otro por tres *(3)* años y hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos. Según vayan expirando sus cargos se elegirán sus sucesores por un término de cuatro *(4)* años.

Toda vacante que ocurra en los cargos de estos miembros también se llenará en la misma forma dentro de un período de 120 días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante por el término de cuatro *(4)* años.

Los miembros de la Junta que fueren funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado no recibirán compensación por sus servicios. Los demás miembros tendrán derecho a una dieta de veinticinco (25) dólares por cada día de sesión a que concurran o por cada día en que realicen gestiones por encomienda a la Junta de su Presidente.

La Junta designará su Presidente y su Vice Presidente. Cuatro (4) miembros de la Junta constituirán quórum para conducir los negocios de ésta y para cualquier otro fin y todo acuerdo de la Junta se tomará por no menos de cuatro *(4)* de dichos miembros.

La Junta seleccionará, nombrará, fijará la compensación de y podrá destituir al Director Ejecutivo, al Secretario, al Tesorero y al Contralor **[, disponiéndose que]**. *Según se dispone en esta sección,* la Junta podrá delegar parte de sus facultades en el Director Ejecutivo quien será el funcionario principal de la Autoridad y será responsable a la Junta por la ejecución de su política general y por la supervisión general de las fases operacionales de la Autoridad *;disponiéndose, sin embargo, que la Junta, a su opción, podrá otorgar uno o más contratos a un Operador Privado que podrá ser una persona natural o jurídica o con aquellas entidades que la Junta determine estén calificadas para asumir la administración y la operación del Sistema Estadual de Acueductos y el Sistema Estadual de Alcantarillados y todas aquellas propiedades de la Autoridad según se dispone en las Secciones 4(d) y 4(f) de esta Ley, y podrá, en la consecución de tales contratos, delegar cualesquiera de las facultades que la Junta pueda delegar al Director Ejecutivo, a tal Operador Privado. En caso que la Junta delegue sustancialmente todas las facultades que puede delegar al Director Ejecutivo, a un Operador Privado, entonces, la posición del Director Ejecutivo podrá permanecer vacante. Si la Junta así decide contratar para la administración y la operación de todo o sustancialmente todo el Sistema Estadual de Acueductos y el Sistema Estadual de Alcantarillados y cualquier otra propiedad de la Autoridad, según se dispone en esta sección, el contrato entre tal Operador Privado y la Autoridad deberá establecer la prestación de una fianza a favor de la Autoridad; designar un Director de Operaciones, quien deberá ser un empleado o agente de tal Operador Privado, y quien será la persona responsable de supervisar y administrar todas las facultades de la Junta que fueran delegadas por contrato a tal Operador Privado, y de la supervisión general de las fases operacionales de la Autoridad, y tales funciones adicionales que la*

Junta le pueda delegar por contrato de tiempo en tiempo. El Operador Privado y su Director de Operaciones no serán, ni serán considerados como una entidad pública, un patrono público o un empleado público, según se definen en esta Ley o en cualquier otra ley o reglamento.

Disponiéndose que, si la Junta así decide contratar para la administración y la operación de todas o sustancialmente todas las propiedades de la Autoridad con un Operador Privado según se dispone en esta sección, la Junta también deberá designar un Administrador de Contrato, que podrá ser una persona natural, otra agencia o autoridad gubernamental o una entidad o persona jurídica privada, que será responsable de supervisar y auditar las funciones y actuaciones del Operador Privado y de informar sobre éstas de tiempo en tiempo a la Junta, y de llevar a cabo las funciones que la Junta pueda asignarle de tiempo en tiempo. Independientemente de lo anterior, la Junta no podrá delegar, *por contrato o de cualquier otra forma,* las siguientes funciones:

(a) la aprobación del presupuesto;
(b) la ratificación, enmiendas o estipulaciones relativas a los convenios colectivos;
(c) la aprobación del Plan de Mejoras Permanentes;
(d) la aprobación de solicitudes de financiamiento para el Programa de Mejoras Permanentes;
(e) el Plan de Retribución personal;
(f) la contratación de firmas de auditoría;
(g) la aprobación de planes y de criterios de privatización;
[(h) el nombramiento del Contralor y la asignación de sus funciones y responsabilidades;]
[(i)] (h) la aprobación de la venta o disposición de alguna otra forma de bienes raíces; disponiéndose, que la Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo, o en algún otro funcionario de la Autoridad, la firma de las escrituras o algún otro documento que legalice la venta o disposición;
[(j)] (i) la aprobación de estructuras tarifarias o cambios a éstas y la imposición de derechos, rentas y otros cargos por el uso de las facilidades o servicios de la Autoridad; y
[(k)] *(j)* la aprobación de reglamentos y cambios o derogación de éstos **[, y**
(l) la aprobación de cambios a la estructura organizacional de la Autoridad].

El Director Ejecutivo, *o el Operador Privado a través de su Director de Operaciones, según fuera el caso,* tendrá control general administrativo de todos los demás funcionarios y de todos los demás empleados y agentes de la Autoridad; tendrá la facultad de nombrar y destituir todos los empleados y agentes **[y]** ; tendrá la facultad de suspender otros funcionarios hasta tanto la Junta actúe en relación a sus recomendaciones para la destitución; *y podrá aprobar cambios a la estructura organizacional de la autoridad, todo esto según determine la Junta de tiempo en tiempo.*

El Director Ejecutivo, *o el operador privado a través de su Director de Operaciones, según fuera el caso,* someterá informes mensuales y anuales a la Junta relativos al estado y actividades operacionales y financieros de la Autoridad y ejercerá todos aquellos otros deberes y obligaciones en adición a los aquí indicados, que la Junta determine de tiempo en tiempo.

Todas o parte de las funciones y responsabilidades del Secretario y el Tesorero también podrán ser delegadas por contrato al Operador Privado y, a opción de la Junta, cualquiera de estos puestos podrá permanecer vacante. El Administrador del Contrato podrá asumir todas o parte de las funciones y responsabilidades del Contralor, si así lo determina la Junta, en cuyo caso la posición del Contralor podrá permanecer vacante.

Los **[otros]** *demás* funcionarios de la Autoridad ejercerán los deberes y obligaciones inherentes a sus cargos y además aquellos otros deberes específicos según la Junta determine de tiempo en tiempo, *sujeto a la determinación de la Junta de contratar con un Operador Privado, y de designar un Administrador de Contrato, que asuma todas o parte de estas funciones y responsabilidades según se describe en esta sección.*

A menos que la Junta determine otra cosa, los funcionarios nombrados por la Junta tendrán el poder de delegar en otras personas la facultad de sustituirlos durante cualquier período de ausencia necesaria o de

incapacidad para actuar."

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Contínuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, previo estudio y consideración del P. del S. 1428 recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 1	Antes de la línea 1 insertar: "Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, para que se lea como sigue: Sección 1.-Título abreviado;definiciones (a) ... (h) La palabra "Contralor" significará a los fines de esta Ley, el Contralor Interno de la Autoridad."
Página 2, línea 1	Tachar "Artículo 1.- " y sustituir por "Artículo 2.-"
Página 2, línea 7	Tachar "seis (6)" y sustituir por "cinco (5)"
Página 2, líneas 7 a 10	Tachar "uno (1) de los cuales será el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ("el Banco") o un funcionario de la alta gerencia del Banco en quien éste delegue, quien representará el interés público del Gobierno Estatal;"
Página 2, línea 11	Tachar "dos (2) por cuatro " y sustituir por "uno (1) por cuatro"
Página 3, línea 1	Tachar "tres (3) miembros de la Junta, uno será" y sustituir por "cuatro (4) miembros restantes de la Junta, los cuales serán el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ("el Banco") o un funcionario de la alta gerencia del Banco en quien éste delegue, quien representará el interés público del Gobierno Estatal,"
Página 3, línea 20	Tachar "de veinticinco (25) dólares" y sustituir por "razonable"
Página 3, línea 21	Tachar "a la Junta de su Presidente." y sustituir por "de la Junta o de su Presidente. La Junta queda facultada para establecer la dieta mediante reglamento al efecto."
Página 4, línea 1	Tachar "Cuatro (4)" y sustituir por "Cinco (5)"
Página 4, línea 3	Tachar "cuatro (4)" y sustituir por "cinco (5)"
Página 4, líneas 9 a 22	Tachar todo su contenido.
Página 5, líneas 1 a 15	Tachar todo su contenido y sustituir por: "de la Autoridad. La Junta, a su opción, podrá otorgar uno o más contratos a uno o varios operadores privados que podrán ser persona natural o jurídica o con aquellas entidades que la Junta determine estén calificadas para asumir, total o parcialmente, la administración y la operación del Sistema Estadual de Acueductos, el Sistema Estadual de Alcantarillados y todas aquellas propiedades de la Autoridad según se dispone en las Secciones 4(d) y 4(f) de esta Ley. En la otorgación de tal o tales contratos, la Junta podrá delegar a uno o varios operadores privados cualesquiera de las facultades que la Junta pueda delegar al Director Ejecutivo. En caso de que la Junta delegue a uno o varios operadores privados todas las facultades que puede delegar al Director Ejecutivo, entonces dicha posición quedará vacante.

Si la Junta decide contratar la administración y la operación de todo o parte del Sistema Estadual de Acueductos, el Sistema Estadual de Alcantarillados y cualquier otra propiedad de la Autoridad, según se dispone en esta Sección, el contrato entre tal o tales operadores privados y la Autoridad deberá establecer la prestación de una fianza a favor de la Autoridad, sujeta a la previa consulta con el Comisionado de Seguros. Además, se designará en el contrato un director de operaciones por cada operador privado, quien deberá ser un empleado o agente de éste. El director de operaciones será la persona responsable de supervisar y administrar todas las facultades de la Junta que fueran delegadas por contrato a uno o varios operadores privados. Además, estará a cargo de la supervisión general de las fases operacionales de la Autoridad, y de aquellas funciones adicionales que la Junta le pueda delegar por contrato de tiempo en tiempo.

Los operadores privados y sus respectivos directores de operaciones no serán considerados como entidad pública, patrono público o empleado público, según se definen en esta Ley o en cualquier otra ley o reglamento.

Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como un menoscabo a las facultades del Contralor de Puerto Rico para auditar las operaciones de la Autoridad, con el fin de constatar la legalidad de sus transacciones. Podrá, así mismo requerir documentos o testimonio a personas o entidades particulares, cuando ello fuere indispensable, al efectuar una auditoría o intervención en la Autoridad, o empresas que operan bajo contrato con la Autoridad incluyendo a los operadores privados y sus respectivos directores de operaciones, en aquellos asuntos relacionados con el contrato.

Tampoco esta Ley se interpretará como una limitación o renuncia al amplio poder investigativo de la Asamblea Legislativa.

Los contratos que suscriba la Autoridad con uno o varios operadores privados, deberán indicar expresamente que todos los documentos, tales como registros, cuentas bancarias y otros documentos relacionados con la operación de la Autoridad se mantendrá en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Si la Junta decidiera contratar para la administración y la operación de todas o parte de las operaciones y propiedades de la Autoridad con uno o varios operadores privados, según se dispone en esta Sección, la Junta designará un Administrador de Contrato, que podrá ser una persona natural, otra agencia o autoridad gubernamental o una entidad o persona jurídica privada, que será responsable de supervisar y auditar las funciones y actuaciones del operador u operadores privados, de informar sobre éstas a la Junta según ésta lo requiera, y de llevar a cabo las funciones que la Junta pueda asignarle.

En la eventualidad de que el Administrador de Contrato fuera una persona natural o entidad o persona jurídica privada, deberá prestar fianza a favor de la Autoridad, sujeto a la previa consulta con el Comisionado de Seguros."

Página 6, líneas 5 a 15 Tachar todo su contenido y sustituir por:

"(h) el nombramiento del Contralor y la asignación de sus funciones y responsabilidades;

(i) la aprobación de la venta o disposición de alguna otra forma de bienes raíces; disponiéndose, que la Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo, o en algún otro funcionario de la Autoridad, la firma de las escrituras o algún otro documento que legalice la venta o disposición;

(j) la aprobación de estructuras tarifarias o cambios a éstas y la imposición de derechos, rentas y otros cargos por el uso de las facilidades o servicios de la Autoridad; y

(k) la aprobación de reglamentos y cambios o derogación de éstos. **[, y**

(l) la aprobación de cambios a la estructura organizacional de la Autoridad.]"

Página 6, línea 16 — Tachar "el Operador Privado" y sustituir por "uno o varios operadores privados"
Tachar "su Director de Operaciones," y sustituir por "sus respectivos directores de operaciones,"

Página 6, línea 20 — Luego de "destitución;" insertar "responderá legalmente por dichas actuaciones;"

Página 6, línea 21 — Tachar "autoridad," y sustituir por "Autoridad,"

Página 7, línea 1 — Tachar "el operador privado" y sustituir por "uno o varios operadores privados"
Tachar "su Director de Operaciones," y sustituir por "sus respectivos directores de operaciones,"

Página 7, línea 2 — Entre "informes" y "mensuales" insertar "semestrales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, e informes"

Página 7, líneas 6 a 10 — Tachar todo su contenido

Página 7, líneas 13 y 14 — Tachar "un Operador Privado," y sustituir por "uno o varios operadores privados,"

Página 7, líneas 18 y 19 — Entre las líneas 18 y 19, insertar:
"Todo contrato que otorgue la Junta con uno o varios operadores privados requerirá que dicho o dichos operadores no tengan deudas con entidades gubernamentales; y que si las tuvieran deberán estar acogidas a un plan de pago. Además, se les requerirá tener al día sus cuentas y obligaciones con las entidades gubernamentales. También, se les requerirá cumplir con su responsabilidad contributiva con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico."

Página 7, línea 19 — Todo su contenido y sustituir por
"Artículo 3.-Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, para que se lea como sigue:
Sección 11.-Contratos de construcción y compra
Todas las compras y contratos de suministro o servicio, excepto servicios personales que se hagan por la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de sus obras,deberán hacerse mediante subasta. Disponiéndose, que cuando el gasto estimado para la adquisición o ejecución de la obra no exceda de veinte mil (20,000) dólares, podrá efectuarse tal gasto sin mediar anuncio de subasta. No será necesario, sin embargo, una subasta cuando:
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
En tales casos, la compra de tales materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios, podrán hacerse en mercado abierto en la forma usual y corriente en los negocios. La Autoridad se reservará el derecho de adjudicar la buena pro en una subasta pública a base de otras consideraciones distintas a la de precio.
Esta Sección no será de aplicación a las compras y contratos de suministro o servicio para la operación, mantenimiento, mejoras y reparación del Sistema Estadual de Acueducto, el Sistema Estadual de Alcantarillado o cualquier otra propiedad de la Autoridad, que realice uno o varios operadores privados contratados por la Autoridad.
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

En La Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1	
línea 4	Tachar "Directores" y sustituir por "Gobierno"
Página 2, párrafo 1	
línea 1	Tachar "Directores" y sustituir por "Gobierno"
Página 2, párrafo 1	
línea 2	Tachar "un Operador Privado" y sustituir por "uno o varios operadores privados"

En El Título:

Página 1, línea 1	-Entre "Para" y "enmendar" insertar "adicionar un nuevo inciso (h) a la Sección 1,"
	-Entre "Sección 3" y "de la" insertar "y la Sección 11"
Página 1, línea 4	Tachar "un operador privado" y sustituir por "uno o varios operadores privados"

ALCANCE DE LA MEDIDA

I. Introducción

La Resolución del Senado Número 771 aprobada por este Cuerpo Legislativo el 25 de agosto de 1997 (la "Resolución 771"), creó una Comisión Especial con la encomienda de estudiar, evaluar y darle seguimiento de forma contínua y permanente al funcionamiento administrativo, operacional y fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ("AAA"), y de los proyectos estratégicos de dicha Autoridad conducentes a viabilizar el programa de recuperación administrativa y financiera de esa corporación pública, según éste sea revisado de tiempo en tiempo.

La Resolución 771 delimita la encomienda de esta Comisión Especial así como su organización y facultad para realizar los trámites en el ámbito legislativo que sean necesarios para el cumplimiento con la finalidad del asunto que se le ha asignado.

II. Marco Conceptual

De la Exposición de Motivos de la medida se desprende que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante "la AAA", necesita una estructura más ágil, flexible y eficiente para el manejo del Sistema Estadual de Acueductos y Alcantarillados. Para convertir a la AAA en una corporación pública efectiva y fiscalmente saludable, es menester permitirle a su Junta de Directores utilizar los conocimientos y las experiencias de los recursos externos para mejorar la calidad y la confiabilidad de los servicios de suministro y procesamiento de agua.

III. Propósito de la Medida

El propósito del P. del S. 1428 es adicionar un nuevo inciso (h) a la Sección 1 y enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que la Autoridad pueda delegar parte de sus funciones y deberes a uno o varios operadores privados, de manera que la AAA se beneficie al máximo de la experiencia y agilidad de la administración privada, a la vez que se crean los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento cabal de los objetivos del contrato de administración.

IV. Análisis del Articulado y de las Enmiendas

Durante el proceso de audiencias públicas comparecieron el Ing. Perfecto Ocasio, Director Ejecutivo de la AAA, el Ing. Carlos Pesquera, Director Ejecutivo de AFI, los señores Fernando Pina, Director General de PSG; Héctor René Lugo, Presidente de la Unión Independiente Auténtica; Gadiel Figueroa, Presidente de la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA; Jorge A. Ríos Piñeiro, Presidente Saliente y Alejandro De Jesús, Presidente Entrante de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA; así como el Contralor de Puerto Rico, CPA Manuel Díaz Saldaña. La Junta de Gobierno de la Autoridad

compareció por escrito.

Del conjunto de enmiendas propuestas por los distintos componentes de la AAA, esta Comisión Especial habrá de incorporar las siguientes enmiendas por los fundamentos a ser explicados a continuación:

Se enmienda el Artículo 1 a los fines de aumentar de cuatro (4) a cinco (5) el número de miembros que constituirán quórum en la Junta de Gobierno. En vista de que la composición actual de la Junta es de nueve (9) miembros, el quórum de la Junta será la mayoría de la totalidad de sus miembros.

El P. del S. 1428 tal como fue radicado faculta a la Junta de Gobierno a otorgar uno o más contratos a **un** Operador Privado para que éste asuma la administración y operación del Sistema Estadual de Acueductos y del Sistema Estadual de Alcantarillados, así como todas aquellas propiedades dispuestas en las Secciones 4(d) y 4(f) de la Ley de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, la Junta de Gobierno solicitó que se enmendara este lenguaje para atender la posibilidad de que la Junta contratara con más de un operador privado. A tales efectos, se enmienda el Artículo 1 para que refleje la facultad de la Junta de contratar con uno o varios operadores privados, quienes administrarán las operaciones y propiedades de la Autoridad según disponga la Junta de tiempo en tiempo. Incluso, en la medida en que la Junta delegue a uno o varios de los operadores privados todas las facultades del Director Ejecutivo, dicha posición quedará vacante.

A sugerencias del Contralor de Puerto Rico, se añade una disposición a los efectos de que la Autoridad consulte con el Comisionado de Seguros previo a requerirle una fianza al operador u operadores privados. Además, se introduce lenguaje que reitera las facultades fiscalizadoras del Contralor en las operaciones de la Autoridad, así como de aquel o aquellos operadores privados que sean contratados por la Autoridad y de sus respectivos directores de operaciones, en los asuntos relacionados con el contrato de administración y operación de las facilidades de la Autoridad.

Durante las audiencias públicas, al Contralor se le preguntó sobre la posible existencia de un conflicto de interéres en la posición que ocupa el Secretario de Transportación y Obras Públicas como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad y la que ocupa como Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico. Esta preocupación fue levantada por el senador Charlie Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial, el senador Roger Iglesias, y el Sr. Héctor René Lugo, Presidente de la Unión Independiente Auténtica.

El Contralor de Puerto Rico señaló que no existe tal conflicto de interés toda vez que la persona que ocupa ambas posiciones es un funcionario público que en el desempeño de esos cargos no opera la Autoridad. Por otro lado, esta persona como miembro de la Junta de Goberno de la Autoridad tampoco tiene funciones ejecutivas exclusivas por ser la Junta un ente colegiado.

El Contralor de Puerto Rico es la persona idónea y capacitada para determinar la existencia o ausencia de conflicto de interés de un funcionario público en el desempeño de sus cargos. Por ello, esta Comisión Especial avala la opinión del Contralor de Puerto Rico de que no existe reparo alguno en que una misma persona ocupe la dirección ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y sea miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad.

Por otro lado, se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 40 a los fines de excluir al operador u operadores privados de no tener que cumplir con los procedimientos de subasta pública provistos en la Ley para la Autoridad en las compras y contratos de servicios que realice en cumplimiento del contrato o contratos susritos con la Autoridad.

El P. del S. 1428 introduce la figura del Administrador de Contrato, quien será responsable de supervisar y administrar todas las facultades de la Junta que fueran delegadas al operador u operadores privados. Además, se introdujeron enmiendas para disponer que la aprobación de esta medida no se interpretará como una renuncia de los poderes amplios de investigación y fiscalización de la Asamblea Legislativa.

Por las razones previamente expuestas, la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento Contínuo y Permanente al Funcionamiento Administrativo, Operacional y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, recomienda la aprobación del P. del S. 1428 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Charlie Rodríguez
Presidente
Comisión Especial"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicito que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con el Proyecto del Senado 1428.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1428, titulado:

"Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrá delegar parte de sus funciones y deberes a un operador privado; y establecer mecanismos para garantizar a Puerto Rico un servicio de acueductos y alcantarillados de calidad."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la Comisión Especial tuvo la oportunidad de celebrar dos audiencias públicas y atender un sinnúmero de enmiendas que fueron recomendadas a este proyecto y me place a nombre de la Comisión Especial solicitar en estos instantes que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, estamos en el Proyecto... ¿Ya entramos en el campo del Proyecto del Senado 1428?

SR. VICEPRESIDENTE: Eso es así.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, es que vamos a sugerir unas enmiendas y quisiéramos comenzar por ellas y es en la página 2, línea 7, tachar "9" y sustituir por "11". Tal como habíamos quedado con el Presidente, vamos a sugerir todas las enmiendas a la misma vez. En la página 3, línea 1 y 2 tachar "Transportación y Obras Públicas" y sustituir por "El Director Ejecutivo de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). En la página "3", entre las líneas "17" y "18" añadir lo siguiente: "Los restantes dos miembros de la Junta serán seleccionados de la siguiente forma: (1) Entre los empleados de la Autoridad que sean miembros de la unión y uno seleccionado por los empleados no unionados y gerenciales de la Autoridad. Estos serán elegidos por un término de cuatro años según vayan expirando los cargos los miembros de los Cuerpos que estos representan nombrarán sus sucesores." Página 4, línea 1, tachar "4" y sustituir por "6". Página 4, línea 3, tachar "4" y sustituir por "6". Página 4, línea "6", tachar "podrá delegar parte de sus facultades en el Director" y sustituir por "determinará las facultades del Director". Página 4, línea 17, tachar "la posición de Director Ejecutivo" y sustituir por lo siguiente: "El Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad de supervisar y asegurar el cumplimiento por parte del operador

privado de las responsabilidades que le fueron asignadas y mantendrá continuamente informada a la Junta del progreso de las gestiones realizadas." Página 5, línea 7, después de "." añadir los siguiente: "Los empleados y funcionarios de la Autoridad continuarán siendo empleados públicos para todos los efectos legales y disfrutarán de las prerrogativas, derechos, protección y garantías que cobijan a los empleados de agencias y corporaciones públicas. Al operador privado le serán aplicables todas las leyes y reglamentos relativas a la compra y adquisición de materiales y suministros y lo relativo a la conducta de los funcionarios que le son de aplicación a las instrumentalidades de gobierno y a las corporaciones públicas." En la página 5, líneas 10, 11 y 12, tachar "desde", también en la línea 10 hasta "responsable" y sustituir por "deberá encomendar al Director Ejecutivo la responsabilidad". Página 6, línea 2, después de añadir "clasificación y" y seguir como está en el proyecto. Página 6, líneas 5 y 6, tachar todo su contenido y sustituir por "h. El nombramiento del Contralor." Esta la dejamos fuera porque está dentro del informe que nos entregaron el señor Presidente. En la página 6, línea 19, después de "agente" añadir "cumpliendo con las leyes y reglamentos relativas al nombramiento, permanencia y despido de empleados de agencia y corporaciones públicas y negociar los convenios colectivos los cuales deberán ser ratificados por la Junta." En la página 6, línea 21, tachar "aprobar" y sustituir por "recomendar". Y en esa misma línea eliminar "todo esto según determine la Junta de tiempo en tiempo" y sustituir por "los cuales entrarán en vigor una vez aprobadas por la Junta." En la página 7, línea 8, tachar "Administrador de Contrato" y sustituir por "Director Ejecutivo". En la página 7, línea 14, tachar "y de asignar un Administrador de Contrato." Eso es todo, señor Presidente, estamos presentando tal como los acuerdos todas nuestras enmiendas de la Delegación del Partido Popular.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hay objeción a las enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Se van a debatir?

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Me gustaría hacer unos comentarios sobre las mismas. Lo que pasa es que con la forma que se ha presentado este proyecto, que es una forma veloz, rápida, se nos ha hecho imposible quizás poder comunicar al señor Presidente y a los miembros de la Mayoría cuál es la sustancia que tiene este contenido de estas enmiendas. Porque tienen que aprobar esto inmediatamente. Cuando este contrato apenas, si lo aprobaran hoy o si lo aprueba la Cámara vendría a ser después de enero, más sin embargo hay apuros no sé por qué.

Si usted mira, señor Presidente, estamos entregando activos del Gobierno, se lo estamos regalando prácticamente por un contrato, por unos años, a una empresa privada. Y lo que nosotros queremos es aquí primero que nada es que los que son parte responsable de que se opere bien lo que es esa agencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, esas personas que son los empleados adentro, que unos son gerenciales otros no son unionados, otros son unionados, tengan participación dentro de la Junta de Gobierno. Si le entregan todo a una empresa privada usted no le puede dar el poder de ser todo y de una Junta arriba velar por todo lo que pase abajo. Cuando usted hace miembros a los que trabajan dentro de esa corporación usted les está dando oportunidad a que lleve recomendaciones, sean celadores, ante la Junta que dirige esta Autoridad de las cosas que pasan. Aquí se le está dando un cheque en blanco sin darle unas responsabilidades más allá a los que son empleados de la Autoridad. Y yo creo que con esto que pretendemos, de que participen en la Junta, no se le hace daño a nadie.

Otra de nuestras preocupaciones y que presentamos aquí, es que aquí se le está dando un cheque en blanco y lo presentamos así, porque aquí habla siempre de Administrador de Contrato y nosotros creemos que el Director Ejecutivo tiene que seguir de una forma u otra fiscalizando y tener unas responsabilidades. O sea, usted no puede entregar, tras que le va a dar a la empresa privada un contrato que obtiene prácticamente todas las facultades, usted tampoco le va a negar al Director Ejecutivo que también pase sus responsabilidades y que de arriba la Junta de Gobierno sea meramente un observador o una que recibe recomendaciones. O sea, aquí se le está dando prácticamente toda la potestad, a la Junta ninguna, y al Administrador o al que ellos llaman, vamos a decir que ellos mismos tenían sus preocupaciones, no sé, operador, que ni siquiera es operador, es un administrador, pero que ellos mismos tienen dentro de sí sus preocupaciones, porque operador hay de plantas, operador hay en las plantas de filtración, en las plantas de tratamiento y entonces ponen, colocan el nombre de operador a todo lo que es la operación administrativa. Así que nosotros

creemos, señor Presidente, que con estas enmiendas, por lo menos mejoramos un poco el proyecto, aunque no estamos de acuerdo con el proyecto. Es todo señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Estamos debatiendo las enmiendas.

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a guardar nuestro turno de exposición para considerar la pieza en su totalidad según ha sido ya enmendada conforme a la aprobación a la moción que sometimos de la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. Solicitamos que se derroten las enmiendas del compañero.

SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción a las enmiendas. Aquellos que estén a favor de las enmiendas sometidas por el compañero senador Ramos Comas debieran decir que sí. Los que estén en contra que no. Derrotadas las enmiendas.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar autorización de poder utilizar el podium para dirigirnos a los compañeros.

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente y compañeros Senadores y Senadoras, tenemos ante nuestra consideración el Proyecto del Senado 1428. Su intención es enmendar la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con el propósito de autorizar a la Junta de Gobierno de esa autoridad para poder entrar en contratación con operadores, con uno o varios operadores privados para encargarse de las operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Es preciso contar con el aval de la Asamblea Legislativa, toda vez que la Ley Orgánica no le concede esa facultad a la Junta de Gobierno.

La razón por la cual se llega a someter este proyecto, es porque en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados desde hace muchísimos años se ha estado experimentando una deficiencia en sus operaciones que se traduce no tan sólo en problemas fiscales de esta agencia sino también en la insatisfacción por parte de nuestro pueblo de la función principal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que es la de suplir y distribuir el preciado líquido a todo nuestro pueblo.

Ante esa situación, el Gobernador de Puerto Rico en el 1993 se vio precisado a declarar un estado de emergencia en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eso se ha mantenido al día de hoy y durante los últimos cinco años se han inyectado cerca de 1,500 millones de dólares en proyectos de infraestructura, principalmente a esa Autoridad, de fondos del Pueblo de Puerto Rico. Tomando en cuenta que esta Autoridad se supone que pueda bastarse por sí misma y utilizar los propios recursos que pueda obtener por vía de financiamiento para expandir su infraestructura. Pero debido a los problemas serios que confronta el Gobierno de Puerto Rico, el Pueblo de Puerto Rico ha tenido que tomar prestado para los proyectos de mejoras.

De igual manera, para los próximos cinco años, comenzando el 1ro. de julio pasado, se proyecta una inversión de sobre 1,300 millones de dólares en la infraestructura. Durante este proceso también se ha estado examinando las operaciones de la Autoridad. Lo cierto es que hemos tenido ya dos modelos que se han utilizado y que no han sido efectivos.

El primer modelo, el tradicional, donde el Gobierno administra y opera la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La ineficiencia atribuible a errores cometidos por administraciones pasadas llevó a la Autoridad a la situación de emergencia en que se encuentra desde el 1993. Ese modelo no funcionó adecuadamente. Como resultado de esa mala experiencia se trajo un nuevo modelo y se aplicó un nuevo modelo al funcionamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y ese nuevo modelo fue el de traer a un operador privado para que compartiera responsabilidades en la dirección y operación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, conjuntamente con la gerencia de esa corporación pública.

Ese llamado monstruo de dos cabezas no ha funcionado, y la razón por la cual no ha funcionado es porque no le podemos entregar parcialmente la responsabilidad de operar una corporación pública a una entidad privada sin que también le demos los poderes necesarios para poder realizar esa facultad.

¿Cuál ha sido la experiencia? Donde notábamos que existía una resistencia entre la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la firma o empresa privada conocida como Professional Services Group (PSG), habían situaciones, inclusive, donde se ameritaba que para poder PSG realizar su tarea tenía que pedir autorización a la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, provocando una serie de problemas de comunicación retrasando el proceso, no le daba agilidad y de ahí que los problemas se continuaban manifestando. Un ejemplo sencillo: Una bomba se daña en el suministro de impulso de agua a una comunidad y para poder comprar las piezas o comprar la bomba, si ésta tenía que comprarse nuevamente, había que incurrir en un proceso engorroso de autorizaciones y de subasta para que se pudiese atender la

situación en ese lugar, en esa comunidad.

Resultado, la gente pasaba días, en algunos casos semanas, sin recibir el preciado líquido. Si a eso le suman, compañeros, de que ahora el Gobierno Federal ha hecho más estrictos los estándares de agua limpia en nuestra Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la situación, pues se agrava. He escuchado personas que dicen que hace 15 años no había problemas tan severos con el suministro de agua potable. Bueno, ciertamente hace 15 años la población era menor que la que teníamos ahora, la infraestructura no se encontraba deteriorada por la falta de mantenimiento en estos últimos 15 años, pero también las autoridades federales han hecho más estricto la aplicación de los controles de calidad de agua. Por eso notamos que cuando ocurre la turbiedad de nuestras aguas provocadas por intensas lluvias, las plantas de filtración de agua llegan a un punto en que tienen que detenerse porque la infraestructura no está adecuadamente preparada para atender esa situación, los químicos no dan el resultado necesario porque lo que se exige es un .5 de turbiedad. Y estoy utilizando la ecuación de forma más sencilla y no entrar en la ecuación científica. Y ya el Gobierno Federal a partir del próximo año va a requerir que en vez de un .5 sea un .3 por ciento, lo cual lo hace aún más severo.

Obviamente, hay problemas reales por la manera inadecuada en que se administró la Autoridad en el pasado para no atender la infraestructura con los estrictos estándares federales nuevos que se están aplicando que antes no se aplicaban, y con una dejadez operacional en la Autoridad que realmente provoca el gran malestar de parte de nuestro pueblo.

Así que hemos experimentado ya con dos modelos, con dos escenarios, no han sido exitosos. Ahora se propone un tercer modelo a través de esta legislación. El tercer modelo es donde la Autoridad pueda encomendarle a un operador privado o a varios operadores privados la operación total de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El gobierno sale de ser el que provee el servicio para ser el que va a fiscalizar el servicio que habrá de brindársele al pueblo. Esto en nada afecta la posición de nuestros empleados públicos en esa agencia. Continuarán siendo empleados públicos. Aquéllos que son permanentes serán atendidos conforme las leyes de personal a los empleados públicos y aquellos que son trabajadores unionados continuarán sujetos al convenio colectivo vigente o aquellos convenios colectivos que su unión pueda negociar con el patrono en el futuro.

Esta situación levanta sospechas de algunos, y ciertamente preocupación en este servidor, por la manera en que hemos visto que PSG no ha podido atender adecuadamente el manejo y operación de la Autoridad. Y pensábamos que si PSG no ha podido ser exitoso en los últimos tres años, ¿qué nos hace pensar que lo sería en los próximos dos o tres años? Lo cierto es que PSG señala que no ha sido efectivo porque no ha tenido el poder de realizar las operaciones sin la intervención de la gerencia de la Autoridad. Esta medida permitiría la contratación con PSG como operador exclusivo o como operador parcial de la Autoridad con todos los poderes. Ya no podría PSG levantar como excusa su incumplimiento en el desempeño de sus funciones por razón de que no tenía los poderes adecuados. La ausencia de esos poderes adecuados, la Comisión Especial ha podido constatar que efectivamente ha incidido en que PSG no haya podido cumplir.

Nosotros comprendemos que eso ha sido así. Aunque personalmente hubiéramos deseado que se hubiera visto el proceso de propuestas a nuevas compañías para poder operar, lo cierto es que entendemos también las recomendaciones que han hecho la Junta de Gobierno de la Autoridad, su Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo de AFI, de que es preferible dar esta oportunidad a PSG, que ya está dentro del sistema, otorgándole los poderes adecuados para que no tengan excusa alguna y así puedan desempeñarse adecuadamente. No podemos dejar de mencionar que PSG es una subsidiaria de una compañía multinacional francesa que ha tenido éxitos en la administración de sistemas de Acueductos y Alcantarillados similares al nuestro en el mundo entero. Pero que no han administrado en otras jurisdicciones sin los poderes como tuvieron que administrar durante los pasados tres años aquí en Puerto Rico. Por lo que estamos dispuestos a otorgar la facultad a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a su Junta de Gobierno, para que pueda conceder un contrato de operación total a una entidad privada o a varias entidades privadas.

Pero el proyecto que fue objeto de audiencias durante el lunes, 9 de noviembre y el miércoles, 11 de noviembre contó con la participación en estas audiencias públicas del Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, del Presidente o Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, del Director General de PSG en Puerto Rico, de los líderes sindicales Héctor René Lugo, de la Unión Independiente Auténtica; del Presidente de la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales, Gadiel Figueroa; del Presidente saliente y entrante de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA,

Jorge Ríos Piñero y Alejandro de Jesús; así como también del Contralor de Puerto Rico, el CPA Manuel Díaz Saldaña; y también contamos con la comparecencia por escrito de la Junta de Gobierno. Una vez atendidos estos distinguidos deponentes en audiencias públicas y discutido entre compañeros de Comisión hemos tenido que recomendar una serie de enmiendas que prácticamente hacen el proyecto nuevo y mejoran sustancialmente lo que es la intención del gobierno, lo que es la intención de la Asamblea Legislativa con la aprobación de esta medida. En primer lugar, enmendamos las definiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad para que se defina claramente la palabra Contralor, para que no surja confusión en la ley entre lo que es el Contralor Interno de la Autoridad y el Contralor de Puerto Rico.

En segundo lugar, enmendamos sustancialmente la Sección 3 de la Ley Orgánica de la AAA, para establecer que la Junta de Gobierno sí será de 9 miembros, de los cuales 5 serán nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado y los otros cuatro habrán de designarse como sigue: Uno será el Secretario de Transportación y Obras Públicas, tal y como ahora; el otro será el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, tal y como es ahora; y dos que representarán el interés público del gobierno estatal o el interés público en dicha Autoridad.

La diferencia que hacemos aquí es que con una ley que habíamos aprobado recientemente que integrábamos al Presidente del Banco como miembro de la Junta se había colocado en la parte donde el Gobernador tenía que someter su nombramiento al Senado. Y la realidad que es innecesario ello, porque la razón por la cual ocupa la posición en la Junta de Gobierno es por razón de su cargo como Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, posición que como todo sabemos aquí se somete al aval, al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Lo otro que hacemos es que enmendamos lo de las dietas, porque nos parecía que la dieta de 25 dólares a los miembros de la Junta era muy baja y ahora pues se hace un mecanismo que sea a tono con la situación fiscal de la propia agencia.

Por otro lado, también establecemos que el quórum tiene que ser de cinco miembros. La ley dispone que sea cuatro. Obviamente el quórum siempre debe ser la mitad mas uno, de los miembros que componen la Junta, de ahí que la enmendamos a cinco. Y luego entonces entramos en la parte fundamental para autorizar a la Junta a entrar en contratación con uno o varios operadores privados. La medida como fue sometida originalmente tuvimos que eliminar todo lo que allí señalaba para enmendarlo de tal manera, que quede claro lo siguiente: En primer lugar establecer claramente que la Junta de Gobierno de la AAA puede negociar no con un solo operador privado sino con uno o varios operadores privados. Que este operador privado podrá asumir las funciones del Director Ejecutivo de la Autoridad y que en caso de que se delegue a uno o varios de los operadores privados todas las facultades que se puede delegar al Director Ejecutivo de la AAA, como está contemplado actualmente en la Ley, entonces el cargo de Director Ejecutivo quedará vacante. Será innecesario porque las funciones las estaría realizando el operador privado.

También establecemos claramente que si se determina otorgar un contrato de operación a uno o varios operadores privados, ese operador o varios operadores privados deberán radicar o prestar una fianza a favor de la Autoridad, pero añadimos "sujeta a la previa consulta con el Comisionado de Seguros". También establecemos que en ese contrato se deberá requerir la designación de un Director de Operaciones por cada operador privado, quien deberá ser empleado o agente del operador privado. Este Director de Operaciones, que en el caso de la PSG estaríamos hablando del señor Fernando Pina, que es el Gerente de Operaciones de PSG en Puerto Rico. Esta persona que sea el Director de Operaciones será la persona responsable de supervisar y administrar las facultades que la Junta delegue en el operador o en varios operadores privados. Se puede dar la posibilidad que por cada operador privado que exista, habrá, no la posibilidad, habrá un Director de Operaciones. Se establece claramente que estos operadores privados no se van a considerar como servidores públicos, patronos públicos o empleados públicos. No son empleados públicos para fines de esta Ley.

También nos preocupaba la situación de donde quedaba el Contralor de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa ante el hecho de que la operación de la Autoridad estaría absolutamente en manos de uno o varios operadores privados. Fue por ello que tuvimos que enmendar la pieza para establecer lo siguiente: "Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como un menoscabo a las facultades del Contralor de Puerto Rico para auditar las operaciones de la Autoridad con el fin de constatar la legalidad de sus transacciones." Y de igual manera señalamos que tampoco esta Ley se interpretará como una limitación o restricción al amplio poder investigativo de la Asamblea Legislativa. De manera que no quede duda alguna que el operador u operadores privados estarán sujetos a la auditoría y fiscalización de parte del Contralor de Puerto Rico y que tampoco

por razón de que sus operaciones estén en manos de un ente privado la Asamblea Legislativa no tenga facultad para intervenir y requerir la comparecencia de los operadores privados para que le respondan al Pueblo de Puerto Rico.

También debo señalar que hemos enmendado la medida para exigir que el operador o los operadores privados tendrán que mantener sus registros, sus cuentas bancarias y otros documentos relacionados con la operación de la Autoridad, aquí en Puerto Rico, para que tanto el Contralor como la Asamblea Legislativa podamos realizar nuestra labor fiscalizadora en el buen uso de los recursos públicos.

También señalamos que como parte de estos contratos que se otorgan la Junta tendrá que designar a un Administrador de Contrato. Esta persona representa al Gobierno, a la Junta de Gobierno de la AAA para velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contractuales que haya asumido el operador privado o varios de los operadores privados. De manera, que es una especie de Ombudsman, es una especie de fiscalizador, este Administrador de Contrato que será empleado del Gobierno de Puerto Rico, de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura y responderá a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

De igual manera, señalamos que podría haber la posibilidad que el Administrador de Contrato fuera un ente privado. No se descarta, pero no se persigue eso. Si ese fuera el caso tendría que prestar una fianza. En la medida originalmente sometida por el señor Gobernador se pedía que la Junta de Gobierno pudiera delegar el nombramiento del Contralor Interno de la Agencia y la asignación de sus funciones y responsabilidades en manos del operador privado y también el proyecto contemplaba en su forma original de radicación que la Junta pudiese delegar en el propio operador privado, los cambios de estructura organizacional de la Autoridad. Nosotros en la Comisión entendimos que esos son dos poderes que no deben ser delegados a un operador privado. No podemos permitir que el Contralor Interno de la Autoridad lo designe el operador privado. Porque parte de la función del Contralor Interno de la Autoridad es fiscalizar el uso adecuado de los recursos y tiene que mantener una independencia de quien lo está operando ahora, que sería un operador privado.

Y por otro lado, tampoco podemos poner en manos del operador privado el que determine cual va a ser la estructura organizacional de la Autoridad, porque estaríamos dándole un cheque en blanco para que determine comoquiera un asunto que es un activo del Pueblo de Puerto Rico. Porque la Autoridad continúa siendo activo del pueblo, esta agencia no se está privatizando. Este no es el caso de la Puerto Rico Telephone Company, es un caso muy distinto. De ahí que entendimos que tal como se había sugerido en el proyecto como fue radicado no podíamos aceptarlo. De manera, que estamos restableciendo que la Junta no puede delegar el nombramiento del Contralor Interno ni tampoco puede delegar la aprobación de los cambios estructurales. El operador privado podrá hacer recomendaciones, como podrán hacer distintas personas que estén lidiando con la Autoridad, pero la decisión final tiene que ser de la Junta y hemos restablecido esos poderes.

De igual manera señalamos, que el operador privado tendrá facultades de nombrar y destituir a los empleados y agentes conforme las leyes de personal en el caso de los empleados públicos permanentes y conforme al convenio colectivo en el caso de los unionados. Pero encontramos que era necesario, y esto fue una muy buena sugerencia del Contralor, que ya varios técnicos de la Comisión nos habían alertado, que era necesario intercalar en el proyecto, de que el operador privado si puede nombrar y destituir y suspender funcionarios de la Autoridad, entonces también tiene que responder legalmente por dichas actuaciones. Porque si el operador privado no responde legalmente, pues creemos que no habría nada que pudiese mantener en control al operador privado en este amplio poder de destituir, porque entonces podría destituir sin tomar en cuenta la repercusiones económicas y legales, porque el Gobierno tendría que asumir el costo. Pues no, aquí lo estamos enmendando. El operador privado tendrá que responder legalmente por dichas actuaciones.

Lo otro que también hemos hecho es requerir que el operador privado o varios operadores privados a través de sus respectivos directores de operaciones, tendrán que someter informes semestrales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de cómo se encuentran las operaciones de la Autoridad. Eso nos quita la facultad de la Asamblea legislativa a través de sus comisiones, citar a funcionarios, operadores privados a darnos explicaciones más precisas. Pero sí se le exige ahora que sometan informes.

Por otro lado, también se solicita que se le sometan informes mensuales y anuales a la Junta. El proyecto radicado también hacía otra cosa que nosotros no compartimos. El proyecto radicado disponía que el

Secretario y el Tesorero de la Junta, o debo decir, corrijo, de la Autoridad, podrían ser delegados su nombramiento y contratación al operador privado. Así decía el proyecto radicado. Nosotros creemos que eso no puede ser. Eso debe permanecer en manos de la Junta. De hecho, la Junta de Gobierno recomendó que se eliminara también esa concesión de poder que se le estaba dando al operador privado. Porque el problema era que si podía hacerlo con el Secretario y Tesorero, no tan sólo la preocupación de la fiscalización adecuada, porque ya esto serían personas que responderían al operador, es también los empleados que actualmente laboran en las áreas de Tesorería y Secretaría. Podría darse el caso que pasara entonces a ser, ya no empleados públicos, sino empleados del operador privado y obviamente, no queríamos conceder eso porque eso trastoca lo que hemos dicho de que este proyecto en nada afecta los derechos adquiridos de aquellos trabajadores y empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Así es que toda esas enmiendas que en el proyecto original están en la página 7, línea 6 a la 10, las eliminamos en nuestra recomendación al Senado. Además de eso, señalamos algo que el contralor nos recomendó como una enmienda a este Proyecto y es que el operador privado que sea contratado que requiere que el contrato diga que ese operador u operadores privados no tienen deudas con entidades gubernamentales. Si PSG tiene una deuda asumida con la Autoridad de Energía Eléctrica de equis cantidad de millones de dólares, tiene que pagar la deuda o tener en ejecución un plan de pago que esté fielmente cumpliendo con él. Y esto es bien importante, porque de lo contrario, si no hacemos esto, la espiral de deuda de la Autoridad pudiera continuar aumentando sin verse nunca su final. También se va a requerir que tenga al día sus cuentas y obligaciones con las entidades gubernamentales. De manera que de aquí en adelante, cuenta que llega de una entidad gubernamental al operador privado, cuenta que el operador privado tiene que pagar. Y también se le requiere cumplir con su obligación contributiva en Puerto Rico, y cuando digo obligación contributiva no me refiero meramente al Departamento de Hacienda a nivel estatal, sino también a los gobiernos municipales. Y esto lo que hace es que recoge en esta Ley lo que es una orden ejecutiva del Gobernador y lo que es unas guías reglamentarias que ha adoptado el Departamento de Hacienda de que el Gobierno no habrá de contratar con ninguna persona, natural o jurídica, que tenga deuda contributiva con el Gobierno de Puerto Rico o no se haya acogido a un plan de pago el cual esté cumpliendo.

Finalmente, hubo una enmienda que recomendó el Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, y fue una enmienda a la Sección 11 de la Ley Orgánica de la AAA, para que no se aplique el operador u operadores privados el mecanismo de subasta que se le exige a la Autoridad. De manera que pueda tener un mecanismo más ágil el operador privado en el desempeño de sus funciones.

Le recuerdo a los compañeros Senadores, tanto a los que están en este Senado por primera vez, como aquéllos que llevan algunos años en este Augusto Cuerpo, que esto no es nuevo. Se hizo con Telefónica Larga Distancia, cuando se vendió y se mantuvo una presencia del Gobierno de Puerto Rico a través del control de unas acciones. Lo hicimos con la Puerto Rico Telephone Company para que pudiera tener mayor agilidad en su desempeño, en sus funciones, lo hicimos ahí también. Y lo hicimos con la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura. Obviamente, esto no significa que el operador privado va a poder hacer lo que le venga en gana, porque el Contralor de Puerto Rico estará auditando sus libros y el Senado de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa, estará haciendo lo propio. Y yo creo que es necesario en esta situación difícil que está la Autoridad, darle la mayor flexibilidad para que las compras se puedan hacer rápidas y se pueda atender las necesidades de nuestras comunidades.

Este es, compañeros, el proyecto que hemos sometido a su consideración con las enmiendas. Hubo un aspecto que discutimos, que fue levantado por el Senador Roger Iglesias, el señor Héctor René Lugo, Presidente de la Unión Independiente Auténtica y por este servidor, del posible conflicto de interés por el desempeño del cargo de Director Ejecutivo de AFI y del Secretario de Transportación y Obras Públicas en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Nos preocupaba esta situación y le hicimos la pregunta, no tan sólo al ingeniero Pesquera, que la hizo el senador Iglesias, y quedó en reflexionar sobre lo mismo, sobre ese asunto, pero se la hicimos a la persona que creo que más autoridad tiene para contestar esto, que es el Contralor de Puerto Rico. El Contralor de Puerto Rico señaló que no existe tal conflicto de interés, toda vez que la persona que ocupa ambas posiciones, entiéndase Director de AFI y miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad, por razón de ser Secretario de Transportación y Obras Públicas, es un funcionario público en el desempeño de esos cargos y no opera la Autoridad. Por otro lado, esta persona como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad, tampoco tiene funciones ejecutivas exclusivas por ser la Junta un ente colegiado.

El Contralor de Puerto Rico es la persona idónea y capacitada para determinar la existencia o ausencia de conflicto de interés de un funcionario público en el desempeño de sus cargos. Por ello la Comisión Especial avala la opinión del Contralor de Puerto Rico, de que no existe reparo, de que no existe conflicto de interés alguno en que una misma persona ocupe la dirección ejecutiva de la Autoridad para el financiamiento para de la infraestructura de Puerto Rico y sea a su vez miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad por las razones antes señaladas.

De manera que creemos que todos los aspectos esenciales relacionados con esta medida han sido debidamente atendidos por la Comisión Especial, por lo cual solicitamos la aprobación de la misma, según esta ha sido enmendada.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos A. Dávila López, Presidente Accidental.

- - - -

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Senador Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Ramos Comas tiene quince (15) minutos para su exposición.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, luego de escuchar al distinguido Presidente de este alto Cuerpo Legislativo, la verdad es que estoy más preocupado. Y tengo que estar más preocupado, porque él habla sobre el aspecto de unos hechos del pasado donde se vendió la Puerto Rico Telephone Company Larga Distancia y que el Pueblo de Puerto Rico se quedó con unas acciones. Entonces habla, como que se le dio una factura en blanco en la cuestión de la subasta.

Pero el caso de esta legislación es bien diferente. Es bien diferente, porque aquí no se está vendiendo. Aquí se están entregando unos activos del Pueblo de Puerto Rico a una empresa privada para hacer lo que ella crea mediante exista ese contrato. Si el contrato existe tres años y por eso se firma el contrato, son tres años donde se le está entregando el poder de una corporación pública a una empresa privada donde más allá, que yo creo que es anticonstitucional, se le da el derecho si ser funcionario público mediante una acción de la Legislatura a que esa persona pueda despedir empleados. Y se le da un derecho más allá, que es quien va a fiscalizar esos empleados. Y yo creo, señor Presidente, yo creo señor Presidente, que cuando vemos el ejemplo del señor Presidente, y lo compara con hechos del pasado, que se hicieron también a través de la Legislatura, no son los mismos.

También hay algo que se habló de la delegación del nombramiento de lo que es el auditor interno. Es que no podían hacer más, no se podía aceptar el proyecto donde el auditor interno también fuera el que fuera nombrado, ¿por quién? , por el señor que va a operar o administrar privadamente. Tenía que la Junta quedarse con algunos derechos. O sea, que cuando uno mira todo lo que estaba preocupando la legislación, no la mejora; sino que tiene que ser facultades que alguien tiene de alguna forma que intervenir, ¿para qué?, para que fiscalice a estos operadores.

Cuando uno mira este Proyecto, señor Presidente, es como decir que es una premiación al fracaso. El mismo señor Presidente de este alto Cuerpo ha dicho aquí, que no está convencido con las acciones de esta privatizadora. Y habla así, porque cuando la gente en los campos no recibe el agua, cuando la gente en el pueblo no recibe el agua y darle a esta compañía privatizadora todo lo que tiene que ver con la administración, pues sería como premiar la irresponsabilidad. Y digo la irresponsabilidad, porque yo escuchaba a los miembros del sindicato. Y los miembros del sindicato decían que cuando llegaba agua turbia a las plantas de filtración, ellos lo que hacían era que apagaban la planta, paralizaban toda la planta, ¿por qué?, porque tenían que entonces gastar todas las sustancias para mejorar que esa agua le llegara potable a la gente. Y para evitar el gasto de esa sustancia que hace que llegue el agua potable al pueblo, a la población, pues ellos mejor paralizaban la planta de filtración y así se evitaban gastos sin importarle cuánta gente se quedaba sin agua. Y esta compañía es la que estamos premiando en el día de hoy. Esta compañía, la PSG, es la que hoy la Legislatura de Puerto Rico le está entregando un cheque en blanco.

Yo digo, señor Presidente, que esto es una premiación a los que castigan el pueblo. Premiación a la irresponsabilidad y premiación al fracaso. Aquí se hizo una Comisión Especial para que estudiara la mala

administración que había en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ¿por qué?, porque ni estamos de acuerdo de la forma que se estaba dirigiendo a Acueducto ni tampoco cómo la PSG estaba dirigiendo los destinos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilados. En la actualidad ellos tienen de los 6,000 empleados, alrededor de 5,600 que ellos lo dominan en su totalidad. O sea, ellos se han convertido en supervisores de todos los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Aquí no hay excusa, ni se le puede echar la culpa a los que son empleados de la Autoridad, porque ellos han sido los supervisores últimamente de prácticamente todos los empleados sin tener autorización de la Legislatura de Puerto Rico. Cuando le preguntamos al señor Ocasio y se le preguntó al señor Pesquera, ¿mire? quién está dirigiendo la Autoridad? ¿cuántos ustedes supervisan? Prácticamente nos dijeron que más del 90 por ciento estaban supervisados por la PSG. ¿Qué ha pasado? Mire, señor Presidente, distinguidos miembros de la Mayoría y Minoría, lo que ellos han dicho es que se violó, se violó la ley, que se adquirieron unos derechos y se le dieron unos derechos por el Gobernador sin haber autorización alguna de la Legislatura.

Con este proyecto, señor Presidente, solamente se le está dando lo que podemos llamar alguna posición de ley a lo que ya violaron anteriormente. Se está tratando de hacer legal lo que ha sido ilegal por los últimos tres años. Entregaron el poder de la Autoridad sin la Legislatura de Puerto Rico haber obtenido su derecho de poder otorgar ese contrato o poder permitir ese contrato al Ejecutivo. Yo digo más, señor Presidente, esto es una premiación a no creer en la gente de Puerto Rico. Esto es una premiación a las personas que vienen de afuera contra las personas que vienen de aquí. Aquí ahorita hablaba el señor Presidente de subastas y estaba hablando de las subastas internas, pero el problema no es la subasta interna solamente, el problema aquí es algo que verdaderamente constituye un peligro a la democracia, que constituye un peligro a lo que debe ser una sana administración, a lo que debe ser la pulcritud en todas las acciones. Aquí los alcaldes si hacen una subasta mal hecha o si no cumplen con todos los reglamentos, son castigados por la opinión pública, o cuando más son castigados o llevados al Contralor, a Justicia, o a lo que sea, mas sin embargo en esta Ley, lo que se le está dando al Gobernador, es el poder de una empresa tan grande, como es la corporación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a que no tenga ni siquiera que contemplar en forma competitiva, cuáles personas pueden dirigirlas o ser operadores de ella. Aquí unilateralmente, en contra de los elementos o los principios más básicos de la democracia, estamos haciendo al Gobernador, que puede contratar al que él le diga a la Legislatura de Puerto Rico. Y en vez de nosotros investigar ese contrato que ya está firmado, que está en la oficina del Contralor y que todavía no es evaluado, en vez de nosotros analizarlos, antes de hacer esta legislación, nosotros estamos aprobando lo que el Contralor de Puerto Rico nos dijo ayer, que no podía decirme el tiempo que tenía para evaluar. Entonces le pregunto yo, ¿y usted va a hacer algunas recomendaciones? Bueno las haremos en su momento dado, pero no le puedo decir el tiempo, me decía el Contralor. Quiere decir que si en marzo del año que viene el Contralor de Puerto Rico hace un análisis, entonces hay que venir aquí a enmendar el proyecto. ¿Por qué? Porque tienen apuro en aprobar esto, no sé por qué. Esto parece un proyecto de amiguismo. Esto parece un proyecto de compromiso del Gobernador y no compromiso de esta Legislatura de velar por los intereses del Pueblo de Puerto Rico. Porque esta Legislatura no debe entregar cheques en blanco. Cuando menos, este proyecto debía decir, señor Presidente, cuando menos debía decir, que hubieran otras empresas, fueran locales o fueran de afuera, que vinieran a competir con la PSG, cómo entregarle a unos malos administradores, cómo entregarle a unos irresponsables que le niegan agua al pueblo, que paran las plantas, el poder de ser los administradores por varios años de lo que es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Yo presenté unas enmiendas, señor Presidente, para que se aumentara los miembros de la Junta, y pedimos dos miembros más. Y es porque ayer, cuando habían las vistas públicas, hubo unos señalamientos de la gente que trabaja en el "field", en la calle, de la gente que trabaja dentro de las oficinas, donde le decían al señor Presidente, y le decían a los miembros de la Comisión Especial, miren señores, esto está mal administrado, la PSG hace lo que le da la gana, la PSG cierra las plantas, la PSG cuando pasa el Huracán Georges, ¿usted sabe lo que hizo? Negó que empleados fueran a ayudar a otros municipios por no pagarle horas extras. Le negó el servicio al Pueblo de Puerto Rico, por no pagar horas extras, por tener mayores ganancias. Vienen a explotar al Pueblo de Puerto Rico, no vienen a servir. La consciencia social del servidor público, ustedes la están opacando con esta Ley. Están acabando con el servidor público puertorriqueño. Y eso sí es lamentable. Lamentable, porque trae unos nuevos hechos y no unos nuevos logros de la Legislatura de Puerto Rico. Porque cuando la Legislatura se convierte en entregar el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, deja de fiscalizar. Y pueden traer informes aquí, pero si ustedes lo primero que han hecho mal

es que solamente una persona puede competir. La PSG ya es la dueña. Hicieron lo mismo que cuando la Telefónica, que trajeron un proyecto ya que ustedes tenían la persona que le iban a vender. Aquí es peor, porque aquí ustedes no le están vendiendo. Aquí es peor, porque ustedes están regalando por tres años la administración de una corporación pública con todos los derechos, hasta despedir los empleados. Eso es increíble, como una persona que no es funcionario del Estado Libre Asociado ni de ninguna corporación del Estado Libre Asociado, tenga derechos constitucionales a despedir empleados. Están otorgando un cheque en blanco bien peligroso al Pueblo de Puerto Rico.

Yo lo que veo es y creo, señor Presidente, que ni siquiera se orientaron con los empleados. Ustedes no creen en la gente de Puerto Rico. Muy lamentablemente, el Gobernador no cree en la gente de Puerto Rico. Aquí hay ente jurídico, personas que podían competir para administrar si querían puertorriqueños para administrar esto, si lo que querían era que alguien lo cogiera y lo administrara, por qué no probaron con gente que tienen la capacidad que viven en Puerto Rico y que son celosos del servicio que hay que prestarle a Puerto Rico, no que aquí va a haber un saqueo de ganancias que va a ir hacia Francia, hacia Europa y ni siquiera las ganancias que van a tener se quedan aquí en Puerto Rico. O sea, que ni siquiera velaron, porque las personas que asumen la dirección por lo menos hagan inversiones en Puerto Rico, mantengan lo que son los empleados y mantengan vivo lo que son los comercios puertorriqueños. O sea, ni siquiera una garantía. Y esta gente que vienen de Francia tienen dos o tres corporaciones más. Yo le pregunto a todos ustedes que me digan si esa corporación le va a comprar a las corporaciones que son del mismo dueño. ¿Y cómo ustedes van a velar que no haya un conflicto de intereses si más allá, algo impropio e ilegal dónde esas corporaciones se conviertan, prácticamente, señor Presidente, en las que se van a beneficiar no solamente la de aquí, sino las de allá también.

Señor Presidente, si me puede decir el tiempo que me queda.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

- - - -

SR. VICEPRESIDENTE: Ya se le terminó su tiempo y le estoy dando la oportunidad para que redondee el pensamiento.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, creo prudente y sé que todos los compañeros de la Mayoría, aún los que voten en contra por cuestiones partidistas, no están a favor de esta Ley. Sé que ellos quisieran que cuando van a vender o a regalar o lo que quieran hacer porque son mayoría y aunque lo hagan mal tienen el poder, porque tienen unos votos aquí, yo estoy seguro que muchos quisieran que por lo menos se hubiesen subastado la dirección o la administración. Si no han visto esto bien. Pero, ¿qué pasa? El poder político del Ejecutivo opaca nuevamente al Poder Legislativo. Vuelvo y digo, señor Presidente, esto es un cheque en blanco y lo que se está premiando aquí muy lamentablemente es el fracaso. Lo que se está premiando aquí es la irresponsabilidad. lo que se está premiando aquí, sobre todas las cosas, es el abuso y la entrega contra los empleados que puede tener una persona que ni siquiera es funcionario del Estado Libre Asociado. Los despidos, la persecución puede venir de estas personas y muy lamentablemente esta Asamblea Legislativa entrega un cheque en blanco a unas personas que ni siquiera son puertorriqueñas. Muchas gracias, señor Presidente.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodriguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisimos hacer una presentación de la forma más forma más objetiva y consciente de nuestra responsabilidad que tenemos ante el Pueblo de Puerto Rico y quisimos evitar caer en el debate político de cuneta político, porque entiendo que eso no ayuda a nuestro pueblo, pero yo creo que es necesario aclarar varios puntos. En primer lugar, los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, continuarán con los mismos derechos y prerrogativas que le reconoce la Ley de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que es inmensa y que le reconoce los derechos, así como también los derechos que se le conceden por ley, por ser empleados públicos, aquéllos que así lo son, y los que son unionados por razón de las leyes que cobijan el derecho de la negociación colectiva y ésos continuarán con los mismos derechos que tienen hasta ahora. Nada cambia. Nada cambia. Y continuarán siendo empleados y no habrá que tomar acción disciplinaria contra ninguno de ellos si cumplen con las leyes,

las normas y reglamentos establecidas. Tanto en la Ley de Servicio Público como en los convenios colectivos. Segundo, estamos manteniendo las fiscalización adecuada a través del Contralor de Puerto Rico, a través de esta Asamblea Legislativa, a través de enmiendas que hemos hecho para impedir que el Contralor Interno pueda ser nombrado por el operador privado. A través de las enmiendas que hemos hecho para impedir que el Secretario o el Tesorero de la Autoridad puedan ser designados por el operador privado. Velando porque los recursos permanezcan aquí utilizando los mecanismos de que tienen que pagar sus deudas con el Gobierno de Puerto Rico y de que tienen que pagar su responsabilidad contributiva, tanto con el Gobierno Estatal como con los municipios, y eso lo estamos poniendo es la Ley.

Ahora, el compañero habla de que queremos entregar esto a los franceses. Pero, bendito sea Dios, ¿qué tiene que ver eso? Si cuando le vendieron TLD a los españoles, que se lo dieron en bandeja de plata a los españoles, los gobiernos anteriores del Partido Popular, ninguno levantó ese argumento ecúleo. Y más a los españoles, que no tan sólo saquearon esta tierra y mataron a nuestros indios, sino que nos tuvieron sojuzgados a los procesos políticos más absolutistas y tiránicos de la historia puertorriqueña. ¿Qué tiene que ver entonces que sean franceses? Y si hubieran sido rusos, y si hubieran sido los cubanos de Fidel, ¿estaría el compañero protestando? Lo cierto es que la Autoridad está "liquidá" porque el liderato del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes no supieron defender al Pueblo de Puerto Rico ante los desmanes de esa Autoridad, que hacía y deshacía como quería y nunca se hizo nada para fiscalizarlos adecuadamente. Que Rafael Hernández Colón siendo Gobernador de Puerto Rico aumentó las tarifas del agua y ni un centavo del aumento de las tarifas del agua fueron a atender la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Lo usaron para reclutar empleados ligados al Partido Popular, para convertir a la Autoridad en un refugio de empleados políticos ahijados del Partido Popular. Ni un solo centavo, señor Presidente y compañeros del Senado, del aumento tarifario, fue a la infraestructura.

Así es que yo le digo a los compañeros que no traten de evaluar esto desde el crisol político porque aquél que tiene tejado de cristal no debe tirarle piedras al vecino. Y todo este proceso lo hemos querido llevar dentro de un marco objetivo y de respeto pero no podemos permanecer callados cuando lo que recibimos de parte de lo que debe ser una minoría fiscalizadora responsable, sean simplemente ataques políticos. Por eso es que inclusive militantes del Partido Popular lamentan el pobre desempeño de la Minoría Popular en la Asamblea legislativa. Porque una cosa es politiquear y otra cosas es hacer argumentos sólidos, objetivos de beneficio al pueblo. Y ha habido carencia de eso en la consideración de esta medida.

Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, habíamos quedado que íbamos a tener un turno de rectificación, lo habíamos llamado. Y pedimos ese turno de rectificación, sabemos que el compañero tiene .....

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, no tenemos objeción alguna para que en el turno de rectificación se pueda rectificar el compañero del ataque político e innecesario que hizo en su presentación inicial.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo me remito al récord, nunca he hecho aquí ninguna ponencia ni he escrito algo aquí que sea de carácter de representar cunetas ni nada de eso. Siempre he hablado en el plano tanto personal como en el plano de amigo, muy caballerosamente y nunca, fui Representante a la Cámara, y nunca tuve que hablar con unos conceptos de herir a nadie. Pero sí puedo hablar de la Ley, y lo que dije bien claro lo voy a mantener y lo voy a rectificar. No se puede ofender, nadie, absolutamente nadie de la Mayoría, porque entregue un cheque en blanco a unas personas que durante tres años han demostrado que no han sido lo mejor. Y cuando no son lo mejor y se hace aquí una Comisión Especial para investigar cómo están administrando la Autoridad, eso quiere decir que no son eficientes. Y si no son eficientes ni son lo mejor, pues entonces cae, o en la irresponsabilidad o en no hacer las cosas bien. Y eso no es un ataque político, ¿entonces para qué se creó esta Comisión Especial, era porque las cosas estaban bien? ¿Era porque la PSG estaba dirigiendo bien el agua para la gente de nuestro pueblo, dándole el mejor tratamiento? ¿O era porque el Pueblo de Puerto Rico estaba angustiado, que no recibía este servicio en ningún sitio? Era porque había improvisación, era porque las cosas no se estaban haciendo como se debían hacer. Y eso no es un

ataque político. Yo le pregunto a la gente, como este artículo que hay aquí, señor Presidente, uno sólo traje, querellándose de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en un barrio, es un sector de Rincón. Tenemos otros ahí de Aguada, tenemos otros de San Sebastián, tenemos otros de Mayagüez, y no es por el Huracán Georges, es porque hay mala administración, porque no se atienden las cosas bien, porque no hay mantenimiento. Y eso es lo que nosotros hemos expresado. El defender el Pueblo de Puerto Rico no es hacer ataques aquí, despiadados, en contra de la Mayoría. El defender el Pueblo de Puerto Rico y decirle que es un contrato malo, que es una premiación a los que están castigando al Pueblo de Puerto Rico por no darle el líquido sagrado que se llama agua, eso no es nada malo, señor Presidente.

Me da mucha pena la actitud de que como que los estamos ofendiendo. No, lo que nosotros queríamos era traer una enmiendas para que el Pueblo de Puerto Rico tuviera las garantías de que ya que quieren regalar, entregar un activo del Gobierno por tres años, "regala'o", porque si usted mira la legislación que me digan qué fianza hay. Aquí se habló ahorita, señor Presidente, de que si había una demanda porque votaban a un empleado, la persona que es el operador o el administrador ahora de la Autoridad... Hasta la luz se va, señor Presidente.

Señor Presidente, ahorita se decía que si se botaba a una persona o se despedía una persona en forma injusta, fuera el operador el que tuviera que pagar por ser injusto al botar una persona del trabajo. Y yo me pregunto, ¿y cuando venza el contrato? Y falta un mes del contrato y todavía las cosas no ha determinado nada en un tribunal, ¿quién las va a pagar? Si esta gente se declarar en quiebra, dónde está la fianza, dónde están las garantías para sus empleados.

O sea, señor Presidente, mi turno de rectificación lo he hecho con mucho respeto y me remito al récord de lo que expresé anteriormente. Mis palabras han sido contra la PSG, que no le ha servido bien a Puerto Rico, que han sido irresponsables y que esto es una premiación al fracaso, y vuelvo y me mantengo, que han sido irresponsables y que esto es una premiación al fracaso y que se le está entregando un cheque en blanco a unas personas que ni siquiera conocemos bien.

Gracias, señor Presidente.

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la aprobación de este Proyecto se servirán decir que sí. En contra, que no. Aprobado el Proyecto.

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo escuché más o menos igual, si me permite dividir el Cuerpo.

- - - -

Se indican dudas sobre la votación de la anterior medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo la misma quince (15) votos a favor, por cuatro (4) votos en contra.

- - - -

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobado el Proyecto.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, pero no vamos a debatir.

SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor de las enmiendas al título se servirán decir que sí. Los que estén en contra que no. Aprobada.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Votación Final que incluya solamente el Proyecto del Senado 1428.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Es considerada en Votación Final la siguiente medida:

P. del S. 1428

"Para adicionar un nuevo inciso (h) a la Sección 1, enmendar la Sección 3 y la Sección 11 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrá delegar parte de sus funciones y deberes a uno o varios operadores privados; y establecer mecanismos para garantizar a Puerto Rico un servicio de acueductos y alcantarillados de calidad."

VOTACION

El Proyecto del Senado 1428, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 16

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

Total 6

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

- - - -

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobada la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita:

El senador Carlos Pagán González, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"El Senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire el Informe sobre el P. de la C. 1466."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Pagán González ha radicado una moción por escrito, en la cual solicita el retiro del informe sobre el Proyecto de la Cámara 1466. Solicitamos que esta moción se incluya en las mociones del Orden de los Asuntos del Día de hoy y se dé por leída y aprobada

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado un segundo Orden de Asuntos del día de hoy, solicitamos se comience con su consideración.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes:

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 545, sin enmiendas.

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1380 y 1413, con enmiendas.

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1414.

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento, Comercio Industrial y Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1908, sin enmiendas.

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al P. de la C. 1524, un informe, proponiendo su aprobación, con enmiendas.

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 1884, con enmiendas.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso e, de este turno, se da cuenta de un informe de conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 1524, proponiendo su aprobación con enmiendas. Solicitamos este informe se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1278 y la R. C. del S. 1185.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso a, de este turno, se da cuenta de una comunicación del Secretario de la Cámara, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas,

el Proyecto del Senado 1278 y la Resolución Conjunta del Senado 1185. Señor Presidente, hemos dialogado con los autores de las medidas y las comisiones que entendieron en las mismas y estamos en posición de solicitar la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara a ambas medidas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:

De la Secretaría de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, remitiendo firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, las R. C. de la C. 1856; 1927 y 1955.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especialesl del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1125, titulado:

"Para enmendar la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera", para disponer que puede establecerse quórum con por lo menos tres (3) funcionarios públicos o sus representantes autorizados en el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura, eliminar la entidad TROPICO de dicho Consejo, adscribir el Programa Pesquero a la Secretaría de la Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, enmendar el artículo 10 para variar la composición del Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 570, titulado:

"Para establecer la política pública que regirá los Festivales Playeros y actividades sociales análogas en Puerto Rico; facultar al Departamento de Recursos Naturales para que adopte los reglamentos, requisitos y mecanismos procesales para su celebración; asignar responsabilidades e imponer penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: No tiene enmiendas al título.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 866, titulado:

"Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", a los fines de aclarar el concepto de pequeño comerciante detallista cubierto por la excepción de dicho artículo aumentando a tres los negocios que un miembro puede poseer siempre que cada negocio tenga un volumen de ventas de un millón de dólares ($1,000,000) y no mas de siete (7) empleados, para formar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al Administrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones anuales en reconocimiento del status de estos grupos y cobrar por las mismas y; para que el dinero cobrado sea depositado en un fondo especial a ser utilizado por el Administrador para que pueda cumplir con sus responsabilidades de ley; y facultarlo para promulgar los reglamentos que fueren necesarios para poner en efecto las disposiciones de esta Ley."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1172, titulado:

"Para enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a fin de disponer expresamente la aplicación de esos artículos adicionados por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendados, así como los beneficios que establecen, a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los rangos de Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1236, titulado:

"Para proteger y garantizar la privacidad e intimidad de los ciudadanos, creando regulación que limite y reglamente el uso de la información genética."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2092, titulada:

"Para enmendar el Artículo 3 de la Res. Conj. Núm. 209 de 24 de junio de 1988, que autorizó y aprobó la venta de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, a fin de aumentar la cantidad del producto neto de dicha venta a ser aportada al Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Puerto Rico."

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción. Hay objeción, señor Presidente a la anterior medida. Ya nosotros hemos debatido anteriormente la medida que tiene que ver con la Telefónica, nuestro récord está claro.
SR. RODRIGUEZ COLON: El consumió el turno.
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero senador Ramos Comas.
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo que pasa es que la compañera había leído ya la otra medida, y habíamos objetado. La Delegación del Partido Popular mantiene su voto en contra de la venta de la Telefónica. Ya nuestros récords están claros aquí en la Legislatura de Puerto Rico y no vamos a argumentar, mantenemos nuestra oposición.
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez.
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la medida es muy sencilla. Lo que pretende es que, en primer lugar, los primeros mil millones producto de la venta de la Telefónica pasen al Fondo de Infraestructura, el Fondo de Desarrollo de Infraestructura, y luego se dispone que a beneficio de los empleados se habrá de depositar lo que esté por encima de los primeros mil millones de dólares, la cantidad que sea necesaria para satisfacer las obligaciones de la Autoridad de Teléfonos de hacer contribuciones de capital a la PRTC para cubrir deficiencias actuariales en los planes de retiro. Lo que ocurre es que, había la preocupación, de que si luego que se dieran los recursos para pagar el déficit actuarial en los planes de retiro de la Telefónica, ¿qué ocurría con el dinero que sobrara luego de haber atendido esta obligación? Pues se está enmendando para que si hubiera un remanente, después de haber atendido el déficit actuarial del sistema de retiro de los empleados telefónicos, se añada al remanente al Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Eso es lo que persigue esta enmienda, es muy sencilla, por eso solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor de la medida se servirán decir que sí. Aquellos que estén en contra no. Aprobada la medida.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el Proyecto de la Cámara 2142, titulado:

"Para enmendar las secciones 17 y 22 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, para corregir errores técnicos."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez.
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción al Proyecto.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿A las enmiendas, compañero?
SR. RAMOS COMAS: A todo, señor Presidente, objetamos, pero no hay problema, siga adelante.
SR. VICEPRESIDENTE: Bien.
SR. RODRIGUEZ COLON: No se va a debatir.
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción a las enmiendas, así se aprueban.
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén por la afirmativa se servirán decir que sí. En contra no. Aprobada la medida.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.
SR. MELENDEZ ORTIZ: No habiendo objeción, así se acuerda.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, indicando que en su Sesión del 11 de noviembre de 1998, acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Honorable Gobernador la devolución del Proyecto de la Cámara 1671, con el fin de reconsiderarlo.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se otorgue el consentimiento solicitado por la Cámara de Representantes.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno del Calendario de Ordenes Especiales del Día con el informe del Comité de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1524.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia el informe del Comité de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1524.

"AL SENADO DE PUERTO RICO Y
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 1524, titulado:

"Para enmendar el Inciso 8 del Artículo 2; enmendar el Inciso (b) y eliminar el inciso (d) del Artículo 6; enmendar el primer párrafo del Inciso (b) del Artículo 7; enmendar el Inciso (a) del Artículo 9; enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 10; enmendar el Inciso (a), eliminar el Inciso (b), enmendar el Inciso (c) redesignándolo como Inciso (b), redesignar el Inciso (d) como (c), enmendar el Inciso (e) redesignándolo como Inciso (d), enmendar el Inciso (f) redesignándolo como Inciso (e), todos ellos incisos del Artículo 14; y enmendar el Inciso (a) del Artículo 15 de la Ley 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños", a los fines de permitir la emisión de una licencia sin fecha de expiración, aumentar los cargos de examen, eliminar el requisito de rendir informes anuales y eliminar otros requisitos que resultan onerosos para la industria."

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:

En El Título:

Página 1 Línea 11 — después de "anuales" añadir: ", requerir al Comisionado de Instituciones Financieras presentar un informe sobre los efectos de aumentar el margen prestatario; eximir de las disposiones de esta Ley a las instituciones financieras que otorguen préstamos bajo la Ley Núm. 214 del 14 de octubre de 1995, según enmendada; "

En El Decrétase:

Página 6, línea 17 — Eliminar todo su contenido y sustituir por: "Sección 9.- Toda aquella institución financiera que al momento de la aprobación de esta ley otorgue préstamos bajo la Ley 214 del 14 de octubre de 1995, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Intermediación Financiera", estará exenta de las disposiciones de esta ley por un término de un (1) año desde su vigencia.
Sección 10.- Durante la primera (1ra) Sesión Ordinaria de la décimocuarta (14ta) Asamblea Legislativa, en o antes del último día de la Sesión, el Comisionado de Instituciones Financieras someterá a la Asamblea Legislativa un informe. En el mismo se incluirá una evaluación sobre los efectos del aumento a diez mil dólares ($10,000.00) en el margen prestatario, así como estadísticas sobre el movimiento de transacciones y cualquier otro aspecto relacionado con la implantación de esta ley. Al recibo del informe los Presidentes de ambos cuerpos legislativos lo referirán a la comisión o comisiones que estimen necesario.
Sección 11.- Esta Ley comenzará a regir a los treinta (30) días después de su aprobación."

Respetuosamente sometido,

Por El Senado de Puerto Rico	**Por La Cámara de Representantes**
(Fdo.) Hon. Aníbal Marrero Pérez	(Fdo.) Hon. Angel M. Cintrón García
(Fdo.) Hon. Jorge Santini Padilla	(Fdo.) Hon. Angel Marrero Hueca
(Fdo.) Hon. Víctor Marrero Pérez	(Fdo.) Hon. Epifanio Jiménez Cruz
(Fdo.) Hon. Mercedes Otero de Ramos	(Fdo.) Hon. Jorge de Castro Font
(Fdo.) Hon. Rubén Berríos Martínez	(Fdo.) Hon. Víctor García San Inocencio"

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1524, solicitamos su aprobación.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción.

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1262, Resolución Conjunta del Senado 1263, Resolución Conjunta del Senado 1264 y la Resolución Conjunta de la Cámara 201; y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, y a la Comisión de Hacienda de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1277, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya el Proyecto del Senado 1413, Proyecto del Senado 1380; Resolución Conjunta de la Cámara 1544; Proyecto de la Cámara 1488, Proyecto de la Cámara 1796; Resolución

Conjunta de la Cámara 2066; y Proyecto de la Cámara 1155.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se forme un Calendario de Lectura de estas medidas y todas las que hemos incluido en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1262, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. Se reasigna al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, según se dispone a continuación:

A)	Para un pozo hincado en el Bo. Sabana, Sector Los Negrón en el Municipio de Orocovis.	11,000
B)	Para la instalación del sistema eléctrico de dicho proyecto.	2,000
	TOTAL	**13,000**

Sección 2. Se autoriza al municipio de Orocovis a parear los fondos reasignados con aportaciones privadas, estatales o federales.

Sección 3. El municipio de Orocovis, deberá rendir un informe de liquidación a la Comisión de Hacienda del Senado de los fondos que se reasignan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.

Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1263, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación de rejas y mejoras permanentes en la Escuela Ramón Quiñonez Pacheco de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación de rejas y mejoras permanentes en la Escuela Ramón Quiñonez Pacheco de Fajardo.

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Educación, a parear los fondos con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3.- El Departamento de Educación, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1264, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a los Gobiernos Municipales de Isabela y San Sebastían la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna a los Municipios de Isabela y San Sebastían la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan a continuación:

MUNICIPIO DE ISABELA	
A. Sr. José N. Vargas Cruz Bz. 2055 Arenales Alto Isabela, P.R. 00662 Seg. Soc. 582-21-4424 Para gastos de reconstrucción de su vivienda.	2,500.00
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	
A. Legión Americana Puesto Núm. 51 Rodriguez Font Inc. P.O. Box 126 San Sebastian, P.R. 00685-0126 Tel - 896-8832 Para la construcción de la casa del veterano	8,000.00
TOTAL	$10,500.00

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales.

Sección 3.- Los Municipios de Isabela y San Sebastían, someterán a la Comisión de Hacienda del Senado

un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1277, el cual ha sido descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda.

"LEY

Para establecer la "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, Susúa, Guánica, Toro Negro, Guilarte y Pueblo de Adjuntas", la cual ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que identifique los terrenos ubicados entre éstos bosques estatales; demarque los terrenos a utilizarse para trazar dos (2) corredores biológicos que unan los mismos; delimite las zonas de amortiguamiento necesarias; determinen la forma de adquisición de los terrenos a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier derecho sobre los mismos, que resulten comprendidos por los corredores biológicos y por las zonas de amortiguamiento; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A nivel mundial, Puerto Rico es considerado como uno de los lugares de mayor densidad en la población. Consecuentemente, la amenaza urbana a sus áreas forestales se hace cada día mayor. Esta situación afecta la capacidad de los sistemas forestales para proveer recursos esenciales a la salud y bienestar del pueblo puertorriqueño.

Para el 1985, el treinta y dos (32) por ciento del territorio de Puerto Rico se componía de bosques, porcentaje que ha reflejado una tendencia descendiente. De esta área, el ochenta y cinco (85) por ciento se compone de propiedades privadas. Por tal razón, es sumamente importante que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establezca una comunicación eficaz con dichos propietarios con el fin de concientizarlos del valor de estos suelos boscosos; busque alternativas que beneficien a tales propietarios, a nuestra comunidad y al Estado, y establezca programas de asistencia tecnológica para sacar provecho económico a los bosques.

Actualmente, Puerto Rico cuenta con dieciséis bosques estatales ubicados de forma dispersa a través de toda la Isla. El aislamiento de cada bosque causa varios efectos: una limitación en la biodiversidad de las especies debido a la endogamia; la competencia por el alimento y el espacio; la alteración de los patrones de vida de estas especies; y la vulnerabilidad de las mismas a la depredación.

Las leyes de la naturaleza señalan que las diferentes especies dependen de una red de interacciones llevadas a cabo en su hábitat natural. Por ende, toda población de vida silvestre está sujeta al hábitat en el cual se procrea o alimenta necesitando, además, el espacio adecuado para su desarrollo y multiplicación. Es evidente que la relación entre el bosque y las especies resulta imprescindible para el aumento de la biodiversidad de las especies y la manutención de un balance o equilibrio ecológico. Esta máxima de interacción nos ilustra, que el aislamiento de los bosques coloca en alto riesgo la propia existencia de las especies.

Los bosques, recursos naturales capaces de restaurar el balance ecológico del medio ambiente, producen una serie de beneficios que nos ayudan a mantener una mejor calidad de vida, tales como: el aislamiento de ruidos; ayuda a la conservación de cuerpos de agua y del suelo; la evolución y refugio para la conservación de la flora y la fauna; la reducción de la temperatura y la estabilidad económica del sector en el cual se encuentran propiedades cercanas; y un ambiente sano para la recreación al aire libre y para la inspiración.

La presente medida es cónsona con las disposiciones de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico", especialmente con la política pública forestal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico instaurada en su Artículo 2; y la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece la política pública para la más eficaz conservación de los recursos naturales de nuestra Isla, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad.

Esta Asamblea Legislativa se propone fomentar aquellas acciones dirigidas a conservar nuestro ambiente, asegurar el balance ecológico de nuestra Isla; y proteger la vida silvestre. Este proyecto es una medida de conservación efectiva que integra los bosques de la región central oeste de la isla. Para lograr este objetivo se considera establecer dos corredores: uno, desde el Bosque de Maricao que pase por el Bosque de Susúa y termine en el Bosque de Guánica. Este corredor integrará un sistema ecológico que se desplaza desde una base geológica de serpentina a caliza. El otro corredor biológico unirá los Bosques de Toro Negro, Guilarte y Pueblo de Adjuntas. La unión de los terrenos de cordillera con los de la costa protegerá una mayor diversidad de especies y ecosistemas. Las zonas de amortiguamiento alrededor de estos bosques constituyen un elemento importante ya que ofrecen protección a su integridad fijando áreas de transición entre la vida urbana y la boscosa o rural.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, Susúa, Guánica, Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro".

Artículo 2.-Declaración de Política Pública.-
Constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la adquisición y protección de terrenos forestales localizados entre los bosques mencionados en el Artículo 1 de esta Ley para crear dos (2) corredores biológicos con el propósito de expandir el territorio forestal y unificar dichos bosques. La importancia de crear un cordón de territorio forestal o boscoso es proveerle a las especies un hábitat natural, seguro, saludable y espacioso para garantizar su desarrollo y proliferación.

Los sistemas naturales constituyen un valioso recurso para restablecer el balance ecológico del medio ambiente, proteger el suelo de la erosión; regular el clima; producir oxígeno para mitigar el calentamiento global; proteger las cuencas hidrográficas o vertientes y reservas de agua fresca; y ser fuente de una gran cantidad de actividad biológica, lo cual provee un albergue a la vida animal y vegetal, entre otros.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce, además, que debemos de actuar para generar cambios culturales e individuales basados en el valor intrínseco que tienen todos los recursos naturales. Dichos cambios implican prácticas nuevas, a raíz de las cuales estrecharemos nuestra relación con los sistemas naturales que nos rodean; y aprenderemos más sobre los procesos de la naturaleza y nuestro lugar dentro de ella.

Artículo 3.-Definiciones.-
Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Corredor biológico" significa el pasillo natural que une dos o más sistemas forestales con el propósito de expandir el hábitat de las especies, facilitando su libre reproducción y desplazamiento.
(b) "Zona de amortiguamiento" significa la franja natural que bordea los sistemas forestales cuya función es proteger la integridad de los mismos, sirviendo de área de transición entre la vida silvestre y el efecto antropológico.
(c) "Bosques" significa comunidades biológicas dominadas por árboles o arbustos leñosos incluyendo también otros tipos de plantas y fauna asociada que se encuentra en terrenos públicos o privados, urbanos o rurales.
(ch) "Bosques auxiliares" significa la clasificación de terrenos realizada por el Secretario del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en virtud del Artículo 10 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico".

(d) "Reserva natural" significa aquellas áreas así designadas por la Junta de Planificación mediante Resolución que por sus características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor social de los recursos naturales existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición natural a tono con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta el día 8 de junio de 1977 y por el Gobernador el día 22 de junio de 1977.

(e) "Secretario" significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(f) "Junta" significa Junta de Planificación de Puerto Rico.

Artículo 4.-Deslinde de los Corredores Biológicos y Delimitación de las Zonas de Amortiguamiento; Facultades y Deberes del Secretario.-

Dentro del marco de sus respectivas facultades, se ordena al Secretario a realizar los siguientes actos, así como cualesquiera otros convenientes y necesarios para los fines de esta Ley:

(1) Identificar los terrenos ubicados entre los bosques estatales de Maricao, Susúa y Guánica; y de los de Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro. Se considerará como terrenos entre los bosques mencionados, toda área de suelo formada por terrenos boscosos que comprenda la formación de dos corredores biológicos: uno entre los bosques de Maricao, Susúa y Guánica y el otro entre los bosques de Guilarte, Pueblo de Adjunta y Toro Negro y las zonas de amortiguamiento a ser establecidas para éstos.

(2) Realizar un estudio y evaluación con el objetivo de demarcar o deslindar los terrenos a utilizarse para trazar los corredores biológicos que unan a estos bosques;

(3) Delimitar las zonas de amortiguamiento necesarias;

(4) Preparar planes para adquirir, a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, los terrenos, así como cualquier derecho sobre los mismos, que comprenden los corredores biológicos indicados y las zonas de amortiguamiento, siempre y cuando dichos terrenos no estén clasificados como bosques auxiliares ni designados como bosques estatales; y que su titularidad no constituya un obstáculo al establecimiento de los corredores biológicos ni las zonas de amortiguamiento.

(5) Promulgar un reglamento al amparo de esta Ley para cumplir con los propósitos esbozados en la misma.

Disponiéndose, además, que el Secretario deberá establecer una comunicación eficaz con el Secretario de Agricultura para armonizar las prácticas agrícolas con el mantenimiento de los terrenos forestales y con los propietarios de los terrenos boscosos que puedan resultar comprendidos por los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento, a fin de orientarlos sobre la posibilidad de que los mismos puedan ser así clasificados como bosques auxiliares, en cuyo caso, no serán adquiridos a nombre del Gobierno de Puerto Rico en virtud de esta Ley, a menos que su titularidad constituya un impedimento a la instauración de los corredores biológicos propuestos o a las zonas de amortiguamiento.

Artículo 5.-Reglamento.-

La preparación del reglamento requerirá la celebración de vistas públicas en las áreas concernidas, de forma tal que la comunidad tenga la oportunidad de expresarse en torno a esta Ley y el contenido del referido reglamento.

Entre otras cosas, dicho reglamento deberá incluir lo siguiente:

(1) Una vez celebrada las vistas públicas requeridas en las cuales, además, se habrán de someter los trazados propuestos inicialmente para establecer los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento, y habiéndose tomado en consideración lo expresado en las mismas, los trazados finalmente seleccionados para dicho propósito, a fin de unificar los bosques estatales de Maricao, Susúa, Guánica, Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro, deberán ser incluidos y claramente señalados en el reglamento.

(2) El reglamento incluirá las normas que se deberán observar en los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento. Además, dispondrá las pautas y los requisitos aplicables al

territorio deslindado o demarcado relacionado con los derechos, usos permitidos, restricciones, incentivos y otras condiciones específicas pertinentes a los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento.

(3) Este reglamento prohibirá la construcción de viviendas, el desarrollo de urbanizaciones, centros comerciales, industrias o cualquier otro tipo de desarrollo urbano o comercial que pueda amenazar la integridad de los bosques y la conservación de los corredores, sus zonas de amortiguamiento y la vida silvestre. Se restringirá la construcción de viviendas y carreteras.

(4) El reglamento establecerá las normas que se seguirán cuando se tengan que realizar mejoras o expansiones a carreteras.

Después de haberse elaborado el reglamento, acorde a lo dispuesto en este Artículo, el Secretario y el Presidente de la Junta someterán el mismo para la aprobación de la Asamblea Legislativa al comienzo de la sexta sesión ordinaria de 1999. Junto con el reglamento, los mismos presentarán un informe de los costos y gastos necesarios para la implantación de esta Ley, incluyendo la utilización de los fondos disponibles recaudados mediante la autorización dispuesta en la misma.

Artículo 6.-Vías de Acceso.-

Se ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación a estudiar las vías de acceso existentes en el área propuesta para los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento. Disponiéndose, además, que evaluarán y someterán al Secretario alternativas de desvíos, rutas alternas o cualquier otra solución dirigida a no alterar la integridad de dicha área, predicada en la convicción de que bisectar las áreas naturales es contraproducente a estos sistemas. Estas alternativas se presentarán a las comunidades afectadas en las vistas públicas a celebrarse previa a la preparación del reglamento referido en el Artículo 5 de esta Ley.

Después de haber recibido el insumo de las personas concernidas en las vistas públicas, la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas determinarán, conforme a sus respectivas facultades, las rutas, desvíos o cualquier otra solución que habrá de implantarse para proteger el área designada que comprenda los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento.

Artículo 7.-Comité Asesor.-

Se crea un Comité Asesor el que será presidido por el Secretario y estará compuesto por los siguientes miembros permanentes o un representante que éstos designen: Secretario del Departamento de Agricultura, Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Presidente de la Junta de Planificación, Director de la Administración de Terrenos, el Director del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Alcaldes de los municipios de Jayuya, Ciales, Orocovis, Peñuelas, Adjuntas, Yauco, Sabana Grande, San Germán, Maricao, Guánica, Guayanilla, Arecibo y Utuado; uno o dos miembros de la comunidad científica o universitaria y cualquier otro miembro que el Secretario estime necesario, cuya función esté relacionada con los fines de esta Ley y que esté facultado para brindar voluntariamente el asesoramiento técnico y profesional necesario para la implantación de la misma; y por dos personas provenientes de la empresa privada y de entidades sin fines de lucro que sean seleccionadas por el Secretario.

Este comité tendrá la función principal de elaborar un plan maestro que incluya lo siguiente:

(a) la identificación de terrenos entre los bosques estatales de Maricao, Susúa y Guánica; y entre los bosques de Guilarte, Pueblo de Adjuntas y Toro Negro que comprendan el trazado de dos corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento a ser establecidas;

(b) la demarcación de bordes en las zonas de amortiguamiento necesarias;

(c) un plan de deslinde para los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento;

(d) un inventario de la flora y la fauna existente; trazados para los corredores biológicos y las zonas de amortiguamiento;

(e) propuesta vial para el área;

(f) creación de incentivos para los dueños de los terrenos identificados a ser comprendidos por los corredores biológicos o por las zonas de amortiguamiento;

(g) diseño de una campaña educativa y de promoción para la protección y conocimiento del sistema de

bosques de la Cordillera Central y de la costa;
(h) diseño para la identificación de posibles áreas recreativas en el sistema de bosques;
(i) rezonificación de las áreas que comprenden el sistema de bosques y zonas de amortiguamiento;
(j) un plan diversificado para estimular la actividad económica de productos forestales para aquellas comunidades aledañas a este sistema;
(k) identificación de fuentes de ingreso para la ejecución de esta Ley;
(l) y el itinerario de adquisiciones o convenios con dueños de terrenos para la conversión de estos terrenos privados en un corredor biológico o zonas de amortiguamiento.

El plan maestro elaborado por el comité asesor será sometido al Secretario quien utilizará el mismo como una guía, conservando, en última instancia, la potestad de modificarlo, de así entenderlo necesario, para el debido desempeño de sus facultades y deberes en virtud de esta Ley.

Artículo 8.-Incentivos.-
Se faculta al Secretario a diseñar incentivos que sean atractivos para los propietarios de los terrenos que resulten incluidos en los corredores biológicos o las zonas de amortiguamiento, a fin de que los mismos colaboren en la consecución de los objetivos de esta Ley; a estimular la actividad económica en los bosques mediante asistencia técnica, la siembra de árboles madereros, repoblación y plantío en terrenos baldíos y de uso agrícola, establecimiento de aviarios para la reproducción de especies en cautiverio, en peligro de extinción; y cualesquiera otros cónsonos con los propósitos y objetivos de esta Ley.

Artículo 9.-Fondos.-
Los fondos requeridos para la implantación de esta Ley se obtendrán de aportaciones de empresas privadas, entidades sin fines de lucro, y del Fondo Especial de Desarrollo Forestal, según establecido en el Artículo 7 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico".

Para la ejecución de esta Ley, también se autoriza por este Artículo la aceptación de fondos federales por parte del Secretario.

Artículo 10.-Vigencia.-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 201, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC), la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de fondos no comprometidos para adelantar sus fines y propósitos de conformidad con la política.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley Núm. 114 de 9 de diciembre de 1993, según enmendada, se creó un diseño legislativo para propiciar un vigoroso y acelerado desarrollo socioeconómico de la Región Central de Puerto Rico después de años de un estancamiento económico y rezago de parte del Gobierno Central.

El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro J. Rosselló González, emitió una Orden Ejecutiva al inicio de su mandato para impulsar ese desarrollo y creó un grupo de trabajo interagencial para implantar ese propósito. Además, mediante otra Orden Ejecutiva creó el Consejo Asesor para la Implantación del Plan de

la Región Central (CAIPREC) compuesto por los alcaldes de la Región Central, secretarios de agencias y otros funcionarios y los presidentes de las Comisiones de la Región Central y de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Actualmente, CAIPREC, bajo la presidencia del Alcalde de Corozal, Hon. Carlos Serra gestiona la creación de un Distrito de Desarrollo Económico con la Economic Development Administration (E.D.A. por sus siglas en inglés) compuesto por los 15 municipios que integran la Nueva Región Central, según quedó delimitada por la Junta de Planificación de Puerto Rico en su elaboración de los Planes Regionales. Ante la necesidad de recursos fiscales para la operación del organismo, se requiere que el Gobernador solicite la designación de la Región Central como un distrito de Desarrollo Económico, un acuerdo intermunicipal firmado por los alcaldes y una Resolución de los asambleístas municipales.

Esta Asamblea Legislativa entiende que es apremiante el propulsar efectivamente el desarrollo socioeconómico de la Región Central a la mayor brevedad posible.

Por ese fundamento, mediante esta Resolución Conjunta, se asigna la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC) para que sin dilación se comience a adelantar los fines y propósitos de ese organismo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC), la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de fondos no comprometidos, especial ebozada en la Ley Núm. 114 de 9 de diciembre de 1993, según enmendada.

Sección 2.-El Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC) rendirá informes trimestrales a la Legislatura de Puerto Rico a través de la Comisión de Desarrollo de la Región Central en torno al uso y desembolso de los fondos aquí asignados.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1413, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y de Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra para armonizarlo al de los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la responsabilidad de decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta por la comisión de algún delito. Esta función está revestida de un alto interés público ya que está estrechamente ligada a la seguridad de Puerto Rico. El Presidente de esta Junta, ejerce funciones ejecutivas del más alto nivel gubernamental y su compensación debe responder a las realidades económicas e ir a la par con los deberes y responsabilidades que su cargo conlleva.

Recientemente fue aprobada la Ley Núm. 79 de 10 de junio de 1998, la cual revisa los salarios anuales de los Secretario y otros funcionarios de la Rama Ejecutiva con el propósito de equiparar la compensación

que estos reciben a los deberes y responsabilidades de sus cargos; para así reclutar aquellas personas capacitadas para desarrollar los programas de gobierno. El Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra realiza funciones complejas y de un alto interés social al igual que los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sin embargo, su salario anual no refleja el nivel de complejidad de sus funciones y no está acorde al de los demás componentes de la Sombrilla.

Esta enmienda va dirigida a establecer un balance salarial adecuado entre el Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 4 de junio de 1989, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Artículo 4.- Retribución de funcionarios varios

El sueldo anual de cada uno de los siguientes funcionarios será el que se expresa a continuación de su título a partir de la vigencia de esta Ley.

FuncionarioSueldo Anual	
Presidente, Junta de Planificación	80,000
.....	
Presidente, Junta Libertad Bajo Palabra	**[65,000]** <u>75,000</u>
.....	

Además del sueldo que aquí se dispone para el Presidente de la Junta de Planificación, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Gobernador podrá asignarle a dichos funcionarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte del sueldo."

Artículo 2.- Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley provendrán del Presupuesto Operacional de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1413, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas:

En la Exposición de Motivos:

Página 2, línea 1	eliminar "El"
Página 2, línea 2	eliminar "Presidente de la Junta de"
Página 2, línea 3	Antes de "Libertad" insertar "El Presidente de la Junta de"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto del Senado 1413 es enmendar el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra para armonizarlo al de los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento.

La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la responsabilidad de decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta por la comisión de algún delito. Esta función está revestida de un alto interés público ya que está estrechamente ligada a la seguridad de Puerto Rico. El Presidente de esta Junta ejerce funciones ejecutivas del más alto nivel gubernamental y su compensación debe responder a las realidades económicas e ir a la par con los deberes y responsabilidades que su cargo conlleva.

El Gobierno de Puerto Rico tiene como compromiso mejorar los salarios de los Secretarios de Gobierno, Jefes de Agencias y demás funcionarios públicos a fin de promover el reclutamiento y retención de los empleados más aptos y preparados para el desempeño en el servicio público. Es por esta razón que se aprobó la Ley Núm. 79 de 10 de junio de 1998.

Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley provendrán del Presupuesto Operacional de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

En reunión ejecutiva celebrada, la Comisión que suscribe recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 1413 con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1380, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para designar la última semana del mes de junio de cada año como la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", disponer sobre la Proclama anual que deberá emitirse y derogar la Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por muchos años los radioaficionados de Puerto Rico han suministrado comunicaciones de urgencia al Gobierno y la comunidad en general cuando, con motivo de desastres, las vías usuales de comunicaciones cesan su funcionamiento. Entonces, en armonía con las facultades que le confiere la Comisión Federal de Comunicaciones, el radioaficionado se convierte en funcionario voluntario no remunerado que utiliza su propio equipo y hasta expone su vida y propiedad en beneficio de su pueblo. En ocasiones en que se ha requerido su ayuda voluntaria, la excelente red de comunicaciones establecida por los radioaficionados han conseguido salvar vidas en Puerto Rico y otros países.

La comunidad de radioaficionados, compuesta por más de nueve mil integrantes, se encuentra diseminada por todos los rincones de la Isla. Estos servidores, en contraste con las personas que operan estaciones radiodifusoras y comerciales, no reciben remuneración por sus servicios, en consonancia con las normas federales que les son aplicables.

La Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996 instituyó recientemente el "Día del Radioaficionado de Puerto Rico", con la intención de reconocer los méritos de los radioaficionados y servir de marco oficial a las actividades que éstos realizan anualmente para dar a conocer su valiosa ocupación. Sin embargo, veinticuatro horas al año no bastan para abarcar la totalidad de las actividades que los radioaficionados organizan para dar

a conocer el alcance de su labor técnica, y por ello esta ley dispone instituir la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico".

En vista de que durante el mes de mayo, conocido como "mes de la radio", los radiodifusores celebran sus actividades anuales, la designación del "Día del Radioaficionado de Puerto Rico" en el mes de mayo por disposición del mencionado estatuto contribuye a que se confunda a los radioaficionados con los radiodifusores. Para evitar dicha confusión y a la vez disponer un período más propicio, esta ley deroga la citada Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996 e instituye la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", que habrá de celebrarse durante la última semana del mes de junio de cada año.

Es durante la semana que termina el último domingo del mes de junio que en los Estados Unidos se celebra el "Amateru Awareness Week", período en que los radioaficionados celebran actividades dirigidas a divulgar la naturaleza de sus servicios y mejorar sus técnicas de comunicación. La designación de la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico" para esta fecha colocará las actividades locales dentro de un marco mucho más amplio de aquellas que tienen lugar en los Estados Unidos impartirá un impulso adicional a la práctica de los radioaficionados.

Mediante esta ely se logra el objetivo de mejorar las relaciones entre los radioaficionados, als agencias del Gobierno y los ciudadanos en general, a la vez que se habrán separado las actividades celebradas durante le mes de mayo por los radiodifusores de las que generan los radioaficionados. Además, de este modo se rinde un digno reconocimiento a un grupo de personas cuyas gestiones han resultado en beneficio de nuestro pueblo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Enmendar el inciso (a) del Artículo 13 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue:
Artículo 1.- Esta ley se conocerá como "Ley de la Semana del Radioaficionado de Puerto Rico."

Artículo 2.- Se designa la semana, que termina el último domingo del mes de junio, en la que en los Estados Unidos se celebra el "Amateur Awareness Week" como la Semana del Radioaficionado de Puerto Rico.

Artículo 3.- El Gobernador de Puerto Rico, mediante Proclama al afecto, exhortará anualmente a todos los puertorriqueños a que brinden su cooperación y reconocimiento en la celebración de esta semana, y a que utilicen los servicios voluntarios de los radioaficionados durante períodos de desastre.

Artículo 4.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1380, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

En la Exposición de Motivos:

Página 1, línea 7	eliminar "han" y añadir "ha"
Página 2, línea 13	eliminar "amateru" y añadir "amateur"
Página 2, líneas 16-1	eliminar "más amplio de aquellas que tienen lugar en los Estados Unidos impartirá" y añadir "más amplio ya que aquellas que tienen lugar en los Estados Unidos impartirán"
Página 2, línea 18	eliminar "radiodiaficionados" y añadir "radioaficionados"

Página 2, línea 20	eliminar "als" y añadir "las"
Página 2, línea 20	eliminar "," y añadir ";"
Página 2, línea 21	eliminar "le" y añadir "el"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. del S. 1380 es designar la última semana del mes de junio de cada año como la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", disponer sobre la Proclama anual que deberá emitirse y derogar la Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996.

La Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996 instituyó recientemente el "Día del Radioaficionado de Puerto Rico", con la intención de reconocer los méritos de los radioaficionados y servir de marco oficial a las actividades que éstos realizan anualmente para dar a conocer su valiosa ocupación. Sin embargo, veinticuatro horas al año no bastan para abarcar la totalidad de las actividades que los radioaficionados organizan para dar a conocer el alcance de su labor técnica, y por ello esta ley dispone instituir la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico".

En vista de que durante el mes de mayo, conocido como "mes de la radio", los radiodifusores celebran sus actividades anuales, la designación del "Día del Radioaficionado de Puerto Rico" en el mes de mayo por disposición del mencionado estatuto contribuye a que se confunda a los radioaficionados con los radiodifusores.

Los miembros de la comisión que suscribe consideran que es acertado el que se haga dicha celebración la última semana del mes de junio, ya que es precisamente en esa fecha en que en los Estado Unidos se celebra el "Amateur Awareness Week", período en que los radioaficionados celebran actividades dirigidas a divulgar la naturaleza de sus servicios y mejorar sus técnicas de comunicación. Además, de esta manera se destaca la labor y se rinde un merecido reconocimiento a los radioaficionados cuyas gestiones han resultado en beneficio de nuestro pueblo y a su vez se evita que se confunda la celebración de éstos con la celebración anual de los radiodifusores.

En reunión ejecutiva, luego de análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuesta, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del P. del S. 1380, con enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1544, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico existe un porciento considerable de facilidades turísticas de alojamiento que no son inventariadas por la Compañía de Turismo. En un estudio realizado por el Dr. José I. Alameda del Recinto Universitario de Mayagüez se encontró que el cuarenta y cinco (45%) por ciento de las facilidades turísticas en la Región Noroeste de Puerto Rico están endosadas por la Compañía de Turismo. El cincuenta y cinco (55%) por ciento restante no cuenta con el endoso y no son incluidas en las ofertas ofrecidas por la Compañía.

En las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970 que creó la Compañía de Turismo se establece que esta deberá:

"Lograr un máximo de aprovechamiento de los recursos naturales y de las distintas regiones del país mediante una proporcionada distribución de las facilidades hoteleras y de los servicios turísticos", (Sección 671, inciso d) y "Hacer investigaciones científicas sobre el turismo potencial y su demanda, así como las facilidades de la industria puertorriqueña para atender sus demandas por servicios", (Sección 671, inciso e).

Estas funciones facultan a la Compañía de Turismo para recopilar sobre cuántas facilidades turísticas de alojamiento tenemos en Puerto Rico. Esta información permitirá tener una visión clara de la imagen que estamos proyectando, podrá utilizarse para conocer las necesidades de la industria en su totalidad y para ayudar en la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de categorizar e identificar nuestro producto turístico.

La intención legislativa aquí contenida es tener información para determinar la necesidad de establecer los requisitos mínimos con los que deben cumplir estas facilidades, la pertinencia de solicitar licencia para operar y establecer la necesidad de categorizar las distintas facilidades e identificar alternativas con el fin de aumentar nuestra competitividad con otros destinos.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que es necesario que se revisen y entiendan los parámetros de esta industria para poder fotalecerla y aumentar nuestro nivel competitivo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico y dichas facilidades clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales.

Sección 2.-La Compañía de Turismo deberá someter los resultados de sus investigación a la Asamblea Legislativa ciento veinte días después de aprobada esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1544 recomienda la aprobación de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 1544 ordena a la Comisión de Turismo realizar un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico y que clasifiquen por tipos de hospedería y

cumplimientos con los permisos de las reglas de las agencias gubernamentales. Esta información permitirá tener una visión clara de la imagen que estamos proyectando y se podrá utilizar para conocer las necesidades de la industria en su totalidad. Además, esta información ayudará a determinar la necesidad de establecer requisitos mínimos con los que deben cumplir las facilidades turísticas, la pertinencia de solicitar licencia para operar y la necesidad de categorizar las distintas facilidades e identificar nuestro producto turístico.

El Ing. Carlos O. González Sánchez señaló que la Administración de Reglamentos y Permisos endosa la iniciativa legislativa ya que ésto permitirá que se tenga un inventario confiable de las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico. Añade que si se le ordena a la Agencia intervenir con los negocios que no tienen los permisos correspondientes ésta tomaría acción para el fortalecimiento de la infraestructura del país.

La Junta de Planificación en su ponencia, expresa que la Compañía de Turismo tiende a basarse en unos requisitos rigurosos para endosar instalaciones y darle promoción. Según éstos la información que se obtenga del inventario de negocios asociados a la actividad turística podrá servir para brindar opciones para la diversidad de clientela, identificar oportunidades de inversión y esfuerzos que ameriten apoyo, y adelantan el progreso en aspectos de importancia para el desarrollo de Puerto Rico. La Compañía de Turismo les ha informado que si al hacer el inventario, se encuentran facilidades de alojamiento que puedan ser endosadas por ellos, se abonaría a la meta para el año 2,000 de alcanzar la cifra de 16,000 habitaciones. Aunque actualmente la Compañía de Turismo está realizando un inventario de hospederías en la Región Oeste de Puerto Rico es necesario extender la labor a todas las regiones de Puerto Rico.

La Junta de Planificación recomienda que el estudio propuesto se dirija a esfuerzos para enlazar actividades complementarias al éxito del movimiento turístico en la zona metropolitana.

La profesora Yesmín Hernández, Directora del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Sagrado Corazón, en su ponencia respalda la iniciativa de la Comisión de Turismo y señala que en las estadísticas oficiales de la Compañía de Turismo del año fiscal 1996-1997 no se refleja información acerca de un 71% de los visitantes regulares y de los medios de alojamiento dónde se hospedan. Por esta razón, recomienda que la Oficina de Estadísticas y Estudios de la Compañía de Turismo realice un estudio respecto a las necesidades de los consumidores y sobre el desarrollo de nuevas opciones de alojamiento. También recomiendan la creación de un grupo de trabajo "task force" interagencial que defina las características de los medios de alojamiento necesario. Se evaluaría la capacidad financiera y gerencial de la empresa. Según la profesora Hernández, ésto nos permitirá ampliar el inventario de las facilidades elevando la calidad de alojamiento y así contribuir a la oferta turística de Puerto Rico. En cuanto a otros medios suplementarios de alojamiento, se estudiaría el medio legal para reglamentar y promover los mismos.

Se deberá llevar a cabo un plan en consulta con las comunidades y/o regiones para diversificar las atracciones turísticas. El Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad del Sagrado Corazón, destaca su dispoción para colaborar con dichos planes.

Otra persona que respondió a la petición de la Comisión de Turismo de la Cámara de Reperesentantes fue el Dr. José I. Alameda, Director Interino del Departamentos de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Este explica que el hecho de que no todas las facilitades turísticas de la Isla se encuentran endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, tiene repercusiones sobre la política pública, y la estrategia de promoción de la industria afectándose la promoción de la industria en la oferta de los servicios turísticos. Añade que para el 1997, en la región Oeste, el número de facilidades no endosadas llegaba a 81 unidades con un total de 1,274 habitaciones, comparada con 36 endosadas, con un total de 1,538 habitaciones. Los municipios con mayor número de facilidades no endosadas en Puerto Rico son Cabo Rojo, Lajas y Guánica con un 76.5% del total. El compromiso programático para el año 2,000 de llevar el número de habitaciones de 11,000 a 16,000 está basado prácticamente en la región metropolitana o en hoteles de lujo altamente caros.

Para el Dr. Alameda, una forma de abaratar el costo del turismo y fomentar el turismo interno y externo hacia las regiones oeste y este es tratando de conseguir el endoso de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para las facilidades no endosadas. De esta forma, opina que se fomentará el atractivo y la calidad en la oferta de los servicios turísticos.

La Ley de Incentivos Turísticos de 1993 provee una exención contributiva de un 90% para la Isla y de un 100% para Vieques y Culebra. Sin embargo, en municipios como Culebra, de las 26 casas de huéspedes que existen, sólo una, disfruta de este beneficio y está endosada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Esto le hace pensar al doctor Alameda que los dueños de las facilidades turísticas tienen poco conocimiento sobre los distintos beneficios ofrecidos para el sector turístico. Según éste, el incremento de las facilidades endosadas en el área oeste solamente, podría significar entre unos $6,000,000 a $8,000,000 adicionales en la economía de esta región. También opina, que las facilidades no endosadas, el Gobierno Municipal debería reglamentar, aunque de manera mínima ciertos aspectos de los servicios que ofrecen estas facilidades.

La Compañía de Turismo ha señalado que está realizando un inventario de las facilidades de alojamiento no endosadas en el área oeste y las está evaluando conforme al Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto Rico con el fin de identificar las que pueden ser endosadas. Expresaron además, que con respecto al cumplimiento con los permisos de otras agencias gubernamentales éstos se verifican en aquellas hospederías que le solicitan su endoso.

Es de gran importancia para Puerto Rico que se lleve a cabo este inventario de habitaciones, ya que el turismo y sus actividades tienen un impacto significativo en la economía del país. Es fundamental tener en cuenta la calidad y la diversidad de los ofrecimientos en las facilidades de alojamiento para fortalecer e incrmentar nuestro nivel competitivo. Aunque la Compañía de Turismo, está realizando un inventario sobre las facilidades de alojamiento en la región oeste, es necesario que se agilice y extender este trabajo a todas las regiones de Puerto Rico.

Por las razones antes expuestas la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 1544.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Enrique Rodríguez Negrón
Presidente
Comisión de Turismo, Comercio,
Fomento Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1488, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las contrataciones de índole contingente y las funciones del Director de Finanzas municipal con respecto a éstas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al promulgar la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, la Legislatura amplió considerablemente el ámbito de poder a los Municipios de Puerto Rico con el propósito de que los mismos pudieran controlar

y administrar su desarrollo económico. Dentro de las nuevas facultades otorgadas a los municipios se encuentran las de definir, identificar y gestionar el cobro de nuevas fuentes de ingreso necesarias para atender las necesidades inmediatas de la comunidad. Debido a la rampante evasión total o parcial del pago de patentes y de arbitrios de construcción, los municipios recurrieron a la contratación de entidades privadas para que les ayudaran a identificar a los evasores y a determinar las deficiencias de quienes hubieran cumplido en forma parcial con su obligación de ley.

La Ley Núm. 52 de 19 de diciembre de 1990, permitió a los municipios recurrir a la contratación privada para identificar evasores en el pago de patentes y arbitrios de construcción. Al derogarse dicha Ley, el legislador recogió esta intención en la Ley de Municipios Autónomos facultando al municipio a suscribir contratos contingentes, por lo que se reconoció que éste es un recurso necesario para agilizar la identificación de fuentes de ingresos o cobrar aquellas deudas declaradas morosas o incobrables. Por tanto, la Ley de Municipios Autónomos faculta a los alcaldes para entrar en contrataciones contingentes con el propósito de poder identificar nuevas fuentes de ingreso o cobrar aquellas deudas declaradas morosas o incobrables, sin que ello conlleve derogación alguna del presupuesto funcional, ya que los contratos contingentes proveen para una obligación dependiente de los ingresos que se generen como resultado de la ejecución del contrato. De esta manera, los municipios pueden contar con mayores recursos para identificar nuevos ingresos y allegar los recursos fiscales que le corresponden.

La efectividad del mecanismo, sin embargo, se afectada por los continuos planteamientos de que el Director de Finanzas municipal está impedido de utilizar estos servicios. Esta interpretación restrictiva de la Ley privaría a los municipios de un mecanismo que ha probado ser eficaz en la identicación de evasores y cobro de deudas en el momento en que los municipios más la necesitan. De hecho, dicha interpretación se convierte en una protección a los evasores, lo que resulta en un contrasentido.

Entendemos y por la presente reafirmamos, que los contratos contingentes para la detección de evasores contributivos y el cobro de deudas morosas o incobrables en el área de patentes y arbitrios de construcción, evidencian la intención legislativa de otorgar a los municipios de Puerto Rico las herramientas necesarias para poder alcanzar su máximo desarrollo económico.

Desde la aprobación de la Ley 52 de 1990 y posteriormente de la Ley 81 de 1991, se ha comprobado que todos los municipios que han contratado estos servicios han aumentado sus recaudos como resultado directo de dichas contrataciones, viendo incrementados sus partidas de ingresos como consecuencia directa de este servicio, tanto de forma inmediata como prospectiva, sin menoscabar el presupuesto de éstos o afectar los servicios básicos que brindan.

Por todo la antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende que las facultades delegadas al Director de Finanzas municipal, específicamente la determinación oficial de deuda, no son menoscabadas por las contrataciones contingentes, ya que las entidades privadas contratadas para llevar a cabo esos servicios sólo se limitan a realizar investigaciones, asesorar y preparar documentos, que conlleven el cobro de patente, arbitrios, contribuciones, derechos y otras deudas consideradas morosas o incobrables. Toda otra función recae sobre el Director de Finanzas, según está establecido en la Ley de Municipios Autónomos. Por lo tanto se entiende que no existe una duplicidad de servicios ni una delegación impermisible de funciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 3.009 (r)-Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos necesarios, convenientes o útiles para la ejecución de sus funciones, deberes y facultades y para la gestión de los asuntos y actividades de competencia o jurisdicción municipal. Esta facultad incluye la de otorgar contratos contingentes para la investigación, asesoramiento y preparación de documentos en la determinación y cobro de patentes, arbitrios, contribuciones, derechos y otras deudas siempre que las mismas sean declaradas morosas, incobrables o sean

el producto de la identificación de evasores contributivos y la determinación oficial de la deuda sea hecha por el Director de Finanzas. Toda comunicación dirigida al deudor deberá estar firmada por el Director de Finanzas, su representante, o su Asesor Legal y los honorarios a pagar no sobrepasarán de diez porciento (10%) del total de la acreencia determinada y cobrara sin incluir los servicios legales que, por contrato aparte, fuere necesario suscribir y por los que no podrán pagarse honorarios mayores a diez porciento (10%) de los determinado y cobrado. Se reconoce la validez de los contratos suscritos previa la aprobación de esta Ley, pero su aplicación prospectiva se atemperará a lo aquí dispuesto. Se dispone que esta actividad no constituye una delegación impermisible de las funciones del Director de Finanzas ni una duplicidad de servicios."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, previo estudio y consideración del Proyecto de la Camara 1488, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de la Medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1488 propone enmendar el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las contrataciones de índole contingente y las funciones del Director de Finanzas municipales con respecto a éstas.

A los fines de estudio y evaluación de la medida, se procedió a estudiar y considerar el récord de la medida según fue evaluada por la Cámara de Representantes. Se hizo un estudio exhaustivo de los memoriales sometidos por las distintas entidades consultadas, las cuales avalan y apoyan la aprobación de la medida.

Sometieron memoriales en apoyo de la medida; el Departamento de Justicia, la Asociación de Alcaldes de P. R., Federación de Municipios de P. R., Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y el Municipio de Mayaguez.

La Oficina del Contralor se opone a la aprobación de la medida por las razones o fundamentos que expone en su memorial explicativo.

La Comisión ha realizado un estudio de la medida, del Informe de la Cámara de Representantes recomendando su aprobación, de los memoriales en apoyo y en oposición de la medida y de los aspectos legales y jurisprudenciales aplicables.

ANALISIS DE MEMORIALES

A excepción de la Oficina del Contralor, todas las demás entidades consultadas endosan y recomiendan la aprobación de la medida.

La medida persigue dos fines: (1) aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las contrataciones de índole contingente, y (2) aclarar las funciones del Director de Finanzas Municipal con respecto a estos.

Sobre los aspectos legales de la medida, el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" lee de la siguiente manera; "El Alcalde será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno municipal

y en tal capacidad le corresponderá su dirección, administración y la fiscalización del funcionamiento del municipio. El alcalde tendrá los deberes y ejercerá las funciones y facultades siguientes:

(r) Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos necesarios, convenientes o útiles para la ejecución de sus funciones, deberes y facultades para la gestión de los asuntos y actividades de competencia o jurisdicción municipal, incluyendo contratos contingentes.

El Artículo 1.003, inciso (l) de la Ley de Municipios Autónomos define el término "Contratos Contingentes". Dice así dicho inciso: "Contratos Contingentes" significará aquellos en los que se provea para una obligación dependiente de los ingresos que se generan como resultado de la ejecución del contrato, incluyendo los que proveen para un canon de arrendamiento basado en una cantidad fija o en el volumen de ventas y cualquier tipo de transacción económica que represente para el municipio un beneficio justo y razonable y cuya compensación dependa de los ingresos que se generen.

El proyecto bajo estudio propone aclarar este concepto de "Contrato Contingente" y determinar si esta clase de contratación resulta eficaz para combatir la "evasión total o parcial del pago de patentes y de arbitrios de construcción, mediante la contratación de entidades privadas para que les ayudaran a identificar a los evasores y a determinar las deficiencias de quienes hubieran cumplido en forma parcial con su obligación de ley.

En el primer párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto se dice lo siguiente: "al promulgar la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, la Legislatura amplió considerablemente el ámbito de poder a los municipios de Puerto Rico con el propósito de que los mismos pudieran controlar y administrar su desarrollo económico. Dentro de las nuevas facultades otorgadas a los municipios se encuentran las de definir, identificar y gestionar el cobro de nuevas fuentes de ingresos necesarios para atender las necesidades inmediatas de la comunidad."

El cuarto párrafo expone lo siguiente: "Entendemos y por la presente reafirmamos, que los contratos contingentes para la detección de evasores contributivos y el cobro de deudas morosas o incobrables en el área de patentes y arbitrios de construcción, evidencian la intención legislativa de otorgar a los municipios de Puerto Rico las herramientas necesarias para poder alcanzar su máximo desarrollo económico.

Una de las interrogantes era lo de si al otorgar Contratos Contingentes con entidades privadas, se interfería con las facultades del Director de Finanzas. Tanto a ley como la jurisprudencia aplicable entienden que no interfieren en forma alguna.

Los Contratos Contingentes con entidades privadas para llevar a cabo ciertos servicios en auxilio y apoyo de los municipios se limitan a la investigación, asesoramiento, preparación de documentos y análisis.

La medida bajo consideración es mucho mas amplia, específica y clara que la actual. Se aclara la posición del Director de Finanzas, respecto a los Contratos Contingentes y le impone un límite a los honorarios que puedan cobrar las entidades privadas para llevar a cabo los servicios bajo esta Ley.

Los honorarios se podrán pagar hasta un diez (10) por ciento.

La medida bajo estudio está completamente respaldada y la misma es razonable y conveniente para todos los municipios.

CONCLUSION

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado, previo estudio y consideración del P. de la C. 1488, entiende "necesario y prudente que se enmiende el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, tal y como lo propone la medida bajo consideración y a tales efectos recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila Lòpez
Presidente
Comisión Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1796, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas.

"LEY

Para declarar Monumento Histórico de Puerto Rico la Iglesia de la Inmaculada Concepción, localizada en la Calle Almodóvar Núm. 18, en el municipio de Juncos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Iglesia de la Inmaculada Concepción es una de las iglesias más antiguas que preserva nuestro pueblo puertorriqueño. La misma se ha convertido en testigo silente de la fe cristiana que ha profesado nuestro pueblo.

Dicha iglesia celebró en su recinto la Primera Misa el 8 de septiembre de 1797. La primera parroquía estuvo localizada en el municipio de Las Piedras, desde donde se trasladó al municipio de Juncos. En el año 1867 quedó destruida por un terremoto. En su archivo parroquial se conserva todavía el "Testimonio del Expediente sobre el traslado de la Iglesia Parroquial de Las Piedras al sitio de Juncos", cuyo testimonio fue mandado a liberar por el Obispo Arizmendi, en Juncos, el 23 de mayo de 1808. Luego se acordó reedificar la iglesia de Las Piedras en el sitio de Juncos, para erigirla en parroquia independiente. Es la parroquia donde la mayoría los junqueños van en busca de la palabra del Señor, domingo tras domingo.

La estructura existente reviste un gran significado e importancia debido a que es una de las pocas que sobreviven en la historia de nuestro pueblo de Juncos.

Con motivo del bicentenario del municipio de Juncos, y de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, consideramos pertinente se declare Monumento Histórico dicha estructura.

Debido a la importancia que tiene la estructura, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Juncos lugar de valor histórico, digno de preservación para que las futuras generaciones de puertorriqueños conozcan estos testigos latentes de nuestra historia de pueblo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Declaración de valor histórico.
Se declara Monumento Histórico la Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la Calle Almodóvar Núm. 18, en el municipio de Juncos.

Artículo 2.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Oficina Estatal de Preservación Histórica deberán completar, cuanto antes, los procesos de nominación correspondientes a la esfera federal.

Artículo 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de Planificación tomarán las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a los propósitos de la presente ley.

Artículo 4.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1796, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 1796 es declarar Monumento Histórico de Puerto Rico la Iglesia de la Inmaculada Concepción, localizada en la Calle Almodóvar Núm. 18, en el municipio de Juncos.

Por lo regular existen en los pueblos estructuras construidas en el siglo pasado, que por su importancia, construcción, estilo y características particulares, constituyen hitos históricos muy importantes.

Existe afinidad entre el estilo de los templos o edificios religiosos y los panteones en los cementerios antiguos. Es necesario preservar todas estas estructuras que reflejan el sentir religioso de nuestros pueblos.

El edificio de la Iglesia de Juncos forma parte de aquellos edificios en mampostería, construcción que caracteriza las estructuras construidas durante el siglo pasado. Lamentablemente en nuestro pueblo apenas quedan vertigios de ese tipo de construcción donde estaban presentes el ladrillo, el barro, la cal y la arena en partes, vigas de ausubo y otras maderas combinadas para levantar la obra permanente.

Como ejemplo del estilo neoclásico prevaleciente al finalizar el siglo 18 y las primeras décadas del 19, representa en el este de Puerto Rico elemento estructural exclusivo. El edificio que alberga la iglesia, y el de la Casa Alcaldía, constituyen en el desarrollo urbano de los pueblos, el patrón típico de construcción para que en el cuadrángulo que constituía la plaza se fueran acomodando las viviendas y los comercios de las familias mas importantes de la comunidad.

A pesar de que ese estilo de vida ha variado, sigue en pie el diseño original del centro del pueblo.

La Comisión entiende que todos los edificios religiosos originales que existen y que todavía no están identificados oficialmente como monumentos históricos, debe gestionarse el trámite para que sean constituidos en estructuras registradas bajo esa condición.

Sin lugar a dudas, al declarar monumento histórico a este edificio, se desarrollará entre los pequeños un renovado interés por preservar lo que queda de su pasado histórico.

Por las consideraciones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura recomienda la aprobación del P. de la C. 1796, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2066, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil (10,000) dólares del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo las siguientes mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil (10,000) dólares del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL

a) Para arreglos y mejoras al acueducto rural de la Comunidad Rancho Grande en el barrio Maizales de Naguabo $10,000

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2066, tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

En el Texto:

Página 1, línea 2	después de "dólares" insertar ","
Página 1, línea 4	tachar "**CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL**"

En el Título:

Página 1, línea 1	después de "dólares" insertar ","
Página 1,línea 4	después de "Conjunta" insertar ";"

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 2066 propone asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil (10,000) dólares, del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para arreglos y mejoras al acueducto rural de la Comunidad Rancho Grande en el barrio Maizales de Naguabo.

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 2066 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1155, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (o) del Artículo 3.009; derogar el inciso (3) del actual Artículo 12.005; renumerar como IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI y XII y sus respectivos Artículos; y adicionar un nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo en los municipios, autorizar a éstos a establecer Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional orientados al tratamiento y la rehabilitación del usuario; reglamentar la administración de pruebas de drogas en el empleo; y fijar penalidades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 26 de 28 de abril de 1996 enmendó los Artículos 3.009, 12.005 y 12.018 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que los alcaldes puedan requerir a toda persona a ser reclutada, a todo funcionario o empleado a quien se considere para ascenso y a todo funcionario y empleado del municipio cuyas labores estén estrecha y directamente relacionadas con la seguridad y salud, que se sometan a pruebas de diagnóstico de uso de sustancias controladas.

Cónsono con dichos propósitos, la Ley Núm. 26, antes citada, autorizó las referidas facultades y dispuso para la reglamentación de los procedimientos. Además, dispuso el establecimiento de Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional, los cuales serían dirigidos a la creación de estrategias para ofrecer ayuda temprana, y prevención y orientación sobre el uso y abuso de sustancias controladas, mediante adiestramientos en el manejo de problemas.

Posteriormente, y fundamentándose en el compromiso y el interés apremiante que tiene el Estado de erradicar el uso, posesión, distribución y tráfico ilegal de sustancias controladas, esta Administración aprobó la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997, conocida como "Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector Público".

La Ley Núm. 78, *supra*, autoriza la administración de pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo al empleo en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, establece en éstas programas orientados al tratamiento y la rehabilitación del usuario, reglamenta la administración de dichas pruebas y fija penalidades. Dicha Ley fue el resultado de un período extenso de debate público, durante el cual se obtuvo el insumo de personas expertas en la materia, pudiéndose lograr una medida que recoge tanto el desarrollo jurisprudencial, como el médico.

La presente pretende incorporar, en la Ley de Municipios Autónomos, mediante la adición de un nuevo Capítulo XII (Pruebas para la detección de Sustancias Controladas en el Empleo), las disposiciones de la Ley Núm. 78, antes citada, a los fines de lograr el objetivo enunciado, establecer los requisitos mínimos a ser adoptados mediante reglamentación y uniformar los procedimientos.

Teniendo en mente que esta Asamblea Legislativa está comprometida con la salud y seguridad de los funcionarios y empleados de los municipios de Puerto Rico y de la ciudadanía en general, entendemos necesario y conveniente requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo en los municipios.

A esos fines, esta medida autoriza y reglamenta, cónsono con las disposiciones de la Ley Núm. 78, antes citada, el establecimiento de programas para la administración de pruebas de drogas a funcionarios o empleados municipales, con el propósito de contribuir al efecto disuasivo del uso ilegal de drogas y sustancias controladas, todo ello dirigido a conservar y proteger un ambiente de trabajo seguro y tranquilo, que propenda al bienestar social y laboral de todos los funcionarios y empleados municipales y de la ciudadanía en general.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el inciso (o) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 3.009.-Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde

El Alcalde será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno municipal y en tal capacidad le corresponderá su dirección y administración y la fiscalización del funcionamiento del municipio. El Alcalde tendrá los deberes y ejercerá las funciones y facultades siguientes:

(a) ...

(o) Nombrar todos los funcionarios y empleados y separarlos de sus puestos cuando sea necesario para el bien del servicio, por las causas y de acuerdo al procedimiento establecido en esta Ley.

(p) ...".

Sección 2.-Se deroga el inciso (3) del actual Artículo 12.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.

Sección 3.-Se renumeran como IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI y XII y sus respectivos Artículos de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.

Sección 4.-Se adiciona un nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Capítulo XII.-Pruebas para la detección de sustancias controladas en el empleo.

Artículo 12.001.-Declaración de política pública

El Estado tiene el compromiso y el interés apremiante ético, legal, social y económico de erradicar el uso, posesión, distribución y tráfico ilegal de sustancias controladas.

A esos fines, entendemos prudente y razonable adoptar toda aquella medida necesaria encaminada a prevenir los efectos adversos del uso de sustancias controladas en el área de empleo.

Cónsono con este principio, se declara incompatible con el desempeño efectivo de las funciones y deberes de un puesto o cargo municipal, el uso de sustancias controladas, en o fuera del sitio o lugar del trabajo o en los alrededores del mismo.

La Asamblea Legislativa, comprometida con la salud y seguridad de los funcionarios y empleados de los municipios de Puerto Rico y sus dependencias y de la ciudadanía en general, y fundamentándose en el interés apremiante antes consignado, considera necesario y conveniente autorizar y reglamentar el establecimiento de programas para la administración de pruebas de drogas a funcionarios o empleados municipales, con el propósito de contribuir al efecto disuasivo del uso ilegal de drogas y sustancias controladas, todo ello dirigido a conservar y proteger un ambiente de trabajo seguro y tranquilo, que propenda al bienestar social y laboral de todos los funcionarios y empleados municipales y de la ciudadanía en general.

Este Capítulo delinea las circunstancias bajo las cuales se permitirá a los municipios administrar pruebas para detectar el uso de sustancias controladas en el empleo y prescribe los requisitos que al efecto deberán ser observados por éstos. Ha de servir, además, para establecer las garantías mínimas necesarias para proteger la intimidad e integridad personal del funcionario o empleado sujeto a las pruebas y garantizar al máximo la confiabilidad, precisión y confidencialidad de sus resultados, en un contexto de orientación, tratamiento y rehabilitación, encaminado al fiel desempeño de las funciones y deberes del servidor público, dentro de los recursos disponibles.

Artículo 12.002.-Definiciones

Para los efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Accidente"-es cualquier suceso eventual o acción proveniente de un acto o función de empleado que afecte o ponga en riesgo la salud, la seguridad o la propiedad de cualquier persona, natural o jurídica, según ha sido determinado en la jurisprudencia federal o estatal.

(b) "Droga" o "Sustancia Controlada", toda droga o sustancia comprendida en las Clasificaciones I y II del Artículo 202 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", exceptuando el uso de sustancias controladas por prescripción médica u otro uso autorizado por ley.

(c) "Funcionario Enlace", la persona cualificada designada por el Alcalde para que asista en la coordinación de la ayuda al empleado y del Programa establecido en cada municipio conforme a lo dispuesto en esta Ley.

(d) "Funcionario o Empleado", toda persona que preste servicios a cambio de salario, sueldo, jornal o cualquier tipo de remuneración, de carrera o de confianza, a tiempo parcial o irregular, en cualquier municipio, según definido en el inciso (g) de este Artículo y cualquier personalidad natural o jurídica que contrate sus servicios con el municipio como guardia de seguridad.

(e) "Laboratorio", cualquier entidad pública o privada que se dedique a realizar análisis clínicos o forénsicos, patólogicos o toxicólogos, que procese pruebas para la detección de sustancias controladas, debidamente autorizada y licenciada por el Secretario de Salud y la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción.

(f) "Médico Revisor Oficial" (M.R.O), médico licenciado responsable de recibir los resultados del laboratorio, generados por un programa de detección de sustancias controladas que debe tener los conocimientos de los desórdenes ocasionados por el abuso de drogas; y que haya recibido adiestramiento médico para interpretar y evaluar los resultados positivos tomando en cuenta el historial médico de la persona y cualquier otra información pertinente desde el punto de vista médico.

(g) "Municipio", la Rama Ejecutiva de los municipios de Puerto Rico, sus oficinas, departamentos, agenciaso dependencias, incluyendo las de la Asamblea Municipal.

(h) "Muestra", se refiere a la muestra de orina, sangre o cualquier otra sustancia del cuerpo que suple el funcionario o empleado para ser sometida a análisis, que se determine que cumple con los criterios de confiabilidad y precisión aceptados por el Registro Federal para las Pruebas de Detección de Sustancias Controladas del Departamento de Salud Federal y la reglamentación del Departamento de Salud de Puerto Rico.

(i) "Programa", el Programa de Prevención y Ayuda Ocupacional que mediante reglamentación es

establecido conforme a las disposiciones de este Capítulo.

(j) "Puestos o cargos sensitivos", aquellos que reúnen uno o más de los siguientes requisitos: participación en la fabricación, custodia, manejo, distribución y acceso a sustancias controladas; manejo y acceso a equipos y materiales peligrosos, tóxicos, explosivos o inflamables o a cablería eléctrica de alto voltaje o equipo y materiales de naturaleza similar; transportación escolar y transporte aéreo, marítimo o terrestre de pasajeros, carga o maquinaria pesada y mecánica de tales vehículos de transporte o carga; portación, acceso o incautación de armas de fuego; investigación o procesamiento de la actividad criminal y la delincuencia juvenil, el crimen organizado, las situaciones de corrupción gubernamental y toda situación de amenaza a la seguridad municipal; participación directa en la prestación de servicios médicos y de primeros auxilios, rescate o ambulancia; custodia y prestación directa de servicios de supervisión y rehabilitación para adictos, menores, víctimas de maltrato, personas con impedimentos, imputados, convictos o confinados; manejo directo de información altamente confidencial referente a asuntos de seguridad pública; relación directa con las salas de juegos de azar o casinos; trabajar en la Oficina del Alcalde; ser el funcionario designado por el Alcalde para ordenar la administración de pruebas o ser Funcionario Enlace; o cualesquiera otras posiciones de alto riesgo a la salud, seguridad pública u orden social, en las que una mínima disfunción de las facultades físicas o mentales del funcionario o empleado podría ocasionar un incidente o accidente que ponga en peligro la vida o seguridad de otros empleados, de la ciudadanía o la suya propia.

(k) "Sospecha Razonable Individualizada", la convicción moral de que una persona específica está bajo la influencia o es usuario regular de sustancias controladas, independientemente que luego se establezca o no tal hecho. Dicha sospecha deberá estar fundamentada en factores observables y objetivos tales como: a) observación directa del uso o posesión de sustancias controladas; b) síntomas físicos que adviertan estar bajo la influencia de una sustancia controlada; c) un patrón reiterado de conducta anormal o comportamiento errático en el empleo.

Artículo 12.003.-Funcionario Enlace; designación y deberes

(a) Todo Alcalde designará a una persona cualificada que servirá de Funcionario Enlace para ayuda al empleado y coordinará todo lo relacionado al Programa de Prevención y Ayuda Ocupacional que en este Capítulo se establece.

Cada municipio coordinará con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción el asesoramiento y ayuda necesaria que necesite dicho funcionario para implantar y desarrollar el Programa, conforme a los estándares establecidos.

La persona designada como Funcionario Enlace queda autorizada para extender sus servicios, dentro de los recursos disponibles, y atender otras situaciones que afectan la salud física y mental de funcionarios o empleados, tales como el abuso de alcohol.

Artículo 12.004.-Pruebas de detección de sustancias controladas como requisito de empleo

Como parte de una evaluación médica diseñada para determinar la salud general de los candidatos a empleo, todo municipio requerirá la presentación de un informe certificado de resultado de una prueba para la detección de sustancias controladas como requisito previo al empleo.

Dicha prueba podrá ser administrada por cualquier laboratorio no más tarde de veinticuatro (24) horas desde que el municipio se lo requiera al candidato en cuestión y la misma será costeada por el municipio que la solicitó.

La negativa de cualquier candidato a empleo a someterse a dicha prueba, o un resultado positivo en la misma, así certificado por el laboratorio en cuestión, será causa suficiente para denegar el empleo.

Cada municipio establecerá la reglamentación necesaria para la implantación de esta disposición.

Artículo 12.005.-Programas de pruebas de detección de sustancias controladas

Se autoriza a los Alcaldes a establecer, mediante reglamento, programas permanentes para la detección de sustancias controladas que empleen pruebas confiables que permitan identificar a los funcionarios y empleados usuarios de drogas, para tratarlos y rehabilitarlos en aquellos casos que este Capítulo así lo disponga, para que puedan desempeñar fiel y cabalmente sus funciones y deberes en el servicio público.

La implantación de programas permanentes para la detección de sustancias controladas autorizada en el párrafo anterior será obligatoria para todos los municipios en cuanto a la administración de pruebas para la detección de sustancias controladas a todo funcionaio o empleado municipal que ocupe un puesto o cargo en el Cuerpo de la Policía Municipal, según se define dicho término en la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, según enmendada; a todo funcionario o empleado municipal que ocupe un puesto o cargo sensitivo, según se define dicho término en el Artículo 12.001 de este Capítulo y como requisito de empleo, según lo dispuesto en el Artículo 12.003 de este Capítulo. No obstante, cada municipio determinará, mediante Ordenanza y de acuerdo a los recursos fiscales y operacionales disponibles, la inclusión de funcionarios o empleados municipales de otras divisiones o unidades administrativas en los programas permanentes para la detección de sustancias controladas establecidos.

El Ejecutivo reglamentará la adopción de estos programas en consulta con su oficina de personal municipal, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y el Instituto de Ciencias Forenses. Todo Reglamento deberá ser aprobado previamente por la oficina de asesoramiento legal municipal, que será responsable de evaluar su legalidad a tenor con las necesidades específicas de cada municipio. Sin embargo, ningún Reglamento entrará en vigor hasta tanto sea aprobado por la Asamblea Municipal, mediante Ordenanza.

Aquellos municipios que hayan establecido un programa de pruebas para la detección de uso de sustancias controladas para la fecha de aprobación de este Capítulo, podrán mantenerlo en vigor siempre y cuando dicho programa cumpla con todos los requisitos consignados en este estatuto. A esos fines, revisarán dichos programas y su reglamentación con el propósito de conformarlos a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 12.006.-Requisitos del programa para la detección de sustancias controladas

Todo reglamento que se adopte para la implantación de las disposiciones de este Capítulo y la creación del programa para la detección de sustancias controladas en cada municipio, deberá incluir lo siguiente:

(a) Una descripción del tipo de pruebas que se conducirán de acuerdo con el Programa que deberá adoptar cada municipio por escrito, el cual contendrá la fecha de su vigencia y será notificado a los funcionarios y empleados mediante la entrega y firma del recibo de una copia del mismo. Se le entregará a cada funcionario o empleado una notificación en la que se le informará la implantación del Programa, por lo menos treinta (30) días antes de su fecha de vigencia. Igual término y condiciones aplicarán a las notificaciones y entregas de copias que se hagan con respecto a subsiguientes enmiendas que se realicen al Reglamento. Este procedimiento no anulará o invalidará ninguna actuación previa del municipio realizada al amparo de un reglamento vigente antes de la aprobación de este Capítulo.

(b) El objetivo principal del programa será identificar a los funcionarios o empleados que desempeñen sus funciones o deberes bajo el efecto de sustancias controladas y lograr su rehabilitación, con las excepciones establecidas en este Capítulo, para que puedan desempeñar fielmente sus funciones y deberes en el empleo en el sector público.

(c) Una declaración de política pública sobre el uso ilegal de sustancias controladas a tenor con lo dispuesto en este Capítulo, que incluya una descripción de las sanciones y penalidades aplicables a la elaboración, distribución, posesión o uso ilegal de drogas bajo las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos de América, y una afirmación de que tales prácticas están prohibidas en el área de empleo.

(d) Una orientación a los funcionarios o empleados sobre los riesgos a la salud y seguridad vinculados

al consumo de sustancias controladas y el plan que estará disponible para el tratamiento y rehabilitación de los funcionarios o empleados que arrojen positivo a pruebas de sustancias controladas. Esto incluye la educación y adiestramiento de los supervisores en cuanto al tipo de conducta observable en el funcionario o empleado que puede haber sido inducida por el uso de sustancias controladas, a los fines de configurar la sospecha razonable individualizada. Disponiéndose que si los supervisores no reciben la educación y el adiestramiento aquí requeridos, sus sospechas de presunción se presumieran controvertiblemente irrazonables.

(e) Las normas de conducta sobre el uso de sustancias controladas, incluyendo la descripción de las circunstancias bajo las cuales el municipio le podrá requerir a un funcionario o empleado que se someta a las pruebas de drogas. Además, deberá mencionar las medidas preventivas y de tratamiento en beneficio de aquel funcionario o empleado cuya prueba inicial corroborada resulte positiva; e incluirá las medidas correctivas o disciplinarias a imponerse a aquel funcionario o empleado que se niegue a que le administren las pruebas de detección o a someterse al plan de orientación, tratamiento y rehabilitación, luego de arrojar positivo al uso de drogas, o que continúe usando ilegalmente sustancias controladas, cuando este Capítulo lo disponga.

(f) La descripción detallada del procedimiento a seguir para la administración de las pruebas de detección de sustancias controladas, incluyendo lo relativo a la confidencialidad de los resultados. El municipio deberá garantizar al máximo la protección del derecho a la intimidad e integridad personal del funcionario o empleado afectado.

(g) Un listado de las sustancias controladas que se busca detectar con las pruebas a realizarse.

Artículo 12.007.-Administración de pruebas para la detección de sustancias controladas a funcionarios o empleados

Ningún funcionario o empleado podrá ser sometido a una prueba para la detección de sustancias controladas, a menos que ocurra una de las siguientes circunstancias:

(1) Que ocurra un accidente en el trabajo relacionado con sus funciones y durante horas de trabajo, atribuible directamente al funcionario o empleado. No se podrá someter al funcionario o empleado a las pruebas de detección de sustancias controladas cuando el mismo no se encuentre en pleno dominio de sus facultades mentales por motivo del accidente, a menos que una orden judicial ordene lo contrario. Los municipios tendrán discreción para determinar en sus programas otras circunstancias extraordinarias en las cuales se eximirá al funcionario o empleado de someterse a las pruebas de detección de sustancias controladas luego de ocurrido el accidente.
En este caso, las pruebas deberán administrarse dentro del período de veinticuatro (24) horas desde que ocurrió el accidente.

(2) Que exista sospecha razonable individualizada de por lo menos dos (2) supervisores del funcionario o empleado, de los cuales uno (1) deberá ser supervisor directo. En este caso, las pruebas deberán administrarse no más tarde de veinticuatro (24) horas desde la última observación o percepción de conducta anormal o errática que genera la sospecha razonable individualizada.
Cualquiera de los dos (2) supervisores deberá llevar un récord que permanecerá bajo la custodia del Funcionario Enlace, o en su defecto, en la oficina del Alcalde, en el cual anotará todos los incidentes que generen sospechas de que algún funcionario o empleado se encuentra desempeñando sus funciones o deberes bajo el efecto de sustancias controladas. Estos récords estarán regidos bajo las normas de confidencialidad contenidas en este Capítulo.
Cuando el funcionario designado por el Alcalde para ordenar la administración de pruebas, en consulta con el Funcionario Enlace, entienda que procede administrar la prueba para la detección de sustancias controladas, así lo ordenará.
Los récords de los funcionarios o empleados que no hayan sido sometidos a pruebas para la detección de sustancias controladas dentro de los seis (6) meses de haber anotado el primer incidente serán destruidos.

(3) Que el funcionario o empleado haya dado positivo a una primera prueba y se requieren pruebas subsiguientes de seguimiento.

(4) Que la persona decida someterse voluntariamente a las pruebas de detección de sustancias controladas, sin que ello le haya sido requerido en forma alguna como condición para mantener el

empleo o para disfrutar de los derechos y beneficios que legalmente le asisten.

Artículo 12.008.-Administración de pruebas para la detección de sustancias controladas a funcionarios o empleados del orden público o que ocupen puestos o cargos sensitivos.

Todo funcionario o empleado que ocupe un puesto o cargo en el Cuerpo de la Policía Municipal, según se define dicho término en la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, según enmendada, incluyendo al Jefe, Subjefe o Director de la misma, estará sujeto a pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas.

Estarán sujetos a pruebas periódicas, además, aquellos funcionarios o empleados que ocupen puestos o cargos sensitivos, según se define dicho término en este Capítulo, incluyendo al Funcionario Enlace.

Todo contrato suscrito entre el municipio y una empresa privada con el propósito de obtener servicios de seguridad, incluirá una cláusula a los fines de que todo guardia de empresas privadas contratado por el municipio, esté sujeto a pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas administradas y costeadas por la compañía para la cual trabaja. Dispondrá, además, que todo guardia de empresas privadas contratado por el municipio cuya prueba para la detección de sustancias controladas arroje un resultado positivo, queda impedido de prestar dichos servicios permanentemente.

Artículo 12.009.-Presunción controvertible

La negativa injustificada de un funcionario o empleado a someterse a las pruebas para la detección de sustancias controladas, cuando así se le requiera a tenor con lo dispuesto en este Capítulo, activará la presunción controvertible de que el resultado hubiese sido positivo.

Artículo 12.010.-Pruebas para la detección de sustancias controladas; Procedimiento

El procedimiento para la administración de pruebas para la detección de sustancias controladas deberá observar los siguientes requisitos:

(a) La muestra será tomada por el Instituto de Ciencias Forenses, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o la entidad cualificada contratada para esos propósitos. Los servicios de administración de pruebas para la detección de sustancias controladas a empleados o funcionarios municipales, realizados al amparo de las disposiciones de este Capítulo, provistos por cualquier entidad pública, incluyendo al Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, se harán libre de costo o al costo menor posible para los Municipios. A esos fines, se autoriza a cualquier entidad pública que se dedique a la prestación de dichos servicios a negociar con los Municipios el costo de las pruebas aquí ordenadas.

(b) Las muestras no podrán ser sometidas a ningún tipo de pruebas que no sean las necesarias para detectar sustancias controladas, según definidas en este Capítulo.

(c) La prueba se administrará de acuerdo con los procedimientos analíticos y de cadena de custodia de la muestra científicamente aceptables, de modo que se proteja al máximo la intimidad del funcionario o empleado afectado. Una persona tomará la muestra que el funcionario o empleado le entregue en el momento en que el mismo desaloje el cuarto de servicios sanitarios. Para mayor confiabilidad, se podrá utilizar el método de teñir el agua de la bacineta para evitar la adulteración de la muestra. El grado de intrusión no podrá ser mayor que el necesario para prevenir la adulteración y preservar la cadena de custodia.

Se advertirá al funcionario o empleado por escrito que de así desearlo, se le podrá entregar a un laboratorio de su selección, parte de la muestra para que tenga la oportunidad de efectuar un análisis independiente de la misma. En todo caso, el funcionario o empleado tendrá la oportunidad de informar con anterioridad a la prueba cualesquiera datos que estime relevantes para la interpretación de dicho resultado, incluyendo el uso de drogas por prescripción médica y de las no recetadas.

Se le advertirá, además, que tendrá derecho a obtener copia de los resultados de la prueba de

detección de sustancias controladas; a impugnar la determinación de sospecha razonable que dio lugar a las pruebas; a impugnar resultados positivos corroborados en una vista y a presentar prueba demostrativa de que no ha utilizado ilegalmente sustancias controladas.

(e) Todo resultado deberá ser certificado por la entidad que haya analizado la muestra, antes de ser reportado a la agencia. Cuando se trate de un resultado positivo, la muestra deberá ser sometida a un segundo análisis de corroboración y un Médico Revisor Oficial cualificado confrontará el resultado con los medicamentos anotados por el funcionario o empleado y certificará el resultado de acuerdo a sus observaciones y análisis. No deberá ser un empleado o agente, o tener interés financiero alguno con el laboratorio para el cual M.R.O. revisa y evalúa sus resultados. No debe derivar ningún beneficio financiero del laboratorio que pueda constituir un conflicto de intereses.

(f) Se considerará como tiempo trabajado el que fuere necesario para que el funcionario o empleado sea sometido a las pruebas de detección de sustancias controladas.

Artículo 12.011.-Orientación, tratamiento y rehabilitación

(a) Los municipios deberán exigirle a aquel funcionario o empleado, que no ocupe un puesto o cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policía Municipal, cuya prueba de detección de sustancias controladas arroje un resultado positivo corroborado, que participe en un plan de orientación, tratamiento y rehabilitación, referido por el Funcionario Enlace. El funcionario o empleado podrá optar por someterse a dicho tratamiento y rehabilitación en cualquier institución pública o privada certificada para ello. En el caso de optar por esta última, el funcionario o empleado será responsable por el costo del tratamiento y rehabilitación, a menos que éste pueda ser sufragado bajo los términos de su póliza de seguro de salud.

(b) Se podrá someter periódicamente a dicho funcionario o empleado a pruebas adicionales como parte del plan de tratamiento y rehabilitación.

(c) La negativa a participar en el plan de rehabilitación o a someterse a las pruebas que como parte del tratamiento se le requieran, así como la presencia de sustancias controladas en el resultado de las pruebas adicionales a las que sea sometido, se considerará causa para la toma de medidas correctivas o acciones disciplinarias contra el funcionario o empleado, más allá de la mera amonestación verbal o la reprimenda escrita, conforme a la legislación y reglamentación aplicable, y de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.

(d) El Municipio asegurará a todo funcionario o empleado que seguirá trabajando, mientras éste cumpla con el tratamiento y la rehabilitación, siempre que no represente riesgo a la salud y seguridad pública.

(e) En aquellos casos en donde la permanencia del funcionario o empleado en el empleo representa un riesgo a la salud o a la seguridad de éste o la de los demás empleados del municipio, aplicarán las mismas condiciones establecidas en el inciso (f) de este Artículo.

(f) En aquellas circunstancias en que el funcionario o empleado requiera tiempo para asistir al tratamiento en los casos provistos en el inciso anterior de este Artículo, se le cargará el tiempo ausente, en primera instancia, a la licencia por enfermedad acumulada. Cuando éste no tenga balance acumulado en dicha licencia, se le cargará en tiempo compensatorio o a la licencia por vacaciones acumulada y en última instancia, se le concederá una licencia sin sueldo hasta un término máximo de seis (6) meses.

(g) En el caso de que se trate de un funcionario o empleado reincidente, el municipio no tendrá que cumplir con el requisito de orientación, tratamiento y rehabilitación establecido en este Capítulo. En este caso, el municipio no tendrá que otorgar los beneficios de tiempo compensatorio, licencia por vacaciones y licencia sin sueldo dispuestos en este Artículo ni absorber los costos del tratamiento y la rehabilitación. En este caso, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12.011 de este Capítulo.

Artículo 12.012.-Despido o destitución como excepción; garantías procesales

(a) Se suspenderá inmediatamente a todo funcionario o empleado que no ocupe un puesto o cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policía Municipal que arroje un primer resultado positivo en una prueba para la detección de sustancias controladas, sin privarle de su sueldo o remuneración, hasta

tanto se realice una vista con las garantías procesales mínimas contempladas en el inciso (b) de este Artículo.

Si luego de la celebración de la vista, se mantiene la determinación original adversa al funcionario o empleado, el Municipio procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12.010 de este Capítulo.

(b) No se podrá despedir o destituir a un funcionario o empleado del puesto o cargo que ocupa por arrojar un resultado positivo corroborado en la prueba inicial para la detección de sustancias controladas. No obstante, a modo de excepción, se podrá despedir o destituir al funcionario o empleado:

(1) Cuando por la propia naturaleza del empleo, la condición detectada resulte irremediablemente incompatible con el desempeño efectivo de las funciones y deberes del puesto o cargo.
Se declara irremediablemente incompatible con el uso de sustancias controladas, todo puesto o cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policía Municipal.

(2) Cuando el funcionario sea el designado por el Alcalde para ordenar la administración de pruebas o sea el Funcionario Enlace; disponiéndose que en tal caso se podrá optar por la suspensión sin sueldo o cualquier otra sanción o medida correctiva que se disponga mediante reglamento.

(3) Cuando el funcionario o empleado se niega a participar en el plan de rehabilitación adoptado por la agencia cuando así se le requiera; disponiéndose que en tal caso se podrá optar por la suspensión sin sueldo o cualquier otra sanción o medida correctiva que se disponga mediante reglamento.

(4) Cuando se trate de un funcionario o empleado reincidente; disponiéndose que en tal caso se podrá optar por la suspensión sin sueldo o cualquier otra sanción o medida correctiva que se disponga mediante reglamento.

(c) En todos los casos en donde se disponga tomar medidas correctivas, acciones disciplinarias, suspensiones, destituciones o despidos se deberá cumplir con las garantías procesales mínimas de notificación y vista, en donde el funcionario o empleado tenga la oportunidad de ser oído, que pueda presentar evidencia a su favor e impugnar la evidencia presentada en su contra y donde pueda presentar las defensas que le asistan. Dicha vista deberá realizarse no más tarde de veinte (20) días a partir de la notificación de la medida correctiva, acción disciplinaria, suspensión, destitución o despido.

Artículo 12.013.-Confidencialidad de los resultados y de los récords de incidentes

Toda información, formulario, informe, entrevista o declaración relacionado con el resultado de las pruebas de drogas y los récords de incidentes que generen sospechas de que algún funcionario o empleado se encuentra desempeñando sus funciones o deberes bajo el efecto de sustancias controladas, se mantendrá separado del expediente de Personal, será considerado información "Confidencial" y no podrá ser revelado, excepto:

a) al funcionario o empleado que haya sido sometido a la prueba;
b) a cualquier persona designada por éste por escrito para recibir dicha información;
c) a funcionarios o empleados designados por la Agencia para ese propósito; y
d) a los proveedores de tratamiento y planes de rehabilitación para el usuario de sustancias controladas, cuando el funcionario o empleado preste su consentimiento expreso.

El municipio deberá emplear el mayor grado de diligencia en custodiar y preservar la confidencialidad de los resultados.

Artículo 12.014.-Uso de resultados en procedimiento Administrativo, Civil o Criminal

Ningún resultado positivo a pruebas de detección de sustancias controladas administradas por un municipio podrá ser utilizado como evidencia en un proceso administrativo, civil o criminal contra el funcionario o empleado, excepto cuando se trate de la impugnación de dicho resultado o del procedimiento bajo el cual se obtuvo el mismo.

Artículo 12.015.-Revisiones y apelaciones de las determinaciones del municipio

El funcionario o empleado podrá revisar o apelar las determinaciones del municipio, relacionadas

Artículo 12.015.-Revisiones y apelaciones de las determinaciones del municipio

El funcionario o empleado podrá revisar o apelar las determinaciones del municipio, relacionadas con las pruebas de detección de sustancias controladas contempladas en este Capítulo, según lo dispuesto en leyes aplicables.

Artículo 12.016.-Responsabilidad del municipio

Todo municipio, que discrimine contra un funcionario o empleado en contravención a lo dispuesto en este Capítulo, o que no cumpla con las normas de confidencialidad establecidas en la misma, será responsable de los daños que ocasione a éste.

El Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia que dicte en acciones civiles interpuestas bajo las precedentes disposiciones, podrá ordenar al Alcalde que reponga en su empleo al funcionario o empleado.

Artículo 12.017.-Responsabilidad civil del municipio

Nada de lo dispuesto en este Capítulo autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el municipio o sus funcionarios o empleados, por cualquier acción o determinación tomada a tenor con un resultado certificado de una prueba para la detección de sustancias controladas administrada por una entidad privada.

Artículo 12.018.-Sanciones y penalidades

La violación de cualesquiera de las disposiciones de este Capítulo conllevará la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones administrativas: amonestación escrita, suspensión de empleo y sueldo, la destitución o despido.

No obstante, toda persona que a sabiendas y voluntariamente divulgue o haga uso indebido de la información relacionada a o los resultados obtenidos en el proceso de la administración de pruebas para detectar el uso de sustancias controladas, según dispone este Capítulo, o que violare sus disposiciones o la reglamentación que se promulgue a su amparo, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada por cada violación con pena de reclusión por un término fijo de un año o multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.

De mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un día o hasta mil (1,000) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.

Toda persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o empleo municipal o estatal, sujeto a lo dispuesto en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, para lo cual se entenderá supletoria.
Los delitos aquí establecidos prescribirán a los cinco (5) años.

Artículo 12.019.-Asambleas Municipales

Se autoriza a las Asambleas Municipales a establecer, mediante Resolución, programas permanentes para la detección de sustancias controladas que empleen pruebas confiables que permitan identificar a los funcionarios y empleados ususarios de drogas, para tratarlos y rehabilitarlos en aquellos casos en que este Capítulo así lo disponga, para que puedan desempeñar fiel y cabalmente sus funciones y deberes en el servicio público. No obstante, toda reglamentación y programa permanente adoptado por las Asambleas Municipales para los fines antes mencionados, deberá estar acorde con las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 12.020.-Prohibición de discrimen

No se podrá establecer, en la implantación u operación de las disposiciones de este Capítulo, discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas

o religiosas."

Sección 5.-Separabilidad

Si cualquier parte, artículo, párrafo, sección o cláusula de esta Ley fuese declarada nula por un Tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto sólo afectará aquella parte, párrafo o sección cuya nulidad haya sido declarada.

Sección 6.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, a los efectos del funcionamiento e implantación de sus disposiciones, dentro de un (1) año de su aprobación:

a) Todo municipio deberá realizar toda reorganización estructural necesaria y aprobará los reglamentos, procedimientos, formularios y todos los procesos administrativos y operacionales para la implantación de las disposiciones de esta Ley.
b) Dentro del período antes mencionado, las oficinas de personal de los municipios, el Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, deberán haber comenzado todo asesoramiento o adiestramiento a los funcionarios y al personal directivo de los municipios, según lo dispuesto en esta Ley.
c) A partir de un (1) año de la aprobación de esta Ley, todo municipio deberá entender en todas y cada una de las disposiciones que esta Ley le asigne."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de lo Jurídico del Senado, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1155, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1155 propone enmendar el inciso (o) del Artículo 3.009; derogar el inciso (3) del actual Artículo 12.005; renumerar como IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI, y XII y sus respectivos Artículos; y adicionar un nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo en los municipios, autorizar a éstos a establecer Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional orientados al tratamiento y rehabilitación del usuario; reglamentar la administración de pruebas de drogas en el empleo; y fijar penalidades.

Para poder evaluar y estudiar la medida y hacer las recomendaciones pertinentes se procedió a realizar un exhaustivo estudio del récord de la medida según fuera aprobada la misma por la Cámara de Representantes.

Se procedió además a realizar un estudio de los siguientes memoriales: Departamento de Justicia, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Oficina Central de Administración de Personal, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, Departamento de Estado, Municipio de San Juan, Ponencia del Lcdo. Héctor Torres Jorge, Director de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de Toa Baja, Ponencia del Alcalde de Ponce, Hon. Rafael Cordero Santiago, Ponencia del Municipio de Manatí presentada por el Sr. Irving Piñeiro en representación del Honorable Alcalde Juan A. Cruz Manzano y Ponencia del Lcdo. Raúl Santiago en representación del Municipio de Quebradillas.

Toda vez que "requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo" parece estar en contradicción a las disposiciones constitucionales referentes "al derecho a la dignidad

e intimidad" garantizados por nuestra Constitución, se hizo necesario un estudio de las disposiciones legales aplicables.

Se realizó además un estudio sobre la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997, conocida como "Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector Público" y las disposiciones aplicables de la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado Puerto Rico".

De la Exposición de Motivos del P. de la C. 1155, en su primer párrafo leemos y citamos: " La Ley Núm. 26 de 28 abril de 1996 enmendó los Artículos 3.009, 12.005 y 12.018 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de que los Alcaldes puedan requerir a toda persona a ser reclutada, a todo funcionario o empleado a quien se considere para ascenso y a todo funcionario y empleado del municipio cuyas labores estén estrecha y directamente relacionadas con la seguridad y salud, que se sometan a pruebas de diagnóstico de uso de sustancias controladas.

El Artículo 3.009 - Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde - en su inciso (o), vigente,lee de la siguiente manera -

(o)" ,,,. El Alcalde podrá requerir a toda persona a ser reclutada, a todo funcionario o empleado a quien se considere para ascenso o a todo funcionario o empleado del municipio cuyas labores estén estrecha y directamente relacionadas con seguridad pública, la administración de los servicios de salud o con el manejo de sustancias controladas, que se someta a una prueba de diagnóstico de uso de sustancias controladas, a tenor con las disposiciones establecidas en esta Ley. Previo a ésto, el Alcalde deberá establecer un Programa de Prevención y Ayuda Ocupacional y someter para la aprobación de la Asamblea el reglamento que regirá los procedimientos para la administración y control de las pruebas de drogas. Además, deberá contratar entidades cualificadas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para realizar dichas pruebas".

El Artículo 12.005 - Areas Esenciales al Principio de Mérito - de la "Ley de Municipios Autónomos" en su parte pertinente dispone lo siguiente:

"Se considerarán esenciales al principio de mérito las siguientes áreas de la administración del personal municipal:

... El municipio deberá adoptar un reglamento con relación a las áreas esenciales al principio de mérito. Dicho reglamento deberá incluir todas aquellas áreas de personal que, aún cuando no sean esenciales al principio de mérito, sean necesarias para lograr un sistema de admimistración de personal moderno y equitativo que facilite la aplicación de mérito.

A tenor con ésto, el municipio podrá hacer formar parte de este reglamento o en su lugar, adoptará un reglamento separado que recoja los procedimientos de pruebas de sustancias controladas. Este reglamento deberá disponer entre otros:

1. La protección de la confidencialidad de los procedimientos y resultados de las pruebas de sustancias controladas.
2. Los mecanismos de control de procedimiento y las normas a implantarse para administar la prueba.
3. Garantías constitucionales apropiadas del derecho a la intimidad del empleado o funcionario, incluyendo; la descripción del programa para la detección de presencia de sustancias controladas y del programa preventivo y de ayuda ocupacional; requerir evidencia de que el empleado recibió copia del reglamento sobre ambos programas; requerir un consentimiento escrito para someterse a las pruebas y para el acceso del patrono y del empleado a los resultados; especificar con claridad bajo qué circunstancias un empleado estará sujeto a las pruebas, definir el tipo de pruebas y las sustancias a detectarse.

El Artículo 12.018 de la citada Ley, en su apartado (4) dispone:

(4) Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional -

Previo a la adopción de las disposiciones para requerir la prueba de drogas del Artículo 3.009 el municipio deberá establecer un Programa Preventivo y de Ayuda Ocupacional con el Asesoramiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. ...

Surge claramente de la "Ley de Municipios Autónomos" que los municipios están autorizados a requerir pruebas para la detección de sustancias controladas a toda persona a ser reclutada, a todo funcionario o empleado a quien se considere para ascenso o a todo funcionario o empleado del municipio, cuyas labores estén estrecha y directamente relacionadas con la seguridad pública, la administración de los servicios de salud o con el manejo de sustancias controladas.

La medida bajo estudio tiene la intención de incorporar, en la Ley de Municipios Autónomos , las disposiciones de la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997 conocida como " Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el Sector Público".

La Ley Núm. 78, antes citada, no incluye a los municipios y mediante esta enmienda a la "Ley de Municipios Autónomos" se logra el objetivo enunciado y se establecen los requisitos a ser adoptados mediante reglamentación y uniformar los procedimientos.

Los programas a establecerse previos a requerir que el empleado se someta a pruebas diagnósticas para detectar la presencia de sustancias controladas a los fines de garantizar al empleado su derecho constitucional a la intimidad, los principios de mérito, garantizarle que su dignidad no será violada y que no se harán registros irrazonables en su persona.

Los Derechos Contitucionales de los empleados deben protegerse y salvaguardarse celosamente.
La "Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza que dondequiera que una persona ostente una expectativa razonable de intimidad, estará protegida contra registros y allanamientos irrazonables.

En Puerto Rico, bajo la Ley 78, citada anteriormente, aplicable a los empleados del sector público, se les requiere que se someta a la detección de drogas como requisito previo al empleo y posteriormente se les podrá requerir como condición para continuar en el empleo o para ascenso.

También la Ley provee para que el Gobierno Central y los Municipios desarrollen Programas de Rehabilitación y Programas de Ayuda al Empleado.

Los programas para la detección de drogas en el empleo, no sólo se están aplicando en el gobierno y en los municipios, también se ha extendido a la industria privada, siempre y cuando se ofrezcan todas las garantías constitucionales y se protejan los derechos de los empleados.

Aún en la industria privada, aquellas personas que se desempeñan o que puedan ocupar cargos en "áreas sensitivas o de seguridad pública", están sujetas a las pruebas para la detección de drogas en el empleo.

La legalidad de los procedimientos para la detección de drogas previo al empleo y durante el empleo ha sido ampliamente sostenida por los Tribunales tanto Estatales como Federales.

Una de las prohibiciones más importantes entre otras es que el resultado de las pruebas no pueden ser utilizados para fines de procesamiento criminal.

La Asamblea Legislativa está comprometida con la salud y seguridad de los funcionarios y empleados de los Municipios de Puerto Rico y de la ciudadanía en general. Para lograr este objetivo es necesario la aprobación de toda legislación conducente a lograrlo siempre y cuando los procedimientos que se establezcan sean a tono con nuestra Constitución y la de los Estados Unidos y los mecanismos que se establezcan sean razonables, no abusivos y que ofrezcan todos los salvaguardas de aquellos derechos de los ciudadanos que

están constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho a la intimidad y a la protección contra registros irrazonables.

Por último deseamos informar que todas las entidades consultadas y aquellas personas que ofrecieron sus ponencias respecto a la medida apoyan y endosan sus aprobación.

Al presente hay seis (6) municipios que cuentan con uno o más Programas de Detección de Drogas y Ayuda al Empleado, estos son los Municipios de Peñuelas, Guaynabo, San Juan, Toa Baja, Ponce y Quebradillas.

El Departamento de Justicia en su opinión expresa lo siguiente; "Analizada la medida, el Departamento de Justicia no tiene objección de carácter legal a que la Asamblea Legislativa extienda a los empleados municipales la reglamentación sobre la administración de pruebas para detectar la presencia de sustancias controladas aplicables a los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva a fin de cumplir la política pública de conservar y proteger un ambiente de trabajo seguro y tranquilo, libre de drogas.

Los empleados municipales son empleados públicos, al igual que los de la Rama Ejecutiva. Como tales forman parte del gobierno de Puerto Rico y les aplica sustancialmente la legislación de personal vigente a nivel central, en diversas áreas según se dispone particularmente en las leyes relacionadas con la materia".

No ofrece reparo alguno a la aprobación de la medida.

CONCLUSION

Ante la realidad del problema de drogas en Puerto Rico se hace necesario aprobar legislación que sirva de control al problema y a la vez provea remedios al mismo.

Cada día se hace imperativo romper los eslabones de la cadena de problemas íntimamente vinculados al uso de sustancias controladas.

Todos queremos un Puerto Rico libre de drogas y es política pública el radicar el uso, posesión, distribución y tráfico ilegal de sustancias controladas.

La medida bajo consideración propone cerrar las puertas al uso de drogas en el área de los empleados municipales.

RECOMENDACION

En mérito de lo antes expuesto, y no habiendo reparos legales ni constitucionales a la medida y habiéndose aprobado legislación anterior relacionada con el mismo asunto, Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de lo Jurídico del Senado, tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 1155 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1262, titulada:

"Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 1262, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1263, titulada:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación de rejas y mejoras permanentes en la Escuela Ramón Quiñonez Pacheco de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1264, titulada:

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Isabela y San Sebastían la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 1264, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1277, titulado:

"Para establecer la "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, Susúa, Guánica, Toro

Negro, Guilarte y Pueblo de Adjuntas", la cual ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que identifique los terrenos ubicados entre éstos bosques estatales; demarque los terrenos a utilizarse para trazar dos (2) corredores biológicos que unan los mismos; delimite las zonas de amortiguamiento necesarias; determinen la forma de adquisición de los terrenos a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier derecho sobre los mismos, que resulten comprendidos por los corredores biológicos y por las zonas de amortiguamiento; y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales de se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 201, titulada:

"Para asignar al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC), la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de fondos no comprometidos para adelantar sus fines y propósitos de conformidad con la política."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala.
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 2, línea 6, a la 9, tachar todo su contenido. En el texto, página 2, líneas 3 y 4, tachar desde "especial" hasta "enmendada" y sustituir por "para gastos de funcionamiento de sus programas. Sección 2.- Se autoriza al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC) a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales." Página 2, línea 5, tachar "2" y sustituir por "3". Página 2, línea 9, tachar "3" y sustituir por "4".
Esas son las enmiendas en Sala.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de pedir la aprobación de la medida, quisiéramos dejar constado para el récord, que aquí en el Senado aprobamos la Resolución Conjunta del Senado 155, que procuraba lo mismo que esta Resolución Conjunta de la Cámara 201, la medida fue radicada en ambos Cuerpos, aquí por este Senador, y en la Cámara por el Presidente de la Comisión de la Montaña, el compañero José Luis Jiménez, la gestión de conseguir los fondos la hicimos en conjunto y hemos acordado aprobar la versión de la Cámara, por eso es que vamos a pedir en este momento la aprobación de esta medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título.
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, líneas 2 y 3, tachar desde "para adelantar" hasta "política" y sustituir por ", para gastos de funcionamiento de sus programas y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
Esas son las enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1413, titulado:

"Para enmendar el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra para armonizarlo al de los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección

y Rehabilitación, y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1380, titulado:

"Para designar la última semana del mes de junio de cada año como la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", disponer sobre la Proclama anual que deberá emitirse y derogar la Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996."

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos.
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, le solicitaba al señor Portavoz y él, con su gentileza acostumbrada, accedió a mi pedido por consentimiento unánime para hacer unas expresiones breves sobre un asunto en este momento, para que conste en el récord.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante.
SR. BERRIOS MARTINEZ: Tarde en la noche de anoche se determinó aquí y se le informó a los Senadores que estaban presentes, que temprano en el día de hoy se iba a votar el proyecto relacionado con la administración de Acueductos. Este servidor no estaba aquí cuando eso se informó. Yo me había excusado con el señor Portavoz del Senado, de que no iba a poder estar presente.
En el día de hoy, yo estoy en mi oficina hace un rato de tiempo, me acabo de enterar que se votó el proyecto a las once y pico de la mañana. Yo no pude votarlo, yo me opongo tenazmente a ese proyecto, y quiero que quede constancia en el récord del Senado, que yo me opongo al proyecto, que obviamente, si vuelve a la Cámara, me opondré también, que hubiera consumido un turno en contra para explicarle las razones, que no voy a tomarle el tiempo ahora en el Senado porque los compañeros ya discutieron y aprobaron el proyecto.
Así es que quede constancia de mi oposición vehemente a ese proyecto que se aprobó en el Senado.
Muchas gracias.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1380, titulado:

"Para designar la última semana del mes de junio de cada año como la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", disponer sobre la Proclama anual que deberá emitirse y derogar la Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1544, titulada:

"Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1488, titulado:

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las contrataciones de índole contingente y las funciones del Director de Finanzas municipal con respecto a éstas."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1796, titulado:

"Para declarar Monumento Histórico de Puerto Rico la Iglesia de la Inmaculada Concepción, localizada en la Calle Almodóvar Núm. 18, en el municipio de Juncos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2066, titulada:

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil (10,000) dólares del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo las siguientes mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1155, titulado:

"Para enmendar el inciso (o) del Artículo 3.009; derogar el inciso (3) del actual Artículo 12.005; renumerar como IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI y XII y sus respectivos Artículos; y adicionar un nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo en los municipios, autorizar a éstos a establecer Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional orientados al tratamiento y la rehabilitación del usuario; reglamentar la administración de pruebas de drogas en el empleo; y fijar penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar una segunda Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1125, Proyecto del Senado 570; Proyecto de la Cámara 866; Proyecto del Senado 1172, Proyecto del Senado 1236; Resolución Conjunta de la Cámara 2092; Proyecto de la Cámara 2142; Proyecto del Senado 1413, Proyecto del Senado 1380; Resolución Conjunta de la Cámara 1544; Proyecto de la Cámara 1488, Proyecto de la Cámara 1796; Resolución Conjunta de la Cámara 2066; Proyecto de la Cámara 1155; Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1524; Concurrencia al Proyecto del Senado 1278; Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 1185; Resolución Conjunta del Senado 1262, Resolución Conjunta del Senado 1263, Resolución Conjunta del Senado 1264; Proyecto de la Cámara 1277, Resolución Conjunta de la Cámara 201.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 570

"Para establecer la política pública que regirá los Festivales Playeros y actividades sociales análogas en Puerto Rico; facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que adopte los reglamentos, requisitos y mecanismos procesales para su celebración; asignar responsabilidades e imponer penalidades."

P. del S. 1125

"Para enmendar la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera", para disponer que puede establecerse quórum con por lo menos tres (3) funcionarios públicos o sus representantes autorizados por el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura; eliminar la entidad TROPICO de dicho Consejo; adscribir el Programa Pesquero al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración de la Industria Pesquera y Acuacultura del Departamento de Agricultura; enmendar el Artículo 10 para variar la composición del Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras."

P. del S. 1172

"Para enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a fin de disponer expresamente la aplicación de esos artículos adicionados por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según enmendados, así como los beneficios que establecen, a los miembros y ex-miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos."

P. del S. 1236

"Para proteger y garantizar la intimidad de los ciudadanos, creando regulación que limite y reglamente el uso de la información genética."

P. del S. 1380

"Para designar la última semana del mes de junio de cada año como la "Semana del Radioaficionado de Puerto Rico", disponer sobre la Proclama anual que deberá emitirse y derogar la Ley Núm. 50 de 7 de junio de 1996."

P. del S. 1413

"Para enmendar el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra para armonizarlo al de los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento."

R. C. del S. 1262

"Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos."

R. C. del S. 1263

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación de rejas y mejoras permanentes en la Escuela Ramón Quiñonez Pacheco de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. C. del S. 1264

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Isabela y San Sebastían la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados."

P. de la C. 866

"Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", a los fines de aclarar el concepto de pequeño comerciante detallista cubierto por la excepción

de dicho artículo aumentando a tres los negocios que un miembro puede poseer siempre que cada negocio tenga un volumen de ventas de un millón de dólares ($1,000,000) y no mas de siete (7) empleados, para formar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al Administrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones anuales en reconocimiento del status de estos grupos y cobrar por las mismas y; para que el dinero cobrado sea depositado en un fondo especial a ser utilizado por el Administrador para que pueda cumplir con sus responsabilidades de ley; y facultarlo para promulgar los reglamentos que fueren necesarios para poner en efecto las disposiciones de esta Ley."

P. de la C. 1155

"Para enmendar el inciso (o) del Artículo 3.009; derogar el inciso (3) del actual Artículo 12.005; renumerar como IX, X y XI, los actuales Capítulos X, XI y XII y sus respectivos Artículos; y adicionar un nuevo Capítulo XII a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de requerir pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a empleo en los municipios, autorizar a éstos a establecer Programas de Prevención y Ayuda Ocupacional orientados al tratamiento y la rehabilitación del usuario; reglamentar la administración de pruebas de drogas en el empleo; y fijar penalidades."

P. de la C. 1277

"Para establecer la "Ley para la Unificación de los Bosques Estatales de Maricao, Susúa, Guánica, Toro Negro, Guilarte y Pueblo de Adjuntas", la cual ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que identifique los terrenos ubicados entre éstos bosques estatales; demarque los terrenos a utilizarse para trazar dos (2) corredores biológicos que unan los mismos; delimite las zonas de amortiguamiento necesarias; determinen la forma de adquisición de los terrenos a nombre y en representación del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier derecho sobre los mismos, que resulten comprendidos por los corredores biológicos y por las zonas de amortiguamiento; y para otros fines."

P. de la C. 1488

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aclarar el alcance de la facultad delegada a los municipios relativa a las contrataciones de índole contingente y las funciones del Director de Finanzas municipal con respecto a éstas."

P. de la C. 1796

"Para declarar Monumento Histórico de Puerto Rico la Iglesia de la Inmaculada Concepción, localizada en la Calle Almodóvar Núm. 18, en el municipio de Juncos."

P. de la C. 2142

"Para enmendar las secciones 17 y 22 de la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, para corregir errores técnicos."

Informe del Comité de Conferencia
P. de la C. 1524

R. C. de la C. 201

"Para asignar al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC), la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de fondos no comprometidos, para gastos de funcionamiento de sus programas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. C. de la C. 1544

"Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales."

R. C. de la C. 2066

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil (10,000) dólares, del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo las siguientes mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para proveer el pareo de los fondos."

R. C. de la C. 2092

"Para enmendar el Artículo 3 de la Res. Conj. Núm. 209 de 24 de junio de 1988, que autorizó y aprobó la venta de las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, a fin de aumentar la cantidad del producto neto de dicha venta a ser aportada al Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Puerto Rico."

Concurrencia con las Enmiendas introducidas
por la Cámara de Representantes al
P. del S. 1278

Concurrencia con las Enmiendas introducidas
por la Cámara de Representantes a la
R. C. del S. 1185

VOTACION

El Proyecto del Senado 1380; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1262; 1263; los Proyectos de la Cámara 1277; 1796 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1544; 2066, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 22

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

Los Proyectos del Senado 570; 1125; 1172; 1236; 1413; la Resolución Conjunta del Senado 1264; los Proyectos de la Cámara 866; 1155; 1488; el Informe de Conferencia al Proyecto de la Cámara 1524; la Resolución Conjunta de la Cámara 201 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1278 y la Resolución Conjunta del Senado 1185, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 21

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Rubén Berríos Martínez

Total 1

El Proyecto de la Cámara 2142 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2092, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 15

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

Total 7

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTOS DEL SENADO

P. del S. 1434
Por la señora Otero de Ramos:

"Para enmendar la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, a fin de adicionar la Sección 15A y disponer el tratamiento compulsorio, coordinado entre la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción y los Departamentos de Salud, de la Familia y de Educación, de toda embarazada menor o mayor de edad dependiente a sustancias; así como la aprobación conjunta de la reglamentación correspondiente."
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)

P. del S. 1435
Por las señoras Carranza De León y Otero de Ramos:

"Para establecer e implantar la política pública dirigida a atender el problema de comportamiento suicida y a esos fines crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio, establecer sus deberes y responsabilidades y asignar recursos fiscales."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE HACIENDA)

P. del S. 1436
Por el señor McClintock Hernández:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS)

P. del S. 1437
Por la señora Carranza De León:

"Para establecer el Programa para la Prevención del Suicidio en las Escuelas; autorizar al Departamento de Educación a coordinar con las demás agencias e instituciones que proveen recursos especializados; crear el fondo para la Prevención del Suicidio; y adoptar la reglamentación necesaria."
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO

R. C. del S. 1262
Por la señora Berríos Rivera:

"Para reasignar al municipio de Orocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 del 2 de septiembre de 1996, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos."
(HACIENDA)

RESOLUCION DEL SENADO

R. del S. 2014
Por los señores Agosto Alicea y Ramos Olivera:

"Para extender la más cálida y cordial felicitación a la Srta. Brenda Liz López por haber sido seleccionada "Miss Puerto Rico Universe 1999"."
(ASUNTOS INTERNOS)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 2034, Resolución Conjunta de la Cámara 2037, Resolución Conjunta de la Cámara 2042, Resolución Conjunta de la Cámara 2043, Resolución Conjunta de la Cámara 2044, Resolución Conjunta de la Cámara 2069, Resolución Conjunta de la Cámara 2083, Resolución Conjunta de la Cámara 2109, Resolución Conjunta de la Cámara 2111, Resolución Conjunta de la Cámara 2117, Resolución Conjunta de la Cámara 2118, Resolución Conjunta de la Cámara 2119, Resolución Conjunta de la Cámara 2120, Resolución Conjunta de la Cámara 2121, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2084 y 1875, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar también, que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2113, 2114, 2115, 2116, 2045, 2048, 2055, 2056, 2084 y 1874, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Repito, señora Presidenta, para beneficio de la Secretaria: Resolución Conjunta de la Cámara 2113, Resolución Conjunta de la Cámara 2114, Resolución Conjunta de la Cámara 2115, Resolución Conjunta de la Cámara 2116, Resolución Conjunta de la Cámara 2045, Resolución Conjunta de la Cámara 2048, Resolución Conjunta de la Cámara 2055, Resolución Conjunta de la Cámara 2056, Resolución Conjunta de la Cámara 2084, Resolución Conjunta de la Cámara 1874, Resolución Conjunta de la Cámara 1875, Resolución Conjunta de la Cámara 2084, y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. Okey, pues la 2084 ya estaba incluida y la 1875, también.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Educación y Cultura, a la de Recreación y Deportes de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1812, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, de tener que informar el Proyecto del Senado 1436, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 1021, que fue aprobada el pasado día 11, el día de ayer, 11 de noviembre de 1998, a fines de corregir un error.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción?

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora senadora Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Secundamos la corrección que se hace de la R. C. del S. 1021.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en este tercer Calendario de Ordenes Especiales del día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2034, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), a los fines de cambiar el propósito previamente establecido y destinar su uso según se detalla en la Sección 1, y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), para los siguientes propósitos:

a) Para el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto de extensión de línea primaria, servicios nuevos en los Solares Ferrer en la Carretera 335, Km. 10.6 del Barrio Indios de Guayanilla $7,842. 85

b) Reparación de hogares de las siguientes personas:

1. Ramón L. Quiñonez - Bo. Macaná del Río HC 01, Box 11005 - Guayanilla, PR 00656 Seguro Social 583-11-3372 . . . . . 255.00
2. Hilda Cales González - Bo. Macaná , Sector Parcelas, HC 01, Box 6628, Guayanilla, P.R. 00656 - Seg. Soc. 582-53-6144 . . . . . 255.00
3. Judith Cedeño Cornier - Bo. Quebradas Sector Parcelas - Núm. 144, Guayanilla, P.R. 00656 -Seg. Social: 584-46-9503 . . . . . 255.00
4. Rosalina García Román - Bo. Macaná Sector Cotuí, P.O. Box 561015, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S. 584-10-4697 . . . . . 272.15
5. Oleda Nieves Plaza - Bo. Piedras Blancas HC 01, Box 7653, Guayanilla, PR 00656 . . . . . 255.00
6. Gladys Caraballo Rodríguez - Parcelas Nuevas, Jagua Tuna, Calle 2-A #213 HC 01, Box 6747 - Guayanilla, PR 00656 Seg. Social 581-71-9673 . . . . . 255.00
7. Silvia Román González - Bo. Quebradas, Sector Parcelas #15, Guayanilla, P.R. 00656 - (Postal) Apartado 254 - Yauco, PR 00698) - Seg. Soc. 581-08-0305 . . . . . $255.00
8. Gladys Bengochea Rodríguez -Parcelas Nuevas - Jagua Tuna, Calle 6 #221 Box 6543 - Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 584-94-8138 . . . . . 255.00
9. Ana Luisa Anavitate Quinta - Parcelas Nuevas - Jagua Tuna, Calle 5 #307 HC 01, Box 5031,Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 583-06-4796255.00
10. Elsa Rodríguez Pacheco - Bo. Quebradas Sector Parcelas #120, HC 01, Box 9244 Guayanilla, P.R. 00656 - S.S. 583-60-3750 . . . . . 255.00
11. Matilde Ortíz Ramírez - Bo. Jagua Tunas, Parcelas Nuevas #238 - (Postal Calle Muñoz Rivera #280), Guayanilla PR 00656 - Seg. Soc. 584-82-9939 . . . . . 255.00
12. Adelaida Mercado Ramírez - Bo. Llanos, Sector Pimientos , HC 01, Box 7217 Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Soc. 583-18-3453 . . . . . 255.00

13. Gloria N. Ortíz Rivera - Bo. Faro, Calle Principal #7, HC 01, Box 7718, Guayanilla, PR 00656 -S.S: 583-17-1432 . . . . . 255.00
14. Amparo Pacheco Báez - Bo. Faro, Calle Principal -HC 01, Box 7702 Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Soc. 583-78-9705 . . . . . 255.00
15. Ida Figueroa Camargo - Bo. Faro, Calle Principal HC 01, Box 7706 Guayanilla, Puerto Rico 00656 . . . . . 255.00
16. Lucía Ramírez Oivo, Calle 25 de Julio, #56-A, Parcela Bo. Indios, HC 01, Box 7918, Guayanilla PR 00656 - Seg. Social: 581-30-2508 . . . . . $255.00
17. Nereida Borrero Rodríguez, Bo. Magas Arriba, Sector Parcelas #209, HC 01, Box 6776, Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Social: 583-60-3233 . . . . . 255.00
18. Concepción Ruíz Fraticell, Bo. Llanos, Sector Pimientos, HC 01, Box 7179, Guayanilla, PR 00656, Seg. Soc.: 581-16-6265 . . . . . 255.00
19. Arístida Torres Rodríguez, Bo. Indios, Sector Cuesta Blanca P. O. Box 560116, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S. 582-65-0197 . . . . . 255.00
20. Dora Rodríguez Ramos HC 01, Box 7596, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S: 583-21-7587 . . . . . 255.00
21. Julio Acosta Rodríguez, Bo. Magas Arriba, Sector Parcelas P. O. Box 560998, Guayanilla P.R. 00656, S.S. 581-72-3109 . . . . . 255.00
22. Amelia Rivera Mejías, Bo. Faro Calle Principal, HC 01, Box 7719 Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Soc. 582-17-2388 . . . . . 255.00
23. René Albarrán, Bo. Sierra Baja, Sector Buena Vista, HC 01, Box 6034, Guayanilla, P.R. 00656 Seg. Soc. 584-14-3332 . . . . . 255.00
24. Dolores Rivera Segarra, Bo. Jagua Tuna, Carr. 132 #116 D, HC 01, Box 6579, Guayanilla, P.R. 00656 Seg. Soc. 584-98-3462 . . . . . 255.00
25. Ananí Hernández, Parcelas Nuevas, Jagua Tuna, Calle 3 #340, HC 01, Box 9236, Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 581-15-7034 . . . . . $255.00
26. Madeline Nieves Torres, Bo. Magas Arriba, Calle 9 #213, Calle Dr. M.A. Sabala, Bda. Guaydía #171, Guayanilla,

PR 00656 -S.S. 583-39-8420 . . . . . 255.00

27. Rafael Oliveras Hernández, Calle 6 #197, Parcelas Nuevas, Jagua Tuna, HC 01, Box 6536, Guayanilla, P. R. 00656 - S.S. 584-37-3814 . . . . . 255.00

28. Aladino Feliciano Olivera, Bo. Llano, Sector Pimiento, Guayanilla, P. R. 00656 - S.S. 583-36-1959 . . . . . 255.00

TOTAL PARA REPARACIONES A HOGARES $7,157.15

GRAN TOTAL $15,000.00

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales y federales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2037, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505, de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 40, según se detalla a continuación:

1. Departamento de Salud
   a. Aportación a Sra. Ana Román Díaz para gastos médicos
      Seguro Social 580-50-7967
      Urb. Lourdes Calle Bernardette
      #680 Saint Just, Trujillo Alto
      Teléfono 292-1229 . . . . . $3,000.00

   b. Aportación al niño Josue Enoc Nery Alejandro para gastos médicos
      Seguro Social 596-30-6139
      Calle Delgado MI-A
      Villa Justicia, Carolina P. R. 00985
      Teléfono 757-7869 . . . . . 1,800.00

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2042, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil doscientos noventa y ocho (2,298) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil doscientos noventa y ocho (2,298) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales; equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm 40, según se detalla a continuación:

1. Departamento de la Familia
   a. Aportación a la Fundación Acción Social "El Shaddai", Inc.
   Para la compra de un horno de gas.
   Francisco Delgado - Presidente
   Calle Ignacio Arzuaga #203-07
   Teléfono 276-5500 . . . . . $1,500.00

   b. Aportación a Lillian Lugo Lugo para el pago de
   emergencia de utilidades: agua, luz y renta del hogar
   Seguro Social 584-75-0982
   Villa Carolina
   Blq. 171 #7 Calle 438
   Carolina, Puerto Rico 00985
   Teléfono 752-7598 . . . . . 648.00

   c. Aportación a Nuestra Señora del Consuelo para los gastos
   de funcionamiento.
   Sra. Magali Febres - Coordinadora
   P. O. Box 11663
   San Juan, Puerto Rico 00922 . . . . . 150.00

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2043, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil setecientos cincuenta (1,750) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil setecientos cincuenta (1,750) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, según se detalla a continuación:

1. Administración de Servicios Generales:
   a. Aportación al Consejo de Seguridad Vecinal de Saint Just
   para compra de materiales de construcción.
   Luis Iglesias Sierra- Presidente
   P. O. Box 488
   Saint Just, Puerto Rico 00978
   Teléfono 755-7972 . . . . . $750.00

   b. Aportación a José Sánchez Cruz para materiales
   de construcción.
   Seguro Social 581-71-3732
   Villa Palmera
   #343 Calle Merhoff
   San Juan, P. R. 00915
   Teléfono 268-6279 . . . . . $1,000.00

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2046, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejoras a la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejoras a la calidad de vida del Distrito Representativo Núm 40, según se detalla a continuación:

1. Administración de Servicios Generales:
   a. Aportación para los Decimonovenos Juegos Nacionales de Veteranos
   Silla de Ruedas 1999
   San Juan VA Medical Center
   Recreation Services
   Jomes A. Palmer, Director
   One Veterans Plaza
   San Juan, Puerto Rico 00927-5800
   Teléfono 766-5665

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2069, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para los fines que se mencionan en la Sección 1 y los propósitos allí expresados; y autorizar el pareo de fondos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para los fines que se disponen a continuación y los propósitos allí expresados.

Gobierno Municipal de Isabela

a. Clase Graduanda Escuela José C. Rosario
Sr. Alessay Arroyo, Director
Núm. Seg. Soc. 584-05-9526
872-2025 . . . . . $300.00

b. Sr. Edries Omar González Hernández
Núm. Seg. Soc. 583-90-0428
Para gastos de entrenamiento
para Juegos Panamericanos en Canadá $1,000.00

c. Voluntarios de la Defensa Civil
Sr. Angel Díaz, Encargado
Para la compra de radios portátiles
872-2100 . . . . . 300.00

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Isabela, a parear estos fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2083, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de tres mil quinientos cincuenta (3,550) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998 para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos según se describe en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos asignados y establecer vigencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Barranquitas la cantidad de tres mil quinientos cincuenta (3,550) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998 para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos según se describe a continuación:

1) WILLIAM PALMIRO LUNA
S.S. 582-69--082
BO. HELECHAL HC 01 BOX 2253
BARRANQUITAS, PR 00794 . . . . . $508.33
2) SONIA ROSADO FERNANDEZ
S.S. 582-15-1921
BO. HONDURAS HC 01-BOX 3583
BARRANQUITAS, PR 00794 . . . . . $508.33
3) CARMEN TORRES BURGOS
S.S. 583-51-2109
BO. HELECHAL HC-02-BOX 7894
AIBONITO, PR 00705 . . . . . 508.33
4) MARIA M. ESCALERA
S.S. 584-35-4684
BO. HONDURAS HC-01-BOX 3583
BARRANQUITAS, PR 00794 . . . . . 508.33
5) WILMA NEGRON SIERRA
S.S.
URB. SAN CRISTOBAL
E-13A CALLE 4
BARRANQUITAS, PR 00794 . . . . . 508.33
6) ESTHER APONTE SANCHEZ
S.S. 583-94-8179
BO. QUEBRADA GRANDE
SECTOR TRES CAMINOS
HC-01 BOX 5834
BARRANQUITAS, PR 00794 . . . . . 500.02
7) LUZ E. SANTIAGO CRUZ
S.S.
BO. PALO HINCADO
SECTOR EL PUENTE
CARR. 156 KM. 9.4 INT.
BARRANQUITAS, PR
BOX 12350 OROCOVIS, PR. 00720 . . . . . $508.33

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, municipales y/o privados.

Sección 3.-La cantidad de dos mil cincuenta (2,050) dólares provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, y la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998.

Sección 4.-El Gobierno Municipal de Barranquitas someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes un informe de liquidación a la terminación de las mejoras a viviendas que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2109, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, originalmente consignados para la adquisición de terrenos donde ubicaría un parque de beísbol de pequeñas ligas y softball en el sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos mediante la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de un parque recreativo deportivo en el barrio Arenales Altos de dicha municipalidad; autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se resigna al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares originalmente consignados para la adquisición de terrenos donde ubicaría un parque de beísbol de pequeñas ligas y softball en el sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos mediante la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de un parque recreativo en el barrio Arenales Altos de dicha municipalidad.

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Isabela a parear estos fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2111, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"LEY

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veintiun mil trescientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos (21,397.75) provenientes de la Resolución Conjunta 189 de 12 de junio de 1993, #cuenta 94-141-087-02-422, de la Resolución Conjunta 431 de 13 de agosto de 1995, #cuenta 96-141-087-02-601 y #cuenta 96-141-087-02-611 y Resolución Conjunta 416 de 11 de agosto de 1996, #cuenta 97-141-087-02-701; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social, para mejorar la calidad de vida y para gastos operacionales y de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veintiun mil trescientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos (21,397.75) provenientes de la Resolución Conjunta 189 de 12 de junio de 1993, #cuenta 94-141-087-02-422, de la Resolución Conjunta 431 de 13 de agosto de 1995, #cuenta 96-141-087-02-601 y #cuenta 96-141-087-611 y Resolución Conjunta 416 de 11 de agosto de 1996, #cuenta 97-141-087-02-701; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social, para mejorar la calidad de vida y para gastos operacionales y de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, federales y/o privados.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2117, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para mejoras a la Escuela Ernestina Bracero Pérez de Candelaria, a la Biblioteca de la Escuela de la Comunidad María Libertad Gómez de Levittown y al Centro de Reuniones de la American Association of Retired Persons de Levittown en Toa Baja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación y la recreación son elementos indispensables para la formación de personas sanas mental, emocional y físicamente. El estudio y adiestramiento perseverante en importantes áreas del quehacer humano hace de nuestra gente seres completos y realizados. Para disfrutar de una mejor educación y programas recreativos es menester que los niños cuenten con las facilidades y recursos necesarios para su mejor desarrollo.

La política pública vigente se distingue por su empeño en proveer a los ciudadanos con los recursos necesarios para su crecimiento y superación personal . Se hace menester el procurar el desarrollo integral de todos los ciudadanos. Al hacer esto nos beneficiamos de las aportaciones que esos ciudadanos plenamente desarrollados pueden hacer a nuestro país y a un mismo tiempo contribuimos a la paz y convivencia social que tanto anhelamos.

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida y procurar el bienestar de nuestra ciudadanía, al igual que su salud física, emocional y mental, este Legislador entiende necesario que proceda la reasignación de los fondos aquí dispuestos para el propósito antes indicado.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para los siguientes propósitos y distribuidos de la siguiente manera:

(A) Mejoras a la Escuela Ernestina Bracero Pérez de Candelaria en Toa Baja $10,000.00
(B) Mejoras a la Biblioteca de la Escuela de la Comunidad María Libertad Gómez $5,000.00
(C) Mejoras al Centro de Reuniones de la A.A.R.P. (American Association of Retired Persons) $2,000.00

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales, o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2118, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cinco mil dólares (5,000) provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del Barrio Ingenio de Toa Baja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es un elemento indispensable para la formación de personas sanas mental, emocional y físicamente. El estudio y adiestramiento perseverante en importantes áreas del quehacer humano hace de nuestra gente seres completos y realizados. Para disfrutar de una mejor educación es menester que los niños cuenten con las facilidades y recursos necesarios para su mejor desarrollo.

La política pública vigente se distingue por su empeño en proveer a los ciudadanos con los recursos necesarios para su crecimiento y superación personal . Se hace menester el procurar el desarrollo integral de todos los ciudadanos. Al hacer esto nos beneficiamos de las aportaciones que esos ciudadanos plenamente desarrollados pueden hacer a nuestro país y a un mismo tiempo contribuimos a la paz y convivencia social que tanto anhelamos.

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida y procurar el bienestar de nuestra ciudadanía, al igual que su salud física, emocional y mental, este Legislador entiende necesario que proceda la reasignación de los fondos aquí dispuestos para el propósito antes indicado.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de cinco mil dólares (5,000) provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del Barrio Ingenio de Toa Baja.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2119, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para compra de materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta Resolución Conjunta, tiene como finalidad transferir al Departamento de Servicios Sociales la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares, para compra de materiales y arreglos de vivienda. Estos fondos se reasignan de los fondos que originalmente fueron asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996. Los mismos no fueron utilizados por lo cual se encuentran disponibles para ser reasignados.

El Gobierno de Puerto Rico y la empresa privada han venido desarrollando, durante los últimos años, una gigantesca obra en la construcción y arreglo de viviendas en Puerto Rico; sin embargo, todavía hay importantes sectores de la población que habitan en viviendas inadecuadas y en un ambiente carente de algunos servicios y facilidades elementales. La falta de viviendas adecuadas y el hacinamiento en viviendas insalubres da lugar a serios problemas sociales y recarga los programas de gobierno en servicios de salud, educación, empleo, delincuencia y otros que afectan seriamente el adelanto social del país.

Esta Asamblea Legislativa entiende que es de alto interés público el que cada familia puertorriqueña habite bajo un techo apropiado que cubra sus necesidades básicas de vivienda, por lo cual entendemos que es meritorio reasignar estos fondos para realizar estas mejoras.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de qunice mil quinientos (15,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para la compra de materiales y arreglos de vivienda según se distribuye a continuación:

(a) Aportación para Tania Vázquez Romero
Seguro Social 131-58-1502
Parcela 398 C
Calle Fortaleza Interior, Bo. Campanillas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . $4,000.00

(b) Aportación para Emmanuel Pérez Ledesma
Seguro Social 581-41-4919
Parcela 148/Box 562
Calle Culto, Sabana Seca
Toa Baja, P.R. 00952 . . . . . 2,000.00

(c) Aportación para Ana Rosa Hernández
Seguro Social 584-12-7321
Parcela 602
Calle El Caño, Villa Calma, Ingenio

Toa Baja, P.R. 00950 . . . . . 2,000.00

(d) Aportación para Carlos A. Santiago Lugo
Seguro Social 584-35-8702
Calle Díaz P #200/Apartado 295
Sector Camasey, Sabana Seca
Toa Baja, P.R. 00952 . . . . . $1,500.00

(e) Aportación para Iris Merced Martin
Seguro Social 581-19-4398
calle 4 #396
Villa Hostos, Bo. Campanillas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . 2,000.00

(f) Aportación para Carmen Marrero Martínez
Seguro Social 583-64-1863
calle Lirio #74
Montebello, Antigua Calle Flamboyan,
Candelaria Arenas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . 1,000.00

(g) Aportación Diana Ayala Román
Seguro Social 581-31-2583
calle Lirio #45
Montebello, Candelaria Arenas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . 1,000.00

(h) Aportación para Camille Rivera de Jesús
Seguro Social 340-64-4168
calle Lirio #75
Montebello, Candelaria Arenas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . $1,000.00

(i) Aportación para Carmen Vázquez Rivas
Seguro Social 582-23-6792
calle Lirio #76
Montebello, Candelaria Arenas
Toa Baja, P.R. 00949 . . . . . 1,000.00

Total **$15,500.00**

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales, o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2120, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agostode 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente consignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta Resolución Conjunta tiene como finalidad reasignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación. Estos fondos se reasignan de los fondos que originalmente fueron asignados a la Compañía de Fomento recreativo mediante la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996. Los mismos no fueron utilizados por lo cual se encuentran disponibles para ser reasignados.

La Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones del Departamento de Educación recientemente participó de la Convención Anual del GED en Chicago, Illinois. Allí se discutieron varios aspectos y maneras de mejorar los procesos educativos mediante el uso de nueva tecnología. Entre los aspectos discutidos se encuentran: la preparación de informes estadísticos en computadora y el envío de programas de computadora para acelerar los procesos de corrección de exámenes. Al usarse el nuevo equipo computarizado se logra mejorar los servicos de calidad y excelencia que se ofrecen al estudiantado.

Esta Asamblea Legislativa entiende que para mejorar la calidad de la educación en nuestro país es menester contar con aquellos recursos, materiales y equipo tecnológico de actualidad que sean necesarios; Por lo cual entendemos que es meritorio reasignar estos fondos para la compra de este equipo computarizado.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agostode 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente consignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2121, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 se asignó al Municipio de Toa Baja la cantidad de setecientos cuarenta y cinco mil (745,000) dólares para realizar actividades que promovieran el bienestar social, deportivo, educativo y cultural en la comunidad, y de esta manera mejorar la calidad de vida en la misma. De estos fondo hubo una partida sobrante de dieciocho mil cincuenta y nueve dólares con setenta y nueve centavos ($18,059.79). Estas partidas sobrante está distribuida de la siguiente manera:

La Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, en su inciso (e) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(E) Mejoras al Centro Comunal El Plantío $4,758.50

La Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, en su inciso (B) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(B) Construcción de verja alrededor del Antiteatro Julita Ross en Levittown 3,441.24

La Resolución Conjunta Núm. 116 de 8 de agosto de 1993, en sus incisos (VI, VII) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(VI) Mejoras al Estadio Tercera Sección de Levittown 6,000
(VII) Mejoras al Parque de Sabana Seca 3,860.05

Estos fondos sobrantes no fueron utilizados por lo que se encuentran disponibles para ser reasignados.

La recreación y educación son elementos indispensables para la formación de personas sanas mental, emocional y físicamente. Su práctica perseveramente rinde beneficios innumerables y hace de nuestra gente seres completos y realizados.

Para ello es imprescindible proveerlos de facilidades recreativas adecuadas y en óptimas condiciones para que puedan ocupar su tiempo sanamente y desarrollar su potencial al máximo.

Por lo antes expuesto, este Legislador entiende que procede la reasignación de fondos para la construcción de unas gradas en la comunidad Las Colinas de Toa Baja.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la comunidad Las Colinas en Toa Baja.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1436, el cual ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos.

"LEY

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Universidad de Puerto Rico constituye el principal centro de enseñanza a nivel universitario de Puerto Rico. Tan importante entidad siempre ha requerido de la asistencia económica del Estado para poder sufragar

su gran desarrollo y funcionamiento. Por ello, la Universidad constantemente debe velar por que sus finanzas se empleen en forma adecuada y razonable, a fin de poder cumplir a cabalidad su trascendental misión.

Es de conocimiento que una buena porción de los presupuestos de toda entidad se destina al pago de nóminas y otros desembolsos relacionados con el personal. La Asamblea Legislativa siempre ha procurado que sea la propia Universidad quien tome las determinaciones sobre cómo administrar y reglamentar su personal. Por ello, entendemos pertinente enmendar lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 sobre el pago de licencias acumuladas en exceso del permitido a aquellos empleados que no estén sujetos a cantidades efectivas de verificación de asistencia, a fin de no imponer a la Universidad una carga onerosa que le impida su cumplimiento. El eximir a la Universidad de Puerto Rico del pago de dichos excesos de licencias de enfermedad y vacaciones a personal cuyas ausencias, por no estar sujetos a controles de asistencia, pudieran no haberse registrado y descontado adecuadamente, flexibiliza una norma estricta, que generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.- Aquellas agencias exentas de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, también vendrán obligadas a pagar anualmente a sus empleados, antes del 31 de marzo de cada año, los días de vacaciones y enfermedad acumuladas y no disfrutadas, en exceso de los balances permitidos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Se exime a la Universidad de Puerto Rico del cumplimiento del pago en exceso de los balances permitidos de vacaciones y enfermedad acumuladas, en lo que respecta a aquellos empleados que no estén sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2113, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente:

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, OFICINA DE OPERACIONES DE AREA DE HUMACAO, LOCAL DE NAGUABO

a) Aportación para la compra de medicamentos, equipo y tratamiento médico debidamente prescrito por un facultativo, gastos de viaje por motivo de tratamiento médico, ayuda para gastos funerales, ropa y zapatos para niños cuyos padres carecen de recursos económicos para su adquisición, ayuda para el pago de emergencias de utilidades: agua, luz y renta de hogares, compra de enseres eléctricos a personas indigentes en Naguabo.

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2114, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"LEY

Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado Vázquez mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señor Juan Rodríguez González número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC01 Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa municipalidad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado Vázquez mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señor Juan Rodríguez González número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC01 Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa municipalidad.

Sección 2.-Se faculta al municipio a transferir al señor Juan Rodríguez González la totalidad de los fondos asignados para realizar las obras y mejoras que se disponen en esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Los recursos que se asignan en esta medida están consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2115, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"LEY

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de doce mil (12,000) dólares asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante la Resolución Conjunta Núm. 327 de 24 de julio de 1998 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas).

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de doce mil (12,000) dólares asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas en la Resolución Conjunta Núm. 327 de 24 de julio de 1998 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas).

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2116, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**LEY**

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1, según se indica a continuación:

a. Aportación a la Sra. Eina B. Castillo, residente de la calle Delbrey #253, Santurce, Puerto Rico 00912 para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges $500.00

b. Aportación al Sr. Radamés Ramos Olivencia, residente de la calle Delbrey #286, Santurce, Puerto Rico, 00912 para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges $500.00

c. Aportación al Sr. José A. Salamán, residente de la calle Delbrey #215, Santurce, Puerto Rico, 00912 para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges 500.00

d. Aportación a la Sra. Milagros Vázquez Andino, residente de la calle Delbrey #262, Santurce, Puerto Rico, 00912, para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges 500.00

e. Aportación al Sr. Pedro Soto Ortiz, residente de la calle Delbrey #278, Santurce, Puerto Rico, 00912 para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges 500.00

f. Aportación a la Sra. Iris Marrero, residente de la calle Delbrey #259, Santurce, Puerto Rico, 1912 para la reparación de su vivienda la cual quedó afectada a causa del Huracán Georges 500.00

TOTAL 3,000.00

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales y/o transferidos a las personas beneficiarias para los fines indicados.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2045, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos para gastos médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social; deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativo para gastos médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40.

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2048, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (46,440) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (46,440) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE FAJARDO

1. David Conde Feliciano S.S 581-53-2255
   Tel. 860-8117
   Bo. Paraíso HC-00866 Box 8443 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . $500.00
2. Julia Mercado Ortiz S.S. 580-01-2346
   Tel. 860-7117

Calle Antonio R. Barceló # 65 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . $800.00

3. Luis A. Rivera Asia S.S. 581-51-2151
Tel. 863-0693/863-1912
HC-00866 Box 9197 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 440.00

4. Angel Fuentes Suárez S.S. 580-94-1142
Tel. 863-1696
HC-0066 Box 10162 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 300.00

5. Angel Díaz García S.S. 583-78-2928
Tel. 860-3167
HC-866 Box 4901 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 3,000.00

6. Felicita Rodríguez Vda. de Irizarry S.S. 582-62-7312
Parcela #203 Comunidad Saldaña Río Arriba
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 200.00

7. Angel Feliciano S.S. 581-92-7507
Tel. 863-2949
HC-00866 Box 8707 Bo. Paraíso Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 200.00

8. Luz V. Robles Fernández S.S. 584-04-8645
Calle San Isidro #224 Bda. Obrera Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 500.00

9. Angel L. Lozada O'Neill S.S. 582-81-5477
P.O. Box 311 Puerto Real, P.R. 00740 . . . . . 500.00

10. Raúl Montañez Rivera S.S. 584-92-4909
Tel. 863-0341 - 860-7283
HC-66 Buzón 10102 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . $300.00

11. Jesús Pagán Santiago S.S. 111-38-6847
Tel. 801-1136
Parcela Beltrán #91 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 400.00

12. Manuela Vargas Medina S.S. 068-30-0556
Tel. 863-7351
P.O. Box 287 Puerto Real, P.R. 00740 . . . . . 400.00

13. Nilda Esquilín Cepeda
Tel. 863-8320
HC-66 Buzón 5148, Sector Vista Hermosa
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 350.00

14. Idalia Esquilín S.S. 583-49-7101
Tel. 860-2859
HC-866 Buzón 10010 Bo. Florencio Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 240.00

15. Carmen Carrillo Arizmendi S.S. 582-53-6071
Tel. 863-8004
HC-66 Box 8738 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 200.00

16. Juanita Ríos Robles S.S. 581-27-8942
HC-66 Box 5153 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 200.00

17. Luz E. Vázquez Burgos S.S. 084-58-0750
Tel. 863-2194
Calle Pomarosa #155 Bda. Obrera Fajardo, P.R. 00738 . . . . . $600.00

18. Migdalia Cruz Ortiz S.S. 584-02-5167
Tel. 860-5071
Comunidad Ampliaciones Luis M. Cintrón
Parc. 612 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 400.00

19. María I. Resto Mouliert S.S. 583-80-6173
Tel. 860-0604
HC-866 Box 8928 Fajardo, P. R. 00738 . . . . . 300.00

20. Carmen I. Ayala S.S. 082-36-1418
Tel. 863-2373

268 Calle Igualda Fajardo P.R. 00738 . . . . . 300.00

21. Carmen L. Ramos S.S. 580-58-8136
Tel. 863-7583
HC-00866 Box 9194 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 400.00

22. Aracelis Conde Saniel S.S. 583-78-2696
Tel. 860-6862
Box 191 Playa Puerto Real, P.R. 00740 . . . . . 500.00

23. Gloria L. Pérez S.S. 052-24-2869
Tel. 863-3941
Calle José Julián Acosta #162
Bda. Roosevelt Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 400.00

24. Rafaela Serrano Lázaro S.S. 583-80-3227
Tel. 860-7589
Calle 7-4 L-23 Alturas Monte Brisas Fajardo, P.R. 00738 . . . . . $120.00

25. Reyes Rivera Soto
Tel. 863-1912
HC-866 Box 8788 Bo. Paraíso Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 2,400.00

26. Benjamín Soto Rodríguez S.S. 583-01-8913
Tel. 863-1912
HC-866 Box 8858 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 300.00

27. María de los Angeles García Guerra
Tel. 863-2830
Comunidad Luis M. Cintrón Parcela 279
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 3,000.00

28. Gloria González S.S. 583-34-1768
Tel. 860-4022
HC-66 Buzón 5182 Vista Hermosa Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 200.00

29. Salvador Carrasquillo Suárez S.S. 583-59-4626
HC-66 Box 5154 Vista Hermosa, Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 600.00

30. Julio Pagán Soto S.S. 580-78-0445
Tel. 860-1834
Calle Tablazo Int. #516 Mansión del Sapo Puerto Real 00740 . . . . . 500.00

31. Eva Luz Pérez Alvarez S.S. 051-30-4767
Tel. 863-2839
P.O. Box 147 Suite 70010 Fajardo, PR $200.00

32. Maribel Santiago Robles S.S. 584-93-1109
Tel. 860-6652
HC-866 Box 9002 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 900.00

33. José A. Capó Rivera S.S. 583-23-8402
Parcela Saldaña #48-A Buzón 838-A
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 400.00

34. Antonio Arrendell S.S. 153-80-9753
Tel. 860-6816
Calle 21 Parcela 526 Quebrada Vuelta
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 300.00

35. Teddy Fontanez Carrillo S.S. 584-61-7419
Tel. 801-0693
HC-866 Box 8741 Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 300.00

36. Escuela de la Comunidad Inés Encarnación
Para compra de materiales para área recreación pasiva
que consiste de dos (2) glorietas
Bo. Florencio Distrito Escolar Fajardo
Fajardo, P.R. 00738 . . . . . 3,000.00

37. Dinorah Feliciano Rivera S.S. 584-61-9302
Tel. 860-8362
Calle Mayagüez #190 Bda. Obrera Fajardo, PR 00738 . . . . . $300.00
38. Ivelisse Calderón Capó S.S. 584-63-8373
Tel. 863-1284
HC 00866 Box 8835 Fajardo, PR 500.00
39. Marcelino Cariño Piñero
Bo. Paraíso Parc. Saldaña Calle 1 #96 Fajardo, PR 200.00
TOTAL $24,650.00

MUNICIPIO DE LUQUILLO

1. Municipio de Luquillo
Para asfaltar la carretera 9988 Km. 2.4 Sector Gabina,
Bo. Pitahaya en Luquillo 16,190.00
2. Víctor M. Ramírez Guzmán
HC-01 Box 7883 Luquillo, P.R. 00773 . . . . . 500.00
3. Alba I. Herrera S.S. 580-86-2770
Bo. Mata de Plátano Luquillo, P.R. 00773 . . . . . 500.00
4. Enrique J. Cabrera Euridge S.S. 584-71-4457
Tel. 889-4413
Calle Esperanza #6 Luquillo, PR 00773 . . . . . 800.00
5. Yesenia Hernández S.S. 584-87-7501
Box 5121 Luquillo, P.R. 600.00
6. Wilfredo Figueroa Ortega S.S. 583-68-6808
Tel. 889-6439
Bo. Mata de Plátano Parc. I-23 Luquillo, PR $900.00
7. José E. Rivera Fuentes S.S. 582-73-3284
Tel. 889-6493
HC01 Bzn. 7568 Luquillo, PR 00773 . . . . . 500.00
8. Angel T. Soto Guzmán S.S. 582-17-8392
Tel. 889-0614
Box 262 Luquillo, P.R. 00773 . . . . . 500.00
9. Luis Rodríguez Benítez
Tel. 889-0516
Calle 10 I-27 Estancias del Atlántico
Luquillo, PR 00773 . . . . . 400.00
10. Wilfredo Flores Carmona S.S. 581-29-4058
Tel. 889-5465
Calle 10 #H-28 Estancias del Atlántico Luquillo, PR 400.00

TOTAL $21,290.00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE

1. María E. López Saldaña
Tel. 888-0316
HC01 Buz. 13353 Río Grande PR 00745-9625 . . . . . 500.00

TOTAL $500.00
GRAN TOTAL $46,440.00

Sección 2.-Los fondos aquí asignados provendrán de la asignación hecha al Distrito Representativo Núm. 36 de la Resolución Conjunta Núm. 1219 del 1998.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2055, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación:

1. Luis Caraballo Sosa S.S. 582-59-0305
(Para materiales de construcción para personas
indigentes y con impedimentos físicos)
Calle B #46 Palmer
Río Grande, PR 00721
Tel. 888-0220 . . . . . $450.00
2. Carlos Cardona de Jesús S.S. 584-19-1068
(Para materiales de construcción a persona
indigente)
Apt. 467 Palmer
Tel. 888-4026 . . . . . 450.00
3. María A. Fuentes S.S. 581-86-8654
(Para materiales de construcción a persona
indigente)
Carr. 191 KM 3.7 Bo. Barcelona
Palmer, Río Grande, PR 00721
Tel. 888-7338 . . . . . 500.00
4. Damaris Carrión Nieves S.S. 581-81-4227
(Para materiales de construcción a persona
indigente)
Carr. 191 KM 3 HM 8 Bo. Barcelona
Palmer, Río Grande, PR 00721
Tel. 888-5126 . . . . . 800.00
5. Irza M. Mercado S.S. 583-49-6386
(Para materiales de construcción a
persona indigente)
Box 500, Palmer
Río Grande, Puerto Rico 00721 . . . . . $500.00
6. Centro de Envejecientes
Municipio de Río Grande

(Materiales para arreglo de piscina de los envejecientes)
Tel. 887-3810 . . . . . 5,000.00

GRAN TOTAL $7,700.00

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados provendrán de la asignación hecha al Distrito Representativo Núm. 36 de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2056, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación:

a) Sra. Milagros Cidely Colón S.S. 583-46-3730
Calle 7 #3A-15 Urb. Monte Brisas III-Fajardo P.R. 00738
Ayuda para pago de renta de su casa, la cual se encuentra
con atrasos por razones de enfermedad $1,250.00

TOTAL $1,250.00

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados provendrán de la asignación hecha a la señora Milagros Cidely Colón para gastos de estudios universitarios, de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 los cuales fueron consignados y contabilizados en el presupuesto de dicho Municipio de acuerdo con la intención original de dicha Resolución; por lo que tales fondos deben permanecer en el mencionado Municipio.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2084, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1874, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos originalmente asignados a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I, en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de ser transferidos al Club Social y Comunal Víctor Rojas I en el Municipio de Arecibo, encargada Natividad Figueroa y para autorizar eol pareo de los fondos asignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos originalmente asignados a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I, en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de ser transferidos al Club Social y Comunal Víctor Rojas I, en el Municipio de Arecibo, encargada Natividad Figueroa.

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1875, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 504 de 27 de agosto de 1998 para cubrir el pago de la fianza de luz de los condominios Jardínes de Guayama A, B, C, D, E y F de Hato Rey.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 504 de 27 de agosto de 1998 para cubrir el pago de la fianza de luz de los condominios Jardínes de Guayama A, B, C, D, E y F de Hato Rey.

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con aportaciones estatales, federales y/o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2034, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), a los fines de cambiar el propósito previamente establecido y destinar su uso según se detalla en la Sección 1, y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), para los siguientes propósitos:

a) Para el pago a la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto de extensión de línea primaria, servicios nuevos en los Solares Ferrer en la Carretera 335, Km. 10.6 del Barrio Indios de Guayanilla $7,842. 85

b) Reparación de hogares de las siguientes personas:

1. Ramón L. Quiñonez - Bo. Macaná del Río HC 01, Box 11005 - Guayanilla, PR 00656 Seguro Social 583-11-3372 . . . . . $255.00
2. Hilda Cales González - Bo. Macaná , Sector Parcelas, HC 01, Box 6628, Guayanilla, P.R. 00656 - Seg. Soc. 582-53-6144 . . . . . 255.00
3. Judith Cedeño Cornier - Bo. Quebradas Sector Parcelas - Núm. 144, Guayanilla, P.R. 00656 -Seg. Social: 582-53-6144 . . . . . 255.00
4. Rosalina García Román - Bo. Macaná Sector Cotuí, P.O. Box 561015, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S. 584-10-4697 . . . . . 272.15
5. Oleda Nieves Plaza - Bo. Piedras Blancas HC 01, Box 7653, Guayanilla, PR 00656 . . . . . 255.00
6. Gladys Caraballo Rodríguez - Parcelas Nuevas, Jagua Tuna, Calle 2-A #213 HC 01, Box 6747 - Guayanilla, PR 00656 Seg. Social 581-71-9673 . . . . . 255.00
7. Silvia Román González - Bo. Quebradas, Sector Parcelas #15, Guayanilla, P.R. 00656 - (Postal) Apartado 254 - Yauco,

PR 00698) - Seg. Soc. 581-08-0305 . . . . . 255.00

8. Gladys Bengochea Rodríguez -Parcelas Nuevas - Jagua Tuna, Calle 6 #221 Box 6543 - Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 584-94-8138 . . . . . $255.00

9. Ana Luisa Anavitate Quinta - Parcelas Nuevas - Jagua Tuna, Calle 5 #307 HC 01, Box 5031,Guayanilla, PR 00656 Seg. Soc. 583-06-4796 . . . . . 255.00

10. Elsa Rodríguez Pacheco - Bo. Quebradas Sector Parcelas #120, HC 01, Box 9244 Guayanilla, P.R. 00656 - S.S. 583-60-3750 . . . . . 255.00

11. Matilde Ortíz Ramírez - Bo. Jagua Tunas, Parcelas Nuevas #238 - (Postal Calle Muñoz Rivera #280), Guayanilla PR 00656 - Seg. Soc. 584-82-9939 . . . . . 255.00

12. Adelaida Mercado Ramírez - Bo. Llanos, Sector Pimientos , HC 01, Box 7217 Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Soc. 583-18-3453 . . . . . 255.00

13. Gloria N. Ortíz Rivera - Bo. Faro, Calle Principal #7, HC 01, Box 7718, Guayanilla, PR 00656 -S.S: 583-17-1432 . . . . . 255.00

14. Amparo Pacheco Báez - Bo. Faro, Calle Principal -HC 01, Box 7702 Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Soc. 583-78-9705 . . . . . $255.00

15. Ida Figueroa Camargo - Bo. Faro, Calle Principal HC 01, Box 7706 Guayanilla, Puerto Rico 00656 . . . . . 255.00

16. Lucía Ramírez Oivo, Calle 25 de Julio, #56-A, Parcela Bo. Indios, HC 01, Box 7918, Guayanilla PR 00656 - Seg. Social: 581-30-2508 . . . . . 255.00

17. Nereida Borrero Rodríguez, Bo. Magas Arriba, Sector Parcelas #209, HC 01, Box 6776, Guayanilla, Puerto Rico 00656 Seg. Social: 583-60-3233 . . . . . 255.00

18. Concepción Ruíz Fraticell, Bo. Llanos, Sector Pimientos, HC 01, Box 7179, Guayanilla, PR 00656, Seg. Soc.: 581-16-6265 . . . . . 255.00

19. Arístida Torres Rodríguez, Bo. Indios, Sector Cuesta Blanca P. O. Box 560116, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S. 582-65-0197 . . . . . $255.00

20. Dora Rodríguez Ramos HC 01, Box 7596, Guayanilla, P.R. 00656 -S.S: 583-21-7587 . . . . . 255.00

21. Julio Acosta Rodríguez, Bo. Magas Arriba, Sector Parcelas P. O. Box 560998, Guayanilla

P.R. 00656, S.S. 581-72-3109 . . . . . 255.00

22. Amelia Rivera Mejías, Bo. Faro
Calle Principal, HC 01, Box 7719
Guayanilla, Puerto Rico 00656
Seg. Soc. 582-17-2388 . . . . . 255.00

23. René Albarrán, Bo. Sierra Baja,
Sector Buena Vista, HC 01, Box 6034,
Guayanilla, P.R. 00656
Seg. Soc. 584-14-3332 . . . . . 255.00

24. Dolores Rivera Segarra, Bo. Jagua
Tuna, Carr. 132 #116 D, HC 01, Box
6579, Guayanilla, P.R. 00656
Seg. Soc. 584-98-3462 . . . . . 255.00

25. Ananí Hernández, Parcelas Nuevas,
Jagua Tuna, Calle 3 #340, HC 01,
Box 9236, Guayanilla, PR 00656
Seg. Soc. 581-15-7034 . . . . . $255.00

26. Madeline Nieves Torres, Bo. Magas
Arriba, Calle 9 #213, Calle Dr. M.A.
Sabala, Bda. Guaydía #171, Guayanilla,
PR 00656 -S.S. 583-39-8420 . . . . . 255.00

27. Rafael Oliveras Hernández, Calle 6
#197, Parcelas Nuevas, Jagua Tuna,
HC 01, Box 6536, Guayanilla, P. R.
00656 - S.S. 584-37-3814 . . . . . 255.00

28. Aladino Feliciano Olivera, Bo. Llano,
Sector Pimiento, Guayanilla, P. R.
00656 - S.S. 583-36-1959 . . . . . 255.00

TOTAL PARA REPARACIONES A HOGARES $7,157.15

GRAN TOTAL $15,000.00

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales y federales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1812, la cual ha sido descargada de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Juventud, Recreación y Deportes.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designar la cancha de Hockey de la urbanización Baldrich, en el municipio de San Juan, con el nombre "Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe".

EXPOSICION DE MOTIVOS

El señor Roberto "Tito" Gotay Guadalupe, nació el 21 de diciembre de 1944 en el barrio El Chícharo de la Pda. 25 en Santurce, siendo sus padres doña Ana Celia Guadalupe y don Antonio R. Gotay.

Estudió en la Escuela Superior Central de Santurce donde se graduó en el año 1963. Allí, se destacó

como atleta de pista y campo en los 400 y 800 metros. Participó, en forma destacada, en los Varsitys de Volleyball y Balompié.

Ingresó en la Universidad Católica de Ponce en donde obtuvo el grado de Bachiller en Administración de Empresas con especialización en Finanzas. Durante sus estudios en la universidad perteneció al equipo de Balompié.

Posteriormente, trabajó como Director Ejecutivo en el Area de Finanzas del Departamento de Asuntos del Consumidor, en la División de Investigaciones Especiales.

Jugó Balompié Superior con los Clubes Juventud, Roosevelt y, finalmente, con la Nacional. Desde el 1994 hasta el momento de su fallecimiento el 16 de diciembre de 1997 fue Vicepresidente de la Federación de Fútbol. Además, fue Presidente del Club Nacional de Fútbol de Carolina.

Fue jugador de la Selección Nacional de Hockey desde 1977 hasta 1982. Participó en los Juegos Panamericanos de San Juan en 1979 como entrenador-jugador. Desde esa fecha hasta el momento de su partida fue miembro activo de la Federación de Hockey. Ejerció el cargo de Vicepresidente de la Federación de Hockey desde 1983 hasta 1990. En los torneos invitacionales del Caracas Sport Club participó como árbitro, y también jugó en la Categoría Master. Dirigió el equipo del Club de Hockey de Santurce, que luego pasó a ser el Club de Hockey de Carolina. Desde 1979, la cancha de Hockey de Baldrich ha sido utilizada para desarrollar el talento que nos ha representado en eventos internacionales, tales como, los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, entre otros.

Tenemos una deuda de gratitud con un ser humano noble y generoso que dedicó gran parte de su vida al deporte, en especial al Hockey en la Isla. Son muchos los jóvenes, adultos, y niños que compartieron con él y se beneficiaron de sus conocimientos de este deporte.

En honor a su gestión a favor del deporte de Hockey, procede que esta Asamblea Legislativa rinda reconocimiento a la vida y obra de Roberto "Tito" Gotay Guadalupe al disponer que la cancha de Hockey, de la urbanización Baldrich, del municipio de San Juan sea designada como "Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe".

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designar la cancha de Hockey, de la urbanización Baldrich, en el municipio de San Juan con el nombre "Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe".

Sección 2.-El Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Educación llevarán a cabo, en conjunto, un acto apropiado en ocasión de tal designación.

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Resolución Conjunta de la Cámara 1812, habíamos relevado a las Comisiones de Educación y Cultura y de Recreación y Deportes, queríamos corregir la moción, a los efectos de que se releve a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, que es la única Comisión que tiene asignada esta medida aquí en el Senado.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience la consideración de este tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2034, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), a los fines de cambiar el propósito previamente establecido y destinar su uso según se detalla en la Sección 1, y autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2037, titulada:

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2042, titulada:

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil doscientos noventa y ocho (2,298) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2043, titulada:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil setecientos cincuenta (1,750) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2046, titulada:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejoras a la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2069, titulada:

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para los fines que se mencionan en la Sección 1 y los propósitos allí expresados; y autorizar el pareo de fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2083, titulada:

"Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de tres mil quinientos cincuenta (3,550) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998 para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos según se describe en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos asignados y establecer vigencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2109, titulada:

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, originalmente consignados para la adquisición de terrenos donde ubicaría un parque de beísbol de pequeñas ligas y softball en el sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos mediante la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de un parque recreativo deportivo en el barrio Arenales Altos de dicha municipalidad; autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2111, titulada:

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veintiun mil trescientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos (21,397.75) provenientes de la Resolución Conjunta 189 de 12 de junio de 1993, #cuenta 94-141-087-02-422, de la Resolución Conjunta 431 de 13 de agosto de 1995, #cuenta 96-141-087-02-601 y #cuenta 96-141-087-02-611 y Resolución Conjunta 416 de 11 de agosto de 1996, #cuenta 97-141-087-02-701; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social, para mejorar la calidad de vida y para gastos operacionales y de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2117, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para mejoras a la Escuela Ernestina Bracero Pérez de Candelaria, a la Biblioteca de la Escuela de la Comunidad María Libertad Gómez de Levittown y al Centro de Reuniones de la American Association of Retired Persons de Levittown en Toa Baja."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2118, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cinco mil dólares (5,000) provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del Barrio Ingenio de Toa Baja."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2119, titulada:

"Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para compra de materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Esta Resolución Conjunta de la Cámara 2119, solicitamos se deje su consideración para un turno posterior.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.sin enmiendas.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2120, titulada:

"Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agostode 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente consignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2121, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2084, titulada:

2Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1875, titulada:

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 504 de 27 de agosto de 1998 para cubrir el pago de la fianza de luz de los condominios Jardínes de Guayama A, B, C, D, E y F de Hato Rey."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2113, titulada:

"Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2114, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado Vázquez mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señor Juan Rodríguez González número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC01 Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa municipalidad."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2115, titulada:

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de doce mil (12,000) dólares asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante la Resolución Conjunta Núm. 327 de 24 de julio de 1998 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2116, titulada:

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2045, titulada:

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos para gastos médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social; deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2048, titulada:

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (46,440) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2055, titulada:

"Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2056, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1874, titulada:

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos originalmente asignados a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I, en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de ser transferidos al Club Social y Comunal Víctor Rojas I en el Municipio de Arecibo, encargada Natividad Figueroa y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1812, titulada:

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designar la cancha de Hockey de la urbanización Baldrich, en el municipio de San Juan, con el nombre "Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1436, titulada:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que la consideración de esta medida se deje para un turno posterior.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 1021, titulada:

"Para ordenar al Departamento de Educación transferir libre de costo, a Maestros Retirados en Acción de Santa Isabel, Inc., institución sin fines de lucro, la antigua escuela del barrio Playa de Santa Isabel."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a utilizar como base para la consideración de esta Resolución Conjunta del Senado 1021, el texto aprobado por el Senado en el día de ayer.
Señora Presidenta, la enmienda es al título solamente, en la tercera línea del título poner el "." después de "Santa Isabel" y tachar el resto de la oración.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2119, titulada:

"Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para compra de materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la medida.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos enmiendas en Sala al título de la medida.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el título, líneas 1 y 2, tachar "nueve mil quinientos (9,500)" y sustituir por "quince mil quinientos (15,500)".

Esa es la enmienda, señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, antes de continuar, quisiéramos extenderle un saludo y la más cordial bienvenida a la Tropa 240 de Niños Escuchas de Guaynabo que hoy nos honran con su visita aquí en el Senado de Puerto Rico acompañados de sus encargados y padres. Esperamos que su visita aquí en el Senado sea muy placentera y de gran provecho para su futuro profesional. Bienvenidos.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Bienvenidos y un saludo de parte del Senado de Puerto Rico.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1189, Proyecto del Senado 1247, Proyecto del Senado 1253, Proyecto del Senado 1383; Proyecto de la Cámara 1908, Proyecto de la Cámara 651.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 2085, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes; y de Vivienda, de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1121, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ RIVERA: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico; y de Asuntos Municipales, de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1922, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado un tercer Orden de los Asuntos, vamos a solicitar considerar el mismo.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 654 y 1124, sin enmiendas.

De la Comisión de Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2092, sin enmiendas.

De la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley Relacionados con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2142, con enmiendas.

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, un segundo informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1466, sin enmiendas.

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1247, con enmiendas.

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1383, con enmiendas.

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1189, con enmiendas.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

Del Secretario de la Cámara de Representantes, catorce, comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1041; 1645; 1646; 1882; 1909; 1934; 2045; 2062; 2071; 2072 y 2073 y las R. C. de la C. 854; 2121 y 2122 y solicita igual resolución por parte del Senado.

MOCIONES

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:

El senador José Enrique Meléndez Ortiz, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"El Senador que suscribe solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le extienda a la Comisión de Vivienda una prórroga hasta el final de la Quinta Sesión Ordinaria, el término para rendir los informes de las medidas pendientes en la Comisión."

El senador Carlos Pagán González, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"El Senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire el Informe sobre el P. de la C. 1466."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, hay una moción de este Senador, solicitando una prórroga hasta el final de la Quinta Sesión Ordinaria, para rendir informes pendientes de la Comisión que presido, de la Comisión de Vivienda. Solicitamos que la misma sea aprobada.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, tenemos una moción escrita del compañero Pagán González, solicitando el retiro del informe del Proyecto de la Cámara 1466, para que el mismo se apruebe.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o pésame.

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación a la señora Zoraida Torres, de Notiuno WUNO/AM por el Premio INTRE al Mejor Programa Radial Investigativo por su programa especial "Prisioneros de Conciencia".

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la señora Zoraida Torres y al señor Rubén Sánchez."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación al Sr. Santiago Rubí, la señora Linda Hernández y el Sr. William Meléndez por el Premio INTRE al mejor Noticiero Mañanero en la televisión a "TU Mañana".

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a los señores Santiago Rubí, Linda Hernández y William Meléndez."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación a los señores Freddy A. Rivas Reyes y José A. Rivas Dominicci por el Premio INTRE al mejor noticiero radial mañanero a " La Hora Informativa" de WMNT/AM, La Nueva Radio Atenas.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción al señor Freddy A. Rivas Reyes, Gerente general y al señor José A. Rivas Dominicci a su dirección conocida en:P. O. Box 6, Manatí, Puerto Rico 00674."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación al señor Jorge Inserni, Gerente general, Ing. Rafael Torréns, Presidente de la Junta, Edgardo Huertas y Keishla Rolón por el Premio INTRE al mejor programa de interés para la juventud "Habla la Juventud" de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública- Canales 6 y 3.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a los señores Jorge Inserni, Gerente General, Ing. Rafael Torréns, Presidente de la Junta, Edgardo Huertas y Keishla Rolón, Canal 6."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación a la señora Jennie Rivera y a Gerente de la emisora por el Premio INTRE al mejor programa radial sobre cultura "Paréntesis... Un beso en la mañana con Jennie Rivera" de Radio Café WKFE de Yauco.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la señora Jennie Rivera y al Sr. Jaime L. Bermúdez, Gerente General de la Emisora en su dirección conocida en:Apartado 324, Yauco, Puerto Rico 00698."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación al Gerente General Jorge Inserni, Ing. Rafael Torréns, Lolyn Paz y Johanna Rosaly por el Premio INTRE por el mejor programa educativo e informativo de la televisión a "Mucho Gusto" de la

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Canales 6 y 3 producida por Lolyn Paz.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción al Gerente General Jorge Inserni, Ing. Rafael Torréns, Lolyn Paz y Johanna Rosaly."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación a la señora Wanda Constanzo, Sr. Richie Vera, señora Belén Martínez y al señor Roberto Vigoreaux por el Premio INTRE al mejor Programa de Entrevistas en la Televisión a "Dime la Verdad" de Supersiete, Canal 7.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la señora Wanda Constanzo, el señor Richie Vera, la señora Belén Martínez y el señor Roberto Vigoreaux en Supersiete."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación a la señora Millie Cangiano y a la señora Mildred Rodríguez por el Premio INTRE al mejor Programa Infantil de la televisión a "Burbujitas" de Teleonce-WLII.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta a las señoras Millie Cangiano y Mildred Rodríguez en Tele Once."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"El senador que suscribe solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese la más sincera felicitación al Dr. Carlos Iramain y al señor Rafael Gracias Machuca por el Premio INTRE al mejor Programa Radial Musical a "Todo Jazz" de Radio Universidad.

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta al Dr. Carlos Iramain y al señor Rafael Gracias Machuca, Gerente de Radio Universidad."

Por el senador Charlie Rodríguez:

"The undersigned proposes to this High Body to extend its warmest and most sincere congratulations to Mr. Sherman Wildman, President of WOSO- AM on the occasion of the selection of the show "Speak Out" as the recipient of the INTRE award for the best audience participation radio show.

The Institute for Ethics in Radio and Television (INTRE for its spanish acronym) every year present sixteen awards to producers, journalists and radio and television shows which provide educational and non violent content to its audience.

"Speak Out" is broadcast every Monday through Friday in WOSO-AM, and it provides the public with the opportunity to participate through the telephone and comment on the latest news and developments of public interest in the Island.

Likewise this High Body requests that through its Office of the Clerk, a copy of this motion be remitted, in the form of a parchment scroll, to Mr. Sherman Wildman, President of WOSO-AM."

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera:

"El Senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese su más sentida condolencia a la familia Miranda González por la sensible pérdida de Doña. María E. González quien recibiera cristiana sepultura el 4 de noviembre de 1998 en el Cementerio Municipal de Utuado.

Que así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos y demás familiares por conducto de su hijo, el Sr. Freddy Miranda, a la siguiente dirección: P.O. Box 1386, Caguana, Utuado, Puerto Rico 00641."

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera:

"El Senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese su más sentida condolencia a la familia González Vélez por la sensible pérdida del Sr. Santana González Vélez quien recibiera cristiana sepultura el 4 de noviembre en el Cementerio Municipal de Utuado.

Que así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos y demás familiares por conducto

de su hija, Sra. Josefina González, a la siguiente dirección: HC-01 Box 7010, Salto Arriba, Utuado, Puerto Rico 00641."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, todavía no estamos en posición de considerar la tercera Relación de Proyectos y Resoluciones Radicados en Secretaría en el día de hoy, por lo que vamos a solicitar se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y al final del Calendario de Lectura que se decrete un receso hasta las cinco en punto de la tarde (5:00 p.m.).
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1189, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda, con enmiendas.

"LEY

Para designar al Programa de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana, Región de Puerto Rico como responsable por la educación y reclutamiento de donantes de Médula Osea en Puerto Rico; establecer sus funciones y propósitos; adicionar la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico" que coordinarán los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana en cooperación con el Departamento de Salud de Puerto Rico, y para asignar fondos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante la necesidad imperiosa de fortalecer nuestros programas de donantes de Médula Osea y desarrollar una campaña de orientación a todos los sectores de nuestra población es que presentamos nuevamente legislación a esos fines.

El Programa Nacional de Donantes de Médula Osea, es un programa federal mediante el cual se estableció en el 1987 un registro nacional de donantes potenciales de médula ósea para pacientes que sufran de leucemia o de cualquier otro de sesenta desórdenes fatales de la sangre, para los cuales un trasplante de Médula Osea sería la última oportunidad de salvarse. Este registro está disponible para todos los pacientes que no encuentren en su familia a un donante compatible.

A pesar de que el programa nacional ha sido un éxito, con un reclutamiento al presente de 3.1 millones de donantes voluntarios no hay suficientes donantes de otras razas y grupos étnicos de forma que la cantidad de donantes esté balanceada entre ambos. Esto ya que la médula ósea es heredada principalmente dentro del patrón del mismo grupo étnico. Según aumentará el número de donantes potenciales, así aumenta la oportunidad de encontrar un donante de médula ósea que sea compatible con el paciente que la necesita. En Puerto Rico hay 8,800 donantes en la actualidad.

Por esta razón, el Programa Nacional de Donantes de Médula Osea, seleccionó en 1992 a los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana como su único Centro de Donantes en Puerto Rico. El Centro de Donantes inició operaciones en julio de 1993 y tiene como responsabilidad educar y reclutar donantes potenciales de médula ósea, informar a la ciudadanía en general y coordinar todas las etapas de un trasplante no relacionado, desde la perspectiva del donante.

Varios estados han aprobado diferentes leyes que son muy beneficiosas para suplementar el trabajo que realizan tanto el Programa Nacional de Donantes de Médula Osea como los Centros de Donantes Locales. Los estados de Minnesota y Oregon en particular, iniciaron programas educativos de orientación sobre el programa nacional y concedieron incentivos a los patronos para que concedan al empleado tiempo libre para actuar como donantes de médula ósea.

Mediante esta medida, se designa al Programa de Donantes de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana como responsables por la educación del pueblo de Puerto Rico sobre la necesidad de donantes de médula ósea, los procedimientos que deben llevar a cabo para ser incluidos en el registro local y nacional como donantes potenciales así como los procedimientos médicos previos durante y posterior a la donación de médula ósea. La labor del Programa incluye el reclutamiento voluntario de donantes potenciales para trasplantes de médula ósea. El Departamento de Salud colaborará en la celebración de la campaña de médula ósea como asesor, facilitador y fiscalizador de los fondos de esta campaña concedidos mediante esta ley. Se adiciona la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea. Se crea mediante este medida, además, el Fondo de la Campaña de Médula Osea de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se designa al "Programa de Donantes de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana" y como el programa autorizado por el gobierno de Puerto Rico.

Artículo 2.- Las funciones y propósitos de este Programa son los siguientes:

1. Educar a los residentes de Puerto Rico sobre:

a) La necesidad existente de donantes de médula ósea.

b) Los procedimientos requeridos para inscribirse como donante potencial de médula ósea, incluyendo los procedimientos utilizados para determinar el tipo de tejido de una persona.

c) Los procedimientos médicos a los que se tiene que someter un donante para donar médula ósea u otras fuentes de células madres sanguíneas.

2. Los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana hará esfuerzos para reclutar residentes de Puerto Rico, para que se ofrezcan voluntariamente como posibles donantes de médula ósea. Como parte de la campaña anual, podrá hacer uso de la prensa, la radio y la televisión y la colocación de material educativo en las facilidades del cuidado de la salud apropiadas, en bancos de sangre y en agencias estatales y locales. Los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana, conjuntamente con la División de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas, hará accesible los materiales educativos en todos los lugares en que se emitan o se renueven licencias de conducir.

3. Fomentar el conocimiento y utilización del Programa Nacional por parte de nuestra comunidad médica.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán la siguiente definición:

1. "Empleado", significa:

a) Toda persona que de forma regular está empleada por un contribuyente por más de veinte (20) horas a la semana, que no es un empleado temporero o de temporada y cuyo salario está sujeto a retención bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado.

b) No incluye a individuos empleados por sus padres, su cónyuge o su hijo, o persona que realice servicio doméstico.

c) No incluye a los contratistas independientes.

2. "Patrono", significa toda persona natural o jurídica residente, que emplee a cualquier empleado en por lo menos un lugar; e incluye a los individuos, corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, grupos de personas, municipios, pueblos, ciudades, distritos escolares y las agencias o instrumentalidades gubernamentales.

3. "Gastos del donante de médula ósea", significa la suma de las cantidades que pague o que incurra un patrono durante un año contributivo por:

a) El tiempo que utilice el empleado en su integración al Registro de Donantes del Programa de Donantes de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana.

b) Educación a los empleados relacionada con las donaciones de médula ósea, incluyendo pero no limitado a, la necesidad de donantes y de una explicación de los procedimientos utilizados para determinar el tipo de tejido y médula ósea a donarse.

c) Los sueldos pagados a un empleado por el tiempo razonable relacionado con la tipificación de tejido y la donación de médula ósea.

4. "Salarios" incluye sueldo, jornal, paga y cualquier otra forma de remuneración pecuniaria.

5. "Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana", se refiere al Programa de Donantes de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana.

6. "Secretario", significa el Secretario de Salud de Puerto Rico.

7. "Programa Nacional", significa el Registro Nacional de Donantes de Médula Osea, creado por el Congreso de Estados Unidos. También es conocido como "National Morrow Donor Program" o "NMOP".

8. "Fondo", significa el Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico.

Artículo 4.- Los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana llevará a cabo una campaña para estimular a los empleados residentes de Puerto Rico a ofrecerse voluntariamente como donantes potenciales de médula ósea. La campaña incluirá materiales educativos y presentaciones que expliquen la necesidad de contar con donantes potenciales de médula ósea. El Secretario del Departamento de Salud o su designado ofrecerá asesoría y cooperación en el Desarrollo e implantación de esta campaña. La campaña de donantes de médula ósea incluirá la tipificación de tejido de los empleados reclutados para ser posibles donantes de médula ósea. Asimismo desarrollará estrategias para fomentar el conocimiento y utilización del Programa Nacional por parte de nuestra comunidad médica.

Artículo 5.-

(a) Ningún patrono podrá negarse a conceder licencia de vacaciones regulares y/o licencia por enfermedad acumulada a un empleado que intenta someterse a un procedimiento médico para donar la médula ósea. En caso de que resulte compatible y done parte de su médula ósea el empleado determinara la duración total de su licencia, pero no podrá exceder la cantidad de licencia con sueldo que haya acumulado o cuarenta (40) horas de trabajo, lo que sea menor, en coordinación con su patrono.

(b) El patrono recibirá una comunicación oficial por escrito de parte de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana en caso de que uno de sus empleados sea solicitado como donante compatible de un paciente para donar parte de su médula ósea. Si por determinación médica el donante no llegara a realizar su donación, la licencia de vacaciones regulares y/o licencia por enfermedad acumulada que solicitó éste no se verá afectada, para una futura ocasión.

(c) Ningún patrono podrá tomar represalias contra un empleado por solicitar o utilizar su licencia de vacaciones regulares y/o licencia por enfermedad para el propósito que se dispone en este Artículo.

(d) Este Artículo no:

1. impide a un patrono proveer licencia de vacaciones regulares y/o licencia por enfermedad acumulada para que se lleven a cabo donaciones de médula ósea.

2. afecta los derechos de un empleado con respecto a cualquier otro beneficio de empleo.

Artículo 6.- Creación del Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico.-

a) Se crea en los libros del Departamento de Hacienda como un Fondo Especial, distinto y separado de todo otro dinero o fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Fondo de Salud del Departamento de Salud, el Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico.

b) Este Fondo será administrado por los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana, y

fiscalizado por el Departamento de Salud de acuerdo a sus normas y reglamentos, en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares.

c) El Fondo se nutrirá de las donaciones que se hagan a la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico, de asignaciones legislativas y de los fondos federales que se obtengan. Los intereses que devengue la cuenta del Fondo se acreditarán al mismo.

d) Los fondos para las pruebas iniciales de donantes potenciales se pagarán de las donaciones que se reciban de fuentes externas o que se hagan al Programa de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico.

e) Se asigna al Fondo, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de veinte y cinco mil dólares ($25,000) para comenzar a desarrollar el Programa y llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

f) El Secretario de Salud velará para que la asignación y las donaciones con que se nutrirá el Fondo sean utilizados para los propósitos enunciados en esta Ley y rendirá un informe a la Asamblea Legislativa al final de cada año fiscal con la relación de ingresos y gastos del Fondo durante ese período.

Artículo 7.- Se adiciona la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 1040B.- Crédito por Gastos de Donantes de Médula Osea

a) Definiciones.- Según se emplea en esta Sección.-

1) "Salarios".- El término "salarios" incluye sueldo,jornal, paga y cualquier otra forma de retribución pecuniaria.

2) "Empleado".- El término "empleado" significa:

A) Toda persona que de forma regular está empleada por un contribuyente por más de veinte (20) horas a la semana, que no es un empleado temporero o de temporada y cuyo salario está sujeto a retención al amparo de esta Ley.

B) No incluye a individuos empleados por sus padres, su cónyuge o su hijo o en el servicio doméstico de una persona.

C) No incluye a los contratistas independientes.

3) "Patrono" significa, toda persona natural o jurídica residente, que emplee a cualquier empleado en por lo menos un lugar e incluye a los individuos, corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, grupos de personas, municipios, pueblos, ciudades, distritos escolares y las agencias o instrumentalidades gubernamentales.

4) "Gastos del donante de médula ósea" significa, la suma de las cantidades que pague o que incurra un patrono durante un año contributivo por lo siguiente:

A) Equivalente del tiempo que utilicen sus empleados en registrarse como donantes potenciales de médula ósea a través del Programa de Donantes de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana.

B) Educación a los empleados relacionada con las donaciones de médula ósea, incluyendo pero no limitado a, la necesidad de donantes y de una explicación de los procedimientos utilizados para determinar el tipo de tejido y médula ósea donada.

C) Los sueldos pagados a un empleado por el tiempo razonable relacionado con la tipificación de tejido y la donación de médula ósea.

b) Se concede a un patrono residente un crédito contra la contribución impuesta a los negocios que de otro modo sería pagadera para el año contributivo por los gastos del donante de médula ósea según se define en esta Sección.

La cantidad del crédito es igual al veinticinco por ciento (25%) de los gastos del donante de médula ósea en que incurra un patrono durante el año contributivo con relación a empleados donantes potenciales de médula ósea o que se conviertan en donantes de médula ósea.

Cualquier crédito de impuesto que de otro modo sea otorgable al amparo de esta Sección, que no utilice el contribuyente en un año contributivo en particular, podrá trasladarse y cancelarse contra la responsabilidad fiscal de dicho contribuyente para el próximo año contributivo. Cualquier remanente de crédito no utilizado en el segundo año contributivo sucesivo podrá trasladarse y utilizarse en el tercer año contributivo sucesivo. Cualquier remanente de crédito no utilizado en el tercer año contributivo sucesivo

podrá trasladarse y utilizarse en el cuarto año contributivo sucesivo. Cualquier remanente de crédito no utilizado en dicho cuarto año contributivo sucesivo podrá trasladarse y utilizarse en el quinto año contributivo sucesivo, pero no podrá utilizarse en cualquier otro año contributivo subsiguiente."

Artículo 8.- Todo empleado a quien se le negare los derechos que le son concedidos bajo esta Ley, podrá radicar una reclamación ante el Departamento del Trabajo, para que se hagan valer sus derechos de acuerdo a los procedimientos establecido por Ley.

Artículo 9.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda previo estudio y consideración del P. del S. 1189 recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

En El Título:

Página 1, líneas 1 a la 8;	eliminar todo su contenido y sustituir por "Para establecer el Programa de Médula Osea de Puerto Rico; establecer sus funciones y propósitos; adicionar la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico", y para asignar fondos.".

En La Exposición de Motivos:

Página 2, primer párrafo,línea 2;	eliminar "3.1" y sustituir por "3.3".
Página 2, primer párrafo,línea 6;	eliminar "8,800" y sustituir por "10,500".
Página 2, cuarto párrafo,línea 1;	eliminar "designa al" y sustituir por "establece el" y eliminar "los" y sustituir por "Puerto Rico que coordinará el Departamento de Salud en cooperación con la Cruz Roja Americana el cual será".
Página 2, cuarto párrafo,línea 2;	eliminar "Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana como responsables" y sustituir por "responsable".

En El Decrétase:

Página 3, línea 1;	eliminar "designa al" y sustituir por "establece el Programa de Médula Osea de Puerto Rico que coordinará el Departamento de Salud a través del"
Página 3, línea 2;	eliminar "y como" y sustituir por "el cual será".
Página 3, línea 11;	eliminar "Los" y sustituir por "El Departamento en cooperación con los".
Página 3, línea 15;	eliminar "Los" y sustituir por "El Departamento en coordinación con los".
Página 3, línea 16;	luego de "Americana" añadir "y".
Página 5, línea 10;	eliminar "Morrow" y sustituir por "Marrow" y eliminar ""NMOP"" y sustituir por ""NMDP"".
Página 5, entre líneas 12 y 13;	añadir el siguiente texto:

"9. "Departamento" significa el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
10. "Médula Osea" es una sustancia viscosa que se encuentra en las cavidades de los huesos del cuerpo; se parece a la sangre y contiene células blancas y otros componentes en la sangre.
11. "Programa" significa el Programa de Médula Osea de Puerto Rico que coordinará el Departamento de Salud a través del Programa de Donantes de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana.".

Página 5, línea 13; eliminar "Los" y sustituir por "El Departamento en coordinación con los".
Página 6, línea 9; luego de "Americana" añadir "o del Departamento de Salud".
Página 7, líneas 7 y 8; eliminar desde "por los Servicios" hasta "Americana," y luego de "Salud" añadir ", para uso exclusivo del Programa,".
Página 8, línea 22; luego de "ósea" añadir "." y eliminar el resto de la oración.
Página 9, línea 1; eliminar todo su contenido.
Página 10, línea 5; eliminar "inmediatamente" y sustituir por "a los noventa (90) días".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1189 pretende designar al Programa de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana, Región de Puerto Rico, como responsable por la educación y reclutamiento de donantes de Médula Osea en Puerto Rico; establecer sus funciones y propósitos; adicionar al Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico" que coordinarán los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana en cooperación con el Departamento de Salud, y para asignar fondos.

Como bien dice la Exposición de Motivos de la medida, el Programa Nacional de Médula Osea, es un programa federal mediante el cual se estableció en el 1987 un registro nacional de donantes potenciales de médula ósea para pacientes que sufran de leucemia o de cualquier otro desorden fatal de la sangre, para los cuales un trasplante de médula ósea sería la última oportunidad de salvarse. Este registro está disponible para todos los pacientes que no encuentren en su familia a un donante compatible.

A pesar de que el programa nacional ha sido un éxito, con un reclutamiento al presente de 3.1 millones de donantes no hay suficientes donantes de otras razas y grupos étnicos de forma que la cantidad de donantes esté balanceada entre ambos. Esto ya que la médula ósea es heredada principalmente dentro del patrón del mismo grupo étnico. Según aumentará el número de donantes potenciales, así aumenta la oportunidad de encontrar un donante de médula ósea que sea compatible con el paciente que la necesita. En Puerto Rico hay 8,800 donantes en la actualidad.

Para la evaluación de la medida tomamos en consideración las opiniones de las siguientes agencias o entidades: Cruz Roja Americana Región de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Departamento de Salud, Departamento de Hacienda, Cámara de Comercio y Oficina de Gerencia y Presupuesto.

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ORGANIZACIONES

La Cámara de Comercio endosa la medida haciendo unas recomendaciones entre la que se encuentra el que el empleado debe notificar al patrono con suficiente tiempo antes de tomar una licencia para que se puedan hacer los ajustes necesarios para cubrir la plaza en su ausencia, sugiriendo un término de 7 días.

El Departamento de Hacienda reconoce los propósitos de la medida y entiende que la misma proveería ayuda necesaria a las personas que padecen de enfermedades en la sangre y para las cuales un trasplante de médula ósea constituye una oportunidad única.

Sin embargo, no estaban de acuerdo en la otorgación de un crédito de 25% en la contribución sobre ingresos del patrono por los gastos incurridos por éste en donantes de médula ósea, por conllevar un impacto en los recaudos del Fondo General. Del mismo modo no endosaban la creación del Fondo de la Campaña de Médula Osea de Puerto Rico, por que según la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", establece entre otras cosas, que no se establezcan fondos especiales para llevar a cabo programas de gobierno y que todas las recaudaciones del gobierno ingresen al Fondo General para con ellos costear estos programas. Sin embargo, es conocido la creación de fondos especiales en otras situaciones. Señalaron que la Cruz Roja podría custodiar y administrar los recaudos de la campaña.

En ese mismo contexto se expresó la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) añadiendo que el otorgar crédito contributivo crearía un precedente para que organizaciones y pacientes cuyas condiciones de salud sean similares soliciten el mismo beneficio. Argumento que no es convincente.

OGP señaló que los $25,000 no están contemplados en el presupuesto asignado para el año fiscal 1998-99 del Departamento de Salud. Sostienen que corresponderá al Departamento y la Cruz Roja Americana pautar acuerdos para absorber los costos iniciales y futuros de la Campaña Educativa.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos manifestó que la medida delega en una institución privada, en este caso La Cruz Roja Americana Región de Puerto Rico, unos fines y objetivos públicos que conllevan consecuencias fiscales y de otras repercusiones en el derecho Laboral de Puerto Rico.

Señalaron que la mezcla heterogénea de estos factores privados y públicos constituye una interrelación no aceptable por el derecho constitucional, tanto bajo la Constitución de Puerto Rico como la de los Estados Unidos de América. Sin embargo, para solucionar dicha saliente inconstitucional el Departamento del Trabajo recomendó que el Programa debe ubicarse para guardar sus efectos fiscales prístinos y de toda repercusión en igual contexto en el Derecho Público, en el Departamento de Salud y de ahí tejer sus ramificaciones, incluyendo la inescapable relación contractual con la Cruz Roja Americana, entidad privada dentro de su perspectiva correcta.

Subrayan que el Departamento de salud podría pactar con esa institución privada, pero manteniendo la administración del Fondo Especial que constituye una amalgama de dineros públicos.

Añaden, también, que el título de la ley no contiene todos los asuntos que atiende por lo que recomendaron el que se rehiciera y nos sugirieron el texto del mismo.

El Departamento de Justicia, al igual que lo que señaló el Departamento del Trabajo, indicó que no es sana política que los fondos públicos sean manejados por instituciones privadas en las cuales no tengan intervención el gobierno.

En cuanto a la creación del Fondo Especial, Justicia reafirmó lo dicho por el Departamento de Hacienda en donde indican que "la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación con el control y la contabilidad de los fondos públicos se declara ser:

(i) que no se establezcan fondos especiales para llevar a cabo programas de gobierno; los programas de Gobierno deben financiarse por medio de asignaciones presupuestarias anuales;".

Mencionaron que es la Oficina de Presupuesto y Gerencia quien deberá indicar si existen fondos no comprometidos para asignar la cantidad inicial de $25,000.

En cuanto a lo dispuesto en el Artículo 5 del Proyecto relacionado al empleado que desee participar como donante de médula ósea, no encuentran impedimento legal en que se descuente el término de cuarenta (40)

horas de trabajo o licencia con sueldo acumulada lo que sea menor, en coordinación de ambas partes. Recomendaron preferiblemente se descuente de las licencias de enfermedad en beneficio del empleado.

La Cruz Roja Americana señaló que el Centro de Donante de Médula Osea cuenta en la actualidad con 10,000 voluntarios reclutados en Puerto Rico. Diariamente realizan pruebas de confirmación a donantes potencialmente compatibles con pacientes en espera y ya han coordinado 3 donaciones del preciado órgano. Sus objetivos como centro de donantes son: educar a la comunidad sobre la donación y los trasplantes de médula ósea no relacionados, reclutar donantes mediante actividades coordinadas alrededor de la Isla, reclutar donantes potenciales que los visiten en sus facilidades ubicadas en el Centro Médico de Río Piedras y el Hospital de Distrito de Ponce, mantener vigente la información demográfica y médica de los referidos donantes, coordinar las pruebas que permitan la selección de donantes idóneos para la donación de su médula ósea y colaborar con el Centro de Coordinaciones del Registro Nacional ubicado en Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo a la Cruz Roja Americana el Programa Nacional de Donantes de Médula Osea tiene como misión mantener un registro disponible para los pacientes que no encuentren en su familia a un donante compatible. Esto ocurre en el 70% de todos los casos, dejando sólo un 30% de los casos donde se encontrará una persona compatible dentro de la familia.

El Registro Nacional está compuesto por 3.2 millones de voluntarios de todas las razas. Lamentablemente, sólo el 7% de todos los voluntarios ingresados, pertenece a la raza hispana. Debido a que la médula ósea se hereda dentro del grupo étnico al que pertenecemos, mientras mayor sea la participación de un grupo dentro del registro, así también será la posibilidad de encontrar donantes para pacientes de ese mismo grupo. A pesar de que las estadísticas han mejorado con el paso del tiempo, todavía sólo un 80% de todos los pacientes buscando encontrarán a una persona compatible con ellos dentro del registro. Esto conllevaría que el donante identificado esté dispuesto a hacerle la donación, aprobar un examen físico y sobre todo que sea localizado a tiempo. Es por esto que es muy difícil que de necesitarlo, una persona pueda recibir un trasplante de médula ósea.

La Cruz Roja entiende que la probabilidad de que una persona no relacionada a otra pueda hacer su donación es tan remota, que esa persona debiera tener acceso a una licencia especial en estos casos que no afecte sus otras licencias. Su experiencia le indica que sería un impacto mínimo en la economía debido a que en los 5 años de existencia del Centro se han coordinado tres donaciones. Sin embargo, manifestaron que el hecho de que una ley facilite el trámite para el donante, reducirá el posible inconveniente que sobre este particular pueda tener éste al evaluar y tomar su decisión. Añadieron que en muchos estados de la nación americana, entre otros Colorado, Luisiana, Minnesota, y Nebraska se han aprobado leyes específicas para atender este asunto.

En Cuanto a la creación del fondo para la campaña educativa, la Cruz Roja apuntó que al presente el Registro Nacional de Médula Osea cubre los costos de tipificación de todos los donantes puertorriqueños ya que entramos en la clasificación federal de minorías. Esta política es evaluada de año en año de acuerdo a la aprobación de los fondos federales y privados que a su vez nutren al Registro Nacional. Señalan que los fondos que menciona la legislación deben ser destinados a agilizar su gestión comunitaria mediante la creación de una campaña dirigida exclusivamente a la población puertorriqueña, algo que admiten no haber logrado ante la limitación de los fondos con los que cuentan para promoción. También señalaron que se podrían contratar reclutadores para el programa local.

Consideran que aunque califican de exitosa la gestión hasta el presente, se necesita al menos triplicar la cifra de voluntarios para verdaderamente contar con la base de donantes que necesitarán los centros de trasplantes que atienden a pacientes puertorriqueños. Admiten que con sólo 3 personas dedicadas al reclutamiento, el reto aunque se puede lograr tomaría más tiempo de lo que pueden esperar los pacientes.

Lamentaron el que aunque existen 10,000 donantes puertorriqueños en el Registro Nacional, éstos no pueden ser accesados por las unidades de trasplantes establecidas en Puerto Rico ya que no han iniciado

gestiones para ser admitidos en la red de hospitales que proveen estos servicios. Sin embargo, estos donantes están disponibles para hospitales en los Estados Unidos o Europa acreditados por el Registro Nacional. Aunque cualquier médico con licencia vigente puede verificar si en el Registro hay un donante preliminarmente compatible con su paciente, sólo las unidades de trasplantes acreditadas pueden hacer solicitudes de búsquedas formales de donantes, lo que incluye el contacto al donante para verificar su interés, ordenar pruebas específicas de confirmación y finalmente seleccionar el donante que mejor entiendan pueda salvar la vida de su paciente.

Señalaron que están llevando a cabo esfuerzos con el Hospital San Jorge y el Hospital Universitario, actuales centros de trasplantes de médula ósea en Puerto Rico, para que se acojan a la acreditación del Registro Nacional y puedan ofrecer una mejor oportunidad de vida a otros puertorriqueños. Esto consiste en reunir una serie de requisitos mínimos basados en su experiencia, años de operación y número de casos. Desafortunadamente debido a la corta existencia de estos programas en Puerto Rico, algunos aún no reúnen los requisitos mínimos para su acreditación, sin embargo están confiados que en un futuro cercano los centros de trasplantes en Puerto Rico puedan acreditarse.

Hicieron énfasis en la estrecha colaboración entre varias entidades cívicas así como el Departamento de salud con la Cruz Roja Americana para que los trasplantes de médula ósea en Puerto Rico sea una realidad.

El Departamento de Salud expresa que la designación de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana para administrar los fondos que se mencionan en el proyecto es muy acertada ya que esta es la agencia local designada para el Programa Nacional de Donantes de Médula Osea para hacer el registro de donantes en nuestra Isla. Asimismo entienden que la Cruz Roja debe establecer un reglamento y plan de trabajo para implementar este proyecto. Reconocen que la asignación de $25,000 iniciales es una mínima por entender que la campaña que se proyecta es una amplia y la cual podría sobrepasar varios cientos de miles de dólares. Añadieron que allegar fondos para mantener el programa puede ser una ardua tarea.

No obstante, expresaron su endoso al proyecto comprometiéndose a colaborar en la celebración de la campaña como asesores, facilitadores y fiscalizadores de los fondos de esta campaña concedidos mediante esta ley.

Como parte de la información, para los posibles donantes, el Centro de Transfusión de Alicante en España señala lo siguiente "La médula ósea es una sustancia parecida a la sangre, de aspecto viscoso amarillento, que se encuentra en el interior de los huesos, sobre todo en la cresta ilíaca (cadera) y esternón. La misma produce células sanguíneas: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos transportan oxígeno, los blancos combaten las infecciones y las plaquetas son necesarias para evitar sangrados.

Son muchas las causas que pueden llevar a un mal funcionamiento de la médula. La médula ósea puede tener una alteración en la producción del número de células, o bien producirlas de forma defectuosa. Esto puede traer como consecuencia una alteración en las defensas del organismo, en la coagulación, en el transporte de oxígeno, etc.

Algunas de las enfermedades producidas a raíz de un mal funcionamiento de la médula ósea son, entre otras: leucemia, linfomas y la talasemia. Una posibilidad de tratamiento es el trasplante de médula ósea (progenitores hemopoyéticos). Mediante la quimioterapia y/o radioterapia se destruye la médula ósea enferma. Mediante el trasplante de progenitores hemopoyéticos se sustituye por médula ósea sana.

Las células extraídas se generan aproximadamente en dos semanas. Hay que establecer que aunque pueden existir efectos secundarios importantes, éstos son poco probables. Depende del método de extracción los efectos secundarios serán diferentes. Unos derivan de la anestesia general y otros de la propia técnica. Los efectos secundarios más frecuentes son: irritación de la garganta, ronquera, nauseas y vómitos tras la anestesia y molestias en la zona de punción.

Aunque la posibilidad de complicaciones existen, son poco probables. Las molestias que originan el proceso de donación merece la pena considerando que es, muchas veces, la última oportunidad de tratamiento de muchos enfermos.".

Para ser donante se exigen unos requisitos mínimos que incluyen: buena salud, 18 a 60 años, si es una persona que tiene diabetes y la misma está controlada llevando una estricta dieta y a la misma vez está entre los 18 a 60 años, también puede ser donante. Sin embargo, es menester señalar que el requisito más indispensable para ser donante es la solidaridad del posible donante con las personas que están en espera de su valiosa donación.

CONCLUSION

La campaña de orientación que se pretende con el P. del S. 1189 es una que merece el respaldo tanto de la Asamblea Legislativa como todo el pueblo puertorriqueño. Debemos recordar que esta enfermedad no distingue entre color de piel, estatus social, etc. por lo que todos estamos expuestos a la posibilidad de padecerla.

La Cruz Roja Americana indicó en la Audiencia Pública celebrada el pasado 11 de agosto que en la actualidad un trasplante de este tipo tiene un costo de alrededor de $175,000 a $200,000. Si se ofreciera el servicio en Puerto Rico el costo bajaría a unos $100,000 y para el futuro el mismo podría rondar entre los $75,000 a $90,000. Esto hace imperioso el que se agoten los recursos necesarios para poder estar a la par con otros países del orbe.

Ya entrando a los umbrales del Siglo 21 y reconociendo el avance que se han hecho en todos los campos, incluyendo la medicina, es inconcebible el que aún no hayamos logrado crear la conciencia necesaria en nuestro pueblo de la necesidad de ser más altruistas y ofrecer de lo que tenemos a aquel que lo necesita. Lamentablemente, a diferencia de otros pueblos nuestra ciudadanía no ha internalizado la importancia de las donaciones y como éstas podrían, en la eventualidad de una crisis, ser la diferencia entre salvar una vida o lamentar una muerte.

Mediante la aprobación de esta medida, podemos contribuir al fortalecimiento de los programas de médula ósea y fomentar la donación. Es nuestra responsabilidad preparar el camino para hacer frente a tan importante reto.

Por todo lo anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda recomiendan la aprobación del P. del S. 1189 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León, M.D.
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivera
Presidenta
Comisión de Trabajo, Asuntos del
Veterano y Recursos Humanos

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1247, y se da cuenta

de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como "Ley Trabajo-Despido sin Justa Causa; Indemnización", según enmendada, a fin de aumentar a dos (2) semanas la indemnización por cada año de servicio, cuando el empleado sea despedido de su cargo sin que halla mediado una justa causa.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, lo que establece en su propósito original era, brindar a los trabajadores que son despedidos de sus empleos una protección en caso de que estos fueran despedidos sin justa causa. Esta ley ha sido un instrumento de seguridad y protección al obrero, puesto que evita que un patrono haga un despido por mero capricho sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Se deberá entender como despido por justa causa de un empleado todo lo establecido en el Artículo dos (2) de esta ley.

Ya es hora de aumentar el derecho de recibir de su patrono una compensación correspondiente a dos (2) semanas por cada año de servicio, atemperandolo así al aumento del costo de vida actualmente.

El propósito de esta ley es seguir garantizando que los empleados despedidos sin justa causa tengan derecho a recibir una compensación aún mayor, por parte de su patrono, aumentando la compensación económica que actualmente es de una (1) semana por cada año de servicio, a dos (2) semanas por cada año de servicio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, para que lea como sigue:
"Artículo 1.- Indemnización por despido sin justa causa - Importe; años de servicio
(a) ...
(b) una indemnización progresiva adicional equivalente a **[una semana]** dos semanas por cada año de servicio."

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1247 recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:
A la página 1, línea 1, eliminar "lo que".
A la página 1, línea 1, eliminar "era".

En El Título:
A la página 1, línea 4, eliminar "halla" y sustituir por "haya".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1247 tiene como propósito enmendar el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como "Ley Trabajo-Despido sin Justa Causa; Indemnización", según enmendada, a fin de aumentar a dos (2) semanas la indemnización por cada año de servicio, cuando el empleado sea despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa.

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo solicitaron memoriales explicativo a: Sr. William Riefkohl, Presidente, Asociación de Industriales de Puerto Rico; CPA Jorge Aponte Hernández, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Sr. Wilfredo López Montañez, Cabildero Laboral; Hon. Aura L. González Rios, Secretaria, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; y Lcdo. Basilio Torres Rivera, Presidente, Comisión Industrial de Puerto Rico.

Es política pública del Estado proteger a la clase trabajadora por actos indebidos del patrono. En la Carta de Derechos, Constitución del Estado Libre Asociado se reconocen los derechos constitucionales de los trabajadores que laboren para el sector público o privado. La Ley Núm. 80, *supra*, es una ayuda para los empleados despedidos por sus patronos en el sector privado.

El despido injustificado es una práctica reprobable en que incurren los patronos sin tener una razón válida. La Asamblea Legislativa para corregir esta situación le concede una indemnización pecuniaria a los trabajadores despedidos sin mediar una justa causa. La Ley Núm. 80, antes citada, le otorga a los obreros un remedio económico rápido que en comparación con otras leyes laborales es limitado. Hernández Hernández v. Espinosa y otros, 98 JTS 41 y Segarra Hernández v. Royal Bank de Puerto Rico, 98 JTS 37.

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo respaldan esta medida por ser una de justicia social para la clase trabajadora. La Ley Núm. 80, *supra*, en la actualidad concede una indemnización por despido injustificado, pero es necesario por el aumento en los costos de vida aumentar a dos (2) semanas por cada año de servicio la compensación económica.

El Artículo 1 de la Ley Núm. 80, *supra*, establece la compensación de todo empleado por ser despedido sin justa causa. Para tener derecho al remedio dispuesto en ley, se tienen que establecer los siguientes hechos:

"a) la existencia de una relación obrero-patronal entre el trabajador y el patrono y/o entidad para la que presta servicios
b) que el trabajador haya prestado servicios a cambio de algún tipo de compensación
c) que el trabajador haya sido contratado sin tiempo determinado
d) que el trabajador haya sido despedido sin justa causa.

Sujeto a las circunstancias que motivan el despido, puede ser necesario establecer otros hechos. (29 L.P.R.A., 185 (b))". Delgado. R., *Apuntes Para El Estudio De La Legislación Protectora Del Trabajo En El Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan, 1996, pág. 133.*

Luego de establecidos esos hechos, en el Artículo 1 inciso (b) de la Ley Núm. 80, *supra*, dispone que se ofrecera una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) semana por cada año de servicio.

En el caso Alvira Cintrón v. S.K. & F. Laboratories Co., 97 JTS 40, el Tribunal Supremo resolvió que la indemnización provista en el Artículo 1 de la Ley Núm. 80, *supra*, no equivale a una remuneración o salarios por servicios prestados, ni constituye un sustituto del sueldo. La indemnización es un resarcimiento de daños y/o perjuicios.

Esta medida le ofrece un alivio a todo trabajador que sea despedido sin justa causa durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. En la actualidad el costo de vida va en aumento y es meritorio el aumentar la indemnización a dos (2) semanas por cada año de servicio. "Cuando el desempleo condena a un ser humano y a su familia al hambre o a la indignidad, hay que llegar a límites de exigencia para privarle de la protección que ha ganado acceso a nuestra legislación social". Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).

La Ley Núm. 80, *supra*, en el Artículo 5 define despido como aquella situación de suspensión indefinida por más de tres (3) meses, excepto empleos temporeros o la renuncia del empleado a causa de acciones del patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar como por ejemplo imponerle o intentar imponer condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, humillar de hecho o palabra al trabajador y rebajarlo de categoría. Añadiendo a estas situacioes la cesantía del empleado.

Nuestro Tribunal Supremo resolvió en el Secretario del Trabajo v. I.T.T., *supra*, que "(N) no se considerará despido por justa causa aquél que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento". El remedio de indemnización por despido injustificado es exclusivo de la Ley Núm. 80, *supra*. Se concede este remedio en casos que un trabajador no ha incurrido en actos prohibidos por ley. Por el contrario, el despido por parte del patrono es en forma arbitraria y caprichosa, sin mediar culpa o negligencia del empleado. Véase Arroyo v. Rattan Specialties, Inc. 117 D. P.R. 35 (1986).

En el Artículo 9, Ley Núm. 80, *supra*, dispone que un empleado despedido sin justa causa no puede renunciar a su derecho a recibir la indemnización que establece el Artículo 1 de esta ley.

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo reconocen que el mercado de trabajo es uno sumamente competitivo. Es justo ofrecerle un aumento en la indemnización por las consecuencias nefastas de ser despedido de un trabajo sin mediar una justa causa. Por esta razón es necesario endosar el Proyecto del Senado 1247, que beneficia a la clase trabajadora del país.

Por todo lo antes expuesto las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivera
Presidenta
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano
y Recursos Humanos

(Fdo.)
Enrique Rodríguez Negrón
Presidente
Comisión de Turismo, Comercio,
Fomento Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1253, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de crear la modalidad de delito agravado cuando la comisión del delito de robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria

pública o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas, centros comerciales y si la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal; y para imponer penalidades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado que es política pública garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y así lograr el establecimiento del orden y la paz social que todos aspiramos. Dentro de esta visión, es de particular importancia la integridad física y la seguridad emocional de nuestros niños y niñas. En el ejercicio del poder de *parens patriae* el estado tiene el deber ineludible de proteger y velar por el mejor bienestar de los menores. En este contexto es preciso señalar, que el estado atento al grave problema social que enfrenta con el robo y secuestro de niños, tiene la responsabilidad de desarrollar las estrategias que sean necesarias para atender de forma preventiva y en su aspecto punitivo la incidencia de estos delitos. Es evidente que el robo y secuestro de menores resulta ser una grave amenaza para la sociedad, particularmente para la familia que es víctima de este horrendo crimen.

En un análisis realizado por el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, en torno a la información suministrada por "National Crime Information Center" sobre personas desaparecidas en Puerto Rico, se refleja que entre los años 1980 a 1997 fueron reportados como desaparecidos 121 niños. De los datos se desprende, que de los menores desaparecidos 90 son niñas y 31 pertenecen al sexo masculino. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing Exploited Children) ha señalado que aunque el secuestro de niños en hospitales no es un delito de graves proporciones, se ha convertido en una preocupación para los padres, las enfermeras dedicadas al cuidado materno infantil y de las autoridades. En un estudio de casos reportados desde 1983 a 1997, se ha estimado que la incidencia del secuestro de infantes en los Estados Unidos ocurre en un promedio entre doce (12) y dieciocho (18) secuestros anualmente. De estos el dieciseis (16) por ciento ocurren en instalaciones hospitalarias.

El Código Penal de Puerto Rico en los Artículos 137A y 160 tipifica el secuestro agravado y el robo de menores, respectivamente. El delito de secuestro, en su modalidad agravada, dispone que toda persona que utilice la fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño para sustraer a otra para privarla de su libertad cuando se cometa contra un menor de dieciocho (18) años, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de sesenta (60) años, de mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta noventa y nueve (99) años y de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuarenta años (40) años.

Por otro lado, el Artículo 160 establece que el delito de robo de menores se configura cuando una persona sustrae a un niño menor de doce (12) años de manera maliciosa, violenta o fraudulenta, con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor o otra persona legalmente encargada de dicho menor. La pena establecida para este delito es de un término fijo de veinticuatro (24) años, de mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) años y de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciseis (16) años.

El acto prohibido del secuestro consiste en sustraer o detener una persona y moverla de un sitio a otro, privándola de su libertad. Para que este delito se configure es necesario que se demuestre la intención específica de privar a la persona de su libertad. El concepto de sustraer no es sólo mover a la persona de un sitio a otro sino que implica también un elemento de engaño y ocultación. De otra parte, la acción prohibida del robo de menores consiste en sustraer a un menor de doce (12) años con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona legalmente encargada del menor. Aquí el concepto de "sustraer" significa separar al menor y apartarlo de quien tiene la custodia legal, mediante engaño. En este delito también se requiere la intención específica. Ambos delitos son repudiados de forma enérgica por la sociedad puertorriqueña, sin embargo la penalidad en robo de menores es distinta que en la del secuestro agravado cuando ocurre en la persona de un menor. Entendemos que no existe razón de carácter moral o jurídico que

justifique una diferencia en las penas establecidas para estos delitos. En ambos casos la malicia es un acto intencional sin justa causa ni excusa, y que presupone conciencia de su naturaleza, ya que se trata de un delito que no puede llevarse a cabo a título de negligencia. En algunas circunstancias podría darse la situación de concurso de delitos entre ambas conductas, lo que provería una alternativa para el acusado de obtener una pena menor a través del Artículo 160 del Código Penal. En ambas conductas la intención criminal que se requiere es específica, sin embargo la distinción para ser acusado por el delito prescrito en el Artículo 137A es demostrar la intención de privarlo de su libertad para enfrentarse a una pena fija de sesenta (60) años. No obstante, cuando la intención es la de retener y ocultar al menor de sus padres o de la persona que tiene la custodia legal, entonces el principio de especialidad requiere que se acuse por el delito de robo de menores.

Esta Asamblea Legislativa entiende que es conveniente y necesario enmendar el Artículo 160 del Código Penal de Puerto Rico para imponer una pena proporcional a la pena que apareja el delito de secuestro agravado. Es imperativo que delitos de esta naturaleza, en los que las víctimas resultan ser niños recién nacidos o de muy poca edad, sean combatidos con todos los recursos necesarios y toda la fuerza que pueda imponer la Ley.

A la luz de estas consideraciones, es conveniente adoptar legislación para crear una modalidad de delito agravado cuando el robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria público o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas y centros comerciales y si la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal al cometer el delito. De este modo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reafirma una vez más su compromiso de asegurar la felicidad de nuestros niños y niñas y garantizarle una mayor tranquilidad a las familias de nuestra Isla.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. Se enmienda el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

Toda persona que maliciosa, violenta o fraudulentamente sustrajere a un niño menor de doce (12) años con el propósito de retener y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona legalmente encargada de dicho menor, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciseis (16) años.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de sesenta (60) años toda persona que cometiere este delito cuando se produjere en cualesquiera de las siguientes circunstancias en:

(a) cualquier institución hospitalaria público o privada;
(b) cualquier escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada;
(c) una casa, edificio, o estructura habitada;
(d) un centro de cuidado de niños;
(e) parques, áreas recreativas, centros comerciales;
(f) si la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal.

En cualquiera de las modalidades anteriores, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de noventa y nueve (99) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuarenta (40)años.

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. del S. 1253, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas:

Al Texto:
Página 4, línea 2: Añadir """ después de "como"

A La Exposición de Motivos:
Página 1, Párrafo 1, línea 2: Añadir "a" después de "social"
Página 2, Párrafo 2, línea 7: Tachar "años" después de "cuarenta"
Página 2, Párrafo 3, línea 3: Después de "tutor" tachar "o" y sustituir por "u"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1253 tiene como propósito de enmendar el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de crear la modalidad de delito agravado cuando la comisión del delito de robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria pública o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas, centros comerciales y sí la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal; y para imponer penalidades.

Como bién expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa el Gobierno de Puerto Rico ha declarado que es política pública garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y así lograr el establecimiento del orden y la paz social a que todos aspiramos. Dentro de esta visión, es de particular importancia la integridad física y la seguridad emocional de nuestros niños y niñas. En el ejercicio del poder de parens patriae el estado tiene el deber ineludible de proteger y velar por el mejor bienestar de los menores. En este contexto es precisamente que el Estado, atento al grave problema social que enfrenta con el robo y secuestro de niños, tiene la responsabilidad mayor de desarrollar estrategias que puedan atender de forma preventiva y en su aspecto punitivo, la incidencia de estos delitos.

Es preciso establecer, como punto de referencia, una descripción de la conducta tipificada también del Código Penal, bajo el Artículo 160 de nuestro Código Penal, el cual es objeto de análisis y del Artículo 137A, también del Código Penal, que tipifica el secuestro agravado.

El Artículo 137A del Código Penal sobre el delito de secuestro, en su modalidad agravada, dispone que toda persona que utilice la fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño para sustraer a otro, para privarla de su libertad cuando se cometan contra un menor de dieciocho (18) años, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de sesenta (60) años, de mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta noventa y nueve (99) años y de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuarenta (40) años.

Por otro lado, el Artículo 160 del Código Penal sobre el delito de robo de menores dispone que se configura el mismo cuando una persona sustrae a un niño menor de doce (12) años de manera maliciosa, violenta o fraudulenta, con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor y otra persona legalmente encargada de dicho menor. La pena establecida para este delito es de un término fijo de veinticuatro (24) años, de mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) años y de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dieciseis (16) años.

Es importante establecer las diferencias actuales entre ambos artículados para conocer cuando se configura cada delito. Para que el delito de secuestro se configure, el Artículo 137A requiere que se demuestre la intención específica de privar a la persona de su libertad al sustraerla o detenerla y moverla de un sitio a otro. El concepto de sustraer implica no solo el mover a la persona de un sitio para otro, sino, también la existencia de elementos como engaño y ocultación. De otro lado, el Artículo 160 sobre Robo de Menores implica sustraer a un menor de doce (12) años con el propósito de retenerlo y ocultarlo de sus padres, tutor u otra persona legalmente encargada del menor. Aquí el concepto de "sustraer" implica separar al menor y apartarlo de quien tiene la custodia legal, mediante engaño. Aquí también se requiere la intención específica.

Como podemos apreciar la mayor diferencia entre ambos artículos estriba en la pena. Esta Asamblea Legislativa entiende que no puede existir razón alguna que justifique una diferencia en las penas establecidas para estos delitos. En ambos casos la malicia es un acto intencional sin justa causa ni excusa, y que propone conciencia de su naturaleza, ya que se trata de un delito que no puede llevarse a cabo a título de negligencia. El problema puede agravarse cuando bajo ciertas circunstancias podrá darse la situación del concurso de delitos entre ambas conductas, lo que proveería una alternativa para el acusado de obtener una pena menor a través del Artículo 160 del Código Penal. Es por ésto que se hace necesario enmendar el Artículo 160 y así imponer una pena proporcional a la que apareja el Artículo 137A.

Para el análisis de la presente pieza legislativa contamos con la participación del Departamento de la Familia quienes señalaron estar totalmente de acuerdo con la misma, puesto que subsana una inconsistencia jurídica, además de tener como finalidad el que se garantice la seguridad física y emocional de nuestra familia. Al respecto nos señalaron lo siguiente:

"El Departamento de la Familia, organismo creado en virtud del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, no sólo reconoce la necesidad de atemperar la inconsistencia antes expuesta, sino que lo considera como un mecanismo para desalentar la comisión de este delito. Este Departamento tiene bajo su responsabilidad los programas de cuidado y protección de aquellos menores que han sido objeto de algún tipo de maltrato. En este aspecto,coincidimos con el enfoque de este proyecto en cuanto a que delitos de la naturaleza que nos ocupan merecen el repudio más enérgico por la sociedad puertorriqueña, ya que atentan contra la salud física y emocional de nuestros niños y sus padres.

De acuerdo al Censo de 1990, la población menor de 12 años era 823,946, lo que representa un 23.4 por ciento de la población. No obstante, se espera un total de 824,341 personas menores de 12 años para el año 2,000. De acuerdo a información provista por nuestra Oficina de Planificación e Informática, en la Sección de Personas Desaparecidas de la Policía de Puerto Rico han sido reportados 998 menores desaparecidos de enero a mayo de 1998. En este mismo período han sido localizados 613 menores."

El Departamento de Salud también tuvo oportunidad de ofrecer su opinión en relación al P. del S. 1253. En relación a ésto, nos señalan lo siguiente:

"En Puerto Rico contamos con 72 instalaciones hospitalarias públicas y privadas. De éstas, treinta y tres (33) hospitales están acreditados por la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de la Salud, conocida como "Joint Comission" y veinticuatro (24) están certificadas exclusivamente por el Programa de Medicare. Los restantes quince (15) hospitales no están acreditados ni certificados por las agencias antes mencionadas, y soló poseen la licencia del Estado autorizándolas a operar. Estas agencias acreditadoras requieren que los hospitales establezcan procedimientos para la prevención del secuestro de niños y neonatos. Además tienen procedimientos para la identificación de los recién nacidos.

La prensa ha informado recientemente sobre el robo o sustracción de una recién nacida en un hospital del país que ha tenido como consecuencia crear conciencia entre la ciudadanía de la necesidad de proteger a los menores de la intervención de personas extrañas o ajenas tanto a las instituciones como a la familia de los recién nacidos. El robo de menores es un delito repudiable por todos. Las familias que lo sufre, asi como la víctima objeto del delito, es decir la persona secuestrada, sufren severos daños y angustias

incluidos los daños físicos mentales, morales y de toda índole. En ocasiones, las víctimas nunca son recuperadas y su paradero jamás es descubierto.

La Exposición de Motivos de esta medida expone adecuadamente el problema que pretende combatir, su dimensión y el tratamiento que desde el punto de vista legal estará sujeta toda persona que cometa la modalidad del delito agravado del robo de menores.

El Departamento de Salud tiene como una de sus prioridades la protección de los niños. Esta medida es consistente con dicha prioridad, por lo que endosa su aprobación para que se convierta eventualmente en ley."

El Departamento de Educación también analizó la presente medida y además de darnos su opinión y apoyarla, nos recomendó enfatizar en procesos educativos preventivos al respecto. Veamos.

"La protección de nuestro niños es una de gran prioridad para el Departamento de Educación. Es evidente que el robo y secuestro de menores resulta ser una grave amenaza para la sociedad, para la familia que es víctima de este horrendo crimen y particularmente, para el menor que experimenta el mismo.

El robo de menores se ha convertido en una gran preocupación para los padres y para todo el personal que trabaja directamente con el cuidado y la seguridad de éstos.

Entendemos que no existe razón que justifique una diferencia en las penas establecidas para los referidos delitos.

Sin embargo, como Sistema Educativo, debemos enfatizar en procesos educativos preventivos que promuevan responsabilidad en :

* padres/madres o tutores, para evitar el secuestro o robo de menores
* las instituciones, para que establezcan procesos de seguridad más competentes
* comunidad, para que comprendan que nadie está exento de delitos como éstos
* las escuelas, para los estudiantes menores de doce años, que le permitan tomar acción preventiva si están bajo amenaza de secuestros".

Por los fundamentos antes expuestos y en aras de seguir protegiendo y velando por el mejor bienestar de nuestros menores, vuestra Comisión de lo Jurídico recomienda favorablemente la aprobación del P. del S. 1253, con las presentes enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1383, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el subinciso (b) del inciso (B) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de disponer que los

miembros de la Policía que sufran lesiones graves o leves permanentes o por un período prolongado, pero que no se incapaciten, tendrán derecho a que se les reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, dispone para que en el caso en que un miembro de la Policía sufra una lesión grave o leve que sea permanente o por un período prolongado, pero que no lo incapacite, el Superintendente le proveerá acomodo razonable, reconociéndosele los derechos conforme a la Ley Pública 101-336 de 26 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act of 1990", según enmendada.

El Gobierno de Puerto Rico ofrece la oportunidad de competir, a toda persona cualificada que interese participar en las funciones públicas del país. El reclutamiento del personal se rige por unas normas que establecen los requisitos mínimos para ocupar puestos basados en las cualificaciones establecidas. Este se lleva a cabo a través de un proceso en el cual los aspirantes a puestos compiten en igualdad de condiciones, mediante exámenes y pruebas de ejecución, para evaluar la experiencia y preparación de la persona.

La Asamblea Legislativa considera que a los miembros de la Policía que sufran lesiones graves o leves permanentes o por un período prolongado, pero que no se incapaciten, deben tener la oportunidad de que se les reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público, para garantizarles a estos servidores, que se han sacrificado por la seguridad del pueblo, empleos que les permitan integrarse al quehacer productivo de Puerto Rico, en la medida de sus capacidades, salvaguardando su sentido de dignidad y utilidad a que tienen derecho.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Enmendar el subinciso (b) del inciso (B) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.- Licencias-

(A) ...

(B) ...

No más tarde de treinta (30) días después de ser referido el caso, el médico de la Policía y el Médico del Fondo del Seguro del Estado deberán certificar si el miembro de la Policía padece una lesión grave o leve y si la misma es temporera o permanente.

(a) ...

(b) En el caso en que la lesión grave o leve sea permanente o por un período prolongado, pero que no incapacite al miembro de la Fuerza, se le proveerá acomodo razonable reconociéndosele los derechos conforme a la Ley Pública **(93-112 del 22 de febrero de 1984)** 101-336 de 26 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act of 1990", según enmendada. La persona concernida tendrá derecho, conforme a su capacidad, a que se le reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público, para el cual reúna los requisitos mínimos establecidos para el mismo."

Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, previo estudio y análisis del Proyecto del Senado 1383 tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas.

En El Texto Decretativo:

A la página 2, línea 16, después de "el mismo" añadir "Para fines de los procedimientos de reclutamiento y selección, se respetarán las disposiciones de personal aplicables a cada agencia en particular."

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1383 tiene como propósito enmendar el subinciso (b) del inciso (B) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996" a fin de disponer que los miembros de la Policía que sufran lesiones graves o leves permanentes o por un período prolongado, que no estén incapacitados pero tengan una limitación que le impida realizar la labor, tengan derecho a que se les reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público.

Para el análisis y consideración de la medida las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, solicitaron memoriales a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico y al Departamento del Trabajo y Recusos Humanos.

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, dispone para que en el caso en que un miembro de la Policía sufra una lesión grave o leve que sea permanente o por un período prolongado, pero que no lo incapacite, el Superintendente le proveerá acomodo razonable, reconociéndole los derechos conforme a la Ley Pública 101-336 de 26 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act of 1990", según enmendada.

Conforme lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley Núm. 53, supra, para que un miembro de la Policía cualifique para acomodo razonable, tiene que haber sufrido una lesión en el ejercicio de sus funciones que sea permanente o por un período prolongado y que a su vez no le permita ejercer las funciones que venía realizando como miembro de la Fuerza.

Por otro lado, el Artículo 5-A de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" (11 L.P.R.A., sec. 7), dispone que el patrono de un obrero o empleado que se inhabilite para el trabajo como resultado de un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional, viene obligado a reservar el empleo que desempeña al momento de su inhabilitación y reinstalarlo en el mismo sujeto a las condiciones que se establecen.

Las disposiciones de la Ley Núm. 45, supra, aplican cuando se trate de un accidente en el trabajo o enfermedad ocupacional que inhabilite al empleado de manera transitoria o por un corto período de tiempo. En cambio, cuando se trate de una lesión permanente o por un período de tiempo prolongado, la Ley Núm. 53, supra, establece que el Superintendente de la Policía viene obligado a reubicar al miembro de la Policía en otra posición para que realice otras funciones dentro de la agencia que no son inherentes a su cargo como miembro de la Policía. Esto trae como consecuencia que el proceso de acomodo razonable en muchas ocasiones resulte difícil, debido a la cantidad de personal que compone el Cuerpo de la Policía y la limitada cantidad de plazas disponibles. Esta situación dificulta la reubicación del miembro de la Policía y fomenta una duplicidad de funciones en la agencia.

Por otra parte, el Gobierno de Puerto Rico ofrece la oportunidad de competir, a toda persona cualificada que interese participar en las funciones públicas del país. El reclutamiento del personal se rige por unas normas que establecen los requisitos mínimos para ocupar puestos basados en las cualificaciones establecidas. Este se lleva a cabo a través de un proceso en el cual los aspirantes a puestos, compiten en igualdad de condiciones, mediante exámenes y pruebas de ejecución, para evaluar la experiencia y preparación de la persona.

El Proyecto del Senado 1383 persigue el objetivo de brindar un remedio a fin de ayudar a los miembros de la Policía, que debido a un accidente en el trabajo tengan una lesión que no los incapacite, pero que los limite a poder realizar la labor de un Policía. Esta medida está basada en lo expresado por el Tribunal Supremo en relación a la legislación del Fondo del Seguro del Estado al señalar que dicho estatuto "es uno remedial, que no puede interpretarse para prohibir o restringir la actividad laboral futura" Negrón vs. C.I.T, 111 DPR 657.

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, favorecen la aprobación de la enmienda al Artículo 18 de la Ley Núm. 53, supra, a fin de que todo miembro de la Policía que sufra una lesión permanente o por un período prolongado, tenga derecho, conforme a su capacidad, a que se le reinstale en cualquier otro puesto en el Servicio Público para el cual reúna los requisitos mínimos. Para fines de los procedimientos de reclutamiento y selección, la Policía de Puerto Rico podrá conocer la disponibilidad de los puestos vacantes en otras agencias a base de las convocatorias y de la Oficina Central de Administración de Personal. Además, al momento de reinstalar en un puesto a cualquier miembro de la Policía se tomará en consideración las disposiciones aplicables a cada agencia en particular.

Las Comisiones de Trabajo Asuntos del Vetereano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública celebraron reunión ejecutiva. En la misma se realizó un estudio y análisis de la información disponible.

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivera
Presidenta
Comisión del Trabjo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Seguridad Pública

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Fedrales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1908, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Fomento, Comercio Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas.

"**LEY**

Para reglamentar la profesión del Practicaje en Puerto Rico; crear la Comisión de Practicaje de Puerto Rico; definir sus funciones, facultades y deberes; imponer sanciones; autorizar a fijar tarifas; facultar a los prácticos a organizarse; reconocer y mantener los Fideicomisos de Administración y Operación, así como el Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de P.R.; y derogar las leyes existentes estén en conflicto con la presente Ley incluyendo, pero sin limitarse a la Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968 y el Reglamento Número 4286 promulgado por el Administrador de la Autoridad de los Puertos, específicamente, las secciones 6, 8 y la 10 a la 18, inclusive.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sobre el noventa porciento (90%) de los bienes importados a Puerto Rico llegan por mar. El puerto de mayor actividad es el de San Juan, donde está concentrado el setenta y cinco porciento (75%) del comercio de la Isla. El Puerto de San Juan tiene un acceso peligroso que requiere un control especial del tráfico en

el puerto, así como medidas de seguridad más estrictas y un servicio de practicaje de excelencia. Además, los otros puertos disponibles en el país requieren de la asistencia de prácticos para brindar las garantías de seguridad necesarias en estas aguas.

Las aguas, puertos, bahías, radas, ensenadas y sondas son recursos naturales de vital importancia para el país. La Legislatura de Puerto Rico, reconociendo este hecho, tiene sumo interés, por razones de política pública, salud y seguridad, en crear una ley con el fin de reglamentar la actividad de los prácticos que ofrecen y rinden el servicio a las embarcaciones que navegan en las aguas navegables de Puerto Rico, con el propósito de que los recursos naturales, el medio ambiente, la vida y propiedad de los ciudadanos queden absolutamente protegidos. La sección 8501 (a) del Título 46 del United States Code provee, salvo ciertas excepciones, que " los prácticos de bahías, ríos y puertos de los Estados Unidos habrán de ser regulados solamente conforme a las leyes del Estado". El término "estado" está definido en la sección 2101 (36) del mismo título e incluye el territorio de Puerto Rico. Es por tanto, la facultad legal de Puerto Rico para reglamentar el practicaje.

Actualmente, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico está a cargo del control del movimiento de embarcaciones en los puertos. Históricamente, la Autoridad, no ha tenido los medios para supervisar el practicaje. Es por ello, que se reconoce la necesidad de cambios operacionales y administrativos en el manejo del practicaje local. La creación de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico pretende resolver este problema. Esta Comisión sería responsable de reglamentar la admisión de prácticos para ejercer en Puerto Rico y de hacer cumplir los reglamentos de practicaje, así como fijar tarifas y otras responsabilidades que dispone esta Ley.

La Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de tener una Comisión de Practicaje que equipare a Puerto Rico a todas las jurisdicciones de los Estados Unidos y permita mantener nuestros puertos en el más alto grado de competitividad con otros similares en el mundo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico".

Artículo 2.-Definiciones -Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el siguiente significado:

(a) Embarcación - incluye toda descripción de nave acuática u otro instrumento artificial capaz de ser usado como medio de transportación en el agua.

(b) Práctico - significa el práctico local licenciado o el práctico designado certificado. Es práctico la persona experimentada, versada y diestra que, a través de la práctica, adquiere el conocimiento del lugar en que navega cualificándolo para dirigir y dirige a vista el rumbo de las embarcaciones, llamándose de costa o de puerto, respectivamente, según sea en una u otro donde ejerce su profesión.

(c) Práctico aprendiz - aspirante a práctico que no ostenta licencia de practicaje por la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

(d) Práctico en Probatoria - práctico que ostenta una licencia temporera o provisional por un tiempo limitado, según otorgado por la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

(e) Comisión - significa la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

(f) Puerto - lugar de las costas de Puerto Rico, protegido naturalmente de los vientos y dispuesto para la seguridad de las naves y facilitar las operaciones del tráfico naviero. Actualmente, operan los puertos de San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Fajardo, Vieques, Culebra, Guayama (Las Mareas), Guayanilla, Guánica, Yabucoa, Aguirre, Jobos, Aguadilla y Tallaboa.

(g) Aguas sujetas a practicaje en Puerto Rico - significan todas las aguas navegables de Puerto Rico conforme dispuso el Congreso de los Estados Unidos en la sección 8 de la Ley de Relaciones Federales, 48USC749.0., según enmendada

(h) Piloto - el que gobierna y dirige un buque en la navegación, incluyendo el que sabe dirigir la navegación en alta mar por las observaciones de los astros y/o equipos electrónicos. Usualmente es el segundo oficial de un buque mercante.

(i) Pilotar - significa dirigir un buque, especialmente a la entrada, enmiendas y salida de los puertos, bahías y ensenadas ó a través de canales estrechos y sondas, así como también en su navegación de un puerto a otro.

(j) Practicaje o Pilotaje - significa el acto de pilotar. Ciencia o arte que enseña el oficio de práctico. Pilotaje es, además, el honorario o derecho que paga la embarcación al práctico por su servicio de practicaje.

(k) Ley Uniforme de Procedimientos Administrativos - significa la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.

(l) Licencia o certificado - significa el documento expedido por la Comisión a los prácticos y a los prácticos aprendices que los autoriza a ejercer el practicaje en Puerto Rico.

Artículo 3.-Declaración de Política Pública -

(a) El practicaje es un servicio esencial, de tal importancia, que su existencia continua debe estar garantizada por las leyes de Puerto Rico.

(b) Debido a que la seguridad en el tránsito marítimo es el objetivo primario en la reglamentación del practicaje y debido al significado económico que tiene al prestarse el servicio, la necesidad de una gran inversión de capital para proveer el servicio requerido, y el hecho de que los prácticos están rindiendo servicios que están considerados esenciales a la economía y al beneficio público, se determina que la reglamentación económica, más bien que la competencia en el mercado, servirá mejor para proteger la salud pública, seguridad y beneficios.

(c) La Comisión de Practicaje de Puerto Rico tendrá facultad para expedir licencias de práctico en la cantidad que discrecionalmente ésta determine como necesarios y en número adecuado para prestar el servicio. La Comisión habrá de disponer el procedimiento a ofrecerse para fijar las tarifas y otros aspectos económicos de la reglamentación de practicaje, lo que hace con la intención de establecer una reglamentación de avanzada que tenga como fin proteger los intereses de las partes relacionadas con el practicaje, así como proteger la seguridad y la economía del pueblo de Puerto Rico. Esta Ley pretende que se preste un servicio de practicaje confiable, estable, económico y seguro en los puertos de Puerto Rico.

Artículo 4.-Prestación de Servicios - Ninguna persona podrá ejercer el practicaje en los puertos de Puerto Rico a menos que cumpla con los deberes y obligaciones, que sin limitación, a continuación se incluyen:

(a) Prestar el servicio a toda aquella persona que lo solicite, excepto por razones de seguridad que impidan hacerlo o aquellas otras que la Comisión determine por reglamento.

(b) Los prácticos quedan, por la presente, impedidos de determinar unilateralmente las tarifas u otros cargos. La Comisión determinará la tarifa y otros cargos a cobrarse por el servicio de practicaje.

(c) Los prácticos, bajo la supervisión de la Comisión, adquirirán y mantendrán embarcaciones, facilidades de oficina, equipos, un sistema de despacho, equipos de comunicaciones y cualquier otra facilidad o equipo que sea necesario y que sirvan de apoyo a un servicio de practicaje moderno, confiable y seguro.

(d) Los prácticos, en los puertos en que ellos ejercen, tienen que entrenar a los aspirantes a prácticos que se le asignen, según disponga la Comisión. El no cumplir con estas obligaciones conllevará acción disciplinaria contra el practico, conforme esta Ley. No se debe entender que por esta disposición se crea una relación de agencia o de patrono-empleado entre el práctico y el aspirante a ejercer el

practicaje en Puerto Rico.

(e) Se establecerá un área donde el bote o embarcación del práctico abordará el barco que entra al puerto; proveyéndose que:

(1) El práctico abordará el barco que entra antes del barco llegar a las boyas que marcan la entrada del puerto.

(2) El práctico llegará al puente de mando del barco con suficiente tiempo para, antes de tomar el mando, intercambiar información con el Capitán u oficial al mando, para familiarizarse con las características particulares del barco al maniobrar y con cualquier otra condición especial de éste.

(3) El práctico tomará el mando "conn" del capitán u oficial al mando con tiempo suficiente que le permita alinear la proa del barco con el centro del canal de entrada para así evitar poner el barco en peligro o en riesgo de accidente.

(4) A la salida de un barco del puerto, el práctico permanecerá a bordo hasta que el barco haya sobrepasado las boyas que marcan el límite del canal de entrada o todo peligro posible y anticipable; disponiéndose, que en circunstancias normales no desembarcará dentro del puerto.

El no cumplir con las obligaciones dispuestas en este Artículo conlleva la acción disciplinaria correspondiente según esta Ley.

Artículo 5.-Comisión de Practicaje de Puerto Rico -

Se crea la Comisión de Practicaje de Puerto Rico para autorizar, reglamentar, supervisar e imponer sanciones sobre el practicaje, según definido en el inciso (j) del Art. 2 de esta Ley. La Comisión tendrá la autoridad y el presupuesto para establecer las reglas de disciplina, reglas de tránsito y para adquirir y financiar todo tipo de embarcación, equipo o materiales necesarios para llevar a cabo su función. La Comisión adoptará y promulgará un reglamento de tránsito marítimo y establecerá los límites donde los prácticos deben abordar o desembarcar de las embarcaciones. La Comisión fijará tarifas de pilotaje y poseerá y ejercerá los poderes relativos a la protección del tránsito marítimo en las aguas y puertos de la Isla. Tendrá la capacidad para actuar de forma autónoma, así como la facultad para demandar y ser demandada.

Artículo 6.-Comisionados -

(a) Composición

La Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, uno de los cuales será su presidente, nombrados todos por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. Los miembros de la Comisión serán ciudadanos de los Estados Unidos y residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presidente de la Comisión será el funcionario ejecutivo de la misma y podrá designar a un comisionado asociado para actuar como presidente en su ausencia. El comisionado presidente tendrá discreción para asignar áreas de trabajo, tanto en la fase adjudicativa como en la cuasilegislativa y/o operacional de la agencia a uno o más comisionados. La composición será la siguiente: Dos (2) de estos miembros deberán ser prácticos licenciados, que estén activamente practicando la profesión; uno (1) para representar a los prácticos de San Juan y, el otro, a los prácticos de la Isla, que sean nominados por cada asociación de prácticos; dos (2) de los cuales deberán estar activamente envueltos en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sean usuarios de los servicios de practicaje y sean nominados por la Asociación de Navieros de Puerto Rico; dos (2) que no deben estar y que nunca hayan estado envueltos o monetariamente interesados o relacionados con la profesión del practicaje, negocio naviero o industria marítima, quienes representarán al interés público; y uno (1) que represente al Gobierno de Puerto Rico, el cual será empleado de la Autoridad de los Puertos. Para propósitos de este Artículo, un "usuario de los servicios de practicaje" es cualquier persona que sea agente o representante de cualquier persona con un interés propietario en el negocio que regularmente emplea prácticos con licencia de Puerto Rico, con el propósito de proveer servicios de practicaje o cualquier persona que sea un empleado directo de éstos.

(b) Término

Los comisionados primeramente nombrados en virtud de este Artículo, ocuparán sus cargos por términos de dos (2), tres (3) y cuatro (4) años, respectivamente. El término de cada uno será fijado por el Gobernador pero los sucesores serán nombrados por el término de cuatro (4) años. Cualquier persona escogida para

llenar una vacante será nombrada solamente por el término no vencido del comisionado a quien sucede. Las vacantes ocurridas en la Comisión en forma alguna podrán menoscabar el derecho de los Comisionados restantes a ejercitar todas las facultades de la misma. Al vencimiento del término de cualquier comisionado, éste podrá continuar en el desempeño de sus funciones hasta que haya sido nombrado su sucesor y éste haya tomado posesión de su cargo.

El Gobernador tendrá la autoridad para remover a los comisionados por faltar a las obligaciones requeridas en esta ley, por incompetencia o por conducta no profesional. Una mayoría de los miembros de la Comisión constituirá quórum.

Artículo 7.-Certificación de los Comisionados; Sede -

Inmediatamente, y antes de entrar a ocupar los deberes del cargo, los comisionados tomarán juramento constitucional y registrarán el mismo en el Departamento de Estado; que en consecuencia, le emitirá para dicho comisionado un certificado de su nombramiento. La Comisión tendrá su sede en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Artículo 8.-Organización de la Comisión; Reuniones -

(a) Inmediatamente después de la designación, aprobación y nombramiento de sus comisionados, la Comisión se reunirá, organizará y establecerá un reglamento interno para su administración, conforme a la Ley Uniforme de Procedimiento Administrativo, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada. La Comisión elegirá cada dos (2) años el vicepresidente y el secretario/tesorero entre los comisionados. Estos, cuando asistan a reuniones oficiales de la Comisión, recibirán un emolumento en concepto de dietas de setenta y cinco dólares ($75.00) por día.
(b) la Comisión sostendrá una o más reuniones regulares trimestralmente en algún lugar conveniente en la Isla el día o los días que la Comisión seleccione. Las reuniones especiales podrán ser convocadas por la mayoría de los comisionados. El secretario de la Comisión entregará notificación de todas las reuniones regulares y especiales a todos los comisionados y, en adición, a cualquier otra persona que por ley deba ser notificada.
(c) Dentro de los catorce (14) días calendarios siguientes a cada reunión de la Comisión, ésta emitirá un reporte escrito a cada práctico explicando cualquier acción tomada por la Comisión en la reunión, si se tomare alguna determinación que afecte las condiciones de practicaje.

Artículo 9.-Personal; empleos -

La Comisión nombrará o empleará todo el personal que sea necesario para asistirse en el cumplimiento y ejecución de todos y cada uno de los poderes, deberes y obligaciones establecidos en esta Ley. Estos empleados no podrán ser prácticos activos o ex-prácticos, así como navieros o ex-navieros o miembros de la Comisión. Estas personas estarán autorizadas a cumplir y ejecutar todos los deberes y obligaciones y el trabajo que le sea asignado por la Comisión. Excepto lo provisto de otro modo en esta Ley, la Comisión proveerá toda la asistencia legal necesaria para llevar a cabo lo estipulado en esta Ley.

Artículo 10.-Número de Prácticos; reciprocidad entre puertos -

La Comisión determinará el número de prácticos en cada puerto y expedirá las licencias y certificados que estime necesarios a base de la demanda de los servicios de practicaje para velar por el interés público de mantener servicios de practicaje eficientes y seguros. Basado en las condiciones económicas de los puertos, la Comisión adoptará reglas autorizando la transferencia de prácticos aplicando el sistema de antigüedad. También podrá autorizar reciprocidad de licencias entre puertos, si sirve al mejor interés público.

Artículo 11.-Cualificaciones para candidatos a prácticos aprendices -

(a) Además de reunir otros requerimientos de esta Ley, cada aspirante a nombramiento y licenciamiento como práctico deberá:
  (1) Tener por lo menos 21 años, evidenciados con copia del certificado de nacimiento u otra prueba legal de la edad.
  (2) Haber completado y aprobado 12 años de educación formal, evidenciados con diploma de escuela

superior o por evidencia equivalente de esto que sea satisfactoria para la Comisión.

(3) Estar mental y físicamente saludable, evidenciado con prueba documental, tras haber pasado satisfactoriamente un examen físico y psiquiátrico completo administrado por un médico licenciado y por un psiquiatra, respectivamente, quienes habrán de ser designados por la Comisión para administrar estos exámenes, dentro de un término de treinta (30) días antes de presentar su solicitud. La Comisión, en consulta con el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, adoptará mediante reglamento los requerimientos para acreditar el examen físico y psiquiátrico, así como las reglas que establecerán los patrones mínimos sobre la capacidad física y mental necesaria para llevar a cabo los deberes y obligaciones profesionales de un práctico aprendiz. Dichos patrones incluirán cero tolerancia para el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes y cualquier otra sustancia controlada regulada, a menos que la persona esté bajo el cuidado de un médico o psiquiatra, o esta sustancia controlada fuera prescrita por dicho médico o psiquiatra. Para mantener su elegibilidad como candidato, cada aspirante deberá proveer anualmente prueba documental de haber pasado satisfactoriamente un examen físico y psiquiátrico completo administrado por un médico licenciado y por un psiquiatra, respectivamente. El médico y el psiquiatra deberán estar aprobados por la Comisión y conocer los patrones mínimos para certificar que el tenedor de este certificado cumple satisfactoriamente con los mismos. Los patrones para el práctico aprendiz y probatorio incluirán un examen de drogas y proveer un certificado semestral de antecedentes penales que evidencie buena conducta.

(4) Haber tenido experiencia marítima satisfactoria para la Comisión, evidenciada por documentación en uno de los siguientes servicios mientras era tenedor de una licencia de la Guardia Costanera de los Estados Unidos:

(a) Por lo menos dos (2) años o 720 días de servicio en el mar durante un período de cinco (5) años, un (1) año o 360 días de los cuales debió haber estado navegando bajo, por lo menos una licencia ilimitada expedida por la Guardia Costanera de los Estados Unidos de segundo piloto o

(b) Por lo menos dos (2) años o 720 días de servicio durante el período de cinco (5) años inmediatamente precedentes en un puerto de aguas profundas de los Estados Unidos o del Caribe sirviendo bajo licencia ilimitada de la Guardia Costanera de los Estados Unidos o de una entidad gubernamental reguladora debidamente constituida, como un piloto activo de primera clase, siendo tenedor además de una licencia de segundo piloto sin límites, o capitán de embarcación de carga o remolque de al menos mil seiscientas (1,600) toneladas brutas registradas sobre el océano, actuando bajo la autoridad de una entidad gubernamental reguladora debidamente constituida o

(c) Por lo menos dos (2) años o 720 días de experiencia en remolques durante un período de cinco (5) años, un (1) año de los cuales debió haber estado sirviendo en la capacidad de capitán de un remolque/carguero combinado de al menos 5,000 toneladas brutas registradas bajo una licencia de la Guardia Costanera de los Estados Unidos.

(d) Por lo menos tres (3) años de experiencia como un oficial de en cubierta durante el período de diez (10) años antelación a solicitar la de admisión, un (1) año de los cuales debió haber servido como el oficial, al mando segundo el mando u oficial de navegación y/o operaciones a bordo de un buque de la Marina de los Estados Unidos o de cualquier otra rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos o de la Guardia Costanera de los Estados Unidos, en embarcaciones en exceso de 1,600 toneladas brutas y poseer además una licencia ilimitada de la Guardia Costanera de los Estados Unidos de por lo menos segundo piloto.

(5) Someter la documentación evidenciando del tiempo de servicio en el mar, como oficial, y otros documentos oficiales, según sean requeridos por la Comisión.

(6) Someter copia de la licencia de piloto de primera clase sin límites expedida por la Guardia Costanera de los Estados Unidos, que cubra las aguas del puerto o puertos en el cual o a los cuales el práctico aprendiz habrá de asignarse para el aprendizaje.

(7) Someter todos los certificados de entrenamiento y/o educación continua necesarios que puedan

ser requeridos por la Comisión.

(8) La Comisión podrá adoptar reglas autorizando combinaciones equivalentes de servicios de dos o más de las áreas señaladas en los subpárrafos (a) (4) (a.), (b.), (c.), y (d.). La Comisión podrá dejar sin efecto el requerimiento del párrafo (a) (4) cuando sea necesario llenar una vacante y no haya aspirantes para la vacante con la experiencia necesaria.

Artículo 12.-Cualificaciones para licencias como prácticos de Puerto Rico -

(a) En adición a cualquier otro requerimiento dispuesto por esta Ley, cada aspirante a práctico licenciado de Puerto Rico debe:

(1) Tener veintiún (21) años de edad o más cumplidos, evidenciado por copia del certificado de nacimiento u otra prueba legal de la edad al momento de solicitar la licencia.

(2) Haber completado y aprobado doce (12) años de educación formal, evidenciado por un diploma de escuela superior o por evidencia equivalente de esto, que sea satisfactoria para la Comisión.

(3) Estar en buena salud física y mental, evidenciada por prueba documental, tras haber pasado un examen físico y psiquiátrico completo administrado por un médico licenciado y por un psiquiatra, respectivamente, aceptados por la Comisión, dentro de los treinta (30) días precedentes a su solicitud de admisión o renovación de la licencia de practicaje.

(4) La Comisión adoptará reglas para establecer los parámetros del examen físico y psiquiátrico, las que incluirán patrones mínimos de la capacidad física y mental necesaria para llevar a cabo los deberes y obligaciones profesionales de un práctico licenciado de Puerto Rico. Dichos patrones incluirán cero tolerancia para el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes y cualquier otra sustancia controlada regulada, a menos que el individuo esté bajo el cuidado de un médico o psiquiatra y la sustancia controlada esté prescrita por dicho médico o psiquiatra. Para mantener una licencia de práctico de Puerto Rico, cada práctico licenciado proveerá anualmente prueba documental de haber pasado satisfactoriamente un examen médico y psiquiátrico completo administrado por un médico licenciado y por un psiquiatra, respectivamente. El médico y el psiquiatra deberán haber sido aceptados por la Comisión y conocer los patrones mínimos y certificar que la licencia cumple satisfactoriamente con ellos. Los patrones para licencias incluirán un examen de drogas a ser administrado al azar por técnicos de laboratorio acreditados y proveer un certificado semestral de antecedentes penales que evidencie buena conducta.

(5) Haber terminado el adiestramiento requerido como práctico aprendiz, según aprobado por la Comisión. Al momento someter de la solicitud, cada aspirante deberá tener una licencia válida de práctico sin límites de la Guardia Costanera de los Estados Unidos que cubra todas las aguas del puerto o puertos para donde se solicita la licencia de práctico de Puerto Rico y debe haber satisfactoriamente completado el de prácticos aprendices en el puerto para el cual la licencia de práctico de Puerto Rico es solicitada.

(6) Los aspirantes a prácticos someterán, para su aprobación, los certificados de entrenamiento y/o educación continua que la Comisión requiera como requisito previo a la expedición de su licencia.

Artículo 13. - Expedición de Licencias -

La Comisión deberá expedir todas las licencias originales por un período probatorio que no exceda seis (6) meses. Al expirar este período inicial, la Comisión podrá expedir otra licencia probatoria por otro período que no exceda seis (6) meses. Después de completar un período de doce (12) meses con licencia en probatoria, la Comisión tendrá que evaluar el expediente en su totalidad y determinar si habrá de expedir una licencia permanente o no.

Las licencias temporeras o probatorias podrán contener limitaciones de tonelaje, calado, eslora o tipo de embarcación.

Artículo 14.-Acreditación de prácticos con licencia -

A todos los prácticos licenciados bajo las leyes, estatutos y reglamentos estatales y federales previos a la vigencia de esta Ley le serán otorgados todas las licencias con el mismo alcance y capacidad que las facultadas a otorgar por la Comisión. Esto no les relevará del cumplimiento posterior de los requisitos de educación continua que pueda establecer la Comisión por reglamento.

Artículo 15.-Programa de entrenamiento de prácticos en aprendizaje y probatorios; financiamiento -

(a) Los prácticos de Puerto Rico licenciados en cada puerto someterán a la Comisión para su aprobación un programa de entrenamiento de prácticos en aprendizaje y probatorios de por lo menos dos años de duración, aplicable a todos los prácticos aprendices nombrados para servir en cada puerto. Los siguientes requisitos constituyen los parámetros dentro de los cuales los programas de entrenamiento de prácticos aprendices y probatorios serán establecidos y llevados a cabo por los prácticos licenciados en todos los puertos de Puerto Rico:

(1) Al recibir su nombramiento, un práctico aprendiz deberá reportarse al práctico licenciado de Puerto Rico en el puerto al cual fue asignado para servir y deberá cumplir un período no menor de noventa (90) días como observador de entrenamiento (aprendiz). Durante dicho período:

(a) El aprendiz deberá acompañar a los prácticos licenciados por las aguas de Puerto Rico, de esta manera se familiarizará con todo tipo de agua, canales y puertos en variedad de condiciones.

(b) El aprendiz deberá obtener una licencia válida de piloto práctico de primera clase sin límites de la Guardia Costanera de los Estados Unidos que cubra todas las aguas del puerto al que va a ser asignado antes de que la Comisión lo autorice a pilotar embarcaciones dentro de, los límites y condiciones establecidos por los prácticos licenciados a cargo del entrenamiento.

(2) Al completar el período de observador en entrenamiento (aprendiz), el práctico aprendiz deberá someter a la Comisión una hoja de manejo de embarcaciones para prácticos aprendices para cada movimiento o embarcación en la cual él o ella acompañó a un práctico licenciado de Puerto Rico. Cada una de las hojas deberá ser firmada por el práctico a cargo, quien acompañara al práctico aprendiz, y deberá contener principalmente:

(a) El registro de la embarcación, medida, tonelaje bruto y diseño

(b) El área geográfica o puerto en la cual o en los cuales la embarcación fue pilotada;

(c) El clima y las condiciones marítimas encontradas;

(d) La hora del día;

(e) Cualquier incidente marítimo que deba ser informado conforme lo exige esta Ley.

(f) Los comentarios del práctico a cargo, siempre que el práctico aprendiz, bajo su supervisión, estuvo al mando de la embarcación para dirigir su navegación.

(3) Cada solicitud para aumentar los límites y condiciones bajo las cuales un práctico aprendiz habrá de estar autorizado para pilotar, deberá ser sometida a la Comisión para su aprobación. Esta deberá estar acompañada por la evaluación y la hoja de manejo de embarcaciones que exige la subsección 2 anterior para prácticos aprendices o probatorios para cada embarcación que el práctico aprendiz haya pilotado desde la última vez que sus límites y condiciones fueron aumentados por la Comisión.

(4) Para completar satisfactoriamente el programa de entrenamiento, al práctico aprendiz, se le irán aumentando gradualmente los límites y condiciones para pilotar hasta que sea autorizado, por la Comisión, a pilotar embarcaciones con un máximo de calado de tres (3) pies menos que el calado normal permisible en el puerto al cual el práctico aprendiz será autorizado a pilotar; según propuesto por los prácticos licenciados de Puerto Rico en ese puerto y aprobado por la Comisión.

(5) El programa de entrenamiento de prácticos en aprendizaje y probatorios será sufragado durante los primeros seis (6) meses, luego de la aprobación de esta Ley, por el Fideicomiso Operacional. Posteriormente, será sufragado por la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

Artículo 16.-Fundamentos que justifican acción disciplinaria por la Comisión -

(a) Cualquier acto de mala conducta, desatención al deber, negligencia o incompetencia, cualquier violación voluntaria o premeditada de alguna ley o reglamento, incluyendo las reglas federales o locales de tránsito marítimo a ser cumplidas por los prácticos locales o prácticos aprendices, o cualquier falta al ejercitar el cuidado razonable y prudente que se espera de un práctico o práctico aprendiz bajo la misma o similar circunstancia, conllevará acción disciplinaria. Algunos actos u omisiones en que incurren los prácticos o prácticos aprendices que conllevan acción disciplinaria incluyen, pero no se limitan a:

(1) Faltar al no tomar precauciones o hacer ajustes o concesiones para los efectos que sean previsibles del viento, corrientes y mareas.

(2) Faltar al no obtener o adecuadamente usar la información disponible al práctico.

(3) Faltar al no navegar con precaución cuando la visibilidad es limitada.

(4) Transitar por canales donde la profundidad es menor al espacio prescrito y recomendado por los prácticos y aprobados por la Comisión como el espacio mínimo que debe existir entre la quilla y el fondo del mar.

(5) Transitar en exceso de velocidad.

(6) El dejar que la licencia o certificado de práctico le sea revocada, suspendida, restringida, puesta en probatoria, o, en cualquier otra forma, permitir que se actúe sobre ella incluyendo, pero sin limitarse, al abandono o depósito en espera de ulterior acción disciplinaria, en espera de que se radiquen cargos o una causa criminal por la autoridad reguladora de otro estado, del Gobierno Federal, Puerto Rico u otro país, de un acto que constituya fundamento para disciplinar si éste ocurrió mientras pilotaba bajo la autoridad de la licencia de práctico o certificado de práctico aprendiz.

(7) Hacer, llenar o incitar a otra persona a hacer o a llenar un informe el práctico sabe es falso, voluntaria o negligentemente dejar de archivar, o voluntariamente impedir u obstruir el archivo de informes o el anotar o inscribir en los registros requeridos por las leyes de Puerto Rico o por las reglas de la Comisión. De dichos informes o anotaciones se considerarán únicamente a aquellos que hayan sido firmados por el práctico en su capacidad como práctico aprendiz o práctico.

(8) Sufrir alguna incapacidad física o mental que impida cumplir con la destreza y seguridad necesaria y con los deberes y obligaciones del práctico ya sea la causa una enfermedad o abuso del alcohol, drogas, narcóticos o substancias de cualquier otra especie o causada por alguna condición física o mental como, pero sin limitarse, a pérdida o limitación de la vista o audición, enfermedades del corazón o a diabetes. La Comisión, para hacer cumplir esta disposición tendrá autoridad para obligar a un práctico o práctico aprendiz a someterse a un examen físico y otro mental por un médico y un psiquiatra que sea aceptado por la Comisión, así como en aquellos casos donde haya una sospecha razonable de que el práctico esté incurriendo en alguna de las definiciones prohibidas por este inciso. La negación de un práctico o práctico aprendiz a someterse a dicho examen, cuando sea ordenado, constituirá una admisión de las alegaciones en su contra a menos que la negación se deba a circunstancias fuera de su control; como resultado de la cual la Comisión podrá dictar una orden de emergencia suspendiéndole la licencia de práctico o certificado de práctico aprendiz pendiente a que éste cumpla con la orden de someterse al examen físico, mental, o ambos. A un práctico o práctico aprendiz, afectado por esta disposición, se le debe permitir, a intérvalos razonables de tiempo, la oportunidad de demostrar que puede reanudar competentemente y con razonable seguridad, destreza y habilidad en el practicaje.

(9) Practicar u ofrecer practicar fuera del alcance permitido por ley, o aceptar y realizar responsabilidades profesionales que el práctico reconoce o tiene razones para conocer, que no tiene la suficiente destreza para realizarlas.

(10) Delegar a otra persona responsabilidades profesionales cuando el práctico sabe o tiene razones para saber que la persona en quien él delega no está capacitada, por falta de entrenamiento, experiencia, o licencia, para realizar las funciones del práctico.

(11) Comprometerse a hacer algo que no cumple con normas aceptables del practicaje.
(12) Fallar al mantener en vigor una licencia de práctico válida sin límites y de primera clase expedida por la Guardia Costanera de los Estados Unidos, que cubra las aguas del puerto al cual el práctico está asignado.
(13) Dejar de cumplir con la obligación de informar incidentes conforme el Artículo 15 de esta Ley.
(14) Violar cualquier disposición de cualquier reglamento adoptado y promulgado por la Comisión.

(b) Cuando la Comisión determinare que un práctico o práctico aprendiz cometió alguno de los actos señalados en el inciso (a), previa notificación a dicho práctico brindándole la oportunidad a ser oído.

La Comisión expedirá una orden imponiendo una o más de las siguientes penalidades:
(1) Rehusarse a certificar una solicitud de licencia o certificación.
(2) Revocar o suspender la licencia o certificado.
(3) Restringir la práctica del práctico.
(4) Imponer una multa administrativa que no exceda de $5,000.00 por cada cargo u ofensa separada.
(5) Reprender por escrito al práctico o práctico aprendiz.
(6) Poner al práctico o práctico aprendiz en probatoria por un período de tiempo sujeto a las condiciones que la Comisión establezca, incluyendo, pero no limitado a, requerir que el práctico se someta a tratamiento, examen físico y psiquiátrico completo, entrenamiento adicional o a un re-examen.

En caso de la Comisión imponer alguna de las sanciones previas, el práctico podrá acudir mediante un escrito de revisión ante la propia Comisión dentro de los próximos diez (10) días laborables a partir del recibo de la notificación de la sanción por la Comisión. De mantenerse la penalidad impuesta, el práctico podrá acudir al Tribunal de Circuito de Apelaciones con competencia dentro de los diez (10) días laborables siguientes a partir del recibo de la notificación de la decisión de la Comisión. La Comisión deberá notificar sus resoluciones a las partes interesadas por correo certificado. El Tribunal Superior habrá de citar a las partes para la celebración de una vista en un período no mayor de treinta (30) días calendarios a partir de la radicación de la acción.

(c) La Comisión no reinstalará la licencia o certificado al práctico o al práctico aprendiz o expedirá una licencia o certificado a una persona que ha sido previamente descualificado a través de una orden final de la Comisión hasta que la Comisión esté satisfecha de que dicha persona cumple con todos los términos y condiciones de dicha orden y que dicha persona está capacitada para continuar ejerciendo el practicaje o mediante orden de un tribunal competente a tales fines.

(d) Se entenderá que un práctico o práctico aprendiz actúa bajo la autoridad conferídale por la licencia o certificado local mientras pilotea una embarcación extranjera o una embarcación de Estados Unidos comerciando con el extranjero, ya sea entrándola o sacándola del puerto o moviéndola de un muelle a otro dentro del puerto. Al prestar ese servicio, el práctico o práctico aprendiz, le responde a la Comisión por sus actos.

Artículo 17.-Informes de incidentes marítimos -

Cada colisión, varamiento, encallamiento u otro accidente en que estuvo envuelto una embarcación en la cual estuvo empleado un práctico licenciado de Puerto Rico o práctico aprendiz deberá informarse por el práctico a la oficina de la Comisión inmediatamente. Además, el práctico se someterá un informe escrito a la Comisión en la forma y manera prescrita dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la ocurrencia; no obstante, cualquier incidente marítimo que envuelva derrames de aceite u otros combustibles, contaminación ambiental evidente, lesiones físicas significativas o muerte, deberá informarse por el práctico a la Comisión y a todas las autoridades pertinentes de inmediato por teléfono o cualquier medio electrónico. Además, someterá un informe por escrito dentro de las (24) horas del incidente.

Artículo 18.-Solicitud, examen y cuotas -

(a) La Comisión impondrá y cobrará las siguientes cuotas:
(1) Una cuota por cada solicitud para obtener la licencia como práctico de Puerto Rico.

(2) Una cuota por cada examen para obtener la licencia como práctico de Puerto Rico, cuando aplique.
(3) Una cuota por cada revisión de examen, cuando aplique.

(b) La Comisión impondrá y cobrará una cuota anual a cada práctico licenciado de Puerto Rico y a cada práctico aprendiz o probatorio.

(c) La Comisión cobrará una cuota por cada renovación de licencia.

Artículo 19.-Embarcaciones sujetas a practicaje -

Todas las embarcaciones sujetas a practicaje y aquellas que no lo estén pero lo soliciten deberán tener un práctico licenciado de Puerto Rico a bordo para dirigir movimientos de la embarcación cuando entran o salen de los puertos de Puerto Rico o cuando transitan por las aguas navegables de las bahías, ríos, o cualquier otra vía navegable de Puerto Rico, excepto:

(a) Embarcaciones exentas de practicaje por las leyes de los Estados Unidos;

(b) Embarcaciones de un sólo casco con calado menor de 7 pies de agua;

(c) Cualquier embarcación, cuando es movida de un lugar a otro dentro de los confines de un dique o del dique a un muelle adyacente al dique;

(d) Cualquier embarcación que esté moviéndose a un muelle adyacente o contiguo, por medio de sus líneas, sin zarpar del muelle, siempre que el movimiento sea menor que la eslora del barco.

Artículo 20.-Prácticos sin licencias; penalidades -

(a) Cualquier individuo que no sea práctico licenciado de Puerto Rico o práctico aprendiz, y que dirija los movimientos de una embarcación que requiera un práctico licenciado de Puerto Rico o práctico aprendiz a bordo, estará en violación de esta Ley. Cualquier persona que pilotee sin licencia será culpable de delito menos grave y se le impondrá una multa de no menos de quinientos dólares ($500) y no más de cinco mil dólares ($5,000) por cada delito.
El Tribunal podrá imponer el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

(b) La embarcación, su dueño, su agente o representante estarán obligados a pagar al práctico licenciado de Puerto Rico, en el puerto donde ocurre la violación al inciso (a) de este Artículo, los honorarios de practicaje que, de otro modo, le aplicaría de haberse utilizado el práctico correctamente. Si los prácticos o sus representantes recurren a una acción legal para recobrar dichos honorarios, el Tribunal podrá imponer, para la parte que prevalezca, las costas, gastos y honorarios de abogado.

Artículo 21.-Suspensión sumaria de licencia o certificado por ciertas violaciones:
Reglas-

(a) La Comisión expedirá una orden de emergencia suspendiendo, por un período que no exceda de quince (15) días o hasta que se celebre una vista, la licencia de cualquier práctico o el certificado de cualquier práctico aprendiz o probatorio que, al proveer servicios de practicaje, se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias controladas, porte armas o conduzca una embarcación en forma negligente, y/o esté envuelto en un incidente marítimo que resulte en la muerte de una persona o, como determine por reglas de la Comisión, haya causado daño físico a una persona o daño significativo a una propiedad o al ambiente, a menos que la Comisión determine que ese incidente claramente no fue el resultado de la acción u omisión del práctico o práctico aprendiz o probatorio.

(b) Antes del 1 de julio de 1999, la Comisión adoptará un reglamento para administrar lo dispuesto por esta Ley, luego de haber provisto un proceso de vistas públicas a estos efectos con la participación de todos los sectores interesados y del público en general.

Artículo 22.-Expiración mandatoria de licencia de práctico -

Las licencias de todos los prácticos expirarán cuando el práctico alcance la edad de setenta (70) años.

Artículo 23.-Tarifas de Prácticos y Sobrecargos -

(a) Se autoriza a la Comisión a adoptar aquellas reglas, que siendo consistentes con la Ley, sean a su vez necesarias para ésta poder cumplir con los deberes y obligaciones impuestos por este Artículo. La

Comisión reclutará el personal para poder cumplir con los deberes que este Artículo le impone.

(b) Todo fondo que se reciba, conforme a este Artículo, se depositará en la cuenta de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

La Comisión pagará todos los gastos en que se incurra de conformidad con este Artículo.

(1) A la Comisión se le otorga el poder bajo esta Ley para fijar, por reglamento, tarifas de practicaje a ser cobradas por los prácticos licenciados y sobrecargos para sufragar los gastos directos del Fideicomiso de Administración y Operación y de la Comisión, y para ingresar al Fideicomiso del Plan de Pensiones y Bienestar de los Prácticos de Puertos de Puerto Rico. Luego de celebrar vistas públicas conforme a la Ley Uniforme de Procedimientos Administrativos, Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, las tarifas de pilotaje y sobrecargos en vigor a la fecha en que entre en vigor la Ley, podrán ser facturadas y cobradas hasta que la Comisión fije diferentes tarifas y sobrecargos, según provisto en la Ley.

(2) Todas las solicitudes para cambios en las tarifas o sobrecargos deberán radicarse por escrito en la Comisión, de conformidad con las reglas determinadas por ésta. En el caso de que una solicitud para cambio de tarifas o sobrecargos sea radicada por un práctico o una asociación debidamente reconocida de prácticos, la misma deberá estar acompañada de un Estado Financiero Certificado, Estado de Ingresos y Gastos, y un Estado de Situación preparados por un Contador Público Autorizado del práctico o de la asociación de prácticos que la solicite y toda la información relevante, fiscal y no fiscal, sobre las actividades de practicaje dentro del puerto afectado, incluyendo información financiera de toda entidad o entidades, propiedad, en todo o en parte, del práctico o de la asociación de prácticos que provee o proveen servicios relacionados con el practicaje en el puerto o puertos. En el caso de solicitudes para el cambio de tarifas o sobrecargos radicadas por personas que no sean prácticos o asociaciones de prácticos, la información relativa a los estados financieros se le requerirá sólo en la medida en que dicha información sea relevante a la solicitud o argumentos subsecuentes ante la Comisión.

(3) La Comisión deberá investigar y determinar si el cambio solicitado en la tarifa o sobrecargo resultará en uno claro, justo y razonable, de conformidad con las reglas establecidas por la Comisión. Además, de la publicación requerida por ley, la vista pública para determinar las tarifas de practicaje y sobrecargos, se notificará por correo a toda persona que solicitó formalmente ser notificada de cualquier solicitud de cambio de tarifa o sobrecargo en el puerto afectado. Dicha notificación le informará a todas las partes interesadas que pueden radicar una contestación a la petición, una petición adicional o alterna, o cualquier otra alegación, dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la publicación de la notificación, y especificará la fecha en que deberá radicarse la contestación o cualquier alegación responsiva. La Comisión deberá concluir su investigación, celebrar una vista pública, y determinar si modificará las tarifas de practicaje o sobrecargos dentro de los noventa (90) días siguientes al archivo de las solicitudes completas.

(4) Cuando la Comisión examine si la solicitud de cambio de tarifa o sobrecargo resultará en uno claro, justo y razonable, ésta deberá considerar el interés público en promocionar y mantener servicios de practicaje eficientes, confiables y seguros. Además, la Comisión podrá considerar los siguientes factores:

(a) El interés público que en cada puerto hayan disponibles prácticos debidamente cualificados que rindan el servicio a toda embarcación que lo solicita.

(b) La determinación del ingreso neto promedio de los prácticos en los diferentes puertos, incluyendo el valor de todos los otros beneficios marginales que éstos reciben del practicaje. Para propósitos de este inciso "ingreso neto de los prácticos" significa el total de los cargos cobrados por el practicaje en un puerto menos los gastos operacionales que no estén siendo sufragados por otras fuentes, dividido por el número de prácticos activos en el puerto.

(c) Los gastos operacionales de los prácticos en cada puerto.

(d) El tiempo promedio que le toma a cada práctico rendir un servicio y el número de servicios promedio que rinde durante la guardia.

(e) La compensación prevaleciente de individuos en la industria marítima en posiciones profesionales comparables a la de los prácticos, reconociendo el hecho de que para atraer personas que cualifiquen como prácticos de excelencia la compensación del práctico debe ser igual o mayor que la de esos individuos.
(f) El impacto que el cambio de la tarifa pueda surtir en la compensación de un práctico individual, y si dicho cambio puede provocar una escasez de prácticos o prácticos aprendices o aspirantes cualificados.
(g) Posibles cambios en el tránsito de embarcaciones.
(h) Costo del plan de retiro y plan médico y el costo del Fondo de Administración y Operación.
(i) Los riesgos inherentes al practicaje.
(j) Las características, riesgos y peligrosidad de cada puerto.
(k) Cualquier otro factor que la Comisión entienda es relevante al determinar una tarifa justa y razonable.

(c) La Comisión deberá fijar las tarifas y sobrecargos de acuerdo a este Artículo, basándose en una formula aplicable o combinación de las siguientes características de las embarcaciones:
(1) Eslora, manga, tonelaje neto, tonelaje bruto, tonelaje de desplazamiento, cubierta libre o altura sobre el agua y cualquier otra dimensión de las embarcaciones a ser pilotadas.
(2) El calado de las embarcaciones a ser pilotadas.
(d) La Comisión tendrá la discreción de nombrar un oficial examinador para determinar la tarifas de practicaje, sobrecargos y/o cualquier otra gestión que estime necesaria.

Artículo 24.-Asociaciones de Prácticos y Fideicomisos de Administración y Operación-
(a) Los prácticos licenciados por la Comisión podrán organizarse y ser reconocidos en asociaciones de prácticos para que en conjunto administren sus asuntos y promuevan sus intereses comunes.
(b) Una asociación de prácticos que represente a la mayoría de los prácticos sirviendo un puerto puede solicitar el reconocimiento de la Comisión. No obstante, la Comisión nunca reconocerá a más de un grupo o asociación de prácticos por puerto.
(c) Una asociación de prácticos que busca el reconocimiento de la Comisión deberá someter los documentos de asociación y su reglamento operacional para su aprobación. El documento a someter deberá proveer para: la elección de los oficiales por mayoría de votos de los miembros con una licencia sin límites; la división equitativa de las tareas y las asignaciones entre sus miembros; el cobro de los servicios por sus miembros en un fondo común; la distribución de los ingresos recibidos, luego de la deducción de los gastos, entre los miembros sobre una base equitativa; establecer multas monetarias o sanciones por ausencia sin autorización al trabajo o violar la Ley y reglamento de la Comisión de Practicaje y los reglamentos de la asociación; establecer requisitos de membresía que estén abiertos a cualquier práctico licenciado sirviendo al puerto o los puertos a que este autorizado; y cualquier otra provisión relevante a la operación de una asociación de prácticos. Este Artículo no deberá entenderse como el requerimiento de una división equitativa de la carga de trabajo o ganancias entre prácticos licenciados o prácticos aprendices y probatorios.
(d) Los fideicomisarios de cada fideicomiso de administración y operación a ser establecido con el propósito de proveer un fondo para la administración y operación de un servicio de practicaje confiable en los puertos servidos por cada asociación serán dos (2) oficiales electos por cada asociación de prácticos reconocida, dos (2) oficiales electos por la Asociación de Navieros de Puerto Rico por cada asociación de prácticos reconocida y un (1) representante del Gobierno de Puerto Rico, quien podrá ser empleado de cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental y será nombrado por el Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos. Los miembros de la Comisión no podrán ser al mismo tiempo fideicomisarios.
El Fideicomiso Administrativo y Operacional será financiado por el sobrecargo que será impuesto, conforme a esta Ley, a las embarcaciones que reciben o están obligados a recibir, los servicios de practicaje. Todos los gastos administrativos y operacionales al proveer servicios de practicaje, excepto la compensación a los prácticos licenciados, serán pagados de los fondos que ingresen al Fideicomiso. El Fideicomiso podrá recibir y/o procurar la obtención de fondos de cualesquiera otras fuentes que

estén disponibles, sujeto a que dicha solicitud, coordinación y obtención de fondos formen parte de un plan de trabajo debidamente aprobado por la Comisión.

(e) Los fondos que sean aportados por el sobrecargo operacional a las correspondientes asociaciones o corporaciones por conducto del Fideicomiso Operativo serán exentos de contribución sobre ingresos. Todo equipo, material o accesorios que sean adquiridos para el uso exclusivo del servicio de practicaje, tales como lanchas, motores, aparejos y cualquier otro análogo, estarán exentos del pago de arbitrios en su adquisición, más estarán exentos del pago de derechos de patente de bienes muebles. Los ingresos derivados del fondo del sobrecargo no serán contabilizados para fines de determinar el pago de Patente Municipal. La exención de arbitrios aquí conferida se considerará no solamente de manera prospectiva, sino que además incluirá las actuales lanchas en existencia, y cualquier otro equipo cuyo uso sea exclusivo para el servicio de practicaje.

(f) Los fideicomisarios deberán usar los fondos del fideicomiso con el sólo propósito de proveer para la administración y operación de un practicaje efectivo y confiable en sus puertos. En ningún caso los fondos del fideicomiso serán desembolsados como ingresos individuales a los prácticos.

(g) Los fideicomisarios del Fideicomiso de Administración y Operación deberán ser responsables de la contabilidad y la administración de los fondos. Con ese fin los fideicomisarios deberán preparar anualmente un presupuesto operacional y un presupuesto de gastos capitales para su revisión por parte de la Comisión. Además, deberán someter un Estado Financiero Anual Certificado y un informe de las operaciones para la revisión por parte de la Comisión. Gastos capitales en exceso de $20,000 requerirán la aprobación previa de la Comisión.

(h) Uno o más prácticos podrán incorporarse bajo las Leyes de Puerto Rico para cumplir con sus deberes y obligaciones, como individuo o asociación, en la forma corporativa.

Artículo 25.-Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de los Puertos de Puerto Rico -

(a) El Fideicomiso del Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de Puertos de Puerto Rico, según autorizado por la Resolución Núm. 8304 de 1 de marzo de 1983 de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, según enmendada por la Resolución Núm. 90-63 de 19 de septiembre de 1990, seguirá en vigor según creado y mantenido por los documentos del plan, aunque todos los poderes y obligaciones antes poseídos por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico pasarán a ser responsabilidad de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico al entrar en vigencia esta Ley. Para la debida cualificación de dicho plan de pensiones ante el Departamento de Hacienda, no será necesario el establecimiento de una relación patrono-empleado entre las asociaciones de prácticos, sus corporaciones, los fideicomisos operativos o la Comisión.

(b) El Fideicomiso del Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de Puertos de Puerto Rico será operado y administrado considerando las guías provistas por la Ley Federal conocida como Employee Retirement Income Security of 1974 (ERISA), según enmendada. Para la utilización de dichas guías, no tendrá que ser cualificado el plan de pensiones bajo dicha legislación.

Artículo 26.-La Comisión tendrá poder para adoptar y promulgar reglas y reglamentos para hacer cumplir esta Ley, incluyendo aquellos cargos necesarios para financiar el costo administrativo y operacional de la Comisión.

Artículo 27.-Cualquier disposición de ley o porción de ley que contravenga lo aquí dispuesto, queda por la presente derogada.

Artículo 28.-Cláusula de Separabilidad -

Si cualquier párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará al párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional.

Artículo 29.-Esta Ley entrará en vigor a los treinta (30) días, luego de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento, Comercio Industrial y Cooperativismo, previo estudio y consideración del P. de la C. 1908, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de P. de la C. 1908, es para reglamentar la profesión del Practicaje en Puerto Rico; crear la Comisión de Practicaje de Puerto Rico; definir sus funciones, facultades y deberes; imponer sanciones; autorizar a fijar tarifas; facultar a los prácticos a organizarse; reconocer y mantener los Fideicomisos de Administración y Operación, así como el Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de Puerto Rico; y derogar las leyes existentes estén en conflicto con la presente Ley incluyendo, pero sin limitarse a la Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968 y el Reglamento Número 4286 promulgado por el Administrador de la Autoridad de los Puertos, específicamente, las secciones 6, 8 y la 10 a la 18, inclusive.

La sección 8501 (a) del Título 46 del United States Code provee, salvo ciertas excepciones, que "los prácticos de bahías, ríos y puertos de los Estados Unidos habrán de ser regulados solamente conforme a las leyes del Estado". El término "estado" está definido en la sección 2101 (36) del mismo título e incluye el territorio de Puerto Rico. Es por tanto, la facultad legal de Puerto Rico para reglamentar el practicaje.

Sobre el noventa porciento (90%) de los bienes importados a Puerto Rico llegan por mar. El puerto de mayor actividad es el de San Juan, donde está concentrado en setenta y cinco porciento (75%) del comercio de la Isla. El Puerto de San Juan tiene un acceso peligroso que requiere un control especial del tráfico en el puerto, así como medidas de seguridad más estrictas y un servicio de practicaje de excelencia. Además, los otros puertos disponibles en el país requieren de la asistencia de prácticos para brindar las garantías de seguridad necesarias en estas aguas.

Actualmente, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico está a cargo del control del movimiento de embarcaciones en los puertos. Históricamente, la Autoridad, no ha tenido los medios para supervisar el practicaje. Es por ello, que se reconoce la necesidad de cambios operacionales y administrativos en el manejo del practicaje local. La creación de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico pretende resolver este problema. Esta Comisión sería responsable de reglamentar la admisión de prácticos para ejercer en Puerto Rico y de hacer cumplir los reglamentos de practicaje, así como fijar tarifas y otras responsabilidades que dispone esta Ley.

Es importante definir que es practicaje. El practicaje envuelve la dirección de una embarcación en movimiento por canales confinados, bahías, aguas restringidas u otras aguas navegables señaladas por el estado en donde la navegación es difícil o peligrosa. el piloto o práctico es aquel que no es normalmente miembro de la tripulación de un barco pero es un individuo que se trae a bordo específicamente para pilotar. Su misión es expandir la seguridad proveyendo al capitán o "master" de la embarcación con conocimiento cabal de la costa local, ríos y áreas de los puertos, además de proveer destrezas expertas en el manejo de barcos, conocimientos sobre los requisitos y reglamentos de navegación y condiciones del puerto. Su importancia radica en que, aunque solo una ínfima parte de la travesía se hace en aguas que requieren prácticos, la mayoría de las incidencias o accidentes de las embarcaciones ocurren en estas aguas, Es allí donde las embarcaciones encuentran una alta densidad de tráfico, se acercan a escollos naturales, muchas veces operan en aguas con poca profundidad, además de estar sujetas a neblina, lluvia u otras condiciones adversas del tiempo.

Puerto Rico es una jurisdicción de practicaje compulsorio. Todas las embarcaciones que llegan y salen de nuestras aguas necesitan de la presencia de un práctico acreditado para asegurar su travesía, permitir la

continua prestación de servicios, garantizar la seguridad de tripulantes y pasajeros e impedir el trastoque del ambiente y la vida marina. Aquellas embarcaciones de bandera extranjera o que vienen de puertos extranjeros, les es mandatorio la utilización de un práctico local. He aquí donde radica la importancia del práctico en Puerto Rico y la necesidad de crear una Comisión de Practicaje.

El servicio de practicaje en los puertos de Puerto Rico ha sido objeto de reglamentación gubernamental desde los tiempos de la dominación española hasta el presente. La sección 8501 (a) del título 46 del United States Code provee, salvo ciertas excepciones, que "pilots in the bayus, rivers, harbors and ports of the U.S. shall be regulated only in conformity with the laws of the States". Las leyes locales relevantes sobre este tema son la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, que creó la Autoridad de los Puertos y la Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968.

La Comisión aquí establecida será una autónoma en sus procedimientos y funcionamiento. Se nutrirá económicamente del Fondo Operacional ya existente y tendrá capacidad para demandar y ser demandada. No estará adscrita a ninguna dependencia gubernamental. Sus miembros serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el Consejo y consentimiento del Senado, y estarán representados los prácticos, navieros, el Gobierno de Puerto Rico y dos (2) personas por el interés público.

Señala un estudio comisionado por la American Pilots' Association sobre las Comisiones de Practicaje estatales que "la Comisión de Practicaje es probablemente el componente más importante de un sistema estatal para la reglamentación del practicaje". Por ello, el proyecto pretende que las acreditaciones de pilotos sean serias y comprensivas. Se ha dispuesto todo un sistema enmarcado en la salud física y mental del práctico desde su etapa como aprendiz. Se incorporan, drogas, estupefacientes y cualquier otra sustancia controlada regulada que no cuente con aval médico. Todo esto, en adición al requerimiento educativo de poseer diploma de escuela superior.

Es importante dejar claramente establecido el reconocimiento del derecho de asociación de los prácticos. De hecho, hay dos (2) grupos existentes en Puerto Rico: San Juan Bay Pilots, representado por el Capitán Freddy Solís y Caribbean Harbor Pilots, representado por el Capitán José A. Rivera. Ambas asociaciones tendrán representación tanto en la Comisión de Practicaje como en el Fideicomiso de Administración y Operación. También se establece la continuidad del Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de Puertos de Puerto Rico, el cual ha tenido un crecimiento vertiginoso desde su creación en 1983.

Es menester señalar que la información suministrada para el estudio de la medida y las ponencias presentadas a las comisiones de Desarrollo Socioeconómico y Planificación y de Gobierno de la Cámara de Representantes, por el Comandante Brian Salerno - U. S. Coast Guard, Capt. Víctor Beriscochea -San Juan Bay Pilots, Capt. George Quick - Vicepres. Intl. American Pilots Association, Capt. Alex Cruz - Caribbean Harbor Pilots, Departamento de Justicia, Lcdo. Nick Jiménez y la Autoridad de los Puertos fueron consideradas para el análisis de esta medida por las comisiones que suscriben.

La Comisión de Practicaje de Puerto Rico debe guardar una relación estrecha de trabajo con el Coast Guard. Cada cual puede entender y respetar sus funciones, jurisdicción y autoridad, las cuales son distinguibles; al igual, que deberá mantenerse una comunicación efectiva y de confianza con el sector naviero, para que sus discrepancias y preocupaciones sean presentadas ante el nuevo Cuerpo.

Las Comisiones que suscriben reconocen la necesidad de tener una Comisión de Practicaje que equiparé a Puerto Rico a todas las jurisdicciones de los Estados Unidos y permita mantener nuestros puertos en el más alto grado de competitividad con otros similares en el mundo.

En reunión ejecutiva celebrada, los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento, Comercio Industrial y Cooperativismo, luego de un estudio y análisis de la medida y de la información disponible, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 1908 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido;

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Enrique Rodríguez Negrón
Presidente
Comisión de Turismo, Fomento,
Comercio Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 651, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para ordenar a la Junta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de eliminar la Comunidad Tiburones #3 de la composición territorial del Municipio de Arecibo y ordenar que dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los tribunales de justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar conocimiento de tales cambios en la aplicación de política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 68 de 1 de julio de 1945, según enmendada, es la ley que ordena la creación de los límites territoriales de la Isla de Puerto Rico y que faculta a la Junta de Planificación a preparar y mantener al día los mapas representativos de dichos límites territoriales. El artículo 5 de la referida Ley Núm. 68 dispone que una vez determinados los límites territoriales de cada municipio, los mismos sólo podrán ser cambiados o modificados por la Legislatura de Puerto Rico mediante ley adoptada a tales efectos.

De conformidad a la facultad conferida por ley, es la intención de la presente Asamblea Legislativa alterar los límites territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta, con el fin de sacar de la composición territorial del Municipio de Arecibo a la Comunidad de Tiburones #3, para que la misma pase a formar parte del barrio Florida Afuera del Municipio de Barceloneta con todos los atributos de ley.

La Comunidad de Tiburones #3 está compuesta por alrededor de 85 familias y éstos en su gran mayoría y de forma reiterada a través de los años, han manifestado preferir que su comunidad pase a formar parte del Municipio de Barceloneta. Esta petición no es una caprichosa, sino, que está basada en la realidad que viven día a día los residentes de dicha comunidad, en la necesidad de que la prestación de los servicios municipales sería más conveniente si es hecha por el Municipio de Barceloneta en lugar del Municipio de Arecibo. Esto se debe al hecho de que la Comunidad Tiburones #3 está más cerca de Barceloneta que de Arecibo, por lo que la comunidad realiza sus actividades comerciales y comunitarias en el Municipio de Barceloneta.

Esta situación ha sido discutida con los alcaldes de los municipios de Arecibo y Barceloneta y éstos están de acuerdo en la solicitud hecha por los residentes de la referida comunidad. De igual forma éstos están de acuerdo en la enmienda propuesta por el presente proyecto de ley a los fines de cambiar los límites de sus respectivos municipios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-La Junta de Planificación modificará los límites territoriales del Municipio de Arecibo, eliminando de los mismos a la Comunidad de Tiburones #3, la cual pasará a formar parte de otro municipio.

Artículo 2.-La Junta de Planificación modificará los límites territoriales del Municipio de Barceloneta, adicionando al barrio Florida Afuera la Comunidad Tiburones #3, la cual formaba parte del Municipio de Arecibo. Los límites municipales originales de Barceloneta permanecerán inalterados a excepción de los nuevos lindes que discutirán como sigue:

"parte desde la intersección del límite oeste del Municipio de Barceloneta y el límite norte de la Comunidad Tiburones #3, en dirección oeste paralelo a las propiedades, hasta la última propiedad identificada al oeste de la comunidad. Desde este punto discurre el límite en dirección oeste-sudoeste hasta 260 metros lineales, sobre el tope del mogote (formación de origen calcáreo), bajando hacia el sur en forma perpendicular hasta su intersección con el límite de los barrios Garrochales y Sabana Hoyos del Municipio de Arecibo. El límite continúa hacia el este-nordeste hasta un punto de un poste que demarca los límites de propiedad de la Autoridad de Carreteras, cercano a la autopista PR-22. Desde este punto discurre hacia el sudeste, atravesando la autopista PR-22, hasta su intersección con el límite del Municipio de Barceloneta."

Artículo 3.-Una vez realizados los cambios aquí dispuestos, la Junta de Planificación notificará a los organismos gubernamentales y municipales, incluyendo a los tribunales de justicia, de los cambios ordenados por esta Ley para que tomen conocimiento de los mismos y enviarán a las agencias pertinentes copia de un mapa conteniendo la nueva delimitación de los municipios de Barceloneta y de Arecibo.

Artículo 4.-Se ordena a los organismos gubernamentales y municipales, incluyendo a los tribunales de justicia, que una vez la Junta de Planificación adopte los cambios ordenados por esta Ley, tomen conocimiento de los mismos y realicen los cambios correspondientes, adoptando tales cambios en la aplicación de política pública, disposiciones de otras leyes, programas y determinaciones de los tribunales competentes.

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días, contados a partir de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y consideración del P. de la C. 651, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 651 propone ordenar a la Junta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de eliminar la Comunidad Tiburones #3 de la composición territorial del municipio de Arecibo y ordenar que dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los Tribunales de Justicia de los cambios realizados; a éstos últimos, tomar conocimientos de cambios en la aplicación de la política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos.

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales realizó un estudio comprensivo del récord de la medida, según fuera realizado por la Cámara de Representantes, se estudiaron y evaluaron los memoriales sometidos por las distintas entidades y el informe de la Cámara recomendaron la aprobación de la medida.

Se estudiaron además, las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Los siguientes memoriales fueron evaluados: Departamento de Justicia, Junta de Planificación de 15 de julio de 1997, Gobierno Municipal de Barceloneta de 30 de julio de 1997, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, memorial de la Junta de Planificación del 1ro. de agosto de 1997, carta del Municipio de Arecibo de 3 de octubre de 1997, memorial de la Autoridad de Tierras de 6 de noviembre de 1997, memorial

de la Junta de Planificación de 5 de febrero de 1998, memorial del Departamento de Justicia de 20 de febrero de 1998, memorial del Gobierno Municipal de Barceloneta de 26 de febrero de 1998 y carta del Gobierno Municipal de Arecibo de 26 de febrero de 1998.

Se hizo un estudio de las disposiciones legales respecto a este asunto. Veamos lo siguiente:

La Constitución del Estado Libre Asociado en su Artículo VI dispone lo siguiente: "La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función..."

"Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada en referéndum por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse."

El Artículo 1.008 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, señala lo siguiente: "La anexión de una parte del territorio de un municipio a otro, sólo se efectuará según lo autorice la ley al efecto y cuando las circunstancias sociales de servicios municipales así lo aconsejen.

Para poder anexar la Comunidad Tiburones # 3, al Municipio de Barceloneta es necesario la aprobación de una ley que lo autorice. No se requiere un referéndum. Le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar y autorizar la anexión siempre y cuando se realice un estudio sobre las "condiciones sociales, económicas y de la prestación de servicios municipales así lo aconsejen."

Surge claramente de los memoriales y del récord de la medida que se ha cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales para lograr el fin de lo que propone la medida.

CONCLUSION

En mérito de lo anterior, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales del Senado tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 651, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2085, la cual ha sido descargada de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos (28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós (68.922) metros, con carretera Municipal, bajo los términos y condiciones que se especifica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la autorización de una segregación parcial de una finca en el Barrio Mucarabones de Toa Alta, por la Oficina Regional de Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.), en Bayamón, el 23 de octubre de 1986, el Departamento de Recreación y Deportes adquirió a través de una donaciòn un solar con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós (68.922) metros, con carretera Municipal. La donación de este solar o lote identificado con el número 10 en dicha segregación fue requisito para obtener la aprobación del proyecto de solares y seria utilizado como parque.

Actualmente, el solar no ha sido desarrollado por el Departamento de Recreación y Deportes, debido a que no tiene utilidad práctica por lo reducido de su tamaño y porque se encuentra en una comunidad donde abundan las facilidades recreativas y deportivas de acuerdo a la información obtenida, tampoco existe interés por parte de los vecinos a que se desarrolle el mismo como parque. Por todo lo anteriormente expuesto, desde 1986, dicho solar no tiene utilidad para el Departamento de Recreación y Deportes, por lo que ha permanecido la mayor parte de todos estos años, cubierto de maleza y matojos.

El señor Luis Morales Díaz, residente del Barrio Piñas de Toa Alta, quien heredó el solar que colinda con el referido lote número 10, ha demostrado interés de comprar éste solar a su justo valor en el mercado, para que le sirva de acceso a la carretera municipal. Actualmente el señor Morales se ve limitado de desarrollar y/o utilizar el solar de su propiedad, por no contar con un acceso a la carretera municipal.

Por lo expuesto anteriormente y en vista que el terreno objeto de discusión no tiene utilidad para el Departamento de Recreación y Deportes, la presente Asamblea Legislativa estima conveniente que los terrenos sean adquiridos por el señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, para ser utilizados como acceso a su propiedad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Recración y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos (28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales, y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidó (68.922) metros, con carretera Municipal.

Sección 2.-El precio de venta del predio de terreno descrito en la anterior Sección de ésta Resolución Conjunta será el de su justo valor en el mercado, según tasación que a estos efectos realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y certifique el Secretario de Hacienda.

Sección 3.-El señor Luis Morales Díaz, podrá ejercer la compraventa del solar objeto de esta Resolución Conjunta, dentro del término de dos (2) años a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Al cabo de dicho término, si no se han iniciado los procesos de Ley para el cumplimiento de esta Resolución Conjunta, la misma podrá ser dejada sin efecto por el Departamento de Recreación y Deportes.

Sección 4.-El precio de venta según tasación al efecto, más los intereses sobre el principal al tipo prevaleciente en el mercado, podrán solventarse mediante pagos parciales dentro de un término que no excederá de dos (2) años, contando a partir de la fecha en que se efectúe la compraventa. Para poder obtener el título sobre dicho predio, el comprador deberá hacer un pago no menor de una tercera parte del precio de

venta, con anterioridad o al momento de firmarse la documentación necesaria para el traspaso del título de propiedad.

Sección 5.-El pago del precio aplazado se garantizará por primera hipoteca a favor del Secretario de Recreación y Deportes, sobre el precio del predio de terreno, así como sobre toda construcción, edificación o mejora que se lleve a cabo en el mismo.

Sección 6.-Los acuerdos y condiciones de la compraventa de dicho predio de terreno serán dispuestas por el Departamento de Recreación y Deportes en la escritura de compraventa de esa propiedad. A tales efectos, se otorgará el correspondiente título de propiedad, así como las escrituras y documentos públicos inherentes a este tipo de transacciones, las que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1121, la cual ha sido descargada de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Vivienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a transferir libre de costo al municipio de Bayamón los terrenos localizados entre los solares donde ubican las residencias de catorce (14) familias, entre las calles 27, 28 y 29 de la urbanización Rexville de Bayamón, así como la pista para trotar construida en el parque de béisbol de dicha comunidad para que ese municipio, a su vez, transfiera la descrita propiedad a los vecinos del lugar a título gratuito.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los últimos veinticuatro (24) años vecinos de la Urbanización Rexville de Bayamón han estado usando y disfrutando de unos terrenos localizados entre los solares donde ubican sus residencias y la pista para trotar construida en el parque de dicha urbanización.

A lo largo de estos años estos vecinos han estado proveyendo el mantenimiento necesario a estos terrenos de modo que los mismos no se conviertan en un estorbo para dicha comunidad. Algunos utilizan los mismos como huertos caseros donde practican la agricultura de manera limitada.

Es preciso reconocer que el mantenimiento que por años estos vecinos le han estado brindando a estos terrenos ha tenido el efecto de que el ambiente de la comunidad sea uno más saludable y más seguro.

Se nos indica que estos terrenos pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

En ánimo de que se mantenga el ambiente de salud y seguridad que prevalece en el área de la Urbanización Rexville donde ubican esos terrenos y que no se conviertan estos en una carga adicional para el Departamento de Recreación y Deportes, entendemos justo y apropiado el que transfieran los mismos al municipio de Bayamón para que éste, a su vez, los transfiera a título gratuito a las familias residentes de las calles 27, 28 y 29 de la mencionada urbanización.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a transferir libre de costo al municipio de Bayamón los terrenos localizados entre los solares donde ubican las residencias de catorce (14) familias, entre las calles 27, 28 y 29 de la urbanización Rexville de dicha comunidad, así como la pista para trotar construida en el parque de béisbol de dicha comunidad para que ese municipio, a su vez, transfiera la descrita propiedad a los vecinos del lugar a título gratuito.

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1922, el cual ha sido descargado de las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos Municipales.

"LEY

Para enmendar los incisos (c) y (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", a los fines de extender el beneficio de transferir, sin costo alguno, la propiedad confiscada a las entidades del orden público; establecer el orden de prioridad en que se dispondrán de dichos bienes; e incluir a los municipios entre las entidades que pueden comprar, permutar o de cualquier otro medio legal adquirir propiedad confiscada por la Junta, para la mejor utilización de esos recursos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", crea una Junta de Confiscaciones, compuesta por los secretarios de Justicia y de Hacienda, y por el Superintendente de la Policía. La Junta, que está adscrita al Departamento de Justicia, tiene la función de custodiar, controlar y disponer de la Propiedad que adquiera el Gobierno de Puerto Rico mediante el procedimiento de confiscación.

Entre los deberes de la Junta está el de determinar y transferir, sin costo alguno y de acuerdo a lo dispuesto por la ley, la propiedad confiscada a las agencias del orden público para su uso oficial. Cuando la propiedad confiscada no sea de utilidad para las agencias del orden público, entonces puede ser transferida a las demás agencias gubernamentales que tengan uso público para la propiedad.

Mediante las correspondientes enmiendas al Artículo 15 de la Ley de Confiscaciones se extiende el beneficio de transferir, sin costo alguno, la propiedad confiscada a las entidades del orden público, se establece el orden de prioridad en que se dispondrán de dichos bienes, y se incluyen a los municipios entre las entidades que pueden comprar, permutar o de cualquier otro medio legal adquirir propiedad confiscada por la Junta, de manera que pueda dársele el mejor uso posible a esos recursos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (c) y (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", para que se lean como sigue:

"Artículo 15.-Poderes, atribuciones y deberes

La Junta tendrá, además, los siguientes poderes, atribuciones y deberes:

(a) . . . . . .

(b) . . . . . .

(c) Determinar y transferir, sin costo alguno y de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, la propiedad confiscada a las siguientes entidades del orden público para su uso oficial, en el orden de prioridad que aquí se establece:

(i) la Policía de Puerto Rico;

(ii) los Cuerpos de Policía Municipal;

(iii) el Negociado de Investigaciones Especiales;

(iv) la Defensa Civil estatal;

(v) la Defensa Civil municipal;

(vi) el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales; y

(vii) cualquier otra entidad gubernamental o municipal, cuya responsabilidad sea el salvaguardar el orden y la seguridad pública.

(d) . . . . . .
(e) . . . . . .
(f) Disponer mediante venta, permuta o cualquier otro medio legal, de aquella, propiedad confiscada que no haya sido solicitada y que no sea de utilidad para alguna de las entidades del orden público enumeradas en el inciso (c). Solo se beneficiarán de lo dispuesto en este inciso las agencias gubernamentales, los municipios, y las organizaciones sin fines de lucro. El producto de dichas transacciones ingresará al Fondo Especial que más adelante se crea, sujeto a las normas que se establezcan mediante reglamento para garantizar la más sana Administración y disposición de los fondos públicos.
(g) . . . . . .
(h) . . . . . .
(i) . . . . . "

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): El Senado estará recesando hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.).

R E C E S O

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Se reanuda la Sesión.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la tercera relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO

R. C. del S. 1263
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación de rejas y mejoras permanentes en la Escuela Ramón Quiñonez Pacheco de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."
(HACIENDA)

R. C. del S. 1264
Por el señor Pagán González:

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Isabela y San Sebastían la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados."
(HACIENDA)

RESOLUCION DEL SENADO

R. del S. 2015
Por el señor Agosto Alicea:

"Para extender el reconocimiento al Sr. Luis Francisco Ojeda por su encomiable labor en favor de los damnificados del Huracán "Georges"."
(ASUNTOS INTERNOS)

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas:

PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 1041
Por el señor Núñez González:

"Para enmendar el Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de establecer una multa administrativa fija y obligatoria a cualquier municipio, funcionario o empleado municipal o miembro de la Junta de Subastas que no cumplan con los procesos establecidos para la adjudicación de obras, compras, servicios, subasta y contratos de arrendamientos."
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. de la C. 1645
Por el señor Maldonado Rodríguez:

"Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", a los fines de aclarar lo relacionado con las auditorías a las que serán sometidas las cooperativas aseguradas por parte de la Corporación."
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 1646
Por el señor Maldonado Rodríguez:

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 7.03 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los fines de aclarar lo relacionado con las auditorías a las que serán sometidas las cooperativas por parte del Comisionado de Instituciones Financieras y por la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, (PROSAD- COOP)."
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 1882
Por el señor Maldonado Rodríguez:

"Para enmendar el Artículo 7.005 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", a los fines de aclarar que las reglas y reglamentos que adopte el Comisionado para regular a las cooperativas de ahorro y crédito no podrán imponer condiciones no contempladas en esta Ley."
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 1909
Por los señores Sánchez Fuentes y Mundo Ríos:

"Para enmendar el Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración de Corrección", a los fines de excluir de la elegibilidad a programas de desvío a toda persona convicta por violaciones al Artículo 3 de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada; y limitar los delitos que quedan excluidos de dicho beneficio de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1969, según enmendada."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 1934
Por el señor Maldonado Rodríguez:

"Para añadir un nuevo Artículo 5.20 y renumerar el actual Artículo 5.20 como Artículo 5.21 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los fines de incluir una limitación de empleo en las cooperativas de ahorro y crédito."
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 2045
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 98 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de duelo."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2062
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 170 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de escalamiento."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2071
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 126 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de celebración de matrimonios por personas no autorizadas."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2072
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 127 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de simulación de matrimonio."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2073
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 129 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de adulterio."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2102
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación de la leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación; establecer definiciones; crear la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos; disponer sobre los poderes de ésta y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE LO JURIDICO)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 854
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica que determine la viabilidad de ceder en arrendamiento al Municipio de Isabela la propiedad y estructura que componen la Planta Hidroeléctrica Número Uno, localizada en el Barrio Arenales Bajo."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)

R. C. de la C. 2121
Por el señor Vega Borges:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2122
Por el señor Quiles Rodríguez:

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil quinientos setenta y cinco (10,575) dólares provenientes de los incisos f, k, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Número 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas sociales culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22 y para el Equipo de Volibol Superior Los Patriotas de Lares."
(HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience nuevamente con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1189, titulado:

"Para designar al Programa de Médula Osea de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana, Región de Puerto Rico como responsable por la educación y reclutamiento de donantes de Médula Osea en Puerto Rico; establecer sus funciones y propósitos; adicionar la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico" que coordinarán los Servicios de Sangre de la Cruz Roja Americana en cooperación con el Departamento de Salud de Puerto Rico, y para asignar fondos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1247, titulado:

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como "Ley Trabajo-Despido sin Justa Causa; Indemnización", según enmendada, a fin de aumentar a dos (2) semanas la indemnización por cada año de servicio, cuando el empleado sea despedido de su cargo sin que halla mediado una justa causa."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1253, titulado:

"Para enmendar el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de crear la modalidad de delito agravado cuando la comisión del delito de robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria pública o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o

estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas, centros comerciales y si la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal; y para imponer penalidades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicito la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1383, titulado:

"Para enmendar el subinciso (b) del inciso (B) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de disponer que los miembros de la Policía que sufran lesiones graves o leves permanentes o por un período prolongado, pero que no se incapaciten, tendrán derecho a que se les reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1908, titulado:

"Para reglamentar la profesión del Practicaje en Puerto Rico; crear la Comisión de Practicaje de Puerto Rico; definir sus funciones, facultades y deberes; imponer sanciones; autorizar a fijar tarifas; facultar a los prácticos a organizarse; reconocer y mantener los Fideicomisos de Administración y Operación, así como el Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de P.R.; y derogar las leyes existentes estén en conflicto con la presente Ley incluyendo, pero sin limitarse a la Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968 y el Reglamento Número 4286 promulgado por el Administrador de la Autoridad de los Puertos, específicamente, las secciones 6, 8 y la 10 a la 18, inclusive."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación a la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción?
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA: Senador Fas Alzamora.
SR. FAS ALZAMORA: No es que haya objeción, es que es un proyecto un tanto complicado, que puede ser bueno, puede afectar positivamente a los que se dedican a eso ahora, como podría afectar negativamente, y a mí me gustaría, si hay alguien aquí que haya estudiado esa medida, que nos pueda explicar cómo se ven afectados actualmente las personas que ejercen esa función en Puerto Rico. Y si me convence el compañero, pues le voto a favor.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador Kenneth McClintock.
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, la pregunta es para ver si el compañero tiene la gentileza de

explicarnos el alcance en forma breve de esta medida, pero más que eso, ¿cómo se afectarían las personas que actualmente ejercen esa función que aquí se pretende organizar y legislar para poder regular y darle a sus funciones, facultades y deberes, y me gustaría saber cómo se afectan los que actualmente están llevando a cabo esa función? Si se afectan positivamente o negativamente con esta legislación. Si se le pone requisitos adicionales que pueda poner en riesgo que continúen trabajando en ese oficio al cual se dedican y ese tipo de cosa, para uno poder estar en posición si favorece o no la medida.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. La Comisión de Desarrollo Socioecómico de la Cámara, a solicitud de las dos (2) organizaciones que representan a los pilotos de la Bahía de San Juan, y a solicitud de la Guardia Costanera, que es la entidad a nivel federal que reglamenta bien estrechamente este desempeño profesional en Puerto Rico y en todos los estados de la Unión, solicitaron que hubiera una ley local que reglamentara esta práctica en la Isla. O sea, que es una medida de consenso. Se recogieron las opiniones de todo el mundo, se circuló el borrador de legislación, se recibieron comentarios, se incorporaron esos comentarios, la información que hemos recibido de la Cámara de Representantes, es que todas las entidades han apoyado esta medida, al igual que la Autoridad de los Puertos.

De manera, que tanto la Autoridad de los Puertos, que es la dueña de los muelles, como la Guardia Costanera, que reglamenta las funciones en el Puerto de San Juan, como las dos (2) organizaciones que representan a la totalidad de los pilotos en San Juan, favorecen la medida.

De hecho, esta medida no crea una estructura bajo la cual los pilotos tengan que operar, sino que se mantiene el derecho de los pilotos de asociarse, tanto con el Caribbean Harvest Pilots Association, como con el San Juan Bay Pilots. De manera que tienen libertad para asociarse con la organización que deseen, pero todos caerían bajo la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, que sería una comisión altamente especializada que a diferencia, quizás, de otras juntas examinadoras o lo que sea en Puerto Rico, trabajaría estrechamente con la Guardia Costanera, porque en la medida en que las reglas de la Guardia Costanera cambian, la práctica del pilotaje cambia, porque es un desempeño que a diferencia de la mayoría de los desempeños profesionales no depende de ley local, sino que depende de ley federal.

SR. FAS ALZAMORA: O sea, que esto sería...

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: A menos que gane la dos (2).

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Compañero senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: O sea, que ahora mismo, esta operación solamente está regulada por ley federal y aquí sería la primera vez que se legisle en una ley local de Puerto Rico con relación a esta situación.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, continuarían las operaciones, continuarían siendo reglamentadas exclusivamente por ley federal, hay campo ocupado en ese sentido. Lo que haría sería que se establecería unos mecanismos para cualificar a las personas que estarían operando dentro de ese ámbito, de manera que personas no cualificadas en el futuro no fueran a entrar a este desempeño profesional.

SR. FAS ALZAMORA: Y en el Senado no hubo vistas públicas, simplemente estamos haciendo un informe, este informe se hizo por referéndum, supongo.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ¿Cómo es?

SR. FAS ALZAMORA: Este informe fue por referéndum, no hubo vista pública.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, no, en el Senado no hubo vista pública y acorde la decisión que tomó la Comisión el pasado sábado; no, no, perdóneme. Esta medida sí fue discutida en reunión ejecutiva con alguna amplitud, la razón por la cual no se radica hasta el 12 de noviembre, es porque por ser un informe conjunto tuvimos que aguardar que la Comisión de Turismo, Fomento, Comercio Industrial y Cooperativismo realizara sus procesos internos antes de radicar el informe.

Pero la realidad es que esta medida no tengo el expediente completo a la mano, pero esta medida fue discutida, hace quizás semana y media a dos semanas y media en reunión ejecutiva.

SR. FAS ALZAMORA: Y no hubo objeción a la misma, por parte de ningún compañero.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, no hubo, y la información que yo tengo es que la medida pasó por unanimidad en la Cámara y que es una medida de consenso aceptada por todos los componentes de la industria.

SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias compañeros, muchas gracias, señora Presidenta.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Me proponía abstenerme en la medida porque es un tanto compleja y no la habíamos analizado, pero luego de haber leído lo que tenemos a nuestro alcance y las aclaraciones y el alcance que ha hecho el señor Presidente, pues habré de votarle a favor a la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Agradecemos al compañero Portavoz de la Minoría que haya cambiado su posición y solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 651, titulado:

"Para ordenar a la Junta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de eliminar la Comunidad Tiburones #3 de la composición territorial del Municipio de Arecibo y ordenar que dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los tribunales de justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar conocimiento de tales cambios en la aplicación de política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2085, titulada:

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos (28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós (68.922) metros, con carretera Municipal, bajo los términos y condiciones que se específica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1121, titulada:

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a transferir libre de costo al municipio de Bayamón los terrenos localizados entre los solares donde ubican las residencias de catorce (14) familias, entre las calles 27, 28 y 29 de la urbanización Rexville de Bayamón, así como la pista para trotar construida en el parque de béisbol de dicha comunidad para que ese municipio, a su vez, transfiera la descrita propiedad a los vecinos del lugar a título gratuito."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1922, titulado:

"Para enmendar los incisos (c) y (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", a los fines de extender el beneficio de transferir, sin costo alguno, la propiedad confiscada a las entidades del orden público; establecer el orden de prioridad en que se dispondrán de dichos bienes; e incluir a los municipios entre las entidades que pueden comprar, permutar o de cualquier otro medio legal adquirir propiedad confiscada por la Junta, para la mejor utilización de esos recursos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1436, titulado:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Luis Felipe Navas de León, Presidente Accidental.

- - - -

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se incorpore la siguiente enmienda en Sala, P. del S. 1436. En la página 2, líneas 8 a la 10, la oración que empieza en la línea 8 y termina en la línea 10, debe aparecer subrayada o de la manera que sea necesaria para indicar que es texto añadido a la ley existente.

Esa sería la enmienda en Sala.

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A las enmiendas en Sala, ¿hay objeción? No hay objeción. Aprobadas.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, estamos sometiendo este proyecto debido a que hace unos dos años atrás, se aprobó legislación para que los servidores públicos pudieran liquidar, recibir en efectivo aquellos días de vacaciones y enfermedades acumuladas por encima de ciertos límites cuando no hubiesen tenido la oportunidad de disfrutar los mismos.

Lo que ocurre, señor Presidente, es que en la Universidad de Puerto Rico hay personas que trabajan allí que no están expuestos a los controles de asistencia y de puntualidad a los cuales están expuestos virtualmente todos los empleados públicos. Aquí en esta Sala tenemos personas que han trabajado como profesores universitarios que saben que ellos trabajan cuatro (4) meses en un semestre, cuatro (4) meses en otro semestre y que esencialmente están liberados de asistir regularmente a su lugar de trabajo durante cuatro (4) meses al año. Pero que aún durante los meses en que sí están dando clases y atendiendo estudiantes en sus oficinas,

no están sujetos a tener que ponchar una tarjeta. No están sujetos a tener que llenar una hoja de asistencia ni a que su asistencia o puntualidad sea verificada por ningún supervisor inmediato. Y hasta cierto punto eso es parte de la libertad de cátedra que ellos han disfrutado.

Se presta entonces, señor Presidente, para que si una de estas personas se ausenta del salón de clases, podría, no es que lo vaya a hacer, pero podría, no reportar voluntariamente esa ausencia o esa tardanza y entonces, que no se le descuente de sus vacaciones, de licencia por vacaciones o licencia por enfermedad, el tiempo que correspondería descontársele. Que como resultado de ello, pues podría estar acumulando una cantidad de vacaciones no tomadas, particularmente, porque tiene un (1) mes de vacaciones en Navidades, tiene tres (3) meses de vacaciones en el verano y no tendría necesidad de reclamar días de vacaciones adicionales.

Y se presta, para que en algunos casos se abuse de esta concesión que se le ha hecho a los empleados públicos. Hemos redactado la medida de tal manera que no se le está quitando ese privilegio a esos empleados públicos, en tanto y en cuanto esos empleados públicos exijan que se establezcan controles efectivos de verificación de su asistencia en el empleo.

En la medida que un profesor exija que se revise y se certifique regularmente su asistencia en el empleo, a esa persona no le aplicarían las disposiciones de esta Ley. Y entendemos que para evitar los abusos que se podrían cometer cuando no hay controles efectivos, es que se debe aprobar esta legislación. No en el ánimo de quitarle privilegios a nadie, pero en el ánimo de que los empleados afectados exijan que su supervisor inmediato verifique y establezca controles efectivos de su asistencia.

Solicitamos la aprobación de la medida.

SRA. OTERO DE RAMOS: Hay objeción, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera senadora Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, ésta es una de las medidas más desmotivadoras que yo he conocido. En la universidad, en la que estuve veintiséis (26) años de mi vida, nunca cogí una licencia por enfermedad y menos vacaciones, por lo que le dejé mi haber al sistema de mi trabajo a cambio de nada.

De lo que se trata esto es ahora, indicar, y aquí lo dice en el segundo párrafo, que están buscando los chavos, porque lo que le quitaron en el presupuesto a la Universidad y que aquí encontraron algo que hacer, donde dice que generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad, donde le están quitando el interés del maestro a venir a trabajar aún cuando no ponche tarjeta. La gente que no poncha tarjeta son la gente más responsable, los que ponchan tarjeta nada más están ocho (8) horas, con algunas excepciones.

Y en este caso, pues esta medida es una medida para buscar dinero por el problema que tiene la Universidad del presupuesto que se le sacó para la Ley de Oportunidades Académicas y otros problemas que han tenido posteriormente.

Así que esto es una legislación onerosa para el empleado que cumple fielmente con su labor, para aquella persona que no necesita ponchar, porque ya a las seis de la mañana (6:00 a.m.), a las siete de la mañana (7:00 a.m.) está en la oficina y se va y no tiene que ponchar porque se va a las siete (7:00) a las ocho de la noche (8:00 p.m.).

Imagínese si a nosotros los legisladores nos pusieran a ponchar ahora, ¡ah! ¿Usted se imagina que a nosotros nos pusieran a ponchar ahora? Eso sería un problema muy serio, porque toda la gente que está aquí, todos los Senadores, por lo menos yo lo puedo asegurar, trabajan más que lo que realmente se pudieran ganar si tienen que estar ocho (8) horas o las horas que sean.

Yo quisiera hacerle una pregunta al compañero, si me permite, y es que ¿cuáles son los controles efectivos de verificación de asistencia que se promueven?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, no se está promoviendo a ninguno en específico, se deja una amplia latitud, para que los empleados que no tengan controles efectivos, que no quieran caer bajo la jurisdicción de esta medida que estamos proponiendo y que puedan continuar disfrutando de los beneficios de la Ley del '96, coordinen con su patrono el establecimiento de un mecanismo efectivo. O sea, mencioné lo de las tarjetas, porque muchos empleados públicos tienen que llenar tarjetas. Menciono, por ejemplo, el caso de su Alcaldesa de San Juan, porque no es mía, porque yo vivo en Cidra, donde ella le toma huellas digitales ahora a los empleados para verificar su asistencia, porque ella no confía en que cada empleado ponchará su propia tarjeta, allá ella en la manera que ella interactúa con sus empleados. Pero puede ser una hoja de asistencia como utilizamos aquí en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y donde entonces el supervisor inmediato certifica la asistencia, las personas según han firmado. Pero el mecanismo, o sea, eso

es un asunto que debe dirimirlo el empleado y el patrono afectado, pero la realidad del caso es que hay personas en la Universidad de Puerto Rico que nunca han firmado un día por enfermedad cuando se han enfermado y nunca han firmado un día de licencia por vacaciones cuando se han ausentado.

Y que en muchas ocasiones, a menos que el estudiante vaya y chotee al maestro a la oficina departamental, el departamento nunca se entera de que el maestro no fue a clases.

SRA. OTERO DE RAMOS: Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos legislar una situación que es de falta de supervisión. Si cuando uno firma un contrato en la Universidad, te dicen que tú tienes que dar doce (12) horas de crédito en contacto con los estudiantes y que tú tienes que utilizar unas horas para investigación y que tienes que usar unas horas para oficina y el jefe no supervisa a ver si tú estás donde tienes que estar, pues eso es un problema de que aquí no pueden pagar justos por pecadores, eso es un problema de la supervisión. Y esto no pasa en la Universidad, eso pasa casi en todas las agencias, excepto en aquellas donde hay muchas personas de carrera donde se le exige el ponchar la tarjeta y han utilizado distintos mecanismos para que nadie ponche por otro y otras situaciones que han ocurrido en esas agencias. Sin embargo, lo que yo entiendo es que de, ¿cuántos empleados estamos hablando que se van a perjudicar?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: De la manera que está redactada la medida, se perjudicaría todo empleado de la Universidad de Puerto Rico, docente o no docente, sobre quienes no exista controles adecuados para verificar la asistencia al trabajo. Presumo que debe incluir a la inmensa mayoría del personal docente, aunque también presumo que la inmensa mayoría del personal exento no docente tiene que llenar hoja de asistencia o tiene que ponchar una tarjeta. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, recuerdo haber visto empleados de mantenimiento que sí tenían que ponchar tarjeta, lo cual tendería a indicar de que quizás, pudiera haber un sistema de privilegio donde unos empleados de la Universidad tienen que ponchar tarjeta, otros, no tienen que, no tan sólo no ponchan tarjetas, sino que no se lleva ningún control efectivo.

Yo creo que esta medida propendería a que aquéllos que no tienen control efectivo de asistencia reclamaran esos controles efectivos de asistencia, toda vez que de lo contrario no le aplicaría los beneficios de una Ley en el '96, que realmente nosotros todos aprobamos pensando en el empleado que se lleva su asistencia, que se le descuenta un día cuando falta y que entonces, solamente si mantiene un buen récord de asistencia y no utiliza sus vacaciones y no utiliza su enfermedad es que acumula unos límites por encima de los noventa (90) días o lo que sea y tiene entonces derecho a que se le liquide. Pero no es justo, honestamente, que un profesor universitario que trabaja ocho (8) meses del año, que tiene que asistir con regularidad ocho (8) meses del año, que disfruta de cuatro (4) meses, tres (3) en verano y uno (1) en el invierno, en que no tiene que asistir con regularidad a su lugar de empleo, además de eso, pida la liquidación de uno punto cinco (1.5) meses de licencia por vacaciones, supuestamente no disfrutadas.

SRA. OTERO DE RAMOS: Lo que pasa es que no es correcto, señor Presidente, de que un maestro universitario trabaje ocho (8) meses y esté cuatro (4) meses de vacaciones. La docencia, la investigación requiere tiempo, eso no es de uno estar allí unas cuantas horas y ya se acabó. Para uno prepararse, yo tenía cuatro (4) preparaciones distintas, para uno prepararse para esas cuatro (4) preparaciones, usted tenía que dedicar el doble del tiempo que usted está en el contacto con el estudiante. Y en ese sentido, estamos hablando aquí de controles efectivos de verificación de asistencia. Eso se puede hacer sin una ley, éste es un problema administrativo de falta de supervisión. Y como es un problema administrativo de falta de supervisión, cuyo único entendimiento de por qué se pasa este proyecto, es la última línea de este Proyecto del Senado que dice que esto generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad.

Aquí tenemos el problema de que en el presupuesto se ha dicho muchas veces, que realmente la Universidad no tenía problemas con el presupuesto, ahora resulta que hay que buscar un proyecto, amenazando a los empleados que realmente están trabajando. Y si no están trabajando, pues que los supervisen y los saquen. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero esto es entronizarse en la autonomía universitaria, cuando ellos son los que tienen que determinar qué es lo que van a hacer con esos empleados, porque para eso la misma ley los faculta. Nosotros intervenir en qué es lo que van a hacer para recoger esos millones que se van a recoger, no dándole las garantías a estas personas de que realmente no le contarían ni los días de vacaciones y enfermedad acumuladas, es realmente una situación que me preocupa mucho, porque estaríamos, como dije al principio, desmotivando a los empleados de confianza y a los empleados que no han tenido que ponchar tarjetas porque son empleados más allá de las ocho (8) horas que regularmente trabaja un individuo.

Así que por eso, y por otras cosas, que no voy a mencionar porque no tenemos los datos, por ejemplo, de cuántos estarían ponchando y cuántos no estarían ponchando y quién va a tener la supervisión y quién no la va a tener y cuál es el "accountability" para saber quién estuvo ocho (8) horas y quién no estuvo ocho (8) horas, quién cogió licencia por enfermedad, quién cogió licencia regular. Eso la Universidad lo sabe porque tiene una oficina de Recursos Humanos, que supervisen a estas personas y que de acuerdo a la supervisión le otorguen. Pero este proyecto es un proyecto nefasto para los empleados docentes y exentos docentes también de la Universidad de Puerto Rico, por lo que le voy a votar que no.

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero Bruno Ramos.

SR. RAMOS OLIVERA: Sí. Para ver si el compañero Senador me contesta una pregunta y hacer unos breves comentarios sobre...

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿Está dispuesto a contestar?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Siempre estoy dispuesto.

SR. RAMOS OLIVERA: La compañera le preguntó sobre la cantidad de personas que se afectarían con esta legislación, pero también se especifica en la Exposición de Motivos: "que generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad". ¿Qué usted entiende que son ahorros millonarios, qué cantidad?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Más de dos (2) millones de dólares, porque un millón es un millón, dos (2) millones son varios millones.

SR. RAMOS OLIVERA: Quiere decir que se deben estar afectando bastante empleados de la Universidad de Puerto Rico.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No necesariamente muchos empleados, porque debemos recordar que el personal docente, que tengo entendido que es el único que no está sujeto en este momento a controles efectivos de asistencia, es un personal cuyo salario promedio probablemente ronda en los veintitantos miles de dólares anuales, el promedio. Hay algunos que ganan treinta y pico y cuarenta y pico, hay otros que ganan dieciocho (18) o veinte (20) mil pesos. Considerando que si liquidaran la totalidad de las vacaciones que acumulan en un (1) año, pues estaríamos hablando de un mes y medio de sueldo, pues podríamos estar hablando de tres mil seiscientos (3,600) dólares y con ochocientos (800) profesores que es posiblemente, qué sé yo, menos del quince (15) por ciento del profesorado disfrutando este beneficio, pues ya ahí sobrepasaríamos fácilmente los dos (2) millones de dólares.

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente, realmente, pues nos preocupa este tipo de legislación y también cuando viene del senador McClintock, que por cierto, hace unos meses atrás, lo felicitamos por un proyecto parecido que trajo aquí, que fue presentado entiendo en la Cámara de Representantes y aprobado por nosotros. Que fue un proyecto para hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo aquí, que es pagarle a todos los empleados públicos y principalmente, entiendo que en aquel entonces era el magisterio puertorriqueño, pagarle del exceso de los noventa (90) días por enfermedad, en aquél entonces, y el resto de personal después de los sesenta (60) días en vacaciones. Pues aquel proyecto es contrario a éste, me extraña que después que se trae un proyecto como aquél que es para beneficio del trabajador puertorriqueño, el trabajo público puertorriqueño, pues en este momento se traiga un proyecto que va totalmente en contra a lo que se presentaba en aquel entonces y, pues, tiene que ver, son empleados de la Universidad de Puerto Rico, pero también son empleados públicos y que esto venga después de nosotros haber aprobado una Ley de Oportunidades Educativas, donde la Universidad de Puerto Rico le corresponde aportar un promedio de veinte y pico de millones de dólares y ahora, pues estamos viendo que detrás de todo esto lo que se pretende es buscar cómo sacarle esos millones de dólares sin que afecte el presupuesto de la Universidad y comenzaron con los empleados de dicha Universidad.

Podemos ver también, posiblemente más adelante, que después que se apruebe este proyecto podemos extender esta misma legislación a todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Así que, por lo tanto, ya nosotros en el pasado, aquí en un proyecto parecido, Proyecto del Senado 1127, el cual el Gobernador de Puerto Rico le dio un voto de bolsillo. Nosotros en aquel momento nos opusimos a dicho proyecto, y en este momento también vamos a oponernos porque entendemos que es injusto y no es razonable que a estas alturas, entrando a un Siglo 21, donde se está buscando cómo ayudar a que el empleado público sea más efectivo, y se le provea al empleado público la oportunidad de cobrar aquellos días que no utilice en el año, ya sea por enfermedad o ya sea por vacaciones, veamos que a la Universidad de Puerto Rico le estemos imponiendo lo contrario, y por lo tanto, entendemos que no estamos siendo justos y me extraña grandemente

que sea el propio senador McClintock que traiga este proyecto que es totalmente en contra al proyecto que se aprobó hace unos meses atrás. Y por esas razones estaremos votándole en contra, señor Presidente.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación de la medida, sí queremos señalar, de que ya que fue por Ley que en el 1996, esta Administración le extendió el beneficio a los empleados públicos que ninguna otra administración en el pasado le había otorgado, de que para premiar aquél que mantiene un mínimo, sus ausencias, ya sea por enfermedad o por vacaciones, pues pueda liquidar los excesos de esa licencia, ya que fue por ley que nosotros aprobamos eso, creo que tiene que ser por Ley que tenemos que cerrar aquellos huecos que podamos haber dejado en la Ley original que permiten que una pequeña minoría de personas dentro de las muchas personas responsables que trabajan en la Universidad de Puerto Rico puede escurrirse. Porque sabemos que hay profesores que cogen y se van dos (2) semanas para Cuba y nunca le informan a la Universidad de Puerto Rico que se fueron para Cuba. Que hay profesores que dejan en las "tacadas" a sus estudiantes, nunca reponen las clases, nunca le avisan al departamento de que estuvieron ausentes, y esas personas que abusan del sistema, que han abusado de los estudiantes universitarios, que han abusado de la Universidad de Puerto Rico y que ahora pretenderían abusar de este gran beneficio que esta Administración le ha concedido al empleado público en Puerto Rico, nosotros tenemos que asegurarnos de que para que ese empleado pueda disfrutar de este privilegio, que tenga que someterse a mecanismos similares a los que se someten todos los empleados públicos en Puerto Rico.

Y la pregunta que yo me hago, ¿es por qué ese profesor universitario no quiere someterse al régimen de firmar una hoja de asistencia como tiene que hacerlo, quizás, la Secretaria del Rector o de ponchar una tarjeta de asistencia como tiene que hacer el conserje que mapea el salón de clases donde él imparte la enseñanza o ella imparte la enseñanza cuando le da la gana de asistir a impartir la enseñanza.

Solicitamos la aprobación de la medida, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, ¿aquéllos que estén a favor se servirán decir sí? Aquéllos que estén en contra decir no. Aprobada la medida.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el Proyecto del Senado 545, fue aprobado en el Senado y en la Cámara y enviado al Gobernador, posteriormente, mediante moción, solicitamos al Gobernador su devolución para reconsiderarse y cuando llegó solicitamos mediante moción que fuera enviado a la Comisión de Hacienda para su reconsideración. En este momento vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del Senado 545.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 545, titulado:

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 220 de 13 de septiembre de 1996, eliminando de la definición de "Técnico Automotriz" a aquellas personas que se dedican en todo o en parte a la reparación de aires acondicionados de automóviles."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación del Proyecto del Senado 545, tomando como base el texto enrolado de esta medida.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 2034, Resolución Conjunta de la Cámara 2037, Resolución Conjunta de la Cámara 2042, Resolución Conjunta de la Cámara 2043, Resolución Conjunta de la Cámara 2046, Resolución Conjunta de la Cámara 2069, Resolución Conjunta de la Cámara 2083, Resolución Conjunta de la Cámara 2109, Resolución Conjunta de la Cámara 2111, Resolución Conjunta de la Cámara 2117, Resolución Conjunta de la Cámara 2118, Resolución Conjunta de la Cámara 2119, Resolución Conjunta de la Cámara 2120, Resolución Conjunta de la Cámara 2121, Resolución Conjunta de la Cámara 2084, Resolución Conjunta de la Cámara 1875, Resolución Conjunta de la Cámara 2113, Resolución Conjunta de la Cámara 2114, Resolución Conjunta de la Cámara 2115, Resolución Conjunta de la Cámara 2116, Resolución Conjunta de la Cámara 2045, Resolución Conjunta de la Cámara 2048, Resolución Conjunta de la Cámara 2055, Resolución Conjunta de la Cámara 2056, Resolución Conjunta de la Cámara 1874, Resolución Conjunta de la Cámara 1812; Resolución Conjunta del Senado 1021, en reconsideración; Proyecto del Senado 1189, Proyecto del Senado 1247, Proyecto del Senado 1253, Proyecto del Senado 1383; Proyecto de la Cámara 1908, Proyecto de la Cámara 651; Resolución Conjunta de la Cámara 2085, Resolución Conjunta de la Cámara 1121; Proyecto de la Cámara 1922; Proyecto del Senado 1436 y Proyecto del Senado 545, en reconsideración.

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 545
(reconsideración)

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 220 de 13 de septiembre de 1996, eliminando de la definición de "Técnico Automotriz" a aquellas personas que se dedican en todo o en parte a la reparación de aires acondicionados de automóviles."

P. del S. 1189

"Para establecer el Programa de Médula Osea de Puerto Rico; establecer sus funciones y propósitos; adicionar la Sección 1040B a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder un crédito a los patronos residentes por gastos de donantes de médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña de Donantes de Médula Osea de Puerto Rico", y para asignar fondos."

P. del S. 1247

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como "Ley Trabajo-Despido sin Justa Causa; Indemnización", según enmendada, a fin de aumentar a dos (2) semanas la indemnización por cada año de servicio, cuando el empleado sea despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa."

P. del S. 1253

"Para enmendar el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de crear la modalidad de delito agravado cuando la comisión del delito de robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria pública o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas, centros comerciales y si la persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal; y para imponer penalidades."

P. del S. 1383

"Para enmendar el subinciso (b) del inciso (B) del Artículo 18 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de disponer que los miembros de la Policía que sufran lesiones graves o leves permanentes o por un período prolongado, pero que no se incapaciten, tendrán derecho a que se les reinstale en cualquier otro puesto en el servicio público."

P. del S. 1436

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

R. C. del S. 1021
(Reconsideración)

"Para ordenar al Departamento de Educación transferir libre de costo, a Maestros Retirados en Acción de Santa Isabel, Inc., institución sin fines de lucro, la antigua escuela del barrio Playa de Santa Isabel."

P. de la C. 651

"Para ordenar a la Junta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de eliminar la Comunidad Tiburones #3 de la composición territorial del Municipio de Arecibo y ordenar que dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los tribunales de justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar conocimiento de tales cambios en la aplicación de política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos."

P. de la C. 1908

"Para reglamentar la profesión del Practicaje en Puerto Rico; crear la Comisión de Practicaje de Puerto Rico; definir sus funciones, facultades y deberes; imponer sanciones; autorizar a fijar tarifas; facultar a los prácticos a organizarse; reconocer y mantener los Fideicomisos de Administración y Operación, así como el Plan de Pensión y Bienestar de los Prácticos de P.R.; y derogar las leyes existentes estén en conflicto con la presente Ley incluyendo, pero sin limitarse a la Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968 y el Reglamento Número 4286 promulgado por el Administrador de la Autoridad de los Puertos, específicamente, las secciones 6, 8 y la 10 a la 18, inclusive."

P. de la C. 1922

"Para enmendar los incisos (c) y (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", a los fines de extender el beneficio de transferir, sin costo alguno, la propiedad confiscada a las entidades del orden público; establecer el orden de prioridad en que se dispondrán de dichos bienes; e incluir a los municipios entre las entidades que pueden comprar, permutar o de cualquier otro medio legal adquirir propiedad confiscada por la Junta, para la mejor utilización de esos recursos."

R. C. de la C. 1121

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a transferir libre de costo al municipio de Bayamón los terrenos localizados entre los solares donde ubican las residencias de catorce (14) familias, entre las calles 27, 28 y 29 de la urbanización Rexville de Bayamón, así como la pista para trotar construida en el parque de béisbol de dicha comunidad para que ese municipio, a su vez, transfiera la descrita propiedad a los vecinos del lugar a título gratuito."

R. C. de la C. 1812

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, designar la cancha de Hockey de la urbanización Baldrich, en el municipio de San Juan, con el nombre "Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe".

R. C. de la C. 1874

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos originalmente asignados a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I, en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de ser transferidos al Club Social y Comunal Víctor Rojas I en el Municipio de Arecibo, encargada Natividad Figueroa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. C. de la C. 1875

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 504 de 27 de agosto de 1998 para cubrir el pago de la fianza de luz de los condominios Jardínes de Guayama A, B, C, D, E y F de Hato Rey."

R. C. de la C. 2034

"Para reasignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de quince mil (15,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, inciso (d), a los fines de cambiar el propósito previamente establecido y destinar su uso según se detalla en la Sección 1, y autorizar el pareo de los fondos asignados."

R. C. de la C. 2037

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

R. C. de la C. 2042

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de dos mil doscientos noventa y ocho (2,298) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

R. C. de la C. 2043

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil setecientos cincuenta (1,750) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

R. C. de la C. 2045

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos para gastos médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social; deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia."

R. C. de la C. 2046

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejoras a la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

R. C. de la C. 2048

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (46,440) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

R. C. de la C. 2055

"Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

R. C. de la C. 2056

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 2069

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para los fines que se mencionan en la Sección 1 y los propósitos allí expresados; y autorizar el pareo de fondos."

R. C. de la C. 2083

"Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de tres mil quinientos cincuenta (3,550) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998 para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos según se describe en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos asignados y establecer vigencia."

R. C. de la C. 2084

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico."

R. C. de la C. 2085

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos (28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós (68.922) metros, con carretera Municipal, bajo los términos y condiciones que se especifica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica."

R. C. de la C. 2109

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, originalmente consignados para la adquisición de terrenos donde ubicaría un parque de beísbol de pequeñas ligas y softball en el sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos mediante la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de un parque recreativo deportivo en el barrio Arenales Altos de dicha municipalidad; autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 2111

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veintiun mil trescientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos (21,397.75) provenientes de la Resolución Conjunta 189 de 12 de junio de 1993, #cuenta 94-141-087-02-422, de la Resolución Conjunta 431 de 13 de agosto de 1995, #cuenta 96-141-087-02-601 y #cuenta 96-141-087-02-611 y Resolución Conjunta 416 de 11 de agosto de 1996, #cuenta 97-141-087-02-701; para la compra de materiales, equipos, juegos, gastos de viajes, para realizar actividades que propendan al bienestar social, para mejorar la calidad de vida y para gastos operacionales y de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan."

R. C. de la C. 2113

"Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente."

R. C. de la C. 2114

"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado Vázquez mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señor Juan Rodríguez González, número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC01 Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa municipalidad."

R. C. de la C. 2115

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de doce mil (12,000) dólares asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante la Resolución Conjunta Núm. 327 de 24 de julio de 1998 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)."

R. C. de la C. 2116

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos."

R. C. de la C. 2117

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para mejoras a la Escuela Ernestina Bracero Pérez de Candelaria, a la Biblioteca de la Escuela de la Comunidad María Libertad Gómez de Levittown y al Centro de Reuniones de la American Association of Retired Persons de Levittown en Toa Baja."

R. C. de la C. 2118

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cinco mil dólares (5,000) provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del Barrio Ingenio de Toa Baja."

R. C. de la C. 2119

"Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para compra de materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."

R. C. de la C. 2120

"Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agostode 1997 y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente consignados a la Compañía de Fomento Recreativo; para ser utilizados para la adquisición de un equipo computarizado especializado para la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones de la Oficina Central del Departamento de Educación."

R. C. de la C. 2121

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja."

VOTACION

Los Proyectos del Senado 545 (rec.); 1189; 1247; 1253; 1383; la Resolución Conjunta del Senado 1021 (rec.); los Proyectos de la Cámara 651; 1908; 1922; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1121; 1812; 1874; 1875; 2034; 2037; 2042; 2043; 2045; 2046; 2048; 2055; 2056; 2069; 2083; 2084; 2085; 2109; 2111; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental.

Total 18

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Rubén Berríos Martínez

Total 1

- - - -

El Proyecto del Senado 1436, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental.

Total 13

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera

Total 5

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

José Enrique Meléndez Ortiz

Total 1

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA: Aprobadas todas las medidas, excepto el Proyecto del Senado 1436.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado el cuarto Orden de los Asuntos, solicitamos su consideración.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes:

De las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, doce informes conjunto, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1289; 1290; 1291; 1292, 1293; 1294 y 1295, con enmiendas.

De las Comisiones de Asuntos Municipales; de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe proponiendo la no aprobación del P. del S. 938.

De la Comisión de Nombramientos, doce informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado los nombramientos de la licenciada Esther Moreno Ruiz, para Fiscal Auxiliar I, para un término de 12 años; del doctor José M. Muriente Graña, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para un término que vence el 31 de julio del 2001; de la profesora Ivette Otero Echandi, para miembro de la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico, para un término de cuatro (4) años; del señor

Pablo Torres Pérez, para miembro del Consejo General de Educación, para un término que vence el 28 de agosto del 2000; del CPA Luis J. Torres Llompart, para miembro de la Junta de Contabilidad; de la señora Digna Cintrón Hernández, para miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza, para un nuevo término de (2) dos años; de la honorable Gladys Torregrosa de la Rosa, para Juez Superior, para un término de (12) doce años; del licenciado Ernie Cabán Santiago, para Fiscal Auxiliar I, para un término de 12 años; del licenciado Francisco Ansa Toro, para Fiscal Auxiliar I, para un término de 12 años; del licenciado Iván Román González, para Fiscal Auxiliar I, para un término de 12 años; del licenciado Edgar Delgado García, para Juez Superior, para un término de 12 años y del licenciado Juan José Delgado Delgado, para Juez Superior, para un término de 12 años.

De la Comisión de lo Jurídico, cuatro informes, proponiendo a aprobación de los P. de la C. 2041; 2058; 2066 y 2112, sin enmiendas.

De la Comisión de lo Jurídico, doce informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1253 y los P. de la C. 1962; 2093; 2095; 2096; 2103; 2105; 2106; 2108; 2109; 2110 y 2111, con enmiendas.

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1926, sin enmiendas.

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1911, con enmiendas.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1405 y la R. Conc. del S.11.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una, comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2102 y solicita igual resolución por parte del Senado.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso a, de este turno, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el Proyecto del Senado 1405 y la Resolución Concurrente del Senado Número 11. En cuanto al Proyecto del Senado 1405, no aceptamos las enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que solicitamos que el Senado forme un Comité de Conferencia.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señor Presidente, recomendamos al senador Meléndez Ortiz, para presidir este Comité, el compañero Ramón Luis Rivera Cruz, McClintock Hernández, Ramos Comas, y Rubén Berríos Martínez.

SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia acepta las recomendaciones del señor Portavoz y nombra a estos compañeros legisladores para que formen este Comité de Conferencia.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a la Resolución Concurrente del Senado Número 11, toda vez que no hemos podido dialogar con el Presidente de la Comisión que entendió en la medida, solicitamos se deje pendiente su consideración para un turno posterior.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita:

La senadora Luz Z. Arce Ferrer, ha radicado la siguiente moción por escrito:

"La Senadora que suscribe, Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, respetuosamente solicita una prórroga hasta el final de la Quinta Sesión Ordinaria, del término para rendir informe de acuerdo a la Regla 31, Sección 31.2 del Reglamento del Senado, de todas las medidas pendientes en Comisión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera Arce Ferrer radicó una moción, por escrito, en la cual solicita prórroga hasta el final de la Quinta Sesión, según la Regla 31.2 del Reglamento, para informar medidas pendientes en la Comisión de la Mujer, solicitamos la aprobación de la moción.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También ha circulado el quinto Orden de los Asuntos, solicitamos su consideración.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 969 y solicita conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Mundo Ríos, Vega Borges, Marrero Hueca, Vizcarrondo Irizarry y García San Inocencio.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1168 y solicita conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Vizcarrondo Irizarry y García San Inocencio.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso a, de este turno, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 969, y solicita conferencia, ya se han designado los conferenciantes por parte de la Cámara.

Señor Presidente, solicitamos que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos que para este Comité de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 969, se nombre al compañero Kenneth McClintock Hernández, Presidente de este Comité, junto a la compañera Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Santini Padilla, Báez Galib y Berríos Martínez.

SR. VICEPRESIDENTE: Hacemos nuestra la recomendación del señor Portavoz y nombramos este Comité de Conferencia.

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso b, de este turno, de Mensajes y Comunicaciones, del quinto Orden, también hay una comunicación de la Cámara, informando que la Cámara no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1168, y solicita conferencia. Solicitamos un Comité de Conferencia por parte del Senado.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos al compañero Santini Padilla, Lebrón Vda. de

Rivera, Peña Clos, Báez Galib y Berríos Martinez.

SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia acoge con beneplácito la recomendación del señor Portavoz y nombramos a este Comité de Conferencia.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un quinto Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1282, Proyecto del Senado 1283, Proyecto del Senado 1284, Proyecto del Senado 1285, Proyecto del Senado 1286, Proyecto del Senado 1289, Proyecto del Senado 1290, Proyecto del Senado 1291, Proyecto del Senado 1292, Proyecto del Senado 1293, Proyecto del Senado 1294, Proyecto del Senado 1295.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se incluya en este Calendario el Proyecto del Senado 1337; Proyecto de la Cámara 567, Proyecto de la Cámara 1466; Resolución Conjunta de la Cámara 1544. Todas estas medidas según han sido informadas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos se releve a la Comisión de Hacienda, de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1820, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, solicitamos se releve a la Comisión de Educación y Cultura, de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1888, y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se releve a la Comisión de Asuntos Municipales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1041, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a corregir la moción, solicitamos se deje sin efecto la moción del Calendario de Lectura.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se releve a la Comisión de Gobierno, Turismo, y Jurídico, de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2102, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1282, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Jayuya que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Jayuya que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1282, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Jayuya, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1282 que este Municipio el cual se creó en 1911 mediante la integración de varios barrios que fueron segregados del Municipio de Utuado, tiene en su centro urbano varias estructuras en las calles Barceló y Nemesio Canales, que son fieles ejemplos de principios de siglo.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

"La Oficina de Preservación Histórica en su ponencia señala: La Oficina Estatal de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Jayuya, que bien podría ser de utilidad en el cumplimiento de este Proyecto."

"Así mismo, la Oficina Estatal de Preservación estará disponible para ofrecer asistencia técnica en los trabajos de identificación, inventario y nominación de los sitios o zonas determinadas elegibles. La consideración de este caso debe ser una nominación de la zona histórica a fin de proteger no tan solo estructuras aisladas, sino el patrón mismo del tejido urbano con su modulación de espacios abiertos, edificios y vías de transportación que le den integridad y definen su carácter. Más allá del centro existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo. Estas no deben ser obviadas por este loable esfuerzo y son, a su vez. las mejores candidatas para nominación como sitios históricos."

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y la dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1282, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1283, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lares que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lares que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"**INFORME CONJUNTO**

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1283, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lares, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1283 el 26 de abril de 1827, elo Gobernador de la Torre, concedió autorización para ubicar el pueblo, que se erigió en quince cuerdas de terreno que pertenecían al Municipio de San Sebastián. En un estudio preliminar realizado por nuestro personal se han identificado alrededor de treinta (30) estructuras históricas de interés histórico y arquitectónico.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

"La Oficina de Preservación Histórica en su ponencia señala: La Oficina Estatal de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Lares, que bien podría ser de utilidad en el cumplimiento de este Proyecto."

"Así mismo, la Oficina Estatal de Preservación estará disponible para ofrecer asistencia técnica en los trabajos de identificación, inventario y nominación de los sitios o zonas determinadas elegibles. La consideración de este caso debe ser una nominación de la zona histórica a fin de proteger no tan solo estructuras aisladas, sino el patrón mismo del tejido urbano con su modulación de espacios abiertos, edificios y vías de transportación que le den integridad y definen su carácter. Más allá del centro existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo. Estas no deben ser obviadas por este loable esfuerzo y son, a su vez. las mejores candidatas para nominación como sitios históricos."

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1283, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1284, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Ponce que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Ponce que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1284, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Ponce, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1284 el Municipio de Ponce, realizó un estudi de su centro histórico y para el año de 1989 la Junta de Planificación, con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aprobó la Designación de la Zona Histórica de Ponce. Sin embrago, hay muchos lugares fuera del perímetro urbano que merecen ser designados por su importancia histórica y cultural; tales como el Castillo Serrallés, el Centro Ceremonial de Tibes, el Cementerio de Tibes, el Cementerio Municipal, el Faro del Puerto de Ponce y el Faro de Caja de Muertos, algunas estructuras que ubican en la Playa de Ponce, entre otros.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con varios estudios llevados a cabo en sitios de interés histórico del Municipio. Treinta y un (31) sitios históricos de todo tipo han sido incluidos en el Registro Nacional y están en proceso de nominación ante la Junta de Planificación. Esta documentación bien podría ser de utilidad en el cumplimiento de este proyecto.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1284, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1285, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Sabana Grande que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Sabana Grande que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1285, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Sábana Grande, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1285 el Municipio de Sábana Grande fue en sus orígenes un barrio del Municipio de San Germán. Debe su nombre a la extensa sábana que ocupa la parte Sur, ó Sábana Grande Abajo. Aunque se reconoce el potencial de designación de la Zona Histórica de Sábana Grande, ya se ha realizado un inventario preliminar y se han reconocido los posibles límites de la zona propuesta. Existen además, otras estructuras que no están en el centro urbano que son ejemplos de la arquitectura doméstica de principios de siglo. Por ejemplo, La Residencia Irizarry Pietri, la Vélez Lugo, la Castillo, la Emilio García, la Albino, la Dávila, la Berta, la Sepúlveda, la Lassise Schettini, (algunas de estas incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos de la Oficina Estatal de Preservación Histórica, (O.E.P.H.).

También existen varios ejemplos del patrimonio educativo sabaneño donde se destacan las escuelas James F. Cooper y la Luis Muñoz Rivera. Esta última diseñada por el Arquitecto Rafael Carmoega, quien también diseño el Capitolio y el cuadrángulo de la Universidad de Puerto Rico.

La Logia Masónica Igualdad se construyó en el 1891, convirtiéndose en el primer edificio construido para ese uso en Puerto Rico.

Las Haciendas Gaztambide, la Serra Castillo y San Francisco, son parte del patrimonio industrial sabaneño.

"La Oficina de Preservación Histórica en su ponencia señala: La Oficina Estatal de Preservación Histórica cuenta una Identificación y Catalogación de su patrimonio histórico-arquitectónico y recursos culturales. Cuatro sitios históricos han sido incluidos en el Registro Nacional y están en proceso de nominación ante la Junta de Planificación: la Iglesia de Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, la Residencia Lassise Schetini, la Casa de Berta Sepúlveda y la Hacienda San Francisco.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1285, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1286, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Utuado que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Utuado que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1286, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Utuado, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1286 el Municipio de Utuado, cuenta con uno de los monumentos antiguos más importantes de Puerto Rico, el Parque Ceremonial de Caguana, que fue adquirido y restaurado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en los años cincuenta. Es visitado por miles de personas al año y es ícono más sagrado que de la cultura taína conservamos. Existen muchas estructuras en el Centro Urbano de Utuado de gran valor, pero aún no se ha realizado inventario en este municipio.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Utuado. Tres sitios históricos han sido incluidos en el Registro Nacional y etán en porceso de nominación ante la Junta de Planificación: la Iglesia de San Miguel Arcángel, el Parque Ceremonial Indígena de Caguana y el Puento Blanco.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1286, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1289, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Adjuntas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc.

que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Adjuntas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1289, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Adjuntas, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1289 el Municipio de Adjuntas, existen alrededpr de cien (100) estructuras que pudieran ser elegibles par nominación de zona histórica. Entre éstas, se encuentran la Casa Bianchik y otras propiedades del principio de siglo.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Adjuntas. Un sitio histórico ha sido incluido en el Registro Nacional y está en porceso de nominación ante la Junta de Planificación: el Puente de las Cabañas.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1289, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1290, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guánica que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guánica que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1290, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:
Página 1, Línea 3,después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guánica, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1290 que el Municipio de Guánica, sabe a historia. El 25 de julio de 1898 se produjo el primer desembarco que las tropas de la Guerra Hispanoamericana a Puerto Rico por el pueblo de Guánica. Son varias las estructuras reconocidas que podrían ser elegibles para la designación de Zona Histórica de Guánica en el centro del pueblo. Además, otros lugares como la Biblioteca Pública de Ensenada, el Correo, la Iglesia Adventista y el Antiguo Hotel, los remanentes de la Central Azucarera y varias haciendas y faros.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Guánica. Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igujalmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo. Dos sitios históricos han sido incluidos en el Registro Nacional y están en proceso de nominación ante la Junta de Planificación: el Faro de Guánica y la Hacienda Santa Rita.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1290, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1291, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guayanilla que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guayanilla que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1291, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guayanilla, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1291 que el Municipio de Guayanilla, desde la fundación de Yauco, Guayanilla formó parta de ese Municipio. Hacia 1830 los pobladores de Guayanilla eran más numerosos. En Guayanilla no se ha realizado al presente ningún inventario preliminar que se tenga conocimiento.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Guayanilla. Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1291, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1292, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Maricao que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Maricao que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1292, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3, después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"

Página 1, Línea 10, tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Maricao, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1292 que el Municipio de Maricao se han identificado los límites de la propuesta Zona Histórica. Esta incluye alrededor de cien (100) propiedades que están en proceso de ser inventariadas. El inventario se está desarrollando con el respaldo del Municipio y grupos comunitarios. Además, Maricao cuienta con más de una veintena de haciendas cafetaleras del siglo pasado.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Maricao. Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo. Dos sitios históricos han sido incluidos en el Registro Nacional y están en proceso de nominación ante la Junta de Planificación: la Iglesia de San Juan Bautista y el Puente del Treinta.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1292, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1293, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Yauco que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Yauco que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1293, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Yauco, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1293 que el Municipio de Yauco se designó como Sitio Histórico el edificio donde ubica el Banco Popular hace alrededor de dos años, por iniciativa de esta institución ante la Junta de Planificación. Existen muchas estructuras en los alrededores de la plaza que tienen gran valor arqueológico e histórico, entre otras, la Casa Franceschi Antongiorgi, Casa Filardi, Casolna Cesari, el Chalet Amill, la Residencia González Vivaldi, la Casa Agostini, la Logia Masónica, Hijos de la Luz y el Teatro Ideal, entre otras.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un "Inventario de Yauco". Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo. Ocho sitios históricos han sido incluidos en el Registro Nacional y están en proceso de nominación ante la Junta de Planificación: la Casa Franceschi Antongiorgi, Casa Filardi, Casolna Cesari, el Chalet Amill, la Residencia González Vivaldi, la Casa Agostini, la Logia Masónica, Hijos de la Luz y el Teatro Ideal.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1293, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1294, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lajas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lajas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1294, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lajas, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1294 que el Municipio de Lajas fue en 1883 oficialmente fundado, donde abundan las lajas que son piedras lisas, planas y delgadas que antiguamente se usaban para empedrar el piso de las viviendas. Aún no se ha realizado inventario de las estructuras históricas que están dentro del centro del pueblo, pero se reconoce que existen estructuras de gran valor dentro y fuera de la zona urbana. Existen varias escuelas, la Perry de 1904, la Luis Muñoz Rivera 1925, la Academia San Luis, entre otras, que tienen valor histórico.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Lajas, que bien podría ser de utilidad en el cumplimiento de este proyecto. Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1294, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1295, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"**LEY**

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Peñuelas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos, literatura, pinturas etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para la formación de un pueblo.

A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir costumbres y tradiciones, y como estas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.

Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.

De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de donde surgieron para saber hacia a donde se dirigen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Peñuelas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Artículo 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 3.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1295, tienen el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas.

En La Exposición de Motivos:

Página 1, Línea 3,	después de "pintura" insertar "," en la misma línea después de "etc." insertar ";"
Página 1, Línea 10,	tachar "XX1" y sustituir por "**XXI**"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de la medida es para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Peñuelas, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

Puede añadirse que esta medida, se proyecta en su propósito ulterior con efecto permanente al reconocer dentro de una zona histórica aquellas estructuras que reúnan los requisitos para ser declarados construcciones históricas.

Las Comisiones celebraron audiencias públicas a las cuales comparecieron representación de la Oficina de Preservación Histórica y del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña en su ponencia señala que en relación al P. del S. 1295 que el Municipio de Peñuelas en 1793, recibió la Declaración de Pueblo y poco después se fundó la Parroquia bajo la advocación de San José. En 1874 el pueblo de Peñuelas ya tenía nueve calles y cuatro travesías, contaba con la Iglesia Católica, la Casa del Rey, Cementerio, Carnicería y otras obras menores. Aún no se ha realizado un inventario preliminar de las estructuras históricas de este Pueblo, ya que es necesario conservar el patrimonio edificado que aun quede en este Municipio.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña nos indica en su ponencia y cito: "Cada día las instituciones que estudian sobre el turismo cultural y el que va dirigido a conocer el patrimonio histórico de cada pueblo, es el que más apela al viajero de hoy día. Tanto los recursos ambientales como los históricos y culturales son los que mayor motivación generan y la razón de ser de muchos viajes, que a su vez tienen un efecto positivo en las economías de los países visitados."

La Oficina de Preservación Histórica cuenta con un estudio fotográfico del Municipio de Peñuelas, que bien podría ser de utilidad en el cumplimiento de este proyecto. Más allá del centro, existen remanentes de haciendas y otras propiedades de gran valor que igualmente sirven de marcadores o testigos de la rica herencia de este pueblo.

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña como la Oficina Estatal de Preservación Histórica, recomiendan que previo a la designación de la zona histórica donde se incluyen las estructuras que han de configurarla, debe seguir la recomendación de sus oficinas y lo dispuesto en el Reglamento Núm. 5, que responde a lo ordenado en las Leyes Número 374 de 1949, Número 75 de 1975 y Número 170 de 1988.

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1295, con las enmiendas contenidas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidenta
Comisión de Educación y Cultura

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1337, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autonómos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de conceder al Alcalde o ejecutivo municipal sesenta (60) días adicionales para someter el informe completo de las finanzas y actividades del municipio ante la eventualidad de su municipio haber sido declarado zona de desastre oficialmente por el Gobernador de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", tuvo como norte el otorgar a los municipios de Puerto Rico un grado mayor de autonomía fiscal y de gobierno propio con el fin de que pudiesen atender de

forma inmediata las necesidades de sus habitantes. El propósito final de la Ley es el que el municipio alcance un mayor grado de desarrollo urbano, social y económico, mediante una forma de gobierno efectiva y responsiva a las necesidades y aspiraciones de cada uno de sus ciudadanos.

De esta responsabilidad surge la obligación de todo Alcalde o ejecutivo municipal de rendir cuentas con respecto a su administración y las gestiones que realicen para cubrir las necesidades particulares de la gente de su municipio. Cada año el Alcalde viene obligado, entre otras cosas, a someter a la Asamblea Municipal de su municipio un informe completo de las finanzas y actividades sobre su administración. La fecha límite para someter dicho informe es el 15 de octubre de cada año.

Ante la realidad de estar Puerto Rico localizado en una zona altamente propensa a sufrir los embates de fenómenos atmosféricos y cuya época crítica es entre los meses de junio a noviembre se hace necesario y como medida de justicia el proveerle a los alcaldes un período adicional de sesenta (60) días para radicar el informe anual de las finanzas y actividades de su administración en la eventualidad de que su municipio sea declarado zona de desastre por el Gobernador de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Artículo 3.010 - Obligaciones con respecto a la Asamblea Municipal

Además de cualesquiera otras dispuestas en esta ley u otras leyes, el Alcalde tendrá, respecto a la Asamblea Municipal, las siguientes obligaciones:

(a) .....

(j) Someter, no más tarde del 15 de octubre de cada año, un informe completo de las finanzas y actividades administrativas del municipio al cierre de operaciones al 30 de junio del año fiscal precedente. El Alcalde presentará dicho informe en audiencia pública en el Salón de Actos de la Casa Alcaldía. Este se radicará ante el Secretario de la Asamblea Municipal con copias suficientes para cada miembro de la Asamblea y estará disponible para el público desde la fecha de su presentación.

Si previo a la fecha límite para someter el informe ordenado en este inciso el municipio fuera declarado zona de desastre por el Gobernador de Puerto Rico, el Alcalde tendrá sesenta (60) días adicionales, contados a partir del día 15 de octubre para someter el informe completo de finanzas y actividades administrativas del municipio.

(k) ....."

Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales del Senado previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1337, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida propone enmendar el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de conceder al Alcalde o Ejecutivo Municipal sesenta (60) días adicionales para someter el informe completo de las finanzas y actividades del municipio ante la eventualidad de su municipio haber sido declarado zona de desastre oficialmente por el Gobernador de Puerto Rico.

A los fines de evaluar la medida y hacer la recomendación pertinente, se solicitaron memorial a las siguientes entidades: Departamento de Justicia, Federación de Municipios, Oficina del Contralor, Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

Se examinó el expediente e informe de la Resolución Conjunta del Senado 1087 la cual tenía la misma intención del Proyecto de autos. Dicha Resolución fue considerada y aprobada por el Senado de Puerto Rico y convertida en la Ley Núm. 527 el 17 de octubre del presente año.

Estudiamos los memoriales enviados por la Federación de Municipios de Puerto Rico y el Memorando Circular 98-17, de fecha 2 de octubre de 1998 de la O.C.A.M., remitidos a todos los alcaldes con posterioridad al paso del Huracán Georges por Puerto Rico. Se estudió además, el Informe Final sobre la R. C. del S. 1087.

BASE LEGAL

La medida propone enmendar el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, el cual lee como sigue: "Además de cualesquiera otras dispuestas en ésta u otras leyes, el Alcalde tendrá respecto a la Asamblea Municipal las siguientes obligaciones:

(j) someter no más tarde del 15 de octubre de cada año, un informe completo de las finanzas y actividades administrativas del municipio al cierre de operaciones al 30 de junio del año fiscal precedente. El Alcalde presentará dicho informe en audiencia pública en el Salón de Actos de la Casa Alcaldía. Este se radicará ante el Secretario de la Asamblea Municipal con copias suficientes para cada miembro de la Asamblea y estará disponible para el público desde la fecha de su aprobación.

Dicha disposición legal no dispone en cuanto aquellas situaciones de emergencias que impiden que se cumpla la exigencia de rendir el informe en una fecha determinada, en este caso el 15 de octubre de cada año.

La medida pretende corregir y aclarar esta situación, según se dice en el último párrafo de la Exposición de Motivos: "Se hace necesario y como medida de justicia el proveerle a los alcaldes un período adicional de sesenta (60) días para radicar el informe anual de las finanzas y actividades de su administración en la eventualidad de que su municipio sea declarado Zona de Desastre por el Gobernador de Puerto Rico."

Aquellos municipios que no sean declarados zonas de desastre por el Gobernador de Puerto Rico, deberán rendir sus informes no más tarde del 15 de octubre de cada año.

La extensión del término que pretende la medida aplica solamente a zonas de desastres, declarados como tales.

Bajo el estudio actual de derecho, los alcaldes podrán ser excusados de cumplir con sus obligaciones legales respecto a la Asamblea en casos de desastre, Caso Fortuito o Fuerza Mayor como lo son los desastres naturales. El paso del Huracán Georges por Puerto Rico presentó esta situación.

La situación que motiva la consideración de esta medida (Huracán Georges) fue considerada por la R. C. del S. 1087, como remedio de emergencia.

El P. del S. 1337 pretende corregir y atender la situación en forma permanente.

Finalmente, citamos de la Orden de la O.C.A.M. en su parte pertinente, lo siguiente: "Aunque la ley es una de las fuentes de las obligaciones (Artículo 1042 C.C.P.R.) el Caso Fortuito y la Fuerza Mayor, como son los desastres naturales, son causa de excusa (excepción) en el cumplimiento de las obligaciones, incluso las legales."

El Artículo 1042 del C.C.P.R. lee así: "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia."

El Artículo 1136 C.C.P.R. dispone: "Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiese o destruyese sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora."

La doctrina ha elaborado y desarrollado los conceptos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor como justa causa para relevar a una persona del cumplimiento de una obligación.

Por último, la prórroga de sesenta (60) días propuesto en la medida para que el Alcalde rinda su informe en caso de desastre siempre y cuando su municipio sea declarado Zona de Desastre es una razonable.

CONCLUSION

La intención de la Medida es razonable, justa y necesaria, además aclara el estado actual de derecho.

RECOMENDACION

Por todo lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 567, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a los efectos de especificar los casos en que se habrá de imponer pensión alimentaria "pendente lite" y proveer para la coadministración de los bienes gananciales durante el juicio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Reforma Legislativa aprobada en 1976 trajo profundos cambios en el ámbito filosófico y estructural del régimen administrativo de la sociedad legal de gananciales. A pesar de ello, la mujer se encuentra en una situación de subordinación propiciada por el mismo ordenamiento jurídico.

Las enmiendas introducidas a los Artículos 89 y 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 referentes a la responsabilidad de alimentarse los cónyuges fueron sumamente sencillas. Se limitaron a incluir a la esposa, además del marido, como responsable de proveer alimentos. No obstante, aún cuando se incorporó un lenguaje no sexista, el cambio fue más bien uno de tipo semántico. Las enmiendas realizadas no lograron armonizar la responsabilidad alimentaria de los cónyuges con aquellas disposiciones que rigen la sociedad legal de gananciales por cuanto no reflejan un cuestionamiento de la premisa filosófica sobre la cual se fundamentaban. Esto es, el hombre como protector y proveedor y la mujer protegida y provista.

El hombre, como proveedor y único administrador de los bienes de la sociedad asumía un control sobre los bienes que los hacían prácticamente suyos. Por lo tanto, era el marido y no la sociedad legal quien asumía la carga de sostener económicamente a la esposa. Esta anacrónica premisa desvirtúa y desarticula el propósito de la Reforma.

La Reforma de 1976 exige un nuevo enfoque y postura para eliminar esta desigualdad en el área de los alimentos entre cónyuges. Al haberse establecido la coadministración, los bienes gananciales no pueden continuar considerándose como particulares de uno de los cónyuges. Vigente el matrimonio, ambos cónyuges tienen igual derecho, tanto de administración como de acceso, a los bienes gananciales. Estos bienes le pertenecen a la sociedad y no al cónyuge que tiene el control de ellos. Dado lo anterior, los cónyuges satisfarán sus necesidades de acuerdo a las condiciones y medios de fortuna de la sociedad. Solo en los casos en que la sociedad carezca de bienes es que vendrán los cónyuges obligados a dar alimentos en proporción a sus respectivos patrimonios privados, si los tuviesen.

Esta Asamblea Legislativa consciente de la situación de desigualdad imperante entre los cónyuges y a fin de erradicarla, por imperativo de la Reforma de 1976, entiende necesario enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a fin de sentar las normas que deberán regir los tribunales de instancia al fijar los alimentos entre los esposos cuando todavía está vigente el matrimonio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 para que lea como sigue:

"Artículo 100.-Pensión para los alimentos

Si uno de los cónyuges no contase con suficientes recursos para vivir durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia ordenará al otro cónyuge que le pase una pensión alimentaria en proporción a los bienes propios de este de acuerdo a la posición social de la familia y en aquel caso en que la sociedad legal de gananciales no cuente con bienes de fortuna suficientes o los cónyuges hubieren otorgado capitulaciones matrimoniales.

En aquel caso en que la sociedad legal cuente con bienes de fortuna, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar a petición de cualquiera de los cónyuges que se reconozca el derecho del cónyuge reclamante a ejercitar la coadministración de todos o parte de los bienes gananciales, o el acceso a un bien ganancial particular o suma líquida que le permita alimentarse, o ambos, o una pensión alimentaria sin que ello constituya un crédito o una deuda a cargo de las respectivas participaciones en el caudal ganancial al momento de la liquidación.

Para el caso anterior, el cónyuge reclamante no tendrá que probar necesidad inclusive durante el trámite del divorcio, excepto cuando reclame que se le conceda acceso a una suma líquida mensual que equivalga a más de la mitad del total de ingresos mensuales o bienes líquidos de la sociedad."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe en relación al Proyecto de la Cámara 567, recomendando su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 567 radicado por el Honorable Aníbal Vega Borges el 14 de abril de 1997, tiene el propósito de enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a los efectos de especificar los casos en que se habrá de imponer pensión alimentaria "pendiente lite" y proveer para la coadministración de los bienes gananciales durante el juicio.

La Exposición de Motivos de la medida ante nos expresa que la Reforma Legislativa aprobada en 1976 trajo profundos cambios en al ámbito filosófico y estructural del régimen administrativo de la sociedad legal de gananciales, y que a pesar de ello, la mujer se encuentra en una situación de subordinación propiciada por el mismo ordenamiento jurídico.

Dispone además la Exposición de Motivos de la pieza legislativa que analizamos que las enmiendas introducidas a los Artículos 89 y 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, referentes a la responsabilidad de alimentarse los cónyuges fueron sumamente sencillas. De acuerdo al autor de la medida que nos ocupa aún cuando se incorporó un lenguaje que no existía el cambio fue más bien uno de tipo semántico. Expresa a su vez el Legislador que las enmiendas realizadas no lograron armonizar la responsabilidad alimentaria de los cónyuges con aquellas disposiciones que rigen la sociedad legal de gananciales, por cuanto no reflejan un cuestionamiento de la premisa filosófica sobre la cual se fundamentaban. Esto es, el hombre como protector y la mujer protegida y provista.

Conforme a lo manifestado en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa que analizamos, el hombre como proveedor y único administrador de los bienes de la sociedad asumía un control sobre los bienes que los hacían prácticamente suyos. Siendo esto así, era el marido y no la sociedad legal de gananciales quien asumía la carga de sostener económicamente a la esposa. Expone el autor de la medida que esta anacrónica premisa desvirtúa y desarticula el propósito de la Reforma.

De conformidad a lo manifestado por el Legislador, la Reforma de 1976 exige un nuevo enfoque y postura para eliminar esta desigualdad en el área de los alimentos entre cónyuges. Al haberse establecido la coadministración los bienes gananciales no pueden continuar considerándose como particulares de uno de los cónyuges. Vigente al matrimonio, ambos cónyuges tienen igual derecho, tanto de administración como de acceso, a los bienes gananciales. Estos bienes le pertenecen a la sociedad y no al cónyuge que tiene el control de ellos. Siendo esto así, los cónyuges satisfacen sus necesidades de acuerdo a las condiciones y medios de fortuna de la sociedad. De carecer de bienes es que vendrán los cónyuges obligados a dar alimentos en proporción a sus respectivos patrimonios privados, si lo tuviesen, explica el autor de la medida.

El Legislador, consciente de la situación de desigualdad imperante entre los cónyuges y a fin de erradicarle por imperativo de la Reforma de 1976, entiende necesario enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a fin de establecer las normas que deberán regir los tribunales de instancia al fijar los alimentos entre los esposos cuando todavía está vigente el matrimonio.

La medida que nos ocupa tiene como finalidad enmendar el Artículo 100 del Código Civil para especificar los casos en que se habrá de imponer pension alimentaria "pendiente lite" y proveer para la coadministración de los bienes gananciales durante el juicio.

Conviene comenzar nuestro análisis señalando que la Ley Núm. 84 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, realizó enmiendas al referido Artículo con el propósito de conceder iguales derechos a ambos cónyuges.

El Artículo actualmente dispone lo siguiente:

"Si uno de los cónyuges no contrae suficientes recursos propios para vivir durante el juicio el Tribunal

Superior ordenará al otro cónyuge que le pase una pensión alimentaria en proporción a los bienes de éste".

Por lo tanto, se hace necesario enmendar el mencionado Artículo a los fines de atemperarlos al Estado de Derecho vigente.

Al presente, el Artículo 108 de nuestro Código Civil vigente el cual regula la pensión "pendiente lite", dispone que para conceder la misma es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos:

* que esté pendiente el juicio del divorcio.
* que uno de los cónyuges no cuente con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio.
* que el otro cónyuge tenga bienes.

No obstante, a pesar de la reforma que ha sufrido la sociedad legal de gananciales, la mujer al presente se encuentra en una situación de subordinación propiciada por el ordenamiento jurídico.

De otro lado, la enmienda realizada el 30 de mayo de 1976, incorporó a este Artículo un lenguaje que obvia las disposiciones que rigen la sociedad legal de gananciales sobre igualdad de derecho, no sólo de administración, sino del acceso a los bienes gananciales. El referido Artículo no armoniza con el espíritu de igualdad de la Reforma, a pesar de que dicha medida tenía como propósito eliminar la discriminación por razón de sexo.

Es importante señalar que los matrimonios, si no otorgan capitulaciones, se rigen por el principio de la ganancialidad. Por tal razón, es la sociedad legal de gananciales la dueña de la totalidad o casi la totalidad de los bienes que se produzcan mediante la vigencia del matrimonio.

En adición a la Reforma, el Código Civil en el Artículo 1308 se dispone lo siguiente:

"Serán de cargo de la sociedad de gananciales... el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges". 31 L.P.R. A., Sec. 3661.

No podemos considerar que el cónyuge en control del patrimonio entienda como propios aquellos bienes que pertenecen a la sociedad de gananciales.

Los cónyuges deberán satisfacer sus necesidades en proporción a las condiciones y medios de fortuna de la sociedad. Sólo en aquellos casos donde la sociedad carezca de bienes es que vendrán los cónyuges obligados a dar alimentos en proporción a sus respectivos patrimonios privativos, si los tuviere.

Anteriormente se colocaba a la mujer en una posición de subordinación jurídica y ecónomica con respecto a su esposo. Una visión estereotipada basada en la "caracterización de la mujer como sexo débil donde el hombre tiene la obligación de protegerle y proveerle".

Esto llevaba consigo el que el cónyuge subordinado tuviese que justificar su necesidad de utilizar parte de los bienes de la sociedad de los cuales era copropietario para cubrir sus necesidades personales. Sin embargo, el cónyuge en control de los bienes podía utilizarlos para cubrir sus necesidades personales, libremente, sin necesidad de ofrecer justificación alguna. Veáse Kantara v. Castro, 135 DPR 1 (1994).

De otro lado la medida le da el poder discrecional al tribunal para otorgar la coadministración, teniendo en cuenta la capacidad de administrar del cónyuge no administrador, por que lo contrario podría mermar el capital de la sociedad, viéndose ambos cónyuges perjudicados.

Con esta medida se busca infundir al Artículo sobre la pensión alimentaria "pendiente lite" el verdadero propósito legislativo que tuvo la Reforma de 1976, eliminando del ordenamiento jurídico el discrimen por razón de sexo.

Esta Comisión entiende que con esta medida finaliza una etapa discriminatoria que crea un estado de indefensión en la mujer, afectando el equilibrio familiar, sobre todo en esta etapa dolorosa en que se ventila el pleito de divorcio.

Remitiéndonos específicamente al primer párrafo de la propuesta enmienda, en el mismo se establece que en el caso de que uno de los cónyuges no cuente con suficientes recursos para vivir durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia, ordenará al otro cónyuge que le pase una pensión alimentaria en proporción a los bienes propios de éste de acuerdo a la posición social de la familia y en aquel caso en el que la sociedad legal de gananciales no cuente con bienes de fortuna suficiente o los cónyuges hubieren otorgado capitulaciones matrimoniales.

Por otro lado, dispone la propuesta enmienda que en el caso en que la sociedad legal cuente con bienes de fortuna, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar a petición de cualquiera de los cónyuges que se reconozca el derecho del cónyuge reclamante a ejercitar la coadministración de todos o parte de los bienes gananciales; o el acceso a un bien ganancial particular o suma líquida que le permite alimentarse, o ambos, o una pensión alimentaria sin que ello constituya un crédito o una deuda a cargo de las respectivas participaciones en el caudal ganancial al momento de la liquidación.

Se especifica en la propuesta enmienda que para el caso anterior, el cónyuge reclamante no tendrá que probar necesidad inclusive durante el trámite del divorcio, excepto cuando reclame que se le conceda acceso a una suma líquida mensual que equivale a más de la mitad del total de ingresos mensuales o bienes líquidos de la sociedad.

Por las consideraciones expuestas y con las aclaraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 567, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1466, y se da cuenta de un segundo informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, sin enmiendas.

"LEY

Para establecer la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico"; establecer el propósito de la misma; autorizar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a poner en ejecución esta Ley; disponer sus deberes y facultades; establecer un Fondo Especial; establecer delitos y penalidades y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los arrecifes de coral constituyen un ecosistema único y especial de gran importancia para todos los seres humanos y la vida marina. Lamentablemente, los arrecifes de coral están expuestos cada vez más a innumerables factores que afectan su existencia. La fragilidad del arrecife de coral le coloca en desventaja ante los efectos de la naturaleza, pero sobre todo, ante la imprudencia y desconocimiento del ser humano.

La Asamblea Legislativa, consciente del mandato constitucional que pregona como política pública la conservación de los recursos naturales, entiende meritorio la aprobación de esta Ley. Debemos evitar que

nuestra dejadez permita la destrucción total de tan preciado recurso natural. Al facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar un programa que permita la conservación, manejo y protección de los arrecifes de coral, así como penalizar ciertas actuaciones detrimentales a los mismos, ofrecemos una alternativa viable para que futuras generaciones disfruten de estos paraísos naturales. Se destaca la necesidad de educar al público en general sobre la importancia de los arrecifes de coral, su mantenimiento y la forma en que las personas pueden cooperar para protegerlos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley para la Protección, Conservación y manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico".

Artículo 2.-Declaración de Política Pública.-

Se declara y reitera que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la protección, preservación y conservación de los arrecifes de coral en las aguas territoriales de Puerto Rico, para el beneficio y disfrute de esta y futuras generaciones. Se declara además, que el interés público urge evitar y prevenir el daño continuo e irreparable de los arrecifes de coral y de la vida marina asociada al mismo. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales promoverá el desarrollo de planes de manejo sostenible para los arrecifes de coral de Puerto Rico.

Artículo 3.-Definiciones.-

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado y alcance que para cada uno se exprese, excepto cuando del texto claramente se indique un significado diferente:

"*Aguas Territoriales*", significa las aguas navegables bajo el control o dominio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

"*Area de recuperación arrecifal*", significa las áreas de arrecife impactadas y degradadas por el ser humano o por causas naturales y que para su restauración es necesaria la restricción e incluso prohibición de actividades humanas.

"*Areas ecológicamente sensitivas*", significa las áreas que requieren designación y protección por su valor ecológico.

"*Arrecife Artificial*", significa un arrecife creado y colocado por el ser humano para simular algunas propiedades importantes del arrecife natural que induzcan la propagación de especies marinas dependientes del arrecife y que traigan a pescadores, navegantes y buzos, con el propósito de disminuir la intensidad de uso y sus consecuencias detrimentales sobre los arrecifes naturales.

"*Arrecife de Coral*", significa el ecosistema compuesto de coral, esqueleto de éste y demás especies marinas asociadas al mismo, tales como praderas de yerbas marinas.

"*Coral*", significa todos los organismos vivos o muertos clasificados como:

(i) "Coral pétreo"-organismo del filum Cnidaria pertenecientes al orden Scleractinea (se incluye aquí, entre otros, coral cerebro, coral cuerno de ciervo, coral de cuerno de alce).

(ii) "Coral córneo"-organismo del filum Cnidaria perteneciente a la subclase Octocolaria (Se incluyen aquí los abanicos de mar y otros organismos que no poseen un nombre común).

(iii) "Coral negro"-organismo del filum Cnidaria perteneciente al orden Antipatharia.

(iv) "Hidrocolaria"-organismo del filum Cnidaria perteneciente a la clase Hydrozoa que producen un esqueleto de carbonato de calcio.

"*Departamento*", significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

"*Desperdicio*", significa toda basura, escombro, artículos inservibles, cenizas, cieno o cualquier otro material desechado, sea éste peligroso o no, sólido, líquido, semi sólido o de contenido gaseoso, resultante de operaciones domésticas, industriales, comerciales, agrícolas o gubernamentales.

"*Embarcación*", significa una estructura flotante diseñada y construida por un fabricante autorizado que tiene la capacidad de desplazamiento sobre el agua y que se utiliza o es capaz de utilizarse como medio transportación siendo impulsada por un motor como fuente principal de propulsión o de forma alterna como botes, lanchas, veleros, motocicletas marinas o "jet ski" o cualquier otro similar o análogo a las enumeradas. El término también incluye aquellas estructuras de fabricación casera que cumplan con los

requisitos de diseño y construcción similares al de los fabricantes autorizados.
"Manejo sostenible", significa el plan de acciones biológicas, comerciales, sociales, administrativas, entre otros, que aseguren la permanencia o sobrevivencia del recurso y su hábitat en condiciones saludables.
"*Persona*", significa toda persona natural o jurídica.
"*Programa*", significa el Programa para la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral que se establece en el Artículo 5 de esta Ley.
"*Secretario*", significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
"*Sistemas de áreas de recuperación arrecifal*", significa el grupo de distintas áreas de recuperación arrecifal separadas geográficamente pero que están biologicamente conectadas por los patrones reproductivos y de dispersión y el comportamiento migratorio de organismos arrecifales."

Artículo 4.-Protección de los Arrecifes de Coral.-
Se faculta al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a tomar todas las medidas necesarias para la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral y comunidades coralinas en las aguas territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Secretario deberá identificar con boyas o cualquier otro marcador flotante los lugares que designe como reservas, áreas de recuperación arrecifal y áreas ecológicamente sensitivas. Además deberá identificar los arrecifes y comunidades coralinas que puedan ser impactados por encallamientos o anclaje de embarcaciones y preparará mapas donde se identifiquen los arrecifes coralinos. El Secretario podrá identificar con boyas o cualquier otro marcador flotante las praderas de yerbas marinas con el propósito de proteger estos sistemas y de evitar daños por anclas o hélices de embarcaciones.

El Departamento establecerá un protocolo de encallamiento en arrecifes de coral y comunidades coralinas.

Artículo 5.-Programa.-
El Secretario establecerá un Programa para la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral, el cual deberá contemplar la mejor utilización de los recursos existentes e implantar los mecanismos adecuados que permitan el manejo, la conservación y protección de los arrecifes de coral para el disfrute y beneficio del pueblo de Puerto Rico.

El Programa deberá establecer una comunicación efectiva con las agencias e instrumentalidades estatales y federales, entidades educativas o científicas que pudieren tener injerencia o jurisdicción sobre cualquier aspecto de esta Ley. Se crea un comité asesor que será presidido por el Director del Negociado de Pesca y Vida Silvestre, y estará compuesto por los siguientes miembros permanentes o un representante que éstos designen: Presidente de la Junta de Planificación, Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Director de la Compañía de Turismo, Secretario del Departamento de Agricultura, Director del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, Director del Consejo Caribeño de Administración Pesquera, Director del Servicio Nacional de Pesca Marina, dos o más miembros de la comunidad científica o universitaria y cualquier otro miembro que el Secretario estime necesario, cuya función esté relacionada con los fines de esta Ley y que esté facultado para brindar el asesoramiento técnico y profesional necesario al Secretario para la implantación de esta Ley. Los miembros del comité asesor que no sean ex-oficios serán seleccionadas por el Secretario.

El Programa proveerá los criterios científicos para identificar las áreas de recuperación arrecifal y áreas ecológicamente sensitivas, y las actividades que deberán ser restringidas o prohibidas en tales áreas. Además, preparará una metodología para evaluar los impactos socio-económicos de cualquier prohibición o restricción de actividades humanas en tales áreas.

Las áreas de recuperación arrecifal se establecerán para el desarrollo de los siguientes objetivos: mantener una diversidad alta de especies marinas, una alta diversidad genética y de comportamiento; mantener poblaciones con los tamaños reproductivos que sean capaces de aumentar las poblaciones y la productividad de las áreas arrecifales adyacentes; mantener un pool genético variable en poblaciones del área de recuperación como un seguro contra el fracaso de planes de manejo de las áreas donde se permite la pesca y las actividades recreacionales y turísticas; mantener áreas de control para estudiar el impacto de la pesca

y permitir una diversificación de los usos económicos de los recursos marinos.

La Junta de Calidad Ambiental asistirá y proveerá al Secretario toda ayuda e información necesaria relacionada con los factores ambientales y contaminantes que afectan directa o indirectamente al arrecife de coral y las comunidades coralinas y en particular, los problemas relacionados a la sedimentación, descarga de cualquier desperdicio o sustancia contaminante y cualquier emergencia ambiental.

El Programa deberá identificar toda fuente de contaminación ambiental que cause daño al arrecife de coral y comunidades coralinas y recomendará medidas de control necesaria para evitar tal contaminación y cualquier impacto negativo a estos recursos.

Además, el programa examinará y recomendará sobre la colocación de los arrecifes artificiales en aguas territoriales de Puerto Rico, que permita el incremento del número y la disponibilidad de hábitat y recursos para las especies de organismos arrecifales.

Artículo 6.-Facultades Adicionales.-

Además de los poderes y facultades establecidos en esta Ley, el Secretario tendrá las siguientes facultades y deberes:

(1) Adoptar la reglamentación que considere necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en conformidad a la Ley Núm. 170, 18 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".
(2) Celebrar los convenios, contratos o acuerdos que sean necesarios y convenientes con otros departamentos, agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas del gobierno estatal, federal, municipal, instituciones educativas o científicas o cualquier entidad privada dirigidos a obtener el logro más eficaz de los propósitos de esta Ley.
(3) Recibir ayuda económica, técnica o de cualquier otro tipo del gobierno federal o de cualquier agencia pública o privada.
(4) Participar en programas afines a los propósitos de esta Ley, con el gobierno federal, con otros estados, agencias públicas y privadas o cualquier otra organización nacional o internacional.
(5) Desarrollar un programa intensivo de educación al público en general sobre los beneficios de los arrecifes de coral y comunidades coralinas, los peligros que enfrentan y las medidas de protección y conservación que han sido establecidas por el Departamento, así como aquellas en las que el público puede cooperar.
(6) Llevar a cabo todas las medidas pertinentes contra los dueños o capitanes de embarcaciones que encallen en arrecifes de coral de manera que restauren dicho sistema.

Artículo 7.-Plan de Manejo.-

Se ordena al Secretario, a que adopte un plan especial de manejo sobre los arrecifes de coral y las comunidades coralinas.

Se requerirá una Declaración de Impacto Ambiental para todo proyecto que pueda ocasionar impactos negativos a los arrecifes de coral, comunidades coralinas y sistema marinos asociados. La Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prepararán un reglamento de zonificación para permitir el desarrollo residencial, recreativo y turístico en áreas donde no ocurran impactos adversos y detrimentales sobre los arrecifes de coral, comunidades coralina y vida marina asociada al mismo.

La Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos y las demás agencias del gobierno de Puerto Rico deberán consultar al Departamento en cualquier construcción o desarrollo propuesto que pueda tener un efecto previsible sobre arrecifes de coral, comunidades coralinas y ecosistemas asociados al mismo.

Artículo 8.-Fondo Especial.-

Se crea en los libros del Departamento de Hacienda, como un Fondo Especial, no sujeto a año fiscal determinado alguno, distinto y separado de todo otro dinero o fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, el "Fondo para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico", en adelante denominado "Fondo".

Este Fondo se administrará de acuerdo con las normas y reglamentos que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adopte, en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares.

El Fondo será utilizado por el Secretario exclusivamente para los propósitos establecidos en esta Ley sobre la conservación y protección de los arrecifes de coral en Puerto Rico. El Fondo se nutrirá de:

(1) Cualesquiera dineros que se donaren, traspasaren o cedieren cualquier persona o entidad privada o gubernamental, federal, estatal o municipal.
(2) Los dineros recibidos por concepto de multas administrativas que imponga el Secretario conforme lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley.
(3) El pago de derechos por los permisos por realizar estudios científicos, actividades educativas en arrecifes de coral; y el permiso para bucear en arrecifes de designación especial en las aguas territoriales de Puerto Rico.
(4) El pago de tres dólares por los dueños de embarcaciones, adicional al pago de derechos de la renovación del marbete dispuesto en la Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986. Este pago se efectuará al momento de efectuar la renovación del certificado de numeración de la embarcación. El mismo se usará para la adquisición, mantenimiento e instalación de boyas de anclaje o cualquier otro marcador flotante dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley. Una vez, el Departamento haya cumplido con las obligaciones impuestas por esta Ley, y haya provisto para la conservación de las áreas de recuperación arrecifal y otras áreas debidamente identificadas y una reserva para el pago de los gastos operacionales del Programa, el Secretario, mediante aviso público, notificará a los dueños de embarcaciones de la eliminación o reducción del pago especial.

Estas partidas serán depositadas en el Fondo, sin que al final del año fiscal el sobrante no gastado de las asignaciones legislativas tengan que revertir al Fondo General, a tenor con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.

Artículo 9.-Multas Administrativas.-

El Secretario podrá imponer multas administrativas a cualquier persona por las siguientes:

(1) Extraer, remover, mutilar o de cualquier otro modo destruir o dañar cualquier arrecife de coral o comunidades coralinas o parte de éstos.
(2) Ofrecer en venta, permuta, donación o de cualquier otra forma traficar o disponer de un arrecife de coral vivo o muerto o parte de este vivo o muerto y organismos considerados atractivos para acuarios y peceras.
(3) Contaminar, depositar desperdicios sólidos o líquidos o utilizar cualquier sustancia química en un arrecife de coral y comunidades coralinas o parte de éste o en un ecosistema asociado al mismo como las praderas de yerbas marinas.
(4) Anclar, fijar, instalar o en cualquier otra forma detener una embarcación fuera de las boyas para anclaje en áreas que han sido identificadas mediante boyas de anclaje o cualquier otro marcador flotante o dentro de las áreas de designación especial, o áreas de recuperación arrecifal y áreas ecológicamente sensitivas que han sido debidamente identificadas, sin la autorización previa del Secretario.
(5) Sustraer, eliminar o dañar las boyas de anclaje y las boyas marcadoras que establezca el Secretario para delimitar las zonas de arrecife de coral.
(6) Pescar, o bucear en las áreas de recuperación arrecifal, reservas marinas y demás áreas debidamente identificadas sin contar con la previa autorización del Secretario.
(7) Rehusarse a cumplir con cualquier orden o resolución emitida por el Secretario conforme a las facultades y deberes que esta Ley le impone.
(8) Violar cualquiera de las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que al amparo de la misma de adopten.

Las multas administrativas no excederán de diez mil (10,000) dólares por infracción ni serán menores de quinientos (500) dólares. El Secretario podrá imponer, además una multa administrativa, el pago de una

suma razonable que satisfaga los costos incurridos por reparar cualquier tipo de daño que ocasione cualquier persona por infracciones a las disposiciones de esta Ley o los reglamentos aprobados en virtud de la misma.

El Secretario podrá incoar un recurso de interdicto o cualquier otro recurso legal disponible con el fin de impedir la violación de cualquier disposición de esta Ley o de cualquier orden o reglamento aprobado al amparo de la misma.

Artículo 10.-Excepciones.-

No obstante lo dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley, cualquier persona, previa la autorización del Secretario y siempre que cumpla con cualquier otra disposición de ley aplicable, podrá:

(1) Realizar estudios científicos o de cualquier otra índole y tomar muestras de coral vivo o muerto, o parte de éste u organismos asociados a estos, siempre que - tales estudios promuevan los propósitos de esta Ley y en particular la preservación, protección y mantenimiento de los arrecifes de coral y que no se ocasionen daños a los mismos.

(2) Remover o proteger cualquier especie de vida marina por enfermedad o contaminación para evitar así la propagación de enfermedades.

(3) Realizar exhibiciones, excursiones o demostraciones de carácter educativo o turístico en las áreas de recuperación arrecifal, reservas marinas y demás áreas debidamente identificadas, siempre que a juicio del Secretario, una vez éste examine cuidadosamente la solicitud, la misma no constituya peligro alguno para el recurso.

(4) Utilizar coral muerto por aquellos artesanos que estén registrados legalmente en el Registrado de Artesanos de la Compañía de Fomento Económico, que previo a la actividad de recoger la materia prima de las orillas de las playas públicas, soliciten, acepten y reciban el asesoramiento del personal capacitado del Departamento, en cuanto al tipo y clases de coral muerto que pueden ser tomados, trabajados y vendidos como piezas de artesanía. También se autoriza a la venta de los productos artesanales de coral muerto hechos en sus propios talleres siempre y cuando cumplan con lo dispuesto anteriormente.

Artículo 11.-Vigencia.-

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, previo estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1466, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1466 tiene como propósito establecer la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico"; establecer el propósito de la misma; autorizar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a poner en ejecución esta Ley; disponer sus deberes y facultades; establecer un Fondo Especial; establecer delitos y penalidades y para otros fines.

Esta medida fue objeto de un abarcador proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes. La medida propone establecer un programa amplio de protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral en Puerto Rico. Los arrecifes coralinos constituyen un valiosísimo recurso natural merecedor del mayor grado posible de protección por parte de nuestro ordenamiento. Constituyen las comunidades marinas tropicales más diversas desde el punto de vista biológico y aportan toda una serie de beneficios, tales como la protección de zonas costeras contra huracanes y tormentas, servir de base a otras comunidades costeras importantes como praderas marinas y bosques de manglar, proveer alimento y sustento económico a millones de personas, ser utilizados como áreas de desove y protección a numerosas especies comerciales de peces,

crustáceos y otros organismos marinos, constituir una reserva importante de diversidad genética y productos farmacológicos de aplicación biomédica y servir de áreas importantes de investigación, educación y recreación.

Por otro lado, los arrecifes coralinos muestran un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación ambiental y a la destrucción intencional o accidental de los mismos por la mano del hombre. La experiencia acumulada de varias décadas, demostrada a través de copiosa documentación científica, establece claramente que grandes extensiones de arrecifes coralinos en todo el mundo, incluyendo algunas áreas en las inmediaciones de nuestras costas, se han afectado negativamente a un ritmo acelerado, a veces al grado de su destrucción total, por la ausencia de mecanismos adecuados de protección, conservación y manejo de este importante recurso, con consecuencias desastrosas para nuestro medio ambiente y biodiversidad. Los efectos dañinos de la destrucción de arrecifes de coral en el medio ambiente marino han sido comparados con los efectos dañinos de la deforestación y la desaparición de bosques tropicales en el medio ambiente terrestre.

El P. de la C. 1466 contó con el aval de numerosas entidades ambientales públicas y privadas, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez, la Junta de Calidad Ambiental, el Programa "Sea Grant" de la Universidad de Puerto Rico, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre ("U.S. Fish and Wildlife Service"), el Departamento de Agricultura, el Consejo de Administración Pesquera del Caribe y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Con la aprobación de esta medida, se dota al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de un marco estatutario adecuado para establecer un abarcador programa de protección, conservación y manejo de nuestros arrecifes coralinos, para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ello tendrá un efecto positivo innegable sobre nuestros esfuerzos de conservación ambiental presentes y futuros, sobre todo a largo plazo.

Por las razones expuestas, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, luego del estudio y evaluación del P. de la C. 1466, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de dicha medida, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos Pagán González
Presidente
Comisión de Recursos Naturales,
Asuntos Ambientales y Energía

(Fdo.)
Roger Iglesias Suárez
Presidente
Comisión de Hacienda"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1544, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico existe un porciento considerable de facilidades turísticas de alojamiento que no son inventariadas por la Compañía de Turismo. En un estudio realizado por el Dr. José I. Alameda del Recinto

Universitario de Mayagüez se encontró que el cuarenta y cinco (45%) por ciento de las facilidades turísticas en la Región Noroeste de Puerto Rico están endosadas por la Compañía de Turismo. El cincuenta y cinco (55%) por ciento restante no cuenta con el endoso y no son incluidas en las ofertas ofrecidas por la Compañía.

En las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970 que creó la Compañía de Turismo se establece que esta deberá:

"Lograr un máximo de aprovechamiento de los recursos naturales y de las distintas regiones del país mediante una proporcionada distribución de las facilidades hoteleras y de los servicios turísticos", (Sección 671, inciso d) y "Hacer investigaciones científicas sobre el turismo potencial y su demanda, así como las facilidades de la industria puertorriqueña para atender sus demandas por servicios", (Sección 671, inciso e).

Estas funciones facultan a la Compañía de Turismo para recopilar sobre cuántas facilidades turísticas de alojamiento tenemos en Puerto Rico. Esta información permitirá tener una visión clara de la imagen que estamos proyectando, podrá utilizarse para conocer las necesidades de la industria en su totalidad y para ayudar en la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de categorizar e identificar nuestro producto turístico.

La intención legislativa aquí contenida es tener información para determinar la necesidad de establecer los requisitos mínimos con los que deben cumplir estas facilidades, la pertinencia de solicitar licencia para operar y establecer la necesidad de categorizar las distintas facilidades e identificar alternativas con el fin de aumentar nuestra competitividad con otros destinos.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que es necesario que se revisen y entiendan los parámetros de esta industria para poder fotalecerla y aumentar nuestro nivel competitivo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico y dichas facilidades clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales.

Sección 2.-La Compañía de Turismo deberá someter los resultados de sus investigación a la Asamblea Legislativa ciento veinte días después de aprobada esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1544 recomienda la aprobación de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 1544 ordena a la Comisión de Turismo realizar un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico y que clasifiquen por tipos de hospedería y cumplimientos con los permisos de las reglas de las agencias gubernamentales. Esta información permitirá tener una visión clara de la imagen que estamos proyectando y se podrá utilizar para conocer las necesidades de la industria en su totalidad. Además, esta información ayudará a determinar la necesidad de establecer requisitos mínimos con los que deben cumplir las facilidades turísticas, la pertinencia de solicitar licencia para operar y la necesidad de categorizar las distintas facilidades e identificar nuestro producto turístico.

El Ing. Carlos O. González Sánchez señaló que la Administración de Reglamentos y Permisos endosa la iniciativa legislativa ya que ésto permitirá que se tenga un inventario confiable de las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico. Añade que si se le ordena a la Agencia intervenir con los negocios que no tienen los permisos correspondientes ésta tomaría acción para el fortalecimiento de la infraestructura del país.

La Junta de Planificación en su ponencia, expresa que la Compañía de Turismo tiende a basarse en unos requisitos rigurosos para endosar instalaciones y darle promoción. Según éstos la información que se obtenga del inventario de negocios asociados a la actividad turística podrá servir para brindar opciones para la diversidad de clientela, identificar oportunidades de inversión y esfuerzos que ameriten apoyo, y adelantan el progreso en aspectos de importancia para el desarrollo de Puerto Rico. La Compañía de Turismo les ha informado que si al hacer el inventario, se encuentran facilidades de alojamiento que puedan ser endosadas por ellos, se abonaría a la meta para el año 2,000 de alcanzar la cifra de 16,000 habitaciones. Aunque actualmente la Compañía de Turismo está realizando un inventario de hospederías en la Región Oeste de Puerto Rico es necesario extender la labor a todas las regiones de Puerto Rico.

La Junta de Planificación recomienda que el estudio propuesto se dirija a esfuerzos para enlazar actividades complementarias al éxito del movimiento turístico en la zona metropolitana.

La profesora Yesmín Hernández, Directora del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Sagrado Corazón, en su ponencia respalda la iniciativa de la Comisión de Turismo y señala que en las estadísticas oficiales de la Compañía de Turismo del año fiscal 1996-1997 no se refleja información acerca de un 71% de los visitantes regulares y de los medios de alojamiento dónde se hospedan. Por esta razón, recomienda que la Oficina de Estadísticas y Estudios de la Compañía de Turismo realice un estudio respecto a las necesidades de los consumidores y sobre el desarrollo de nuevas opciones de alojamiento. También recomiendan la creación de un grupo de trabajo "task force" interagencial que defina las características de los medios de alojamiento necesario. Se evaluaría la capacidad financiera y gerencial de la empresa. Según la profesora Hernández, ésto nos permitirá ampliar el inventario de las facilidades elevando la calidad de alojamiento y así contribuir a la oferta turística de Puerto Rico. En cuanto a otros medios suplementarios de alojamiento, se estudiaría el medio legal para reglamentar y promover los mismos.

Se deberá llevar a cabo un plan en consulta con las comunidades y/o regiones para diversificar las atracciones turísticas. El Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad del Sagrado Corazón, destaca su dispoción para colaborar con dichos planes.

Otra persona que respondió a la petición de la Comisión de Turismo de la Cámara de Reperesentantes fue el Dr. José I. Alameda, Director Interino del Departamentos de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Este explica que el hecho de que no todas las facilitades turísticas de la Isla se encuentran endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, tiene repercusiones sobre la política pública, y la estrategia de promoción de la industria afectándose la promoción de la industria en la oferta de los servicios turísticos. Añade que para el 1997, en la región Oeste, el número de facilidades no endosadas llegaba a 81 unidades con un total de 1,274 habitaciones, comparada con 36 endosadas, con un total de 1,538 habitaciones. Los municipios con mayor número de facilidades no endosadas en Puerto Rico son Cabo Rojo, Lajas y Guánica con un 76.5% del total. El compromiso programático para el año 2,000 de llevar el número de habitaciones de 11,000 a 16,000 está basado prácticamente en la región metropolitana o en hoteles de lujo altamente caros.

Para el Dr. Alameda, una forma de abaratar el costo del turismo y fomentar el turismo interno y externo hacia las regiones oeste y este es tratando de conseguir el endoso de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para las facilidades no endosadas. De esta forma, opina que se fomentará el atractivo y la calidad en la oferta de los servicios turísticos.

La Ley de Incentivos Turísticos de 1993 provee una exención contributiva de un 90% para la Isla y de un 100% para Vieques y Culebra. Sin embargo, en municipios como Culebra, de las 26 casas de huéspedes que existen, sólo una, disfruta de este beneficio y está endosada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Esto le hace pensar al doctor Alameda que los dueños de las facilidades turísticas tienen poco conocimiento sobre los distintos beneficios ofrecidos para el sector turístico. Según éste, el incremento de las facilidades endosadas en el área oeste solamente, podría significar entre unos $6,000,000 a $8,000,000 adicionales en la economía de esta región. También opina, que las facilidades no endosadas, el Gobierno Municipal debería reglamentar, aunque de manera mínima ciertos aspectos de los servicios que ofrecen estas facilidades.

La Compañía de Turismo ha señalado que está realizando un inventario de las facilidades de alojamiento no endosadas en el área oeste y las está evaluando conforme al Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto Rico con el fin de identificar las que pueden ser endosadas. Expresaron además, que con respecto al cumplimiento con los permisos de otras agencias gubernamentales éstos se verifican en aquellas hospederías que le solicitan su endoso.

Es de gran importancia para Puerto Rico que se lleve a cabo este inventario de habitaciones, ya que el turismo y sus actividades tienen un impacto significativo en la economía del país. Es fundamental tener en cuenta la calidad y la diversidad de los ofrecimientos en las facilidades de alojamiento para fortalecer e incrmentar nuestro nivel competitivo. Aunque la Compañía de Turismo, está realizando un inventario sobre las facilidades de alojamiento en la región oeste, es necesario que se agilice y extender este trabajo a todas las regiones de Puerto Rico.

Por las razones antes expuestas la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 1544.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Enrique Rodríguez Negrón
Presidente
Comisión de Turismo, Comercio,
Fomento Industrial y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1820, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para gastos relacionados con mejoras a las facilidades deportivas y recreativas del Residencial San Fernando en el Distrito Representativo Núm. 4; autorizar la contratación del desarrollo de las obras y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para gastos relacionados con mejoras a las facilidades deportivas y recreativas del Residencial San Fernando en el Distrito Representativo Núm. 4.

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1888, la cual ha sido descargada de la Comisión de Educación y Cultura.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el Barrio Buenos Aires del municipio de Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nació en el Barrio Buenos Aires del municipio de Lares el día 27 de enero de 1920. Fue la sexta hija del matrimonio entre la señora Evangelista Sella y el señor Santiago Delgado. Cursó los grados elementales en una escuela de la comunidad y los grados intermedios en la zona urbana. Se graduó de la Escuela Superior Antonio de Jesús López en el municipio de Utuado en el 1938. Obtuvo el grado Normal en la Universidad de Puerto Rico. Continuó ampliando sus conocimientos, tomando cursos de manualidades en la misma Universidad de Puerto Rico y estudiando todos los veranos.

Inició sus labores como educadora en el Barrio Collores del municipio de Jayuya, en el programa conocido entonces como Industrias Nativas. Posteriormente obtuvo un traslado al barrio Castañer de Lares donde laboró durante un año.

Conoció al joven Antonio Pérez Serrano y contrajeron matrimonio en el año 1945. De esta unión nacieron dos hijas, Myrna y Nidza. Myrna posee su propio negocio y Nidza, siguiendo los pasos de su madre, trabaja como maestra en el Programa de Educación Especial.

Finalmente, fue nombrada como maestra de Industrias Nativas en la Segunda Unidad La América, donde pasa a enseñar Economía Doméstica por espacio de veintiocho (28) años.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el Barrio Buenos Aires del municipio Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella".

Sección 2.-El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispondrá para la celebración de un acto apropiado a efectuarse a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2102, el cual ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de lo Jurídico.

"LEY

Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación de la leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación; establecer definiciones; crear la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos; disponer sobre los poderes de ésta y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El propósito básico de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) es ocuparse de las funciones operacionales de la Junta de Planificación, aplicando y velando por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación.

Para el descargo eficiente y responsable de las leyes y reglamentos que administra ARPE, es necesario conferirle los instrumentos y mecanismos necesarios para procesar administrativa y judicialmente a los violadores de éstas.

Durante el 1996 se intervinieron trescientos cuarenta y tres (343) usos comerciales, a través del Programa Zona Libre de Drogas y Armas. En estas intervenciones, se detectaron doscientos setenta y cuatro (274) operaciones ilegales, o sea el ochenta (80%) por ciento de los usos comerciales intervenidos llevaban a cabo operaciones ilegales. En lo que va de 1997 se han intervenido ciento cuarenta y nueve (149) usos comerciales, hallándose setenta y seis (76) operaciones ilegales, lo que representa un cincuenta y un (51%) por ciento. Las violaciones encontradas van desde no poseer permiso de uso, permiso de uso para otra actividad hasta la intensificación del uso fuera de los parámetros del uso concedido.

La situación más alarmante de todas, y en torno a las cuales se requiere conferir al Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos los poderes que mediante la presente Ley se confieren, es la que envuelve el uso ilegal para llevar a cabo actividades que se relacionan con una alta incidencia criminal o con una conducta detrimental para la comunidad. Este es el caso de las barras clandestinas, y de negocios relacionados que se establecen en áreas residenciales.

Es notable el aumento que se ha estado registrando en las actividades ilegales, en detrimento de la sana y tranquila convivencia de los ciudadanos. No empece a que se intervienen con los usos ilegales, estos se repiten luego de unos días, pues ARPE no cuenta con un mecanismo que les permita embargar y confiscar la propiedad que se utiliza en las actividades intervenidas.

Entiende esta Asamblea Legislativa que este mecanismo definitivamente es un disuasivo para cualquier persona que realice una actividad sin tener los debidos permisos aprobados o que violente los límites de su permiso.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se adiciona un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.-

Serán deberes y facultades generales del Administrador y de la Administración, en adición a las que le son conferidas por esta Ley, o por otras leyes los siguientes:

(a) .....

(b) .....

.....

(z) El Administrador tendrá la facultad de confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, movimientos de tierra o planteamientos de terreno para urbanizar, negocios, oficinas que operen sin el debido permiso o cuyo permiso haya sido revocado o que haya excedido o alterado las condiciones impuestas en los permisos de uso o de construcción expedidos de conformidad con las leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación.

Un funcionario autorizado mediante delegación expresa del Administrador llevará a cabo la ocupación de la propiedad mediante Orden de un magistrado o tribunal competente.
La Ocupación podrá llevarse a cabo por el funcionario sin orden previa del Tribunal bajo las siguientes circunstancias:

1. cuando la ocupación se efectúa en virtud de una sentencia judicial;
2. cuando la propiedad a ocuparse haya sido utilizada en relación a la comisión del delito de operar o construir sin permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos a tenor con lo dispuesto en las definiciones del inciso z(a) y se esté operando un negocio o llevando a cabo actividades que envuelvan la venta, el expendio o el consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias controladas, de juegos de azar, de salón de entretenimiento de adulto o de salón de baile.

El funcionario bajo cuya autoridad se realiza la confiscación notificará dentro del término de quince (15) días siguientes a la ocupación mediante correo certificado con acuse de recibo el hecho de la ocupación de la propiedad y la tasación o valor de las propiedades ocupadas a las siguientes personas: aquellas personas que por las circunstancias, información y creencia el funcionario considere dueño, o aquellas a nombre de quien aparezca expedido el permiso de uso, construcción o rótulo revocado o alterado. En los casos de vehículos de motor se notificará además al dueño según consta en el Registro de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación haya presentado su contrato para ser archivado.

Dentro de los cinco (5) días de realizada la ocupación el funcionario autorizado realizará un inventario de toda la propiedad ocupada y notificará enviando copia del mismo al dueño o persona con derecho o interés en la misma.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de haber recibido la notificación original sobre confiscación, las personas afectadas podrán impugnar la misma mediante la radicación de una demanda contra el E.L.A. y el funcionario que autorizó la confiscación. Se emplazará al Administrador dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se recibió la notificación. El Administrador formulará sus alegaciones a los veinte (20) días de haber sido emplazado. Estos términos serán jurisdiccionales.

z (a)-Definiciones

1. Funcionarios Autorizados para Confiscar - Persona en quien el Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos haya delegado expresamente mediante Orden Administrativa la facultad para confiscar bienes en los predios, oficinas, o facilidades que operen en uso o construyan en violación a lo dispuesto por las leyes y reglamentos de planificación.
   El Funcionario así autorizado tendrá la custodia provisional de los bienes ocupados y tendrá la responsabilidad de entregar al dueño de la misma un inventario de la propiedad ocupada.
2. Depósito de la Propiedad Ocupada - La propiedad ocupada mediante el mecanismo establecido en este artículo será transferida por el funcionario autorizado a la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos que se crea más adelante, transcurridos quince (15) días de la notificación de la ocupación sin que las personas notificadas hayan radicado demanda de impugnación o transcurridos treinta (30) días desde el recibo de la notificación de la ocupación sin que el Tribunal haya ordenado la devolución de los bienes ocupados, por haberse prestado garantía a esos efectos. Cuando la Junta entienda que es necesario para la seguridad y protección de la propiedad ocupada, la misma podrá transferirse antes de transcurrir los términos señalados.

3. Operar o construir sin permiso - Para propósito de este Artículo será considerado un delito o actividad delictiva el que toda persona natural o jurídica, incluyendo firmas o corporaciones, por sí o en combinación con otros, a sabiendas o por negligencia, inicien o continúen con una construcción, edificación, instalen un rótulo o utilicen maquinaria para levantar una estructura o edificación, o realicen movimientos de tierra o planteamientos de terrenos, con el propósito de urbanizar sin el debido permiso o cuando su permiso haya sido revocado o alterado o cuando opere cualquier uso en violación a las disposiciones de las leyes y reglamentos de planificación o cuando se alteren o excedan de los parámetros o condiciones impuestas en el permiso concedido, cometerán delito menos grave y convictos que fueren serán sancionados con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa máxima de quinientos (500) dólares por infracción cometida o por día de violación o ambas penas a discreción del Tribunal. Si opera un uso o construye en violación al permiso emitido o si excede o altera las condiciones que se le requirieron observar en el mismo, le será revocado el permiso por un término de seis (6) meses si es convicto una primera ocasión.
4. Propiedad Objeto de Confiscación - Propiedad mueble incluyendo pero sin limitarse a herramientas, maquinaria y equipo de construcción, equipo de oficina incluyendo aparatos electrónicos, letreros, dinero en efectivo, máquinas de refrigeración, equipo de oficina y vehículos de motor, que sea utilizada en relación con la comisión del delito de operar o construir sin permiso o en violación al permiso de uso o construcción, podrá ser confiscada de acuerdo con el procedimiento establecido en este Artículo.

z (b) - Junta de Confiscaciones

Se crea la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos que será el organismo encargado de custodiar y disponer de las propiedades que adquiera la Administración mediante el procedimiento de confiscación establecido en este Artículo.

La misma estará compuesta por el Administrador, quien ejercerá el cargo de Presidente, el Director de la Oficina de Finanzas, y un tercero que será designado por el Administrador quien podrá ser un ciudadano del interés público. El Presidente nombrará con aprobación de la Junta a un Director Ejecutivo, este funcionario realizará por virtud de delegación las funciones que la Junta y el Presidente determinen. El Director Ejecutivo nombrará a los funcionarios y empleados necesarios para llevar a cabo los propósitos de este Artículo.

Los nombramientos que realice el Director deberán realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley de Personal y el Reglamento de la Agencia. Estos empleados tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás empleados de la Administración de Reglamentos y Permisos.

z (c)- Poderes de la Junta

1. La Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos tendrá los mismos poderes, atribuciones y deberes que posee la Junta de Confiscaciones adscrita al Departamento de Justicia mediante la Ley Núm. 93 de 13 de junio de 1998, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1998".

z (d)-Disposición de la Propiedad Ocupada, Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos

La Junta será responsable de custodiar la propiedad ocupada previa su disposición, velando que dichos bienes se mantengan en buen estado y no sean objeto de robo o vandalismo. De ser devueltos dichos bienes a su dueño original, la Junta será responsable a éste por el deterioro sufrido durante el período de custodia por parte de dicha Junta.

La Junta, una vez transfiera la propiedad por el funcionario autorizado, podrá disponer de la misma a tenor con los reglamentos que apruebe para estos fines.

Los fondos provenientes de la venta o transferencia de la propiedad confiscada mediante este

mecanismo ingresarán al Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos creado por el Artículo 13 de esta Ley y serán contabilizados sin año fiscal determinado.

El Administrador podrá autorizar los recursos provenientes de este mecanismo para todos los fines y propósitos autorizados por esta Ley.

z (e) -Confiscación de Vehículos de Motor

Para la confiscación y disposición de vehículos de motor se seguirá el procedimiento establecido por la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada."

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1041, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Municipales.

"LEY

Para enmendar el Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de establecer una multa administrativa fija y obligatoria a cualquier municipio, funcionario o empleado municipal o miembro de la Junta de Subastas que no cumplan con los procesos establecidos para la adjudicación de obras, compras, servicios, subasta y contratos de arrendamientos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estados Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", se aprobó a fin de otorgarle a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que pudieran atender cabalmente sus responsabilidades. Según establece la misma, la delegación de responsabilidades le brinda a la ciudadanía una mayor intervención en los actos y decisiones que toma el primer ejecutivo y empleados municipales. Por lo tanto, resulta obligatorio exigirle a los alcaldes, funcionarios y empleados municipales el cumplimiento de todas aquellas funciones inherentes a su cargo dentro de un marco de referencia de sana administración pública.

En adición, dentro del esquema anteriormente expuesto, se otorgó a los municipios la autonomía administrativa necesaria para atender sus tareas y asumir nuevas funciones mediante delegación del Gobierno Central. De igual manera, se proveyó para que se pudiesen utilizar su iniciativa, dentro del correspondiente marco legal, para que pudieran ofrecer los servicios más asequibles a sus ciudadanos.

No obstante, es de conocimiento general, que dentro de este propósito autonómico que establece la Ley, en ocasiones algunos funcionarios o empleados no cumplen con los requisitos para establecer contratos de compraventa de materiales, de servicios u obras, de arrendamiento y adjudicación de subastas. Esto, a pesar de que se autoriza en el Artículo 19.012 al Comisionado de Asuntos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a establecer potestativamente multas administrativas de hasta cinco mil (5,000) dólares por incurrir en violaciones a las leyes y reglamentos adoptados para la contabilización de ingresos, desembolsos municipales, custodia, control y cuidado de la propiedad municipal.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario enmendar la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, a fin de establecer una multa administrativa, fija y obligatoria, a los funcionarios municipales que no cumplan con los procesos establecidos de adjudicación de contratos de compra de materiales, servicios u obras, así como los contratos de arrendamiento. De esta manera, los municipios, empleados y funcionarios municipales se verán en la obligación de cumplir a cabalidad con dichas normas, todo ello con el fin de lograr una mejor y más sana administración fiscal en los municipios de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se adiciona un inciso (g) al Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 19.012.-Multas Administrativas.-

(1) El Comisionado impondrá y cobrará una multa administrativa que no será mayor de cinco mil (5,000) dólares, previa notificación y vista, a cualquier municipio, funcionario, empleado municipal o miembro de la Junta de Subastas que:

(a) . . .

(g) Otorgue contrato de compraventa, servicios, obras, arrendamiento o adjudique cotizaciones o subastas, sin cumplir con el procedimiento establecido a tales efectos."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Vivienda y Asuntos Urbanos de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2181, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales, de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2168, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? no habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos también que se incluya en el Calendario el Proyecto de la Cámara 1881, Proyecto de la Cámara 1926, Proyecto de la Cámara 1911, Proyecto de la Cámara 1962, Proyecto de la Cámara 1936, Proyecto de la Cámara 497, Proyecto de la Cámara 1338.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2037, 2121 y 2122.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2181, el cual ha sido descargado de las Comisiones de Vivienda y de Asuntos Urbanos e Infraestructura.

"LEY

Para autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a conceder asistencia relacionada al Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, a cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad gubernamental, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura"; disponer y recibir cualquier asistencia financiera o fondos federales, estatales, municipales o privados; e incluir los proyectos desarrollados bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro", en la definición de infraestructura del inciso (i) del Artículo 3 de la Ley Núm. 44, antes citada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 21 de septiembre de 1998, la Isla de Puerto Rico recibió el embate del Huracán Georges, el cual afectó a su paso la totalidad de la Isla. El Gobernador de Puerto Rico, mediante Proclama, declaró la existencia de un estado de emergencia. Posteriormente, y en respuesta a la solicitud presentada por el Gobierno de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos declaró a la Isla Zona de Desastre, por lo que se comenzó con un plan de recuperación con la participación de las entidades federales y estatales. La magnitud del desastre ocasionado por el Huracán Georges, requirió que todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico atendieran con premura y efectividad sus áreas de competencia a fin de asegurar la recuperación de la Isla en el menor tiempo posible.

El paso del Huracán Georges dejó una secuela de devastación en todos los órdenes de la vida de nuestro Pueblo. El sector de la vivienda no fue la excepción. Cientos de familias quedaron desprovistas de sus hogares, ya que sobre 50,000 unidades de vivienda fueron severamente afectadas o destruidas. Es un interés genuino y apremiante del Estado que cada familia que perdió su hogar, como consecuencia de este fenómeno atmosférico, regrese lo antes posible al curso normal de su vida y que, además, pueda tener, de forma definitiva, una vivienda segura.

Este interés del Gobierno de Puerto Rico ha hecho necesario la creación de un organismo interagencial que coordine los esfuerzos de recuperación en el área de vivienda. A tales efectos, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE-1998- 35, que creó un Grupo de Trabajo Interagencial, llamado Grupo: Nueva Vivienda Segura. Este Grupo tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar el Programa "Nuevo Hogar Seguro" para la construcción de nuevas viviendas permanentes como reemplazo a aquellas severamente dañadas o destruidas por el Huracán Georges mediante la consolidación de fondos y recursos federales, estatales y privados destinados a esos efectos.

En consecución de los objetivos de la mencionada Orden Ejecutiva, el Grupo Interagencial está autorizado a utilizar los recursos de otras agencias gubernamentales para agilizar la construcción de viviendas bajo esta iniciativa. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura posee la experiencia y los conocimientos esenciales para garantizar el éxito de esta importante encomienda del Gobierno de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a conceder asistencia relacionada al Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, a cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad gubernamental de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura". Asimismo, se autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a recibir cualquier asistencia financiera o fondos federales, estatales, municipales o privados con relación al Programa "Nuevo Hogar Seguro", cuyos proyectos se entenderán comprendidos en la definición de infraestructura del inciso (i) del Artículo 3 de la Ley Núm. 44, antes citada.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2168, el cual ha sido descargado de la Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales.

"LEY

Para eximir del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los constructores y a los proyectos de viviendas desarrollados a través del Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 21 de septiembre de 1998, la Isla de Puerto Rico recibió el embate del Huracán Georges, el cual afectó a su paso la totalidad de la Isla, dejando una secuela de devastación en todos los órdenes de la vida de nuestro Pueblo. El sector de la vivienda no fué la excepción. Cientos de familias quedaron desprovistas de sus hogares, ya que sobre 50.000 unidades de vivienda fueron severamente afectadas o destruídas.

Por tal motivo, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE-1998-35, el cual creó un Grupo de Trabajo Interagencial, llamado Grupo: Nueva Vivienda Segura. El grupo tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar el Programa "Nuevo Hogar Seguro". Dicho Programa tiene como objetivo desarrollar y construir 50,000 unidades de vivienda de manera que cada familia que perdió su hogar, regrese lo antes posible al curso normal de su vida.

A fin de desarrollar y construir dichas viviendas en el menor tiempo y al menor costo posible, estarán exentos del pago de arbitrios municipales, los constructores y todo proyecto de construcción o rehabilitación de viviendas bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro", para las familias damnificadas. Por la presente ley se exime los antes mencionados, de cualquier arbitrio de construcción que pueda imponer cada municipio dentro de sus límites territoriales a tenor con el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se exime, durante el período de tiempo, el cual no excederá de cinco (5) años, que dure la fase de construcción de nuevas viviendas como reemplazo a aquellas severamente dañadas o destruidas por el Huracán Georges, a los constructores y a la construcción de hogares bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro", del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1881, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de disponer que se inspeccione cada uno de los establecimientos e instituciones consignará dicha cantidad para el cuidado de niños licenciados por el Departamento de la Familia, no menos de dos (2) veces al año.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, establece el sistema para el licenciamiento y supervisión de instituciones que se dedican al cuidado de niños.

La misma, dispone que el Departamento de la Familia es la única agencia autorizada para expedir licencias a todo establecimiento que se dedique al cuidado de niños en Puerto Rico. En virtud de dicha autorización, el referido Departamento tiene la facultad para promulgar los reglamentos necesarios para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley.

La inspección periódica de estas instituciones es de óptima urgencia ya que las medidas adecuadas de higiene y de seguridad, entre otras, tienen que prevalecer en todo momento.

Es así ya que se trata primordialmente del cuidado de infantes y de niños de edad pre escolar, los cuales por su misma naturaleza son excesivamente propensos tanto al contagio de enfermedades como a sufrir accidentes desafortunados.

Cualquier descuido en las condiciones de salubridad, de seguridad y en la atención que se dispensa puede acarrear graves consecuencias.

La Ley Núm. 3, supra provee para inspecciones cuando el Departamento de la Familia "lo creyere necesario". No obstante, la Asamblea Legislativa conciente de su responsabilidad de proteger a nuestros niños, considera que las inspecciones deben ser periódicas y nunca menos de dos (2) al año por institución o establecimiento licenciado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 4.-El Departamento, por conducto de sus representantes autorizados, deberá inspeccionar cada uno de los establecimientos e instituciones para el cuidado de niños existente en Puerto Rico, no menos de dos (2) veces al año, con el propósito de cerciorarse de que los mismos están funcionando de conformidad con las disposiciones de las secs. 1. et. seq. de esta Ley y las reglas y reglamentos promulgados al amparo de las mismas."

Artículo 2.-Se le asignarán de los fondos no comprometidos del tesoro estatal la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares a fin de cumplir con los propósitos de esta Ley. En años subsiguientes se consignará dicha cantidad en el Presupuesto General de Gastos del Departamento de la Familia.

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 1881, tiene a bien recomendar la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

En El Título:

Página 1; eliminar su contenido y sustituir por el siguiente texto para que lea como sigue:
"Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 del 15 de febrero de 1955, según enmendada, para disponer que todo establecimiento o institución dedicada al cuido de niños autorizado por el Departamento de la Familia sea inspeccionado por dicho Departamento no menos de dos (2) veces al año."

En El Decrétase:

Página 2,
líneas 9 a la 12; o eliminar todo su contenido
Página 2, líneas 13; eliminar "Artículo 3" y sustituir por "Artículo 2"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1881 pretende enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 del 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de disponer que se inspeccione cada uno de los establecimientos e instituciones dedicadas al cuido de niños no menos de dos (2) veces al año.

La Exposición de Motivos de la medida dispone que bajo la Ley Núm. 3 del 15 de febrero de 1955, según enmendada, la única agencia autorizada a expedir licencias a los establecimientos dedicados al cuido de niños es el Departamento de la Familia. Al amparo de dicha delegación, el Departamento tiene la facultad para establecer por vía de reglamentación las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha ley.

El que se establezca un mecanismo que asegure una inspección periódica de dichos establecimientos es de suma urgencia para así garantizar la higiene y seguridad de nuestros niños.

Para la evaluación de dicha medida se contó con las ponencias de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, el Departamento de Salud y del Departamento de La Familia.

La Oficina de Presupuesto y Gerencia expone en su ponencia que el propósito de la medida aunque loable, se estaba cumpliendo ya por el Departamento de la Familia en sus evaluaciones a dichos centros. Por su parte el Departamento de Salud endosó la medida, recomendando que se dispusiera de fondos para dicha medida y se ampliara la orientación sobre la importancia de que los centros de cuido estén debidamente licenciados y que se incentive un mayor flujo de información para que los padres hagan una mejor selección.

El Departamento de Familia por su parte endosó la medida ya que establece un mínimo de inspecciones, lo que hace que se garantice que todo centro sea inspeccionado. Nos explica también, que la Oficina de Licenciamiento ha establecido que se visiten los centros de cuido de niños por lo menos cuatro veces al año, dicha meta fue cumplida y sobrepasada en el año fiscal 1994-95, salvo en el año fiscal 1996-97 en que llegó a un 93%.

Por otro lado, nos explica el Departamento que el número de visitas a los establecimientos depende esencialmente del recurso humano con que cuenta la agencia. Hay una correlación entre el número de visitas, la disponibilidad del recurso humano y la calidad de los servicios que se le prestan a los niños. Por tal motivo recomiendan que se le asignen recursos fiscales adicionales para que se pueda implementar de forma idónea con lo dispuesto en esta medida.

Según la información suministrada por dicho Departamento se desprende que hay alrededor de 1,951 centros de cuidado de niños licenciados en Puerto Rico. Generalmente, estos centros son evaluados, por lo menos cuatro veces al año. En ocasiones, dependiendo de si existen o no irregularidades, se efectúan un mayor número de inspecciones. Todo esto con los fondos existentes en el Departamento, por lo que podemos inferir que estableciendo un mínimo de dos visitas no se impone al Departamento de Familia una carga económica que no pueda sufragar con el presupuesto actual, por lo tanto resulta innecesario el asignarle

fondos adicionales para la implementación de esta medida.

Por todo lo anteriormente expuesto vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación del P. de la C. 1881 con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Hon. Norma Carranza
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1926, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, y de Educación y Cultura, sin enmiendas.

"LEY

Para declarar la primera semana de diciembre de cada año como la "Semana del Trovador Puertorriqueño"; facultar al Gobernador de Puerto Rico a que mediante proclama anual, exhorte al pueblo a organizar y patrocinar actividades propias durante este tiempo y para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y los organismos y entidades públicas y los municipios en Puerto Rico adopten las medidas necesarias para la conmemoración de esta semana y para la promoción de la participación de la ciudadanía y las entidades privadas en estas actividades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los trovadores puertorriqueños son parte importantísima de la historia y cultura de Puerto Rico, siendo los juglares épicos que han subsistido hasta nuestra época.

El pueblo de Puerto Rico se siente orgulloso de sus trovadores, quienes con sus voces y sus habilidades de composición e improvisación han mantenido nuestras raíces vivas, por lo que merecen nuestra admiración y reconocimiento y que se estimule a la juventud puertorriqueña a que sigan sus pasos y se perpetúe esta manifestación musical nuestra.

Se hace necesario separar una semana al año en forma particular, para concentrar los esfuerzos de promover la trova puertorriqueña mediante la celebración de actividades por el gobierno y el pueblo de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se declara la primera semana de diciembre de cada año como la "Semana del Trovador Puertorriqueño" en Puerto Rico, con el propósito de conmemorar y promocionar la participación de la ciudadanía particularmente durante dicha semana en las actividades en reconocimiento a las aportaciones musicales de los trovadores.

Artículo 2.-El Gobernador de Puerto Rico, mediante proclama al efecto, exhortará anualmente al pueblo puertorriqueño a que manifieste su admiración y respaldo y rindan éste merecido homenaje a los trovadores puertorriqueños, mediante la organización y patrocinio de las actividades propias de la declaración y la conmemoración durante la primera semana del mes de diciembre como la Semana del Trovador Puertorriqueño, en reconocimiento a la aportación artístico-histórica y cultural de los trovadores en Puerto Rico y promover esta actividad artística.

Artículo 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, así como los organismos y las entidades públicas y los municipios en Puerto Rico, adoptarán las medidas que sean necesarias para la consecución de los objetivos de esta ley, mediante la organización y celebración de actividades para la conmemoración y promoción de esta manifestación artística en la "Semana del Trovador Puertorriqueño". Se promoverá igualmente la participación de la ciudadanía y de las entidades privadas en estas actividades.

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P. de la C. 1926, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de P. de la C. 1926, es para declarar la primera semana de diciembre de cada año como la "Semana del Trovador Puertorriqueño"; facultar al Gobernador de Puerto Rico a que mediante proclama anual, exhorte al pueblo a organizar y patrocinar actividades propias durante este tiempo y para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y los organismos y entidades públicas y los municipios en Puerto Rico adopten las medidas necesarias para la conmemoración de esta semana y para la promoción de la participación de la ciudadanía y las entidades privadas en estas actividades.

Se hace necesario separar una semana al año en forma particular, para concentrar los esfuerzos de promover la trova puertorriqueña mediante la celebración de actividades por el gobierno y el pueblo de Puerto Rico.

El pueblo de Puerto Rico se siente orgulloso de sus trovadores, quienes con sus voces y sus habilidades de composición e improvisación han mantenido nuestras raíces vivas, por lo que merecen nuestra admiración y reconocimiento y que se estimule a la juventud puertorriqueña a que sigan sus pasos y se perpetúe esta manifestación musical nuestra.

Los trovadores puertorriqueños son parte importantísima de la historia y cultura de Puerto Rico, siendo los juglares épicos que han subsistido hasta nuestra época.

En reunión ejecutiva celebrada las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y Educación y Cultura, luego de estudio y análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuestas, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1926 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Carmen Luz Berríos Rivera
Presidente
Comisión de Educación y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1911, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (a) de la Sección 6 y adicionar nuevas Secciones 12 y 13, a la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de establecer un costo total por la otorgación de la licencia a establecimientos de cuido de niños de acuerdo a la capacidad del servicio, que acompañará cada solicitud de autorización provisional, especial y de licencia y crear el Fondo Especial Independiente. Para ordenar al Departamento de la Familia, publicar, en los rotativos de mayor circulación del país, la lista de establecimientos a los cuales se le ha expedido la licencia correspondiente y están operando y establecer un sistema de multas cuando el establecimiento no cumpla con alguno de los requisitos establecidos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, estableció un sistema para el licenciamiento y supervisión de instituciones privadas que se dedican al cuidado de niños.

La Ley Núm. 3, supra, dispone que el Departamento de la Familia es la única agencia autorizada para expedir licencias a todo establecimiento que se dedique al cuidado de niños en nuestro país. En virtud de dicha autorización, el Departamento tiene la facultad para promulgar los reglamentos necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 3, supra.

Los reglamentos promulgados para la concesión de autorizaciones y licencias a los establecimientos para el cuidado de niños, deben especificar los requisitos necesarios para que dichos establecimientos puedan obtener las autorizaciones y licencias correspondientes. Señalamos, entre otros, los recursos económicos disponibles para ofrecer el servicio, facilidades físicas, equipo, materiales, condiciones sanitarias, medidas de seguridad contra incendios, medidas de salud, edades de los niños que pueden admitirse y referencia sobre el número y preparación del personal que presta servicios en el establecimiento.

Las exigencias económicas de los cambios sociales que experimenta nuestra dinámica sociedad, ocasiona que algunos padres se confronten con el problema de, quién cuidará sus hijos de menor edad durante el transcurso de sus horas laborables.

A tales efectos surge la demanda de estos servicios, y se comienzan a proliferar los establecimientos de cuidado que no necesariamente cumplen con las normas más adecuadas de higiene, atención y seguridad. Según hemos indicado el Departamento de la Familia tiene la responsabilidad ministerial de inspeccionar y licenciar aquellos establecimientos que reúnen los requisitos aceptables para el cuidado de niños menores de edad. El problema surge cuando ese listado de establecimientos licenciados para operar no se promulga para conocimiento y beneficio de la comunidad general. La publicación de esta información constituye un servicio público esencial, tanto para los miembros de nuestra fuerza laboral, como para los niños que son nuestra máxima prioridad.

Con el propósito de subvencionar los costos requeridos para mantener el directorio de establecimientos licenciados al día y para costear los gastos de publicar la información necesaria al respecto, se establece un costo que dependerá de la capacidad de servicio de cada institución que acompañará cada solicitud, a saber: para autorización provisional, especial, y la licencia propiamente para operar los establecimientos de cuidado de niños. El Departamento de la Familia establecerá, además, un sistema de multas cuando el establecimiento no cumpla con alguno de los requisitos establecidos.

La Asamblea Legislativa, consciente de su responsabilidad de velar por el bienestar y la protección de nuestros niños, considera necesario que el Departamento de la Familia, publique información recopilada en su directorio o registro, sobre los establecimientos de cuidado de niños debidamente autorizados, existentes en el país. La aprobación de esta medida será de gran beneficio para nuestras familias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 6 de la Ley Núm. 3 de 15 febrero de 1955, según enmendada, para que lea como sigue:

"Sección 6.-Autorización provisional, concesión, renovación, denegación, suspensión o cancelación de licencias

(a) Autorización provisional.-El Secretario o su representante autorizado podrá expedir una autorización provisional para iniciar los servicios a todo establecimiento de nueva creación que solicite licencia, una vez éstos hayan cumplido con los requisitos mínimos establecidos por las secs. 1 et seq. de esta Ley y sus reglamentos. La autorización provisional se expedirá por un término no mayor de seis (6) meses al cabo del cual, de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por las secs. 1 et seq. de esta Ley y por los reglamentos aplicables, se le otorgará la licencia solicitada. De no cumplir con los requisitos establecidos por los reglamentos y la Ley, el Departamento de la Familia impondrá multas ya establecidas que irán de acuerdo a la severidad de la violación y/o cierre del establecimiento si así lo considera pertinente para garantizar el bienestar de nuestros niños. Cuando se trataré de un campamento que no tenga una estructura fija como tal, que lleve a cabo sus actividades por un período corto de tiempo en cualquier época del año, el Secretario otorgará una autorización especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos dispuestos en las secs. 1 et seq. de esta Ley. Toda solicitud, tanto de autorización provisional y especial, como de licencia vendrá acompañada de un costo que dependerá de la capacidad de servicio de cada institución."

Artículo 2.-Se adiciona una nueva Sección 12 a la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que lea como sigue:

"Sección 12.-El Departamento publicará información sobre los establecimientos de cuidado de niños, que aparecen registrados en sus archivos, a los cuales les ha expedido la autorización provisional, especial y la licencia para operar como centros de cuidado de niños.

La publicación consistirá de la siguiente información:

(1) Nombre del establecimiento de cuidado del niño;
(2) dirección y ubicación del mismo;
(3) status de la licencia del auspiciador.

El Departamento será responsable de hacer los arreglos pertinentes para que la publicación sobre los centros de cuidado de niños se haga a través de dos rotativos de mayor circulación del país, la cual se realizará dos (2) veces al año durante los meses de julio y diciembre, respectivamente."

Artículo 3.-Se adiciona una nueva Sección 13 a la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que lea como sigue:

"Sección 2.-El Departamento de la Familia, creará un Fondo Especial Independiente donde se depositarán los fondos obtenidos por concepto del costo que acompañará cada solicitud de autorización provisional, especial y de licencia. Los fondos depositados en dicho Fondo Especial Independiente serán utilizados prioritariamente para pagar las publicaciones de los listados de establecimientos de cuidado de niños que están activos y debidamente licenciados y luego para mantener el registro o directorio al día.

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 1911 recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas:

En La Exposición de Motivos:

Página 1, segundo párrafo, línea 1;	eliminar "La Ley Núm., supra," y sustituir por "Dicha ley".
Página 1, segundo párrafo, líneas 3 y 4;	eliminar "la Ley Núm., supra." y sustituir por "esta ley."
Página 2, quinto párrafo, líneas 3 y 4;	eliminar "información recopilada en su directorio o registro, sobre los establecimientos de cuidado de niños debidamente autorizados, existentes en el país." y sustituir por "la información sobre los establecimientos de cuidado de niños debidamente autorizados por dicha agencia."

En El Decrétase:

Página 3, línea 10;	añadir luego de "impondrá", "las", luego de "multas" eliminar "ya" y sustituir por "según". Luego de "establecidas", añadir "por ésta,".
Página 3, línea 17;	añadir luego de "licencias" y renovación de éstas,"
Página 3, línea 18;	luego del "." añadir "Se faculta al Secretario del Departamento de Familia a establecer por vía de reglamento los criterios a tomarse en consideración para establecer la cuantía a cobrarse por éstas."

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1911 tiene el propósito de establecer un mecanismo para que el Departamento de la Familia pueda cobrar por el otorgamiento de autorizaciones, renovaciones, autorizaciones provisionales y licencias. Los fondos obtenidos de dichos permisos serán destinados a un fondo especial para cubrir los gastos de publicación en dos periódicos de circulación general de los establecimientos debidamente autorizados por la agencia.

La Exposición de Motivos de esta pieza legislativa establece que bajo la Ley Núm. 3 del 15 de Febrero de 1955, según enmendada, la única agencia autorizada a expedir licencias a los establecimientos dedicados al cuido de niños es el Departamento de la Familia. Al amparo de dicha delegación, el Departamento tiene la facultad para establecer por vía de reglamentación las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha ley. Dicha ley establece los procedimientos de licencias, autorizaciones provisionales, renovaciones y otras.

Con el propósito de subvencionar los costos requeridos para mantener el directorio de establecimientos licenciados al día y para costear los gastos de publicar la información necesaria al respecto, se establece una tarifa que dependerá de la capacidad de servicio de cada institución.

En la ponencia de Departamento de la Familia, esta agencia expone que en su esencia endosa el propósito básico de la medida de cobrara por la expedición de los permisos. Sin embargo expresó que en su plan de reingeniería de la Oficina de Licenciamiento, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva del Gobernador Núm. OE-1993-40, se facultará a cobrar por la expedición de los permisos necesarios para operar los establecimientos de cuido de niños. Los criterios de este plan para establecer la tarifa a cobrarse son unos basados en la capacidad de servicios de dichos establecimientos. Dicha recomendaciones fueron acogidas positivamente por esta Comisión.

Por todo lo antes expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación del P. de la C. 1099, según enmendado.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Norma Carranza De León MD
Presidenta
Comisión de Salud y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1962, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar la Regla 46 de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, a los efectos de establecer que los términos que se calculen a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden, comenzarán a correr a partir del depósito en el correo de la notificación de la sentencia cuando esta fecha sea distinta a la del archivo en autos de la sentencia u orden del tribunal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Regla 46 de las de Procedimiento Civil establece lo relacionado a la notificación y registro de sentencias.

La referida regla impone al secretario del tribunal la responsabilidad de notificar a la brevedad posible las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la notificación de la sentencia y de la constancia de la notificación.

La inobservancia de la regla por parte del Secretario del Tribunal afecta el cumplimiento con la reglas concernientes a los términos apelativos que comienzan a correr a partir de la fecha del archivo en autos.

El Tribunal Supremo en los casos de Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82 (1962) y Rodríguez Negrón v. Morales García, 105 D.P.R. 877 (1977) señaló que la tardanza en la notificación no derrotará el derecho a apelar. Sin embargo, el Tribunal subordinó a la discreción de los tribunales apelativos el remedio a ser concedido, caso a caso.

Estas decisiones del Tribunal Supremo, en la práctica, tienen el resultado de reducir los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil en cuanto a términos apelativos que corren a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Esto es así porque la mayor parte de los abogados no arriesgarán los derechos de sus clientes y someten los recursos contando los términos a partir de la fecha de archivo en autos, aunque esta difiera de la de su notificación por correo por 3, 4 10 y hasta 15 días.

Esta situación afecta el debido proceso de ley que tienen las partes para presentar sus recursos apelativos que dicho sea de paso, requieren preparación de escritos que deben ser hechos cuidadosamente. No debe estar a discreción de los tribunales apelativos si hubo o no justificación para que una parte no cuente el término a partir del archivo en autos de copia de la notificación, pues de esta forma se premia la inobservancia de las reglas y las partes quedan a merced de la interpretación que haga el tribunal.

Esta enmienda intenta resolver el gran problema que enfrentan los abogados, y asegura el cumplimiento cabal de las reglas y los términos que en ley se tienen para presentar recursos apelativos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda la Regla 46 de las de Procedimiento Civil para que lea como sigue:

"Regla 46.-

Será deber del secretario notificar a la brevedad posible dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y el término para apelar empezará a correr a partir de la fecha de dicho archivo. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia u orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo."

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días luego de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y evaluación del P. del C. 1962, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas.

En El Texto:

Página 2, línea 10 Después de "sentencia" insertar ", resolución"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1962, tiene por objeto enmendar la Regla 46 de Procedimiento Civil de 1979, a los efectos de establecer que la fecha de archivo en autos de la notificación de cualquier sentencia, resolución u orden será la fecha de depósito en el correo. Esto es así ya que la enmienda que practica esta medida dispone que si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden es distinta a la fecha de la puesta en el correo de la notificación, prevalecerá esta última fecha.

En este informe se practica una enmienda técnica que consiste en añadir la palabra "resolución" en el texto de la medida, que por inadvertencia se omitió, ya que en el título de la medida se incluye.

Es la intención legislativa que todos los términos que apliquen a sentencias, resoluciones y órdenes de los tribunales efectivamente empiecen a correr **desde la fecha del depósito del sobre conteniendo la notificación en el United States Postal Service**; esto significa que **no se considerará depósito en el correo la fecha del metro de correspondencia del tribunal, sino la fecha del matasellos del correo federal**, si es que el correo le impone una fecha diferente a la del metro de correspondencia.

Esta medida fue endosada por el Departamento de Justicia, por el Colegio de Abogados y la Asociación de Notarios, como una medida de justicia para evitar que los términos para tomar alguna acción procesal ante el tribunal de instancia no ante foros apelativos, transcurran en todo o en parte, y se prive así de las partes de su derecho a las acciones de que se trate. El debido procedimiento de ley establecido por las enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos y de la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico así lo requiere.

Por todos los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado tiene el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 1962 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1936, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (c) y añadir el subinciso (8) al Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; enmendar el Artículo 18.010 y el Artículo 18.020; añadir el inciso (3) y renumerar los incisos (3), (4), (5) y (6) como (4),(5),(6) y (7) en el Artículo 18.030; añadir los incisos (3) y (6) y renumerar los incisos (3) y (4) como (4) y (5) en el Artículo 18.040; añadir el inciso (3) en el Artículo 18.050; enmendar el Artículo 18.060; enmendar los incisos (1), (2) y (4) del Artículo 18.070; enmendar los incisos (1) y (3) del Artículo 18.090; enmendar el Artículo 18.100; y el Artículo 18.120 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de permitir que el cargo por seguros autorizado se incluya; y disponer la garantía adicional por cualquier deuda con arreglo a o en relación con un préstamo específico u otra transacción de crédito el seguro por desempleo involuntario de crédito, además del seguro de vida de crédito y el seguro de incapacidad de crédito; disponer que dichos seguros podrán ser ofrecidos después que el préstamo haya sido aprobado; disponer que el Comisionado de Instituciones Financieras someta un informe sobre los efectos de esta Ley; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente legislación tiene el propósito de enmendar la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños", y el Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", para que se contemple dentro sus disposiciones el seguro de desempleo involuntario de crédito y a los fines de permitir que, a opción del prestatario, se puede ofrecer y cobrar el seguro por desempleo involuntario de crédito, para cubrir los plazos al descubierto del préstamo en la eventualidad de desempleo involuntario del prestatario. Este seguro sería en complemento al seguro de vida de crédito e incapacidad de crédito, los cuales son los únicos permitidos en la Ley.

Las instituciones que ofrecen préstamos personales pequeños regularmente reciben como clientes al grupo poblacional de limitados recursos económicos. Estos, por regular, están expuestos directamente a los cambios económicos o de mercado que a su vez producen despidos o cierres de empresas.

Precisamente es este sector de la población el que se ha encontrado desprovistos de la oportunidad de obtener diferentes cubiertas de seguros disponibles en el mercado para otros grupos.

En el umbral al nuevo milenio, la Industria de Seguros de Puerto Rico necesita enfrentar los retos para agilizar su economía mediante el ofrecimiento de nuevos productos de seguros para que el consumidor pueda libre y voluntariamente obtener aquellas cubiertas necesarias para proteger su vida, salud y su crédito. Esto se logra mediante el ofrecimiento de nuevos productos de seguros, sino también brindando acceso a estos productos al sector de la población que históricamente y por limitación legal no han tenido acceso a los mismos.

Es el principal propósito de estas enmiendas a la "Ley de Préstamos Personales Pequeños" y al Capítulo 18 del "Código de Seguros de Puerto Rico", disponer que se contemple dentro sus disposiciones el seguro de desempleo involuntario de crédito y el permitir obtener a los prestatarios un seguro por desempleo involuntario de crédito, para cubrir los plazos al descubierto de su préstamo pequeño en la eventualidad de que avenga al desempleo involuntario por cualquier causa provocada por el patrono o en la eventualidad de una huelga general, controversia laboral o cierre de operaciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el inciso (c) y se añade el subinciso (8) al Artículo 14 de la Ley 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 14.-.....

(a) .....

(b) .....

(c) Cargo por seguro - A opción del prestatario, se cobrará un cargo por el costo de un seguro de vida de crédito o de incapacidad de crédito el cual garantizará el remanente insoluto del préstamo al momento de la muerte o incapacidad del prestatario, o un cargo por seguro de desempleo involuntario de crédito el cual garantizará los plazos al descubierto del préstamo en caso de que el prestatario quede desempleado de forma involuntaria.

Disponiéndose que:

(1) ...

(2) En el caso de seguros de vida de crédito, de incapacidad de crédito, o de desempleo involuntario de crédito, la cantidad incluida para tal seguro no excederá la cantidad establecida en el artículo 18.050 del Código de Seguros de Puerto Rico.

(3) Ningún concesionario de préstamo podrá exigir como condición para el otorgamiento de un préstamo que:

(A) El prestatario obtenga un seguro de vida de crédito, de incapacidad de crédito, o de desempleo involuntario de crédito,

(B) y de obtener dicho seguro, que el mismo se provea por conducto de determinada persona, agente, corredor o solicitador o con algún asegurador en particular.

(4) Todo seguro de vida de crédito, de incapacidad de crédito o de desempleo involuntario de crédito será evidenciado por una póliza individual...

(5) Toda póliza individual o certificado de grupo de seguro de vida de crédito, de incapacidad de crédito, o de desempleo involuntario de crédito deberá contener las disposiciones establecidas en el artículo 18.070 del Código de Seguros de Puerto Rico.

(6) ...

(7) Si el contrato de préstamo ha de incluir un renglón para seguro, éste deberá contener un aviso en forma clara, escrito en letra más oscura, el doble del tamaño de la demás letras, a los efectos de que estos seguros de crédito se ofrecerán en base voluntaria y el prestatario no viene obligado en forma alguna a acogerse a él. En adición, en dicho contrato deberá contener información sobre el costo de los seguros de crédito obtenidos por el prestatario y la forma de pago de éstos.

(8) Estos seguros, ya sea el de vida de crédito, el de incapacidad de crédito o el de desempleo involuntario de crédito o en su conjunto, podrán ser ofrecidos únicamente luego de notificar al cliente que su préstamo personal fue aprobado."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 18.010 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Capítulo XVIII

Seguro de Vida de Crédito, Seguro de Incapacidad de Crédito y Seguro de Desempleo Involuntario de

Crédito

Artículo 18.010 Propósito.

El propósito de este Capítulo es promover el bienestar público regulando el seguro de vida de crédito, el seguro de incapacidad de crédito y el seguro de desempleo involuntario de crédito. Nada de lo contenido en este Capítulo tiene la intención de prohibir o desalentar la competencia razonable. Las disposiciones de este Capítulo se interpretarán liberalmente."

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 18.020 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 18.020 Alcance.

Todo seguro de vida, seguro de incapacidad y de desempleo involuntario vendido con arreglo a préstamos u otras transacciones de crédito estará sujeto a las disposiciones de este Capítulo, salvo el seguro vendido en relación con un préstamo u otra transacción de crédito de más de cinco años de duración. Las pólizas de grupo de seguro de vida se regirán además por las disposiciones del Capítulo XIV de este Código."

Sección 3.-Se añade el inciso (3) y renumerar los incisos (3), (4), (5) y (6) como (4), (5), (6) y (7) del Artículo 18.030 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que se lea como sigue:

" Artículo 18.030 Definiciones

(1) .....
(2) .....
(3) Seguro de desempleo involuntario de crédito. - significa el seguro que indemniza los plazos al descubierto a un deudor por los pagos que deba hacer por un préstamo específico u otra transacción de crédito mientras el deudor se encuentre desempleado, según se define en la póliza.
(4) .....
(5) .....
(6) .....
(7) ....."

Sección 4.-Se añade los incisos (3) y (6) y renumerar los incisos (3) y (4) como (4) y (5) en el Artículo 18.040 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 18.040-Formas de Seguros de Vida de Crédito, Seguro de Incapacidad de Crédito y Seguro de Desempleo Involuntario de Crédito.

El seguro de vida de crédito, el seguro de incapacidad de crédito y el seguro de desempleo involuntario de crédito sólo se emitirán en los siguientes formularios de póliza:

(1) .....
(2) .....
(3) Pólizas individuales de seguro de desempleo involuntario expedidas a deudores con arreglo a un plan de término fijo, incluyendo pólizas con arreglo al plan de franquicia.
(4) .....
(5) .....
(6) Póliza de grupo de seguro de desempleo involuntario expedidas a acreedores con arreglo a un plan de término fijo que asegure a los deudores."

Sección 5.-Se añade el inciso (3) al Artículo 18.050 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.050.-Cantidad del Seguro de Vida de Crédito, del Seguro de Incapacidad de Crédito y del Seguro de Desempleo Involuntario de Crédito.

(1) .....
(2) .....
(3) Seguro de desempleo involuntario de crédito.- La suma de indemnización periódica pagadera por el

seguro de desempleo involuntario de crédito en el caso de que ocurra desempleo involuntario, según se define en la póliza, no excederá la suma total de plazos periódicos no pagados de la deuda y no sobrepasará la deuda original dividida por el número de plazos periódicos."

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 18.060 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.060 - Término del Seguro de Vida de Crédito, del Seguro de Incapacidad de Crédito y del Seguro de Desempleo Involuntario de Crédito.

El término de cualquier seguro de vida de crédito, de un seguro de incapacidad de crédito o de un seguro de desempleo involuntario de crédito comenzará, sujeto a que el asegurador lo acepte, en la fecha en que el deudor contrae la obligación con el acreedor, salvo que cuando una póliza de grupo provee cubierta con respecto a obligaciones existentes, el seguro del deudor respecto de tal deuda comenzará en la fecha de efectividad de la póliza. El término de tal seguro no se extenderá por más de 15 días después de la fecha estipulada de vencimiento de la deuda a menos que se extienda sin costo adicional para el deudor. Si la deuda es saldada por renovación o refinanciamiento antes de la fecha estipulada de vencimiento, el seguro en vigor terminará antes de que pueda emitirse un nuevo seguro en relación con la deuda renovada o refinanciada. En todos los casos de terminación antes del vencimiento estipulado, se hará o acreditará un reembolso como se dispone en el Artículo. 18.090."

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 18.070 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.070.-Disposiciones de las Pólizas y Certificados de Seguro; Entrega a los Deudores

(1) Todo seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito y seguro de desempleo involuntario de crédito vendido será evidenciado por una póliza individual o, en el caso de un seguro grupal, por un certificado de seguro, que en uno u otro caso se entregará al deudor.

(2) Toda póliza individual o certificado de grupo de seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito contendrá, aparte de otros requisitos de ley, el nombre y lugar principal de negocios del asegurador, el nombre o nombres del deudor, la prima o cantidad pagada, si alguna, por el deudor por separado para seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito y seguro de desempleo involuntario de crédito, una descripción de la cubierta incluyendo la cantidad y término de_ésta, y cualesquiera excepciones, limitaciones o restricciones, y estipulará que los beneficios se pagarán al acreedor para reducir o liquidar la deuda no saldada y, cuando la cantidad del seguro sea mayor que la deuda no saldada, que cualquier sobrante se pagará a un beneficiario, que no sea el acreedor, designado por el deudor o a su sucesión.

(3) .....

(4) Si dicha póliza individual o certificado de grupo de seguro no se entrega al deudor al momento de contraerse la deuda, una copia de la solicitud de dicha póliza o una proposición de seguro firmada por el deudor y conteniendo el nombre del asegurador y la dirección de su oficina principal, el nombre o nombres del deudor, la prima o cantidad del pago por el deudor, si alguna, por separado para seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito, la cantidad y término, y una breve descripción de la cubierta que se provee se entregará al deudor al momento de contraerse la deuda. La copia de la solicitud o proposición de seguro se referirán exclusivamente a la cubierta de seguro, y serán distintas y separadas del préstamo, venta u otra cuenta de crédito, instrumento o convenio, a menos que la información requerida por este Artículo se destaque prominentemente en la solicitud o proposición de seguro.

Al aceptarse el seguro por el asegurador, y dentro de treinta días a partir de la fecha en que se contrae la deuda, el asegurador hará que la póliza individual o certificado de grupo de seguro se entregue al deudor. Dicha solicitud o proposición de seguro dispondrán que de aceptarse el seguro por el asegurador el seguro será efectivo a la fecha en que se contrae la deuda."

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 18.090 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.090.-Primas y Reembolsos

(1) Cada asegurador que emita seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito inscribirá ante el Comisionado sus listas de los tipos de primas a ser usadas en relación a tal seguro. Cualquier asegurador podrá revisar tales listas de tiempo en tiempo e inscribirá tales listas revisadas ante el Comisionado. Ningún asegurador expedirá ninguna póliza de seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito para la cual el tipo de prima exceda aquel determinado en las listas de tal asegurador como entonces estén inscritas ante el Comisionado. El Comisionado podrá requerir la inscripción de las listas de los tipos de primas para usarse en relación a y como parte de las inscripciones específicas de pólizas.

(2) .....

(3) Si una acreedor le requiere a un deudor hacer algún pago para seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o para seguro de desempleo involuntario de crédito, y no se emite una póliza individual o un certificado de seguro de grupo, el acreedor inmediatamente le dará notificación por escrito a tal deudor, y prontamente hará los arreglos para reembolsar o acreditar al deudor aquella prima o cargo identificable pagado por dicho deudor para tal seguro. La cantidad cargada por el acreedor al deudor para cualquier seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito no excederá de la tarifa archivada y aprobada por el Comisionado para la cubierta que se provee."

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 18.100 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.100.-Emisión de pólizas

Todas las pólizas de seguros de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito y seguro de desempleo involuntario de crédito serán entregadas o emitidas para entrega en Puerto Rico únicamente por un asegurador autorizado a hacer negocios de seguro en Puerto Rico, y serán emitidas únicamente a través de los tenedores de licencias expedidas por el Comisionado. "

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 18.120 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.120.-Seguro Existente

Cuando se requiera un seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito como garantía adicional para cualquier deuda, el deudor tendrá opción, si lo notifica al acreedor, a proveer la cantidad requerida de seguro a través de pólizas existentes de seguro propiedad de_él o controladas por_él. Tales pólizas así suministradas no estarán sujetas a las disposiciones de este Capítulo."

Sección 11.-Al inicio de la sesión legislativa del año 2000, el Comisionado de Instituciones Financieras someterá a la Asamblea Legislativa un informe sobre los efectos de esta Ley. En el mismo se incluirá una evaluación sobre las prácticas relacionadas al ofrecimiento de los seguros a los consumidores y su relación a los procedimientos de aprobación del crédito. Al recibo del informe el Presidente de cada cuerpo legislativo lo referirá a la comisión o comisiones que estime necesario.

Sección 12.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio y consideración, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cámara 1936 con enmiendas.

Enmiendas sometidas al Senado:
En El Título:

1. En la línea 1, después de inciso (c), eliminar "y añadir el subinciso (8) al" y sustituir por "del".

2. En la línea 3, después de "Pequeños" eliminar todo el contenido hasta la palabra "Puerto Rico"," en la línea 10 y sustituir por "; derogar el Capítulo XVIII de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", y sustituirlo por un nuevo Capítulo XVIII,".

3. En la línea 10, después de "cargo por seguros", eliminar el resto de la línea hasta la palabra "crédito" de la línea 14 y sustituir por "de crédito al consumidor; actualizar el contenido del Código de Seguros de Puerto Rico a los cambios ocurridos en el seguro de crédito al consumidor, conforme a la ley modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros".

En La Exposición de Motivos:

1. En la página 1, párrafo 1, línea 2, después de "Pequeños"," eliminar el resto de la línea y las líneas 3 y 4 hasta la palabra "Puerto Rico", " y sustutuir por "para crear el concepto de seguro de crédito al consumidor y".

2. En la página 2, al principio de la página, insertar "Además la presente legislación tiene el propósito además, de sustituir el actual Capítulo XVIII de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico". El Capítulo 18 del Código de Seguros de Puerto Rico, titulado "Seguro de Vida de Crédito y Seguro de Incapacidad de Crédito" fue adicionado mediante la Ley Núm. 63 de 19 de junio de 1959, y estuvo basado en la ley modelo que para tal seguro había preparado la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. A través del tiempo, y a medida que este tipo de seguro ha ido evolucionando, dicha Asociación ha ido a su vez actualizando la ley modelo. La necesidad de enmendar las disposiciones al efecto contenidas en el Código de Seguros de Puerto Rico, ha ido, de igual modo, acrecentándose con el paso del tiempo y ha llegado a hacerse inaplazable con la ampliación de los ofrecimientos de los aseguradores hacia otras cubiertas como son la del seguro de crédito para el evento del desempleo involuntario de un deudor."

3. En la página 2, párrafo 1, línea 2 después de "por" insertar "lo".

4. En la página 2, párrafo 1, línea 3, después de "o" eliminar "de" y sustituir por "del".

5. En la página 2, párrafo 3, línea 1, después de umbral eliminar "al" y sustituir por "del".

6. En la página 2, párrafo 4, línea 4, después de "logra" eliminar "mediante el ofrecimiento de" y añadir "no sólo ofreciendo".

7. En la página 2, párrafo 3, línea 6, después de "no" eliminar "han" y añadir "ha".

8. En la página 2, párrafo 4, línea 2, después de "Puerto Rico",", eliminar "disponer que se contemple" y sustituir por "crear el concepto se seguro de crédito al consumidor para que contemple".

9. En la página 2, párrafo 4, línea 7, después de "operaciones" insertar "o cualquier otro evento inesperado".

En El Texto Decretativo:

1. En la página 2, línea 1, después de "inciso (c)" eliminar " y se añade el subinciso (8) al " y sustituir por "del ".

2. En la página 2, línea 7, después de "seguro" eliminar el resto de la línea y sustituir por "de crédito al consumidor, con arreglo a las disposiciones del Capítulo XVIII del Código de Seguros de Puerto Rico.".

3. En la página 2, líneas 8 y 9, eliminar todo el contenido.

4. En la página 3, líneas 1 y 2, eliminar todo el contenido.

5. En la Página 3, línea 5, después de "seguros" eliminar el resto de la línea y sustituir por "de crédito al consumidor,".

6. En la página 3, línea 6, eliminar todo su contenido.

7. En la página 3, línea 7, al principio de la línea, eliminar la palabra "seguro".

8. En la página 3, línea 11, después de "seguro", eliminar el resto de la línea y las líneas 12 y 13 y sustituir por " de crédito al consumidor. ".

9. En la página 3, líneas 17 a la 23 eliminar todo su contenido y sustituir por

(4) Si el contrato de préstamo ha de incluir un renglón para seguro, éste deberá contener un aviso

en forma clara, escrito en letra más oscura, el doble del tamaño de las demás letras a los efectos de que se ofrece el seguro de crédito al consumidor sobre una base voluntaria y el prestatario no viene obligado en forma alguna a acogerse a él.

(5) Se ofrecerá el seguro de crédito al consumidor únicamente luego de notificar al cliente que su préstamo personal fue aprobado por el concesionario.".

9. En la página 4, líneas 1 a la 23, eliminar todo el contenido y sustituir por

"Sección 2.— Se deroga el actual Capítulo XVIII de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 , según enmendada conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico" y se sustituye por un nuevo Capítulo XVIII, el cual dispondrá lo siguiente:

"Capítulo XVIII
Seguro de Crédito al Consumidor

Artículo 18.010. - **Propósito**

El propósito de este Capítulo es promover el bienestar público regulando el seguro de crédito al consumidor según se define más adelante. Nada de lo contenido en este Capítulo tiene la intención de prohibir o desalentar la sana competencia. Las disposiciones de este Capítulos se interpretarán liberalmente para el logro del mencionado propósito.

Artículo 18.020. - **Alcance**

1) Todo seguro de crédito al consumidor emitido o vendido en relación con préstamos u otra transacción de crédito estará sujeto a las disposiciones de este Capítulo excepto:

(a) Seguros suscritos en relación con una transacción de crédito que esté garantizada por una primera hipoteca o escritura de fideicomiso ("deed of trust"); y hecha para financiar la compra de propiedad inmueble o la construcción de una residencia en dicha propiedad, o para refinanciar una transacción previa de crédito hecha para tal propósito.

(b) Seguro vendido como una transacción independiente por parte de un asegurador y no relacionada a un acuerdo o plan para asegurar deudores de un acreedor.

(c) Seguro para el cual no se hace al deudor un cargo separado e identificable, según se define más adelante.

(d) Seguro de cuentas cobrables.

2) Las disposiciones de los Artículos 14.010 at 14.110 de este código serán también de aplicación al seguro de vida de crédito, en todo aquello que no conflijan con las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 18.030. - **Definiciones**

1) "Acreedor" significa el prestamista, o el vendedor o arrendador de bienes, o la persona que presta servicios o concede derechos o privilegios, cuyo pago se acuerda a través de una transacción de crédito o cualquier sucesor de los derechos, títulos o interés de tales prestamistas, vendedores o arrendadores o personas y cualquier afiliado, asociado o subsidiario de cualquiera de ellos, o cualquier director, oficial, o empleado de cualquiera de ellos o cualquiera otra persona de otra forma relacionada con ellos.

2) "Asegurador" significa un asegurador autorizado en Puerto Rico a suscribir seguro de vida y seguro de incapacidad física.

3) "Cargo identificable" significa un cargo por seguro de crédito al consumidor que sólo se le hace a los deudores que tienen tal seguro e incluye cualquier cargo por seguros que se divulgue en el instrumento de crédito que se le provee al deudor. Se considerará como "cargo identificable" cualquier diferencia en el financiamiento, intereses, servicio u otro servicio similar provisto a las deudores que están en las mismas circunstancias excepto por la condición de asegurado o no asegurado del deudor o de la propiedad usada coma garantía para la transacción de crédito.

4) "Compensación" significa comisiones, dividendos, créditos retrospectivos en tarifas, honorarios por servicio, concesiones o reembolsos para gastos, regalos, provisión de equipos o enseres, facilidades, bienes o servicios, o cualquier otra forma de remuneración que resulte directamente de la venta de seguro de crédito al consumidor.

5) "Deuda bruta" significa la suma de los pagos restantes que le debe un deudor a un acreedor.

6) "Deuda neta" significa la cantidad necesaria para liquidar, en una fecha determinada, la deuda remanente, a partir de esa fecha, mediante un pago único global, excluyendo todos los intereses no devengados y todos los cargos por financiamiento no devengados

7) "Deudor" significa el que toma dinero prestado o el que compra o arrienda bienes, o que recibe servicios, propiedad, derechos o privilegios por los cuales se acuerda un pago a través de una transacción de crédito.

8) "Plan de cuenta rotativa y tarjeta de crédito" significa el crédito que extiende un acreedor bajo un acuerdo en el cual el acreedor tiene la expectativa razonable de que habrá transacciones repetidas; el acreedor impone un cargo por financiamiento de tiempo en tiempo sobre un balance pendiente de pago; y la cantidad del crédito que puede ser extendido al deudor durante el término del convenio, hasta el límite que establezca el acreedor, está disponible generalmente en la medida que cualquier balance pendiente sea pagado.

9) "Seguro de crédito al consumidor" es el nombre genérico que se refiere al seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito, o seguro de desempleo de crédito.

10) "Seguro de desempleo de crédito" significa seguro sobre un deudor para proveer indemnización por pagos con arreglo a un préstamo u otra transacción de crédito que venzan mientras el deudor esté involuntariamente desempleado según se defina en la póliza.

11) "Seguro de incapacidad de crédito" significa seguro sobre un deudor para proveer indemnización por pagos con arreglo a un préstamo específico u otra transacción de crédito que venzan mientras el deudor se encuentre incapacitado según se defina en la póliza.

12) "Seguro de vida de crédito" significa un seguro sobre la vida de un deudor con arreglo a, o en relación con un préstamo específico u otra transacción de crédito que provee el pago de la deuda total o parcialmente a la muerte del deudor asegurado.

13) "Transacción de crédito" significa cualquier transacción bajo cuyos términos se acuerda el pago de dinero prestado, o el pago por bienes o servicios vendidos o arrendados, en una o varias fechas futuras.

Artículo 18.040. - **Formas de seguro de crédito al consumidor, quiénes lo pueden contratar**

Los tipos de seguros de crédito al consumidor que se definen en el Artículo 18.030 pueden ser suscritos separadamente o combinados bien sea en pólizas individuales o en pólizas colectivas tanto por aseguradores autorizados a contratar seguros con arreglo al Artículo 4.020, como por aseguradores autorizados a contratar seguros con arreglo al Artículo 4.030. El Comisionado podrá, mediante reglamentación al efecto, limitar o prohibir tales combinaciones.

Artículo 18.050. - **Disposiciones aplicables al seguro de vida de crédito**

Las siguientes disposiciones aplicarán exclusivamente al seguro de vida de crédito:

1) La suma asegurada del seguro de vida de crédito no será mayor que la deuda original.

2) Se suscribirá la cubierta de seguro de vida de crédito de forma tal que la cantidad pagadera al momento de la muerte del deudor asegurado sea igual a la deuda neta en ese momento.

Artículo 18.060. - **Disposiciones aplicables al seguro de incapacidad de crédito y al seguro de desempleo de crédito**

Las siguientes disposiciones aplicarán al seguro de incapacidad de crédito y al seguro de desempleo de crédito:

1) La cantidad total de plazos periódicos pagaderos por el seguro de incapacidad de crédito y de desempleo de crédito en caso de reclamación no excederá la suma agregada de los plazos periódicos al descubierto de la deuda bruta y la cantidad de cada plazo periódico no excederá la cantidad de la deuda bruta original dividida por el número de plazos periódicos.

2) No obstante lo dispuesto en el apartado (1) de este Artículo, para el seguro de incapacidad y desempleo de crédito suscrito en relación con un plan de cuenta rotativa y tarjeta de crédito, la cantidad de seguro no excederá la deuda bruta que correspondería a dicha cantidad si se utilizara el plazo periódico. Con sujeción a los límites que establezca la póliza, el plazo periódico no será menor que la cantidad mínima que debe pagar el deudor.

Artículo 18.070. - **Disposiciones generales aplicables al seguro de crédito al consumidor.**

Las siguientes disposiciones aplicarán a toda cubierta de seguro de crédito al consumidor:

1) Para el seguro de crédito ofrecido a, y seleccionado por un deudor con anterioridad o contemporáneamente con la transacción de crédito con la cual se relaciona el seguro, el término del seguro comenzará, sujeto a la aceptación del asegurador, en la fecha en la cual se formaliza la transacción de crédito.
2) Para cubiertas de seguro de crédito ofrecidas a, y seleccionadas por un deudor en una fecha subsiguiente a la fecha en que se formalizó la transacción de crédito con la cual se relaciona el seguro, el seguro comenzará, sujeto a la aceptación del asegurador, en una fecha no anterior a la fecha en que la elección fue hecha por el deudor ni más tarde de treinta (30) días luego de dicha fecha.
3) No obstante lo dispuesto por los apartados (1) y (2) de este Artículo, cuando una póliza de seguro colectivo provee cubierta en relación con las deudas existentes a la fecha de vigencia de la póliza, el seguro que se relaciona con tales deudas no comenzará antes de la fecha de vigencia de la póliza de seguro colectivo.
4) En ningún caso se hará un cargo por seguro al deudor, ni el acreedor o el asegurador retendrán primas para períodos anteriores a la fecha de vigencia del seguro con el cual está relacionado dicho cargo.
5) El término de cualquier seguro de crédito al consumidor no se extenderá más allá de la fecha de terminación especificada en la póliza. La fecha de terminación del seguro podrá ser anterior, simultánea o posterior a la fecha de vencimiento de la deuda con la cual está relacionado, con sujeción a todas las demás disposiciones de este Capítulo.
6) El término de cualquier seguro de crédito de consumidor no durará más de quince (15) días a partir de la fecha de vencimiento de la deuda, excepto cuando se extienda el mismo sin costo adicional para el deudor, o excepto cuando sea extendido de acuerdo con un convenio escrito, firrnado por el deudor.
7) En todo caso de terminación del seguro con antelación a la fecha programada de terminación de éste, se hará una devolución apropiada o crédito al deudor de cualquier cargo por seguro no devengado, que haya pagado el deudor para períodos posteriores a dicha terminación, excepto que no se hará tal devolución o se otorgará tal crédito por concepto de seguro no usado, si se termina el seguro por razón del cumplimiento del asegurador con su obligación bajo el contrato.
8) Un deudor asegurado podrá terminar el seguro de crédito al consumidor en cualquier momento sometiendo un aviso anticipado al asegurador. La póliza individual o certificado de una póliza de seguro colectivo, podrá requerir que tal aviso sea por escrito o que el asegurado entregue la póliza o el certificado, o ambas acciones. El derecho del deudor de terminar la cubierta de seguros puede, además, estar sujeto a los términos del contrato de crédito.
9) En aquellos casos de seguro de crédito al consumidor ofrecido mediante pólizas de seguro colectivo, y en cuyo trámite el acreedor incurra en gastos administrativos por razón de su manejo, se permitirá que el asegurador pague al acreedor particular, previa aprobación del Comisionado, una compensación por tales gastos administrativos la cual no excederá del 20% de la prima correspondiente. La anterior disposición no deberá interpretarse como que permite al acreedor realizar gestión alguna para la cual se requiera una licencia de agente, corredor, solicitador o ajustador de seguros, o que pemite que se pague tal compensación a un acreedor por gestiones relacionadas con seguros que no están comprendidos dentro del alcance de este Capítulo.
10) Ningún acreedor podrá requerir como condición para conceder crédito que el solicitante de crédito obtenga seguro de crédito al consumidor, según se define en este Capítulo o, si tal seguro fuere obtenido, que el mismo sea provisto a través de determinado agente o por determinado asegurador.

Artículo 18.080. - **Divulgación a los deudores y disposiciones de las pólizas y certificados de seguro**

1) Antes de que un deudor elija comprar seguro de crédito al consumidor en relación con una transacción de crédito, el asegurador que proveerá este seguro le suministrará por escrito al deudor la siguiente información:
   (a) Que la compra del seguro de crédito al consumidor es opcional y no una condición para obtener

aprobación del crédito.

(b) Si se estuviese ofreciendo más de una clase de seguro de crédito al consumidor, si el deudor puede comprar las cubiertas por separado o solamente en conjunto.

(c) Las condiciones de elegibilidad.

(d) Que si el consumidor tiene otro seguro que cubre el riesgo, es posible que no necesite el seguro que se le está ofreciendo.

(e) Que, dentro de treinta (30) días luego de recibir la póliza individual, o el certificado de seguro colectivo, el deudor puede cancelar la cubierta y que tiene el derecho de que se le devuelva o acredite la totalidad de la prima. Luego de transcurrido dicho término, el deudor podrá cancelar la póliza o certificado en cualquier momento durante el término de la transacción de crédito y recibir el reembolso o crédito total de la prima no devengada total.

(f) Una breve descripción de la cubierta, incluyendo una descripción de la cantidad, el término, cualquier excepción, limitación o exclusión, el evento asegurado, cualquier período de espera o período de eliminación, cualquier deducible, cualquier disposición aplicable de relevo de pago de primas, a quién serán pagados los beneficios, y la tarifa de prima aplicable a cada cubierta o por todas las cubiertas si se tratare de una póliza de cubiertas en conjunto.

(g) De financiarse la prima en la transacción de crédito, aquélla estará sujeta a cargos por financiamiento iguales a los que aplican a la referida transacción.

2) La divulgación que requiere el apartado (1) de este Artículo será provista por el asegurador concernido del siguiente modo:

(a) En relación con seguro de crédito el consumidor que se ofrezca contempóraneamente con la extensión de crédito u ofrecido a través de correspondencia directa, la divulgación será por escrito y en una forma clara y conspicua.

(b) En relación con seguro de crédito al consumidor que se ofrezca subsiguientemente a la extensión de crédito o que no se ofrezca a través de correspondencia directa, la divulgación podrá ser oral siempre y cuando la divulgación escrita sea provista el deudor por el asegurador no mas tarde de diez (10) días después de la oferta o la fecha en que cualquiera otra información escrita sea provista al deudor, de ambas fechas la que ocurra primero.

3) Todo seguro de crédito al consumidor estará evidenciado por una póliza individual o por un certificado de seguro colectivo que será enviado al deudor.

4) La póliza individual o certificado de seguro colectivo deberá contener, además de cualesquiera otras disposiciones requeridas por Ley, lo siguiente:

(a) El nombre y dirección de la oficina matriz del asegurador.

(b) El nombre o nombres del deudor o deudores.

(c) La prima que el deudor pagará separadamente por cada clase de cubierta o para todas las cubiertas si se tratase de varias cubiertas ofrecidas en conjunto, excepto que en el caso de planes de cuentas rotativas y tarjetas de crédito, se deberá especificar el tipo y la base de tarifación.

(d) Una descripción completa de la cubierta o cubiertas incluyendo la cantidad y el término de las mismas, así como cualquier excepción, limitación o exclusión.

(e) Una declaración a los efectos de que se pagarán los beneficios al acreedor para reducir o extinguir la deuda insoluta y que cuando la cantidad del beneficio de seguros exceda dicha deuda, cualquier exceso será pagado a un beneficiario, que no sea el acreedor, nombrado por el deudor, o a la sucesión del deudor.

(f) Si el término del seguro es menor que el término de crédito, una declaración a tales efectos en la cubierta de la póliza individual o certificado de seguro colectivo escrita en negrillas de menor de diez (10) puntos.

5) Si no se entrega al deudor la póliza individual o el certificado de seguro colectivo al momento en que éste incurra en la deuda, o en cualquier otro momento en que el deudor elija comprar cubierta de seguros, entonces se le entregará a éste, en dicho momento, una copia de la solicitud para la póliza o un aviso del seguro propuesto, firmado por el deudor, que establezca lo siguiente:

(a) el nombre y la dirección de la oficina matriz del asegurador.

(b) el nombre o los nombres del deudor o deudores.

(c) el tipo de prima o la cantidad que el deudor pagará por el seguro.

(d) la cantidad y término del seguro.
(e) una breve descripción de la cubierta que se provee.

La copia de la solicitud o el aviso de seguro propuesto se referirá exclusivamente a la cubierta de seguros y estará separada y será distinta de cualquier otro documento relacionado con la transacción de crédito. Al ser aceptada la solicitud por el asegurador y dentro de treinta (30) días desde la fecha en que se incurre en la deuda o que se elija comprar la cubierta de seguros, el asegurador hará que la póliza individual, o certificado de seguro colectivo, sea enviado al deudor. La solicitud o aviso de seguro propuesto deberá establecer que el ser aceptado por el asegurador, el seguro cobrará vigencia según dispuesto por el Artículo 18.070.

6) Se podrá utilizar la solicitud, el aviso de seguro propuesto o el certificado de seguro para cumplir todos los requisitos de los apartados (1) y (4) de este Artículo, siempre que contuvieran toda la información allí requerida.
7) El deudor tendrá treinta (30) días desde la fecha en que recibe, bien sea la póliza individual o el certificado de seguro colectivo, para revisar la cubierta que compró. En cualquier momento durante dicho período, el deudor podrá comunicarse con el acreedor o el asegurador correspondiente y solicitar que se cancele la cubierta. La póliza individual o el certificado de seguro colectivo pueden requerir que la solicitud de cancelación sea por escrito o que la póliza o certificado sean devueltos, o ambas acciones.
8) Si no se aceptare el riesgo, todas las primas pagadas serán devueltas o acreditadas a la persona con derecho a ello dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la solicitud de seguro.
9) Para fines del apartado (5) de este Artículo, una póliza individual o certificado de seguro colectivo que se envíe en conjunto con un plan de cuenta rotativa y tarjeta de crédito o cualquier seguro de crédito al consumidor solicitado por el deudor con posterioridad a la vigencia de la deuda, se entenderá que fue entregado el momento en que se incurrió en la deuda, o el momento en que el deudor eligió comprar el seguro, si el envío tiene lugar dentro de las treinta (30) días desde que el seguro esté vigente.
10) Cualquier póliza individual o certificado de seguro colectivo que sea entregado junto con un plan de cuenta rotativa y tarjeta de crédito continuará en vigor desde su fecha de vigencia mientras dure dicho plan de cuenta rotativa y tarjeta de crédito, a menos que la póliza individual o certificado de seguro colectivo sea terminado de acuerdo con sus términos en una fecha anterior.

Artículo 18.090. - **Presentación de modelos**

Además de los fundamentos mencionados en el Artículo 11.120 de este código, el Comisionado podrá desaprobar cualquier formulario de póliza, solicitud, aditamento o endoso del seguro de crédito al consumidor, si los beneficios provistos en los mismos no son adecuados en relación con la prima, no obstante la provisto en el Artículo 12.020 de este código.

Artículo 18.100. - **Primas y reembolsos**

1) Cada asegurador que emita seguro de crédito al consumidor inscribirá ante el Comisionado sus listas de los tipos de primas que habrá de usar en relación con tal seguro. Los aseguradores podrán revisar de tiempo en tiempo dichas listas, y, en tal caso, las archivarán en la Oficina del Comisionado. Ningún asegurador emitirá cubierta alguna de seguro de crédito al consumidor para la cual la tarifa de prima exceda a aquélla inscrita ante el Comisionado y que esté entonces vigente. El Comisionado promulgará la reglamentación necesaria para lograr que las tarifas de prima sean razonables en relación con los beneficios que se proveen. Al evaluar cualquier sometimiento hecho de conformidad con este Capítulo, el Comisionado tomará en cuenta lo siguiente:

(a) Experiencia de pérdidas actual y esperada.
(b) Gastos generales y administrativos.
(c) Pagos por reclamaciones y gastos de ajuste de pérdidas.
(d) Compensación razonable al acreedor, según dispuesto por el Artículo 18.070(9).
(e) Ingreso por inversiones
(f) Método de pago de las primas

(g) Otras gastos de adquisición, reservas, impuestos, licencias o derramas
(h) Ganancia razonable para el asegurador
(i) Otra información relevante consistente con métodos actuariales generalmente aceptados.

2) Cada póliza individual o certificado de seguro colectivo proveerá para una devolución de primas en el caso de que el seguro termine antes de su fecha normal de expiración. Las primas no usadas serán pagadas o acreditadas con prontitud a la persona con derecho a ello; disponiéndose, no obstante, que reembolsos por cantidades inferiores a una cantidad que, al efecto, establezca el Comisionado, no estarán sujetas a devolución. Cualquier fórmula de devolución que un asegurador interese utilizar deberá proveer reembolsos tan favorables para el deudor, que sean, al menos, iguales al costo de una cubierta ofrecida por tal asegurador, que comience en dicha fecha de terminación hasta la expiración normal de la póliza o certificado de seguro colectivo cancelados, calculada dicha prima de acuerdo con las tarifas en vigor a la fecha en que la póliza o certificado de seguro colectivo fueron originalmente emitidos. Toda fórmula utilizada para determinar reembolso de primas deberá ser sometida a, y aprobada por el Comisionado siempre que cumpla con los requisitos anteriormente establecidos.
3) Si un deudor solicita seguro de crédito al consumidor por el cual ha hecho un pago o se le ha hecho un cargo, y la póliza individual o el certificado de seguro colectivo no es emitido, el acreedor vendrá obligado a dar aviso escrito de tal hecho al deudor y deberá prontamente realizar el crédito o la devolución correspondiente a la persona con derecho a ello dentro de los quince (15) días de haberlo solicitado, pero en ningún caso, luego de noventa (90) días de haberse hecho el pago o cargo.
4) La cantidad cargada a un deudor por cualquier seguro de crédito al consumidor nunca será mayor que las primas que haya cargado el asegurador, según calculadas al momento en que sea determinado el cargo al deudor.
5) En caso de la terminación prematura de cualquier seguro de crédito al consumidor, en el cual se haya pagado una compensación al acreedor, conforme al Artículo 18.070(9), por razón de los gastos administrativos en que éste incurre al ofrecer el seguro a sus deudores, el acreedor deberá devolver aquella parte de la compensación que recibiera, equivalente al por ciento de la prima que es necesario devolver el deudor por razón de dicha cancelación.

Artículo 18.110. —- **Emisión de Pólizas**

Toda póliza de seguro de crédito al consumidor será entregada o emitida para entrega en Puerto Rico únicamente por aseguradores autorizados de vida o de incapacidad.

Artículo 18.120. — **Reclamaciones**

No se realizarán acuerdos bajo los cuales una persona u organización, que no sea el asegurador o su representante autorizado de reclamaciones, ajusten o transen reclamaciones. No se designará el acreedor como representante de reclamación del asegurador."

10. Eliminar todo el contenido en las páginas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

11. En la página 12, lineas 1 a la 3, eliminar todo el contenido.

11. En la página 12, línea 4, después de "Sección", eliminar "11"y sustituir por "3".

12. En la página 12, línea 10, después de "Sección", eliminar "12" y sustituir por "4", después de "regir" eliminar "inmediatamente después de su aprobación." y sustituir por "a partir de noventa (90) días luego de su aprobación.".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1936, propone enmendar el inciso (c) del Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; derogar el Capítulo XVIII de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", y sustituirlo por un nuevo Capítulo XVIII, a los fines de permitir que el cargo por seguros de crédito al consumidor; actualizar el contenido del Código de Seguros de Puerto Rico a los

cambios ocurridos en el seguro de crédito al consumidor, conforme a la ley modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros; disponer que dichos seguros podrán ser ofrecidos después que el préstamo haya sido aprobado; disponer que el Comisionado de Instituciones Financieras someta un informe sobre los efectos de esta Ley; y para otros fines.

La Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas se benefició de las ponencias sometidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Popular Finance y CommoLoco, Inc.

Según se desprende de la ponencia sometida por el Comisionado de Instituciones Financieras, la Ley de Préstamos Personales Pequeños, Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, dispone que se le de al consumidor la opción de acogerse o no a los seguros de vida de crédito o de incapacidad de crédito para garantizar el remanente de su préstamo en caso de muerte o incapacidad.

Señalan que el Reglamento Núm. 5782 del 15 de abril de 1998, emitido al amparo de la Ley Núm. 106, supra, dispuso que estos seguros de crédito podrán ser ofrecidos únicamente luego de notificar al cliente por escrito que su préstamo fue aprobado.

El Comisionado de Seguros por su parte, expone que la Ley de Préstamos Personales Pequeños, supra, permite que, a opción del prestatario, se le hagan cargos a éste en la transacción de crédito para la provisión de un seguro de crédito: ya sea de vida o de incapacidad, según definidos éstos en el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, permitiendo además que se pague al concesionario un estipendio por el gasto en que incurra al administrar el programa. Dicha Oficina expone que nunca ha permitido que el mencionado estipendio exceda del veinte (20) por ciento de la prima correspondiente al seguro que obtenga el prestatario.

En su opinión, tanto el seguro de vida de crédito como el seguro de incapacidad de crédito ofrecido a través del mecanismo que permite la Ley Núm. 106, supra, son de mucha conveniencia para los consumidores de este tipo de préstamo, pues ofrecen una manera conveniente de cubrir el riesgo que representa para la familia puertorriqueña la pérdida de ingresos por la muerte o incapacidad de su proveedor principal y la consecuente dificultad de pagar la deuda pendiente. Lo mismo señalan con respecto a la exposición que representa el desempleo involuntario del deudor.

Sugiere que el referido Capítulo 18 del Código de Seguros no cuenta con disposiciones similares para, de igual forma, proteger el interés del consumidor en cuanto al seguro de crédito por desempleo involuntario. Por lo tanto, es necesario enmendar el Capítulo 18, de suerte que se contemple dentro de sus disposiciones el seguro de crédito por desempleo involuntario.

Cuando se requiera un seguro de vida de crédito, seguro de incapacidad de crédito o seguro de desempleo involuntario de crédito como garantía adicional para cualquier deuda, el deudor tendrá la opción, si lo notifica al acreedor, de proveer la cantidad requerida de seguro a través de pólizas existentes de seguro propiedad de él o controladas por él. Tales pólizas así suministradas no estarán sujetas a las disposiciones de este Capítulo.

El Comisionado de Seguros considera que la inclusión de esta nueva alternativa dentro de los ofrecimientos de seguros a solicitantes de crédito bajo la Ley de Préstamos Personales Pequeños, supra, debe estar dirigida exclusivamente a ampliar las posibilidades de protección del solicitante, y no a aumentar en forma correlativa al incremento en la prima, la compensación que el asegurador ofrezca al prestamista por el gasto que éste incurra en la administración del programa. Entienden que es poco el gasto adicional, que le añade al existente, la inclusión de una alternativa adicional en materia de cubierta de seguros para el solicitante de crédito.

Además exponen lo que constituye la posición de la Oficina del Comisionado de Seguros según dispone la ley. En que en aquellos casos, donde debido a la cancelación prematura del préstamo, la cubierta de seguro también es cancelada prematuramente le correspondería a la institución prestataria devolver una parte proporcional del estipendio que recibió a raíz de la puesta en vigor de las cubiertas de seguros. Por las razones antes expuestas, el Comisionado de Seguros favorece la aprobación del proyecto de referencia.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), favorece la aprobación de la presente medida. Expone que el problema del desempleo es uno que persiste a pesar de todos los esfuerzos tanto del gobierno, como del sector privado. Este problema afecta a la masa trabajadora en su totalidad, pues sus consecuencias son más notables en el sector trabajador que recibe menos renumeración económica por su trabajo.

A pesar de que los préstamos personales pequeños son mercadeados en todas las esferas sociales, la experiencia tiende a indicar que estos servicios son frecuentemente adquiridos por un sector de moderados ingresos en la comunidad. Gran parte de dicho sector de moderados recursos o ingresos en la comunidad adolece de inestabilidad en el empleo.

A su vez, ACODESE expone que este sector en muchas ocasiones se compone de empleados temporeros o transitorios. Aunque éstos proveen un alivio al problema de escasez de trabajo, por su naturaleza dicho tipo de trabajo no brinda estabilidad económica al individuo. Al no disfrutar de una moderada estabilidad económica, las instituciones bancarias se muestran renuentes a conceder aprobación para los préstamos personales pequeños.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, entiende que las instituciones financieras al ofrecer este tipo de póliza aseguran las pérdidas económicas a las que se encuentran expuestas por razón de desempleo involuntario. Además, este proyecto le servirá de estímulo a las transacciones prestatarias, ya que ofrecerá seguridad de reembolso de dinero obtenido mediante el préstamo personal pequeño tanto al acreedor como al deudor. Al ofrecer una póliza por desempleo involuntario, se reviste a estos tipos de transacción prestataria de mayores atractivos, y se hacen más accesibles para el sector que realmente los necesita.

Popular Finance, Inc. respalda el referido proyecto. Entiende que el mismo le ofrece nuevas alternativas de protección al consumidor y ayuda a las Instituciones Financieras a reducir el monto de balance a tirar a pérdidas debido a situaciones muchas veces fuera del control del consumidor, como es la pérdida del empleo.

Es a este sector poblacional al que la Industria de Préstamos Personales Pequeños sirve y sería de gran beneficio para estos consumidores tener disponible este tipo de seguro. No cabe duda que este sector representa los niveles de desempleo más alto y que muchos de los que militan estas filas son las personas de menor capacidad económica.

Con esta protección podrán cubrir sus pagos en la eventualidad de un desempleo involuntario evitando así incumplir con el contrato de préstamos y evitando también el que se le refleje atrasos los cuales podrían afectar el crédito del consumidor.

CommoLoco, Inc. expresó apoyar los propósitos del proyecto por entender que beneficiará al interés público, a sus clientes y a las empresas que tienen licencia para ofrecer préstamos personales pequeños en Puerto Rico y también favorecerá a la industria de seguros.

El Artículo 14(c) de la Ley Núm. 106, supra, que sería enmendado por la medida propuesta, establece actualmente los términos bajo los cuales un concesionario puede ofrecer a los prestatarios un seguro de vida de crédito o de incapacidad de crédito para garantizar el repago del préstamo.

El proyecto propuesto añadiría el seguro de desempleo involuntario como otro producto que se podría ofrecer a los clientes para garantizar el repago en caso de que el prestatario quede desempleado de forma

involuntaria. La manera de ofrecerlo quedaría sujeta, claro está, a las restricciones ya existentes que prohíben el que se requiera la obtención de seguro como condición para conceder el préstamo.

A tenor con lo autorizado en la Ley, y siendo la práctica de la industria en general y la compañía en particular facilitan la obtención de seguros de vida e incapacidad de crédito para los clientes de préstamos personales pequeños, principalmente a través de pólizas de grupo expedidas a los concesionarios como acreedores, según lo autoriza el Código de Seguros. Los seguros de crédito que se pueden ofrecer bajo dicha Ley tienen, por ende, un inmenso valor social porque ayudan a las familias de deudores de escasos recursos a solventar sus deudas en casos de verdaderas emergencias familiares. Así también sería el caso con el seguro que se podría ofrecer para hacer frente a la eventualidad del desempleo involuntario.

CONCLUSIÓN:

En conclusión, y según dispuesto en el análisis, el seguro de desempleo involuntario protegerá al cliente de las siguientes formas:

(1) le sirve de alivio en cuanto a la carga económica que debe enfrentar en un momento en que ha perdido temporeramente su única fuente de ingresos.

(2) evita que el crédito de los clientes quede adversamente afectado por falta de pagos, ya que la compañía de seguros absorbería el pago mensual de la deuda durante el período de desempleo del prestatario.

(3) estos seguros de crédito brindan a su vez mayor protección a las compañías de préstamos pequeños.

Siendo el desempleo en Puerto Rico indudablemente una de las causas para los atrasos de personas que tienen préstamos personales pequeños. Aunque dicha morosidad es comprensible desde un punto de vista personal, el mismo tiene graves efectos en la salud económica de la industria de los préstamos personales pequeños. La industria de préstamos pequeños ofrece crédito personal a los sectores de menor capacidad económica en Puerto Rico, exponiendo a este sector a un alto grado de riesgo de pérdidas en su cartera de préstamos. Dicho seguro de desempleo involuntario llenará una importante brecha en la capacidad para continuar afrontando estos riesgos.

La Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas luego del análisis de las ponencias y de los datos recopilados entiende, que la práctica en el mercado de financiamiento en la actualidad, y de préstamos tanto personales como hipotecarios por las diversas agencias que brindan este tipo de servicio es el de ofrecer estos tipos de seguros de crédito al momento de adquirir los servicios de transacciones crediticias. De ofrecerse estos tipos de seguros de crédito, es voluntario y el prestatario no viene obligado en forma alguna a acogerse a él. Se sobreentiende que dichos seguros ofrecen una manera conveniente de cubrir el riesgo que representa la pérdida de ingresos y la consecuente dificultad de pagar la deuda pendiente.

Como bien señala el Comisionado de Seguros en su ponencia, este tipo de seguro de crédito representa poco el gasto adicional que le añade al existente, en cuanto al de vida de crédito y el de incapacidad de crédito. La inclusión de una alternativa adicional en materia de cubierta de seguros para el solicitante de crédito no refleja un cambio drástico, sino una alternativa conveniente para los consumidores de este tipo de préstamo al momento de quedar temporeramente o totalmente desempleado por motivos involuntarios.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cámara 1936, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Aníbal Marrero Pérez
Presidente
Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor
y Corporaciones Públicas"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 497, y se da cuenta de un segundo informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de disponer que las vistas y procedimientos en los casos de disolución del matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, sean celebrados en privado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce que la dignidad del ser humano es inviolable. Corolario de ese prinicipio lo es la garantía contenida en la Sección 8, Artículo II de dicha Constitución, que dispone lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar."

Interpretando las citadas disposiciones constitucionales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto lo siguiente:

"En la sociedad democrática organizada alrededor de los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con sensitivas urdimbres emocionales como lo son las relaciones de familia. La intromisión en la vida privada solo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud y seguridad pública o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado. No menos exige la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al declarar que la dignidad del ser humano es inviolable y al condenar el discrimen por motivo de nacimiento, origen o condición social." *García Santiago vs. Acosta*, 104 D.P.R. 321,324 (1975).

También se ha reconocido en Puerto Rico el derecho a la intimidad, vease *Figueroa Ferrer vs. E.L.A.*, 107 D.P.R. 250 (1978). En el caso de Figueroa, el Juez Asociado Negrón García, hizo el siguiente señalamiento:

"En nuestra sociedad democrática, el Estado no tiene jurisdicción sobre los dictados de conciencia y sentimientos individuales del ser humano. Solamente cuando los pensamientos y emociones salen del mundo interior de las ideas y se exteriorizan o traducen en acciones que directa o indirectamente afectan perjudicialmente a otros individuos, se acepta su participación. Como consecuencia, su intervención en el ámbito familiar ha de ser mínima, limitada a lo estrictamente necesario y en virtud de su interés apremiante."

Esta Asamblea Legislativa, en su interés de enaltecer los derechos consignados en la Constitución de Puerto Rico, reconoce que la protección del derecho a la intimidad tiene un interés apremiante para el Estado. Se reconoce que en los procedimientos judiciales sobre casos de disolución del matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, están envueltas cuestiones de hecho que necesariamente pertenecen al ámbito de los intereses protegidos por el derecho a la intimidad. Estos asuntos deben mantenerse en un ambiente de privacidad, protegidas del escrutinio público, por lo que no deben ser objetos de vistas o procedimientos que se celebren en público.

Al disponer que las vistas y otros procedimientos sobre casos de disolución de matrimonios, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, sean celebradas en privado, esta Asamblea Legislativa está ejerciendo su deber de proteger el derecho a la intimidad de nuestros ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, para que se lea como sigue:

"62.2.-Vistas y órdenes en Cámara

Todas las vistas de los casos en sus méritos serán celebradas en corte abierta, en un salón de sesiones del tribunal, salvo que debido a la naturaleza del procedimiento el tribunal dispusiere lo contrario. Las vistas y otros procedimientos sobre casos de disolución del matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, se celebrarán en privado; de manera que el público no escuche los testimonios y demás procedimientos, excepto cuando alguna de las partes solicite lo contrario. Todos los otros actos o procedimientos podrán ser realizados o tramitados por un juez en su despacho, o en cualquier otro lugar, sin necesidad de la asistencia del secretario u otros funcionarios."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. de la C. 497, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 3, línea 4: después de "aprobación." insertar "El Juez Presidente del Tribunal Supremo podrá establecer un programa paulatino de implantación de esta ley que no podrá extenderse más allá del 30 de junio de 1999."

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 497 propone enmendar la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de disponer que las vistas y procedimientos en los casos de disolución del matrimonio, relaciones paternofiliales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, sean celebrados en privado.

La Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes preparó un extenso informe que esta Comisión ha estudiado y con el cual concurre. La necesidad de proteger el derecho de intimidad de la persona hace imperativa la aprobación de esta medida.

Con el objeto de facilitar la implantación de esta ley y ante los planteamientos realizados por la Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, Administradora de los Tribunales con relación a la disponibilidad de las salas de los tribunales para poder cumplir con lo que requiere esta medida, se autoriza al Juez Presidente a establecer un plan de implantación de esta ley que en ningún caso podrá exceder del 30 de junio de 1999 para cubrir todo Puerto Rico.

Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 497 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1338, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico, y de Seguridad Pública, con enmiendas.

"LEY

Para añadir un inciso (q) a la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a fin de incluir como circunstancia agravante que el delito haya sido cometido por un funcionario del orden público con capacidad de arresto.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es alarmante observar que algunos miembros de la Policía de Puerto Rico se aprovechen de que están uniformados para cometer delitos contra sus conciudadanos. Si bien es cierto que esta actividad es ejecutada por un número ínfimo de los miembros de la uniformada, no es menos cierto que estos casos aislados contribuyen grandemente a desacreditar a las fuerzas del orden público de Puerto Rico.

Existe consenso en que cualquier tipo de delito que se cometa, por parte de un policía o un guardia municipal o cualquier otro funcionario del orden público con capacidad de arresto, debe constituir una circunstancia agravante que el tribunal, a propia instancia o a petición del fiscal, pueda considerar dicha circunstancia como una agravante para los fines de la imposición de la pena.

De otra parte, debemos establecer mecanismos disuasivos que contribuyan a preservar la confianza de la ciudadanía en sus servidores públicos. No podemos obviar que el policía, al igual que otros funcionarios del orden público con capacidad de arresto, constituyen un símbolo del cumplimiento de la ley y del orden público. Esta legislación servirá de disuasivo para evitar la práctica inescrupulosa antes descrita.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal, según enmendadas, para que se lea como sigue:

"Regla 171.-

El tribunal, a propia instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.

Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes:

(A) . . .

(a) . . .

(i) . . .

(B) . . .

(a) . . .

(g) . . .

Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguientes:

(A) Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona del acusado, incluyendo entre otros:

(a) . . .

(n) . . .

(0) . . .

(p) . . .

(q) que el delito haya sido cometido por un funcionario del orden público con capacidad de arresto."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de lo Jurídico y Seguridad Pública del Senado; previo estudio y consideración del P. de la C. 1338, tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas.

Al Texto:

Página 2, Línea 1:	Añadir "de 1935" después de "Procedimiento Criminal"
Página 2, Línea 4:	Añadir ", o a instancia" después de "a propia instancia"

Al Título:

Página 1, Línea 1:	Añadir "de 1935" después de " Procedimiento Criminal"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1338 propone añadir un inciso (q) a la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal de 1935, según enmendadas a fin de incluir como circunstancias agravantes que el delito haya sido sometido por un funcionario del orden público con capacidad de arresto.

Como bién expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, es alarmante observar que algunos miembros de la Policía de Puerto Rico se aprovechen de que están uniformados para cometer delitos contra sus conciudadanos. Si bien es cierto que esta actividad es ejercida por un número ínfinito de los miembros de la uniformada, no es menos cierto que estos casos aislados contribuyen grandemente a desacreditar a las fuerzas del orden público de Puerto Rico.

Según se resolviera en Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985), las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal son complementarias a las del Artículo 60 del Código Penal (33 L.P.R.A. Sec.3284). Este artículo dispone que las penas se fijaran de acuerdo a la mayor o menor gravedad del crimen cometido, dentro de los límites establecidos por Ley y tomando en consideración entre otras, las siguientes circunstancias: (a) la naturaleza de la acción u omisión delictuosa; (b) medios empleados; (c) la importancia de los deberes transgredidos; (d) extensión del daño del peligro causado; (e) edad, educación, historial social y reputación del autor; (f) conducta relacionada con el delito antes, durante y después de la comisión del mismo; (g) calidad de los móviles del hecho y (h) conducta de la víctima relacionada con la transacción delictuosa.

Por otro lado, la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II R 171, objeto de enmienda, establece los criterios que deben seguir los jueces al imponer la pena, a tenor con los hechos y circunstancias de cada caso en particular y la situación individual de cada convicto, ejerciendo su discreción en forma sabia y prudente. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 632, (1987). La mencionada regla enumera los hechos relacionados con la comisión del delito que podrá considerar el juez como circunstancias atenuantes y aquellos que podrán considerarse como circunstancias agravantes.

Cabe señalar que el Artículo 141 del Código Penal tipifica como delito la causal bajo estudio del P. de la C. 1338. El mismo establece una pena de reclusión de hasta (6) meses y multa máxima de quinientos (500) dólares. 33 L.P.R.A. sec. 4182.

Para el análisis de la presente medida contamos con la participación del Departamento de Justicia quienes señalaron que la presente enmienda es un ejercicio válido de la facultad de la Asamblea Legislativa de definir la conducta que podrá el juez considerar al imponer la pena.

En consideración a ésto cabe señalar que corresponde a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la facultad exclusiva de tipificar delitos e imponer penalidades. Artículo 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33

L.P.R.A. sec. 3031. En el ejercicio de esta facultad los Cuerpos Legislativos están únicamente limitados por los preceptos constitucionales, entre los cuales cabe mencionar la prohibición contra castigos crueles e inusitados contenida en la Sección 12 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta Cláusula sugirió "penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, penas no arbitrarias a la imposición, en fin, de la pena menos restrictiva de la libertad para lograr el fin por el cual se impone". Pueblo vs. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985).

En cuanto a la fijación de la pena se refiere la doctrina solo exige que se tenga una "razonable proporción" entre la pena impuesta y la conducta delictiva penada por Ley. Las penas, como las circunstancias agravantes o atenuantes, se fijan de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho cometido y al contexto en que el mismo se produce. Esto dentro de un marco de gran deferencia a la Rama Legislativa. Pueblo v. Echevarría Hernández, 91 J.T.S. 43.

Para el análisis del P. de la C. 1338 también contamos con el Tribunal General de Justicia a través de su Oficina de Administración de los Tribunales. Esta realizó un valioso estudio de la medida y añadió enmiendas que fueron acogidas por nuestra Comisión.

La Comisión de Derechos Civiles señaló que el proyecto es un ejercicio legítimo del poder legislativo que no incide con derechos humanos reconocidos en nuestro sistema democrático, por lo que señala no tener objeción a su aportación.

Por último, la Policía de Puerto Rico señaló apoyar el P. de la C. 1338 y señalaron:

"Sin dudas la función que estos desempeñan (los policías) constituye un símbolo del cumplimiento de la Ley y del orden público. En su gran mayoría estos servidores públicos ejercen una labor de excelencia al pueblo, aun poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familiares. Por otro lado, con toda razón es alarmante y repugnante la conducta de un solo miembro de la Policía que se aproveche que está uniformado para cometer delito contra sus conciudadanos. La Policía de Puerto Rico rechaza categóricamente esta conducta. Favorecemos toda medida que vaya dirigida a establecer mecanismos disuasivos que contribuyan a preservar la confianza de la ciudadanía en sus servidores públicos".

Por los fundamentos antes expuestos vuestras Comisiones de lo Jurídico y de Seguridad Pública del Senado recomiendan favorablemente la aprobación del P. de la C. 1338, con las presentes enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivera
Presidenta
Comisión de Seguridad Pública"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2037, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505, de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipo que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 40, según se detalla a continuación:

1. Departamento de Salud
   a. Aportación a Sra. Ana Román Díaz para gastos médicos
   Seguro Social 580-50-7967
   Urb. Lourdes Calle Bernardette
   #680 Saint Just, Trujillo Alto
   Teléfono 292-1229 . . . . . $3,000.00
   b. Aportación al niño Josue Enoc Nery Alejandro para gastos médicos
   Seguro Social 596-30-6139
   Calle Delgado MI-A
   Villa Justicia, Carolina P. R. 00985
   Teléfono 757-7869 . . . . . 1,800.00

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2121, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 se asignó al Municipio de Toa Baja la cantidad de setecientos cuarenta y cinco mil (745,000) dólares para realizar actividades que promovieran el bienestar social, deportivo, educativo y cultural en la comunidad, y de esta manera mejorar la calidad de vida en la misma. De estos fondo hubo una partida sobrante de dieciocho mil cincuenta y nueve dólares con setenta y nueve centavos ($18,059.79). Estas partidas sobrante está distribuida de la siguiente manera:

La Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, en su inciso (E) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(E) Mejoras al Centro Comunal El Plantío $4,758.50

La Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, en su inciso (B) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(B) Construcción de verja alrededor del
Antiteatro Julita Ross en Levittown 3,441.24

La Resolución Conjunta Núm. 116 de 8 de agosto de 1993, en sus incisos (VI, VII) tuvo un sobrante descrito a continuación:

(VI) Mejoras al Estadio Tercera Sección de Levittown 6,000
(VII) Mejoras al Parque de Sabana Seca 3,860.05

Estos fondos sobrantes no fueron utilizados por lo que se encuentran disponibles para ser reasignados.

La recreación y educación son elementos indispensables para la formación de personas sanas mental, emocional y físicamente. Su práctica perseveramente rinde beneficios innumerables y hace de nuestra gente seres completos y realizados.

Para ello es imprescindible proveerlos de facilidades recreativas adecuadas y en óptimas condiciones para que puedan ocupar su tiempo sanamente y desarrollar su potencial al máximo.

Po lo antes expuesto, este Legislador entiende que procede la reasignación de fondos para la construcción de unas gradas en la comunidad Las Colinas de Toa Baja.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la comunidad Las Colinas en Toa Baja.

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones particulares o con otros fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2122, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil quinientos setenta y cinco (10,575) dólares provenientes de los incisos f, k, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Número 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas sociales culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22 y para el Equipo de Volibol Superior Los Patriotas de Lares.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil quinientos setenta y cinco (10,575) dólares provenientes de los incisos f, k, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de

1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 7 de 4 de abril de 1997; para llevar a cabo lo siguiente:

a) Aportación al Equipo Volibol Superior Los Patriotas de Lares $6,000
b) Para la compra de materiales, trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas sociales culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22 . . . . . $4,575

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1282, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueño declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Jayuya que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1283, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lares que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1284, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Ponce que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1285, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Sabana Grande que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1286, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Utuado que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1289, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Adjuntas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1290, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guánica que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1291, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guayanilla que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1292, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Maricao que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1293, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Yauco que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1294, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lajas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1295, titulado:

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Peñuelas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos.
SR. RAMOS OLIVERA: Este es el Proyecto del Senado 1295, ¿el último, no?
SR. VICEPRESIDENTE: 1295.
SR. RAMOS OLIVERA: ¿95?
SR. VICEPRESIDENTE: Correcto.
SR. RAMOS OLIVERA: Sí. Es para hacer un comentario breve con relación a los proyectos presentados en la noche de hoy, en el Quinto Calendario. Realmente, pues me siento contento, muy contento de que la

compañera senadora Carmín Berríos, pues le diera seguimiento a estos proyectos y ya en la noche de hoy, pues se convierten en realidad y quiero darle las gracias personalmente porque sabe que estos proyectos van en vía de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes del futuro conozcan de nuestra historia y si logramos que esto se plasme como debe plasmarse, de que se identifiquen todos los pueblos, todas estas estructuras históricas, vamos a tener historia por buenos años y que los puertorriqueños del futuro seguirán conociendo nuestra historia tal como ha sido.

Así que le agradecemos a la compañera Senadora por haber echado hacia adelante estos proyectos.

SRA. BERRIOS RIVERA: Gracias compañero Senador por sus palabras. Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1337, titulado:

"Para enmendar el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autonómos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de conceder al Alcalde o ejecutivo municipal sesenta (60) días adicionales para someter el informe completo de las finanzas y actividades del municipio ante la eventualidad de su municipio haber sido declarado zona de desastre oficialmente por el Gobernador de Puerto Rico."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 567, titulado:

"Para enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a los efectos de especificar los casos en que se habrá de imponer pensión alimentaria "pendiente lite" y proveer para la coadministración de los bienes gananciales durante el juicio."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida según informada por la Comisión de lo Jurídico.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1466, titulado:

"Para establecer la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico"; establecer el propósito de la misma; autorizar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a poner en ejecución esta Ley; disponer sus deberes y facultades; establecer un Fondo Especial; establecer delitos y penalidades y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1544, titulada:

"Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1820, titulada:

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para gastos relacionados con mejoras a las facilidades deportivas y recreativas del Residencial San Fernando en el Distrito Representativo Núm. 4; autorizar la contratación del desarrollo de las obras y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1888, titulada:

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el Barrio Buenos Aires del municipio de Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2102, titulado:

"Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación de la leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación; establecer definiciones; crear la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos; disponer sobre los poderes de ésta y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la consideración de esta medida se deje para un turno posterior.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1041, titulado:

"Para enmendar el Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de establecer una multa administrativa fija y obligatoria a cualquier municipio, funcionario o empleado municipal o miembro de la Junta de Subastas que no cumplan con los procesos establecidos para la adjudicación de obras, compras, servicios, subasta y contratos de arrendamientos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2181, titulado:

"Para autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a conceder asistencia relacionada al Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, a cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad gubernamental, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura"; disponer y recibir cualquier asistencia financiera o fondos federales, estatales, municipales o privados; e incluir los proyectos desarrollados bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro", en la definición de infraestructura del inciso (i) del Artículo 3 de la Ley Núm. 44, antes citada."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2168, titulado:

"Para eximir del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los constructores y a los proyectos de viviendas desarrollados a través del Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1881, titulado:

"Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de disponer que se inspeccione cada uno de los establecimientos e instituciones consignará dicha cantidad para el cuidado de niños licenciados por el Departamento de la Familia, no menos de dos (2) veces al año."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1926, titulado:

"Para declarar la primera semana de diciembre de cada año como la "Semana del Trovador Puertorriqueño"; facultar al Gobernador de Puerto Rico a que mediante proclama anual, exhorte al pueblo a organizar y patrocinar actividades propias durante este tiempo y para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y los organismos y entidades públicas y los municipios en Puerto Rico adopten las medidas necesarias para la conmemoración de esta semana y para la promoción de la participación de la ciudadanía y las entidades privadas en estas actividades."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1911, titulado:

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 6 y adicionar nuevas Secciones 12 y 13, a la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de establecer un costo total por la otorgación de la licencia a establecimientos de cuido de niños de acuerdo a la capacidad del servicio, que acompañará cada solicitud de autorización provisional, especial y de licencia y crear el Fondo Especial Independiente. Para ordenar al Departamento de la Familia, publicar, en los rotativos de mayor circulación del país, la lista de establecimientos a los cuales se le ha expedido la licencia correspondiente y están operando y establecer un sistema de multas cuando el establecimiento no cumpla con alguno de los requisitos establecidos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1962, titulado:

"Para enmendar la Regla 46 de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, a los efectos de establecer que los términos que se calculen a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden, comenzarán a correr a partir del depósito en el correo de la notificación de la sentencia cuando esta fecha sea distinta a la del archivo en autos de la sentencia u orden del tribunal."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1936, titulado:

"Para enmendar el inciso (c) y añadir el subinciso (8) al Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; enmendar el Artículo 18.010 y el Artículo 18.020; añadir el inciso (3) y renumerar los incisos (3), (4), (5) y (6) como (4),(5),(6) y (7) en el Artículo 18.030; añadir los incisos (3) y (6) y renumerar los incisos (3) y (4) como (4) y (5) en el Artículo 18.040; añadir el inciso (3) en el Artículo 18.050; enmendar el Artículo 18.060; enmendar los incisos (1), (2) y (4) del Artículo 18.070; enmendar los incisos (1) y (3) del Artículo 18.090; enmendar el Artículo 18.100; y el Artículo 18.120 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de permitir que el cargo por seguros autorizado se incluya; y disponer la garantía adicional por cualquier deuda con arreglo a o en relación con un préstamo específico u otra transacción de crédito el seguro por desempleo involuntario de crédito, además del seguro de vida de crédito y el seguro de incapacidad de crédito; disponer que dichos seguros podrán ser ofrecidos después que el préstamo haya sido aprobado; disponer que el Comisionado de Instituciones Financieras someta un informe sobre los efectos de esta Ley; y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido informada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1936.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1936, titulado:

"Para enmendar el inciso (c) y añadir el subinciso (8) al Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; enmendar el Artículo 18.010 y el Artículo 18.020; añadir el inciso (3) y renumerar los incisos (3), (4), (5) y (6) como (4),(5),(6) y (7) en el Artículo 18.030; añadir los incisos (3) y (6) y renumerar los incisos (3) y (4) como (4) y (5) en el Artículo 18.040; añadir el inciso (3) en el Artículo 18.050; enmendar el Artículo 18.060; enmendar los incisos (1), (2) y (4) del Artículo 18.070; enmendar los incisos (1) y (3) del Artículo 18.090; enmendar el Artículo 18.100; y el Artículo 18.120 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según

enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de permitir que el cargo por seguros autorizado se incluya; y disponer la garantía adicional por cualquier deuda con arreglo a o en relación con un préstamo específico u otra transacción de crédito el seguro por desempleo involuntario de crédito, además del seguro de vida de crédito y el seguro de incapacidad de crédito; disponer que dichos seguros podrán ser ofrecidos después que el préstamo haya sido aprobado; disponer que el Comisionado de Instituciones Financieras someta un informe sobre los efectos de esta Ley; y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto de la Cámara 497, titulado:

"Para enmendar la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de disponer que las vistas y procedimientos en los casos de disolución del matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, sean celebrados en privado."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón.
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, señor Presidente.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1338, titulado:

"Para añadir un inciso (q) a la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a fin de incluir como circunstancia agravante que el delito haya sido cometido por un funcionario del orden público con capacidad de arresto."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la enmienda al título contenida en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2037, titulada:

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2121, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2122, titulada:

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil quinientos setenta y cinco (10,575) dólares provenientes de los incisos f, k, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Número 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas sociales culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22 y para el Equipo de Volibol Superior Los Patriotas de Lares."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia, la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al turno de Mociones.
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1311, Proyecto de la Cámara 2058, Proyecto de la Cámara 2066, Proyecto de la Cámara 2093, Proyecto de la Cámara 2095, Proyecto de la Cámara 2103, Proyecto de la Cámara 2105, Proyecto de la Cámara 2106, Proyecto de la Cámara 2108, Proyecto de la Cámara 2109, Proyecto de la Cámara 2110, Proyecto de la Cámara 2111 y Proyecto de la Cámara 2112, y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura de estas medidas.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1311, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para derogar la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, y crear la "Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales", con el propósito de que toda convicción por delito menos grave cuya sentencia haya sido cumplida pueda eliminarse del expediente de antecedentes penales, cuando hayan transcurrido tres (3) años de la última convicción, y para reducir el término para solicitar la eliminación del expediente de antecedentes penales de toda convicción de delito grave.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los pasados diez (10) años en Puerto Rico se han logrado convicciones por ciento noventa y ocho mil quinientos veintiún (198,521) delitos graves y por ciento noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos (198,382) delitos menos graves. Ante estas convicciones, estas personas están cumpliendo o han cumplido la sentencia impuesta, por lo que muchos han pagado o lo están pagando para con la sociedad.

El Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, establece el término de tiempo que una persona convicta de un delito grave o menos grave tiene que esperar para solicitar que se elimine dicha convicción de su expediente de antecedentes penales. Los términos aquí dispuestos resultan muy onerosos. El sistema de derecho los mantiene penalizados al mantener en su expediente de conducta la convicción por un término excesivo de años que constituye otra penalidad para aquel que interese solicitar un empleo, ya que no le permitirá conseguir un trabajo que le ayude a rehabilitarse e integrarse a nuestra sociedad. El noventa por ciento (90%) de las empresas privadas y del gobierno requieren un Certificado Negativo de Antecedentes Penales a las personas que solicitan empleo. En la mayoría de los casos se les deniega el empleo por la convicción existente en su certificado, convicción que permanece por un exagerado número de años.

Mediante esta Ley se deroga la extensamente enmendada Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, y se crea la "Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales", con el propósito de que toda convicción por delitos menos grave cuya sentencia haya sido cumplida pueda eliminarse pasado tres (3) años de la última convicción, y para reducir el término para solicitar la eliminación del expediente de antecedentes penales de toda convicción de delito grave. Con las enmiendas propuestas se facilita la plena rehabilitación y reintegración del convicto a la sociedad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título

Esta Ley se conocerá como Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales.

Artículo 2.-Procedimiento

(a) Toda persona que haya sido convicta de delito grave, cuando hayan transcurrido ocho (8) años desde la extinción de la pena de la última convicción y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno, podrá solicitar y obtener del Superintendente de la Policía, mediante declaración jurada acompañada de un comprobante de Rentas Internas por la suma de veinte (20) dólares, la eliminación de dicha convicción de su expediente de antecedentes penales.

Cuando se trate de convicciones por delitos menos grave, cuyas sentencias hayan sido cumplidas, podrá solicitar la eliminación de dicha convicción cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la última convicción.

Si la petición le fuere denegada por el Superintendente, el interesado podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia correspondiente mediante una petición original.

(b) En los casos de convicciones por los delitos de asesinato, homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorción, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, robo de menores, escalamiento agravado, incendio agravado, venta y/o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, cualquier violación a la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, que constituya delito grave, y cualquier violación a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave, la persona podrá solicitar y obtener del Tribunal de Primera Instancia una orden para que dichas convicciones sean eliminadas de su expediente de antecedentes penales, siempre que hayan transcurrido quince (15) años desde la extinción de la pena de la última convicción, que durante ese tiempo no haya cometido delito alguno, y que tenga buena reputación en la comunidad.

Artículo 3.-Presentación de Evidencia

Para obtener la orden del tribunal a que se refiere al artículo anterior, el interesado deberá presentar una solicitud a la Sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia, exponiendo bajo juramento su pretensión debidamente formulada y acompañada de la prueba documental pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de toda la prueba documental le será remitida al Ministerio Fiscal y al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, simultáneamente con su presentación.

El tribunal celebrará vista en la que el peticionario, podrá someter al tribunal toda la evidencia que juzgue necesaria.

En cualquier vista a celebrarse en el Tribunal de Primera Instancia bajo lo dispuesto en el Artículo anterior, será obligatoria la comparecencia de los abogados de la Policía de Puerto Rico o Ministerio Fiscal. En uno u otro caso, la comparecencia podrá ser personalmente o por escrito.

Artículo 4.-Apelación

La decisión del Tribunal de Primera Instancia podrá ser apelada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones correspondiente, y revisada por el Tribunal Supremo mediante el recurso de Certiorari.

Artículo 5.-Derogación

Se deroga la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada.

Artículo 6.-Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y evaluación del P. de la C. 1311, tiene el honor de recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en este informe.

En El Texto:

Página 2, línea 15:	Después de "convicción" insertar el siguiente texto: "mediante la radicación de la declaración jurada y el pago de los derechos a que se hace referencia en el párrafo precedente"
Página 3, línea 2:	Tachar "Primera Instancia correspondiente" y sustituir por el siguiente texto: "Circuito de Apelaciones, mediante recurso de revisión, según dispone la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada."
Página 3, línea 3:	Tachar todo su contenido
Página 3, línea 5:	Tachar "extorción" y sustituir por "extorsión"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1311, tiene por objeto crear la nueva "Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales" y, al mismo tiempo deroga la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, que al presente atiende esta materia.

El propósito de la presente medida es el de uniformar los términos para solicitar la eliminación de delitos del expediente de antecedentes penales de los ciudadanos. La medida establece diversos términos para solicitar la eliminación de antecedentes penales.

ANALISIS ARTICULO POR ARTICULO

Artículo 1: nombre de la Ley.

Artículo 2: Procedimiento

a) Delitos graves:

El convicto por delito grave podrá solicitar que se limpie su récord si cumple con los siguientes requisitos:

-Haber cometido delito durante el referido término de 8 años.

-Presentar una declaración jurada, acompañada de un comprobante de Rentas Internas de $20.00.

b) Delitos menos graves:

El convicto por delito menos graves podrá solicitar se limpie su récord si cumple con los siguientes requisitos:

-Haber transcurrido TRES (3) años desde que el solicitante extinguió la sentencia.

-No haber cometido delito durante el referido término de 3 años.

-Presentar una declaración jurada, acompañada de un comprobante de Rentas Internas de $20.00.

c)Delitos menos graves:

El convicto por los delitos graves particularmente serios, contra la persona y contra la seguridad pública, tales como: asesinato, robo de menores, violación e infracciones a la legislación de sustancias controladas, seguirá un procedimiento diferente para solicitar se eliminen sus convicciones de su expediente de antecedentes penales:

-Presentará su solicitud al Tribunal de Primera Instancia, y pagará los aranceles correspondientes.

-Haber transcurrido Quince (15) años desde que el solicitante extinguió la sentencia.
-Tener buena reputación en la comunidad.

Artículo 3: Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia

En el caso de los delitos graves específicamente enumerados, el convicto deberá presentar su solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, bajo juramento, acompañará la prueba que tenga disponible para justificar su solicitud, y notificará la solicitud y la prueba al Ministerio Fiscal y al Superintendente de la Policía.

El tribunal celebrará una vista en la cual el peticionario podrá someter toda la evidencia que entienda necesaria, y a la misma comparecerá en representación del Estado el fiscal o un abogado de la Polícia de Puerto Rico.

Artículo 4: Revisión Judicial

De la decisión del Tribunal de Primera Instancia en los casos de delitos graves específicamente enumerados, podrá recurrirse en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones y de dicho tribunal al Tribunal Supremo por vía de certiorari.

Artículo 5: Derogación

Deroga la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, que regula al presente la materia objeto de la presente medida.

Artículo 6: Vigencia

Por todos los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado tiene el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 1311 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2057, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito contra el derecho de reunión.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de delito contra el derecho de reunión.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 142 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 142.-Delito contra el derecho de reunión

Toda persona que perturbare o molestare o impidiere una reunión lícita y pacífica, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión.

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2057, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2057 es enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios de la comunidad como alternativa penal para el delito contra el derecho de reunión.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2057, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2058, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 151 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de revelación de secreto profesional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de revelación de secreto profesional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 151 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 151.- Revelación de secreto profesional

Toda persona que sin justa causa, en perjuicio de otra, revelare secretos que hubieren llegado a su conocimiento en virtud de su profesión, o ministerio religioso, cargo u oficio, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2058, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2058 es enmendar el Artículo 151 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de revelación de secreto profesional..

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2058, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2066, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 116 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de anuncios obscenos, propaganda o promoción de venta y distribución.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de anuncios obscenos, propaganda o promoción de venta y distribución.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 116 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 116.-Anuncios obscenos, propaganda o promoción de venta y distribución, solicitación

Toda persona que escriba, prepare, exhiba, publique, anuncie o solicite de cualquier persona que publique o exhiba un anuncio obsceno o que en cualquier otra forma promueva la venta o la distribución de material obsceno, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2066, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2066 es enmendar el Artículo 116 de la Ley Núm. 115 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",

a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de anuncios obscenos, propaganda o promoción de venta y distribución.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2066, recomendando su aprobación sin enmiendas .

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2093, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"**LEY**

Para enmendar el Artículo 199 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alarma falsa.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contriubuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental de convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de alarma falsa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 199 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 199.-Alarma Falsa

Toda persona que a sabiendas dé un aviso, seña o alarma falsa de fuego o de la existencia de una bomba o cualquier otro artefacto explosivo en un edificio, o cualquier otro sitio donde se hallen personas congregadas, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios a la comunidad en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2093, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas.

En El Texto:

Página 2, Línea 9: Tachar "las" y sustituir por "la"

Página 2, Línea 10: Tachar "penas" y sustituir por "pena" y después de "reclusión" tachar " o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2093 es enmendar el Artículo 199 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alarma falsa .

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115,

supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2093, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2095, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 203 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa para el delito de usurpación de cargo público.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de usurpación de cargo público.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 203 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 203.-Usurpación de cargo público

Será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discresión del tribunal, toda persona que:

a) . . . . . .

b) . . . . . .

En cualquiera de las modalidades anteriores, el tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de las penas de reclusión o multa estalecidas.

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2095, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas.

En El Texto:

Página 2, línea 6:	Tachar "discresión" y sustituir por "discreción"
Página 2, línea 10:	Tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 11:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2095 es enmendar el Artículo 203 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de usurpación de cargo público.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2095, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2103, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 217 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de listas fraudulentas y otros actos ilegales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental de convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de listas fraudulentas y otros actos ilegales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 217 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 217.-Listas fraudulentas y otros actos ilegales

Será sancionado con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que realizare cualquiera de los siguientes actos:

(a) . . . . . .

(b) . . . . . .

(c) . . . . . .

En cualquiera de las modalidades anteriores, el tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2103, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 11:	Tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 12:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2103 es enmendar el Artículo 217 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de listas fraudulentas y otros actos ilegales.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en

las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2103, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2105, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 218 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa a presentar lista de bienes o nombre.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de negativa a presentar lista de bienes o nombre.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 218 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 218.-Negativa a presentar lista de bienes o nombre

Será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que siendo requerida legalmente por un empleado o funcionario competente realizare cualquiera de los siguientes actos:

(a) . . . . . .

(b) . . . . . .

(c) . . . . . .

En cualquiera de las modalidades anteriores, el tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de las penas de reclusión o multas establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2105, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas.

En El Texto:

Página 2, línea 12:	Tachar "las penas" y susituir por " la pena "
Página 2, línea 13:	Tachar " o multas establecidas "

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2105 es enmendar el Artículo 218 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa a presentar lista de bienes o nombre.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso *Pueblo v. Falcón*, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista *R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño"* 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; *Artículo 8 de la Ley Núm.* 115, supra; *Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado*, 92 J.T.S. 63; *Pueblo v. Martínez Torres*, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una

herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2105, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2106, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entorpecer a un funcionario público en el cobro de deudas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de entorpecer a un funcionario público en el cobro de duedas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 219.-Entorpecer a un funcionario público en el cobro de deudas

Toda persona que entorpeciere u obstruyere a cualquier funcionario o empleado público en el cobro autorizado por ley, de rentas, contribuciones, arbitrios, impuestos, patentes, licencias u otras cantidades de dinero en que esté interesado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios a la comunidad en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2106, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 9:	Tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 11:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2106 es enmendar el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entorpecer a un funcionario público en el cobro de deuda.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos

en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2106, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2108, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha

contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental de convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 222.-Compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones

Será sancionado con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, no obstante, la nulidad de la operación, todo colector o agente que directa o indirectamente comprare cualquier porción de bienes inmuebles o muebles vendidos para el pago de contribuciones no satisfechas. El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas.

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2108, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 9:	Tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 10:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2108 es enmendar el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2108, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2109, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de venta ilegal de bienes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de venta ilegal de bienes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se emienda el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 223.-Venta ilegal de bienes

Será sancionado con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, no obstante, la nulidad de la operación, todo colector o agente que realizaré cualquiera de los siguientes actos:

(a) .....

(b) .....

(c) .....

(d) .....

En cualquiera de las modalidades anteriores, el tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, e lugar de las penas de reclusión o multa establecidas.

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2109, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 13:	Antes de "lugar" tachar "e" y sustituir por "en" y tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 14:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2109 es enmendar el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios de la comunidad como alternativa penal para el delito de venta ilegal de bienes.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisón entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2109, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2110, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 224 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de no permitir la inspección de libros y documentos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, como lo son todos los casos de no permitir la inspección de libros y documentos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 224 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 224.-No permitir la inspección de libros y documentos

Todo empleado encargado de la cobranza, recepción o desembolso de cualquiera de los fondos públicos que, requerido para que permita al funcionario competente inspeccionar los libros, documentos, recibidos y archivos pertenecientes a su oficina, dejare de hacerlo, o se negare a ello, será sancionado con pena de reclusión *por un término* que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discrección del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2110, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 10:	Tachar "las penas" y sustituir por "la pena"
Página 2, línea 11:	Tachar "o multa establecidas"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2110 es enmendar el Artículo 224 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de no permitir la inspección de libro y documentos.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos

en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2110, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2111, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 230 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de justicia por sí mismo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el

bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos delitos menos graves, como lo son todos los casos de justicia por sí mismo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 230 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 230.-Justicia por sí mismo

Toda persona que con el propósito de ejercer un derecho existente o pretendido, se hiciere justicia por sí misma, con fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, pudiendo recurrir a la autoridad pública, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar de las penas de reclusión o multa establecidas."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2111, tiene el honor de recomendar su aprobación con enmiendas:

En El Texto:

Página 2, línea 10: Tachar "las penas" y sustituir por "la pena" y después de "reclusión" tachar "o multa" y sustituir por coma y punto " "."

Página 2, línea 11: Tachar todo su contenido

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2111 es enmendar el Artículo 230 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de justicia por si mismo.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un

problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2111, recomendando su aprobación con las enmiendas sugeridas en el informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2112, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 231 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negar ayuda a hacer arresto.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito.

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos delitos menos graves, como lo son todos los casos de negar ayuda a hacer arresto.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 231 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 231.-Negar ayuda a hacer arresto

Toda persona que dejare de ayudar a la captura de alguna otra persona contra la cual se hubiere dictado auto de reclusión o se negare a hacerlo, o que dejare de ayudar a la captura de algún preso escapado, o a impedir que se perturbe el orden público, o negare su ayuda, después de haber sido requerido legalmente por algún alguacil, policía u otro agente de la administración de la justicia, será sancionada con pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares. El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicio a la comunidad en lugar de la pena de multa establecida."

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2112, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2112 es enmendar el Artículo 231 de la Ley Núm.115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negar ayuda a hacer arresto.

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario.

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia.

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[l]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal.

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por analogía.

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2112, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge A. Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la sesión de ayer se aprobó una moción de este Senador solicitando, número uno, que se dejara sin efecto el proceso de firma del Proyecto del Senado 1397, por parte del Presidente de la Cámara para poder enviarlo al Gobernador. Que se dejara sin efecto ese trámite y pedir autorización a la Cámara para reconsiderarlo aquí en el Senado.

En este momento vamos a solicitar, señora Presidenta, que se deje sin efecto ambas mociones aprobadas ayer.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, y a petición propia del señor Portavoz, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos señora Presidenta, que se forme un Cuarto Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1282, Proyecto del Senado 1283, Proyecto del Senado 1284, Proyecto del Senado 1285, Proyecto del Senado 1286, Proyecto del Senado 1289, Proyecto del Senado 1290, Proyecto del Senado 1291, Proyecto del Senado 1992, Proyecto del Senado 1293, Proyecto del Senado 1294, Proyecto del Senado 1295, Proyecto del Senado 1337; Proyecto de la Cámara 1466; Resolución Conjunta de la Cámara 1544, Resolución Conjunta de la Cámara 1820, Resolución Conjunta de la Cámara 1888; Proyecto de la Cámara 1041, Proyecto de la Cámara 2181, Proyecto de la Cámara 1881, Proyecto de la Cámara 1926, Proyecto de la Cámara 1911, Proyecto de la Cámara 1962, Proyecto de la Cámara 1936, Proyecto de la Cámara 497, Proyecto de la Cámara 1338; Resolución Conjunta de la 2037, Resolución Conjunta de la Cámara 2121, Resolución Conjunta de la Cámara 2122.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, Calendario de Votación Final. Se instruye al Sargento de Armas, para que llame a los señores Senadores.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1282

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Jayuya que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1283

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lares que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1284

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Ponce que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1285

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Sabana Grande que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1286

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Utuado que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1289

2Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Adjuntas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

P. del S. 1290

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guánica que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.

P. del S. 1291

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Guayanilla que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1292

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Maricao que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1293

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Yauco que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1294

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Lajas que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1295

"Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Peñuelas, que daten de siglos pasados o de principios del actual y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones."

P. del S. 1337

"Para enmendar el inciso (j) del Artículo 3.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autonómos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de conceder al Alcalde o ejecutivo municipal sesenta (60) días adicionales para someter el informe completo de las finanzas y actividades del municipio ante la eventualidad de su municipio haber sido declarado zona de desastre oficialmente por el Gobernador de Puerto Rico."

P. de la C. 497

"Para enmendar la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de disponer que las vistas y procedimientos en los casos de disolución del matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria potestad y custodia, y tutela, sean celebrados en privado."

P. de la C. 1041

"Para enmendar el Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de establecer una multa administrativa fija y obligatoria a cualquier municipio, funcionario o empleado municipal o miembro de la Junta de Subastas que no cumplan con los procesos establecidos para la adjudicación de obras, compras, servicios, subasta y contratos de arrendamientos."

P. de la C. 1338

"Para añadir un inciso (q) a la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal, según enmendadas, a fin de incidir como circunstancia agravante que el delito haya sido cometido por un funcionario del orden público con capacidad de arresto."

P. de la C. 1466

"Para establecer la "Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico"; establecer el propósito de la misma; autorizar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a poner en ejecución esta Ley; disponer sus deberes y facultades; establecer un Fondo Especial; establecer delitos y penalidades y para otros fines."

P. de la C. 1881

"Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 3 del 15 de febrero de 1955, según enmendada, para disponer que todo establecimiento o institución dedicada al cuido de ninos autorizado por el Departamento de la Familia sea inspeccionado por dicho Departamento no menos de dos (2) veces al año."

P. de la C. 1911

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 6 y adicionar nuevas Secciones 12 y 13, a la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, con el propósito de establecer un costo total por la otorgación de la licencia a establecimientos de cuido de niños de acuerdo a la capacidad del servicio, que acompañará cada solicitud de autorización provisional, especial y de licencia y crear el Fondo Especial Independiente. Para ordenar al Departamento de la Familia, publicar, en los rotativos de mayor circulación del país, la lista de establecimientos a los cuales se le ha expedido la licencia correspondiente y están operando y establecer un sistema de multas cuando el establecimiento no cumpla con alguno de los requisitos establecidos."

P. de la C. 1926

"Para declarar la primera semana de diciembre de cada año como la "Semana del Trovador Puertorriqueño"; facultar al Gobernador de Puerto Rico a que mediante proclama anual, exhorte al pueblo a organizar y patrocinar actividades propias durante este tiempo y para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y los organismos y entidades públicas y los municipios en Puerto Rico adopten las medidas necesarias para la conmemoración de esta semana y para la promoción de la participación de la ciudadanía y las entidades privadas en estas actividades."

P. de la C. 1936

"Para enmendar el inciso (c) y añadir el subinciso (8) al Artículo 14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; enmendar el Artículo 18.010 y el Artículo 18.020; añadir el inciso (3) y renumerar los incisos (3), (4), (5) y (6) como (4),(5),(6) y (7) en el Artículo 18.030; añadir los incisos (3) y (6) y renumerar los incisos (3) y (4) como (4) y (5) en el Artículo 18.040; añadir el inciso (3) en el Artículo 18.050; enmendar el Artículo 18.060; enmendar los incisos (1), (2) y (4) del Artículo 18.070; enmendar los incisos (1) y (3) del Artículo 18.090; enmendar el Artículo 18.100; y el Artículo 18.120 del Capítulo 18 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de permitir que el cargo por seguros autorizado se incluya; y disponer la garantía adicional por cualquier deuda con arreglo a o en relación con un préstamo específico u otra transacción de crédito el seguro por desempleo involuntario de crédito, además del seguro de vida de crédito y el seguro de incapacidad de crédito; disponer que dichos seguros podrán ser ofrecidos después que el préstamo haya sido aprobado; disponer que el Comisionado de Instituciones Financieras someta un informe sobre los efectos de esta Ley; y para otros fines."

P. de la C. 1962

"Para enmendar la Regla 46 de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, a los efectos de establecer que los términos que se calculen a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden, comenzarán a correr a partir del depósito en el correo de la notificación de la sentencia cuando esta fecha sea distinta a la del archivo en autos de la sentencia u orden del tribunal."

P. de la C. 2181

"Para autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a conceder asistencia relacionada al Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35, a cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad gubernamental, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura"; disponer y recibir cualquier asistencia financiera o fondos federales, estatales, municipales o privados; e incluir los proyectos desarrollados bajo el Programa "Nuevo Hogar Seguro", en la definición de infraestructura del inciso (i) del Artículo 3 de la Ley Núm. 44, antes citada."

R. C. de la C. 1544

"Para ordenar a la Compañía de Turismo que realice un inventario por región de todas las facilidades turísticas de alojamiento que operan en Puerto Rico; para que dichas facilidades se clasifiquen por tipo de hospedería y cumplimiento con los permisos reglamentarios de las agencias gubernamentales."

R. C. de la C. 1820

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para gastos relacionados con mejoras a las facilidades deportivas y recreativas del Residencial San Fernando en el Distrito Representativo Núm. 4; autorizar la contratación del desarrollo de las obras y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 1888

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el Barrio Buenos Aires del municipio de Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella"."

R. C. de la C. 2037

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales y equipos que propenden al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta."

R. C. de la C. 2121

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja."

R. C. de la C. 2122

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil quinientos setenta y cinco (10,575) dólares provenientes de los incisos f, k, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Número 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas sociales culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22 y para el Equipo de Volibol Superior Los Patriotas de Lares."

VOTACION

Los Proyectos del Senado 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1337; los Proyectos de la Cámara 497; 1041; 1338; 1466; 1881; 1911; 1926; 1936 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1544; 1820; 1888; 2037; 2121 y 2122, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental.

Total 17

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

- - - -

Los Proyectos de la Cámara 1962 y 2181, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental.

Total 16

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senadora:

Mercedes Otero de Ramos

Total 1

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Aprobadas todas las medidas.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habíamos dejado pendiente una comunicación de la Cámara, informando que había aprobado, con enmiendas, la Resolución Concurrente del Senado Número 11, hemos dialogado con el Presidente de la Comisión de Gobierno que entendió en esta Resolución Concurrente y estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la cuarta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 146
Por el señor Colberg Toro:

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 31 y el inciso (a) de la Sección 431 de la Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968, según enmendada, denominada "Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico", a los fines de excluir el valor de la participación del cónyuge sobreviviente por concepto de bienes gananciales de la definición del caudal relicto bruto de un causante y del gravamen preferente a favor del Estado Libre Asociado."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 1894
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para adicionar un Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de otorgarle al Contralor de Puerto Rico la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas; y para prohibir la aplicación de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, conocida como "Ley de la Autoridad de Edificios Públicos" al ejercitarse la facultad conferida."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 1971
Por el señor Figueroa Figueroa:

"Para enmendar el inciso (f) del Artículo 4 y el inciso (c) del Artículo 9 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada conocida como "Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico", a los fines de aumentar las dietas de los integrantes de la Junta Hípica de Puerto Rico, y de autorizar a la Junta a efectuar sesiones o reuniones fuera de San Juan percibiendo la dieta correspondiente."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES)

P. de la C. 1975
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, conocida como la Ley de la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices, a fin de fijar el término de cinco (5) años después del vencimiento de la licencia como el término que tiene la Junta para denegar la renovación de la misma."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 2042
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 94 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de agresión simple."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2043
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el primer párrafo del Artículo 95 de la Ley Núm. 95 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de agresión agravada en su modalidad menos grave."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2054
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 139 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de violación de morada."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2055
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 140 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de orden de arresto o de allanamiento obtenida ilegalmente."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2070
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 125 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de celebración de matrimonios ilegales."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2074
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 130 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de restricción de libertad."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2075
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 132 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de demora en examen del arrestado."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2076
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 133 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de incumplimiento de auto de hábeas corpus."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2077
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 134 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de evasión de auto de hábeas corpus."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2078
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 135 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de nuevo arresto o encarcelamiento de persona excarcelada."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2079
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 178 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entrada en heredad ajena."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2081
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 179 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de daños." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2083
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 184-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negación u ocultación de gravamen registral." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2084
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 186 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de traslado fraudulento de bienes por el deudor." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2085
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 188 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraude en las construcciones." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2086
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 188-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraude en la ejecución de obras de construcción." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2087
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 190 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraude en las competencias." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2091
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 191 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de impostura."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2092
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 194 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de publicación de anuncios engañosos."(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2117
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 238 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de impedimento o persuación para que testigos no asistan a juicio."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2118
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 239 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de perpetración de fraude o engaño sobre testigos."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2120
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 249 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de despido o suspensión de empleado por servir como jurado o testigo." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2121
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 250 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de incomparecencia voluntaria e injustificada."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2122
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 252 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de conducta desordenada en presencia de la Asamblea Legislativa."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2123
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 255 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa de testigos a asistir, testificar o presentar evidencia."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2124
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 257 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compeler a acto propio de su cargo."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2126
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 259 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de declaración o alegación falsa sobre delito."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2128
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 260 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito alteración a la paz."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2130
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de insuficiencia de fondos."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2179
Por los señors Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges:

"Para enmendar Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la quinta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 1871
Por la señora Martínez Irizarry:

"Para enmendar el Artículo 6, Sección 8 inciso A de la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como la "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico" a los fines de incluir y extender la cubierta de beneficios a los servicios de maternidad y la administración de analgesia epidural durante el parto."
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)

P. de la C. 1982
Por el señor Mundo Ríos:

"Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", a los fines de disponer los derechos a ser satisfechos por la expedición de certificados o licencias a profesionales retirados bajo esta ley."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

P. de la C. 2069
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 118 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de difamación."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2080
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 178-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entrada ilegal."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2082
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 181 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fijación de carteles."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2114
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 235 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de desacato."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2115
Por los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 236 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de encubrimiento."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2116
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 237 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de uso de disfraz." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2125
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 258 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2129
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 262 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de conspiración." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2131
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de expedición de cheques, y otros, contra una cuenta cerrada." (DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2132
Por los señores Aramburu Díaz, Sánchez Fuentes y Figueroa Costa:

"Para enmendar el Artículo 270 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de prestación de nombre."
(DE LO JURIDICO)

P. de la C. 2198
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges:

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la sexta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 1063
Por el señor Báez González:

"Para ordenar a la Administración de Reglamentos y Permisos expandir el Programa de Regionalización, para designar a la Oficina Sub-Regional de Humacao como una Oficina Regional con las funciones, deberes y facultades inherentes a tal designación." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

R. C. de la C. 1654
Por el señor García de Jesús:

"Para ordenar a la Corporación Azucarera de Puerto Rico y/o Autoridad de Tierras de Puerto Rico presentar a la Asamblea Legislativa todas las negociaciones de los activos transferidos a los colonos de caña, por fases, mediante acuerdo con éstos y aprobados por su Junta de Gobierno para la consideración y aprobación final, según lo dispuesto por la Ley Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, según enmendada."
(AGRICULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)

R. C. de la C. 1805
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el almacen." (HACIENDA)

R. C. de la C. 1806
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 1807
Por el señor Mundo Ríos:

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación al señor Carlos López, Seguro Social #583-38-8217, para cubrir gastos médicos."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2123
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para reasignar la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares al Municipio de Quebradillas consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, los cuales fueron consignados originalemente al Municipio. Para que se autorice la tranferencia para gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la calidad de vida."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2124
Por el señor Acevedo Méndez:

"Para reasignar la cantidad de mil (1,000) dólares al Departamento de la Familia Oficina Regional de Arecibo consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, los cuales fueron asignados originalmente al Departamento de la Familia, los cuales habrán de utilizarse para ayuda a damnificados de Huracán Georges, innundaciones posteriores y reparación de vivienda. Para que se autorice la transferencia para obras y mejoras permanentes."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2130
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de la primera etapa del proyecto Monumento a la Historia "Puerta del Oeste" en la carretera núm. 2 de dicha municipalidad."
(HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado el sexto Orden de los Asuntos del día de hoy, solicitamos se comience con su consideración.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1369 y el P. de la C. 2057, sin enmiendas.

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1378, con enmiendas.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 1204.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1098, sin enmiendas.

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de lo Jurídico, un informe conjunto final, proponiendo la aprobación del P. del S. 1094, con enmiendas.

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1936, con enmiendas.

De la Comisión de Asuntos Municipales, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1396 y los P. de la C. 137 y 2133, sin enmiendas.

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo a los P. de la C. 791; 1077; 1097; 1337; 1457 y 1534, sin enmiendas.

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1214, con enmiendas.

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2154, con enmiendas.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 285 y a la R. C. de la C. 2108.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca del P. de la C. 1753.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca de la R. C. de la C. 1841.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo, en su Sesión del jueves, 12 de noviembre de 1998, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1671 que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:

En el Texto:

Página 2, línea 1: Eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"

Página 3, entre líneas 21 y 22: insertar lo siguiente "(dd) . . .

Sección 2.- Se enmienda el último párrafo del inciso (f) del Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.007.-Pago de Arbitrio de Construcción reclamaciones y otros A tenor con el . . .

(a) . . .

(f) Exenciones Mediante Ordenanza . . .

1. . . .

5. . . ."

Página 3, línea 31: Después de "permitan" insertar ""

Página 3, línea 32: Eliminar todo su contenido

Página 4, línea 1: Eliminar "Artículo 2.-" y sustituir por "Sección.3-"

En el Título:

Línea 1: Después de "1.003" insertar "y el último párrafo del inciso (f) del Artículo 2.007"

Línea 11: Después de "construcción;" insertar "clarificar que únicamente estarán exentos del pago de arbitrio toda actividad de construcción que realice por administración, cualquier agencia municipio o instrumentalidad del gobierno central municipal o estatal;"

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2069; 2080; 2082; 2114; 2115; 2116; 2129; 2131 y 2132 y la R. C. de la C. 1654 y solicita igual resolución por parte del Senado.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso d, de este turno, hay una comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo en su sesión de hoy jueves, 12 de noviembre, reconsideró y aprobó en Votación Final el Proyecto de la Cámara 1671, que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración lo aprobó nuevamente, tomando como base el texto enrolado y le introdujeron enmiendas. Solicitamos que esta reconsideración se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. de la C. 1796; 1808; 1823; 1846; 1856; 1924; 1925; 1926; 1927 y 1955 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, la R. C. de la C. 1993.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1311, titulado:

"Para derogar la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, y crear la "Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales", con el propósito de que toda convicción por delito menos grave cuya sentencia haya sido cumplida pueda eliminarse del expediente de antecedentes penales, cuando hayan transcurrido tres (3) años de la última convicción, y para reducir el término para solicitar la eliminación del expediente de antecedentes penales de toda convicción de delito grave."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2057, titulado:

"Para enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito contra el derecho de reunión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2058, titulado:

"Para enmendar el Artículo 151 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de revelación de secreto profesional."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que el Proyecto de la Cámara 2058, sea devuelto a la Comisión de lo Jurídico.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2066, titulado:

"Para enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito contra el derecho de reunión."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2093, titulado:

"Para enmendar el Artículo 199 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alarma falsa."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2095, titulado:

"Para enmendar el Artículo 203 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa para el delito de usurpación de cargo público."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2103, titulado:

"Para enmendar el Artículo 217 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de listas fraudulentas y otros actos ilegales."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2105, titulado:

"Para enmendar el Artículo 218 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa a presentar lista de bienes o nombre."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2106, titulado:

"Para enmendar el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entorpecer a un funcionario público en el cobro de deudas."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2108, titulado:

"Para enmendar el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2109, titulado:

"Para enmendar el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de venta ilegal de bienes."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2110, titulado:

"Para enmendar el Artículo 224 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de no permitir la inspección de libros y documentos."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2111, titulado:

"Para enmendar el Artículo 230 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de justicia por sí mismo."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2112, titulado:

"Para enmendar el Artículo 231 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negar ayuda a hacer arresto."

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida según informada por la Comisión de lo Jurídico.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1671, titulado:

"Para enmendar el inciso (cc) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 del 6 de septiembre de 1996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las disposiciones de la Ley Núm. 199, *supra.*"

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 1671, como fue reconsiderado en la Cámara de Representantes.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la séptima relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTOS DE LA CAMARA

P. de la C. 554
Por la señora Ruiz Class:

"Para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar los incisos (c) a la (g) como (d) a la (h) del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de que sólo se vendan uniformes, insignias y accesorios oficiales a los agentes que muestren sus tarjetas de identificación como evidencia o la autorización del Superintendente para realizar tal compra."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA)

P. de la C. 1022
Por el señor Marrero Hueca, Angel:

"Para enmendar los Artículos 8.005, 11.002, 11.004 y 11.006, y adicionar un Artículo 11.007 a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos"; y enmendar los Artículos 7, 202, 206, 216 y 217 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de disponer los requisitos que deberán cumplir las cotizaciones utilizadas en la compra de bienes muebles, suministros y servicios; establecer la responsabilidad legal de los miembros de la Junta de Subasta e incluir a éstos dentro de la definición del término "funcionario" contenida en el Código Penal; definir como delito contra la función pública el suscribir o expedir declaraciones falsas en certificaciones, cotizaciones, pliegos de subastas u otros documentos requeridos por la legislación fiscal que rige a los municipios y sus dependencias; disponer penalidades y multas a las acciones de un funcionario público municipal por aceptar, suscribir o expedir declaraciones falsas en certificaciones, cotizaciones u otros documentos; establecer penalidades y multas en aquellas acciones que tengan la intención de o beneficien a otro funcionario o empleado público u persona natural o jurídica, al llevar a cabo cualesquiera de los delitos contra la función pública o el erario público, según definidos por el Código Penal de Puerto Rico."
(DE LO JURIDICO; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)

P. de la C. 1773
Por el señor Granados Navedo:

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 21 de la Ley Núm. 70 de 23 junio de 1978, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", a fin de eliminar la restricción relativa a que un desarrollador no puede ceder, vender o de otro modo traspasar el crédito contributivo disponible por inversión en facilidades de disposición y/o tratamiento de desperdicios sólidos."
(HACIENDA; DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA)

P. de la C. 2040
Por el señor Misla Aldarondo:

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1990, la cual crea el Premio Anual de Fotografía Armando "Mandín" Rodríguez, a los fines de aumentar el premio en metálico."
(HACIENDA)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA

R. C. de la C. 2129
Por el señor Núñez Gonzalez:

"Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500) dólares para la compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas en el Huracán Georges del balance de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."
(HACIENDA)

R. C. de la C. 2070
Por el señor Sánchez Fuentes:

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno (52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para realizar obras que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación." (HACIENDA)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día el Proyecto del Senado 1214, Proyecto del Senado 1369, Proyecto del Senado 1396; Proyecto de la Cámara 1950, Proyecto de la Cámara 2154.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1214, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el sub inciso (7) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", con el propósito de conceder a las personas que presten servicios de seguridad a empresas públicas o privadas el derecho a portar, tener, poseer, transportar y conducir revólver o pistola legalmente mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones o fuera de servicio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico ha proliferado durante los últimos años la utilización de Guardias de Seguridad para brindar vigilancia a Condominios, Hospitales, Centros Comerciales e inclusive a Instrumentalidades gubernamentales.

Estos Guardias de Seguridad han venido a suplir la necesidad de servicio de vigilancia las veinticuatro (24) horas del día en lugares en los que el flujo de público es constante.

Estas personas que prestan servicios de Seguridad a Empresas Públicas o Privadas en dichas ocasiones se ven expuestas a situaciones de graves daños corporales o de muerte al defender la vida de las personas que acuden por ejemplo a Centros Comerciales cuando son víctimas de algún robo a mano a armada o asesinato u otro delito. Por lo que luego del acto delictivo están expuestsas a ser identificadas por la persona que cometió el delito.

La Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada, concedió a las personas que prestan servicios de seguridad a empresas privadas o públicas el derecho a tener, poseer, prestar, transportar y conducir armas legalmente mientras presten tales servicios, para ello deben tener previamente una licencia concedida por el Tribunal de Primera Instancia ante el cual justificará dicha persona o patrono la necesidad de tal licencia. No obstante, las circunstancias imperantes en nuestra sociedad con relación a la actividad delictiva ameritan a estas personas la concesión del derecho a poseer, portar, tener y transportar armas de fuego también fuera de sus horas de servicio para la defensa de su vida y propiedad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el sub-inciso (7) del inciso (b) del artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada para que lea como sigue:

"7- Las Personas que presten servicios de seguridad a empresas pública o privadas mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones o fuera de servicio, previa licencia del Tribunal Superior ante el cual justificará dicha persona o su patrono, la necesidad de tal licencia".

Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y anáisis del Proyecto del Senado 1214, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas.

En El Texto Decretativo:

A la página 2, línea 1, eliminar "Sección 1" y sustituir por "Artículo 1".

A la página 2, línea 1, después de "el," eliminar "sub-inciso (7) del inciso (b) del artículo" y sustituir por "apartado (2) del inciso (c) del Artículo".

A la página 2, líneas 3 a la 6, eliminar todo su contenido y sustituir por

"(c) Podrán tener, poseer, transportar y conducir revólver o pistola legalmente:

***

2. Las personas que presten servicios de seguridad a empresas públicas o privadas mientras presten tales servicios, previa licencia del Tribunal Superior ante el cual justificará dicha persona la necesidad de tal licencia. *La vigencia de dicha licencia estará condicionada a la vigencia del contrato de trabajo como guardia de seguridad".*

En La Exposición de Motivos:

A la página 1, línea 10, después de "están", eliminar "expuestsas" y sustituir por "expuestas"

A la página 2, línea 2, después de "licencia.", añadir "Un guardia de seguridad sólo puede solicitar y obtener licencias para tener y poseer un arma de fuego como jefe de familia cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos. Esto incluye el comprar el arma por su propia cuenta. Pueden, además, solicitar y obtener licencias para portar un revólver o pistola, siempre que se cumpla con las normas y requisitos establecidos. Tales licencias no se les expide en su carácter de guardia de seguridad, sino como ciudadanos particulares. Por tal razón, entendemos necesario eliminar la facultad del patrono para justificar la necesidad de la licencia ante el Tribunal. Es el individuo, **no el patrono,** el que tiene que justificar ante el Tribunal, la necesidad de la licencia."

A la página 2, línea 4, eliminar "poseer ," y "tener".

A la página 2, línea 5, después de "propiedad", añadir "mientras esté en vigencia el contrato de trabajo como guardia de seguridad.

Hay que recordar que la mayoría de los guardias de seguridad tienen familia y que por la naturaleza de su trabajo, los delincuentes, en venganza, pueden arremeter contra ella. Una vez el empleado deja de trabajar como guardia de seguridad, el potencial de peligro que generaba dicho trabajo desaparece. Al cesar el riesgo debido a la naturaleza del trabajo, también deberá cesar la licencia de portar, transportar y conducir el arma de fuego. Por lo anterior, entendemos necesario que la vigencia de la licencia de portar, transportar y conducir un arma de fuego deberá estar condicionada a la vigencia del contrato de trabajo."

En El Título:

A la página 1, línea 1, después de "el" eliminar "sub-inciso (7) y sustituir por "apartado (2) del inciso (c)".

A la página 1, líneas 3 a la 5 eliminar todo su contenido y sustituir por "eliminar la facultad del patrono para justificar la necesidad de la licencia de portar, transportar y conducir un revóler o pistola y condicionar tal licencia a la vigencia del contrato de trabajo como guardia de seguridad.".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1214 tiene el propósito de enmendar el apartado (2) del inciso (c) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", con el fin de conceder a las personas que presten servicios de seguridad a empresas públicas o privadas el derecho a portar, tener, poseer, transportar y conducir révolver o pistola legalmente mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones o fuera de servicio.

Para rendir el informe, se le solicitó ponencia escrita a las siguientes personas: Sargento José de Jesús Serrano, Presidente de Frente Unido de Policías Organizados; Lcdo. Pedro Toledo Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Teniente Nelson Echevarría Hernández, Presidente de la Federación Puertorriqueña de Policias; Hon. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia; Sr. Del Rosario, Wackenhut Puerto Rico Inc. y Sra. Gladys García, Administradora de Puerto Nuevo Security Guard Inc.

En nuestra isla, durante los últimos años ha habido un aumento en la utilización de guardias de seguridad para brindar vigilancia a Condominios, Hospitales, Centros Comerciales e inclusive a Instrumentalidades gubernamentales, entre otros. Estos Guardias de Seguridad han suplido la necesidad de servicio de vigilancia las veinticuatro (24) horas del día, en lugares en los que el flujo de público es constante y hay mayor exposición a la comisión de delitos.

La Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada, concedió a las personas que prestan servicios de seguridad a empresas privadas o públicas el derecho a tener, poseer, prestar, transportar y conducir armas legalmente mientras presten tales servicios. Para ello, estos guardias de seguridad deben tener previamente una licencia concedida por el Tribunal de Primera Instancia ante el cual la persona o el patrono justificará la necesidad de la licencia.

En Puerto Rico el poseer y portar un arma de fuego no constituye un derecho sino un privilegio; en decir, es una actividad controlada y restringida por el Estado. Op. Sec. Just. Núm. 37 de 1987. Un guardia de seguridad sólo puede solicitar y obtener licencias para tener y poseer un arma de fuego como jefe de familia cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos. Esto incluye el comprar el arma por su propia cuenta. Pueden, además, solicitar y obtener licencias para portar un revólver o pistola, siempre que se cumpla con las normas y requisitos establecidos. Tales licencias no se les expide en su carácter de guardia de seguridad, sino como ciudadanos particulares. Por tal razón, entendemos necesario eliminar la facultad del patrono para justificar la necesidad de la licencia ante el Tribunal. Es el individuo, **no el patrono,** el que tiene que justificar ante el Tribunal, la necesidad de la licencia.

Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones, las personas que prestan servicios de seguridad a empresas públicas o privadas, se ven expuestas a varias situaciones en las que están en peligro sus vidas. Entre ellas se encuentran grave daño corporal o muerte. Esto, como consecuencia de defender la vida y propiedad de las personas que por ejemplo acuden a centros comerciales y son víctimas de delitos como robo a mano armada, asesinato u otros. Son delitos en los que las víctimas y demás personas envueltas están expuestas a ser reconocidas e identificadas por los delincuentes. Razón por la cual, deben, en todo momento, portar, transportar y conducir un arma para su protección, la de su familia y demás personas.

Hay que recordar que la mayoría de los guardias de seguridad tienen familia y que por la naturaleza de su trabajo, los delincuentes, en venganza, pueden arremeter contra ella. Una vez el empleado deja de trabajar como guardia de seguridad, el potencial de peligro que generaba dicho trabajo desaparece. Al cesar el riesgo debido a la naturaleza del trabajo, también deberá cesar la licencia de portar, transportar y conducir el arma de fuego. Por lo anterior, entendemos necesario que la vigencia de la licencia de portar, transportar y conducir un arma de fuego deberá estar condicionada a la vigencia del contrato de trabajo.

Debido a las circunstancias imperantes en nuestra sociedad con relación a actividades delictivas, se hace necesario crear legislación que ayude a proteger la vida de las personas en Puerto Rico. Así mismo, entendemos necesario extender a los guardias de seguridad, el derecho a portar y transportar armas de fuego fuera de sus horas laborables para proteger y defender su vida y la de otras personas. Esto, condicionando tal licencia, a la vigencia del contrato de trabajo como guardia de seguridad.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Luisa Lebrón Vda. de Rivea
Presidenta
Comisión de Seguridad Pública

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1369, y se da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Sentencias Suspendidas, al fin de excluir del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, conforme al Artículo 87 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando lo hace en estado de embriaguez.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, enmendó la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Sentencias Suspendidas. El Artículo 2 de la Ley Núm. 50, supra, proveía para excluir del beneficio de sentencias suspendidas a toda persona convicta de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. No obstante, la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, derogó tácitamente la enmienda que se había realizado al Artículo 2 mencionado anteriormente.

De la exposición de motivos de la Ley Núm. 50, supra, se desprende que la intención legislativa era adoptar medidas que permitan sacar a los conductores ebrios de las carreteras e imponer medidas que desalienten esos hábitos. El propósito principal es reducir las muertes ocasionadas por conductores de vehículos bajo los efectos del alcohol. Como cuestión de hecho, los efectos positivos que esta ley promueve son significativos. Reduce el porcentaje de alcohol para activar la presunción de embriaguez y aumenta las penalidades por conducir en estado de embriaguez en la Ley de Vehículos y Tránsito. Por otro lado, en su Artículo 4 enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259, supra, para añadir en las exclusiones del beneficio de la sentencia suspendida, la convicción por imprudencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Pueblo v. Nazario Hernández*, 95 J.T.S. 90, analizó el historial legislativo de la Ley Núm. 259, supra, en relación a la exclusión de los beneficios de sentencia suspendida en casos de convicción por negligencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. En la opinión emitida, el Tribunal interpretó que al aprobarse la Ley Núm. 8, supra, para excluir de los beneficios de sentencia suspendida a personas convictas por ciertas infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, en el proceso legislativo ocurrió una omisión en el lenguaje del texto de la medida. Ésta consistió en que se suprimió inadvertidamente, la exclusión de probatoria que propuso la Ley Núm. 50, supra. Con referencia a esto, nuestro más alto foro, por voz del Juez Asociado Negrón García expresó:

Estamos ante un error legislativo, tal como se desprende de la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989: "para enmendar el Artículo 2 de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, a fin de excluir de sus alcances a las personas convictas por ciertas infracciones a la Ley 17 de 19 de enero de 1951" (Ley de Armas). Sería absurdo interpretar que el propósito fue eliminar escasamente tres (3) meses después de aprobada la enmienda introducida por la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989.

Es la intención de esta Asamblea Legislativa corregir la omisión que por inadvertencia provocó que el estado de derecho vigente no contemple la exclusión del beneficio de sentencia suspendida en situaciones donde la persona es convicta por violar el Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico y conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, para que lea como sigue:

" Artículo 2.-

El Tribunal **[Superior]** **de Primera Instancia** podrá suspender los efectos de la sentencia que se hubiera dictado en todo caso de delito grave que no fuere asesinato, robo, incesto, extorsión, violación, crimen contra natura, actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor de 14 años, secuestro, escalamiento, incendio malicioso, sabotaje de servicios públicos esenciales, **imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez**, infracción a los Artículos 5, 6A en su modalidad de delito grave, 8 y 10 de la "Ley de Armas de Puerto Rico", o cualquier violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por la referida Ley de Explosivos de Puerto Rico, o cuando la persona utilice o intente utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa, y podrá así mismo suspender los efectos de la sentencia que hubiere dictado en todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción que hubiere dado lugar, además, a sentencia por delito grave que no fuere de los excluidos de los beneficios de esta ley, incluyendo el caso en que la persona haya sido declarada no culpable en dicho delito grave o rebajado dicho delito grave a delito menos grave y así convicta, y ordenará que la persona sentenciada quede en libertad a prueba siempre que al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran todos los requisitos a continuación se enumeran:

(1) .....
(2) .....
(3) .....
(4) ....."

Artículo 2.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 1369 recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

I. PROPOSITO DE LA MEDIDA

El 15 de octubre de 1998 se radicó el P. del S. 1369 y fue referido a la Comisión de lo Jurídico. Esta medida tiene el propósito de excluir del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, conforme al Artículo 87 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando lo hace en estado de embriaguez.

La Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, enmendó la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como *Ley de Sentencias Suspendidas*. El Artículo 2 de la Ley Núm. 50, supra, proveía para excluir del beneficio de sentencias suspendidas a toda persona convicta de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. No obstante, la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, derogó tácitamente la enmienda que se había realizado al Artículo 2 mencionado anteriormente.

II. ANALISIS DE LA MEDIDA

El 2 de mayo de 1997 se radicó el P. del S. 371 a los fines de excluir del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, conforme al Artículo 87 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando lo hace en estado de embriaguez. La medida fue aprobada por ambos Cuerpos Legislativos y enviada al Gobernador para su firma. No obstante, el P. del S. 371 no se convirtió en ley.

Ante la necesidad imperiosa de corregir la omisión legislativa que se cometió al aprobarse la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, la cual tuvo el propósito de excluir de los beneficios de sentencia suspendida a personas convictas por ciertas infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, en el proceso legislativo ocurrió una omisión en el lenguaje del texto de la medida; nuevamente se ha radicado esta medida.

Al analizar el historial legislativo del Artículo 2 de la *Ley de Sentencias Suspendidas* se observa que el mismo ha sufrido varias enmiendas. Al comparar el delito contenido en el Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico que tipifica la *imprudencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de motor* con el delito del Artículo 86 de *homicidio involuntario* que requiere el elemento de la negligencia para que se configure el delito, sería absurdo pensar que el legislador quisiera otorgar el beneficio de una sentencia suspendida a una persona que ha ocasionado la muerte de una persona al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. El estado de derecho vigente contempla que el Artículo 86 en el cual se tipifica el delito de homicidio involuntario y que está clasificado como delito menos grave, no está excluído del beneficio. Sin embargo, el Artículo 87, clasificado como delito grave, concede el beneficio de sentencia suspendida.

De la exposición de motivos de la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, se desprende que la intención legislativa era adoptar medidas que permitan sacar a los conductores ebrios de las carreteras e imponer medidas que desalienten esos hábitos. El propósito principal es reducir las muertes ocasionadas por conductores de vehículos bajo los efectos del alcohol. Como cuestión de hecho, los efectos positivos que esta ley promueve son significativos. Reduce el porcentaje de alcohol para activar la presunción de embriaguez y aumenta las penalidades por conducir en estado de embriaguez en la Ley de Vehículos y Tránsito. Por otro lado, en su Artículo 4 enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259, supra, para añadir en las exclusiones del beneficio de la sentencia suspendida, la convicción por imprudencia crasa y temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.

Es la intención de esta Asamblea Legislativa corregir la omisión que por inadvertencia provocó que el estado de derecho vigente no contemple la exclusión del beneficio de sentencia suspendida en situaciones donde la persona es convicta por violar el Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico y conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez.

Por las razones antes expuestas, la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. del S. 1369, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Jorge Santini
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1396, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimoquinto y décimoseptimo párrafos del Artículo 4.003; el primer párrafo, los incisos (b), (c), (d), (e) y (f) del primer párrafo y el último párrafo del Artículo 4.004; los Artículos 4.005, 4.006, 4.007; el primer párrafo del Artículo 4.008; el título, los incisos (a) y (c) y el segundo párrafo del Artículo 4.009; el título, el segundo y tercer párrafos del Artículo 4.010; el segundo párrafo del Artículo 4.011; el título y el primer, quinto, sexto y octavo párrafos del Artículo 4.013; el Artículo 4.014; el primer párrafo del Artículo 5.001; el segundo párrafo del Artículo 5.004, el primer párrafo del Artículo 5.010; los incisos (b), (j), (k), (m) y (p) del Artículo 5.011; el primer párrafo del Artículo 5.012; el segundo párrafo del Artículo 5.014; los incisos (a) y (b) del Artículo 8.016; el segundo párrafo del Artículo 18.009; los incisos (l) y (o) del Artículo 19.002; el primer párrafo del Artículo 19.003; y el Artículo 20.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a fin de sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de "Legislador Municipal".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" dispone que la Asamblea Municipal ejercerá el poder legislativo en el municipio. El proceso legislativo local se ejerce mediante la Asamblea Municipal de cada municipio, compuesta por asambleístas electos por el voto directo de los electores de cada término municipal en las elecciones generales.

Existe una gran similitud entre las labores que realizan los miembros de la Asamblea Legislativa y los "Asambleístas Municipales", quienes también se desempeñan en el proceso legislativo, pero a nivel municipal. A los Asambleístas Municipales, según la Ley Núm. 81, ante, le son aplicables, hasta donde es posible, todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley de Relaciones Federales a la Asamblea Legislativa y sus miembros. Además, los asambleístas gozan del privilegio de inmunidad parlamentaria por expresiones en las sesiones convocadas y en las comisiones. Entre sus funciones, se destacan la aprobación de la resolución del presupuesto general municipal, la confirmación de funcionarios y oficiales, la aprobación de resoluciones y ordenanzas, la aprobación de ordenanzas que imponen sanciones administrativas, la autorización de empréstitos y realizar investigaciones.

Este proyecto tiene el propósito de sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de "Legislador Municipal" en la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en cualquier otra legislación que se mencione, a tenor con la realidad de las funciones que estos servidores públicos realizan, las cuales son similares a la de los legisladores de la Asamblea Legislativa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Enmendar el cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimoquinto y décimoseptimo párrafos del Artículo 4.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.003.- Elección de los miembros de las Asambleas Municipales.-

. . .

Los tres (3) miembros restantes de cada una de las Asambleas Municipales, excepto Culebra, se elegirán de la siguiente manera: La Comisión Estatal declarará electos dos (2) candidatos **[asambleístas]** Legisladores Municipales entre los candidatos cuyos nombres figuren en la papeleta electoral dentro de la columna del partido principal que obtenga el segundo lugar en el número total de votos depositados para alcalde en las elecciones celebradas al efecto en el precinto o los precintos electorales de sus respectivos municipios, en la siguiente forma: aquellos dos (2) candidatos que obtengan mayor número de votos entre los candidatos cuyos nombres figuren en dicha columna en la papeleta electoral. En caso de que todos los candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales en dicha columna en la papeleta electoral obtengan igual número de votos, excepto uno, quien haya obtenido más votos que los demás, declarará electo a este último, y el candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal cuyo nombre aparezca en primer lugar en dicha columna en la papeleta electoral disponiéndose, que si el nombre del candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal que obtuvo el mayor número de votos aparece en primer lugar, entonces se declarará electo a éste, y el candidato cuyo nombre aparezca en segundo término en dicha columna en la papeleta electoral.

En caso de que todos los candidatos en dicha columna en la papeleta electoral obtengan igual número de votos, declarará electos a los dos (2) candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales cuyos nombres aparezcan en primer y segundo lugar en dicha columna en la papeleta electoral.

. . .

La Comisión Estatal declarará electo, además, al candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal que obtenga el mayor número de votos entre los candidatos cuyos nombres figuran en la papeleta electoral dentro de la columna del partido principal que obtenga el tercer lugar en el número total de votos depositados para alcalde en las elecciones celebradas al efecto en el precinto o los precintos electorales de sus respectivos municipios; y si todos dichos candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales obtienen el mismo número de votos, la Comisión Estatal declarará electo el candidato cuyo nombre aparezca en primer término dentro de la columna de dicho partido en la papeleta electoral; disponiéndose, que en el caso en que dos (2) o más candidatos en dicha columna estén empatados, la Comisión Estatal declarará electo el candidato cuyo nombre aparezca en el primer término dentro de la columna de dicho partido en la papeleta electoral.

Si solamente **[figurarán]** figuraran dos (2) partidos en la papeleta electoral, los tres (3) miembros restantes de cada Asamblea Municipal se elegirán de la siguiente manera: la Comisión Estatal declarará electos tres (3) candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales entre los candidatos cuyos nombres figuren en la papeleta electoral dentro de la columna del partido principal que obtenga el segundo lugar en el número total de votos depositados para alcalde en las elecciones celebradas al efecto en el precinto o los precintos electorales de sus respectivos municipios; en la siguiente forma: aquellos tres (3) candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales entre los candidatos cuyos nombres figuren en dicha columna en la papeleta electoral; en caso de que todos los candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales en dicha columna en la papeleta electoral obtengan igual número de votos, excepto uno, quien haya obtenido más votos que los demás, declarará electo a este último y a los candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales cuyos nombres aparezcan en primer y segundo lugar en dicha columna en la papeleta electoral, disponiéndose, que si el nombre del candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal que obtuvo el mayor número de votos aparecen en primer o segundo lugar, entonces se declarará electo a éste y a los candidatos cuyos nombres aparezcan en segundo y tercer término, o en primer y tercer término, respectivamente, en dicha columna en la papeleta electoral.

En caso de que todos los candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales en dicha columna en la papeleta electoral obtengan igual número de votos, excepto dos (2), quienes hayan obtenido más votos que

los demás, se declararán electos a éstos dos (2) y al candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal cuyo nombre aparezca en primer lugar en dicha columna en la papeleta electoral; disponiéndose, que si el nombre de cualquiera de los dos (2) candidatos a **[asambleístas]**Legisladores Municipales que obtuvieron más votos que los demás aparece en primer lugar, entonces se declararán electos a dichos dos (2) candidatos y al candidato cuyo nombre aparezca en segundo término en dicha columna en la papeleta electoral. Si los nombres de dichos dos (2) candidatos que obtengan más votos que los demás aparecen en primer y segundo lugar, se declararán electos a dichos dos (2) candidatos y al candidato cuyo nombre aparezca en tercer término en dicha columna en la papeleta electoral.

En caso de que todos los candidatos en dicha columna en la papeleta electoral obtengan igual número de votos, se declararán electos a los tres (3) candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales cuyos nombres aparezcan en primer, segundo y tercer lugar en dicha columna en la papeleta electoral.

. . .

El miembro restante en la Asamblea Municipal de Culebra se elegirá de la siguiente manera: la Comisión Estatal declarará electo al candidato a **[asambleísta]** Legislador Municipal que obtenga el mayor número de votos entre los candidatos cuyos nombres figuren en la papeleta electoral dentro de la columna del partido principal que obtenga el segundo lugar en el número total de votos depositados para alcalde en las elecciones celebradas al efecto en dicho municipio; y si todos dichos candidatos a **[asambleístas]** Legisladores Municipales obtienen igual número de votos, la Comisión Estatal declarará electo al candidato cuyo nombre aparezca en primer término dentro de la columna de dicho partido en la papeleta electoral; disponiéndose, que en caso en que dos (2) o más candidatos en dicha columna estén empatados, la Comisión Estatal declarará electo al candidato cuyo nombre aparezca en primer término dentro de la columna de dicho partido en la papeleta electoral.

. . .

Si por cualquier circunstancia cualquiera de los miembros restantes de cada una de las Asambleas Municipales a que hace referencia este Artículo no calificare para ser declarado electo por la Comisión Estatal, se designará en su lugar otra persona a propuesta del partido que eligió al **[asambleísta]** Legislador Municipal que no calificó para el cargo."

Artículo 2.- Enmendar los incisos (b), (c), (d), (e) y (f) y el quinto párrafo del Artículo 4.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.004.- Normas de Etica de los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales.-

Las siguientes normas generales regirán la conducta de los **[asambleístas]** Legisladores Municipales en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con los deberes oficiales de su cargo:

(a) . . .

(b) No podrán ser funcionarios ni empleados del municipio de cuya Asamblea sean miembros. No obstante lo antes dispuesto, cualquier **[Asambleísta]** Legislador Municipal que renuncie a su cargo como tal, podrá ocupar cualquier cargo o puesto de confianza o de carrera en el municipio en que fue electo, siempre y cuando se trate de un cargo o puesto que no haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo **[Asambleísta]** Legislador Municipal.

(c) No podrán mantener relaciones de negocios o contractuales de clase alguna con el municipio de cuya Asamblea sean miembros, ni con ningún otro con el que dicho municipio mantenga un consorcio o haya organizado una corporación municipal o entidad intermunicipal. Como excepción a lo dispuesto en este inciso, el Gobernador de Puerto Rico podrá conceder una dispensa sólo cuando la situación sea una extrema donde el servicio a ofrecerse no pueda proveerlo otra persona o cuando los costos envueltos lo justifiquen.

No se entenderá que un **[Asambleísta]** Legislador Municipal incurre en la conducta prohibida en este inciso cuando se trate de permisos, concesiones, licencias, patentes o cualquier otro de igual o similar naturaleza exigido por ley, ordenanza municipal o reglamento para que el **[Asambleísta]** Legislador Municipal pueda ejercer una profesión, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley y reglamento y no solicite trato preferente distinto al público en general.

(d) No podrán ser empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, del Centro, ni de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. A excepción

de lo antes dispuesto, los **[asambleístas]** Legisladores Municipales a la vez que cumplen sus términos de elección podrán ocupar o desempeñar cualquier otro empleo o cargo general en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no sea un cargo público electivo.

(e) No participará en los trabajos, deliberaciones y decisiones de los asuntos en el que tenga algún interés que pueda producirle un beneficio personal, bien directamente o a través de otra persona. Esta prohibición no se entenderá como que limita la participación de los **[asambleístas]** Legisladores Municipales en aquellos asuntos en que el beneficio que pueda recibir esté comprendido en la comunidad en general o una parte de ella.

(f) No podrá asumir la representación profesional de una persona ante los tribunales de justicia en una acción por violación a cualquier ordenanza municipal, ni prestar servicios de representación legal en ninguna acción administrativa o judicial incoada contra el municipio de cuya Asamblea sea miembro o en cualquier acción en que el municipio sea parte. Esta prohibición no aplicará cuando el municipio se convierta en parte después de iniciada la acción y tal intervención de parte no se deba a la acción o solicitud del **[asambleísta]** Legislador Municipal. Tampoco podrá prestar servicios profesionales a persona alguna ante una unidad administrativa o dependencia del municipio de cuya Asamblea sea miembro.

Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales estarán sujetos también al cumplimiento de las otras normas de conducta establecidas por la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como 'Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' y a los reglamentos adoptados en virtud de la misma."

Artículo 3.- Enmendar el Artículo 4.005 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.005.- Procedimiento para Cubrir Vacante de **[Asambleísta]** Legislador Municipal que no Toma Posesión.-

Cuando un candidato electo a **[Asambleísta]** Legislador Municipal no tome posesión del cargo en la fecha fijada en esta ley, se le concederá un término de quince (15) días, adicionales contados a partir de la referida fecha, para que preste juramento y asuma el cargo o en su defecto, que exprese las razones que le impidieron comparecer a ocupar el cargo. Si el candidato electo no comparece en el término antes dicho a tomar posesión del cargo ni expresa los motivos que le impiden asumir el mismo, la Asamblea notificará ese hecho por escrito y con acuse de recibo al organismo directivo local del partido político que lo eligió. Junto con dicha notificación, solicitará a dicho partido que dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma, someta un candidato para sustituir al **[Asambleísta]** Legislador Municipal electo de que se trate.

Si el organismo político local no toma acción sobre la petición de la Asamblea dentro del término antes fijado, el Secretario de la Asamblea deberá notificar tal hecho, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término, al Presidente del partido político que eligió al **[Asambleísta]** Legislador Municipal que no tomó posesión. Dicho Presidente cubrirá la vacante con el candidato que proponga el organismo directivo central del partido político que corresponda.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por un **[Asambleísta]** Legislador Municipal electo que no tome posesión del cargo deberá reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo establecidos en esta ley. Este tomará posesión del cargo de **[asambleísta]** Legislador Municipal inmediatamente después de su selección y lo desempeñará por el término que fue electa la persona a la cual sustituye.

El Presidente de la Asamblea Municipal o el Presidente del partido político que corresponda, según sea el caso, notificará el nombre de la persona seleccionada para cubrir la vacante de **[Asambleísta]** Legislador Municipal a la Comisión Estatal de Elecciones, para que dicha agencia expida el correspondiente certificado de elección."

Artículo 4.- Enmendar el Artículo 4.006 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.006.-Renuncia de **[Asambleísta]** Legislador Municipal.-

Cualquier miembro de la Asamblea podrá renunciar a su cargo mediante comunicación escrita dirigida a la Asamblea por conducto del Secretario de la misma. Este acusará recibo de la comunicación y la notificará inmediatamente al Presidente de la Asamblea. El Secretario deberá presentar la renuncia al pleno de la Asamblea en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre inmediatamente después de recibida. El cargo de **[Asambleísta]** Legislador Municipal quedará congelado a la fecha de la referida sesión. El Secretario de la Asamblea notificará la vacante dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la sesión en que sea efectiva la misma, por correo certificado con acuse de recibo, al organismo directivo del partido político local que eligió al **[Asambleísta]** Legislador Municipal renunciante.

El organismo político local tendrá quince (15) días para que someta un candidato para sustituir al **[Asambleísta]** Legislador Municipal renunciante. El Presidente local del partido; deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria a los miembros del Comité Municipal del Partido, en la cual se abrirán las nominaciones, se votará y certificará el nuevo **[asambleísta]** Legislador Municipal. El secretario del Comité preparará y certificará el acta de asistencia y votación efectuada. El Presidente local del partido enviará una (1) copia de la certificación de votación del Comité Municipal del Partido acompañado con los formularios correspondientes a la Comisión Estatal de Elecciones, otra copia al Secretario General del Partido que represente el **[Asambleísta]** Legislador Municipal elegido y una última copia al Secretario de la Asamblea, quien deberá notificar al pleno de la Asamblea en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre.

Si el organismo político local no toma acción dentro del término fijado de quince (15) días, el Secretario de la Asamblea deberá notificar al Secretario General del partido político que eligió al **[Asambleísta]** Legislador Municipal renunciante, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término. Al ser notificado, el Secretario cubrirá la vacante con el candidato que proponga el organismo central del partido político que corresponda.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante, deberá reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo establecido en esta ley y en la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como 'Ley Electoral de Puerto Rico'.

La Comisión Estatal de Elecciones expedirá el correspondiente certificado de elección, una vez reciba la notificación con el nombre de la persona seleccionada para cubrir la vacante del **[Asambleísta]** Legislador Municipal. Dicha notificación será remitida por el Presidente de la Asamblea Municipal, por el Presidente local del partido político o por el Secretario del partido político, según sea el caso. Una vez la Comisión Estatal de Elecciones expida el certificado al nuevo **[Asambleísta]** Legislador Municipal, el Presidente de la Asamblea tomará juramento a éste en el pleno de la Asamblea en la sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre después de emitida la certificación."

Artículo 5.- Enmendar el Artículo 4.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

Artículo 4.007.- Muerte o Incapacidad Permanente de **[Asambleísta]** Legislador Municipal.-

El Secretario de la Asamblea, tan pronto tenga conocimiento de que uno de los miembros de la Asamblea ha fallecido o se ha incapacitado total y permanentemente deberá constatar tal hecho fehacientemente e informarle por el medio más rápido posible al Presidente de la Asamblea. Asimismo, deberá notificarlo por escrito y con acuse de recibo al comité directivo local del partido político que eligió al **[Asambleísta]** Legislador Municipal de que se trate, no dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del fallecimiento o incapacidad total y permanente del miembro de la Asamblea de que se trate."

Artículo 6.- Enmendar el primer párrafo del Artículo 4.008 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.008.- Renuncia en Pleno y no Toma de Posesión de los Miembros Electos de la Asamblea.-

Cuando todos los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales electos se niegan a tomar posesión de sus respectivos cargos, o cuando renuncian después de tomar posesión de sus cargos, el Alcalde notificará tal hecho inmediata y simultáneamente al Gobernador de Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Elecciones y a los Presidentes de los organismos directivos locales y centrales de los partidos políticos que los eligieron. Esta notificación se hará por escrito y con acuse de recibo, no más tarde de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el Alcalde tuvo conocimiento de la negativa de los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales electos a tomar posesión de sus cargos. Dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha de recibo de la notificación del Alcalde, según conste en el acuse de recibo de la misma, los organismos directivos centrales y locales de los partidos políticos que los eligieron deberán someter los nombres de los **[asambleístas]** Legisladores Municipales sustitutos a la Comisión Estatal de Elecciones, con copia al Alcalde. La Comisión Estatal de Elecciones cubrirá las vacantes con las personas propuestas por el cuerpo directivo local y central del partido político que hubiese elegido a los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales que hayan renunciado o no tomaron posesión de sus cargos. Cuando surjan discrepancias sobre las personas propuestas entre el organismo directivo local y el central del partido político al cual corresponda cubrir las vacantes, prevalecerá la recomendación del organismo directivo central."

Artículo 7.- Enmendar el Artículo 4.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.009.- Separación del Cargo de **[Asambleísta]** Legislador Municipal.-

La Asamblea, con la aprobación de dos terceras (2/3) partes del número total de sus miembros mediante resolución al efecto podrá declarar vacante y separar del cargo a cualquiera de sus miembros, por las siguientes causas:

(a) El **[Asambleísta]** Legislador Municipal cambie su domicilio a otro municipio.

(b) . . .

(c) Sea declarado mentalmente incapacitado por tribunal competente o padezca de una enfermedad que le impida ejercer las funciones de **[Asambleísta]** Legislador Municipal.

Toda decisión de una Asamblea declarando vacante y separando del cargo a uno de sus miembros deberá notificarse por escrito al **[Asambleísta]** Legislador Municipal afectado mediante correo certificado con acuse de recibo, no más tarde de los dos (2) días siguientes a la fecha en que la Asamblea tome tal decisión. En dicha notificación se apercibirá al **[Asambleísta]** Legislador Municipal de su derecho a ser escuchado en audiencia pública por la Asamblea. Asimismo, se le informará que la decisión será final y firme en un término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la referida notificación, a menos que en ese mismo término muestre causa por la cual se deba dejar sin efecto la decisión de la Asamblea."

Artículo 8.- Enmendar el título, el segundo y tercer párrafos del Artículo 4.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.010.- Residenciamiento de **[Asambleísta]** Legislador Municipal.-

. . .

Una vez inicie el proceso de residenciamiento, el Presidente de la Asamblea convocará a una sesión extraordinaria para juzgar y dictar un fallo sobre la acusación formulada contra el **[Asambleísta]** Legislador Municipal de que se trate. Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales que hayan suscrito la acusación podrán participar en el proceso, pero no en las deliberaciones ni en la decisión sobre la acusación.

Sólo se producirá un fallo condenatorio en un proceso de residenciamiento con la concurrencia del voto de una mayoría de los miembros de la Asamblea que no hayan suscrito la acusación. El fallo así emitido será final y firme a la fecha de su notificación oficial al **[Asambleísta]** Legislador Municipal residenciado, según conste en el acuse de recibo del mismo.

. . ."

Artículo 9.- Enmendar el segundo párrafo del Artículo 4.011 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.011.- Procedimientos para Cubrir Vacantes.-

. . .

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por renuncia, muerte, incapacidad total o permanente, separación del cargo o residenciamiento de un **[Asambleísta]** Legislador Municipal, deberá reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo establecidos en esta ley. Dicha persona tomará posesión del cargo inmediatamente después de su selección y lo desempeñará por el término por el que fue electo el **[Asambleísta]** Legislador Municipal sustituido."

Artículo 10.- Enmendar el título y el primer, quinto, sexto y octavo párrafos del Artículo 4.013 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendado, para que lea como sigue:

"Artículo 4.013.- Obvenciones a los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales.-

A partir del 1ro. de julio de 1995, las Asambleas Municipales quedan autorizadas a decretar un aumento en las dietas que percibe cada **[Asambleísta]** Legislador Municipal, excepto el Presidente, por cada día de sesión debidamente convocada a que concurra, en calidad de reembolso para gastos. Este aumento se autorizará mediante ordenanza, con no menos de dos terceras (2/3) partes de los votos a favor de sus miembros.

. . .

A partir del 1ro. de julio de 1995, las Asambleas Municipales quedan autorizadas a decretar un aumento en las dietas que percibe el Presidente de la Asamblea, en calidad de reembolso para gasto por cada día de sesión debidamente convocada a que concurra. Este aumento, se autorizará mediante ordenanza, con no menos de dos terceras (2/3) partes de los votos a favor de sus miembros. El Presidente de la Asamblea, podrá, además, recibir un aumento a la dieta que percibe por concepto de su asistencia a cualquier reunión de una Comisión de Asamblea a la que asista, que será equivalente al aumento que se decrete mediante ordenanza para los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales.

Para cualquier aumento que se autorice por este concepto en la dieta percibida por el Presidente de la Asamblea, tendrán que tomarse en cuenta los criterios enumerados anteriormente, para considerar el aumento a los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales.

. . .

Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales, incluyendo al Presidente de la Asamblea, sólo podrán cobrar dieta equivalente a una reunión por cada día de sesión, aunque asistan a un número mayor de éstas en un mismo día. En todo caso, para tener derecho a las dietas autorizadas en este Artículo, la asistencia deberá ser a la sesión de la Asamblea o a las reuniones de distintas comisiones. Cuando coincida en un mismo día la celebración de una Sesión de Asamblea y Comisión a que asistan, éstos cobrarán una sola dieta por concepto de la Sesión de Asamblea celebrada. Todo **[Asambleísta]** Legislador Municipal que sea miembro de más de una Comisión, tendrá derecho a cobrar dieta por una reunión de Comisión al día, aunque asistan a un número mayor de éstas en un mismo día. Toda certificación de reunión de Asamblea y Comisión, deberá contener la hora de inicio y terminación para tener derecho a las dietas autorizadas en este Artículo. Aquellos **[Asambleístas]** Legisladores Municipales que sean funcionarios y empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrán derecho a cobrar las dietas autorizadas en este Artículo sin menoscabo del sueldo o salario regular que reciban."

Artículo 11.-Enmendar el Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.014.- Licencia de **[Asambleístas]** Legisladores Municipales.-

Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales que sean empleados de cualquier entidad pública, tendrán derecho a una licencia especial por causa justificada con derecho a paga. Esta licencia no deberá exceder un máximo de cinco (5) días anuales laborables, no acumulables. Además, tendrán derecho a una licencia sin sueldo que no excederá de cinco (5) días anuales laborables no acumulables independientemente de cualquier otra a la que ya tenga derecho. Ambas licencias serán utilizadas para asistir a sesiones de la Asamblea y a reuniones y vistas oculares de ésta con el propósito de desempeñar actividades legislativas municipales. La Asamblea deberá remitir por escrito, en cualquiera de las dos (2) licencias especiales, la citación a la reunión correspondiente al **[Asambleísta]** Legislador Municipal, por lo menos veinticuatro (24) horas antes. El **[Asambleísta]** Legislador Municipal tendrá la responsabilidad de presentar la misma en la entidad pública

pertinente para la adjudicación de la licencia especial que aplique a estos efectos. Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales que sean empleados de una entidad privada, tendrán derecho a una licencia sin sueldo o a una licencia especial por causa justificada, a discreción del patrono, independiente de cualquier otra licencia, de hasta un máximo de diez (10) días anuales laborables, no acumulables, para asistir a sesiones de la Asamblea y cumplir con las demás responsabilidades señaladas en el párrafo anterior.

Los patronos de los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales, sean éstos públicos o privados, no podrán discriminar contra dichos empleados por hacer uso de las licencias que aquí se establecen. Será responsabilidad del Comisionado de Asuntos Municipales preparar y promulgar, no más tarde de seis (6) meses después de aprobada esta ley, el reglamento estableciendo las normas uniformes que regirán las disposiciones de este Artículo."

Artículo 12.- Enmendar el primer párrafo del Artículo 5.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1997, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.001.- Sesión Inaugural, Elección de Oficiales, Reglamento y Quórum.-

La Asamblea Municipal celebrará su sesión inaugural el segundo lunes del mes de enero del año siguiente a cada elección general. Dicha sesión será convocada bajo la presidencia accidental del Secretario saliente o en su defecto por el **[Asambleísta]** Legislador Municipal electo de mayor edad y de más antigüedad como **[Asambleísta]** Legislador Municipal. En esta sesión inaugural la Asamblea elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente.

. . ."

Artículo 13.- Enmendar el segundo párrafo del Artículo 5.004 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.004.- Limitaciones Constitucionales de la Asamblea.-

. . .

Los miembros de la Asamblea tendrán los deberes y atribuciones que les señala esta ley. Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales gozarán de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en las sesiones ordinarias o extraordinarias de la misma o en cualquier reunión de las comisiones de ésta debidamente celebrada. Los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales usarán prudente y dentro del mayor marco de corrección, respeto y pulcritud el privilegio de inmunidad parlamentaria que se le confiere en este artículo."

Artículo 14.- Enmendar el primer párrafo del Artículo 5.010 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.010.- Secretario de la Asamblea.-

La Asamblea creará el cargo administrativo de Secretario. El Secretario de la Asamblea no podrá ser **[asambleístas]** Legislador Municipal y deberá poseer, por lo menos, un grado de Bachillerato de una institución de educación superior y gozar de buena reputación en la comunidad. Este será nombrado por el Presidente con el consejo y consentimiento de la Asamblea y responderá únicamente a ésta.

. . ."

Artículo 15.- Enmendar los incisos (b), (j), (k), (m) y (p) del Artículo 5.011 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.011.- Deberes del Secretario

El Secretario podrá tomar juramentos y declaraciones juradas en asuntos relacionados con las funciones y responsabilidades de su cargo y llevará un registro de las declaraciones juradas que suscriba. Además de cualesquiera otros dispuestos en este subtítulo o en otras leyes, el Secretario de la Asamblea tendrá los siguientes deberes:

(a) ...

(b) Velar por que los **[asambleístas]** Legisladores Municipales sean debidamente citados a las sesiones de la Asamblea, a las reuniones de las comisiones y a cualquier otro acto o reunión de ésta.

(c) . . .

(j) Custodiar los libros de actas, los juramentos de los **[asambleístas]** Legisladores Municipales y todos los demás documentos pertenecientes a los archivos de la Asamblea.

(k) Recibir del Alcalde el proyecto de resolución del presupuesto general de gastos del municipio y entregarlo a los **[asambleístas]** Legisladores Municipales no más tarde del comienzo de la sesión en que se vaya a considerar el mismo.

(l) . . .

(m) Certificar la asistencia de los **[asambleístas]** Legisladores Municipales a las sesiones de la Asamblea en pleno y a las reuniones de las comisiones de la misma.

(n) . . .

(p) Remitir a los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales la citación a reunión de Asamblea por lo menos veinticuatro (24) horas antes para que éstos cumplan con su deber ministerial y con lo dispuesto en el Artículo 4.014 de esta ley."

Artículo 16.- Enmendar el primer párrafo del Artículo 5.012 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.012.- Causas de Destitución del Secretario.-

La omisión voluntaria por parte del Secretario de la Asamblea de notificar al Presidente del organismo directivo central o local de un partido político, en los casos y términos que se disponen en esta ley, sobre cualquier vacante en el cargo de Alcalde o de **[asambleísta]** Legislador Municipal, constituirá falta administrativa y justa causa para su separación y destitución del cargo público.

. . ."

Artículo 17.- Enmendar el segundo párrafo del Artículo 5.014 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5.014.- Funciones de Administración Interna.-

. . .

La Asamblea administrará el presupuesto de gastos autorizados a la Rama Legislativa Municipal dentro del presupuesto general del municipio y de conformidad con el Artículo 2 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como 'Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo', tomará las providencias necesarias para la protección de los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y mientras van y regresan a las reuniones de la Asamblea a su hogar. A esos fines, la Asamblea establecerá las normas necesarias para autorizar los desembolsos y cualesquiera trasferencias internas de crédito dentro de su presupuesto, para la contratación de seguros contra accidentes y de vida, en términos iguales o similares al que cobija a los empleados municipales en el desempeño de deberes y funciones oficiales. Toda transacción con relación a dicho presupuesto, se hará siguiendo los procedimientos análogos a los establecidos por esta ley y cumpliendo con los reglamentos que apruebe el Comisionado y en las ordenanzas municipales pertinentes. El Presidente de la Asamblea establecerá los mecanismos administrativos necesarios para el ejercicio de esta facultad."

Artículo 18.- Enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 8.016 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

Artículo 8.016.- Sobre Contratos.-

. . .

(a) El municipio no podrá otorgar contrato alguno en el que cualquiera de sus **[asambleístas]** Legisladores Municipales, funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, un interés pecuniario, a menos que lo autorice el Gobernador de Puerto Rico, previa recomendación del Secretario de Justicia y del Comisionado.

(b) Ningún **[asambleísta]** Legislador Municipal, funcionario o empleado municipal prestará dinero a, ni tomará dinero a préstamo, ni aceptará donativos o regalos de ningún contratista que esté proveyendo servicios o suministros al municipio.

. . ."

Artículo 19.- Enmendar el segundo párrafo del Artículo 18.009 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 18.009.- Procedimiento para Situaciones de Fricción entre Asamblea y Alcalde.-

. . .

Practicada la investigación, y celebrada una vista, la Comisión rendirá un informe con sus recomendaciones en un término no mayor de quince (15) días, contados a partir de la fecha de concluida la vista. Cuando ninguna o ambas partes se allanen a las recomendaciones de la Comisión y la situación sea de tal naturaleza que pueda ocasionar daño irreparable a la ciudadanía declarará vacante el cargo de Alcalde o los cargos de cualquier número de miembros de la Asamblea. La vacante del cargo de Alcalde o la de los **[Asambleístas]** Legisladores Municipales se cubrirán en la misma forma dispuesta en esta ley para los casos en que ocurran vacantes en los referidos cargos por incapacidad total y permanente, muerte o renuncia. La Comisión no adoptará resolución alguna hasta después de celebrarse una vista en la cual todas las partes interesadas serán oídas y tendrán derecho a presentar pruebas sobre las cuestiones envueltas."

Artículo 20.- Enmendar los incisos (l) y (o) del Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 19.002.- Funciones y Responsabilidades de la Oficina del Comisionado.-

La Oficina del Comisionado, además de las otras dispuestas en esta ley o en cualquier otra ley, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

(a) . . .

(l) Asesorar al Gobernador respecto de las solicitudes de autorización de cualquier municipio para otorgar contratos en que algún **[Asambleísta]** Legislador Municipal, funcionario o empleado municipal tenga un interés pecuniario directo o indirecto.

(m) . . .

(o) Promover programas de educación continuada para los Alcaldes, **[Asambleístas]** Legisladores Municipales y funcionarios y empleados municipales, a los fines de orientarlos sobre las leyes, reglamentos, procedimientos y sistemas municipales, así como sobre las alternativas y programas utilizados en otras jurisdicciones para atender los diversos problemas, necesidades y asuntos de la competencia municipal.

. . ."

Artículo 21.- Enmendar el primer párrafo del Artículo 19.003 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 19.003.- Comisionado.-

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales será dirigida por un Comisionado, nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. En el desempeño de sus funciones, el Comisionado será directamente responsable al Gobernador de Puerto Rico. El Comisionado deberá ser una persona de reconocida probidad moral. Este no podrá ser **[Asambleísta]** Legislador Municipal, ni haber ocupado el cargo de Alcalde durante los ocho (8) años anteriores a su nombramiento.

. . ."

Artículo 22.- Enmendar el Artículo 20.002 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 21.002.- Alcaldes y **[Asambleístas]** Legisladores Municipales .-

Las disposiciones de esta ley no afectarán, ni interrumpirán los términos de elección de los Alcaldes y **[Asambleístas]** Legisladores Municipales, los que continuarán en sus cargos sin mayor trámite o formalidad hasta la expiración de dichos términos o hasta que cesen en sus funciones por cualesquiera de las causas dispuestas en esta ley."

Artículo 23.- Sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de "Legislador Municipal" en cualquier otra legislación que los mencione.

Artículo 24.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales del Senado previo estudio y consideración del P. del S. 1396, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas.

Alcance de la Medida

El Proyecto del Senado 1396, propone enmendar el cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, undécimo, decimoquinto y decimoséptimo párrafos del Artículo 4.003; el primer párrafo, dos incisos (b), (c), (d), (e) y (f) del primer párrafo del Artículo 4.004; los Artículos 4.005, 4.006, 4.007; el primer párrafo del Artículo 4.008; el título, los incisos (a) y (c) y el segundo párrafo del Artículo 4.009; el título, el segundo y tercer párrafos del Artículo 4.010; el segundo párrafo del Artículo 4.011; el título y el primer, quinto,sexto y octavo párrafos del Artículo 4.013; el Artículo 4.014; el primer párrafo del Artículo 5.001; el segundo párrafo del Artículo 5.004, el primer párrafo del Artículo 5.001; el segundo párrafo del Artículo 5.004, el primer párrafo del Artículo 5.010; los incisos (b), (j), (k), (m)y (p) del Artículo 5.011; el primer párrafo del Artículo 5.014; los incisos (a) y (b) del Artículo 8.016; el primer párrafo del Artículo 19.003; y el Artículo 20.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" a fin de sustituir el término "Asambleista" o "Asambleista Municipal" por el de "Legislador Municipal".

Podemos señalar que la medida lo único que propone es sustituir un término por otro, no se infiere que altera o modifica de alguna forma las finanzas o aspectos fiscales de un municipio.

En su Exposición de Motivos, párrafo segundo, leemos y citamos: "Existe una gran similitud entre las labores que realizan los miembros de la Asamblea Legislativa y los "Asambleistas Municipales," quienes también se desempeñan en el proceso legislativo pero a nivel municipal. A los Asambleistas Municipales, según la Ley Núm. 81, Supra, le son aplicables, hasta donde es posible, todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley de Relaciones Federales a la Asamblea Legislativa y sus miembros. Además los Asambleistas gozan del privilegio de inmunidad parlamentaria por expresiones en las sesiones convocadas y en las comisiones.

Comparado con los legisladores de la Asamblea Legislativa, se nota que ambos realizan funciones similares. Siendo esto así, no vemos incorrectamente impedimento alguno en que se sustituya el nombre de "Asambleista o "Asambleista Municipal" allí donde la ley lo señala por "Legislador Municipal". La medida tiene un fin prudente y razonable, que amerita se recomiende su aprobación.

Se examinaron las disposiciones legales pertinentes.

Conclusión

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Municipales, luego de haber estudiado y considerado la medida, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1950, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

"LEY

Para disponer que el terminal de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicado en el Barrio Capetillo de Río Piedras, sea denominado como el "Terminal de Guaguas Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sra. Cruz María Velázquez Benítez, mejor conocida por Doña Cucú, nació el 3 de mayo de 1910 y reside en el Barrio Capetillo de Río Piedras desde hace ochenta (80) años. Doña Cucú es una abnegada madre de once (11) hijos de los cuales viven nueve (9).

Doña Cucú se ha destacado como una líder cívica, política y social en el área de Río Piedras. Su inquebrantable compromiso de ayudar y participar en aquellas actividades conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de sus conciudadanos es constatado por el aprecio y respeto que se ha ganado en la comunidad de Río Piedras.

Su participación en el campo de la política fue desinteresada y motivada por sus firmes convicciones ideológicas. Además, participó en el grupo de acción de la Parroquia San Antonio. Como líder cívica responsable, siempre está atenta a la seguridad y el bienestar de su comunidad. Doña Cucú es una firme creyente de la participación comunitaria y ha despertado el interés del sector comercial en cooperar con las necesidades de las personas de escasos recursos.

Doña Cucú admite que para lograr esta encomiable hoja de servicio y dedicación, sólo se necesita el deseo de servir con honestidad e integridad. Cientos de personas están agradecidos de tan bello y humilde ejemplo de civismo.

Actualmente, Doña Cucú reside en el Barrio Capetillo de Río Piedras, a pasos del Terminal de la A.M.A. Esta Asamblea Legislativa considera que los honores y reconocimientos no deben llegar en momentos en que la persona homenajeada no los pueda disfrutar en vida. Por tal motivo, creemos firmemente que debemos denominar el Terminal de Guaguas de la A.M.A. con el nombre de Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se dispone que el terminal de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicado en el Barrio Capetillo de Río Piedras, sea denominado como el "Terminal de Guaguas Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez".

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a los dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1950, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de P. de la C. 1950, es para disponer que el terminal de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicado en el Barrio Capetillo de Río Piedras, sea denominado como el "Terminal de Guaguas Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez.

Doña Cucú nació el 3 de mayo de 1910, y por espacio de ochenta (80) años ha residido en el Barrio Capetillo, de Río Piedras. Es madre de once (11) hijos, de los cuales todavía viven nueve (9); el compromiso de servicio a los demás llevó a Doña Cucú a participar en numerosas actividades y gestiones para mejorar la calidad de vida de los residentes del Barrio Capetillo, colaboró con la Parroquia San Antonio y ha sabido defender sus convicciones ideológicas, en defensa de los principios de igualdad plena para los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez es un ejemplo de dedicación y generosidad, y bien merece que esté en el recuerdo agradecido de los residentes de su comunidad de Capetillo.

En reunión ejecutiva celebrada la comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de estudio y análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuestas, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1950 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2154, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas.

"LEY

Para denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Don Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez nació el 28 de enero de 1909 en el Municipio de San Sebastián, Puerto Rico. Fueron sus padres don Evangelista Cortés y dona Niponesene Rodríguez. Cursó sus primeros grados en la Escuela Hato Arriba y luego en el año 1928 en la Escuela Narcio Rabell Cabrera, ambas del Municipio de San Sebastián. Desde su niñez se caracterizó por ser un hombre trabajador, siempre le ayudaba a su pdre, quien era mecánico de la Central Plata. A la edad de catorce años a ocupar el puesto de jefe de molinos y cardera en la misma.

Cuando cursaba su octavo grado, incursionó en la política por el deseo genuino de su padre. Ese mismo año, el Partido Republicano y el Partido Socialista se unen en una coalición y llegan al poder político del Municipio de San Sebastián. Don Nito es nombrado Secretario Municipal, puesto que ocupa hasta que la coalición pierde en el año 1936. Ocupó la posición de Secretario Auditor en el cuatrienio del 1936-1940.

En el año 1941, don Nito es elegido Alcalde del Municipio de San Sebastián, representando la Coalición de Republicanos y Socialistas. Como alcalde se destacó por el amor al servicio público. Su mayor contribución a la comunidad pepiniana, fue el establecer la primera escuela pública a nivel superior, ya que el municipio carecía de un plantel escolar público. Además, adquirió terrenos para distribuirlos a los pobres. Cuatro años más tarde, don Nito pierde las elecciones y empieza a laborar en el Programa de Emergencia hasta el año 1955. Después retorna a laborar como mecánico y agrimensor a la Central Plata hasta el año 1973. Lo trasladaron a la Central Cambalache, donde fue ascendido de puesto a Sub-jefe y se acogió al retiro.

En el aspecto personal es un hombre digno de admirar, cortés, valiente, honorable por convicción y un gran servidor público. Toda su vida la dedicó a trabajar por el bienestar de los pepinianos.

La Asamblea Legislativa expresa su agradecimiento especial a nombre del pueblo de Puerto Rico al señor Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez y reconoce que es menester de este cuerpo, nombrar el desvio norte del municipio de San Sebastián con su nombre. Esto será símbolo de agradecimiento en vida, a uno de los hijos predilectos de San Sebastián del Pepino, quien con sus ejecutorias dio lustre al servicio público.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 2154, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas:

En La Exposición de Motivos:

Página 1, línea 6:	eliminar "pdre" y sustituir por "padre"
Página 1, línea 6:	después de "catorce años" insertar "llegó"
Página 1, línea 7:	después de "molinos y" eliminar "cardera" y sustituir por "caldera"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de P. de la C. 2154, equivalente al P. del S. 1412 es para denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez.

Don Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez nació en el Municipio de San Sebastián el día 28 de enero de 1909, desde su niñez se caracterizó por ser un hombre trabajador, siempre le ayudaba a su padre, quien era mecánico de la Central Plata. A la edad de catorce (14) años llegó a ocupar el puesto de jefe de molinos y caldera en la Central Plata de ese municipio.

Incursionó a la política desde temprana edad por el deseo genuino de su padre, solo contaba con su octavo grado cuando se une a la coalición del Partido Republicano y el Partido Socialista y llegan al poder político del Municipio de San Sebastían. Don Nito fue nombrado Secretario Municipal, puesto que ocupó hasta el

año 1936. En el año 1941, fue elegido Alcalde de dicho municipio. Cuatro años más tarde, pierde las elecciones y empieza a laborar en el Programa de Emergencia hasta el año 1955.

En el aspecto personal es un hombre digno de admirar, cortés, valiente, honorable por convicción y un gran servidor público. Toda su vida la dedicó a trabajar por el bienestar de los pepinianos.

En reunión ejecutiva celebrada la comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de estudio y análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuestas, recomiendan la aprobación del P. de la C. 2154 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el Calendario de hoy está incluido el Proyecto de la Cámara 2102, vamos a solicitar en este momento que esta medida sea devuelta a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, a la de Turismo, Fomento Industrial, Comercio y Cooperativismo; y a la Comisión de lo Jurídico.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico del Senado de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2170, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del Senado 1436.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. RIVERA CRUZ: Para secundar la petición del compañero.
SR. VICEPRESIDENTE: Secundado por el compañero Ramón Luis Rivera, Hijo.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales de tener que informar el Proyecto del Senado 1264, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Queremos aclarar el récord. El Proyecto del Senado 1264, está referido en primera instancia a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y en segunda instancia a la Comisión de Educación. Vamos a solicitar que se releve a ambas Comisiones de tener que informar esta medida.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se proceda con el Calendario de Lectura.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1264, el cual ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura.

"LEY

Para enmendar el inciso (2) de la sección (A) del artículo 4 de la Ley Núm. 1, del 20 de enero de 1966, según enmendada, a los fines de permitir que al Recinto Universitario de Mayagüez perteneciente al sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, se le llame Colegio de Mayagüez.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La facultad, alumnos y ex alumnos del Recinto de Mayagüez (RUM), claman porque esta institución universitaria, sea reconocida como Colegio de Mayagüez. Cabe recordar que en su fundación esta institución universitaria fue nominada como Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Tras enmendar la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966 se creó el sistema de Colegios Regionales. Sin embargo, el Colegio de Mayagüez fue rebautizado como Recinto Universitario de Mayagüez, pero para los alumnos y ex alumnos del Colegio, éste sigue siendo el Colegio de Mayagüez. El permitir que al Recinto Universitario de Mayagüez se le llame Colegio de Mayagüez, no conlleva ningún cambio al espíritu de la Ley Universitaria en lo que respecta al funcionamiento de esta unidad institucional como Recinto Universitario. Tampoco es el propósito interferir con la autonomía universitaria ni con la autoridad de la Junta de Síndicos de acreditar o clasificar sus distintos componentes o unidades institucionales. La acción de sustituir colegio por recinto le devuelve a esta Institución Universitaria de Mayagüez el nombre que responde y ha estado ligado a su historia, su mística y su orgullo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (2) de la sección (a) del Artículo 4, de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.-

(a) La Universidad de Puerto Rico constituirá un sistema orgánico de educación superior, compuesto por las siguientes unidades institucionales y las que en el futuro se crearen, las cuales funcionarán con autonomía académica y administrativa dentro de las normas que dispone esta ley y las que se fijen en el reglamento de la Universidad o resoluciones del Consejo:

(1) El Recinto Universitario de Río Piedras que estará integrado por todas las escuelas, colegios, facultades, departamentos, institutos, centros de investigación y otras dependencias que en la actualidad componen el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

(2) El Recinto Universitario de Mayagüez *el cual podrá llamarse Colegio de Mayagüez* que estará integrado por todas las escuelas, colegios, facultades, departamentos, institutos, centros de investigación y otras dependencias que en la actualidad funcionan en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico. La Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola quedan integrados a este Recinto en lo administrativo y programático y su personal calificado será incorporado al claustro de conformidad con lo que el Consejo disponga, a fin de que el Recinto, como

beneficiario de la ley del Congreso de los Estados Unidos, aprobada el 30 de agosto de 1890, según enmendada, y conocida como la "Segunda Ley Morrill", y de todas las leyes del Congreso que la complementan, fomente y desarrolle un sistema agrícola universitario que integre la enseñanza, la experimentación y la divulgación;

(3) el Recinto Universitario de Ciencias Médicas que estará integrado por la Escuela de Medicina y Medicina Tropical, la Escuela de Odontología y las demás escuelas, servicios, institutos, y programas de enseñanza y de investigación en las artes y las ciencias de la salud, que en la actualidad componen el Recinto de San Juan de la Universidad de Puerto Rico; y

(4) la Administración de Colegios Regionales de Educación Superior, que podrá ser creada por el Consejo con carácter de unidad institucional autónoma dentro del sistema universitario, si se establecieren uno o más colegios regionales adicionales."

Artículo 2.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2170, el cual ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico.

"LEY

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronaúticas, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta. Ext., según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de 1994".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, se estableció el ordenamiento jurídico que regularía las actividades aeronáuticas en la jurisdicción de Puerto Rico. Este ordenamiento surge de la delegación de toda la supervisión general de las actividades aeronáuticas en Puerto Rico, así como el mantenimiento y protección de los aeropuertos.

El Artículo 8, de la Ley Núm. 187, *supra*, faculta al Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y a los empleados de la Autoridad de los Puertos debidamente designados a realizar cualquier arresto dentro de los límites de un aeropuerto, se tengan o no órdenes de arresto; en cuyo caso se requerirán motivos fundados para creer que las personas intervenidas han cometido un delito grave en su presencia o dentro de los límites de los aeropuertos.

El Artículo 8 de la misma Ley expresamente reconoce unos derechos que acompañarán a una persona intervenida, entre ellos, que dicha persona deberá ser llevada en todos los casos a la presencia de un Juez de Distrito sin ninguna demora innecesaria.

Nuestras leyes en relación a judicatura han cambiado y al presente ya no existe la figura del Juez de Paz, y la del Juez de Distrito se extinguirá en un período de ocho años desde que entró en vigor el Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta Ext., según enmendada, conocida como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994". Dicha ley establece que el Tribunal de Primera Instancia será uno de jurisdicción original general y estará compuesto por Jueces Municipales y Jueces Superiores.

En nuestro deber Legislativo atemperar y actualizar las leyes de manera que podamos evitar confusiones procesales y judiciales que pueden obstruir, atrasar y en caso extremo frustrar el desarrollo de los procesos judiciales de Puerto Rico.

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de mayo e 1949, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 8.-Derecho de personas arrestadas

Toda persona arrestada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley deberá ser llevada en todos los casos a la presencia de un Juez del Tribunal de Primera Instancia, sin ninguna demora innecesaria, a fin de que sea examinada; pudiendo cualquier abogado, debidamente autorizado para ejercer en los tribunales de Puerto Rico, visitar a la persona arrestada si ésta lo pidiere."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará regir inmediatamente luego de su aprobación."

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos en este momento la reconsideración del Proyecto de la Cámara 2149, según fuera la última comunicación recibida del Secretario de la Cámara.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto de la Cámara 2149, titulado:

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 15; adicionar los Artículos 16 y 17 y renumerar los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 18, 19, 20, como los Artículos 18, 19, 20, 21 y 22, respectivamente, de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, conocida como "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a fin de aclarar y de ampliar el alcance de algunas de sus disposiciones."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos presentar la siguiente enmienda en Sala al Proyecto de la Cámara 2149, utilizando como base el texto enrolado. La enmienda es a la página 3, línea 26, después de "Promedio." insertar lo siguiente: "Los requisitos antes dispuestos no serán de aplicación a todo aquel Participante que entre el primero de agosto y el dos de noviembre de 1998, se haya acogido a los beneficios del Programa o que los haya solicitado en una Agencia que posteriormente se acoja a dichos beneficios." Y luego, a la página 7, línea 1, después de "aprobación" eliminar el resto de la línea, por lo cual finalizaría con la palabra "aprobación."

Estas serían las enmiendas que presentamos al Proyecto del Retiro Temprano.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se continúe la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1214, titulado:

"Para enmendar el sub inciso (7) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", con el propósito de conceder a las personas que presten servicios de seguridad a empresas públicas o privadas el derecho a portar, tener, poseer, transportar y conducir revólver o pistola legalmente mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones o fuera de servicio."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1369, titulado:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Sentencias Suspendidas, al fin de excluir del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, conforme al Artículo 87 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando lo hace en estado de embriaguez."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1396, titulado:

"Para enmendar el cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimoquinto y décimoseptimo párrafos del Artículo 4.003; el primer párrafo, los incisos (b), (c), (d), (e) y (f) del primer párrafo y el último párrafo del Artículo 4.004; los Artículos 4.005, 4.006, 4.007; el primer párrafo del Artículo 4.008; el título, los incisos (a) y (c) y el segundo párrafo del Artículo 4.009; el título, el segundo y tercer párrafos del Artículo 4.010; el segundo párrafo del Artículo 4.011; el título y el primer, quinto, sexto y octavo párrafos del Artículo 4.013; el Artículo 4.014; el primer párrafo del Artículo 5.001; el segundo párrafo del Artículo 5.004, el primer párrafo del Artículo 5.010; los incisos (b), (j), (k), (m) y (p) del Artículo 5.011; el primer párrafo del Artículo 5.012; el segundo párrafo del Artículo 5.014; los incisos (a) y (b) del Artículo 8.016; el segundo párrafo del Artículo 18.009; los incisos (l) y (o) del Artículo 19.002; el primer párrafo del Artículo 19.003; y el Artículo 20.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a fin de sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de "Legislador Municipal"."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Señor senador Rodríguez Colón.
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora.
SR. FAS ALZAMORA: Nos gustaría ver si el señor Presidente, aunque sea brevemente, nos explica de qué es el Proyecto.
SR. RODRIGUEZ COLON: Muy bien. Este es un Proyecto que lo único que hace es que enmienda nuestra Ley de Municipios Autónomos para cambiar el nombre de nuestros Asambleístas Municipales a solicitud de los propios Asambleístas Municipales, que desean que sean conocidos como Legisladores Municipales. La realidad es que la función del Asambleísta Municipal no es otra que la de legislar a nivel municipal y me parece muy propio el que se le conozca como Legisladores Municipales. Aunque el Cuerpo al que pertenezcan continuará llamándose Asamblea Municipal.

Ese es el alcance de esta medida. Es un poco larga porque dondequiera que aparece Asambleísta, se sustituye por Legislador Municipal.

Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción¿ No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1950, titulado:

"Para disponer que el terminal de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicado en el Barrio Capetillo de Río Piedras, sea denominado como el "Terminal de Guaguas Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2154, titulado:

"Para denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1264, titulado:

"Para enmendar el inciso (2) de la sección (A) del artículo 4 de la Ley Núm. 1, del 20 de enero de 1966, según enmendada, a los fines de permitir que al Recinto Universitario de Mayagüez perteneciente al sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, se le llame Colegio de Mayagüez."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben la medida, sin enmiendas.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2170, titulado:

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronaúticas, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta. Ext., según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de 1994"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida se quede para un turno posterior.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1436, titulado:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para una enmienda en Sala.
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que en la página 2, líneas 8 a la 10, la oración que comienza en la línea 8 y concluye en la línea 10, aparezca subrayado con el tipo requerido para identificarlo como texto añadido a la Ley actual.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, estaba parada, antes de que la aprobara estaba de pie.
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, compañera, lo que pasa es que no estaba mirando y si usted no habla.
SRA. OTERO DE RAMOS: Yo hablé, aquél es el que tiene que abrir la bocina.
SR. VICEPRESIDENTE: Pues vamos a hacer lo siguiente, porque en realidad fue que no miré para allá en ese momento. Pida la reconsideración de la medida, pida el consentimiento.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos reconsideración de la medida.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción.
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1436, titulado:

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos que la oración que comienza en la página 2, línea 8 y que termina en la página 2, línea 10, se subraye o se identifique con el tipo correspondiente para identificarlo como texto añadido al texto existente en la Ley.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, antes de solicitar la aprobación de la medida, solicitamos que se consigne para el récord en este momento, todo el debate vertido para esta medida en un

momento anterior en la sesión del día de hoy.

SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero de Ramos.

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, esta medida que se ha enmendado, ya se había enmendado hace unos momentos, no hay nada nuevo en ella y nos sostenemos en la misma discusión sobre el mismo, que ya está grabado cuando se trajo la medida. Así que le votaremos en contra.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Con la objeción de la compañera Mercedes Otero de Ramos; los que estén a favor se servirán decir que sí. Los que estén en contra no. Aprobada la medida.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario el Proyecto del Senado 1101.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de la medida incluida en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1101, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para añadir un apartado (j) al inciso (1) y enmendar los incisos (5) y (6) del Artículo 4; enmendar el inciso (1) y derogar el inciso (2) del Artículo 5; enmendar el inciso (4) del Artículo 8; enmendar el Artículo 9; enmendar los incisos (1), (2) y (6) del Artículo 10; enmendar el inciso (2) y añadir un nuevo inciso (8) del Artículo 11; enmendar el inciso (1), el apartado (*l*) del inciso (3) y el inciso (4) del Artículo 12; designar el primer párrafo como inciso (1) y añadir un inciso (2) al Artículo 13; enmendar el inciso (2) del Artículo 15; enmendar el inciso (4) del Artículo 17; añadir un nuevo Artículo 19 y renumerar los artículos 20, 21 y 22 como Artículos 21, 22 y 23, respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, que crea el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo de Fiscal Especial Independiente, a los fines de requerirle a dichos funcionarios experiencia en el área criminal; establecer que los nombramientos de dichos funcionarios se harán en forma escalonada; ampliar el término para completar las investigaciones; autorizar al Panel a devolver el asunto a la parte querellante o a la agencia concernida para cualquier procedimiento civil o administrativo, cuando se determine que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial; conceder al Fiscal Especial Independiente jurisdicción para procesar a coautores de funcionarios públicos en la comisión de unos mismos actos delictivos; autorizar al Secretario de Justicia a investigar aquellos casos en que se impute a alguno de los miembros del Panel alguna de las causas de destitución; adoptar prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido investigadas o encausadas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado que constituye política pública fomentar la dedicación de sus funcionarios y empleados a la gestión y al servicio público con honestidad, excelencia profesional y personal y dedicación absoluta al bienestar y desarrollo integral de nuestro pueblo. En ánimo de proteger los valores y aspiraciones inmersos en esta declaración de política pública, se creó el cargo de Fiscal Especial Independiente en el ordenamiento penal de Puerto Rico a través de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, estableciéndose así una jurisdicción investigativa especial para los casos en que se imputa a funcionarios públicos haber incurrido en el ejercicio o desempeño de sus cargos en ciertos tipos de conducta punible por el ordenamiento penal.

Las instituciones del Fiscal Especial Independiente y el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente han demostrado ser mecanismos eficaces en el proceso de proteger la integridad del servicio público y velar por el debido cumplimiento de sus funciones y deberes por los funcionarios públicos. Sin embargo, la experiencia cumulativa de los últimos años sugiere que hay varias maneras concretas de mejorar y fortalecer dichas instituciones, mediante enmiendas a la citada Ley Núm. 2. Las enmiendas establecidas en esta Ley son producto de esa experiencia, de reclamos para mejorarlas y del interés en continuar fortaleciendo el criterio de independencia investigativa que debe prevalecer en instituciones de esta naturaleza.

Una vez se determina que el Fiscal Especial Independiente debe intervenir en un caso, la Ley sólo le concede un término de 90 días, prorrogable a 90 días más para que se finalice la investigación que se ha comenzado contra determinado funcionario. En la práctica dicho término ha resultado sumamente limitado. Los fiscales se han visto en la necesidad de avanzar investigaciones para poder cumplir con el término de la Ley. Dicha premura en el trabajo puede tener como resultado que la investigación no se haga de forma tan minuciosa como debe ser. Es necesario que se extienda el término de la investigación, de manera tal que el fiscal pueda completar la misma con la rigurosidad necesaria sin que se vea obligado a tomar atajos por falta de tiempo. De esta forma se puede garantizar mayor efectividad en las investigaciones.

Entre las enmiendas que esta Ley lleva a efecto se encuentran la extensión del término original para que un Fiscal Especial lleve a cabo una investigación de noventa (90) a ciento cincuenta (150) días.

El inciso (5) del Artículo 4 de la Ley Núm. 2, supra, dispone que si el Panel determinara que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial, esta determinación será final y firme y no podrá radicarse otra querella por los mismos hechos. Sin embargo, no provee un mecanismo para que el Panel pueda referir el asunto para cualquier procedimiento civil o administrativo que pueda incoarse contra el funcionario investigado, cuando se determine que la situación no amerita la designación de un Fiscal Especial. A fin de subsanar esta laguna estatutaria, se introduce una enmienda para autorizar al Panel a referir el caso a la parte querellante o a la agencia concernida para que se inicie el procesamiento judicial civil o administrativo si es procedente conforme a derecho.

Por otro lado, en el curso de las investigaciones, muchas veces surgen autores del delito que han actuado en concierto y común acuerdo con los funcionarios en la comisión de delitos. A pesar de que hay suficiente prueba sobre la responsabilidad criminal de estos autores, el Fiscal Especial Independiente carece de jurisdicción para radicar los casos y tiene que referir los mismos al Departamento de Justicia para que éste continúe con el proceso criminal contra estos coautores. Esto implica una obvia multiplicidad de esfuerzos que a su vez conlleva un aumento sustancial en el uso de fondos públicos. Por consiguiente, es necesario y conveniente que se le conceda jurisdicción al Fiscal Especial Independiente para que pueda encausar todos aquellos autores que surgen durante la investigación del funcionario concernido, cuando el Secretario de Justicia así lo considere conveniente. De esta forma los casos pueden ser llevados a los tribunales para procesar todos los autores de delitos incluidos en la misma transacción o evento y así lograr mejor uso del tiempo y del dinero del pueblo. Para atender de forma adecuada esta preocupación, se incorpora una enmienda para la concesión de jurisdicción adicional a los Fiscales Especiales Independientes para encausar y procesar a coautores de delitos que no son funcionarios públicos pero que actuaron en concierto y de común

acuerdo con éstos en la comisión de delitos contra el erario o la función pública. De esta manera se amplía el ámbito de la jurisdicción y los poderes investigativos del Fiscal Especial, en claro beneficio del pueblo de Puerto Rico.

La Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, también creó el Panel sobre el Fiscal Especial. Este organismo tiene la responsabilidad de recomendar si se debe o no nombrar un Fiscal Especial Independiente para la investigación del funcionario. Dicho Panel está compuesto por ex-jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal de Primera Instancia. Por la naturaleza de las funciones que ejerce el Panel es deseable que estos ex jueces tengan experiencia en el área criminal, esto seguramente redundará en mayor efectividad en el entendimiento de los procedimientos y por consiguiente beneficiará la Institución del Fiscal Especial Independiente. También se introduce una enmienda para incluir a los ex-jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Además de las enmiendas que se adoptan en esta medida para lograr mayor eficiencia, economía y efectividad en el funcionamiento del Fiscal Especial, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario fortalecer la Institución incorporando mayores garantías y controles para combatir la corrupción individual e institucional. Para ello, es necesario reforzar los requerimientos de conducta que se les exige a los Fiscales Especiales designados y a los miembros del Panel.

A tales fines se reafirman restricciones relacionadas con la representación directa o indirecta por parte del Fiscal Especial y los miembros del Panel de personas que son o han sido parte de una investigación o hayan sido acusados bajo las disposiciones de esta Ley. De igual modo, se amplía el alcance de esta prohibición al hacerla extensiva a otras personas que estén relacionadas con la práctica privada de la abogacía del Fiscal Especial y de los miembros del Panel o que estén bajo la supervisión de éstos en las funciones que le han sido encomendadas de acuerdo a la Ley.

Con la intención de imprimirle mayor objetividad al procedimiento de destitución de los miembros del Panel que dispone el Artículo 17 de esta Ley, se faculta al Secretario de Justicia para que lleve a cabo la investigación en torno a las alegaciones y hechos en que se imputan causas para la destitución. Este mecanismo tiene el propósito de garantizar absoluta objetividad de estas investigaciones.

La lucha contra la corrupción gubernamental, en todas sus manifestaciones y vertientes, es compromiso prioritario ineludible de todo gobierno comprometido con una sana administración pública. De la protección adecuada del haber público y del estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a este importantísimo renglón dependen el uso adecuado de los recursos del erario y la continuada confianza del pueblo en sus instituciones y funcionarios de gobierno. Solamente respaldando y reforzando los mecanismos para combatir la corrupción puede garantizarse la efectividad de la gestión gubernamental.

Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno de Puerto Rico pone de manifiesto, una vez más, su compromiso con la integridad y la excelencia en el servicio público.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un apartado (j) al inciso (1), se enmienda el inciso (5) y se deroga el inciso (6) del Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.- Investigación preliminar.

(1) El Secretario de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por alguno de los siguientes funcionarios o individuos.

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...
(e) ...
(f) ...
(g) ...
(h) todo individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, a quien se le impute la comisión de cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, mientras ocupaba uno de los cargos enumerados, sujeto a que la designación del Fiscal Especial se haga dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que dicho individuo cesó en su cargo. La fijación de este plazo en nada altera el término prescriptivo de la acción criminal que corresponda contra el funcionario o individuo, y
(i) ...
(j) Cualquier individuo actuando en concierto y de común acuerdo con cualquiera de los funcionarios antes mencionados en aquellos casos en que el Secretario de Justicia solicite al Panel que asuma jurisdicción sobre los mismos, de conformidad con el Artículo 5 y el inciso (2) del Artículo 13 de esta Ley.
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) El Contralor de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental o el querellante podrá solicitar al Panel dentro de quince (15) días a partir de la notificación recibida que revise la negativa del Secretario de Justicia a solicitar un Fiscal Especial. Igualmente, el funcionario o individuo a ser investigado podrá solicitar al Panel dentro de quince (15) días a partir de la notificación recibida que revise y no confirme la recomendación del Secretario de Justicia de que se designe un Fiscal Especial. El Panel no tendrá que conceder una vista administrativa sujeta a las normas procesales contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, cuando se rechace la recomendación del Secretario de Justicia de que se designe un Fiscal Especial.

Si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial o que los interese de la justicia y del mejor uso de los fondos públicos asignados al panel estarían mejor servidos mediante la radicación de acciones civiles o administrativas, dicha determinación será final y firme y no podrá radicarse querella nuevamente por los mismos hechos. No obstante, el Panel podrá devolver el asunto a la parte querellante para cualquier procedimiento civil o administrativo procedente en derecho.
(6) En caso de que el Panel determine que la información recibida ha sido frívola, el Panel le impondrá a la persona que presentó la misma todos los costos incurridos en los procedimientos realizados a tenor con las disposiciones de esta ley. El Estado reembolsará a todo funcionario o persona objeto de una investigación que sea exonerado una cantidad razonable por concepto de los gastos incurridos en honorarios de abogado, excepto en los casos de exoneración por motivo de prescripción del delito imputado.

Sección 2.- Se enmienda el inciso (1) y se deroga el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Artículo 5.- Investigación preliminar en el caso de otros funcionarios, empleados o individuos.
Cuando el Secretario de Justicia recibiere información que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en los apartados (a) al (j) del inciso 1 del Artículo 4 ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el Artículo 4 de esta Ley, podrá, a su discreción, efectuar una investigación preliminar y solicitar el nombramiento de un Fiscal Especial cuando se determine que actuó en concierto y de común acuerdo en la comisión del delito con cualquiera de los funcionarios enumerados o es un encubridor de éstos y por razones de conveniencia o economía procesal, o para evitar el fraccionamiento de causas, o en interés de la justicia, es recomendable o conveniente que el Panel asuma jurisdicción sobre el caso de dicho funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en los incisos (a) al (j) del Artículo 4 de esta Ley.
[(2) Cuando el Secretario determine que no existe conflicto de interés alguno que impida la investigación objetiva por parte del Departamento de Justicia, en tal caso el Secretario designará el funcionario que conducirá la investigación y el Departamento de Justicia asumirá jurisdicción sobre la misma.]"

Artículo 3.- Se enmienda el inciso (4) del Artículo 8 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 8.- Determinación de procedencia de investigación preliminar; procedimiento.

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Cuando el Secretario de Justicia determine que procede realizar una investigación preliminar, éste completará dicha investigación preliminar dentro de un término que no exceda de [noventa (90)] ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha en que recibe tal información. En aquellos casos en los que el Departamento de Justicia considere que, por su naturaleza o complejidad, no ha sido posible completar adecuadamente la investigación preliminar en dicho término, podrá solicitar, y el Panel a su discreción podrá concederle un término adicional que no excederá de noventa (90) días cuando la naturaleza o complejidad de la investigación o las circunstancias particulares del caso así lo requieren. El término para completar la investigación es uno directivo.

(5) ...

(6) ... ."

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 9.- Incumplimiento de los términos por parte del Secretario de Justicia.

Si el Secretario de Justicia, luego de haber recibido una querella o imputación contra cualquier funcionario, empleado, ex funcionario, [o] ex empleado o individuo a base de lo dispuesto en esta Ley, no tomara acción alguna en el término de [noventa (90)] ciento ochenta (180) días o en el término no mayor de [ciento ochenta (180)] doscientos setenta (270) días cuando hubiere obtenido una prórroga por parte del Panel deberá someter todo el expediente investigativo al Panel, el cual determinará si procede el nombramiento de un Fiscal Especial que lleve a cabo la investigación y procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella."

Artículo 5.- Se enmiendan los incisos (1), (2) y (6) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 10.-Designación del Panel sobre el Fiscal Especial.

(1) El Gobernador de Puerto Rico designará, con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen el Senado y la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un Panel integrado por tres (3) miembros en propiedad seleccionados de entre los ex jueces del Tribunal Supremo, Tribunal de Circuito de Apelaciones o del Tribunal [Superior.] de Primera Instancia, los cuales deberán tener dos (2) años de experiencia en el área criminal, ya fuere como abogado en la práctica privada, fiscal o juez. El Gobernador de Puerto Rico también designará, de la misma forma, de entre los ex jueces del Tribunal Supremo, Tribunal de Circuito de Apelaciones o del Tribunal [Superior] de Primera Instancia dos (2) miembros alternos que formarán parte del panel en caso de inhibición o de alguna otra circunstancia que impida a cualquier miembro en propiedad desempeñar sus funciones. Los miembros en propiedad designarán de entre ellos un Presidente del Panel.

(2) [Los miembros del Panel servirán por un término de tres (3) años al cabo del cual podrán ser designados por un término adicional de igual duración.] Los nombramientos de los miembros del Panel a partir de la vigencia de esta Ley y luego de vencidos los nombramientos originales, se harán de la siguiente forma: uno (1) por un término de un (1) año, uno (1) por un término de dos (2) años y uno (1) por un término de tres (3) años, respectivamente. Los dos (2) nombramientos alternos serán nombrados, uno (1) por el término de un (1) año y uno (1) por el término de dos (2) años. Los nombramientos subsiguientes se harán por un término de tres (3) años, al cabo del cual podrán ser designados por un término adicional de igual duración y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Ninguna persona podrá ser miembro en propiedad del Panel por más de tres (3) términos consecutivos de tres (3) años. El Panel se denominará "Panel sobre el Fiscal Especial Independiente".

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) Los miembros del Panel tendrán derecho a una dieta de [cien (100)] ciento cincuenta (150) dólares por cada día o parte del mismo en que asistan a las reuniones del Panel y se dediquen a ejercer sus funciones y deberes, la cual estará exenta del pago de la contribución sobre ingresos fijada por la Ley Núm. [91 de 29 de agosto de 1954] 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994".

Artículo 6.- Se enmienda el inciso (2) y se añade un nuevo inciso (8) del Artículo 11 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 11.-Deberes del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

(1) ...

(2) Al nombrar un Fiscal Especial el Panel delimitará la encomienda [y jurisdicción] de éste. El [Secretario] Panel hará pública la identidad del Fiscal Especial, su encomienda y jurisdicción cuando haya una determinación del Panel de que la revelación de dicha información servirá los mejores intereses de la justicia. En todo caso en que se radique una acusación formal, deberá hacerse pública la identidad, encomienda y jurisdicción de cada Fiscal Especial.

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) El Panel podrá nombrar agentes investigadores y agentes de seguridad, los cuales tendrán las siguientes facultades en el cumplimiento de sus deberes:

(a) Denunciar.

(b) Arrestar

(c) Diligenciar órdenes de los Tribunales.

(d) Poseer y portar armas de fuego.

(e) Tomar juramento a testigos potenciales en casos bajo investigación del Fiscal Especial Independiente."

Artículo 7.- Se enmiendan el inciso (1), el apartado (l) del inciso (3) y el inciso (4) del Artículo 12 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 12.- Disposiciones sobre el Fiscal Especial.

(1) Todo Fiscal Especial deberá ser un abogado que haya sido admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que sea ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. La persona designada por el Panel como Fiscal Especial deberá ser una de reconocido prestigio, integridad y reputación moral y profesional. Además deberá tener por lo menos dos (2) años de experiencia en el área criminal, ya fuere como abogado en la práctica privada, fiscal o juez.

(2) ...

(3) ...

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

(f) ...

(g) ...

(h) ...

(j) ...

(k) ...

(l) solicitar en destaque de otras agencias gubernamentales los recursos humanos que sean necesarios para llevar a cabo el tipo de investigación que se encomiende. Las agencias no podrán negarse a autorizar

el referido destaque, excepto que medien circunstancias extraordinarias de necesidades de servicio.

(4) El Fiscal Especial deberá completar la investigación que se le encomiende dentro de un término que no excederá de [noventa (90)] ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha en que recibe la encomienda[; disponiéndose, sin embargo, que el Panel podrá fijar un término especial en aquellos casos en que sea justificado]. Cuando el Fiscal Especial considere que, por su naturaleza y complejidad, no será posible completar adecuadamente la investigación en dicho término podrá solicitar al Panel y éste a su discreción podrá concederle un término adicional que no excederá de [noventa (90)] ciento ochenta (180) días cuando la naturaleza o complejidad de la investigación o las circunstancias particulares del caso así lo requieren.. El término para completar la investigación es uno directivo. La fijación de estos términos en nada altera el término prescriptivo de la acción criminal que corresponda contra el funcionario o individuo, ni revoca al Fiscal Especial su jurisdicción exclusiva sobre aquellas acciones penales de conformidad con el Artículo 13 de esta Ley.

(5) ...

(6) ...

(7) ... ."

Artículo 8.- Se designa el primer párrafo como inciso (1) y se añade el inciso (2) del Artículo 13 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 13.- Jurisdicción Exclusiva.

(1) Todo Fiscal Especial tendrá jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se le asigne. El Secretario de Justicia, sin embargo, podrá intervenir como amicus curiae en relación con cualquier aspecto legal planteado en cualquier procedimiento en que un Fiscal Especial participe en su capacidad como tal o en cualquier apelación de dicha acción.

(2) Todo Fiscal Especial tendrá además jurisdicción exclusiva sobre todo autor, según definido en la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en la comisión de delitos contenidos en la encomienda con cualquiera de los funcionarios enumerados en los incisos (a) al (i) del Artículo 4 de esta Ley en aquellos casos en que el Secretario de Justicia determine que por razones de conveniencia o economía procesal, o para evitar el fraccionamiento de causas, o en el interés de la justicia, es recomendable o conveniente que el Panel asuma jurisdicción sobre el caso de dicha persona."

Artículo 9.- Se enmienda el inciso (2) del Artículo 15 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 15.- Informes.

(1) ...

(2) Al concluir su encomienda todo Fiscal Especial rendirá al Panel en un término de treinta (30) días un informe final, el cual será público, que contendrá una descripción completa y detallada de las gestiones realizadas. Incluirá en su informe una relación de los casos investigados y tramitados. Expondrá las razones por las cuales decidió no incoar alguna acción sobre conducta o hechos relacionados con la investigación encomendada.

(3) ... ."

Artículo 10.- Se enmienda el inciso (4) del Artículo 17 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 17.- Causas y Procedimientos de Destitución.

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) Los miembros del Panel podrán ser destituidos del cargo por el Gobernador de Puerto Rico por las causas antes establecidas, mediante el debido procedimiento de ley. En aquellos casos en que se le impute a un miembro del Panel cualesquiera de las causas de destitución enumeradas en este Artículo, el Secretario de Justicia vendrá obligado a realizar la investigación, la cual completará dentro de un término que no

excederá de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en que reciba la información. Concluida dicha investigación, el Secretario rendirá al Gobernador un informe final con los hallazgos y recomendaciones sobre si procede o no la formulación de cargos para la destitución del miembro del Panel en cuestión."

Artículo 11.- Se añade un nuevo Artículo 19 y se renumera el Artículo 19 como Artículo 20 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, para que se lean como sigue:

"Artículo 19.- Prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido parte de la investigación o acusadas.

(1) Ningún Fiscal Especial, socio de éste, abogado asociado, empleado o persona relacionada con su práctica privada de la abogacía podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar directa o indirectamente en cualquier capacidad a cualquier persona que sea parte de la investigación o haya sido acusada bajo las disposiciones de esta Ley.

(2) Ningún miembro del Panel, socio de éste, abogado asociado, empleado o persona relacionada con su práctica privada de la abogacía podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar directa o indirectamente en cualquier capacidad a cualquier persona que sea parte de la investigación o haya sido acusada bajo las disposiciones de esta Ley.

(3) Ningún abogado, investigador, consultor, funcionario o empleado que esté bajo la supervisión del Fiscal Especial o del Panel podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar directa o indirectamente en cualquier capacidad a cualquier persona que sea parte de la investigación o haya sido acusada bajo las disposiciones de esta Ley.

(4) Ningún ex Fiscal Especial o ex miembro del Panel podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar directa o indirectamente en cualquier capacidad a cualquier persona que sea parte de la investigación o haya sido acusada bajo las disposiciones de esta Ley.

(5) Ninguna de las personas incluidas en los cuatro (4) incisos anteriores podrá divulgar información sobre investigaciones en proceso bajo las disposiciones de esta Ley hasta tanto se hubiere radicado la denuncia correspondiente.

(6) Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones establecidas en este Artículo incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada por cada violación con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal sentenciador. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o tres mil (3,000) dólares de multa. De mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día o mil (1,000) dólares de multa.

Si la persona convicta de violar estas prohibiciones fuera un Fiscal Especial designado bajo las disposiciones de esta Ley o un miembro del Panel, será sancionado de conformidad con las acciones penales y civiles establecidas en el Artículo 3.8 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 12.- Se renumeran los Artículos 20, 21 y 22 como Artículos 21, 22 y 23, respectivamente de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada.

Artículo 13.- Los casos asignados a los Fiscales Especiales Independientes que estén en el ejercicio de sus cargos a la fecha de aprobación de esta Ley continuarán bajo la jurisdicción y encomienda de dichos Fiscales Independientes hasta la conclusión de los procedimientos en cada caso, incluyendo cualesquiera recursos en alzada que el Fiscal Especial considere necesario o conveniente interponer.

Artículo 14.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 1101, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

En El Título:

Página 1, línea 7 después de "renumerar los" tachar "Artículo" y sustituir por "artículos"

En La Exposición de Motivos:

Página 2, línea 29 eliminar "ochenta (180)" e insertar "cincuenta (150)"

Página 3, línea 7 después de "el caso a" insertar "la"

En El Texto Decretativo:

Página 5, línea 1 eliminar "Artículo 1.-" y sustituir por "Sección 1.-"

Página 5, línea 5 eliminar "(1)..." e insertar lo siguiente:
"(1) El Secretario de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por alguno de los siguientes funcionarios **o individuos**."

Página 5, líneas 13 y 14 eliminar su contenido e insertar lo siguiente:
" (h) todo individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, a quien se le impute la comisión de cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, mientras ocupaba uno de los cargos enumerados, sujeto a que la designación del Fiscal Especial se haga dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que dicho individuo cesó en su cargo. La fijación de este plazo en nada altera el término prescriptivo de la acción criminal que corresponda contra el funcionario o individuo **[.], y**"

Página 6, línea 13 después de "Especial" insertar
"o que los interese de la justicia y del mejor uso de los fondos públicos asignados al Panel estarían mejor servidos mediante la radicación de acciones civiles o administrativas,"

Página 6, lineas 19 a la 22 despúes de "ley." eliminar todo su contenido e insertar
"El Estado reembolsará a todo funcionario o persona objeto de una investigación que sea exonerado una cantidad razonable por concepto de los gastos incurridos en honorarios de abogado, excepto en los casos de exoneración por motivo de prescripción del delito imputado."

Página 7, línea 1 eliminar "Artículo 2.-" y sustituir por "Sección 2.-"

Página 7, línea 7 tachar "incisos" y sustituir por "apartados" y después de "del" isertar "inciso 1 del"

Página 7, línea 11 eliminar "y de" e insertar "o en"

Página 7, línea 16 eliminar "incisos" e insertar "apartados"; después de "al (j)" insertar "del inciso (1)"

Página 7, línea 21 eliminar "Artículo 3.-" y sustituir por "Sección 3.-"

Página 8, línea 7 eliminar "ciento ochenta (180" e insertar "ciento cincuenta (150)"

Página 8, línea 11 eliminar "noventa (90)" e insertar "treinta (30)"

Página 8, línea 16 eliminar "Artículo 4.-" y sustituir por "Sección 4.-"

Página 8, líneas 21 y 22 eliminar "ciento ochenta (180)" y sustituir por "ciento cincuenta (150)"; eliminar "doscientos setenta" e insertar "ciento ochenta (180)"

Página 9, línea 1 eliminar "(270)"

Página 9, línea 5 eliminar "Artículo 5.-" y sustituir por "Sección 5.-"

Página 9, línea 5 después de "incisos" eliminar "(1),"

Página 9, líneas 7 a la 19 eliminar todo su contenido

Página 9, líneas 20 a la 22 eliminar todo su contenido e insertar lo siguiente:
"(2) Los miembros del Panel servirán por un término de tres (3) años al

	cabo del cual podrán ser nuevamente designados por un término adicional de igual duración o hasta que cumplan la edad de setenta y cinco (75) años, si esto ocurre primero. Los términos que sirvan los miembros alternos no se contarán en su contra en caso de que sean designados miembros en propiedad. Los nombramientos de los miembros del Panel a partir de la vigencia de esta Ley y luego de vencidos los nombramientos vigentes, se harán de la siguiente forma: uno (1) por un término de un (1) año, uno (1) por un término de dos (2) años y uno (1) por un término de tres (3) años, respectivamente. Los dos (2) nombramientos alternos serán nombrados, uno (1) por el término de un (1) año y uno (1) por el término de dos (2) años. Los nombramientos subsiguientes se harán por un término de tres (3) años, al cabo del cual podrán ser designados por un término adicional de igual duración y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Ninguna persona podrá ser miembro en propiedad del Panel por más de tres (3) términos consecutivos de tres (3) años. El Panel se denomiará "Panel sobre el Fiscal Especial Independiente". (3). . . . . . (4). . . . . . (5). . . . . . (6)..... (7). . . . . ."
Página 10, líneas 1 a la 9	eliminar todo su contenido
Página 10, línea 14	después de "(150)" eliminar "dólares" e insertar "por ciento de la dieta máxima establecida para los miembros de la Asamblea Legislativa, según dispuesto en la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada,"
Página 10, línea 14	eliminar "asistan a las reuniones del Panel y"
Página 10, línea 15	después de "deberes," insertar "previa autorización del Presidente del Panel,"
Página 10, línea 19	eliminar "Artículo 6.-" y sustituir por "Sección 6.-"
Página 11, línea 2	después de "Especial" eliminar "," e insertar "y"
Página 11, línea 3	eliminar "y jurisdicción"
Página 11, línea 20	eliminar "Artículo 7.-" y sustituir por "Sección 7.-"
Página 13, línea 4	eliminar "ciento ochenta (180) " y sustituir por "ciento cincuenta (150)"
Página 13, líneas 9 y 10	eliminar "ciento ochenta (180)" e insertar "treinta (30)"
Página 13, línea 19	eliminar "Artículo 8.-" y sustituir por "Sección 8.-"
Página 14, línea 9	tachar "incisos" y sustituir por "apartados"
Página 14, línea 10	después de "del" incluir "inciso 1 del"
Página 14, línea 14	eliminar "Artículo 9.-" y sustituir por "Sección 9.-"
Página 15, línea 2	eliminar "Artículo 10.-" y sustituir por "Sección 10.-"
Página 15, línea 17	eliminar "Artículo 11.-" y sustituir por "Sección 11.-"
Pägina 17, línea 1	tachar "(6)"
Página 17, línea 13	eliminar "Artículo 12.-" y sustituir por "Sección 12.-"
Página 17, línea 15	eliminar "Artículo 13.-" y sustituir por "Sección 13.-"
Página 17, línea 20	eliminar "Artículo 14.-" y sustituir por "Sección 14.-"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. del S. 1101 es añadir, renumerar y enmendar varias disposiciones de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, que crea el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo de Fiscal Especial Independiente, a los fines de requerirle a dichos funcionarios experiencia en el área criminal; establecer que los nombramientos de dichos funcionarios se harán en forma escalonada; ampliar

el término para completar las investigaciones; autorizar al Panel a devolver el asunto a la parte querellante o a la agencia concernida para cualquier procedimiento civil o administrativo, cuando se determine que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial; conceder al Fiscal Especial Independiente jurisdicción para procesar a coautores de funcionarios públicos en la comisión de unos mismos actos delictivos; autorizar al Secretario de Justicia a investigar aquellos casos en que se impute a alguno de los miembros del Panel alguna de las causas de destitución; adoptar prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido investigadas o encausadas; y para otros fines relacionados.

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado que constituye política pública fomentar la dedicación de sus funcionarios y empleados a la gestión y al servicio público con honestidad, excelencia profesional y personal y dedicación absoluta al bienestar y desarrollo integral de nuestro pueblo. En ánimo de proteger los valores y aspiraciones inmersos en esta declaración de política pública, se creó el cargo de Fiscal Especial Independiente en el ordenamiento penal de Puerto Rico a través de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, estableciéndose así una jurisdicción investigativa especial para los casos en que se imputa a funcionarios públicos haber incurrido en el ejercicio o desempeño de sus cargos en ciertos tipos de conducta punible por el ordenamiento penal. Las instituciones del Fiscal Especial Independiente y el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente han demostrado ser mecanismos eficaces en el proceso de proteger la integridad del servicio público y velar por el debido cumplimiento de sus funciones y deberes por los funcionarios públicos. Sin embargo, la experiencia cumulativa de los últimos años sugiere que hay varias maneras concretas de mejorar y fortalecer dichas instituciones, mediante enmiendas a la citada Ley Núm. 2. Las enmiendas establecidas en esta Ley son producto de esa experiencia, de reclamos para mejorarlas y del interés en continuar fortaleciendo el criterio de independencia investigativa que debe prevalecer en instituciones de esta naturaleza.

Al presente, una vez se determina que el Fiscal Especial Independiente debe intervenir en un caso, la Ley sólo le concede un término de 90 días, prorrogable a 90 días más para que se finalice la investigación que se ha comenzado contra determinado funcionario. En la práctica dicho término ha resultado sumamente limitado. Los fiscales se han visto en la necesidad de avanzar investigaciones para poder cumplir con el término de la Ley. Dicha premura en el trabajo puede tener como resultado que la investigación no se haga de forma tan minuciosa como debe ser. Es necesario que se extienda el término de la investigación, de manera tal que el fiscal pueda completar la misma con la rigurosidad necesaria sin que se vea obligado a tomar atajos por falta de tiempo. De esta forma se puede garantizar mayor efectividad en las investigaciones. Entre las enmiendas que esta Ley lleva a efecto se encuentran la extensión del término original para que un Fiscal Especial lleve a cabo una investigación de noventa (90) a ciento cincuenta (150) días.

Por otro lado, en el curso de las investigaciones, muchas veces surgen autores del delito que han actuado en concierto y común acuerdo con los funcionarios en la comisión de delitos. A pesar de que hay suficiente prueba sobre la responsabilidad criminal de estos autores, el Fiscal Especial Independiente carece de jurisdicción para radicar los casos y tiene que referir los mismos al Departamento de Justicia para que éste continúe con el proceso criminal contra estos coautores. Esto implica una obvia multiplicidad de esfuerzos que a su vez conlleva un aumento sustancial en el uso de fondos públicos. Por consiguiente, es necesario y conveniente que se le conceda jurisdicción al Fiscal Especial Independiente para que pueda encausar todos aquellos autores que surgen durante la investigación del funcionario concernido, cuando el Secretario de Justicia así lo considere conveniente. De esta forma los casos pueden ser llevados a los tribunales para procesar todos los autores de delitos incluidos en la misma transacción o evento y así lograr mejor uso del tiempo y del dinero del pueblo. Para atender de forma adecuada esta preocupación, se incorpora una enmienda para la concesión de jurisdicción adicional a los Fiscales Especiales Independientes para encausar y procesar a coautores de delitos que no son funcionarios públicos pero que actuaron en concierto y de común acuerdo con éstos en la comisión de delitos contra el erario o la función pública. De esta manera se amplía el ámbito de la jurisdicción y los poderes investigativos del Fiscal Especial, en claro beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Esta misma Ley, también creó el Panel sobre el Fiscal Especial. Este organismo tiene la responsabilidad de recomendar si se debe o no nombrar un Fiscal Especial Independiente para la investigación del

funcionario. Dicho Panel está compuesto por ex-jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal de Primera Instancia. Por la naturaleza de las funciones que ejerce el Panel es deseable que estos ex jueces tengan experiencia en el área criminal, esto seguramente redundará en mayor efectividad en el entendimiento de los procedimientos y por consiguiente beneficiará la Institución del Fiscal Especial Independiente. También se introduce una enmienda para incluir a los ex-jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Por último, con esta medida se reafirman restricciones relacionadas con la representación directa o indirecta por parte del Fiscal Especial y los miembros del Panel de personas que son o han sido parte de una investigación o hayan sido acusados bajo las disposiciones de esta Ley. De igual modo, se amplía el alcance de esta prohibición al hacerla extensiva a otras personas que estén relacionadas con la práctica privada de la abogacía del Fiscal Especial y de los miembros del Panel o que estén bajo la supervisión de éstos en las funciones que le han sido encomendadas de acuerdo a la Ley.

Además, con la intención de imprimirle mayor objetividad al procedimiento de destitución de los miembros del Panel que dispone el Artículo 17 de esta Ley, se faculta al Secretario de Justicia para que lleve a cabo la investigación en torno a las alegaciones y hechos en que se imputan causas para la destitución. Este mecanismo tiene el propósito de garantizar absoluta objetividad de estas investigaciones.

Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno de Puerto Rico pone de manifiesto, una vez más, su compromiso con la integridad y la excelencia en el servicio público.

Las comisiones que suscriben llevaron a cabo audiencias públicas los día 14 de julio y 18 de agosto del año en curso, a las cuales comparecieron los siguientes:

La Sra. Kiria Pérez, en representación del CPA. Jorge Aponte, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien señaló lo siguiente; "Favorecemos el P. del S. 1101, por entender que el mismo pretende optimar los recursos actualmente disponibles para combatir la corrupción de manera más eficiente y efectiva...".

El Lcdo. Reynaldo Medina en representación del Hon. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia, quien señaló en su ponencia que en términos generales, la pieza introduce enmiendas necesarias para el mejor funcionamiento de la Ley del Fiscal Especial Independiente.

El Lcdo. Florencio Rodríguez, en representación del Lcdo. Manuel Fermín Arraiza, Presidente del Colegio de Abogados, quien hace sugerencias y señala favorecer la aprobación de esta medida ya que fortalece la institución del FEI y de su Panel.

El Lcdo. Abelardo Casanova Hernández, en representación del CPA Manuel Díaz Saldaña, Contralor de Puerto Rico, quien favorece la medida ya que la misma faculta al FEI a procesar a aquellos individuos que actúen en concierto y común acuerdo con los funcionarios mencionados en el Artículo 4 de ley, lo que resultaría en economía procesal ya que se evitaría la duplicidad de trabajo en la investigación al igual que otros retrasos.

El Lcdo. Jorge Busigó Cifre, Presidente del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, acompañado de el Lcdo. Juan José Ríos Martínez y el Lcdo. Angel D. Martínez del Valle miembros del Panel, quienes ante preguntas del Presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales acerca de enmendar la medida en relación al termino para la investigación, indicaron estar entonces no tener objeción a la aprobación de la medida.

Todos hicieron sugerencias con relación a la medida las cuales fueron tomadas en consideración en la manera en que las mismas clarifican la intención del legislador de apoyar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de fomentar la dedicación de los funcionarios y empleados a la gestión y al servicio público con honestidad, excelencia profesional y personal, y dedicación absoluta al bienestar y desarrollo integral de

nuestro pueblo.

En reunión ejecutiva celebrada, luego de análisis de la medida y de la información disponible, los miembros de las comisiones que suscriben recomiendan la aprobación del P. del S. 1101, con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1101, titulado:

"Para añadir un apartado (j) al inciso (1) y enmendar los incisos (5) y (6) del Artículo 4; enmendar el inciso (1) y derogar el inciso (2) del Artículo 5; enmendar el inciso (4) del Artículo 8; enmendar el Artículo 9; enmendar los incisos (1), (2) y (6) del Artículo 10; enmendar el inciso (2) y añadir un nuevo inciso (8) del Artículo 11; enmendar el inciso (1), el apartado (*l*) del inciso (3) y el inciso (4) del Artículo 12; designar el primer párrafo como inciso (1) y añadir un inciso (2) al Artículo 13; enmendar el inciso (2) del Artículo 15; enmendar el inciso (4) del Artículo 17; añadir un nuevo Artículo 19 y renumerar los artículos 20, 21 y 22 como Artículos 21, 22 y 23, respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, que crea el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo de Fiscal Especial Independiente, a los fines de requerirle a dichos funcionarios experiencia en el área criminal; establecer que los nombramientos de dichos funcionarios se harán en forma escalonada; ampliar el término para completar las investigaciones; autorizar al Panel a devolver el asunto a la parte querellante o a la agencia concernida para cualquier procedimiento civil o administrativo, cuando se determine que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial; conceder al Fiscal Especial Independiente jurisdicción para procesar a coautores de funcionarios públicos en la comisión de unos mismos actos delictivos; autorizar al Secretario de Justicia a investigar aquellos casos en que se impute a alguno de los miembros del Panel alguna de las causas de destitución; adoptar prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido investigadas o encausadas; y para otros fines relacionados."

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez.
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, brevemente quisiéramos hacer unas expresiones sobre la medida. Este proyecto enmienda la Ley del Fiscal Especial Independiente, dirigida a varios cambios fundamentales, uno de ellos es que se permita incluir en la investigación preliminar, no tan solo los funcionarios que han sido debidamente establecidos ya en la Ley, que estarían sujetos a una investigación preliminar del Fiscal Especial Independiente, sino también incluiría a todo individuo que hubiese ocupado cargos, de los cargos enumerados, y que se le impute comisión de algún delito grave o menos grave dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que dicho individuo cesó su cargo.

Además de eso, hay una enmienda que señala, que si el panel determinara que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial, o que los intereses de la justicia y del mejor uso de los fondos públicos asignados al penal estarían mejor servidos mediante la radicación de acciones civiles o administrativas, dicha determinación será final y firme. A lo que vamos con esto es, que da la oportunidad que el Fiscal Especial Independiente si entiende, que el monto involucrado es mínimo, es preferible no realizar un proceso criminal, si así lo entiende el Panel, y que se proceda a través de la vía civil o administrativa, porque se han dado casos en que han gastado mucho más dinero procesando la persona que lo que realmente estaba involucrado en la comisión del delito.

También, va a permitir que se pueda el Fiscal Especial Independiente, procesar también a aquellas personas que no sean funcionarios de los enumerados, pero que actuaron en común acuerdo con el funcionario en la comisión del delito.

Actualmente, unos van por justicia y otros van por el Fiscal Especial Independiente, la verdad es, que para agilizar el proceso debieran ser todos a través de una sola figura, que sería en este caso el Fiscal Especial Independiente, si los hechos surgen de los mismos eventos o el delito surge de los mismos eventos.

Por otro lado, se establece un mecanismo escalonado de los miembros del Panel, de manera que no surja como ocurre ahora, que los miembros del panel, los ex-jueces, sus términos finalizan, más o menos a la misma fecha, y eso trastoca el funcionamiento del Panel. La manera que lo ponemos es de forma escalonada, de manera que siempre haya presencia de personas con experiencia en el Panel a medida que van venciendo los términos.

Se establece el mecanismo de dieta, de que la dieta será un ciento cincuenta (150) por ciento de lo establecido a los miembros de la Asamblea Legislativa. Se establece también que el Panel podrá nombrar a agentes investigadores y agentes de seguridad, los cuales podrán denunciar, arrestar, diligenciar, órdenes de los tribunales, poseer y portar armas y tomar juramento a testigos potenciales en casos bajo investigación del Fiscal Especial Independiente.

Señala que el Fiscal Especial debe tener, por lo menos, dos años de experiencia en el área criminal, actualmente no se le pide eso, obviamente, un Fiscal Especial Independiente va a llevar casos criminales, lo menos que debemos exigir es que tenga experiencia en el área criminal, ya fuere como abogado en la práctica privada, como fiscal o como juez.

Por otro lado, se establecen que los nuevos términos de investigación, que actualmente son noventa (90) días adicionales y de ser un caso demasiado de crítico, treinta (30) días adicionales, para un total de doscientos diez (210) días, pues ahora se reduce a un término inicial de ciento cincuenta (150) días y un término adicional, de ser necesario, de treinta (30) días adicionales para la investigación del Fiscal Especial Independiente.

Además de eso, señala el procedimiento que se va a seguir cuando un miembro del Panel es destituido por el Gobernador, pues se establece un procedimiento, de manera que se pueda dar el debido proceso de ley al del Panel y establecer unos términos claros para poder destituir un miembro del Panel.

También establece unas prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido parte de la investigación acusada. Ningún Fiscal Especial podría representar a alguien al cual estuvo investigando y procesando o algún socio del Fiscal Especial Independiente. De igual manera, ningún miembro del Panel. De igual manera ningún abogado que esté bajo la supervisión del Fiscal Especial o del Panel podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar directa o indirectamente en cualquier capacidad a cualquier persona que sea parte de la investigación o que haya sido acusada bajo las disposiciones de esta Ley.

Y establece las multas y las sanciones que se le impone a aquella persona que viole intencionalmente las prohibiciones establecidas.

Básicamente, estas son las enmiendas, señor Presidente, nos parece que son enmiendas que van dirigidas a fortalecer la figura del Fiscal Especial Independiente, pero también a dar una protección, a establecer un mecanismo adecuado para la investigación de parte del Fiscal Especial Independiente, fortalecer sus facultades, pero también reconocer que puede haber unos casos que por el monto de lo que está involucrado el propio Fiscal Especial Independiente desee que el asunto pase a ser visto por la vía civil o administrativa.

Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para unos comentarios adicionales. Cuando estudiábamos esta medida, determinamos que esto era medida que ciertamente contribuye a que haya justicia rápida, severa, pero queríamos asegurarnos que a la misma vez también fuera una justicia humana. Entre las cosas que se mantienen como enmiendas en este proyecto, que se mantiene el que se le devuelvan unos gastos razonables de abogado cuando la persona, el funcionario acusado o cualquier otro ciudadano que sea acusado por el FEI, pueda prevaler en su inocencia. Eso es importante para mantener un balance y para que el panel del Fiscal Especial Independiente sepa, que debe tener un caso relativamente robusto, si no quiere excederse en los gastos en ese caso, aparte de que es una cuestión de gran justicia.

Segundo, hay que asegurarse de que no se permita, que se le dé todos los instrumentos necesarios al Fiscal Especial Independiente, pero que no contribuyamos a la creación de unos "Kenneth Stars" en Puerto Rico, donde se gastan cuarenta (40), cincuenta (50), sesenta (60) millones de dólares en casos que realmente no aguantan agua.

Por eso es que se incorpora el concepto de que se permita, el que se pueda llevar por la vía civil, que se pueda llevar por la vía administrativa el recobro, cuando realmente el costo de llevar un caso flojo a nivel penal es excesivo y la posibilidad de prevalecer en el ámbito civil o administrativo sea mucho más cierto.

No podemos olvidar el caso mencionado con asuntos de ética de corrupción de O.J. Simpson, de que en el ámbito penal salió inocente de los cargos de asesinato que se le imputaban, pero en el ámbito civil apareció como que sí era el asesino, ¿por qué? Porque en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, el peso de la prueba que tiene que llevar el Fiscal Especial Independiente, es un peso mucho menor que el peso de la prueba que tiene que llevar en el ámbito penal.

Finalmente, es importante que dejemos claro cuál es el espíritu de esta Ley. Esta Ley no puede estar hecha para lo que hemos visto esta semana en la televisión, donde una alcaldesa acusada bajo la Ley del F.E.I., comparece voluntariamente, a pesar de tener un yeso en su pierna, comparece voluntariamente, primero, para mostrarle al fiscal su récord médico, para que él deje de estar poniendo en duda el hecho de que sí tenía una fractura, y segundo, para entregarse para ser fichada en un día anterior a la fecha que el Fiscal Especial quería, y él pretendía que ella volviera a la Isla Municipio de Vieques y volviera tres (3) días más tarde en la condición en que ella se encuentra.

Aquí tiene que impartirse justicia en una forma humana y una forma respetuosa a las personas que están acusadas. Segundo, tenemos que ver también que no se debe estar llevando, y hemos visto que funcionarios de ambos partidos políticos han sido sometidos a la justicia por casos que realmente no aguantaban agua, que aunque la deshonestidad es deshonestidad donde quiera que sea, pero la menudencia que estaba envuelta llevó a los jueces, a los tribunales, a entender que realmente los casos no tenían méritos. Que si se hubiesen llevado por la vía administrativa se hubiese recuperado algo para el Estado sin tener que incurrir a un gasto tan excesivo.

Por eso, señor Presidente, es que hemos informado positivamente esta medida, al igual que el compañero Presidente del Senado y coautor de la medida, solicitamos la aprobación de la misma.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 2170.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Proyecto de la Cámara 2170, titulado:

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronaúticas, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta. Ext., según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de 1994"."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un quinto Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 1311, Proyecto de la Cámara 2057, Proyecto de la Cámara 2066, Proyecto de la Cámara 2093, Proyecto de la Cámara 2095, Proyecto de la Cámara 2103, Proyecto de la Cámara 2105, Proyecto de la Cámara 2106, Proyecto de la Cámara 2108, Proyecto de la Cámara 2109, Proyecto de la Cámara 2110, Proyecto de la Cámara 2111, Proyecto de la Cámara 2112; Proyecto del Senado 1214, Proyecto del Senado 1369, Proyecto del Senado 1396; Proyecto de la Cámara 1950, Proyecto de la Cámara 2154, Proyecto de la Cámara 2170; Proyecto del Senado 1264; Proyecto de la Cámara 2149, en reconsideración; Proyecto del Senado 1101.
Señor Presidente, falta también incluir la Concurrencia con la Resolución Concurrente del Senado Número 11 y el Proyecto de la Cámara 1671, en reconsideración.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1101

"Para añadir un apartado (j) al inciso (1) y enmendar los incisos (5) y (6) del Artículo 4; enmendar el inciso (1) y derogar el inciso (2) del Artículo 5; enmendar el inciso (4) del Artículo 8; enmendar el Artículo 9; enmendar los incisos (1), (2) y (6) del Artículo 10; enmendar el inciso (2) y añadir un nuevo inciso (8) del Artículo 11; enmendar el inciso (1), el apartado (*l*) del inciso (3) y el inciso (4) del Artículo 12; designar el primer párrafo como inciso (1) y añadir un inciso (2) al Artículo 13; enmendar el inciso (2) del Artículo 15; enmendar el inciso (4) del Artículo 17; añadir un nuevo Artículo 19 y renumerar los artículos 20, 21 y 22 como Artículos 21, 22 y 23, respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, que crea el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo de Fiscal Especial Independiente, a los fines de requerirle a dichos funcionarios experiencia en el área criminal; establecer que los nombramientos de dichos funcionarios se harán en forma escalonada; ampliar el término para completar las investigaciones; autorizar al Panel a devolver el asunto a la parte querellante o a la agencia concernida para cualquier procedimiento civil o administrativo, cuando se determine que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial; conceder al Fiscal Especial Independiente jurisdicción para procesar a coautores de funcionarios públicos en la comisión de unos mismos actos delictivos; autorizar al Secretario de Justicia a investigar aquellos casos en que se impute a alguno de los miembros del Panel alguna de las causas de destitución; adoptar prohibiciones relacionadas con la representación de personas que han sido investigadas o encausadas; y para otros fines relacionados."

P. del S. 1214

"Para enmendar el el apartado (2) del inciso (c) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", con el propósito de eliminar la facultad del patrono para justificar la necesidad de la licencia de portar, transportar y conducir un revólver o pistola y condicionar tal licencia a la vigencia del contrato de trabajo como guardia de seguridad."

P. del S. 1264

"Para enmendar el inciso (2) de la sección (A) del artículo 4 de la Ley Núm. 1, del 20 de enero de 1966, según enmendada, a los fines de permitir que al Recinto Universitario de Mayagüez perteneciente al sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, se le llame Colegio de Mayagüez."

P. del S. 1369

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Sentencias Suspendidas, al fin de excluir del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, conforme al Artículo 87 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando lo hace en estado de embriaguez."

P. del S. 1396

"Para enmendar el cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimoquinto y décimoseptimo párrafos del Artículo 4.003; el primer párrafo, los incisos (b), (c), (d), (e) y (f) del primer párrafo y el último párrafo del Artículo 4.004; los Artículos 4.005, 4.006, 4.007; el primer párrafo del Artículo 4.008; el título, los incisos (a) y (c) y el segundo párrafo del Artículo 4.009; el título, el segundo y tercer párrafos del Artículo 4.010; el segundo párrafo del Artículo 4.011; el título y el primer, quinto, sexto y octavo párrafos del Artículo 4.013; el Artículo 4.014; el primer párrafo del Artículo 5.001; el segundo párrafo del Artículo 5.004, el primer párrafo del Artículo 5.010; los incisos (b), (j), (k), (m) y (p) del Artículo 5.011; el primer párrafo del Artículo 5.012; el segundo párrafo del Artículo 5.014; los incisos (a) y (b) del Artículo 8.016; el segundo párrafo del Artículo 18.009; los incisos (l) y (o) del Artículo 19.002; el primer párrafo del Artículo 19.003; y el Artículo 20.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a fin de sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de "Legislador Municipal"."

P. de la C. 1311

"Para derogar la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, y crear la "Ley para la Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales", con el propósito de que toda convicción por delito menos grave cuya sentencia haya sido cumplida pueda eliminarse del expediente de antecedentes penales, cuando hayan transcurrido tres (3) años de la última convicción, y para reducir el término para solicitar la eliminación del expediente de antecedentes penales de toda convicción de delito grave."

P. de la C. 1671
(Reconsideración)

"Para enmendar el inciso (cc) del Artículo 1.003 y el último párrafo del inciso (f) del Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 del 6 de septiembre de 1996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada a favor o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción; clarificar que únicamente estarán exentos del pago de arbitrio toda actividad de construcción que realice por administración, cualquier agencia municipio o instrumentalidad del gobierno central municipal o estatal; y establecer la aplicación retroactiva de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las disposiciones de la Ley Núm. 199, *supra*."

P. de la C. 1950

"Para disponer que el terminal de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicado en el Barrio Capetillo de Río Piedras, sea denominado como el "Terminal de Guaguas Doña Cruz María (Cucú) Velázquez Benítez"."

P. de la C. 2057

"Para enmendar el Artículo 142 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito contra el derecho de reunión."

P. de la C. 2066

"Para enmendar el Artículo 116 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de anuncios obscenos, propaganda o promoción de venta y distribución."

P. de la C. 2093

"Para enmendar el Artículo199 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alarma falsa."

P. de la C. 2095

"Para enmendar el Artículo 203 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa para el delito de usurpación de cargo público."

P. de la C. 2103

"Para enmendar el Artículo 217 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de listas fraudulentas y otros actos ilegales."

P. de la C. 2105

"Para enmendar el Artículo 218 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa a presentar lista de bienes o nombre."

P. de la C. 2106

"Para enmendar el Artículo 219 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entorpecer a un funcionario público en el cobro de deudas."

P. de la C. 2108

"Para enmendar el Artículo 222 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones."

P. de la C. 2109

"Para enmendar el Artículo 223 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de venta ilegal de bienes."

P. de la C. 2110

"Para enmendar el Artículo 224 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de no permitir la inspección de libros y documentos."

P. de la C. 2111

"Para enmendar el Artículo 230 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de justicia por sí mismo."

P. de la C. 2112

"Para enmendar el Artículo 231 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negar ayuda a hacer arresto."

P. de la C. 2149
(Reconsideración)

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 15; adicionar los Artículos 16 y 17 y renumerar los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 18, 19, 20, como los Artículos 18, 19, 20, 21 y 22, respectivamente, de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, conocida como "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a fin de aclarar y de ampliar el alcance de algunas de sus disposiciones."

P. de la C. 2154

"Para denominar a la carretera del desvío norte del municipio de San Sebastián, Puerto Rico, con el nombre de Juan Evangelista (Nito) Cortés Rodríguez."

P. de la C. 2170

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronaúticas, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta. Ext., según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de 1994"."

Concurrencia con las Enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes
a la R. Conc. del S. 11

VOTACION

Los Proyectos del Senado 1214; 1264; 1369; 1396; los Proyectos de la Cámara 1311; 1671(Rec.); 1950; 2057; 2066; 2093; 2095; 2103; 2105; 2106; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2149(Rec.); 2154; 2170 y la Concurrencia con las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Concurrente del Senado 11, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 23

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

- - - -

El Proyecto del Senado 1101, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 22

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Víctor Marrero Padilla

Total 1

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la octava relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

RESOLUCIONES DEL SENADO

R. del S. 2016
Por el señor McClintock Hernández:

"Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales investigar la posibilidad de implantar un sistema de votación a través de medios electrónicos en Puerto Rico."
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 2017
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más calurosa felicitación al Sr. Jerónimo Estévez y a todo el personal de Bella International, por sus treinta y cinco (35) años de servicio al pueblo de Puerto Rico; servicio que ha sido de gran aporte económico a nuestra Isla."
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 2018
Por el señor Iglesias Suárez:

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más calurosa felicitación a la empresa puertorriqueña Freiría & Co., en ocasión de celebrar sus cien (100) años de fundada, y a sus empleados por su incansable dedicación y la valiosa aportación que su extensa gama de productos representa para el pueblo de Puerto Rico."
(ASUNTOS INTERNOS)

La Secretaría informa que ha sido recibido de la Cámara de Representantes y referido a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LA CAMARA

P. de la C. 2170
Por la señora Juarbe Beníquez:

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 187 de 6 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronaúticas, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1994, 4ta. Ext., según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de 1994"."
(DE LO JURIDICO)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes Especiales del Día que incluya la siguiente medida: Proyecto de la Cámara 554.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda el tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1805, 1806, 1807 y 2130, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, vamos a solicitar que se incluya el Proyecto de la Cámara 2133 y el Proyecto de la Cámara 137.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 554, y se da cuenta con un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

"LEY

Para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar los incisos (c) a la (g) como (d) a la (h) del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de que sólo se vendan uniformes, insignias y accesorios oficiales a los agentes que muestren sus tarjetas de identificación como evidencia o la autorización del Superintendente para realizar tal compra.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El uniforme de los agentes de la Policía representa la autoridad que les ha sido delegada por el pueblo de Puerto Rico para conservar el orden público y compeler a la obediencia de las leyes.

Es menester ser cuidadosos al momento de suministrar la vestimenta policial, pues la misma puede entrar en posesión de personas no autorizadas e inescrupulosas, las cuales se aprovechan del poder que les confiere el uniforme para su beneficio, desvirtuando así la imagen de la Policía de Puerto Rico.

Es por esta razón que se propone que al momento de suministrar los uniformes a los agentes, éstos proporcionen su tarjeta de identificación como evidencia de ser miembro de la fuerza policíaca.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se adiciona un nuevo inciso (c) al Artículo 11 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 11. - Uniforme y Equipo

(a) . . .

(c) Las piezas de vestir del uniforme, insignias y accesorios oficiales de la Policía de Puerto Rico sólo se venderán a los agentes que muestren como evidencia su tarjeta de identificación o la autorización del Superintendente para realizar tal compra.

. . ."

Sección 2.-Se redesignan los incisos (c) al (g) como los incisos (d) al (h), respectivamente, del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada.

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales luego de haber estudiado y analizado el P. de la C. 554 recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar los incisos (c) a la (g) como (d) ala (h) del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de que sólo se vendan uniformes, insignias y accesorios oficiales a los agentes que muestren sus tarjetas de identificación como evidencia.

Es menester ser cuidadoso al momento de suministrar la vestimenta policial, pues la misma puede entrar en posesión de personas no autorizadas e inescrupulosas, las cuales se aprovechan del poder que les confiere el uniforme para beneficio, desvirtuando así la imagen de la Policía de Puerto Rico.

El uniforme de los agentes de la Policía representa la autoridad que les ha sido delegada por el pueblo de Puerto Rico para conservar el orden público y compeler a la obediencia de las leyes.

En reunión ejecutiva luego de la analisis de la medida e información la Comisión de Gobierno recomienda la aprobación del P. de la C. 554 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido;

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1805, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el almacen.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el almacen.

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con cualesquiera otros provenientes del gobierno federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1806, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA *DE PUERTO RICO:*

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan.

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con cualesquiera otros provenientes del gobierno federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1807, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación al señor Carlos López, Seguro Social #583-38-8217, para cubrir gastos médicos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación al señor Carlos López, Seguro Social #583-38-8217, para cubrir gastos médicos.

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con cualesquiera otros provenientes del gobierno federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2130, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de la primera etapa del proyecto Monumento a la Historia "Puerta del Oeste" en la carretera núm. 2 de dicha municipalidad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigne al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de la primera etapa del proyecto Monumento a la Historia "Puerta del Oeste" en la carretera núm. 2 de dicha municipalidad.

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Isabela a parear estos fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2133, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para adicionar un nuevo Artículo 12.020 y renumerar los actuales Artículos 12.020 al 12.028 como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en el municipio por un período considerable.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico, en su empeño y dedicación en facilitar y lograr la mayor eficiencia en los servicios otorgados a sus ciudadanos, ha otorgado una serie de derechos y beneficios a sus empleados públicos, con el propósito de incentivarlos y a la vez, posibilitar la consecución de un servicio de excelencia. La Ley Núm. 44 de 22 de mayo de 1996 es otro ejemplo más de dicho empeño. Esta autoriza la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre empleados de una misma entidad gubernamental, en aquellos casos en que un empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en la entidad gubernamental por un período considerable.

Sin embargo, el Artículo 2 de la Ley Núm. 44, antes citada, define el término "empleado público" como aquél "funcionario, empleado y personal que trabaje ..." en una entidad gubernamental, la cual define como "cualquier rama del Gobierno, Agencia, Departamento, Instrumentalidad o Corporación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubierta o no por la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como 'Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico'". Por tanto, los beneficios otorgados por la Administración actual a los funcionarios públicos estatales mediante la aprobación de la Ley Núm. 44, *supra*, no fueron extendidos a los funcionarios o empleados municipales.

La Asamblea Legislativa comprende la difícil situación de los servidores públicos en situaciones de emergencia, por lo que entiende justo, meritorio y razonable adoptar esta Ley, cuyo propósito es extender la autorización dispuesta en la Ley Núm. 44, antes citada, a los funcionarios o empleados municipales. A esos fines, autorizamos, de manera excepcional, la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en caso de que un funcionario o empleado municipal o un miembro de su familia inmediata, sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en el municipio por un período considerable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se adiciona un Artículo 12.020 a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,

para que se lea como sigue:

"Artículo 12.020.- Cesión de Licencias por Vacaciones

Uno o más funcionarios o empleados municipales pueden ceder, como cuestión de excepción, a otro funcionario o empleado municipal que trabaje en el mismo municipio, licencias acumuladas por vacaciones, cuando:

(a) El funcionario o empleado cesionario haya trabajado continuamente un mínimo de un (1) año con el municipio;
(b) El funcionario o empleado cesionario no haya incurrido en un patrón de ausencias injustificadas faltando a las normas de personal del municipio;
(c) El funcionario o empleado cesionario hubiere agotado la totalidad de las licencias a que tiene derecho como consecuencia de una emergencia;
(d) El funcionario o empleado cesionario o su representante evidencie fehacientemente la emergencia y la necesidad de ausentarse por días en exceso a las licencias ya agotadas;
(e) El funcionario o empleado cedente haya acumulado un mínimo de quince (15) días de licencia por vacaciones en exceso de la cantidad de días de licencia a cederse;
(f) El funcionario o empleado cedente haya sometido por escrito a la oficina de personal del municipio para el cual trabaja una autorización accediendo a la cesión, especificando el nombre del cesionario; y
(g) El funcionario o empleado cesionario o su representante acepte por escrito la cesión propuesta.

La oficina de personal del municipio correspondiente procederá a descontar del funcionario o empleado cedente y aplicar al funcionario o empleado cesionario los días de licencia transferidos una vez constate la corrección de la misma, conforme se dispone en este Artículo y de acuerdo a los reglamentos de personal aplicables. Las licencias por vacaciones cedidas se acreditarán a razón del salario del funcionario o empleado cesionario.

Ningún funcionario o empleado podrá transferir a uno o más funcionarios o empleados un número mayor de cinco (5) días acumulados por licencia por vacaciones durante un (1) mes y el número de días a cederse de forma acumulativa no podrá ser mayor de quince (15) días al año.

El funcionario o empleado cedente perderá su derecho al pago de las licencias por vacaciones cedidas. No obstante, tendrá derecho al pago o al disfrute del balance acumulado de estas licencias en exceso de las cedidas.

Al momento en que desaparezca el motivo excepcional por el cual tuvo que ausentarse, el funcionario o empleado cesionario retornará a sus labores sin disfrutar el balance cedido que le resta, el cual revertirá al funcionario o empleado cedente acreditándosele a razón de su salario al momento en que ocurrió la cesión.

El funcionario o empleado cesionario no podrá disfrutar de los beneficios otorgados en este Artículo por un período mayor de un (1) año, incluyendo el tiempo agotado por concepto de las licencias y beneficios disfrutados por derecho propio. El municipio no reservará el empleo al funcionario o empleado cesionario ausente por un término mayor al aquí establecido.

La cesión de licencias acumuladas por vacaciones se realizará gratuitamente. Toda persona que directamente o por persona intermedia diera a otra, o aceptara de otra dinero u otro beneficio, a cambio de la cesión de licencias autorizada en este Artículo, será culpable de delito menos grave y que fuere convicta será castigada con una multa no mayor de quinientos (500) dólares o con plena de reclusión que no excederá de seis (6) meses: o ambas penas a discreción del tribunal.

A los efectos de este Artículo los términos siguientes tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) "Funcionario o empleado municipal" significa todo funcionario, empleado y personal que trabaje para cualquier municipio de Puerto Rico.
(b) "Funcionario o empleado cesionario", significa un funcionario o empleado municipal al cual se le

ceden días de licencias por vacaciones por razón de una emergencia personal.
(c) "Funcionario o empleado cedente", significa un funcionario o empleado municipal que transfiere parte de sus días de licencias por vacaciones a favor de un funcionario o empleado cesionario.
(d) "Emergencia", significa una enfermedad grave o terminal o un accidente o condición médica que conlleve una hospitalización prolongada o que requiera tratamiento contínuo bajo la supervisión de un profesional de la salud, que sufra un funcionario o empleado municipal o miembro de su familia inmediata, y que prácticamente imposibilite o afecte de forma sustancial el desempeño de las funciones del funcionario o empleado por un período de tiempo considerable.
(e) "Municipio", tendrá el mismo significado dado a éste término en el Artículo 1.003 de esta Ley.".

Sección 2.-Se renumeran los actuales Artículo 12.020 al 12.028 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente.

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días después de su aprobación. No obstante, dentro de dicho período, todo municipio deberá haber adoptado reglamentación concerniente a la aplicación de las disposiciones de esta Ley."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, previo estudio y evaluación del Proyecto de la Cámara 2133, tiene a bien recomendar a éste Alto Cuerpo la aprobación de la medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida propone adicionar un nuevo Artículo 12.020 y renumerar los actuales Artículos 12.020 al 12.028 como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla con sus funciones en el municipio por un período considerable.

Para evaluar la medida se examinó y estudió el récord de la misma según fuera aprobada por la Cámara de Representantes, se estudiaron los memoriales sometidos por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Federación de Municipios, el departamento de Justicia y la Oficina del Contralor y las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 44 de 22 de mayo de 1996 y el artículo correspondiente de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Todas las entidades consultadas, cuyos memoriales fueron estudiados endosan y recomiendan la aprobación de la medida.

En su memorial, el Departamento de Justicia expresa lo siguiente: "Surge de la Exposición de Motivos que el proyecto de referencia propone extender los beneficios de la Ley Núm. 44 de 22 de mayo de 1996, conocida como "Ley de Cesión de Licencias por Vacaciones" a los empleados y funcionarios municipales. Tal y como fue aprobada la Ley Núm. 44, no incluyó a los empleados ni gobiernos municipales dentro de su alcance, por tal motivo el legislador ha decidido incorporar las disposiciones de la Ley Núm. 44 ante, como un Artículo del Capítulo XII de la "Ley de Municipios Autónomos" que trata sobre el Personal Municipal. Existiendo un precedente, no vemos obstáculos de índole legal a la aprobación de la presente medida.

Igual posición sostiene la Oficina del Contralor. O.C.A.M. se cuestiona por que no se aplicaron los beneficios de la Ley Núm. 44, del 22 de mayo de 1996 a los municipios cuando se aprobó la Ley y

manifiesta que "existe un reclamo para que los beneficios de dicha Ley se extiendan a los municipios.

La Ley Núm. 44 de 22 de mayo de 1996, no incluyó a los empleados municipales dentro del concepto de "Empleado Público."

En su Artículo 2, inciso (a) definió "Empleado Público" como "todo funcionario, empleado y personal que trabaja para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su Artículo 2, inciso (a) definió "Entidad Gubernamental" y significa "cualquier rama del Gobierno, Agencia, Departamento, Instrumentalidad o Corporación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Evidentemente los municipios están excluidos de los beneficios de dicha Ley. La medida bajo estudio es una de justicia que beneficia a los empleados municipales.

CONCLUSION

Por todo lo anteriormente expresado, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales del Senado, tiene a bien recomendar a éste Alto Cuerpo la aprobación de la medida, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales"

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 137, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 5.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a fin de facultar a las Asambleas Municipales a aprobar previa convocatoria del Alcalde y el voto de 2/3 partes de sus miembros de la Asamblea, la interrupción de una sesión ordinaria para atender un asuntos de emergencia, mediante una sesión ordinaria por el número de días que componen los cinco (5) días autorizados por Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los propósitos fundamentales de la Ley de Municipios Autónomos es ampliar el ámbito de facultades y funciones del municipio concediéndoles un amplio margen de autonomía y discreción para el manejo de los asuntos de su competencia. La propia Exposición de Motivos de esta Ley dispone que "Ha llegado la hora de otorgarles a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que puedan atender cabalmente sus responsabilidades". Nos parece que el contenido de la Ley en el inciso (a) del Artículo 5.003 sobre la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias en períodos excluyentes, limita las posibilidades de acción y determinación inmediata que exigen los asuntos de emergencia, que por su naturaleza, son de carácter urgente para la consecución de los servicios a la comunidad. Por lo que, respondiendo al espíritu de la Ley de Municipios se hace necesario facultar a las Asambleas a interrumpir una sesión ordinaria para atender estos asuntos en sesiones extraordinarias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 5.003 de la Ley Núm. 81 de 30

de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.003 Sesiones de la Asamblea

La Asamblea podrá reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones de la Asamblea serán públicas y se celebrarán en los días y horas que ésta disponga en su reglamento, incluyendo días feriados.

(a) Sesiones Ordinarias

La Asamblea, en su reglamento interno, establecerá el número de sesiones ordinarias a celebrarse durante el año natural, las cuales no podrán ser más de doce (12) al año. La duración de las sesiones ordinarias de la Asamblea no podrán exceder de cinco (5) días y de diez (10) días en la sesión para considerar la resolución del presupuesto, excepto en los casos en que se extienda dicho término con la previa autorización del Alcalde, o como lo dispone el Inciso (b) de este Artículo. Cuando el Alcalde convoque a la celebración de una sesión extraordinaria para atender un asuntos de emergencia mientras la Asamblea se encuentra reunida en el período de los cinco (5) días de una sesión ordinaria, la Asamblea podría, con el voto de 2/3 parte de sus miembros, aprobar la interrupción de la sesión ordinaria por un período que no excederá de cinco (5) días para atender dicho asuntos. Concluido el término de los cinco (5) días de sesión extraordinaria, la Asamblea podrá reanudar la sesión ordinaria por el número de días que corresponda sin exceder los cinco días que dispone este Artículo."

Artículo 2.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y consideración del Proyecto de la Camara 137, tiene a bien recomendar a éste Alto Cuerpo, la aprobación de la medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Camara 137 propone enmendar el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 5.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a fin de facultar a las Asambleas Municipales a aprobar previa convocatoria del Alcalde y el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros de la Asamblea, la interrupción de una sesión ordinaria para atender un asunto de emergencia, mediante una sesión ordinaria por el número de días que componen los cinco (5) días autorizados por Ley.

Para evaluar la medida se procedió a examinar el récord de la Cámara de Representantes, el Informe de la medida según fuera aprobado por la Cámara de Representantes, los memoriales respecto a la medida y las disposiciones legales pertinentes.

De la Exposición de Motivos del P. de la C. 137 leemos y citamos: "Uno de los propósitos fundamentales de la Ley de Municipios Autónomos es ampliar el ámbito de facultades y funciones del municipio.

Concediéndole un amplio margen de autonomía y discreción para el manejo de los asuntos de su competencia. La propia Exposición de Motivos de ésta Ley dispone: "Ha llegado la hora de otorgarle a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que puedan atender cabalmente sus responsabilidades."

Realmente lo que la medida propone es que "se pueda, validamente interrumpir una sesión ordinaria de la Asamblea Municipal para atender un nuevo asunto de emergencia y establecer el procedimiento adecuado."

Un asunto de emergencia puede surgir en cualquier momento durante una sesión ordinaria que no ha sido incluido en la agenda oficial de asuntos a tratar por la Asamblea Municipal.

El Artículo 5.003 trata sobre las Sesiones de la Asamblea. Lee dicho artículo en su parte pertinente, objeto de la presente medida, de la siguiente manera: "La Asamblea podría reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones de la Asamblea serán públicas y se celebrarán en los días y horas que ésta disponga en su reglamento, incluyendo días feriados.

(a) Sesiones Ordinarias

La Asamblea, en su reglamento interno, establecerá el número de sesiones ordinarias a celebrarse durante el año natural, las cuales no podrán ser más de doce (12) al año. La duración de las sesiones ordinarias de la Asamblea no podrán exceder de cinco (5) días consecutivos y diez (10) días a la sesión para considerar la resolución del presupuesto, excepto en los casos en que se extienda dicho término con la previa autorización del Alcalde, o como lo dispone el inciso (b) de este Artículo."

La rigidez de este artículo podría en algún momento dado ir en detrimento de algunas de las funciones principales de la Asamblea Municipal. La medida pretende darle flexibilidad a la Asamblea Municipal para que pueda atender legalmente cualquier asunto de emergencia que pueda surgir durante la celebración de las sesiones ordinarias.

La medida es una razonable y logra el fin expresado en su Exposición de Motivos.

RECOMENDACIONES

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, luego de haber estudiado y considerado el Proyecto de la Camara 137, tiene a bien recomendar a éste Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Carlos A. Dávila López
Presidente
Comisión Asuntos Municipales"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 554, titulado:

"Para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar los incisos (c) a la (g) como (d) a la (h) del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de que sólo se vendan uniformes, insignias y accesorios oficiales a los agentes que muestren sus tarjetas de identificación como evidencia o la autorización del Superintendente para realizar tal compra."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1805, titulada:

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el almacen."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1806, titulada:

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan."
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1807, titulada:

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación al señor Carlos López, Seguro Social #583-38-8217, para cubrir gastos médicos."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2130, titulada:

"Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de la primera etapa del proyecto Monumento a la Historia "Puerta del Oeste" en la carretera núm. 2 de dicha municipalidad."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2133, titulada:

"Para adicionar un nuevo Artículo 12.020 y renumerar los actuales Artículos 12.020 al 12.028 como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en el municipio por un período considerable."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 137, titulada:

"Para enmendar el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 5.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a fin de facultar a las Asambleas Municipales a aprobar previa convocatoria del Alcalde y el voto de 2/3 partes de sus miembros de la Asamblea, la interrupción de una sesión ordinaria para atender un asuntos de emergencia, mediante una sesión ordinaria por el número de días que componen los cinco (5) días autorizados por Ley."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario el Proyecto de la Cámara 972.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2129 y 2070, y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, el Proyecto del Senado 1378.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se incluya el Proyecto de la Cámara 1894, Proyecto de la Cámara 2179 y el Proyecto de la Cámara 2198.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 972, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano" a los fines de incluir a los municipios de Puerto Rico en la definición de "Agencia" contenida en la ley, y para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar como (d) el vigente inciso (c) de dicho artículo; y para enmendar los Artículos 10, 12, 14, 16, 17, 19 y 20 de dicha Ley, a los fines de extender la jurisdicción del Ombudsman a las actuaciones administrativas de las entidades privatizadoras contratadas por el Estado para prestar servicios a la ciudadanía o que hayan adquirido del Estado un interés sobre las actividades que anteriormente desempeñaba una entidad pública.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Artículo II, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico se consagra el derecho del ciudadano a pedirle al gobierno la reparación de agravios. Se refiere la constitución a la obligación que tiene el gobierno de diligentemente proveerle servicios de excelencia a la ciudadanía.

En el año 1977, Puerto Rico viabilizó la conjugación que existe entre el derecho del ciudadano a exigir una buena prestación de servicios con la obligación de así prestarlos. Su realización se consiguió poniendo a disposición del ciudadano un funcionario (Ombudsman) que intercediera por él cuando las actuaciones administrativas de las agencias del gobierno parecieran ser ilegales, irrazonables, injustas, no estuvieran acompañadas de explicaciones adecuadas o fueran ejecutadas en forma errónea o ineficiente.

La experiencia ganada en los viente (20) años del funcionamiento de la Oficina del Ombudsman puertorriqueño evidencia que éste ha contribuido grandemente a proteger los intereses del ciudadano contra la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos. Su figura, por un lado, ha propiciado que se mejoren los procedimientos administrativos y, por otro, ha abierto paso al ciudadano a participar en la cosa pública. Se puede afirmar que el ciudadano no está impune ante su gobierno y que cuando los servicios públicos no se prestan con excelencia, el ciudadano sí cuenta con un medio efectivo para quejarse y obtener un remedio.

No obstante lo anterior, el Ombudsman todavía tiene mucho terreno que recorrer procurando el bienestar del ciudadano que representa. Al presente esta Oficina carece de jurisdicción para investigar los actos administrativos de los municipios, ya que según la Opinión Núm. 1978-14 del Secretario de Justicia de Puerto Rico, emitida el 13 de junio de 1978, el Artículo 2 de la Ley Núm. 134 del 30 de julio de 1977, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)" excluye de la aplicación de ésta a los municipios. Además las tendencias del nuevo milenio dirigidas a privatizar los servicios públicos merecen también consideración. Al presente se han privatizado en nuestro país ciertas instituciones carcelarias así como servicios médicos, sociales y otros.

Ante el hecho de que el Ombudsman solamente tiene competencia para interpelar a las agencias de gobierno nos preocupa que el ciudadano del siglo XXI quede indefenso ante los grandes y complicadísimos entes privados llamados a prestarle los servicios básicos que anteriormente rendía el gobierno. La pregunta que nos debemos hacer es si se vuelve al pasado o se toman medidas para contrarrestar los efectos de la privatización en defensa de los derechos individuales del ciudadano. Creemos que se debe atemperar la Ley Orgánica del Procurador del Ciudadano al momento histórico presente.

Creemos que ya es tiempo de enmendar la ley para extender la jurisdicción del Ombudsman sobre las actuaciones administrativas de cualquier persona, natural o jurídica, que preste estos servicios básicos a la ciudadanía.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como Ley del Procurador del Ciudadano, se adiciona un nuevo inciso (c) y se redesigna como inciso (d) el vigente inciso (c) de dicho artículo, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.-Definiciones.-

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

a) "Agencia" significará cualquier entidad, departamento, junta, comisión, división, negociado, oficina, municipio, corporación pública o institución gubernamental de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier funcionario, empleado o miembro de esta rama que actúe o aparente actuar en el desempeño de sus deberes oficiales con excepción de:

(1) . . .

(2) . . .

(3) . . .

b) ...

c) "Entidad Privatizadora" significará cualquier negocio, empresa o persona, natural o jurídica, contratada por el Estado para prestar servicios a la ciudadanía o que haya adquirido del Estado un interés sobre las actividades que anteriormente desempeñaba una entidad pública.

(d) "Ombudsman" significará el Procurador del Ciudadano que por esta ley se crea."

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 10.-Jurisdicción.-

El Ombudsman tendrá jurisdicción para investigar los actos administrativos de las agencias y entidades privatizadoras y podrá ejercer las facultades y atribuciones que esta ley le concede."

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 12.-Notificación.-

El Ombudsman notificará al querellante de su decisión de investigar los hechos denunciados en la querella. También deberá notificar a éste, cuando así proceda, su decisión de no investigar la misma, expresando las razones para ello. En todos los casos en que el Ombudsman decida iniciar una investigación deberá así notificarlo a la agencia o entidad privatizadora concernida, excepto cuando la naturaleza de la investigación requiera que la notificación no se haga de inmediato, en cuyo caso debe efectuarse tan pronto la confidencialidad de la investigación lo permita."

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 14.-Procedimientos.-

Al realizar cualquier investigación, el Ombudsman podrá hacer las pesquisas y obtener la información que estime necesaria a los fines de la misma. A tales efectos, las agencias y entidades privatizadoras deberán dar acceso a los funcionarios y empleados de la Oficina a todos sus archivos y documentos. Asimismo, a

los fines de la investigación el Ombudsman podrá celebrar aquellas audiencias privadas e inspecciones oculares que estime pertinentes.

No obstante, el acceso en las entidades privatizadoras estará limitado a aquellos funcionarios o empleados y archivos y documentos pertinentes a la investigación en curso."

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 16.-Consulta con la Agencia.-

Antes de emitir una opinión o recomendación final que envuelva o afecte a una agencia, entidad privatizadora o persona, el Ombudsman deberá dar a éstas una oportunidad razonable para expresar sus puntos de vista sobre el asunto."

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 17 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 17.-Procedimientos Posteriores a la Investigación.-

Finalizada cualquier investigación el Ombudsman informará a la agencia o entidad privatizadora su opinión y recomendaciones si determinase que:

(a) la agencia o entidad privatizadora debe dar más amplia consideración al asunto objeto de la investigación;
(b) un acto administrativo debe ser alterado o dejado sin efecto.
(c) ...
(d) ...
(e) la agencia o entidad privatizadora debe realizar cualquier otra actuación.

El Ombudsman deberá requerir de la agencia o entidad privatizadora concernida que le notifique, dentro de un período de tiempo que éste estime razonable, de cualquier actuación realizada a tenor con sus recomendaciones. Deberá también notificar oportunamente al querellante de las actuaciones realizadas por él y por la agencia o entidad privatizadora."

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 19.-Incumplimiento de deberes.-

Si el Ombudsman determinase que cualquier funcionario o empleado de una agencia o entidad privatizadora ha faltado, sin justificación razonable, al cumplimiento de los deberes propios de su cargo o empleo o que ha sido negligente en el desempeño de los mismos, así deberá notificarlo a las autoridades, organismos o foros administrativos competentes para que estos procedan al respecto."

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 20.-Publicidad.-

El Ombudsman podrá dar a la publicidad sus opiniones y recomendaciones, y las acciones tomadas por la agencia o entidad privatizadora, una vez ponga en conocimiento de éstas al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.

En los casos en que la opinión del Procurador General sea contraria a la posición asumida por la agencia o entidad privatizadora, éste deberá a menos que la agencia o entidad privatizadora en cuestión se oponga a ello, señalar además razones que la agencia ha dado como justificativas del acto administrativo."

Sección 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, previo estudio y consideración del P. de la C. 972, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

En el Título:

Página 1, línea 3	eliminar "a los municipios" y sustituir por "a las agencias municipales, cuyo proveedor principal lo era el gobierno central,"
Página 1, líneas 3 a la 9	eliminar desde ", y para" hasta pública"

En la Exposición de Motivos:

Página 2, líneas 13 a la 26	eliminar desde "Además" hasta "Ciudadanía."

En el Texto Decretativo:

Página 2, líneas 2 y 3	eliminar desde "se adiciona" hasta "artículo,"
Página 3, línea 2	eliminar "municipio" y sustituir por "agencia municipal, cuyo proveedor principal lo era el gobierno central4e"
Página 3, líneas 11 a la 14	eliminar todo su contenido
Página 3, líneas 17 a la 22	eliminar todo su contenido
Página 4, líneas 1 a la 22	eliminar todo su contenido
Página 5, líneas 1 a la 22	eliminar todo su contenido
Página 6, líneas 1 a la 18	eliminar todo su contenido
Página 6 , línea 19	eliminar "9" y sustituir por "2"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. de la C.972 es enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano" a los fines de incluir a las agencias municipales de Puerto Rico, cuyo proveedor principal lo era el gobierno central, en la definición de "Agencia" contenida en la ley.

Bajo la Ley de Municipios Autónomos, las alcaldías se han convertido en proveedores directos de servicios que anteriormente prestaban las agencias del gobierno central. Por consiguiente es de esperarse que, al aumentar su área programática de servicios, aumenten también los reclamos que reciben de la ciudadanía.

Es por esta razón que se pretende incluir dentro de la definición de agencia a las agencias municipales, dado que en la Ley que crea el Ombudsman no se incluyó a éstos, y por ende, según opinión del Secretario de Justicia Núm. 14 de 1978, no habiéndolos incluido taxativamente quedan fuera de la jurisdicción del Ombudsman.

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción celebraron reunión ejecutiva, en la que se estudiaron las ponencias sometidas por el Procurador del Ciudadano y el Departamento de Justicia y a base de los memoriales explicativos de estas entidades se realizaron las enmiendas propuestas en este informe.

Luego de evaluar el propósito y alcance de la medida y la información disponible, los miembros de las comisiones que suscriben entienden que es conveniente y meritorio incluir las agencias municipales, las cuales el proveedor principal lo era el gobierno central, dentro de la jurisdicción del Ombudsman, de manera que la ciudadanía no quede desprovista al momento de solicitar ayuda respecto a problemas que pueda confrontar

con alguna agencia municipal que originalmente era jurisdicción del gobierno central. De esta manera el ciudadano no pierde su derecho constitucional de tener a quien recurrir para hacer valer efectivamente su derecho a pedirle al gobierno la reparación de agravios.

Por las razones previamente expuestas vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción recomiendan la aprobación del P. de la C. 972 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno
y Asuntos Federales

(Fdo.)
Sergio Peña Clos
Presidente
Comisión de Etica Gubernamental
y Contra la Corrupción"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2129, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500) dólares para la compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas en el Huracán Georges del balance de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500) dólares para la compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas en el Huracán Georges del balance de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.

1) Sr. Juan Concepción González
Bo. Jaguar, Sector Los Márquez
S.S. #583-61-0909
Gurabo, P.R. 500

Sección 2.-Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales y/o del gobierno de los Estados Unidos.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2070, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda.

"**RESOLUCION CONJUNTA**

Para asignar a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno (52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para realizar obras

que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno (52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para realizar obras que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE FAJARDO

1. Maribel Alicea Rivera S.S. 583-29-1607
Calle 4 C#10 Urb. Rafael Bermúdez Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-1071
(Para reembolso gastos de matrícula estudios
universitarios UIPR) $1,000.00
2. Joanne Muñiz Rodríguez S.S. 584-57-3984
P.O. Box 605 Puerto Real, P.R. 00740
Tel. 860-4509
(Para gastos estudios universitarios U.I.P.R.) 500.00
3. Consorcio Inmunológico del Noreste
P.O. Box 787 Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-8808 Ext. 238
(Ayuda para compra de equipo) 2,000.00
4. Nélida Escobar S.S. 584-58-0219
Urb. Vista del Convento Calle 3 B-18 Fajardo, P.R. 00738
Tel. 860-7759
(Para gastos funerarios de su hijo Melvin Reyes Escobar) 1,400.00
5. Esc. de la Comunidad Inés Encarnación
Distrito Escolar de Fajardo, P.R. 00738
Tel. 860-7387
(Compra de Fuente de Agua) 500.00
6. Emma R. Solís Negrón S.S. 063-48-0161
Calle 32 B-17 Vista del Convento Fajardo, P.R. 00738
(Gastos estudios Universitarios U.I.P.R.) 300.00
7. Josué Emmanuelli Rivera S.S. 596-18-7072
Calle E #G-2 Urb. Monte Brisas I Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-2927
(Para gastos de Estudios) $500.00
8. 38mo. Aniversario Parranda Navideña de
Joaquín Mouliert
Municipio de Fajardo, P.R. 00738
(Para gastos operacionales del 38mo. Aniversario de la
Parranda Navideña de Joaquín Mouliert) 2,000.00
9. Escuela de la Comunidad Pedro Rosario Nieves
Sra. Rigoberta Romero Santana
Programa Título I
(Compra de material didáctico) 200.00
10. Centro Hope Municipio de Fajardo
Municipio de Fajardo, P.R. 00738
(Para compra de Acondicionador de Aire) 688.00

11. Escuela de la Comunidad Eugenio M. Brac
Carmen E. Ortiz Robles
Presidente Comité de Padres
Clase graduanda 6to. grado Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-0324
(Para ayudar con gastos de premiaciones estudiantes
clase graduanda 6to. grado) 200.00

12. Programa Head Start
Sra. María V. Pomales
Valle Puerto Real Fajardo, P.R. 00740
Tel. 863-6900
(Equipo de Oficina y Material didáctico) $400.00

13. Francheska Medina Solís S.S. 581-71-4325
Tel. 860-3100
(Para gastos de estudios universitarios) 300.00

14. Celines Pérez Rodríguez
P.O. Box 658 Puerto Real, P.R. 00740-0658
Tel. 863-5238
(Para compra de Mobiliario) 300.00

15. Máximo Rodríguez Tufiño S.S. 073-24-7300
Calle U- Q-6 Urb. Monte Brisas I Fajardo, P.R. 00738
Tel. 860-1974
Para gastos fúnebres (Compra de cámara y
lote de en cementerio) 437.00

16. Nilda Vázquez
Asamblea de Fajardo
Municipio de Fajardo
(Para gastos de premiaciones en actividad de
las Fiestas Patronales de Fajardo) 225.00

17. Sulayka M. Gómez Alicea S.S. 583-91-7156
Calle 3 #AA-2A Urb. Monte Brisas Fajardo, P.R. 00738
Tel. 801-0276
(Para ayuda gastos estudios universitarios U.P.R.,
Recinto de Humacao $500.00

18. Mercedes Pérez Albert S.S. 584-57-4123
Parcelas Estancias del Mar J-12
Quebrada Vueltas, Fajardo P.R. 00738
Tel. 863-2801
(Para medicamentos, recibió un trasplante de riñón) 500.00

19. Cindy L. Arenas Nieves S.S. 597-03-9123
Calle 5 #J-2 Bo. Jerusalem, Fajardo P.R. 00738
Tel. 885-0967
(Para gastos de estudios universitarios,
Recinto de Mayagüez) 500.00

20. Luis La Santa Rivera S.S. 583-99-3901
Calle 13 #4L-47 Alturas de Monte Brisas
Fajardo, P.R. 00738
(Para gastos para tratamiento de Leucemia) 2,000.00

21. Felícita García Mojica S.S. 583-52-5216
Calle Unión 463 Playa Puerto Real, P.R. 00740
(Ayuda para compra de enseres del hogar) 400.00

22. Jannette Castro Herrera S.S. 801-14-0116
Calle Colón E-8 2do. piso Fajardo, P.R. 00738

Tel. 860-7102
(Ayuda para compra de enseres del hogar) $600.00

23. Rafael J. Torres Serrano S.S. 802-95-8529
Calle 7 #4 L-23 Alturas de Monte Brisas
Fajardo, P.R. 00738
(Para gastos estudios universitarios, Recinto Mayagüez) 500.00

24. Pilar Torres Serrano S.S. 581-71-9851
Calle 7 #4 L-23 Alturas de Monte Brisas
Fajardo, P.R. 00738
(Para gastos estudios universitarios,
Colegio Regional de Carolina) 500.00

25. Peter Ventre Ramos S.S. 582-89-3442
Calle J-31 Quintas de Fajardo, P.R. 00738
(Ayuda para gastos de estudios universitarios) 2,000.00

26. María S. Gómez Cruz S.S. 584-42-6589
Residencial Veve Calzada #10
Fajardo, P.R. 00738
(Ayuda para compra de enseres del hogar) 500.00

27. Aida M. Gautier
Ave. Muñoz Rivera #252 Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-0218
(Para cubrir gastos fúnebres) $155.00

28. Corps Batuteras Aguilas Fajardeñas, Inc.
Vista del Mar Edif. 3 apt. 37 Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-6101
(Para gastos operacionales incurridos) 500.00

29. Francisco Cariño Piñero
HC-00866 Box 8742 Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-1912
(Ayuda para compra de bomba de agua) 240.00

30. Vanessa Morales Rosal S.S. 596-14-2236
Urb. García Ponce Calle Milagrosa D-2
Fajardo, P.R. 00738
Tel. 863-2390 Ext. 2252
(Ayuda para gastos estudios en la Universidad
Interamericana, Recinto de San Germán) 1,000.00

TOTAL $20,845.00

MUNICIPIO DE LUQUILLO

1. Raymond Cintrón Solís S.S. 587-73-3674
Calle Acceso E-Q-5 Brisas del Mar Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-1691
(Para pago de deuda por estudios en Aviation
and Industry Academy, Inc.) 1,000.00

2. Esc. Superior de la Comunidad Isidro A. Sánchez
Comité de Padres y Estudiantes Clase Graduanda 98-99
Municipio de Luquillo, P.R. 00773
(Ayuda para gastos de graduación y/o Senior Prom) $500.00

3. Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Sabana
Distrito Escolar de Luquillo, P.R. 00773
Tel. 889-3750

(Para costear la Tarja de Doña Alejandrina Ríos Bernabé, certificación endosados por la Comisión Denominadora) 1,200.00

4. Centro Head Star
Barrio Juan Martín Luquillo, PR 00773
Tel. 888-4171
(Ayuda para la compra de Acondicionador de Aire) 1,376.00

3. Departamento de Educación
Escuela Segunda Unidad Rafael Rexach Dueño Sector Palmer
Distrito Escolar de Río Grande
Tel. 888-2720
(Ayuda para reparación del salón de computadoras del Proyecto V.A.L.E.) 800.00

TOTAL $4,876.00

MUNICIPIO DE VIEQUES

1. Proyecto Cenim
P.O. Box 368 Vieques PR
(Para gastos operacionales incurridos en el proyecto) 2,000.00

2. Escuela Comunidad Segunda Unidad
Adrienne Serrano
Bo. Puerto Real Vieques, PR
(Para el 1er. Festival Artesanal Infantil Viequense) $1,000.00

3. Escuela Comunidad Segunda Unidad
Adrienne Serrano
Bo. Puerto Real Vieques, PR
(Para equipo y materiales, Salón de Educación Física) 1,000.00

TOTAL $4,000.00

MUNICIPIO DE CEIBA

1. Liga Coquí
Liga de Baloncesto Infantil
Municipio de Ceiba
Tel. 860-6238/887-8162
(Para ayuda gastos equipo y uniformes) 1,000.00

2. Escuela de la Comunidad de Río Abajo
Distrito Escolar de Ceiba
Municipio de Ceiba
Tel. 885-0160
(Ayuda para gastos de equipo de material didáctico) 1,050.00

3. Zayrre I. Castro S.S. 583-69-1113
Villa Flores Calle 2 #C-7 Ceiba, PR 00735
(Ayuda para gastos matrícula en Puerto Rico Barber Collage, Recinto de Fajardo) $450.00

4. Griselle Rodríguez S.S. 582-55-2102
Urb. Santa María Calle 1 E-#12 Ceiba, PR 00735
Tel. 763-2457
(Ayuda para gastos incurridos por estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara México) 500.00

5. Francisco Padró Cruz S.S. 583-63-8619

HC-01 Box 7711 Luquillo, PR 00773
(Para reembolso pago de matrícula U.P.R.,
Recinto de Río Piedras) 216.00

6. Syhomara Pizarro Sánchez S.S. 584-75-0347
Calle Acceso EQ-2 Urb. Brisas del Mar
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-1736
(Para reembolso gastos estudios universitarios,
Universidad Interamericana de Fajardo) 600.00

7. Hogar Infantil Divino Niño Jesús
Apt. 1413 Luquillo, PR 00773
Tel. 889-6033
(Ayuda para cubrir gastos operacionales) 1,000.00

8. Teresa García Dávila S.S. 596-18-8770
Calle V-1 Bloque A-37 Vistas de Luquillo,
Luquillo, PR 00773
Tel. 889-3319/889-6972
(Ayuda para gastos de Matrícula estudios universitarios
U.P.R., Recinto Ciencias Médicas, Cayey) $700.00

9. Germarie Avila Rivera
Calle Acceso EA-6 Urb. Brisas del Mar
Luquillo, PR 00773
(Ayuda para cubrir gastos por medicamentos no
cubiertos por plan médico a persona indigente y los
cuales no pueden ser reemplazados por medicamentos
de tipo genérico) 3,000.00

10. Juan F. Sánchez Vidal S.S. 802-95-7821
P.O. Box 1503 Luquillo, PR 00773
(Ayuda para gastos de estudios universitarios
U.P.R., Recinto de Humacao) 500.00

TOTAL $9,016.00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE

1. Asociación Recreativa Cultural
del Palmer, Inc.
Apartado 43 Palmer, Río Grande, PR 00721
Tel. 888-7711
(Para compra de un tractor para podar las áreas
recreativas del Poblado de Palmer) $1,799.00

2. Oficina de Servicios Múltiples Palmer
Municipio de Río Grande
Tel. 888-0220
(Para compra de dos "trimer" para acondicionar las
áreas verdes de la Oficina de Servicios Múltiples
del Poblado de Palmer) 655.00

5. Departamento de Educación
Escuela de la Comunidad Santa Rosa
Distrito Escolar de Ceiba
Tel. 885-3000
(Para gastos instalación de rejas ya instaladas
por Chui's Iron Work) 950.00

6. Departamento de Educación
Escuela de la Comunidad Santa Rosa
Distrito Escolar de Ceiba
Tel. 885-3000
(Para gastos de Screens de plástico ya instalados por
Ceiba Aluminium & Vertical Blinds) 250.00

TOTAL $4,200.00

MUNICIPIO DE CULEBRA

1. Lina C. Soto
Apartado 446 Culebra, PR
Tel. 724-0005
(Ayuda para la compra de un tanque reserva
de ayuda de 600 galones a persona indigente) $310.00

TOTAL $310.00

AGENCIA

1. Departamento de Recreación y Deportes
Miramar, San Juan
(Para ayuda de compra de materiales, equipos y para
la realización de Actividades Sociales y Culturales) 10,000.00

TOTAL $10,000.00

GRAN TOTAL $52,701.00

Sección 2.-Los fondos aquí asignados provendrán de la asignación hecha al Distrito Representativo Núm. 36 de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998.

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1378, y da cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 5A de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para incluir como delito la posesión y portación de municiones; para incluir el elemento de "portación" en casos donde la persona porte sin autorización de ley cualquier munición especial; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Han transcurrido varios años después de la aprobación de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, por lo que algunas de sus disposiciones no responden a las necesidades de nuestros tiempos, además de no cubrir aspectos importantes en la

configuración de delitos. Mediante esta medida se introducen enmiendas dirigidas a incorporar conductas y modalidades no contemplados en el estatuto actual.

Es preciso indicar que como fundamento jurídico en nuestro derecho penal, se encuentra el principio de legalidad. Este consagra que un acto no es punible a menos que la ley expresamente disponga que esta conducta constituye delito y establezca la pena correspondiente. Conforme a la norma mencionada, esta legislación se dirige a establecer expresamente la conducta que constituye delito y fijar la pena correspondiente.

La Ley de Armas de Puerto Rico, supra, no establece la "posesión" y "portación" como elementos del delito en ocasión de la fabricación y distribución de municiones. Por otro lado, el Artículo 5A de la Ley de Armas de Puerto Rico, contempla como delitos la posesión y el uso de municiones especiales tales como "Amor Piercing", "Explosive", "KTW", "Multiple-Bullets", "Multiple Inverted", "Glazer", o dichas municiones fabricadas bajo los mismos estándares, aunque sean designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre en cuanto a diseño, contenido de sustancias o compuestos químicos y el potencial de daño que pueden causar estas municiones. Sin embargo, el alcance de la prohibición no se extiende a los casos de portación de este tipo de municiones.

Esta Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario enmendar los artículos 2 y 5A de la Ley de Armas, supra, a fin de que se incluya como delito la posesión y portación de municiones y se incluya el elemento de "portación" en casos donde la persona porte sin autorización de ley cualquier munición especial.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 2.- Fabricación y distribución de armas y municiones

No se podrá fabricar o hacer fabricar, importar, **poseer, portar,** ofrecer, vender, prestar, o traspasar municiones a menos que se posea licencia bajo lo dispuesto por esta Ley o permisos expedidos por la Policía de Puerto Rico para comprar pólvora y sujeto a la prohibición establecida en los artículos 3A y 5A; como tampoco se podrá fabricar o hacer fabricar, importar, ofrecer, vender, alquilar, prestar, traspasar cualquier escopeta, revólver, pistola o cualquier arma de fuego dentro o en la cual se usen cartuchos sin balas, o puedan usarse cartuchos en blanco o cargados, o municiones, a menos que se posea licencia bajo las disposiciones de esta Ley. No se podrá fabricar ni hacer fabricar, importar, vender o tener para la venta, ofrecer, entregar a cualquier persona o disponer de cualesquiera de las armas o instrumentos de los comúnmente conocidos como "blackjacks", cachiporras o manoplas ni el artefacto conocido como "estrella ninja" utilizado en las artes marciales. Toda infracción a las disposiciones de este Artículo constituirá delito grave."

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5A de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 5A.- Posesión**, Portación** o uso de municiones especiales

Toda persona que posea, **porte** o use sin autorización de ley cualquier munición de las comúnmente conocidas como "Amor Piercing", "Explosive", "KTW", "Multiple-Bullets", "Multiple Inverted", "Glazer", o dichas municiones fabricadas bajo los mismos estándares, aunque sean designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre en cuanto a diseño, contenido de sustancias o compuestos químicos y el potencial de daño que pueden causar estas municiones, será culpable de delito grave."

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 1378 recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas:

En El Texto:
Página 3, línea 12 Después de "Artículo" tachar "4" y sustituir por "3".

Alcance de la Medida

El proyecto del Senado 1378 tiene el propósito de enmendar los Artículos 2 y 5A de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico".

La Ley de Armas de Puerto Rico, *supra,* no incluye las modalidades de "posesión" y "portación" como constitutivas del delito tipificado en el Artículo 2 de la Ley Núm. 17 *supra:* fabricación y distribución de municiones, esta medida las incluye expresamente.

Por otro lado, el Artículo 5A de la Ley de Armas de Puerto Rico, contempla como delitos la posesión y el uso de municiones especiales tales como "Amor Piercing", "Explosive", "KTW", "Multiple-Bullets", "Multiple Inverted", "Glazer", o dichas municiones fabricadas bajo los mismos estándares, aunque sean designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre en cuanto a diseño, contenido de sustancias o compuestos químicos y el potencial de daño que pueden causar estas municiones. Sin embargo, el alcance de la prohibición no se extiende a los casos de portación de este tipo de municiones, por esa razón esta medida la incluye como modalidad adicional del delito tipificado en el Artículo 5 de la Ley Núm. 17, *supra.*

La medida ante nuestra consideración es de extrema importancia para la protección de nuestros agentes del orden público, especialmente a los miembros de la Policía de Puerto Rico y los guardias municipales, ya que las municiones especiales a las que se hace referencia son particularmente dañinas y tienen el potencial de atravesar los sistemas de protección de los agentes, tales como blindajes y chalecos a prueba de balas.

Es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa proteger al máximo posible nuestros defensores de la seguridad pública, atacando a tiempo los nuevos desarrollos tecnológicos en balística que van solapadamente dirigidos contra los agentes del orden público, o que, habiéndose desarrollado para propósitos militares, se mercadean con posterioridad por canales comerciales.

Por las razones antes expuestas, la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. del S. 1378 con las enmiendas sugeridas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Jorge Santini Padilla
Presidente
Comisión de lo Jurídico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1894, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

"LEY

Para adicionar un Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de otorgarle al Contralor de Puerto Rico la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas; y para prohibir la aplicación de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, conocida como "Ley de la Autoridad de Edificios Públicos" al ejercitarse la facultad conferida.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Oficina del Contralor fue creada por medio de la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. En virtud de la misma se establecen las facultades que le han sido conferidas al Contralor. incluyendo las establecidas en el Artículo III, Sección 22, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre otras facultades, el Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador; El Contralor también tiene facultad para contratar servicios técnicos y profesionales ya sean provenientes de los departamentos, agencias, instrumentalidades del Gobierno o privados. Sin embargo, no existen disposición en la Ley Núm. 9, que conceda al Contralor el poder de adquirir, poseer usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas.

La Oficina del Contralor nunca ha contado con un edificio de su propiedad para ser utilizado como sede oficial. Durante los últimos cuarenta y seis años la Oficina del Contralor ha utilizado distintas instalaciones en calidad de arrendamiento. De todas éstas ha tenido que mudarse de tiempo en tiempo para satisfacer sus necesidades de espacio. Ello, debido al crecimiento necesario que experimenta la Oficina del Contralor para poder atender adecuadamente sus obligaciones constitucionales de fiscalización.

Actualmente, la Oficina del Contralor tiene espacio arrendado en tres edificios distintos y el espacio es totalmente inadecuado. Estas condiciones afectan adversamente su eficacia. por ello es necesario que la Oficina del Contralor ubique sus instalaciones en un solo edificio que cumpla con los requisitos de espacio, seguridad y servicios adecuados y cónsono con los avances arquitectónicos y tecnológicos existentes. Todo ello a tono con el crecimiento que esa Oficina ha alcanzado hasta el momento. Es por eso que deseamos establecer por disposición estatutaria la facultad del Contralor de Puerto Rico de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles a ser utilizados para ubicar la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se adiciona un Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.-El Contralor de Puerto Rico podrá adquirir, poseer, usar y disponer de aquellos bienes inmuebles que sean necesarios para ubicar sus oficinas.

La adquisición de los bienes inmuebles podrán realizarse por cualquier medio legal, incluyendo compraventa o arrendamiento con opción a compra. La Oficina del Contralor de Puerto Rico adoptará la reglamentación necesaria para implantar la facultad aquí conferida.

La Oficina del Contralor no estará sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 56 del 19 de junio de 1958, según enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad de Edificios Públicos. No obstante, si la Oficina del Contralor opta por adquirir un inmueble mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra deberá realizar una subasta. La convocatoria y la negociación de la subasta estarán a cargo de la Autoridad de Edificios Públicos ,conforme a las facultades que le han sido conferidas por ley a dicho organismo.

Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1894, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. de la C. 1894 es facultar al Contralor de Puerto Rico a adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles para ser utilizados para ubicar las oficinas del Contralor de Puerto Rico.
La Oficina del Contralor fue creada por medio de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada. En virtud de la misma se establecen las facultades que le han sido conferidas al Contralor incluyendo las establecidas en el Artículo III, Sección 22, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre otras facultades, el Contralor fiscalizará todos los ingresos y cuentas desembolsos de el Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos especiales que e sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. El Contralor también tiene la facultad para contratar servicios técnicos y profesionales ya sean provenientes de los departamentos, agencias, instrumentalidades del Gobierno o privados. Sin embargo, no existe disposición en la Ley Núm. 9, supra, que conceda al Contralor el poder de adquirir, poseer usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas.

Según se explica en la exposición de motivos la Oficina del Contralor nunca ha contado con un edificio de su propiedad para ser utilizado como sede oficial, por lo que ha utilizado distintas instalaciones en calidad de arrendatario de la cuales ha tenido que mudarse de tiempo en tiempo para satisfacer sus necesidades de espacio, debido al crecimiento necesario que experimenta la Oficina del Contralor para poder atender adecuadamente sus obligaciones. Actualmente, el espacio que la Oficina del Contralor tiene arrendado en tres edificios distintos es totalmente inadecuado. Estas condiciones afectan adversamente su eficacia. Por ello es necesario que la Oficina del Contralor ubique sus instalaciones en un solo edificio que cumpla con los requisitos de espacio, seguridad y servicios adecuados y cónsonos con los avances arquitectónicos y tecnológicos existentes. Todo ello a tono con el crecimiento que esa Oficina ha alcanzado hasta el momento. Es por ello que deseamos establecer por disposición estatuaria la facultad del Contralor de Puerto Rico de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles a ser utilizados para ubicar la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Mediante esta legislación el Contralor de Puerto Rico podrá adquirir aquellos bienes inmuebles que sean necesarios para ubicar sus oficinas en la manera en que le sea más necesaria y efectiva para el buen funcionamiento de su oficina.

En reunión ejecutiva, luego de análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuesta, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del P. de la C. 1894 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2179, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la responsabilidad de decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluída en las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta por la comisión de algún delito. Esta función está revestida de un alto interés público ya que está estrechamente ligada a la seguridad de Puerto Rico. El Presidente de esta Junta, ejerce funciones ejecutivas del más alto nivel gubernamental y su compensación debe responder a las realidades económicas e ir a la par con los deberes y responsabilidades que su cargo conlleva.

Recientemente fue aprobada la Ley Núm. 79 de 10 de junio de 1998, la cual establece política pública sobre los salarios anuales de los Secretarios y otros funcionarios de la Rama Ejecutiva con el propósito de equiparar la compensación que estos reciben a los deberes y responsabilidades de sus cargos; para así reclutar aquellas personas capacitadas para desarrollar los programas de gobierno. El Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra realiza funciones complejas y de un alto interés social al igual que los demás jefes de los componentes del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sin embargo, su salario anual no refleja el nivel de complejidad de sus funciones y no está acorde al de los demás componentes del Departamento.

Esta enmienda va dirigida a establecer un balance salarial adecuado entre el Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 4 de junio de 1989, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4.- Retribución de funcionarios varios

El sueldo anual de cada uno de los siguientes funcionarios será el que se expresa a continuación de su título a partir de la vigencia de esta Ley.

Funcionario	Sueldo Anual
Presidente, Junta de Planificación	80,000
. . . . .	
Presidente, Junta Libertad Bajo Palabra	75,000
. . .	

Además del sueldo que aquí se dispone para el Presidente de la Junta de Planificación, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Gobernador podrá asignarle a dichos funcionarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte del sueldo."

Artículo 2.-Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley provendrán del Presupuesto Operacional de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 2179, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del Proyecto de la Cámara 2179, equivalente al P. del S. 1413, es enmendar el inciso (27) del segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra para armonizarlo al de los demás jefes de los componentes de la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento.

La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la responsabilidad de decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta por la comisión de algún delito. Esta función está revestida de un alto interés público ya que está estrechamente ligada a la seguridad de Puerto Rico. El Presidente de esta Junta ejerce funciones ejecutivas del más alto nivel gubernamental y su compensación debe responder a las realidades económicas e ir a la par con los deberes y responsabilidades que su cargo conlleva.

El Gobierno de Puerto Rico tiene como compromiso mejorar los salarios de los Secretarios de Gobierno, Jefes de Agencias y demás funcionarios públicos a fin de promover el reclutamiento y retención de los empleados más aptos y preparados para el desempeño en el servicio público. Es por esta razón que se aprobó la Ley Núm. 79 de 10 de junio de 1998.

Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley provendrán del Presupuesto Operacional de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

En reunión ejecutiva celebrada, la Comisión que suscribe recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cámara 2179 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2198, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas.

"LEY

Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta por un período determinado de tiempo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", se aprobó con el propósito de establecer reglas y pautas, y brindarle uniformidad a los procedimientos administrativos de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Dentro de este marco legal se establecieron procedimientos en donde se garantizó el debido proceso en los procedimientos adjudicativos de las agencias administrativas.

El Capítulo III de la Ley Núm. 170, antes citada, estableció el procedimiento adjudicativo que toda agencia administrativa debe proveer y, a su vez, se eximieron ciertos procedimientos como lo son las subastas, concesión de préstamos, becas, subsidios, reconocimientos, inversiones de capital y emisiones de deuda del cumplimiento con este Capítulo. Estos procedimientos exentos se conocen como procedimientos informales que, por su naturaleza, no cumplen con la rigidez que impone el Capítulo III.

Por otro lado, el proceso de análisis y trámite de los documentos ambientales al amparo del Artículo 4(c) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", es por su naturaleza de planificación e información un proceso que necesita la flexibilidad y agilidad de un procedimiento informal. Este procedimiento está regido por el Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental aprobado al amparo de la Ley Núm. 9, antes citada.

El propósito de los documentos ambientales es describir y analizar una acción gubernamental propuesta desde el punto de vista del efecto que dicha acción pueda tener sobre el ambiente. Con dicha descripción y análisis sobre el ambiente, el ente gubernamental puede tomar decisiones informadas y, además, se realiza una divulgación a las comunidades, al público en general y las agencias concernidas.

Estos documentos ambientales, según el propio Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental, tienen que prepararse lo antes posible dentro del proceso decisional previo a establecer cualquier compromiso de naturaleza irrevocable de los recursos o del ambiente que grave la decisión final a tomarse. Según ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 98 J.T.S. 77 (1998), el trámite de documentos ambientales bajo el Artículo 4(c) de la Ley Núm. 9, antes citada, es sólo un instrumento de planificación, siendo la primera etapa de un largo camino de autorizaciones oficiales en el desarrollo de un proyecto. Luego de superada la etapa de la aprobación de un documento ambiental, la construcción y el inicio del proyecto u operación propuesto no pueden llevarse a cabo sin que se aprueben una serie de permisos que también están dirigidos a asegurar la protección ambiental.

El trámite de documentos ambientales es uno de carácter investigativo e informal y no adjudicativo al no existir un pronunciamiento en el cual la Junta de Calidad Ambiental tenga que determinar derechos u obligaciones. En el proceso de análisis de documentos ambientales tampoco existe controversia o conflicto entre dos (2) o más partes. Por el contrario, este trámite es uno investigativo en donde las agencias envueltas se cercioran de que se cumpla con las disposiciones de sus respectivas leyes o reglamentos.

La enmienda a la Sección 3.1 de la Ley Núm. 9, antes citada, no afecta los derechos de las personas a expresarse pues existen garantías para la participación pública, a la vez, se logra un balance para mantener la agilidad y eficiencia del proceso de trámite de documentos ambientales.

Por las razones antes expuestas, es necesario durante un período de tiempo que permita evaluar la eficacia de la misma enmendar la Ley Núm. 170, antes citada, en su Sección 3.1 para que los procedimientos bajo el Artículo 4(c) de la Ley Núm. 9, antes citada, sean informales y cónsonos con la realidad del trámite y análisis de los documentos ambientales. Sin embargo, la reconsideración de las decisiones emitidas dentro de los procedimientos informales estarán sujetas y se regirán por lo dispuesto en la Sección 3.15 Ley Núm. 170, antes citada.

Transcurridos 120 días de aprobarse tal enmienda la Junta de Calidad Ambiental le informará a la Asamblea Legislativa el impacto que la misma ha tenido sobre la agilización del trámite y la exposición ambiental de manera que esta última considere la posiblidad de extender preventivamente la vigencia a las enmiendas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Sección 3.1 - Cartas de Derechos.-

. . .

(i) . . .

Se considerarán procedimientos informales y no estarán sujetos a este Capítulo, excepto según se provee más adelante, la adjudicación de subastas, la concesión de préstamos, becas, subsidios, subvenciones, emisiones de deuda, inversiones de capital, reconocimientos o premios, y los trámites de los documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(c) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta. La reconsideración de las decisiones emitidas en estos casos se regirán por lo dispuesto en la Sección 3.15, excepto las relativas a subastas que se regirán por lo dispuesto en la Sección 3.19.

...

La Junta de Calidad Ambiental rendirá un informe a la Asamblea Legislativa no más tarde de 150 días después de la fecha de vigencia de esta Ley en torno al efecto que la misma ha tenido durante sus primeros 120 días de vigencia en la agilización del trámite y la exposición ambiental."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y será aplicable a todo asunto o procedimiento pendiente ante la Junta de Calidad Ambiental o ante cualquier foro apelativo de revisión pendiente a la fecha de aprobación de la misma o que se someta no más tarde de 180 días con posterioridad a dicha fecha."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 2198, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmienda.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito de P. de la C. 2198, es para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4 (C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta.

El Capítulo III de la Ley Núm. 170, antes citada, estableció el procedimiento adjudicativo que toda agencia administrativa debe proveer y, a su vez, se eximieron ciertos procedimientos como lo son las subastas, concesión de préstamos, becas, subsidios, reconocimientos, inversiones de capital y emisiones de deuda del cumplimiento con este Capítulo. Estos procedimientos exentos se conocen como procedimientos informales que, por su naturaleza, no cumplen con la rigidez que impone el Capítulo III.

Por otro lado, el proceso de análisis y trámite de los documentos ambientales al amparo del Artículo 4 (c) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública

Ambiental", es por su naturaleza de planificación e información un proceso que necesita la flexibilidad y agilidad de un procedimiento informal. Este procedimiento está regido por el Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental aprobado al amparo de la Ley Núm. 9, antes citada.

El propósito de los documentos ambientales es describir y analizar una acción gubernamental propuesta desde el punto de vista del efecto que dicha acción pueda tener sobre el ambiente. Con dicha descripción y análisis sobre el ambiente, el ente gubernamental puede tomar decisiones informadas y, además, se realiza una divulgación a las comunidades, al público en general y las agencias concernidas.

En reunión ejecutiva celebrada la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de estudio y análisis de la medida, la información disponible y por las razones previamente expuestas, recomienda la aprobación del P. de la C. 2198 sin enmiendas.

Respetuosamente Sometido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales"

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen las medidas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 972, titulado:

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano" a los fines de incluir a los municipios de Puerto Rico en la definición de "Agencia" contenida en la ley, y para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar como (d) el vigente inciso (c) de dicho artículo; y para enmendar los Artículos 10, 12, 14, 16, 17, 19 y 20 de dicha Ley, a los fines de extender la jurisdicción del Ombudsman a las actuaciones administrativas de las entidades privatizadoras contratadas por el Estado para prestar servicios a la ciudadanía o que hayan adquirido del Estado un interés sobre las actividades que anteriormente desempeñaba una entidad pública."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción del compañero Kenneth McClintock? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, estas enmiendas actualizan esta Ley, estamos reinstituyendo nuevamente el Artículo 5 de la Ley con un texto corregido y solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas de título contenida en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2129, titulada:

"Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500) dólares para la compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas en el Huracán Georges del balance de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 2070, titulada:

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno (52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para realizar obras que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1378, titulado:

"Para enmendar los Artículos 2 y 5A de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para incluir como delito la posesión y portación de municiones; para incluir el elemento de "portación" en casos donde la persona porte sin autorización de ley cualquier munición especial; y para otros fines."

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1894, titulado:

"Para adicionar un Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de otorgarle al Contralor de Puerto Rico la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas; y para prohibir la aplicación de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, conocida como "Ley de la Autoridad de Edificios Públicos" al ejercitarse la facultad conferida."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción del compañero Kenneth McClintock? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2179, titulado:

"Para enmendar Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento."

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción del compañero Kenneth McClintock? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 2198, titulado:

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta por un período determinado de tiempo.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Sala para esta medida. En la Exposición de Motivos, página 3, línea 1, después de "necesario" insertar "durante un período de tiempo que permita evaluar la eficacia de la misma". Página 3, entre las líneas 6 y el texto decretativo, insertar el siguiente párrafo: "Transcurridos 120 días de aprobarse tal enmienda, la Junta de Calidad Ambiental informará a la Asamblea Legislativa el impacto que la misma ha tenido sobre la agilización del trámite y la protección ambiental, de manera que ésta última considere la posibilidad de extender preventivamente la vigencia a las enmiendas." El texto decretativo, página 3, entre las líneas 15 y 16, insertar el siguiente Artículo 2: "Artículo 2.- La Junta de Calidad Ambiental rendirá un informe a la Asamblea Legislativa no más tarde de ciento cincuenta (150) días después de la fecha de vigencia de esta Ley en torno al efecto que la misma ha tenido durante sus primeros ciento veinte (120) días de vigencia a la agilización de trámite de la proyección ambiental." Página 3, línea 16, renumerar el "Artículo 2", como "Artículo 3". Página 3, línea 16, entre "aprobación" y ".", insertar "y será aplicable a todo asunto o procedimiento pendiente ante la Junta de Calidad Ambiental o ante cualquier foro apelativo de revisión pendiente a la fecha de aprobación de la misma o que se someta no más tarde de ciento ochenta (180) días con posterioridad a dicha fecha."

Esas serían las enmiendas en Sala que hemos presentado en bloque.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos una enmienda de título, que sería la siguiente, después de la última palabra en el título "ésta" y antes del ".", insertar "por un período determinado de tiempo."

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la novena relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz:

PROYECTO DE LA CAMARA

P. de la C. 1981
Por el señor Mundo Ríos:

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia, a los fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios del Departamento de la Familia que se le otorga a las Administraciones o componentes operacionales
de dicho Departamento; adicionar un nuevo Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas Regionales y al cargo de Director Regional creados al amparo de la Orden Administrativa Núm. 97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así como establecer la composición y objetivos de estas oficinas y las responsabilidades y funciones del cargo de Director Regional, entre las cuales se incluirá la supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios del Departamento establecidos en virtud de las facultades conferidas al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para redesignar los vigentes Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente."
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL)

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

MOCIONES

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, el Proyecto de la Cámara 1335.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la medida incluida en el Calendario, el Proyecto de la Cámara 1335, se devuelva a la Comisión de Reglas y Calendario.
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un sexto Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 567, Proyecto de la Cámara 2168; Proyecto del Senado 1436, en reconsideración; Proyecto de la Cámara 554; Resolución Conjunta de la Cámara 1805, Resolución Conjunta de la Cámara 1806, Resolución Conjunta de la Cámara 1807, Resolución Conjunta de

la Cámara 2130; Proyecto de la Cámara 2133, Proyecto de la Cámara 137, Proyecto de la Cámara 972; Resolución Conjunta de la Cámara 2129, Resolución Conjunta de la Cámara 2070; Proyecto del Senado 1378; Proyecto de la Cámara 1894, Proyecto de la Cámara 2179, Proyecto de la Cámara 2198.

Señor Presidente, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final.

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 1378

"Para enmendar los Artículos 2 y 5A de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", para incluir como delito la posesión y portación de municiones; para incluir el elemento de "portación" en casos donde la persona porte sin autorización de ley cualquier munición especial; y para otros fines."

P. del S. 1436
(reconsideración)

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia."

P. de la C. 137

"Para enmendar el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 5.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a fin de facultar a las Asambleas Municipales a aprobar previa convocatoria del Alcalde y el voto de 2/3 partes de sus miembros de la Asamblea, la interrupción de una sesión ordinaria para atender un asuntos de emergencia, mediante una sesión ordinaria por el número de días que componen los cinco (5) días autorizados por Ley."

P. de la C. 554

"Para adicionar un nuevo inciso (c) y redesignar los incisos (c) a la (g) como (d) a la (h) del Artículo 11 de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de que sólo se vendan uniformes, insignias y accesorios oficiales a los agentes que muestren sus tarjetas de identificación como evidencia o la autorización del Superintendente para realizar tal compra."

P. de la C. 567

"Para enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a los efectos de especificar los casos en que se habrá de imponer pensión alimentaria "pendente lite" y proveer para la coadministración de los bienes gananciales durante el juicio."

P. de la C. 972

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano" a los fines de incluir a los municipios de Puerto Rico en la definición de "Agencia" contenida en la ley, y para adicionar dos nuevos incisos (c) y (d) y redesignar el vigente inciso (c) como inciso (e) de dicho artículo; y para enmendar los artículos 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de dicha Ley, a los fines de extender la jurisdicción del Ombudsman a

las actuaciones administrativas de las entidades privatizadoras contratadas por el Estado para prestar servicios a la ciudadanía o que hayan adquirido del Estado un interés sobre las actividades que anteriormente desempeñaba una entidad pública."

P. de la C. 1894

"Para adicionar un Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de otorgarle al Contralor de Puerto Rico la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles para ubicar sus oficinas; y para prohibir la aplicación de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, conocida como "Ley de la Autoridad de Edificios Públicos" al ejercitarse la facultad conferida."

P. de la C. 2133

"Para adicionar un nuevo Artículo 12.020 y renumerar los actuales Artículos 12.020 al 12.028 como los Artículos 12.021 al 12.029, respectivamente, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de autorizar la cesión de licencias acumuladas por vacaciones entre funcionarios o empleados de un mismo municipio, en aquellos casos en que un funcionario o empleado o un miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que prácticamente imposibilite que éste cumpla sus funciones en el municipio por un período considerable."

P. de la C. 2168

"Para eximir del arbitrio de construcción dispuesto en el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los constructores y a los proyectos de viviendas desarrollados a través del Programa "Nuevo Hogar Seguro", creado mediante la Orden Ejecutiva de 15 de octubre de 1998, Boletín Administrativo Núm. OE 1998-35."

P. de la C. 2179

"Para enmendar Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de aumentar el sueldo anual del Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y disponer que la Junta de Libertad Bajo Palabra proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento."

P. de la C. 2198

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de que se incluya dentro de los procedimientos informales todos los procesos de trámites de documentos ambientales establecidos en el Artículo 4(C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y el reglamento aprobado al amparo de ésta por un período determinado de tiempo."

R. C. de la C. 1805

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el almacen."

R. C. de la C. 1806

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan."

R. C. de la C. 1807

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación al señor Carlos López, Seguro Social #583-38-8217, para cubrir gastos médicos."

R. C. de la C. 2070

"Para asignar a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno (52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para realizar obras que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación."

R. C. de la C. 2129

"Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500) dólares para la compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas en el Huracán Georges del balance de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia."

R. C. de la C. 2130

"Para reasignar al Municipio de Isabela la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de la primera etapa del proyecto Monumento a la Historia "Puerta del Oeste" en la carretera núm. 2 de dicha municipalidad."

VOTACION

Los Proyectos de la Cámara 137; 554; 1894; 2133; 2179 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1805; 1806; 1807; 2070; 2129; 2130, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 25

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:

Rubén Berríos Martínez

Total 1

- - - -

Los Proyectos del Senado 1378; 1436(Rec.); los Proyectos de la Cámara 567; 2168 y 2198, son considerados en Votación Final, la que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

Total 9

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

- - - -

El Proyecto de la Cámara 972, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente.

Total 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera

Total 8

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Rubén Berríos Martínez

Total 1

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas.

- - - -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración de todos los asuntos y las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. Vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese hasta el viernes, 13 de noviembre de 1998, a las doce y treinta minutos de la mañana (12:30 a.m.).

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa hasta el próximo viernes, 13 de noviembre, a las doce y treinta minutos de la mañana (12:30 a.m.). En esta forma concluimos los trabajos de este día.

INDICE DE MEDIDAS
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES
12 DE NOVIEMBRE DE 1998

MEDIDAS	PAGINA
PS 1428	10896 - 10908
PS 1125	10910
PS 570	10910 - 10911
PC 866	10911
PS 1172	10911
PS 1236	10912
RCC 2092	10912
PC 2142	10913
Informe de Conferencia PC 1524	10914 - 10915
RCS 1262	10951
RCS 1263	10951
RCS 1264	10951
PC 1277	10951 - 10952
RCC 201	10952
PS 1413	10952 - 10953
PS 1380	10953
PS 1380	10953
RCC 1544	10954
PC 1488	10954
PC 1796	10954
RCC 2066	10954 - 10955
PC 1155	10955

MEDIDAS **PAGINA**

RCC 2034 10991

RCC 2037 10991

RCC 2042 . . . . . 10991 - 10992

RCC 2043 10992

RCC 2046 10992

RCC 2043 10992

RCC 2046 10992

RCC 2069 10992

RCC 2083 . . . . . 10992 - 10993

RCC 2109 10993

RCC 2111 10993

RCC 2117 10993

RCC 2118 10994

RCC 2119 10994

RCC 2120 10994

RCC 2121 . . . . . 10994 - 10995

RCC 2084 10995

RCC 1875 10995

RCC 2113 10995

RCC 2114 . . . . . 10995 - 10996

RCC 2114 . . . . . 10995 - 10996

RCC 2115 10996

RCC 2116 10996

RCC 2045 10996

MEDIDAS **PAGINA**

RCC 2048 . . . . . 10996 - 10997

RCC 2055 10997

RCC 2056 10997

RCC 1874 10997

RCC 1812 10998

PS 1436 10998

RCS 1021 10998

RCC 2119 . . . . . 10998 - 10999

PS 1189 11049

PS 1247 1149

PS 1253 . . . . . 11049 - 11050

PS 1383 11050

PC 1908 . . . . . 11050 - 11052

PC 651 11052

RCC 2085 11052

RCC 1121 . . . . . 11052 - 11053

PC 1922 11053

PS 1436 . . . . . 11053 - 11057

PS 545 . . . . . 11057 - 11058

PS 1282 11147

PS 1283 . . . . . 11147 - 11148

PS 1284 11148

PS 1285 11148

PS 1286 11148

MEDIDAS	PAGINA
PS 1286	11148
PS 1289	11148
PS 1290	11148
PS 1291	11149
PS 1292	11149
PS 1293	11150
PS 1294	11150
PS 1295	11150 - 11151
PS 1337	11151
PC 567	11151
PC 1466	11151
RCC 1544	11152
RCC 1820	11152
RCC 1888	11152
PC 2102	11152 - 11153
PC 1041	11153
PC 2181	11153
PC 2168	11153
PC 1881	11154
PC 1926	11154
PC 1911	11154
PC 1962	11155
PC 1936	11155
PC 1936	11155 - 11156

MEDIDAS	PAGINA
PC 497	11156
PC 1338	11156
RCC 2037	11156 - 11157
RCC 2121	11157
RCC 2122	11157
PC 1311	11209
PC 2057	11209
PC 2058	11209 - 11210
PC 2066	11210
PC 2093	11210
PC 2095	11210
PC 2103	11211
PC 2105	11211
PC 2106	11211
PC 2108	11211 - 11212
PC 2109	11212
PC 2110	11212
PC 2111	11212
PC 2112	11212
PC 1671	11213
PC 2149	11238
PS 2114	11239
PS 1369	11239
PS 1396	11239 - 11240

MEDIDAS	PAGINA
PC 2154	11240
PS 1264	11240
PC 2170	11240 - 11241
PS 1436	11241
PS 1436	11241 - 11242
PS 1101	1125411256
PC 2170	11256 - 11257
PC 554	11271
RCC 1805	11272
RCC 1806	11272
RCC 1807	11272
RCC 2130	11272
PC 2133	11273
PC 137	11273
PC 972	11293
RCC 2129	11294
RCC 2070	11294
PS 1378	11294
PC 1894	11294 - 11295
PC 2179	11295
PC 2198	11295